

UNIVERSITAT DE VALENCIA

FACULTAD DE DERECHO

**Doctorado en Derechos Humanos, Democracia y
Justicia Internacional**



TESIS DOCTORAL

**REPARACION INTEGRAL Y POLITICAS DE PROTECCION DE
LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO**

Doctoranda

D^a. Mireia Company Alcañiz

Director de la Tesis

Dr. D. Daniel Ferrandis Ciprian

Tutora

Dra. D^a. Vicenta Cervelló Donderis

Valencia, septiembre, 2017

INDICE DE CONTENIDO

INDICE DE TABLAS.....	9
INDICE DE GRAFICOS	12

PRIMERA PARTE: MARCO TEORICO

INTRODUCCION	17
---------------------------	-----------

CAPITULO 1. CRIMINOLOGIA

1.1. Criminología.....	24
1.2. Definiciones de la Criminología	
1.2.1. Definiciones restrictivas	33
1.2.2. Definiciones amplias	39
1.3. Elementos de las definiciones	
1.3.1. Ciencia	50
1.3.2. Ciencia empírica	58
1.3.3. Ciencia experimental	63
1.3.4. Ciencia interdisciplinar	68
1.3.5. Ciencia aplicada	72
1.4. Objetos de estudio	
1.4.1. Delito	82
1.4.2. Delincuente.....	91
1.4.3. Control social	98
1.4.4. Víctima	107
1.5. Institucionalización y evolución de la Criminología en España	111
1.6. Toma de postura	122

CAPITULO 2. VICTIMOLOGIA

2.1.	Origen de la Victimología	127
2.2.	Fundamentos y evolución de la Victimología.....	134
2.3.	Definición de la Victimología.....	147
2.4.	Objeto de la investigación: la víctima	
2.4.1.	Estudio de las víctimas: clasificación victimal	155
2.4.2.	Crítica a las clasificaciones victimales	171
2.4.3.	Estudio de las características de la víctima	171
2.5.	Funciones de la Victimología	182
2.6.	La prevención victimal	191
2.7.	La desvictimización de la víctima	
2.7.1.	Proceso de victimización	200
2.7.2.	Desvictimización y reparación.....	209
2.8.	Autonomía de la disciplina victimológica	
2.8.1.	Objeto de estudio: la víctima.....	219
2.8.2.	Método de investigación	221
2.8.3.	Terminología propia.....	223
2.8.4.	Toma de postura.....	224
2.9.	El papel del criminólogo	226

CAPITULO 3. SIGNIFICACION Y ALCANCE DEL CONCEPTO VICTIMAS DEL TERRORISMO

3.1.	Interdisciplinariedad de la materia victimal	236
3.2.	Razones del olvido de la víctima especialmente en la normativa internacional	243
3.3.	Concepto de víctima	246
3.4.	Significación de la víctima del terrorismo.....	251

3.5.	La vulneración de los derechos humanos en las víctimas del terrorismo	257
3.6.	Los beneficiarios y titulares de las prestaciones en las políticas de protección, ayuda y asistencia a las víctimas del terrorismo	266
3.7.	Las víctimas directas y las víctimas indirectas	281

CAPITULO 4. POLITICAS DE PROTECCION, AYUDA Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO

4.1.	Derecho a la verdad	
4.1.1.	Significación del derecho a la verdad	298
4.1.2.	Mecanismos para hacer efectivo el derecho a la verdad.....	300
4.1.3.	Fines criminológicos del derecho a la verdad	303
4.1.4.	Situación del fenómeno terrorista en España	303
4.1.5.	Deslegitimación terrorista.....	303
4.2.	Derecho a la reparación	
4.2.1.	Alcance del derecho a la reparación.....	307
4.2.2.	Reparación en sentido estricto.....	309
4.2.3.	Indemnizaciones	309
4.2.4.	Indemnizaciones y ayudas por fallecimiento	310
4.2.5.	Ayudas e indemnizaciones en concepto de incapacidad permanente	312
4.2.6.	Indemnizaciones y ayudas por lesiones permanentes no invalidantes	313
4.2.7.	Indemnizaciones y ayudas por incapacidad temporal	314
4.2.8.	Indemnizaciones de carácter autonómico.....	315
4.2.9.	Indemnizaciones por secuestro.....	317
4.2.10.	Responsabilidad civil fijada en sentencia penal	318
4.2.11.	Ayudas excepcionales por los daños sufridos en el extranjero	319
4.2.12.	Daños materiales.....	320
4.2.13.	Daños producidos en las viviendas.....	321

4.2.14.	Daños en los establecimientos mercantiles o industriales.....	323
4.2.15.	Daños en las sedes de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales	323
4.2.16.	Daños en los vehículos	324
4.2.17.	Indemnizaciones por daños materiales en la legislación autonómica	324
4.2.18.	Prestaciones	325
4.2.19.	Ayuda sanitaria, psicológica y psicopedagógica complementaria .	325
4.2.20.	Derechos laborales	328
4.2.21.	Ayudas educativas.....	329
4.2.22.	Reparación en sentido amplio.....	330
4.3.	Derecho a la justicia	
4.3.1.	Referencias normativas.....	333
4.3.2.	Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre, relativa a las normas mínimas sobre los derechos, apoyo y protección de las víctimas de delitos	336
4.3.3.	Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima	339
4.3.4.	Contenido del derecho a la justicia	343
4.3.5.	Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo	344
4.3.6.	Ley 4/2008 de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo ...	348
4.3.7.	La demanda de justicia de las víctimas del terrorismo	350
4.3.8.	Victimización secundaria	352
4.4.	Derecho al reconocimiento	
4.4.1.	Aproximación al derecho de reconocimiento	355
4.4.2.	Las direcciones del derecho al reconocimiento.....	356
4.4.3.	Condecoraciones	357
4.4.4.	La condición de víctima del terrorismo como criterio evaluable ...	363
4.4.5.	Actos de reconocimiento a las víctimas del terrorismo	364
4.4.6.	La participación de las víctimas del terrorismo	365
4.4.7.	El derecho a la asociación	367

4.4.8.	Lectura criminológica de la labor de las asociaciones de víctimas del terrorismo.....	373
4.5.	Derecho a la dignidad	
4.5.1.	Fundamento criminológico del derecho a la dignidad.....	376
4.5.2.	Regulación del derecho a la dignidad	379
4.5.3.	Finalidad criminológica del derecho a la dignidad: educación en valores	381
4.6.	Derecho a la memoria	
4.6.1.	Significado del derecho a la memoria.....	388
4.6.2.	Medidas del derecho a la memoria.....	391
4.6.3.	Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo .	392
4.6.4.	El relato directo de las víctimas del terrorismo	394
4.6.5.	La empatía: una interpretación criminológica de la memoria.....	396
4.6.6.	Hacia la recuperación de la víctima	398
4.6.7.	La desvictimización y el derecho a la memoria.....	402

SEGUNDA PARTE: PLANTEAMIENTO EMPÍRICO

CAPITULO 5. ANALISIS DE LAS POLITICAS DE PROTECCION, AYUDA Y ASISTENCIA DE LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO

5.1.	Planteamiento de la situación actual de las víctimas del terrorismo ..	407
5.2.	Objetivos y metodología	409
5.3.	Participantes	
5.3.1.	Víctima directa	418
5.3.2.	Víctima indirecta.....	423
5.3.3.	Entorno victimal	427
5.4.	Resultados	
5.4.1.	Derecho a la verdad	438
5.4.2.	Derecho a la reparación	446

5.4.3.	Derecho a la justicia	458
5.4.4.	Derecho al reconocimiento	468
5.4.5.	Derecho a la memoria	478
5.4.6.	Derecho a la dignidad	488
5.4.7.	Derecho a la reparación en sentido amplio	496
5.5.	Recomendaciones	502

CONCLUSIONES.....	511
--------------------------	------------

BIBLIOGRAFÍA	521
---------------------------	------------

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: extraída del Informe Foronda. Los contextos históricos del terrorismo en el País Vasco y la consideración social de sus víctimas. 1968-2010	176
Tabla 2: extraída de la Tabla 21 del Informe Foronda. Los contextos históricos del terrorismo en el País Vasco y la consideración social de sus víctimas. 1968-2010	179
Tabla 3: extraída de la Tabla 25 del Informe Foronda. Los contextos históricos del terrorismo en el País Vasco y la consideración social de sus víctimas. 1968-2010	180
Tabla 4: elaboración propia sobre los efectos de instalación de la condición de víctima.....	403
Tabla 5: adaptación de la formulación de BURT por la que los sujetos se convierten en verdaderas víctimas.....	417
Tabla 6: elaborada a partir de los datos proporcionados por las personas objeto del estudio sobre la edad de las víctimas en el momento de atentado y su situación laboral actual	419
Tabla 7: elaboración a partir de los datos proporcionados por las personas objeto de este estudio sobre el lugar y periodo en que se convirtieron en víctimas	422
Tabla 8: elaborada a partir de los datos proporcionados por las víctimas indirectas objeto de nuestro estudio sobre el lugar y periodo en que adquirieron tal condición	425

Tabla 9: elaborada a partir de los datos ofrecidos por la investigación realizada por SANCHEZ-DUARTE y SAMPEDRO sobre las etapas y las profesiones de los asesinados 431

Tabla 10: elaborada a partir de los datos ofrecidos por la investigación realizada por SANCHEZ-DUARTE y SAMPEDRO sobre el lugar del asesinato y sus porcentajes..... 433

Tabla 11: elaborada a partir de los datos ofrecidos por la investigación realizada por SANCHEZ-DUARTE y SAMPEDRO sobre el lugar del asesinato hasta 1998 y desde 1998..... 434

Tabla 12: elaborada a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento de la ayuda psicológica
..... 450

Tabla 13: elaborada a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento del acceso a la justicia
..... 461

Tabla 14: elaborada a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento de la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo 464

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: medidas de victimización de la víctima directa e indirecta a lo largo de un año 401

Gráfico 2: elaborado a partir de los datos proporcionados por las personas objeto de este estudio sobre el apoyo social, laboral, de amistad y familiar recibido 427

Gráfico 3: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el acceso a los datos que consten en la Administración 442

Gráfico 4: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el acceso al relato oficial de la victimización terrorista 443

Gráfico 5: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento, acceso y reparación de las medidas incluidas en el derecho a la verdad..... 444

Gráfico 6: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre la conveniencia de la indemnización..... 448

Gráfico 7: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento y acceso a la ayuda psicológica..... 451

Gráfico 8: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento de las ayudas educativas y los derechos laborales 454

Gráfico 9: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento, acceso y reparación de los derechos a la verdad y reparación	456
Gráfico 10: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento, acceso y reparación de las medidas frente a la victimización primaria	457
Gráfico 11: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre la conveniencia del acceso al sistema de justicia	462
Gráfico 12: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio relacionado con la conveniencia del relato oficial y la conveniencia del acceso a la justicia.....	463
Gráfico 13: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento y acceso a la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo.....	465
Gráfico 14: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre la conveniencia conjunta del acceso a los datos y a la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo	466
Gráfico 15: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento, acceso y reparación de las medidas incluidas en el derecho a la justicia.....	467
Gráfico 16: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre la conveniencia de las condecoraciones.....	470
Gráfico 17: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre la conveniencia del baremo de la condición de víctimas del terrorismo.....	471

Gráfico 18: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento y acceso al Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo	474
Gráfico 19: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el acceso y reparación de las asociaciones de víctimas del terrorismo	476
Gráfico 20: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento, acceso y reparación de las medidas frente a la victimización secundaria	477
Gráfico 21: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre la conveniencia y reparación de actos y monumentos de homenaje a las víctimas del terrorismo.....	483
Gráfico 22: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre conocimiento, acceso y reparación del Día de recuerdo a las víctimas y la celebración de actos de homenaje	484
Gráfico 23: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento del relato victimal	485
Gráfico 24: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento y acceso al relato victimal	486
Gráfico 25: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento, acceso y reparación de las medidas integradas en el derecho a la memoria	487
Gráfico 26: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento y reparación de las medidas del derecho a la dignidad	493

Gráfico 27: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre la favorabilidad de las víctimas a las medidas del derecho a la dignidad 494

Gráfico 28: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento, acceso y reparación de las medidas frente a la victimización terciaria 495

Gráfico 29: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento de las medidas desvictimizantes..... 499

Gráfico 30: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el acceso a las medidas desvictimizantes.....
..... 500

Gráfico 31: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre la naturaleza reparadora de las medidas desvictimizantes..... 501

INTRODUCCION

El fenómeno terrorista ha tenido una larga tradición en el territorio español especialmente en el País Vasco donde ha destacado principalmente la banda terrorista ETA en cuanto al número de atentados cometidos, la multitud de víctimas que han sido objeto de sus acciones y el impacto político y social que han causado sobre todo en el ámbito de esta última Comunidad Autónoma resulta por todos conocida. Desde su aparición alrededor de los años sesenta del pasado siglo y durante más de medio siglo ha estado presente en la historia de la sociedad española, dejando a su paso un total de 864 víctimas mortales conforme a la cifra proporcionada por la Oficina de Asistencia a las Víctima del Terrorismo de la Audiencia Nacional. Sin embargo, a día de hoy, sigue sin existir un registro oficial con los datos relativos al resto de victimizaciones derivadas de las acciones terroristas –amenazas, coacciones, lesiones o daños-.

Los actos de violencia protagonizados por esta organización terrorista, con el propósito de subvertir el marco político instaurado en nuestra sociedad democrática, han provocado una gran cantidad de víctimas. Todas ellas representan el caso más extremo de la cosificación y deshumanización de las personas en cuanto han sido utilizadas como instrumentos para imponer el proyecto político totalitario del indicado grupo. La conversión de las víctimas en medios para alcanzar los objetivos políticos acrecienta ese sufrimiento padecido injustamente incluso más allá de las heridas de naturaleza física o psíquica que pudiera haberseles ocasionado. Además a este sentimiento de cosificación hay que sumarle un factor significativo para la instauración del sentimiento de deshumanización que pueden experimentar los afectados por el terrorismo coincidente con el desinterés o la falta de entendimiento que han despertado socialmente. Ambas circunstancias son las que establecen las diferencias esenciales entre las consecuencias derivadas del fenómeno terrorista y las producidas por otros delitos violentos.

Partiendo de esta realidad, el objetivo principal del presente trabajo de investigación consiste en el análisis de la normativa española reguladora de la protección, ayuda y asistencia conferida expresamente a las víctimas del fenómeno terrorista prevista tanto en el ámbito estatal como en los preceptos autonómicos que contemplen el conjunto de las actuaciones complementarias en su favor desde una perspectiva criminológica, así como la valoración e incidencia de la repercusión de estas disposiciones en los sujetos afectados con la finalidad de establecer, en su caso, las líneas generales de mejora en aras a conseguir la necesaria reparación integral de la víctima.

La notable incidencia del fenómeno terrorista en la sociedad española comportará que, sin perjuicio de las remisiones expresas que se realizaran a variados textos normativos en los ámbitos internacional y europeo, nuestro análisis se centre en la normativa española al representar ésta la regulación más avanzada, exhaustiva y que mejor se adecúa a los intereses victimales debido a que tanto el catálogo de derechos que les otorgan como el régimen de protección y asistencia que tiene como finalidad atender las necesidades de los afectados por el terrorismo, son la consecuencia directa del pasado reciente de la sociedad española vinculado con el fenómeno terrorista.

De esta labor se han encargado tradicionalmente los profesionales en Psicología, si bien, teniendo en cuenta la multiplicidad de las dimensiones o aspectos a valorar en ese proceso de reparación integral de la víctima conviene analizar la posibilidad de que puedan contribuir a ella otros profesionales caracterizados por una formación interdisciplinar como el criminólogo. La función social de la Criminología se centra en aminorar los problemas de las personas reales en su relación con los procesos de la delincuencia, del control social y de la victimización. La formación interdisciplinar del criminólogo le permitiría valorar la complejidad asociada a esos proceso y, en su caso, coordinar equipos de distintos profesionales a esos efectos. En el ámbito comparado, el conocimiento criminológico se utiliza en el diseño, aplicación, estudio y evaluación de prácticas, programas, normas y políticas relacionadas con el control social y los procesos de criminalización y victimización. Aunque en la realidad española de los estudios

universitarios la Victimología se entiende parte fundamental de la Criminología lo cierto es que la víctima continúa siendo la menos investigada desde la perspectiva criminológica. La labor del criminólogo en esta materia puede convertirse en esencial en la medida en que su proximidad y visión integral acerca del fenómeno de las victimizaciones presentes en la misma pueden contribuir a su reparación y consecuente desvictimización.

Conforme al objetivo establecido, resulta preciso comenzar con una explicación introductoria a la Criminología que nos permita anclar el estudio victimal dentro del marco teórico general de esta ciencia. Con este apartado, buscaremos el origen y los antecedentes que han tenido una mayor influencia a lo largo de la constitución y formación de esta disciplina puesto que a partir de este planteamiento pretendemos señalar qué entendemos por la expresión Criminología y cuál es la definición más acorde y apropiada de acuerdo con los intereses subyacentes a esta disciplina. A continuación, indicaremos qué características ha de tener para ser considerada una verdadera ciencia debido a que de la confluencia de los aspectos que se explicarán y de la utilización del método científico no podrá objetarse la afirmación de que la Criminología es una ciencia con un campo de actuación único que la diferencia de otras ramas del saber, especialmente, de aquellas que pertenecen al denominado ámbito de las ciencias sociales. Distinguiremos las dos partes de la Criminología científica, esto es, la aproximación teórica y la aplicada, en la medida en que, la relación entre la teoría y el desarrollo práctico se convierte en el elemento fundamental sobre el que se deben elaborar los estudios de las víctimas. A continuación, abordaremos el análisis de los cuatro elementos de investigación propios de esta unidad disciplinar que son, el delito, el delincuente, la víctima y el control social, aunque, al ser conscientes de que nos encontramos ante una ciencia que destaca principalmente por su juventud, apertura e interdisciplinariedad ya que sus raíces se encuentran en otros saberes como la psicología o el derecho, es conveniente abordar las conexiones existentes entre los significados de estos términos desde las diferentes perspectivas con objeto de mejorar la comprensión de estos elementos y decidir los aspectos que se adaptan al progreso y evolución de los retos actuales de la Criminología.

Sin embargo, uno de los inconvenientes que se plantearán es la aparición de la denominada Victimología a raíz del movimiento victimal surgido en los años cuarenta del pasado siglo como respuesta al periodo de olvido en el que se ha visto inmerso el sujeto afectado por el hecho delictivo. El debate doctrinal se genera en torno a las tres posturas relativas a la relación que mantienen la Criminología y la Victimología, esto es, la autonomía científica de la Victimología frente a la primera al ser considerada una verdadera ciencia que cumple con todos los requisitos exigidos al respecto, en segundo lugar, la perspectiva que defiende la integración de la Victimología dentro de la ciencia criminológica y, finalmente, aquellos autores que defienden que ni siquiera la Victimología tiene la entidad suficiente para ser considerada una disciplina científica. Para poder abordar correctamente esta discusión, es conveniente iniciar el recorrido en los motivos que han argumentado la necesidad de estudiar la problemática subyacente a las víctimas. A continuación, delimitar cuál es el sentido que adquiere la expresión Victimología a fin de determinar en qué consiste el estudio de la víctima y cuáles son las específicas funciones que tiene encomendadas, en base a que, las conclusiones que se extraigan de ambos exámenes guiarán la postura que adoptemos sobre la existencia y autonomía de la Victimología. No obstante, con independencia del sentido de ésta, el estudio de la víctima nos indicará cuál es el estado actual de las investigaciones sobre esta temática y las líneas generales que se están siguiendo con la finalidad de apoyarnos con nuestro objeto de estudio que es la víctima del terrorismo.

Además, uno de los aspectos que debemos tener presente es que la víctima del terrorismo, no sólo cumple con las características generales presentes en cualquier tipología victimal en cuanto son personas que han sufrido un daño ocasionado por un delito, sino que, la cosificación a la que antes hemos aludido adiciona a estas víctimas unos rasgos particulares que los convierten en un colectivo más vulnerable en virtud del componente político latente en todas las acciones terroristas y que, justifican tanto el establecimiento de una definición propia de su categoría que incluya sus notas características que las diferencien respecto de las víctimas de otros delitos como la constitución y aplicación de un

sistema de protección, asistencia y ayuda específico dirigido a atender y restaurar la vulnerabilidad que padecen en la mayoría de los casos.

A continuación, afrontaremos el análisis criminológico del sistema de indemnizaciones, prestaciones, ayudas de carácter sanitario, psicosocial, educativo y laboral previstas en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, el Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del precedente texto legal y, al mismo tiempo, la normativa básica del ámbito autonómico que se ha promulgado en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, la Región de Murcia y el País Vasco. Los legisladores autonómicos que han decidido regular actuaciones a favor de este colectivo lo han realizado a partir de los títulos competenciales que tienen asumidos en las esferas de sanidad, vivienda, acción social y enseñanza que, a su vez, se asientan fundamentalmente en los criterios de complementariedad, subsidiariedad y proximidad.

En primer lugar, destaca la decisión del legislador estatal de conceder la condición de víctima del terrorismo en exclusividad a los fallecidos y a los heridos de naturaleza física o psíquica como consecuencia de una acción terrorista, mientras que, por otra parte, alude a lo largo del articulado a los denominados titulares o beneficiarios de las ayudas y prestaciones e, incluso, también hace referencia a los destinatarios de una especial atención dentro de los que se incluyen las categorías relativas a los sujetos amenazados, coaccionados, ilesos y familiares de las víctimas del terrorismo.

En segundo lugar, la explicación de las disposiciones legales girará en torno a los principios reconocidos en el texto legal estatal relativos a la verdad, justicia, reparación, dignidad, reconocimiento y memoria y, especialmente, se atenderá a los parámetros establecidos en la Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo y el Decreto 290/2010, de 9 de noviembre, de desarrollo del sistema de asistencia integral a las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pues

como es lógico y en la medida en que el impacto terrorista ha sido mayor en su territorio, enuncia con una mayor claridad y precisión los valores que protegen a las víctimas y a los demás afectados.

Si bien es cierto que, atendiendo a las pretensiones de este estudio y la relación de interdisciplinariedad existente entre los ámbitos criminológico y penal, el enfoque del examen de los principios que rigen las políticas de protección de los afectados por el terrorismo, se realizará desde los términos estrictos de la ciencia criminológica, esto es, la victimización primaria, la victimización secundaria y la victimización terciaria y no, en cambio, desde la perspectiva que maneja la ley autonómica vasca que contempla las dimensiones de los derechos de las víctimas del terrorismo, los derechos compartidos entre las víctimas y los miembros de la sociedad y, finalmente, los derechos correspondientes a la ciudadanía vasca, esto es, en función de sus destinatarios. En definitiva, el transcurso de las tres victimizaciones y las medidas que tratan de contrarrestarlas son los intereses principales del criminólogo en su tarea de contribuir a la reparación integral y desvictimización de los afectados.

Finalmente, tras realizar todas las precisiones teóricas pertinentes, se procederá a realizar un estudio piloto sobre una muestra compuesta tanto por víctimas directas como por víctimas indirectas que tienen en común la profesión de Guardia Civil desempeñada por el afectado en primera persona por la acción terrorista. Mediante una entrevista semiestructurada se les preguntará a todos los participantes sobre el conocimiento, conveniencia y el posible carácter reparador de las medidas previstas en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, con el propósito de averiguar cuáles son los inconvenientes que han tenido durante su proceso de desvictimización y cómo se puede mejorar la regulación actual del texto legal y su consecuente implementación práctica de acuerdo a la experiencia victimal de la muestra objeto de este estudio.

CAPÍTULO 1. CRIMINOLOGÍA

1.1. Criminología

La expresión Criminología proviene de los términos latino *criminis* y griego *logos* que hacen referencia respectivamente al crimen o delito. Ambas expresiones se asimilan a la conducta antisocial genérica sin que su significado quede reducido a las conductas constitutivas de delito con independencia de la categoría a la que pertenezcan, ya sea grave o de lesa majestad. Por otra parte, con ellas se alude al tratado o estudio de ese objeto. Por esto, la palabra Criminología etimológicamente hablando quiere decir el “estudio del crimen”, circunstancia que la convierte en una de las pocas derivaciones etimológicas que pueden seguir utilizando su denominación original en la actualidad¹.

El nacimiento de la Criminología se puede fechar en diferentes momentos según adoptemos un criterio u otro de todos los propuestos dado que su elección siempre responde a un valor puramente selectivo². Si atendemos al criterio

¹ MARCHIORI pone de relieve que etimológicamente este término tiene un contenido amplio, no se limita exclusivamente al delito, sino que también incorpora al mismo todos los factores y áreas relacionadas con las acciones cuya finalidad es la producción de un daño intencional, con independencia de su afección a los diferentes niveles individual, familiar, social o cultural; en MARCHIORI, H. Criminología. Teorías y pensamientos, ed. Porrúa, S.A., 2004, p. 5; PEREZ ALVAREZ, F. Y DIAZ CORTES, L. M. Introducción a la Criminología, Ratio Legis, 2013, p. 19; RODRIGUEZ MANZANERA, L. Criminología, ed. Porrúa, S. A., 1981, pp. 9-10; NUÑEZ PAZ, M. A. Y ALONSO PEREZ, F. Nociones de Criminología, Colex, 2002, p. 28.

² SERRANO GOMEZ matiza que aparece la Criminología cuando se empieza a luchar contra el delito, aunque, como ciencia, se puede fechar en el último tercio del siglo XIX bajo la corriente del positivismo criminológico; en SERRANO GOMEZ, A. Historia de la Criminología en España, Dykinson, 2007, p. 29; por su parte, ZAFFARONI, después de examinar la diversidad de opiniones advierte la existencia de dos corrientes acerca del nacimiento de la Criminología, la primera apuesta por el siglo XIX con el positivismo, ya responda a una tendencia biologicista ya sea de corte sociológico, frente a la segunda que señala a la escuela clásica durante el siglo XVIII. Si bien, explica que para poder posicionarse conviene tener en cuenta que si la aproximación es crítica se remonta al periodo en que la burguesía intenta llegar al poder, momento en que se cuestiona el sistema penal y la reacción penal, así, la Criminología que fundamenta sus planteamientos sobre el poder aparece con los clásicos, exactamente con BECCARIA en 1765 o HOWARD en 1777; mientras que, desde una aproximación conformista, una vez que la burguesía se ha asentado en el poder, pretende hallar un saber que lo legitime y les ayude a mejorarlo, considerando al delincuente como individuo “anormal”, la referencia al poder controlador será le necesaria para mejorarlo, en este contexto, la Criminología aparece con LOMBROSO en 1876 o con QUETELET en 1835. Concluye tras sus precisiones que, el principio de la Criminología está vinculado con los clásicos a pesar

estrictamente científico, su origen se sitúa en el último tercio del siglo XIX, época especialmente importante en que la Escuela Positiva generalizó su método empírico de investigación. No obstante, si tenemos en cuenta que su objeto es el fenómeno humano y social y optamos, consecuentemente, por un criterio amplio, es prácticamente imposible delimitar una fecha concreta pues, como es lógico, existiría desde la aparición del primer crimen. En este caso, podemos remitirnos a sus antecedentes más remotos, donde ya se diferenciaba entre crimen y delito en el Derecho Romano. El criterio aplicado para diferenciar ambas categorías atendía a su perseguibilidad, de manera que, mientras que los crímenes en función de su mayor gravedad se perseguían de oficio por el Estado siempre que se encuadraran bajo los supuestos tasados de traición a la patria, parricidio, asesinato, sacrilegio, estupro e incesto; en cambio, les correspondía a los particulares el mismo proceder respecto a los delitos. Esta distinción, que creó el precedente de la asociación entre el binomio crimen y delitos muy graves, incluyendo entre su catálogo los delitos contra la vida de las personas, especialmente el homicidio y, con más razón, el homicidio cualificado, incluso, a día de hoy, mantiene plena su vigencia³.

Otro criterio manejado hace referencia a la aparición y al uso sistemático de esta noción. La controversia se suscitó a la hora de identificar al primer autor que la utilizó debido a que durante mucho tiempo reinó durante este aspecto mucha incertidumbre si bien hoy en día existe cierto consenso. A este respecto, cabe destacar que la Criminología ha estado ligada al antropólogo francés TOPINARD, quien fue el primero en introducirlo para describir este estudio, a pesar de que, se suele atribuir este logro erróneamente al jurista italiano GAROFALO, uno de los considerados padres de esta disciplina, junto a LOMBROSO y FERRI. Sin embargo, es cierto que, el verdadero responsable del despegue de este vocablo en el ámbito internacional fue GAROFALO. Esta

de que *“esta elección debe ser hecha con cierta reserva, pues la criminología, abarcando en ella el sistema de ideas que implica cambios en la política criminal, existió siempre y en todo el mundo”*; en ZAFFARONI, E. R. Criminología una aproximación desde el margen, ed. Temis, S. A., Bogotá, pp. 100-101.

³ PEREZ ALVAREZ, F. Y DIAZ CORTES, L. M. Introducción a la Criminología..., cit., p. 19; RODRIGUEZ MANZANERA, L. Criminología..., cit. p. 4; GARCIA-PABLOS DE MOLINA, A. Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos, Tirant lo Blanch, 2007, p. 237; NUÑEZ PAZ, M. A. Y ALONSO PEREZ, F. Nociones de..., cit., p. 28.

mención expresa marcó un hito que ha supuesto un revulsivo en su avance y reconocimiento en la medida en que consiguió que fuera aceptado por la comunidad científica internacional⁴.

Antes de adentrarse en la ardua tarea de definir con la mayor precisión posible el término Criminología, hemos de mencionar la existencia de las dos notas básicas que caracterizan esta disciplina y que nos ayudarán a comprender el estado actual de esta ciencia, por ello, es recomendable realizar este breve inciso previamente.

Podemos centrar nuestra atención en dos de los atributos destacables inherentes a la disciplina que nos ocupa, el primero de ellos tiene que ver con su juventud, mientras que, el segundo se relaciona con su capacidad de apertura. Respecto al primero de ellos, se refiere a que el estudio sistemático del fenómeno criminal es un hecho relativamente reciente. El nacimiento de esta nueva disciplina surge de la inquietud manifiesta de algunos autores que empezaron a reflexionar de una manera más rigurosa en sus estudios que las investigaciones realizadas hasta entonces y de la necesidad de su caracterización científica, cuyos orígenes corresponden con el último tercio del siglo XIX, concretamente, existe cierto acuerdo en datarlo con la obra de LOMBROSO de 1871.

El inicio histórico de esta ciencia sucedió en ocasión de la búsqueda de explicaciones últimas del comportamiento delictivo en causas de orden biológico o social, en las anomalías corporales o psíquicas del delincuente apoyado en el método empírico. Si bien, su evolución limitada en el tiempo y desigual en los diferentes países hace que presente ciertos obstáculos y dificultades tales como

⁴ PEREZ ALVAREZ, F. Y DIAZ CORTES, L. M. Introducción a la Criminología..., cit., p. 19; RODRIGUEZ MANZANERA, L. Criminología..., cit. p. 3; MARCHIORI, H. Criminología..., cit., p. 3; BERGALLI, R., BUSTOS RAMÍREZ, J. Y MIRALLES, T. El pensamiento criminológico I. Un análisis crítico, Temis, 1983, p. 23; entre los autores que sostienen que la denominación se atribuye a Garófalo, se encuentra RODRIGUEZ DEVESA; en JODRA ARRIBAS, F. Derecho Penal. Parte General, División de Formación y Perfeccionamiento, 1991, p. 32; AEBI, en la misma línea que la opinión de RODRIGUEZ DEVESA, explica que la investigación de PIRES aporta luz a este conflicto de paternidad. Pues demostró que TOPINARD hizo la propuesta del término antes que él, incluso que el vocablo posterior que supuestamente ofreció fue "criminalología" (criminologie), en AEBI, M. F. Temas de criminología, Dykinson, 2008, p. 98; algunos autores han optado por utilizar los términos "antropología criminal" o "sociología criminal", aunque INGENIEROS descarta ambas posibilidades al entender que ya se encuentran incluidas dentro de la rama de Criminología que denomina "etología criminal" referida a las causas o condiciones que predisponen la aparición del hecho delictivo, en INGENIEROS, J. Criminología, ed. Daniel Jorro, 1913, p. 90.

el cambio progresivo de su significación, su paulatina adaptación de sus elementos de investigación a la realidad social vigente y la sucesión de paradigmas.

Su juventud a la vez que puede conllevar ciertos problemas de imprecisión sobre todo terminológica y un desarrollo aun incompleto de la explicación y prevención de ciertos fenómenos, es capaz de adaptarse al contexto histórico y social del momento determinado. Esta capacidad implica que esta ciencia continúa inmersa en un proceso constante y continuo de investigación, crecimiento, enriquecimiento y revisión de sus postulados fruto de las exigencias de las circunstancias de cada periodo y lugar, esta situación comporta una regeneración ininterrumpida de conocimientos evitando que la disciplina se quede obsoleta.

En estrecha relación con el anterior, el segundo rasgo descriptivo implica que se muestra receptiva y abierta ante cualquier información o saber independientemente de su procedencia. Estas aportaciones nos ofrecen la posibilidad de mirar desde diferentes prismas y, asimismo, transformar nuestra visión previa tanto del planteamiento del problema como de su posible solución. La recepción de otros saberes en la ciencia criminológica genera la construcción del conocimiento ilimitado acerca de las cuestiones que le han suscitado preocupación a la vez que una crítica constante, poniendo en tela de juicio todos sus postulados incesantemente. Este continuo recibimiento de información implica el avance de la ciencia en la medida en que existe un proceso ininterrumpido de estudio, aceptación, rechazo y corrección de teorías al mismo tiempo que avanzan la sociedad y otras disciplinas en sus áreas, cuyo desafío principal radica en su adaptación a cualquier cambio y su permanente renovación originados por los descubrimientos científicos⁵.

Como se puede observar, la capacidad de apertura comporta necesariamente la posibilidad de que esta ciencia aglutine autores interesados en

⁵ HIKAL, W. *"La ciencia criminológica"*, abril-junio 2001, p. 33. Disponible en: es.slideshare.net/waelhikal/ciencia-criminologica (Consultado 15/07/2016); BERISTAIN IPIÑA, A. *Criminología, Victimología y cárceles*, Tomo II, 1996, pp. 81-83; RODRIGUEZ MANZANERA, L. *Criminología clínica*, p. 26.

la materia con diversas ramas de conocimiento de origen, ocasionando en algunos casos obstáculos para alcanzar cierto consenso. Incluso, como se podrá comprobar en el apartado siguiente, aparece ya cierto grado de dificultad a la hora de dotar de significado su concepto, aquí reside la razón que explica la existencia de multitud de propuestas a fin de definirla⁶, en cierto modo, existen tantas alternativas como autores dispuestos a ofrecer su criterio debido a que la procedencia de cada uno de ellos determinará, en cierta medida, su comprensión de cada cuestión. Evidentemente, la confluencia de estas notas resalta su naturaleza diferencial sobre las demás ciencias sociales, en la medida en que, tiene por delante un gran camino por recorrer en el avance de la ciencia y amplias expectativas en la labor que pueden realizar sus profesionales.

1.2. Definiciones de la Criminología

Consideradas conjuntamente las dos características, juventud y apertura, se comprende perfectamente que la evolución y el desarrollo de la descripción de esta ciencia no haya quedado perfectamente delimitada, sino que, se haya visto inmersa en una transformación paulatina de su significado y manifestación. En concreto, se ha ido progresando cada vez más hacia una apertura de metodologías al tiempo que se han ampliado sus elementos de estudio. A medida que se han producido cambios en la conceptualización de su objeto se han modificado sus objetivos y, por lo tanto, la definición también ha variado.

Lo primero en lo que hay que detenerse es en delimitar qué debe entenderse por Criminología. Sin duda, la cuestión fundamental consiste en integrar en una definición única las numerosas acepciones que han aparecido en la literatura especializada, con grandes discrepancias entre ellas, sobre el significado del concepto Criminología; puesto que, a lo largo de su historia la amplia variedad de orientaciones, corrientes e interpretaciones ha generado que su significado cambie y evolucione con el transcurso del tiempo. En estrecha conexión con la idea de progresiva transformación del término, existe otra razón

⁶ HERRERO HERRERO, C. Criminología (Parte General y Especial), Dykinson, Madrid, 2007, p. 31; RODRIGUEZ MANZANERA, L. Criminología..., cit., p. 60.

que ha influido también en su modificación, esto es, la sucesiva ampliación de sus elementos de estudio.

El hecho de que no haya unanimidad en la doctrina acerca de la definición de Criminología pues como es lógico, cada autor que ha tratado este tema ha apostado por construir la suya propia, no supone ningún problema pues casi todas ellas tienen ciertos rasgos en común⁷, curiosamente, la falta de convergencia de criterios no ha dificultado la creación de puntos de encuentro entre todas las construcciones.

Ante la ausencia de un concepto generalizado de Criminología, la doctrina, cuyas elaboraciones, de una manera u otra, no dejarán de contribuir a su significación, se ha visto obligada a dotarla de sentido. Podemos distinguir dos clases de definiciones de Criminología, las denominadas tradicionales y las categorizadas como amplias en función de los objetos de investigación que asuman. En el primer grupo se realiza una interpretación restrictiva, incluyendo tan sólo el delito y el delincuente, frente a las amplias que acertadamente han considerado conveniente aumentar su centro de atención a otros elementos que giran alrededor del delito como la víctima y el control social⁸.

Si bien es cierto que, además de las dos direcciones de opiniones que se explicarán a continuación, existe un grupo de definiciones catalogadas de omnicomprendivas que aparecieron durante los primeros pasos de esta disciplina.

⁷ KAISER afirma que *"no existe una determinación conceptual predominante de la criminología...sin embargo, no se diferencian considerablemente las varias opiniones sobre lo que en la actualidad debe entenderse por criminología, pese a sus divergentes acentuaciones. Hay unanimidad en afirmar que la criminología es una ciencia empírica. También se da la opinión generalizada de que la ciencia criminológica se ocupa del crimen y del delincuente, así como del control del delito, en tanto en cuanto se trata de la ejecución de sanciones penales, de la prognosis y del tratamiento del infractor..."*; en HERRERO HERRERO, C. Criminología..., cit., p. 37; BERGALLI, R., BUSTOS RAMÍREZ, J. Y MIRALLES, T. El pensamiento criminológico..., cit., p. 19.

⁸ KAISER explica que la definición tradicional se refiere a la *"investigación empírica del delito y de la personalidad del delincuente"*, por su parte, la definición amplia de este concepto alcanza *"el conocimiento experimental científico sobre las transformaciones del concepto de delito (criminalización) y sobre la lucha contra el mismo, el control de la restante conducta social desviada, así como la investigación de los mecanismo de control policiales y de la justicia"*; en HERRERO HERRERO, C. Criminología..., cit., pp. 36-37; PEREZ ALVAREZ, F. Y DIAZ CORTES, L. M. Introducción a la Criminología..., cit., p. 49.

Entre ellas, destacan las formulaciones de GAROFALO, VON HENTIG, CUELLO CALON y JIMENEZ DE ASUA⁹.

GAROFALO se refiere concretamente bajo tal denominación al "*estudio del delito*"¹⁰. Este autor distingue entre el delito social o natural (llamado también crimen) y el delito jurídico que corresponde con el tipificado en el Código penal. Frente al considerado por el legislador, el que ostenta un carácter natural lo relaciona con "*una lesión de aquella parte del sentido moral que consiste en los sentimientos altruistas fundamentales (piedad o probidad), según la medida en que se encuentran en las razas humanas superiores, cuya medida es necesaria para la adaptación del individuo a la sociedad*". Tan sólo el delito que cumpla estos requisitos interesará a la verdadera ciencia y por tanto al criminalista sociólogo, quien en los supuestos en que se vulnere la moralidad inherente a un pueblo civilizado y, además, sea constitutivo de indicio de anomalía en los autores, procederá a examinar las causas naturales y los remedios de los delitos¹¹.

La Criminología para VON HENTIG es aquello conocido sobre el crimen y el control. Excluye de su definición la penología, la prevención y las formas de tratamiento, la medicina legal, la psicología judicial y otras maneras de investigación criminal. Si bien, matizaba que estaba en el camino de convertirse en ciencia en tanto se le considere un conjunto de conocimiento que pueda ser

⁹ TELLEZ AGUILERA, A. Criminología, Edisofer, 2009, pp. 25-26.

¹⁰ PEREZ ALVAREZ, F. Y DIAZ CORTES, L. M. Introducción a la Criminología..., cit., p. 19; MARCHIORI, H. Criminología..., cit., p. 3.

¹¹ La búsqueda de unos hechos universalmente odiados y castigados en cualquier tiempo y lugar no ofreció resultados satisfactorios, por ello, este autor optó por cambiar el método empleado hasta entonces, el análisis de los sentimientos sustituyó al examen de las acciones debido a que el delito conlleva la lesión del sentido moral de una sociedad. La medida mínima del sentido moral es común a todos los hombres de una sociedad, esto es, la parte más sustancial de ese sentimiento es idéntico en todos los hombres de la misma raza y tiempo. Tras rechazar los sentimientos de honor, pudor, religión y patriotismo al no cumplir con los requisitos anteriores, giró su investigación alrededor de los sentimientos altruistas y, más precisamente, a la benevolencia y justicia. Tras analizar la gradación de ambas llegó a la conclusión de que el sentimiento común de piedad coincide con su forma negativa entendido como la "*abstención de ciertos actos crueles, y que la opinión pública ha considerado siempre como crímenes, las violaciones de este sentimiento, dañosas a la comunidad...*" y dentro de la probidad consistente en respetar la propiedad del otro. Esto es lo que se conoce como delito natural o crimen, si bien, junto a éstos también existe una serie de hechos, de mayor o menor inmoralidad y nocividad, que consisten en rebeliones, desobediencias y transgresiones de la ley que el estado debe reprimir; en GAROFALO, R. La Criminología. Estudio sobre la naturaleza del crimen y teoría de la penalidad, ed. Daniel Jorro, Madrid, 1912, p. 54; RODRIGUEZ MANZANERA, L. Criminología..., cit., p. 5.

aprendido y enseñado a efectos de que sea aplicado con cierto nivel de certidumbre con el objetivo de modificar la conducta. Parte de los obstáculos responden a la amplia variedad de factores sociales que impiden su correcta descripción, interpretación, intercausalidad y aplicación práctica¹².

Por su parte, CUELLO CALON entiende que comprende *"el conjunto de conocimientos relativos al delito, como fenómeno individual y social"*. Esta disciplina se focaliza en la etiología del delito, en las maneras que aparece teniendo en cuenta que es un fenómeno de carácter social y natural, proporciona una serie de datos e informes que le pueden interesar por su utilidad a la Penología en su labor de estudiar los diferentes mecanismos de prevención del delito mediante la aplicación de las penas y de las medidas de seguridad, sus métodos de aplicación y la actuación que tiene lugar después de la intervención penitenciaria¹³.

El claro ejemplo de un autor que evolucionó en su pensamiento a la vez que examinaba los enfoques dominantes en cada periodo fue JIMENEZ DE ASUA. En sus inicios, este autor estuvo influenciado por el positivismo italiano y, en los resultados de sus múltiples trabajos quedó reflejada la peligrosidad del delincuente. Sin embargo, tiempo después comenzó a objetar sobre sus

¹² LOPEZ REY DE ARROJO, M. Criminología. Teoría, delincuencia juvenil, prevención, predicción y tratamiento, Biblioteca Jurídica Aguilar, 1981, pp. 26-28.

¹³ Se mostró cauto con la corriente reformadora penológica que, como explicó se caracterizó por *"el régimen disciplinario se atenúa y legaliza, la asistencia médica realiza grandes progresos, se acentúa la necesidad del tratamiento psiquiátrico, se crean prisiones abiertas, se da un fuerte impulso a la actuación reformadora de los jóvenes delincuentes, nacen nuevas directrices para el tratamiento de los criminales habituales y peligrosos y el tratamiento en libertad, la gran esperanza del porvenir, asume cada día organización más completa y se difunde por gran número de países"*. En virtud de esta posición criminológica a favor del tratamiento, diagnosis y prognosis de la delincuencia siguió firme en su convicción de la compatibilidad entre la retribución de la pena y los fines de la prevención y enmienda. En la Penología convergen los juristas y los criminólogos, los primeros reivindicando la pena y los segundos aportando su método causal-explicativo o nomotético para lograr la síntesis siempre que se tenga presente que la infracción objetiva pueda ser síntoma de la personalidad del autor. Los tribunales juzgarían comportamientos no delitos. Un primer momento de la individualización es el legislativo pero la importancia reside en la sede judicial, donde sería necesario exigir preparación criminológica a los jueces para su correcta interpretación del examen médico-psicológico y social de los delincuentes. Mientras que, la institución penitenciaria se enfocaría en la observación y análisis del penado a fin de valorar su grado de inadaptación social y las posibilidades que tenga de resocializarse. En la última fase, ya en el medio libre, la labor individualizadora se serviría de la libertad condicional y el régimen de prueba; en DIAZ PALOS, F. Don Eugenio Cuello Calón y la moderna penología, Anuario de derecho penal y ciencias penales, Tomo 16, 1963, pp. 543-549; RODRIGUEZ MANZANERA, L. Criminología..., cit., p. 75; PEREZ ALVAREZ, F. Y DIAZ CORTES, L. M. Introducción a la Criminología..., cit., p. 20.

postulados y acabó por rechazarlos. Con posterioridad, sus trabajos serían la confluencia de varias corrientes, en los que llegó a una síntesis del correccionalismo con el positivismo, aunque en su planteamiento destacan principalmente las ideas provenientes de la psicología criminal. En todo caso siguió los planteamientos de DORADO MONTERO pues también creyó en la posibilidad de que la ciencia criminológica reemplazara al derecho penal¹⁴.

Fruto de su análisis de los diferentes movimientos nace su visión de la Criminología presentada como una ciencia sintética dedicada al estudio de la génesis del delito desde los mismos factores endógenos y exógenos que influyen en el delincuente para cometer un hecho delictivo y en el denominado delincuente crónico, tales como la personalidad y el medio. El análisis de estos factores es necesario para procurar los tratamientos psicosociales para que su comportamiento sea corregido. Ahora bien, este autor está haciendo una distinción entre la sociedad actual y la que considera la ideal en un futuro. En la primera, caracterizada por la opresión, debe seguir vigente el derecho penal protector de los delincuentes en dos momentos, antes de la comisión del hecho delictivo mediante un código preventivo y tras la aparición del delito con un código sancionador, basado en la peligrosidad, cuyo fin es el castigo. Mientras que, en la sociedad socialista ideal accedería la criminología que conseguiría eclipsar al derecho penal, pues, la criminología clínica entraría en juego una vez superado el riesgo de la opresión¹⁵.

¹⁴ *"Mas del mismo modo que después de Pinel, imbuido de los ideales revolucionarios, los dementes ya no son objeto de valoración sino de cuidado, así puede llegar un día en que no hagamos juicios de valor sobre las acciones que hoy llamamos delitos, no tampoco sobre los autores. Entonces no nos perturbarán el ánimo de las garantías y derechos del hombre y del ciudadano, y no habrá riesgo de que nuestros principios sirvan a regímenes dictatoriales. Al delincuente se le corregirá, curará o inocuizará en establecimientos que nada tendrán de cárceles. Así lo vio ya Dorado Montero con sus ojos románticos y lo predicó insistentemente en libros famosos. Al final acertó incluso con el título: El Derecho protector de los criminales. Yo voy más allá. Nuestro derecho será cancelado y sólo la Criminología, ciencia causal-explicativa, completada con remedios, imperará en el futuro. Acaso se me diga que ésta es una utopía. Rechazo la imputación: de ningún ideal puede decirse que es ajeno a este mundo. Utopía pareció antaño el hecho de volar con aparatos más pesados que el aire; utopía era el cisne negro, pero de descubrió Australia y aparecieron esas aves sombrías, y se ingenió el hombre y los aeroplanos surcan el espacio"; en TELLEZ AGUILERA, A. Criminología..., cit., pp. 246-249.*

¹⁵ HERRERO HERRERO, C. Criminología..., cit., pp. 111-113; NUÑEZ PAZ, M. A. Y ALONSO PEREZ, F. Nociones de..., cit., pp. 88-89.

1.2.1. Definiciones restrictivas

La primera corriente de opinión considera al delito y al delincuente como los elementos integrantes del objeto de estudio. Esta tesis de carácter restrictivo, mantiene que los elementos exclusivos a tener en cuenta son el resultado de la necesaria conjetura de los parámetros concurrentes, por una parte, en el objetivo, la comisión del hecho delictivo y, por otra parte, el subjetivo que coincide con el principal protagonista de su realización, esto es, el delincuente.

Siguiendo la tradición austríaca, SEELIG incurre en cierto grado de generalidad al afirmar que los "*elementos reales del delito*" engloban tanto el "*comportamiento psicofísico del hombre*" como "*sus efectos en el mundo exterior*", resultando un ámbito de actuación excesivamente amplio y ambiguo para la Criminología, a pesar de que, a simple vista su definición tenga un carácter restrictivo al nombrar tan sólo en su definición al delito y al delincuente como merecedores de la atención de esta ciencia¹⁶.

Por su parte, encontramos autores como STEFANI y LEVASSEUR, quienes destacan la importancia de la "*delincuencia para investigar sus causas, su génesis, su proceso y sus consecuencias*"; y, JAMBU-MERLIN en la misma línea atiende a las "*causas de la delincuencia*" que incluye "*entre las causas, de la delincuencia, algunas residen en la personalidad de los delincuentes*"¹⁷. La imprecisión y la vaguedad de las tres formulaciones otorgan a la disciplina de un significado parcial, puesto que no aluden a los métodos utilizados ni tan siquiera a las funciones precisas que persiguen.

¹⁶ Según su planteamiento, el derecho penal está interesado en el componente normativo que hace referencia a los valores y al deber ser, mientras que, la Criminología lo observa como un fenómeno real conformado por los aspectos pertenecientes a los mundos psíquico y físico. Ambas ciencias se encuentran interconectadas mediante el concepto de delito relativo a las manifestaciones reales y a los elementos normativos del delito como se desprende de su definición. Así la ciencia criminológica está constituida por dos partes, la primera relativa de las manifestaciones reales de ejecución a las que pertenecen la fenomenología, la psicología y la sociología criminales, que se ocupa de la táctica criminal que incluye la investigación del delito, el aseguramiento de la persona del autor y el procedimiento de la instrucción criminal; y la segunda examina las manifestaciones reales de la lucha contra el delito, concretamente, la teoría represivo-preventiva frente a los hechos delictivos y la teoría acerca de la prevención del delito que se interesan de la ejecución de las penas y medidas de seguridad; en RODRIGUEZ MANZANERA, L. Criminología..., cit., p. 7.

¹⁷ HERRERO HERRERO, C. Criminología..., cit., pp. 31-48.

QUINTILIANO SALDAÑA formula su propuesta desde la filosofía pragmática que postuló. Partiendo de esta premisa la considera "*ciencia del crimen o estudio científico de la criminalidad, sus causas y medios para combatirla*"¹⁸, debido a que su intención es ofrecer una explicación físico-sociológica y físico-psicológica del delito. A pesar de que una lectura rápida nos puede llevar a la conclusión errónea de que este autor tan sólo identifica al delito, esto no es del todo cierto. Con el término criminalidad se está refiriendo también al delincuente, figura clave para su explicación del fenómeno criminal. La ciencia de las causas no hay que entenderla en un sentido estricto pues comprende la ciencia de las causas del crimen y los efectos autoindividuales que se generan en el propio delincuente por la simple razón de que el delito es el resultado del proceder del delincuente y, este individuo al mismo tiempo, se convierte en la obra de su crimen¹⁹.

BERNALDO DE QUIROS opina que se refiere a la "*ciencia que se ocupa de estudiar al delincuente en todos sus aspectos*"; no obstante, este entendimiento genérico dirigido tan sólo a la persona del delincuente, después matiza que esta disciplina autónoma y de observación, facilita la toma de decisión que deba adoptar el juez sobre la personalidad, responsabilidad y peligrosidad del delincuente²⁰.

¹⁸ Como explica el mismo autor "*los tres enfoques endogénicos del delito –el morfológico, el fisiológico y el psicológico– aparecen eslabonados primero entre sí; luego entrecruzados por una estrecha interdependencia; por último, explicados por la evidencia del enfoque dinámico. Como acto humano, el delito no es más que el resultado coherente de un carácter (caracterología), que a su vez es una endoestructura de la constitución (somatología). Esta se halla determinada por las secreciones internas (endocrinología), las que pueden ser modificadas por el ejercicio metódico, reguladas por la Higiene y aun curadas por la Opoterapia y la Hormonoterapia. El tipo evoluciona integralmente con sus tres aspectos, de tipo somático o figura, comprendida en ella la estructura corporal; tipo constitucional o temperamento, explicado por la fórmula hormonal del sujeto, y tipo de acción o carácter, como triple dispositivo fisicoquímico moral de la personalidad. Así es como el criminal se transforma cuando se adapta al medio físico o geográfico, al medio social o profesional y al medio moral o legal. Se puede hablar, pues, de un auténtico transformismo criminológico; con serie de procesos que se dan dentro de un mismo individuo y a lo largo de una misma vida*"; en TELLEZ AGUILERA, A. Criminología..., cit., p., 231; PEREZ ALVAREZ, F. Y DIAZ CORTES, L. M. Introducción a la Criminología..., cit., p. 20; MARCHIORI, H. Criminología..., cit., p. 3.

¹⁹ TELLEZ AGUILERA, A. Criminología..., cit., pp. 225-232.

²⁰ "*Se considera al hombre desprendido de la disciplina social, al desligado por una causa cualquiera de su clase, al llamado vulgarmente golfo entre nosotros, como protoplasma de la mala vida. Producto del temperamento vagabundo, del abandono en las primeras edades o de las decadencias sociales, el golfo vive parasitariamente en el organismo social, dedicado a la vez al hurto, a la prostitución y al pordioseo. Hállanse en él, en efecto las aptitudes, y en ocasiones, hasta el ejercicio, de estos tres modos de vida, que mezcla a su capricho o según las conveniencias. Ciertos individuos, de naturaleza extremadamente*

INGENIEROS, a la sazón primer director del Instituto de Criminología en la Penitenciaría de Buenos Aires en 1907, consideró que a partir de la aplicación del método científico al estudio del delito y la consideración del delincuente nace la criminología. Adelantó que hasta entonces no se le había dado al método científico la relevancia que precisaba, la escasa atención había imposibilitado a esta ciencia la obtención de una comprensión global. Elaboró un programa sintético para favorecer su estudio completo y, asimismo, para diferenciarlo de los estudios de derecho penal planteados por la escuela clásica, el mismo quedaba articulado sobre tres ejes: sus causas, manifestaciones y su tratamiento; así, la Criminología se ocuparía de tres ramas organizadas lógicamente. La primera, la etiología criminal, analiza los factores o causas, con un predominio claro de los psicológicos por encima de los somáticos, que producen el delito. La segunda, la clínica criminológica, estudia las formas de manifestación del delito y las características del delincuente para averiguar su está adaptado socialmente o no, y, por último, la terapéutica del delito, campo en el que se pretende abordar

errática e inquieta, pertenecen indefinidamente en este estado; pero la mayoría de las veces, coincidiendo con la llegada de la pubertad, se verifica en los golfos cierta evolución a otro estado diferenciado. Ocurre entonces que, tomando como oficio definido alguno de los modos expresados y ejerciéndole habitualmente, se agremian en la delincuencia, en la prostitución o en la criminalidad transformándose en delincuentes, prostitutas o mendigos. Este hecho se señala por la pérdida de una cantidad de las tendencias erráticas propias del golfo. Al arraigar en uno de esos estados diferenciados, experimentan también una serie de cambios y transformaciones en el sentido de la adaptación al nuevo género de vida, esto es: perdiendo caracteres que les estorben, y desarrollando los que le sean útiles. Sin embargo, la diferenciación nunca es tan completa que atrofie enteramente las aptitudes primarias para todo modo de parasitismo. Con frecuencia, su vida aventurera y perseguida, les fuerza a mudar los hábitos. Preséntase entonces el fenómeno llamado por los naturalistas mimetismo; por virtud del cual, obedeciendo al instinto de conservación, las especies biológicas abandonan o disimulan los caracteres por los cuales son perseguidos, imitando a otras especies distintas, disfrazándose, en una palabra. Por donde la mala vida, a menudo adopta la representación de los tipos sociales tolerados. Numerosos factores determinan la diferenciación de las especies. Ya es la herencia o la educación que hace que los hijos continúen el ejercicio de los padres; ya la diversidad del temperamento, que lleva a los más impulsivos a la vida criminal y deja a los débiles de cuerpo y alma en la existencia mendicativa; ya al sexo, que llama a las mujeres a la prostitución y a los hombres al crimen; ya, en fin, un conjunto de circunstancias exteriores que, presentándose oportunamente, permiten una exploración fácil. Pero el modo de reacción que la sociedad usa respecto de cada derivación de éstas es distinto, y de aquí la diversa posición en que la sociedad tiene a sus parásitos. Al delincuente, cuyo ataque siente con dolor, le persigue. Al mendigo le tolera, por confusas razones de piedad supersticiosa. Finalmente, con la prostitución se pacta un cambio de servicios: de ut facias"; en TELLEZ AGUILERA, A. Criminología..., cit., pp. 232-237; PEREZ ALVAREZ, F. Y DIAZ CORTES, L. M. Introducción a la Criminología..., cit., p. 20.

la prevención y las medidas aplicadas por las instituciones encargadas de la defensa social frente a los delincuentes²¹.

RODRÍGUEZ MANZANERA se adhiere a la definición "*ciencia sintética, causal explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales*"²², pues contiene los elementos básicos ciencia, síntesis, método, empirismo y objeto. Se nutre del conocimiento procedente de otras ciencias que apoya la construcción del suyo propio a través de la síntesis sin que resulte un simple acopio de datos, todo ello facilitado por los métodos de investigación que tiene a su alcance, tanto los aportados por otros ámbitos como los que ha desarrollado en función de sus intereses; por consiguiente, uniendo el aspecto de conocimiento sintético y los métodos disponibles, el fundamento de ciencia es doble. El objeto de esta ciencia es la conducta antisocial, fenómeno y resultado de la naturaleza, que coincide con la conducta humana que va contra el bien común. Esta expresión no sólo abarca los comportamientos que atentan contra determinado grupo, sino que incluye todas las acciones dirigidas hacia cualquier persona con independencia de la clase a la que pertenezca. Es necesario describir y explicar la conducta antisocial en un determinado momento y lugar a fin de buscar sus posibles causas mediatas y, así, contribuir a su prevención, labora básica de las ciencias aplicadas que tratan de buscar sus causas y resolver el problema planteado. En estrecha conexión con la idea de causalidad, remarca el carácter explicativo de la Criminología en la medida en que su investigación –los pasos que debe recorrer–

²¹ Su comprensión de la ciencia criminológica hay que entenderlo bajo los postulados de la corriente clínica nacida a finales del siglo XIX y desarrollada principalmente a lo largo del siglo XX. En este contexto, el énfasis que este nuevo enfoque pone en el conocimiento de la personalidad del delincuente sentará de alguna forma las bases para explicar el delito en relación con la problemática personalidad de este individuo considerado enfermo social. Tan sólo el delincuente con su personalidad conflictiva puede realizar la conducta patológica del delito. Opera en un nivel de criminología aplicada pues para comprender por qué ha cometido un hecho delictivo exploran clínicamente las cualidades biológicas, psicológicas y psicopatológicas y la manera en que ha llegado a la conducta delictiva (diagnóstico clínico criminológico), de manera que estos motivos individuales guíen la aplicación de las medidas en su rehabilitación (tratamiento individual y familiar) con el objetivo de evitar nuevos comportamientos delictivos y su recuperación social (medidas preventivas); no obstante su principal inconveniente es que atiende exclusivamente al delincuente juzgado y condenado; en INGENIEROS, J. Criminología..., cit., pp. 81-88; MARCHIORI, H. Criminología..., cit., pp. 3, 39-46.

²² Esta definición proviene de RUIZ FUNES que la consideró "*ciencia sintética y empírica, sus límites están fijados por su contenido: el estudio triple del delincuente y del delito bajo los aspectos antropológico-biológico, psicológico y social*", aunque pasado cierto tiempo reemplazó delito y delincuente de su definición inicial por el término genérico "fenómenos criminales". A partir de esta aproximación, QUIROZ CUARON la mejoró y la completó; en RODRÍGUEZ MANZANERA, L. Criminología..., cit., p. 3.

implica la descripción, clasificación y explicación de las conductas criminales. Por último, este estudio de la conducta antisocial manifestado en el delincuente debe tener presente la dualidad de su naturaleza, por una parte, interesa el criminal como ser natural y, por otra parte, no se debe obviar la procedencia social del crimen, esto es, su naturaleza cultura²³.

Por último, con un punto de vista más genérico SERRANO MAILLO siguiendo a SHUTERLAND lo acota en el sentido siguiente *"le interesa a la Criminología el estudio de las causas del delito, las posibles formas de responder al fenómeno criminal (de prevenirlo y controlarlo), la medición o extensión del mismo y el cómo y por qué se elaboraron las leyes penales"*²⁴, es decir, opta por señalar las funciones específicas de la Criminología. En primer lugar, el estudio causal del delito centrado en buscar la respuesta a la pregunta por qué ciertas personas cometen los delitos y cuál es el índice que alcanza el fenómeno de la delincuencia. En segundo lugar, pone el énfasis en la función práctica dirigida a la prevención y control en dos sentidos, por una parte, ofrecer teorías criminológicas y destacar los hechos empíricos sobre el fenómeno criminal y, por otra parte, ayudar y evaluar empíricamente la efectividad de los programas diseñados en términos de prevención y control de la delincuencia. En tercer lugar, su medición y control, esto es, averiguar cuántos delitos se han cometido en un periodo de tiempo en un lugar determinado ya sean todos los delitos en general o un determinado delito, y su tendencia y evolución. Por último, cómo, por qué y qué criterio ha guiado el proceso de elaboración de las normas penales²⁵.

Una de las más completas fue la conclusión del Coloquio de la UNESCO, a pesar de que, circunscribe su estudio al delincuente y al crimen: *"esta ciencia sintética se propone, hoy como ayer, la disminución de la criminalidad, y en el terreno teórico que debe permitir llegar a este fin práctico, propone el estudio completo del criminal y del crimen, considerado este último no como una abstracción jurídica, sino como una acción humana, como un hecho natural y*

²³ RODRIGUEZ MANZANERA, L. Criminología..., cit., pp. 3-30.

²⁴ GARCIA-PABLOS DE MOLINA, A. Criminología. Una introducción..., cit., p. 29; SERRANO MAILLO, A. Introducción a la Criminología, Dykinson, 2009, p. 33.

²⁵ SERRANO MAILLO, A. Introducción a la..., cit., pp. 33-39.

*social. El método utilizado por la Criminología es el método de observación y de experimentación, empleado en el marco de una verdadera clínica social*²⁶.

Dentro de este conjunto de definiciones, se pueden incluir, asimismo, las investigaciones relativas a las tipologías de delincuentes, estudios longitudinales y las biografías construidas conforme a criterios psicológicos, psicopatológicos y psicoanalíticos²⁷.

Tras este breve repaso de las aportaciones consideradas más relevantes y llamativas integradas en las posturas limitativas del objeto criminológico de investigación, conviene realizar una serie de matices en dos niveles: el primero en cuanto al aspecto formal y el segundo referido a su contenido.

Por una parte, cabe resaltar que las fórmulas utilizadas por todos los autores están constituidas por expresiones caracterizadas por su vaguedad e imprecisión, quizá como resultado inmediato de las notas de juventud y sobre todo de apertura de la ciencia criminológica. La mayoría de las propuestas no coinciden a la hora de delimitar concretamente sus elementos, sino que, al contrario, cada autor bajo su criterio propio de utilidad, ha creído conveniente emplear “delito”, “delincuencia”, “criminalidad” o “hechos antisociales”. Quedando reflejado de un modo claro que cada uno ha optado por operar en diferentes niveles ya sea señalar directamente los elementos en el caso por ejemplo de delito y delincuente o, en el nivel concerniente al fenómeno indicando que el estudio debe centrarse en la delincuencia o criminalidad, poniendo el énfasis en este último caso en las connotaciones derivadas de la propia noción. A su vez, no delimitan cuál es su alcance de las expresiones²⁸.

Por otra parte, cabe apreciar la influencia del positivismo criminológico cuando en la misma definición se alude a su misión de averiguar sus causas. Estas definiciones cobran fuerza una vez el concepto de delito de la Escuela Clásica deja paso al propio de los positivistas, la mera transgresión de la norma

²⁶ RODRIGUEZ MANZANERA, L. Criminología..., cit., p. 4.

²⁷ NUÑEZ PAZ, M. A. Y ALONSO PEREZ, F. Nociones de..., cit., p.31.

²⁸ TELLEZ AGUILERA, A. Criminología..., cit., p. 27.

cedió ante la consideración del delito como un hecho determinado, pues en la primera concepción era prácticamente imposible inferir un estudio causal²⁹.

En general, la atención dirigida a ambos objetos responde a la función perseguida en un principio por la Criminología, esto es, la erradicación o, posteriormente, la disminución de la delincuencia a los menores niveles posibles. De esta manera, la búsqueda de las causas se convirtió en la clave para conseguir tal finalidad de lucha contra la delincuencia, centrada en la persona del delincuente y en el delito mismo. Respecto al protagonista de la acción delictiva se ha estudiado, principalmente, sus componentes de corte físico o psíquico, su actuación correspondiente y, en definitiva, los medios para combatirlas focalizadas sobre todo en la represión y prevención integradas por las penas y por las medidas de seguridad. A pesar de sus inicios, esta corriente aún continúa teniendo partidarios que, lógicamente, se han ido adaptando a las necesidades y expectativas correspondientes a la realidad social; SERRANO MAILLO, uno de sus máximos exponentes del positivismo en España, ya se preocupa además por la extensión del fenómeno delictivo y por saber cuáles son las causas de la producción de las leyes penales.

1.2.2. Definiciones amplias

Junto con las posturas que mantienen una perspectiva restringida sobre sus objetos de estudio, se ha defendido una segunda posición caracterizada por una visión más extensa de los elementos criminológicos propios de la disciplina. En este segundo grupo, que goza de un amplio predicamento en la actualidad, sus simpatizantes a la hora de proponer sus definiciones especifican cada vez más su metodología, sus objetos de investigación y cuáles son sus funciones específicas.

Esta nueva forma de comprender la ciencia surge como respuesta a la crisis experimentada por el paradigma causal-explicativo que ha guiado durante bastante tiempo a la doctrina criminológica y, es la razón, por la que se ha

²⁹ TELLEZ AGUILERA, A. Criminología..., cit., pp. 25-26.

estimado propicio dejar de lado su consideración de ciencia causal a fin de ceder protagonismo a las misiones que tienen encomendadas en términos de prevención y de control. Tras superar la asimilación de patología con delito, aparecen nuevas teorías y con ellas cambia su pensamiento. El planteamiento estructural-funcionalista incide en una visión más benévola hacia el hecho delictivo, un fenómeno considerado normal cuya misión es equilibrar el funcionamiento social bajo unos parámetros de normalidad y funcionalidad. En este contexto, el fin criminológico de erradicar la criminalidad desaparece y cede relevancia a las finalidades de prevención y control de la delincuencia. Principalmente, el control social asume ese compromiso de mantener la delincuencia dentro de ciertos límites basados en las ideas de funcionalidad y normalidad través de unos mecanismos que afrontan el fenómeno criminal desde un enfoque omnicomprensivo y no basado, en exclusividad, en las respuestas de carácter legislativo penal³⁰.

En línea con la perspectiva amplia criminológica, GARCIA-PABLOS define la Criminología como la *"ciencia empírica e interdisciplinaria, que se ocupa del estudio del crimen, de la persona del infractor, la víctima y el control social del comportamiento delictivo, y trata de suministrar una información válida, contrastada, sobre la génesis, dinámica y variables principales del crimen – contemplado éste como problema individual y como problema social- así, como sobre los programas de prevención eficaz del mismo y técnicas de intervención positiva en el hombre delincuente"*³¹. La aportación de GARCIA-PABLOS es inseparable de la visión extensa que tiene sobre este campo, que hace referencia a una concepción del conocimiento que se opone a la búsqueda exclusivamente de las causas de los fenómenos delictivos. Se propone así fundar una ciencia en la que exista un nexo indisoluble entre las causas, variables, prevención y control de la delincuencia. Por esta razón, en función de la claridad de su explicación que delimita un estudio más global y detallado sobre todo respecto de las definiciones precedentes de carácter tradicional, supone un avance en esta ciencia. En este

³⁰ TELLEZ AGUILERA, A. Criminología..., cit., pp. 29-30.

³¹ GARCIA-PABLOS DE MOLINA, A. Criminología. Una introducción..., cit., p. 29; PEREZ ALVAREZ, F. Y DIAZ CORTES, L. M. Introducción a la Criminología..., cit., p. 20.

sentido, hace especial hincapié tanto en los cuatro elementos de investigación que coinciden con el delito, el delincuente, la víctima y el control social como en el fin que persigue el análisis de cada uno de los anteriores. Al mismo tiempo, esta ampliación es el resultado del progreso lógico de la ciencia y ello se refleja sobre todo en la inclusión del control social que la convierte en una ciencia de los fenómenos sociales, superando la visión restrictiva sustentada por los positivistas que se centraban en ofrecer explicaciones más simplistas desde la base de los parámetros individuales³².

Es importante advertir que han aparecido otras formulaciones que, a pesar de comprender todos los elementos enumerados en el párrafo anterior, sus autores han decidido integrarlos dentro de una expresión genérica. Por ejemplo, desde esta orientación podemos considerar la propuesta de entenderla como *"la ciencia que estudia el comportamiento delictivo y la reacción social frente al mismo"*, o explicado con otras palabras, el interés criminológico reside en la intersección de las dimensiones de las conductas humanas delictivas y las reacciones de rechazo que produce. El primer aspecto no se agota en los comportamientos delictivos, sino que incluye, además, por una parte, las conductas infantiles y juveniles de carácter problemático o antisocial que pueden predecir, en cierta medida, la aparición en un futuro de comportamientos delictivos y, por otra parte, los factores biopsicológicos y sociales que favorecen o conducen hacia conductas delictivas, quedando, en definitiva, comprendidos dentro de este análisis la delincuencia, el delito y el delincuente. La importancia de estos elementos no delictivos se encuentra en la necesidad de comprender la génesis de la delincuencia. Mientras que, en la segunda dimensión que abarca las víctimas de los delitos y los mecanismos de control, prima una valoración subjetiva de la aceptación o rechazo de los comportamientos anteriores manifestada mediante la ponderación de la gradación de la reacción social que tiene, a su vez, dos extremos que transitan desde la simple desaprobación o

³² TELLEZ AGUILERA, A. Criminología..., cit., pp. 28-29.

control paterno sobre ciertas conductas inapropiadas infantiles o juveniles hasta los sistemas de justicia penal³³.

Con cierta semejanza al planteamiento ofrecido por GARCIA-PABLOS en el que resalta el estudio de los cuatro objetos crimen, delincuente, víctima y control social, IBAÑEZ argumenta que estos cuatro elementos constituyen un único objeto de la ciencia criminológica que coincide con el elemento integrador del fenómeno criminal. El resultado de esta propuesta consiste en analizar mediante la aplicación de las técnicas empíricas interdisciplinarias que ofrecen conocimientos organizados y sistemáticos, con el propósito de aportar información sobre tres niveles esenciales: 1) la génesis, dinámica y variables del crimen como problema individual y social; 2) programas de prevención del crimen; 3) técnicas de intervención sobre el delincuente³⁴.

Como también en el caso de los autores mencionados, KAISER destaca tan sólo tres de los elementos de su objeto de estudio y, a este respecto, señala que comprende *"el conjunto ordenado de la ciencia experimental acerca del crimen, del infractor de las normas jurídicas, del comportamiento socialmente negativo y del control de dicho comportamiento"*³⁵. Se muestra favorable a un concepto amplio del infractor pues no sólo atiende al individuo que ha vulnerado las normas jurídicas sino también a aquella persona que muestra una conducta considerada socialmente negativa. Sin embargo, a pesar de que no incluye entre los elementos enumerados a la víctima del delito es cierto que sí que alude a ella cuando señala hacia donde cree que se dirige la ciencia criminológica. Concretamente señala que una posible línea de investigación a la que atender en

³³ Esta definición tiene su origen en el asentamiento de dos premisas básicas. La primera, es la conclusión realizada por la Criminología de que el fenómeno de la delincuencia se entiende como un problema real y existente en todas las sociedades, aunque su intensidad varía en cada una de ellas. A pesar de la nota de realidad que la caracteriza también es cierto que se trata de una construcción social elaborada a partir del rechazo que generan ciertos comportamientos o actitudes en la mayoría de la ciudadanía; en GARRIDO, V., STANGELAND, P. Y REDONDO, S. Principios de Criminología, Tirant lo Blanch, 1999, pp. 48-51.

³⁴ IBAÑEZ PEINADO, J. Métodos, técnicas e instrumentos de la investigación criminológica, Dykinson, 2013, p. 122.

³⁵ HERRERO HERRERO, C. Criminología..., cit., p. 26; MARCHIORI, H. Criminología..., cit., p. 5.

un futuro estará integrada por las cuestiones relativas a la victimización y la ayuda a la víctima³⁶.

Al definir la Criminología como *"una ciencia empírica y aplicada que, sirviéndose de la observación, la experimentación, la estadística, sin excluir la reinterpretación y reflexión sobre los datos aportados a través de estos métodos, dirige su investigación sobre el delincuente, las víctimas, los ciudadanos sometidos a juicio, los agentes del sistema penal en su interacción, los mecanismos y estrategias, así como los oportunos recursos, para conseguir tales objetivos"* que es como la define HERRERO HERRERO, se alinea claramente a favor del alcance extenso de los intereses criminológicos. Como puede observarse en la exposición científica, este autor condiciona, en primer lugar, el método con que la Criminología debe aproximarse a sus objetos, que no puede ser otro que los característicos de la ciencia empírica, esto es, la observación y el experimento. Sin embargo, no descarta reflexiona sobre los datos obtenidos mediante los métodos anteriores puesto que no debe suponer una vulneración de la objetividad del criminólogo siempre y cuando tome las precauciones metodológicas imprescindibles. La utilización del método científico es la pieza fundamental a fin de no quedarse estancado en el nivel contemplativo de la ciencia, sino que permite y aspira, especialmente, al ámbito de intervención en los conflictos que lo precisen surgidos en la sociedad. La información recabada

³⁶ Como este autor ha reconocido es prácticamente imposible averiguar cuáles serán a ciencia cierta los problemas futuros que desafiarán a la Criminología, no obstante, existen algunos síntomas que los pueden anticipar. En un nivel estricto de investigación, destaca la pluridimensionalidad de sus funciones relativas a la defensa de la sociedad, su control, prevención y tratamiento, que no se pueden limitar a un criterio fundamentalmente jurídico, sino que es necesario que se recurra a las investigaciones empíricas para completar sus resultados puesto que pueden favorecer la observación permanente e institucionalizada, la práctica crítica y la revisión de los resultados. También hay que avanzar en los siguientes puntos: 1) el perfeccionamiento y vinculación de las herramientas de medición como las estadísticas criminales con la constante observación de los aspectos relacionados con la extensión, movimiento, estructura y significación de los delitos; 2) el análisis empírico de la comisión de las diferentes figuras delictivas, entre ellas, merecen una especial atención: los delitos violentos, los referidos a drogas, criminalidad económica, contra el medio ambiente, el abuso de poder y el crimen organizado; 3) el desarrollo y formación en las teorías dirigidas a las acciones comprobables a nivel empírico y los estudios teóricos, especialmente la teoría del delito y de la pena; 4) el examen de los diversos factores que desarrollan la llamada criminalidad profesional y sus posibles consecuencias negativas; 5) la prevención del delito, pronóstico, sanción penal, tratamiento y el planteamiento de medidas alternativas a la sanción conforme a los derechos humanos u; 6) la victimización, la ayuda a la víctima, la indemnización por los daños ocasionados y bajo qué casos no obtiene esa indemnización; en KAISER, G. *"Criminología hoy"*, Cuadernos de política criminal, núm. 34, 1988, pp. 78-80.

cada vez más precisa y detallada sobre los protagonistas –delincuente y víctima-, del delito y las características que rodean al escenario favorecerán el compromiso de la Criminología a contribuir en la transformación de la realidad mediante su vertiente aplicada³⁷.

Según MARCHIORI se trata de *"una disciplina científica e interdisciplinaria que tiene por objeto el estudio y análisis del delito, de la pena, delincuente, víctima, criminalidad, reacción social institucional, cultural y económica, a los fines de la explicación, asistencia y prevención de los hechos de violencia"*³⁸. El problema que subyace en esta formulación es que la autora equipara el delito con los hechos violentos y sobre esta afirmación conviene precisar que no es tan fácilmente asumible, en la medida en que, muchos delitos no implican necesariamente acciones violentas, del mismo modo que, algunos actos violentos no siempre están tipificados como delitos³⁹. Salvo esta precisión, el resto de elementos que enumera son reconducibles a los cuatro objetos de investigación de la ciencia criminológica, delito, delincuente, víctima y control social –integrado por la pena y la reacción social institucional, cultural y económica en palabras de la autora-.

Por su parte, en el marco teórico que denomina realismo criminológico marginal, ZAFFARONI señala que *"la Criminología es el saber (conjunto de conocimientos) que nos permite explicar cómo operan los controles sociales punitivos de nuestro margen periférico, qué conductas y actitudes promueven, qué efectos provocan y cómo se los encubre en cuanto ello sea necesario o útil para proyectar alternativas a las soluciones punitivas o soluciones punitivas alternativas menos violentas que las existentes y más adecuadas al progreso*

³⁷ HERRERO HERRERO, C. Criminología..., cit., pp. 27-29.

³⁸ MARCHIORI, H. Criminología..., cit., p. 3.

³⁹ Estas apreciaciones sirven de una manera similar para los autores que proponen la agresión como objeto de estudio, pues, como se explicará con posterioridad, la ciencia criminológica estudia el delito mediante la aplicación del método científico, como consecuencia, el delito debe abarcar los máximos fenómenos que puedan ser incluidos bajo su denominación o al menos preverlos; si tan sólo se atendiera a los hechos delictivos agresivos representaría una parte mínima de los delitos. A pesar de la lógica cotidiana imperante, la mayoría de los delitos no están correlacionados con conductas agresivas ni tampoco ocurre a la inversa manera que, los delincuentes no suelen especializarse en ellos, sino que, por el contrario, suelen ser versátiles. Por último, la noción de agresividad también entraña dificultades de interpretación; en SERRANO MAILLO, A. Introducción a la..., cit., pp. 73-74.

social". Una vez postulada su idea sobre la ciencia criminológica, enumera los múltiples problemas y supuestos discutibles que necesita mejorar en su definición: 1) no tiene en cuenta a la criminología teórica, centrándose en su vertiente práctica; 2) puede existir cierta confusión entre criminología y política criminal; 3) apuesta, al menos en un principio, por una criminología crítica; 4) no le interesan las aportaciones de la conocida criminología clínica⁴⁰. A pesar de los cambios que en un primer momento sugiere sobre su propuesta, lo novedoso de su planteamiento es que su concepción gira alrededor de las relaciones de poder, esto es, sobre el sistema penal y su operatividad, de manera que, delimita la Criminología a un lugar y tiempo concretos, exactamente, en su margen y en su contexto histórico determinado. Lógicamente, este autor sigue los postulados de la criminología crítica aunque es verdad que los adapta a la realidad latinoamericana al percatarse de que ni siquiera los propios marcos teóricos articulados e importados de los llamados países centrales ofrecen una explicación cualitativa y cuantitativamente idónea y asumible a los fenómenos que les interesa combatir debido fundamentalmente a dos motivos: primero, escasez de modelos teóricos adecuados a sus necesidades; segundo, no responde a su estructura institucional penal, pues en ella, residen los principales problemas, que son, la selectividad, la reproducción de la violencia, la corrupción institucional, la

⁴⁰ Tal y como explica el autor, estos obstáculos son fácilmente salvables. Primero, carece de sentido delimitar la frontera entre la criminología y la política criminal después de haber superado el paradigma causal puesto que la primera gravita alrededor del poder y, por lo tanto, la política. Por esta razón, la política criminal abandona su contenido referido a la política estatal de lucha contra el crimen y se convierte en una ideología política que ofrece una guía al control social punitivo. Segundo, la distinción entre las modalidades teórica y aplicada tampoco tiene mucho sentido, pues tendría su origen en la existencia de una ciencia pura separada completamente de la faceta política, hecho prácticamente inasumible en el contexto latinoamericano. Tercero, la reflexión jurídica y criminológica reinante en los países latinoamericanos han sido importados de la crítica criminológica central, frente a esta situación es indispensable defender una actitud crítica permanente ideológica, es decir, una crítica del realismo criminológico marginal de acuerdo con sus propias estructuras, del mismo modo que las etapas de la ciencia criminológica y sus modelos no son completamente adecuados a la coyuntura de su realidad y, por consiguiente, no se podrían admitir como propias. Por último, apuesta por el cambio de denominación de la criminología crítica en favor de clínica de la vulnerabilidad, este reemplazo tiene su razón de ser por la necesidad de poner de relieve el planteo etiológico "socio-psico-biológico" de la llamada vulnerabilidad del individuo al sistema penal frente a la tradicional formulación etiológica de la conducta criminal a nivel individual "bio-psico-social", tras observar que, el sistema penal está preocupado en la selección de algunas personas pertenecientes a la clase marginal que se muestran vulnerables ante él, y el mismo sistema con su actuación consigue elevar su índice de vulnerabilidad a través de la creación o incremento del deterioro de su personalidad ; en ZAFFARONI, E. R. Criminología..., cit., pp. 20-30.

concentración del poder y la destrucción de las relaciones horizontales⁴¹. En definitiva, sus criterios de construcción criminológicos se basan evidentemente en los problemas actuales que atraviesa la realidad latinoamericana y, a partir de ella, propone diferentes estadios de análisis y explicación adaptados a sus necesidades.

Por último, LOPEZ REY en sus primeras incursiones en este ámbito, se refiere a ella como una ciencia etiológica en formación en la que destacan por su particular relevancia en la construcción de las bases de los tratamientos de reinserción social los estudios de comparación entre la población general y la reclusa⁴². De esta concepción relativa al estudio causal explicativo del delito, en el que se engloba el examen de la víctima, el autor y los factores que le han llevado a cometer el hecho delictivo, se separará años más tarde, alejándose de esta manera de la herencia del pensamiento positivista. Se muestra disconforme con los defensores de los objetos de esta ciencia coincidentes con el delincuente y la víctima. Su opinión no responde a la escasa entidad de ambos protagonistas para ser estudiados por esta disciplina, sino por entender que, el elemento de investigación de la ciencia criminológica es la criminalidad. Este fenómeno es el que abarca el análisis de las personas involucradas en el hecho delictivo, víctima y delincuente, que coexisten junto con otros factores de carácter suprapersonal que, incluso, pueden tener más importancia que aquéllos; sobre estos factores configura la explicación, comprensión y prevención de este fenómeno sociopolítico. De este planteamiento peculiar, define la Criminología en los términos siguientes: la *"disciplina sociopolítica cuya finalidad esencial es la formulación de una política criminal que permita, lo más efectivamente posible,*

⁴¹ ZAFFARONI, E. R. Criminología..., cit., pp. 1-30; TELLEZ AGUILERA, A. Criminología..., cit., p. 574.

⁴² Este criminólogo español aborda el problema de la criminalidad desde el enfoque de la criminología organizacional, cuyo fin es el estudio de la criminalidad dedicado especialmente a conocer el índice alcanzado por este fenómeno y el coste económico que provoca el delito, aunque también muestra interés por cuestiones relevantes, tales como, la criminalización y descriminalización de los comportamientos, la criminalidad organizada y la influencia del agravamiento del comportamiento delictivo en los procesos de victimización. El cumplimiento de ambas finalidades principales hace necesaria la cooperación institucional internacional y regional. Esta cooperación se ha visto materializada en ciertos programas conjuntos de varios países relativos a determinadas figuras delictivas de afección internacional, si bien, la creación de las Naciones Unidas recuperó esta iniciativa para luchar contra la delincuencia; en MARCHIORI, H. Criminología..., cit., pp. 91-95; TELLEZ AGUILERA, A. Criminología..., cit., p. 30.

*la prevención y control de la criminalidad conforme a las exigencias de libertad, dignidad, igualdad y seguridad individual y colectivamente entendidas como elementos esenciales del desarrollo nacional e internacional*⁴³.

Se ha asumido que la proliferación del paradigma del control y prevención en el ámbito científico ha ido intrínsecamente ligado al movimiento a favor de la ampliación de los objetos criminológicos de investigación, aunque es cierto que, la asunción de este paradigma no resulta incompatible ni contradictorio con la aceptación y búsqueda del modelo causal de la Criminología. Simplemente es un paso hacia el progreso de la disciplina, en cuanto se deja a un lado la exclusiva búsqueda de las causas para centrarse, en cambio, también en la búsqueda de un diseño de un plan global de prevención mediante el examen de los factores y procesos que ha provocado la delincuencia⁴⁴, el tratamiento del delincuente y la intervención en la víctima.

En conclusión, no sólo se ha recurrido a las propuestas de definiciones ofrecidas por cada uno de los autores mencionados en sentido estricto, sino que se ha tratado de introducirlas en el contexto específico al que pertenecen. Situar y comprender la significación que otorgan a la ciencia criminológica es esencial para entender cuál es la razón por la que cada autor ha optado por una formulación, a la vez que, nos permite averiguar las bases sobre las que ha asentado su conocimiento. En este intento de aproximación a las diferentes visiones además de acudir a su conceptualización y a las circunstancias que la

⁴³ *"Para quien escribe, el delito, el delincuente, la criminalidad, el sistema penal y la Criminología deben hoy en día verse desde el ángulo socio-político, y no desde el meramente causal, como se hace aún por la inmensa mayoría de los estudiosos (...). Entre otras muchas cosas dicha actitud significa que, sin echar por la borda al delincuente, éste no puede seguir siendo el eje alrededor del cual gire la Criminología de nuestro tiempo. El delito es una entidad conceptual y no natural, y la criminalidad, un fenómeno sociopolítico y no meramente de seguridad u orden. Ello no significa volver al pasado o elaborar una Criminología dura, pero sí una Criminología en consonancia con las exigencias del futuro inmediato y dentro de una estructura sociopolítica y económica en que la libertad, igualdad y dignidad humana de individuos, grupos, pueblos y naciones sean los elementos básicos (...). Criminología, sistema penal y justicia criminal se hallan aún enraizados en el siglo XIX y el uso de técnicas, programas de muy diverso orden y reformas recuerdan más operaciones de rejuvenecimiento que la elaboración de algo nuevo. Ahora bien: los cosméticos prolongan las apariencias pero no detienen la realidad, y ésta muestra que la Criminología, el sistema penal y la justicia criminal viven más de pretensiones y ofrecimientos que de aportaciones efectivas (...). En suma, lo que ofrezco es una Criminología analítica que pone en entredicho la Criminología hoy predominante y la conveniencia o no de reemplazarla por una política criminal"*; en TELLEZ AGUILERA, A. Criminología..., cit., pp. 253-259.

⁴⁴ TELLEZ AGUILERA, A. Criminología..., cit., pp. 30-31.

han producido, ha sido conveniente hacer un esfuerzo en entender la explicación genérica propuesta, pues si sólo atendemos rigurosamente a sus definiciones es imposible crearse un reflejo fiel del mensaje que nos quieren transmitir. Algunas de ellas, como se ha podido comprobar, en un intento de obtener la mayor simplicidad y sintetismo posible, no comprenden ciertos elementos que por su relevancia indiscutible a día de hoy podría causarnos cierto desconcierto, si bien, a pesar de su ausencia sus autores remarcaban su importancia en otros lugares de sus obras.

En la explicación de las diversas aportaciones provenientes de la tradición europea, especialmente la española, y las procedentes de Latinoamérica, no se aprecian grandes diferencias en cuanto a su construcción a pesar de que cada contexto ha influido en su articulación. Es cierto que, las definiciones provenientes de América del Sur giran alrededor de las relaciones de poder y del factor violento para construir la ciencia criminológica, pero llegan prácticamente a las mismas conclusiones que la doctrina europea en cuanto a sus finalidades, medios y elementos de investigación, sin que en ellas se haga mención a los mismos componentes vertebradores. No cabe duda de que, todas las formulaciones presentan una serie de notas comunes. De alguna manera, la capacidad de adaptación que presenta la ciencia criminológica a los fenómenos, contextos y variables específicas a los que debe hacer frente son el resultado de sus notas definitorias, juventud y apertura y, este hecho es el que explicaría las diferentes perspectivas de la doctrina y la consecuente apuesta en función de sus intereses y problemas a solventar.

En este sentido, con toda claridad MARCHIORI afirma que la mayoría de las definiciones adoptadas sostienen que la Criminología: a) es una ciencia que estudia la problemática subyacente al delito y a la criminalidad; b) tiene unos objetivos claros y delimitados para el estudio, investigación, asistencia y prevención del hecho delictivo, delincuente y víctima; c) es una disciplina científica e interdisciplinar, y para finalizar; d) está conformada por un lado, por una amplia variedad de teorías e interpretaciones acerca del fenómeno de la

criminalidad y, por otro lado, por una serie de mecanismos alternativos como las medidas asistenciales y preventivas⁴⁵.

1.3. Elementos de las definiciones

No es una tarea sencilla disponer una definición general que sea capaz de comprender todos los elementos básicos previamente señalados, a pesar de que, sería deseable hallar la fórmula adecuada a fin de lograr la coordinación necesaria de los citados criterios. Sin embargo, después de considerar las partes fundamentales de las concepciones amplias y estrictas, se puede afirmar que la mayoría de las definiciones propuestas llevan implícitas, con una mayor o menor relevancia dependiendo del autor, las siguientes características:

- En primer lugar, existe consenso en la doctrina criminológica acerca del cumplimiento de los requisitos para acreditar el rango de ciencia de la disciplina debido principalmente a que, las investigaciones realizadas en este campo, ofrecen conclusiones fundamentadas en evidencias obtenidas de acuerdo con las exigencias del método científico.
- Generalmente, la expresión método científico se refiere al seguimiento de pautas ordenadas a fin de analizar y resolver los problemas planteados. No obstante, en determinadas ocasiones con estos términos, también se puede aludir al método de investigación establecido como proceso, cuya finalidad consiste en facilitar la obtención del conocimiento o información sobre el elemento de investigación en cuestión, pues a través de él se pueden formular correctamente las hipótesis fiables y válidas atendiendo al objetivo perseguido⁴⁶.
- Es una ciencia empírica que permite contrastar los hechos con las proposiciones formuladas de acuerdo con la finalidad del estudio. A tal fin, es capaz de combinar perfectamente los conocimientos propios

⁴⁵ MARCHIORI, H. Criminología..., cit., p. 5.

⁴⁶ TELLEZ AGUILERA, A. Criminología..., cit., p. 31.

pertenecientes a la ciencia empírica con los conocimientos provenientes del ámbito racional.

- De esta manera, propone explicaciones completas, coherentes, sin contradicciones aparentes, todas ellas ordenadas con una lógica sistemática conforme al procedimiento previamente establecido.
- Concretamente, los objetos de estudio atribuidos a esta rama del saber están conformados por el delito, el delincuente, el control social y la víctima.

Veamos a continuación, con el detalle que requiere, en qué consisten todas estas propiedades que condicionarán, de una forma u otra, nuestra toma de postura acerca de qué es la Criminología, sus características elementales, cuáles son sus objetos de investigación, su método de investigación y, consecuentemente, su finalidad.

1.3.1. Ciencia

Como hemos mencionado en el apartado anterior, prácticamente la totalidad de la doctrina criminológica se muestra unánime a la hora de considerar ciencia a esta disciplina, de modo que, es indispensable abordar el significado genérico de ciencia y correlativamente concretar las premisas que la Criminología cumple para ostentar el rango de una verdadera ciencia. Así, con plena conciencia de la complejidad del asunto, vamos a iniciar el recorrido por el concepto abstracto de ciencia con el fin de averiguar si puede ser acreedora de esta condición en un sentido amplio pues, al mismo tiempo, acudiremos a la literatura criminológica que específicamente ha prestado atención a esta cuestión para valorar las reflexiones y los argumentos esgrimidos a favor de su inclusión bajo este estatus.

En un sentido genérico, el término ciencia equivale al conjunto de conocimientos organizados tras la aplicación de determinados métodos de investigación. Esta conceptualización coincide con el significado que aparece

recogido en el Diccionario de la Real Academia puesto que lo define como el *"cuerpo de doctrina metódicamente formado y ordenado que constituye una rama particular del saber humano"* o, *"el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales"*⁴⁷.

A partir de la precedente formulación genérica, han surgido multitud de propuestas relativas al alcance de la expresión, si bien, BUNGE se ha convertido en uno de los autores más destacados en la búsqueda y desarrollo de su significado. Este autor, en una primera aproximación, precisa que la ciencia es un conocimiento de carácter racional, sistemático, exacto, verificable y falible, premisas asumidas completamente por la mayoría de la doctrina. No obstante, su labor no se ha limitado simplemente a apuntar sus características genéricas, sino que además distingue dos tipos de ciencia, la formal y la fáctica⁴⁸. Atendiendo las distinciones entre ambas, la Criminología tiene cabida en la segunda modalidad de acuerdo al método, tipo de enunciados y referentes que emplea durante el progreso y avance de su ámbito.

Como sigue explicando este autor, las principales características de las ciencias fácticas son las siguientes: 1) el conocimiento científico es fáctico; 2) el conocimiento científico va más allá de los hechos; 3) la ciencia es analítica; 4) la investigación científica tiene cierto grado de especialización; 5) las notas básicas del conocimiento científico son la claridad y precisión; 6) el conocimiento científico se puede comunicar; 7) el conocimiento científico puede ser sometido a un proceso de verificación; 8) la investigación científica es metódica; 9) el

⁴⁷ IBAÑEZ PEINADO, J. Métodos, técnicas e instrumentos..., cit., p. 27.

⁴⁸ Si bien, diferencia dos tipos de ciencias: la ciencia formal y la fáctica en cuanto a sus métodos empleados, tipo de enunciados y referentes. Los enunciados típicos de la ciencia formal o ideal consisten en relaciones entre signos, para proceder a su verificación recurren a la lógica para demostrar o probar sus teoremas. Su demostración está basada en la deducción, es completa y final, es decir, pueden llevar a un estado de perfección o estancamiento. En cambio, en la ciencia fáctica o material, los enunciados se refieren a los procesos o sucesos, para confirmarlos se utiliza la observación y/o el experimento. Emplean símbolos interpretados. La utilización de la racionalidad es necesaria pero no suficiente, así, los enunciados deben ser verificados por la experiencia, de un modo directo (supuesto de las consecuencias particulares de las hipótesis) o indirecto (en el caso de hipótesis generales). Si bien, su verificación es incompleta y temporaria ya que la experiencia no garantiza que la hipótesis sea la única verdadera y aunque sea racional son inferencias deductivas y probables; en BUNGE, M. La ciencia. Su método y filosofía, Laetoli, 2013, pp. 6-10.

conocimiento científico es sistemático; 10) el conocimiento científico es general; 11) el conocimiento científico es legal; 12) la ciencia trata de ofrecer explicaciones; 13) el conocimiento científico es predictivo; 14) la ciencia es abierta; 15) y por último, la ciencia es útil⁴⁹.

Una parte considerable de la población incluso de la comunidad científica, considera que las ciencias fácticas y especialmente aquellas vinculadas a elementos humanos como es el caso de la Criminología no tienen la capacidad suficiente para ser consideradas científicas. Esta postura está construida sobre la base errónea de asimilar esa condición con ciertas ramas del saber tales como las matemáticas o la física. Sin embargo, esta denominación posee una significación mucho más genérica que se refiere a la adquisición de conocimiento mediante la aplicación de métodos y el cumplimiento de ciertas normas y, por lo tanto, las disciplinas sociales también pueden acceder al rango de científicas⁵⁰.

En la misma línea que el inconveniente del párrafo previo, el sector doctrinal contrario a tildarlas de científicas incide y añade dos problemas subyacentes a la científicidad que presentan las ciencias sociales y que deben resolver. En primer lugar, plantea dudas en cuanto a su proceso de verificación

⁴⁹ En primer lugar, la ciencia trata de describir los hechos, la información proveniente de la recolección de datos debe incorporarse a teorías, de forma que, los enunciados que se confirmen puedan considerarse datos empíricos. Si bien, el investigador no se debe quedar estancado en el nivel observacional, sino que debe avanzar a un nivel teórico, en él, los explica a través de hipótesis (enunciados de leyes) o sistemas hipótesis (teorías) y también pueden inventar nuevos conceptos en los casos en que se infiera su existencia a partir de hechos experimentales sin que corresponda a un precepto. El problema abordado lo analiza descomponiendo sus elementos a fin de hallar su interconexión y posteriormente reconstruirlo desde sus partes interconectadas. Mediante la investigación científica especializada obtiene resultados claros y precisos en la medida en que formula el problema y parte de nociones claramente, define sus conceptos y mide y registra sus fenómenos para posteriormente comunicar estos datos. El conocimiento debe ser sometido a verificación ya sea sustentada en la observación o en el experimento, tomando como punto de inicio siempre que conocimiento previo y las conjeturas mejor fundadas, esto es, su investigación es un proceso metódico, los investigadores saben qué buscan y cómo llegar a ello. El resultado de esta investigación será un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí ubicada bajo pautas generales, esto quiere decir que los hechos singulares quedarán insertados en las pautas generales denominadas comúnmente "leyes naturales" o "leyes sociales". La ciencia, en definitiva, tendrá como finalidades explicar los hechos de acuerdo con las leyes y ellas conforme a principios aún más generales; y, predecir qué puede pasar en el futuro teniendo en cuenta cómo puede haber ocurrido en el pasado. Estos fines se perseguirán siempre teniendo en mente que la ciencia es abierta y útil, es decir, sin conocimiento es ilimitado y siempre está sujeto a refutación en su búsqueda de conseguir la verdad; BUNGE, M. La ciencia. Su método y..., cit., pp. 6-23.

⁵⁰ SANZ APARICIO, M. T., MENENDEZ BALAÑA, F. J., RIVERO EXPOSITO, M. P. Y CONDE PASTOR, M. Psicología de la Motivación. Teoría y Práctica, Sanz y Torres, 2013, p. 9.

debido a que se suele señalar que *"lo social es extremadamente difícil de medir, cuantificar y verificar"*. Además, la investigación social debe salvar un segundo escollo relativo a su objeto de estudio pues, generalmente, el investigador suele estar integrado o muy próximo a la realidad social que analiza. Respecto al primer inconveniente, ha quedado acreditado en multitud de investigaciones que sí es posible medir, cuantificar y verificar variables aun cuando respondan a factores sociales. Mientras que el segundo obstáculo es fácilmente salvable si se atiende a las tres reglas básicas que debe cumplir el investigador y que se explicarán más adelante⁵¹.

Lógicamente, cualquier ciencia –incluidas las ciencias sociales– tienen diferentes itinerarios o vías a través de los cuales alcanza su saber, dicho de otro modo, el acceso al conocimiento tan sólo se puede alcanzar sirviéndose del método que, en un primer acercamiento, es la manera en la que se recorre ese camino⁵².

El conocimiento científico se adquiere mediante la aplicación del denominado método científico, el cual diferencia el conocimiento cotidiano del científico⁵³. Se trata de un saber crítico entendido como fundamentado, racional, metódico, verificable, provisional, sistemático, objetivo, ordenado, comunicable mediante la utilización del lenguaje de carácter científico y que tiene entre sus funciones explicar y predecir hechos a través de un conjunto de leyes. La sistematización del conocimiento se plasma mediante el desarrollo de teorías.

Siguiendo la opinión sostenida por SERRANO MAILLO, es lógico que la Criminología acuda, siempre del modo pertinente y con la cautela necesaria, al

⁵¹ ELBERT, C. A. Manual básico de Criminología, Eudeba, Universidad de Buenos Aires, 2012, p. 24.

⁵² ELBERT, C. A. Manual básico de..., cit., p. 30.

⁵³ En síntesis, la ciencia criminológica aborda la problemática criminal desde una metodología científica. Sin embargo, asuntos relativos al delito y sus protagonistas, la prevención, tratamiento e intervención han ocupado también a otras ramas del saber. Además, es una temática que suscita gran interés al público en general que suele aportar su conocimiento cotidiano a través de sus opiniones. Cabe preguntarse, por tanto, en qué se diferencia el conocimiento científico del que se puede extraer del sentido común mediante la propia experiencia. La respuesta se encuentra en que se basa en el examen empírico sistematizado de unas hipótesis previas acordes con una metodología. Así, persigue garantizar y asegurar que el conocimiento obtenido sea válido, fiable y, a su vez, pueda ser replicado.

método científico para estudiar el entorno criminal puesto que, además de ser una necesidad, está plenamente justificado⁵⁴.

El paso imprescindible para cualquier ciencia es recurrir al método científico debido a que su empleo les confiere el carácter científico. BUNGE entiende por este método los procedimientos a través de los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen en marcha los mecanismos para probar las hipótesis científicas⁵⁵. De una manera más simple, IBAÑEZ lo define como *"el procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. Se dice Científico cuando tiene que ver con las exigencias de precisión y objetividad propias de la metodología de las ciencias"*. Planteado de esta manera, tiene cinco objetivos básicos: 1) conocer la realidad; 2) describir el objeto de estudio bajo unos parámetros objetivos; 3) explicar la dinámica del fenómeno en cuestión, esto es, conocer sus causas y las condiciones anteriores y posteriores de su aparición; 4) posibilidad de predicción tomando como referencia el presupuesto de orden; 5) controlar mediante la manipulación de las variables siempre que se cumpla el requisito de saber cuáles son exactamente los antecedentes del fenómeno⁵⁶.

Entre las notas que caracterizan al método científico destacan las siguientes: 1) su base es empírica, esto significa que los enunciados están sometidos a un proceso de contraste continuo con los hechos inherentes a la naturaleza. No se puede afirmar la existencia de verdades absolutas, sino que siempre tienen un carácter parcial y provisional, en consecuencia, conforme se van revisando las hipótesis se puede proceder tanto a completarlas como a corregirlas. A lo sumo, existen modelos explicativos que pueden ser útiles en un periodo de tiempo determinado en el que están vigentes, pues en el momento en que el modelo carezca de virtualidad se producirá lo que se denomina cambio de paradigma. 2) el método puede dividirse en dos formas: la cualitativa y la cuantitativa. 3) la investigación debe ser sistemática y controlada para lograr

⁵⁴ SERRANO MAILLO, A. Introducción a la..., cit., pp. 50-51.

⁵⁵ Matiza la diferencia con la metodología que queda circunscrita a *"la normativa en la medida en que muestra cuáles son las reglas de procedimiento que pueden aumentar la probabilidad de que el trabajo sea fecundo"*; en BUNGE, M. La ciencia. Su método y..., cit., pp. 33-34.

⁵⁶ IBAÑEZ PEINADO, J. Métodos, técnicas e instrumentos..., cit., p. 92-94.

cierto grado de fiabilidad y validez. 4) la investigación debe ser fiable y replicable. Todo estudio en el que se incluye sus métodos, condiciones y resultados debe ser consistente. 5) la nota de validez se refiere a que la interpretación realizada sobre los datos (validez interna) como de la generalización de los resultados (validación externa) debe ser exacta. 6) por último debe ser flexible en la medida en que el método ha de adaptarse al objeto particular de estudio⁵⁷.

Durante el transcurso de una investigación científica, el investigador debe mantener el compromiso de atender y respetar, por los menos, tres reglas básicas: en primer lugar, a lo largo de la evaluación debe garantizar la objetividad, esto es, debe asegurarse de dejar de lado sus preferencias y motivaciones personales. En segundo lugar, debe ser lo más preciso posible, esta característica alude a la máxima precisión y cuidado que deben regir sobre todo en el proceso de recogida de información. Y, por último, es necesario que desarrolle una actitud de aceptación de resultados válidos tan sólo en los casos en que se hayan verificado y, en su caso, se hayan resuelto todas las inconsistencias. Esto es lo que se conoce como escepticismo⁵⁸. El cumplimiento de estas tres premisas conlleva el beneficio de la finalidad primordial de la ciencia que consiste en conocer y comprender mejor los fenómenos que surgen en la realidad para ofrecer su explicación, predicción y control.

Una de las cuestiones más debatidas es la relativa a su consideración de ciencia. Este inconveniente de naturaleza formal que presenta es que se le considera *"un campo del saber que no dispone de las características de status de una disciplina [...] lo que va unido al hecho de que no existe el status de un criminólogo. En el mejor de los casos se desprende del status de jurista, psicólogo, sociólogo o médico, esto es, los roles criminológicos son –a menudo además por un cierto plazo- de otros roles"*⁵⁹.

⁵⁷ FONTES DE GRACIA, S., GARCIA-GALLEGO, C., QUINTANILLA COBIAN, L., RODRIGUEZ FERNANDEZ, R., RUBIO DE LEMUS, P. Y SARRIA SANCHEZ, E. Fundamentos de investigación en Psicología, Universidad Nacional de Educación a Distancia, pp. 30-31; ELBERT, C. A. Manual básico de..., cit., p. 28.

⁵⁸ SANZ APARICIO, M. T., MENENDEZ BALAÑA, F. J., RIVERO EXPOSITO, M. P. Y CONDE PASTOR, M. Psicología de la Motivación..., cit., p. 10.

⁵⁹ BERGALLI, R., BUSTOS RAMÍREZ, J. Y MIRALLES, T. El pensamiento criminológico..., cit., p. 23.

En el ámbito de la doctrina criminológica, tal y como señala GARCIA-PABLOS, la Criminología alcanza el rango de ciencia⁶⁰ por la concurrencia de tres presupuestos esenciales, esto es, una metodología específica, un objeto de estudio propio y un cuerpo de doctrina específica acerca del fenómeno criminal. Esta disciplina aplica el método empírico basado en la observación y el análisis de la realidad, esta afirmación quiere decir que extrae una serie de datos, los interpreta y transforma en información válida, fiable y contrastada acerca del fenómeno criminal⁶¹.

En términos más generales, HERRERO HERRERO enumera y explica los tres elementos constitutivos de cualquier ciencia. El primero de ellos está conformado por las dos condiciones que debe cumplir simultáneamente el objeto de conocimiento, por una parte, debe tratarse de un fenómeno positivo, general y específico y, por otra parte, debe tener la capacidad de ser sometido a análisis. Segundo, debe poseer una serie de conceptos operacionales propios sin perjuicio de que pertenezcan a una naturaleza descriptiva o explicativa. Finalmente, es indispensable que aplique el método pertinente para alcanzar conocimiento que, en todo caso, se hallará regido por la sistematización y el control. Además de señalar los tres requisitos, el autor circunscribe la Criminología en las ciencias aplicadas puesto que su último fin es el análisis de las leyes explicativas que versan sobre los fenómenos naturales y, al mismo tiempo, presta atención a las

⁶⁰ TELLEZ, siguiendo a ELBERT, afirma que no es ciencia: 1) el denominado saber común o cotidiano, basado en experiencias personales e inferencias lógicas; 2) el llamado "saber metafísico"; 3) la simple descripción u observación de fenómenos u objetos; 4) la afirmación libre de cualquier proposición; 5) la caracterización de neutra, objetiva completamente, excluyente de aquellos considerados divergentes; 6) infalible e inmutable; 7) sinónima de eficacia y certeza; 8) equiparable a la verdad objetiva; 9) perteneciente a un nivel inferior respecto a otras formas de conocimiento ni exclusiva de seres superdotados. Por su parte, señala que sí es ciencia: 1) la capacidad de probar, o dicho de otro modo, de justificar sus proposiciones, siempre desde la razón, por ello, se convierte en un saber crítico razonable; 2) comprende e interpreta los objetos o fenómenos mediante enunciados, leyes o teorías; 3) la búsqueda de conocimientos a través de procedimientos sistemáticos favorecedores del acceso y participación; 4) un saber que tiene en cuenta la falibilidad y provisionalidad de sus hallazgos; 5) controla sus premisas en términos de exactitud y, en su caso, admite su insuficiencia o error; 6) una serie de respuestas caracterizadas por su generalidad y menor imperfección en torno a algún elemento de su campo; 7) un instrumento destinado a aplicarlo a la solución de algún problema que detecte, relativamente útil y eficaz; 8) acepta la confluencia de conocimientos tanto opuestos y contradictorios como el consenso de la comunidad científica alcanzado mediante la intersubjetividad, a quienes también influye; en TELLEZ AGUILERA, A. Criminología..., cit., pp. 23-24.

⁶¹ GARCIA-PABLOS DE MOLINA, A. Criminología. Una introducción..., cit., pp. 30-31; HERRERO HERRERO, C. Criminología..., cit., p. 36.

relaciones existentes entre sus variables y la resolución de cuestiones problemáticas de la vida real como la delincuencia tanto en su vertiente individual como social⁶².

Asimismo, junto con los dos requisitos relativos al concreto objeto de estudio y el método específico que, como se ha visto en las explicaciones de los autores anteriores, son obligatorias para acceder al rango científico, TELLEZ añade un tercer elemento consistente en la evaluación, de forma que, sólo se atribuye el carácter científico a las aportaciones nuevas sobre el comportamiento delictivo, victimal o del control social, que hayan sido previamente verificadas⁶³.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta ahora, la Criminología se convierte en ciencia en el momento en que introduce la aplicación del método científico en los estudios del delito y del comportamiento humano y delictivo⁶⁴. Con todo ello, aspira a lograr una descripción de la realidad con la observación de los hechos a través de una serie de técnicas que supere el sentido común. Así, tras analizar las características generales de la ciencia y las necesidades específicas de la Criminología, se puede afirmar que el criminólogo, basándose en los criterios de objetividad, exactitud y escepticismo, examinará sus objetos de estudio típicos, esto es, el delito, el delincuente, la víctima o el control social mediante la aplicación del método científico a fin de formar un cuerpo de conocimiento sistemático, válido, verificables y que pueda ser replicado.

A pesar de que existe unanimidad en la doctrina al considerarla empírica, no son pocos los autores que también han caracterizado esta ciencia como interdisciplinar, aplicada e, incluso, experimental, por lo que, el objetivo principal de los apartados que se presentan a continuación consiste en conocer las propiedades citadas, analizarlas y, en consecuencia, decidir si se pueden ubicar bajo el marco metodológico de la Criminología.

⁶² HERRERO HERRERO, C. Criminología..., cit., pp. 36-37.

⁶³ TELLEZ AGUILERA, A. Criminología..., cit., p. 25.

⁶⁴ SERRANO MAILLO, A. Introducción a la..., cit., pp. 39-41.

1.3.2. Ciencia empírica

La realidad social se presenta como un escenario complejo y desordenado, donde los hechos y fenómenos que suceden en él se convierten en su objeto de estudio y a la vez son el punto de partida de la ciencia criminológica. El principal reto del criminólogo consiste en conceptualizar e investigar la información y los datos provenientes del mundo real mediante la investigación científica centrada exclusivamente en aquellos fenómenos observables y las relaciones formales que se constituyen entre ellos, con el objetivo último de formar conocimiento⁶⁵.

El científico parte de los hechos que se observan en la realidad, recopila los datos y posteriormente procede a su examen. Esto quiere decir que su función no se limita a la mera acumulación de información, sino que su proceso continúa con las sucesivas etapas de transformación y valoración de los datos recabados para poder enmarcar el estudio dentro de los parámetros de un determinado marco teórico que le guíe durante el itinerario conducente a la interpretación de los resultados obtenidos⁶⁶.

La consideración de empírica de cualquier investigación queda supeditada al cumplimiento de tres exigencias, de tal forma que, el estudio mantenga las condiciones de validez, fiabilidad y relevancia a lo largo de todas las etapas de su desarrollo. Generalmente, es aconsejable distinguir, por un lado, la determinación del marco o modelo de investigación y, por otro, las propias fases de la misma a fin de facilitar el avance del proceso de investigación. De una manera sucinta, el investigador en un primer momento detallará un total de ocho aspectos relativos al tema central y su contexto; el planteamiento claro de las cuestiones e hipótesis siempre que sean susceptibles de estudio; las variables definidas con rigor –incluye las variables, sus relaciones y naturaleza–; la naturaleza de la investigación, esto es, sus objetivos y método; la representatividad de la muestra; la validez y legitimidad de la aportación experimental; objetividad, control y corrección; validez de los mecanismos

⁶⁵ ELBERT, C. A. Manual básico de..., cit., pp. 17-27; MATTHEWS, R. Criminología realista, ediciones Didot, 2015, pp. 79-80.

⁶⁶ GARCIA-PABLOS DE MOLINA, A. Tratado de Criminología, Tirant lo Blanch, 1999, pp. 56-58.

seleccionados y del análisis estadístico; y, por último, la interpretación de los resultados obtenidos. Tras el primer acercamiento a la problemática mediante la sistematización de los elementos básicos, proseguirá el camino hacia la finalización del estudio con las cinco fases consecutivas propiamente dichas: a) la determinación del problema objeto de la investigación; b) el marco de referencia; c) la delimitación del modelo operativo; d) la posterior recogida de datos y; d), finalmente, el análisis e interpretación de los datos y consecuente formulación de las hipótesis. En definitiva, la labor del investigador se traduce en la observación del objeto de estudio desde un específico punto de vista, o, dicho de otro modo, se procede al examen de aquél a partir de las hipótesis provisionales planteadas, se extraen las conclusiones tras su análisis y evaluación, y se vuelven a revisar las hipótesis iniciales⁶⁷.

Como se ha manifestado con anterioridad, la Criminología pertenece a las denominadas ciencias fácticas, siendo esta adscripción un condicionamiento relevante pues su consecuencia inmediata es la obligación que genera en la ciencia de proceder a verificar su conocimiento mediante la experiencia. Concretamente, el investigador, cuyo campo de estudio sea un objeto incluido en las ciencias materiales, utiliza el test empírico para confirmar o no las hipótesis fácticas que ha planteado. La comprobación de los datos y las hipótesis se realiza mediante la experiencia que puede, a su vez, distinguirse por el empleo de la observación y/o del experimento⁶⁸.

⁶⁷ GARCIA-PABLOS DE MOLINA, A. Tratado de..., cit., pp. 234-236.

⁶⁸ SEELIG explica el empirismo del modo siguiente: *"Como quiera que los fenómenos reales sólo pueden ser conocidos por medio de juicios de percepción (experiencia), la Criminología pertenece a las ciencias empíricas que se sirven del método inductivo (por oposición a las ciencias apriorísticas, como la Matemática, que extraen conclusiones deductivamente). Por ello no se puede cultivar en un gabinete; nunca se podría descubrir por medio de operaciones puramente mentales cómo son realmente los delitos y cómo reacciona la sociedad ante los delitos cometidos, sino que el investigador tiene que interrogar a la vida misma ateniéndose con todo rigor a los hechos de la experiencia. De ahí que haya que rechazar las tendencias que propugnan dentro de la Criminología métodos especulativos. Los caminos por los que las ciencias de la experiencia adquieren estos juicios de percepción son, como es sabido, de dos clases: la observación, por la que se capta con arreglo a un plan científico un proceso natural del suceder, y el experimento en el cual los fenómenos a observar se producen creando artificialmente las condiciones necesarias para ello. De estos dos caminos importa principalmente a la Criminología el de la observación, a pesar de lo cual el experimento es aplicable a algunas ramas de la Criminología y necesario para lograr nuevos conocimientos; en HERRERO HERRERO, C. Criminología..., cit., p. 27; BUNGE, M. La ciencia. Su método y..., cit., pp. 15-16.*

En este punto cabe recordar que el proceso de investigación es una secuencia de pasos ordenados y adoptados por la comunidad científica que tienen coherencia entre ellos, siendo su resultado último la obtención del conocimiento científico, de manera que, la observación debe asumir estas premisas.

La finalidad de la observación consiste en estudiar el comportamiento espontáneo, por ello, el investigador, no restringe las respuestas emitidas por los sujetos participantes ni tan siquiera interviene activamente en el contexto sometido a análisis para facilitar el análisis e interacción de las conductas manifestadas con naturalidad. Esta ausencia de intervención es la característica o nota que la diferencia principalmente del experimento que, por su parte, con el objetivo de determinar las relaciones causa y efecto entre las variables examinadas que rigen un fenómeno, el investigador realiza una intervención (o tratamiento) directa en la manipulación y control de las mismas. Ahora bien, para que la observación alcance el rango científico el procedimiento sistemático debe cumplir tres premisas: la primera, las hipótesis deben comprobarse; la segunda, debe darse la opción de replicabilidad de sus resultados al ser producto de un proceso que reúne previamente las características asociadas a la objetividad, validez y fiabilidad; y, por último, debe ser capaz de aportar unos resultados válidos en aras del avance de su campo de conocimiento⁶⁹.

Respecto al modo de proceder en la observación podemos explicar el supuesto más sencillo ante el que nos podemos encontrar. A modo ilustrativo, en un hipotético caso en que básicamente se pretende describir la aparición o desarrollo de unos hechos, el investigador debería llevar a cabo una serie de observaciones sistemáticas en condiciones tan nítidas de manera que los demás integrantes de la comunidad científica interesados en la misma problemática no tengan problemas para comprobarlas sin la necesidad de recurrir a otras herramientas adicionales. Así, los resultados obtenidos quedarían explicados a través de la experiencia científica. Sin embargo, en un contexto cotidiano, no siempre resultaría una tarea fácil la obtención de resultados que alcancen la

⁶⁹ FONTES DE GRACIA, S., GARCIA-GALLEGO, C., QUINTANILLA COBIAN, L, RODRIGUEZ FERNANDEZ, R., RUBIO DE LEMUS, P Y SARRIA SANCHEZ, E. Fundamentos de investigación en..., cit., pp. 315-316.

validez, fiabilidad y contrastación requerida, esto es, la entidad suficiente para constituir conocimiento científico mediante la utilización exclusiva de la observación, y ello, por varios motivos.

Es obvio que con una simple observación realizada individualmente por un conjunto de investigadores no tiene por qué conducir sin más a la misma conclusión, debido a que no sólo son importantes los objetos de estudio explorados, sino que los procesos de obtención y registro son igualmente relevantes. La observación de carácter sistemático y riguroso proporcionará un sentido de orden al conocimiento que permitirá diferenciar aquél que sea válido del que no ostente tal condición y también logrará objetivar el conocimiento humano⁷⁰. Además, si recordamos lo expuesto acerca del método científico se refiere al plan que se sigue en un proceso de investigación, la decisión clave en su correcto desarrollo es decidir la estrategia general que guiará sus fases a efectos de asegurar y garantizar la coherencia interna en todas ellas. Este hecho implica que en ciertas etapas puede surgir la necesidad de recurrir a otros métodos o técnicas que ayuden en la aplicación de aquéllos. Específicamente las herramientas en particular que se utilizan dentro de los métodos de investigación se le conoce como técnicas de investigación⁷¹.

Las técnicas de investigación, siguiendo a GARCIA-PABLOS, pueden dividirse en dos grupos, las de naturaleza cuantitativa y las de índole cualitativa. Las primeras buscan la explicación de la etiología, génesis o desarrollo del fenómeno criminal, entre sus herramientas destaca por excelencia la estadística. Mientras que, las segundas tratan de delimitar las claves del fenómeno delictivo a través de la entrevista u observación participante⁷².

En cuanto a la clasificación de la estadística atiende a dos criterios según se refiera a su naturaleza o su origen para distinguirlas. En el primer supuesto se subdividen entre estadísticas de masas o de series, aunque también se pueden

⁷⁰ SANZ APARICIO, M. T., MENENDEZ BALAÑA, F. J., RIVERO EXPOSITO, M. P. Y CONDE PASTOR, M. Psicología de la Motivación..., cit., pp. 5-9.

⁷¹ FONTES DE GRACIA, S., GARCIA-GALLEGO, C., QUINTANILLA COBIAN, L, RODRIGUEZ FERNANDEZ, R., RUBIO DE LEMUS, P Y SARRIA SANCHEZ, E. Fundamentos de investigación en..., cit., pp. 64-65.

⁷² PEREZ ALVAREZ, F. Y DIAZ CORTES, L. M. Introducción a la Criminología..., cit., p. 30.

diferenciar tomando como punto de vista las “formas de observación”, ya sean estáticas o dinámicas. Las estadísticas, en definitiva, son descripciones transversales. En ocasiones, junto a ellas también se mencionan los informes de autodenuncia y las encuestas de victimización⁷³.

En cuanto a la segunda modalidad basada en su origen, encontramos las estadísticas oficiales que, a su vez, pueden dividirse en: policiales –sobre todo las que se centran en los detenidos-, las judiciales que atienden a la situación de los condenados y, finalmente, las de carácter penitenciario que incluyen las circunstancias relativas a los penados⁷⁴.

También, existen otras técnicas entre las que destacan la exploración (psicológica o psiquiátrica), la entrevista, cuestionario⁷⁵, estudios de casos y biografías, estudios de seguimiento, estudios paralelos e investigaciones con grupos de control⁷⁶.

Todos estos métodos y sus técnicas de investigación se pueden emplear para el desarrollo de diversas clases de estudio. Entre ellos se pueden diferenciar los estudios transversales que se refieren a una única medición del fenómeno, como puede ser el caso del estudio estadístico, frente a las investigaciones

⁷³ PEREZ ALVAREZ, F. Y DIAZ CORTES, L. M. Introducción a la Criminología..., cit., p. 31.

⁷⁴ PEREZ ALVAREZ, F. Y DIAZ CORTES, L. M. Introducción a la Criminología..., cit., p. 33.

⁷⁵ La encuesta, que es una variedad de la estadística, es una técnica utilizada para investigar sobre todo los fenómenos de carácter social. El instrumento más utilizado en la encuesta para recoger la información suele ser el cuestionario que mide indirectamente aquello que las personas saben, opinan o juzgan sobre una cuestión concreta. Tiene una gran utilidad para obtener información de una manera más rápida a un gran número de personas mediante preguntas cerradas, abiertas o mixtas; en las primeras existen alternativas de respuestas, en la segunda el encuestado tiene libertad de respuesta, mientras que, la última es la combinación de las anteriores. Si bien, en el campo de la Criminología, las encuestas de autodenuncia y las de victimización han supuesto un avance en la construcción del conocimiento de la criminalidad, la autoría delictiva y la evolución de la delincuencia. La investigación realizada en las encuestas de victimización persigue averiguar los delitos padecidos por las víctimas. Ellas mismas son las que especifican los aspectos más relevantes como dónde y cómo fue, si existe denuncia al respecto y qué opinión tienen sobre la actuación policial, entre otros. Todo ello sin perjuicio de los datos oficiales. Por su parte, la segunda modalidad los llamados también informes de autorrevelación se dirigen a obtener información de los participantes sobre su participación en actividades delictivas durante un periodo de tiempo y espacio delimitado. A fin de conseguir información veraz se garantizará el anonimato de los participantes; en HIKAL, W. Metodología y técnicas de investigación criminológica. Reglas básicas en la redacción de textos, ed. Porrúa, 2011, p. 64; FONTES DE GRACIA, S., GARCIA-GALLEGO, C., QUINTANILLA COBIAN, L, RODRIGUEZ FERNANDEZ, R., RUBIO DE LEMUS, P Y SARRIA SANCHEZ, E. Fundamentos de investigación en..., cit., pp. 293-301; HERRERO HERRERO, C. Criminología..., cit., pp.199-202.

⁷⁶ PEREZ ALVAREZ, F. Y DIAZ CORTES, L. M. Introducción a la Criminología..., cit., pp. 38-43.

longitudinales que realizan mediciones en diferentes momentos temporales tales como los estudios de seguimiento y biografías criminales⁷⁷.

1.3.3. Ciencia experimental

Como se acaba de ver en el apartado anterior conviene señalar de entrada que, asumir que el saber criminológico es empírico no conduce irremediablemente a afirmar que sólo es experimental y, consecuentemente, excluyente de los restantes métodos. Del mismo modo que ocurre en el proceso inverso, el método experimental no es la vía exclusiva para acceder y obtener el conocimiento científico⁷⁸.

A pesar de que ya se ha adelantado que la ciencia criminológica puede ser experimental, es necesario señalar en qué consiste y cuáles son las explicaciones que se han argumentado a su favor, de acuerdo a que en ciertos periodos se ha dado por hecho su superioridad debido a que se le ha considerado más rigurosa y fidedigna⁷⁹.

La ciencia experimental está construida sobre la base de una investigación que utilice el método con el mismo nombre puesto que su estudio se centra en las posibles relaciones causales establecidas entre las determinadas variables sometidas a examen. Durante el periodo de análisis se producen las condiciones necesarias para producir la aparición del fenómeno objeto de estudio mediante la manipulación o tratamiento de las variables consideradas independientes a fin de que se pueda medir su efecto en las variables dependientes. Si bien, a lo largo de su desarrollo además es preciso efectuar un control sobre las variables extrañas que, en cierta medida, puedan influenciar o contaminar los resultados de la investigación. Teniendo en cuenta sus principales características, no cabe

⁷⁷ PEREZ ALVAREZ, F. Y DIAZ CORTES, L. M. Introducción a la Criminología..., cit., p. 30.

⁷⁸ LAMARCA PEREZ, C. "Criminología", Eunomia. Revista en Cultura de la Legalidad, 2014, p. 225.

⁷⁹ MATTHEWS, R. Criminología realista..., cit., p. 80.

duda de que sus investigaciones son esenciales para contrastar las hipótesis causales⁸⁰.

El investigador con el objetivo de analizar el posible efecto de la variable independiente sobre la dependiente crea una situación superficial denominada experimento que puede realizarla en dos ambientes diferenciados. Por una parte, en un laboratorio de aquí la razón por la que recibe el nombre de experimento de laboratorio o, por otra parte, experimento de campo que tiene lugar en las circunstancias naturales en las que suele moverse el individuo. La nota de intencionalidad es inherente a este método, y por ello, el propio experimentador puede volver a repetir sus observaciones cuantas veces desee para someterlas nuevamente a comprobación, e incluso, puede replicar su estudio⁸¹.

El experimento debe cumplir necesariamente cuatro requisitos⁸²:

1. El empleo de la manipulación que hace referencia a que, por lo menos, una de las variables independientes debe ser manipulada de una forma intencional. Si bien, la excepción frente a la regla general la encarnan aquellas variables que sólo permiten su tratamiento mediante la selección de valores y que, por lo tanto, no cumplen este requisito.
2. Utilización como mínimo de dos condiciones experimentales para poder proceder a su contraste, ya sea a través de la constitución de un grupo

⁸⁰ Un ejemplo lo podemos encontrar en las investigaciones realizadas por el Grupo de Maryland que han tratado de dar respuesta a tres interrogantes: “qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, y qué tiene el potencial de funcionar” en la reducción del delito y acerca del proceso de justicia penal aplicando la Escala de Métodos Científicos (EMC). En sí, buscan saber cuáles son los efectos que aparecen una vez aplicadas las intervenciones específicas mediante la utilización del test de hipótesis causales. La EMC implica una escala de cinco puntos en los que el 1 consiste en una investigación llevada a cabo por medio de un diseño transversal; 2, significa un diseño experimental en el que se observa el antes y el después; 3, una investigación que incorpora el denominado grupo de control; 4, implica el empleo de diferentes sitios con el fin de poder controlar otras variables. Aunque, lo fundamental son los Ensayos Controlados Aleatorios (ECA) en el diseño de evaluación, esto es, la asignación de los individuos al azar a grupos de control experimentales. La intervención se introduce en el experimental frente al de control que no lo incorpora. Tanto el grupo de control como el experimental se miden antes y después de la intervención y las diferencias obtenidas en los resultados del experimental se atribuyen a la intervención; en MATTHEWS, R. Criminología realista..., cit., pp. 80-81; FONTES DE GRACIA, S., GARCIA-GALLEG0, C., QUINTANILLA COBIAN, L., RUBIO DE LEMUS, P. Y SARRIA SANCHEZ, E. Fundamentos de investigación en..., cit., p. 73.

⁸¹ FONTES DE GRACIA, S., GARCIA-GALLEG0, C., QUINTANILLA COBIAN, L., RODRIGUEZ FERNANDEZ, R., RUBIO DE LEMUS, P Y SARRIA SANCHEZ, E. Fundamentos de investigación en..., cit., pp. 149-150.

⁸² FONTES DE GRACIA, S., GARCIA-GALLEG0, C., QUINTANILLA COBIAN, L., RODRIGUEZ FERNANDEZ, R., RUBIO DE LEMUS, P Y SARRIA SANCHEZ, E. Fundamentos de investigación en..., cit., pp. 151-152.

formado por individuos que pase por las dos condiciones determinadas o la conformación de dos grupos, uno experimental al que se le aplica el tratamiento y el de control al que no se le aplica.

3. Equivalencia inicial de los grupos.
4. Control intencional, directo y manipulativo del investigador sobre las variables independientes y extrañas. De la efectividad de esta labor dependerá que el experimentador pueda concluir que los cambios efectuados en la variable dependiente son fruto de los valores asignados a la variable independiente y no resultado de las variables extrañas.

Es cierto que dentro de las investigaciones vinculadas con la ciencia experimental no existe un único diseño de desarrollo, por esta razón, el investigador puede realizar el experimento que desee tomando la forma que considere más conveniente y adecuada a su elemento de investigación. Las posibilidades de la estrategia experimental incluyen en su clasificación el diseño experimental de comparación de grupos y el diseño de caso único⁸³.

Respecto a la primera modalidad, su objetivo consiste en comparar las medidas proporcionadas por el grupo de individuos participantes en cuestión, es decir, se va a tomar en consideración la variabilidad existente entre los datos de cada grupo, y su comparación y posterior análisis permitirán la interpretación de sus resultados. Estos datos pueden proceder de la muestra constituida por un solo grupo sometido a varias circunstancias, o, pueden tener su origen en diferentes grupos que son evaluados en condiciones diferentes entre ellos⁸⁴.

Por su parte, el diseño de caso único, a diferencia del anterior, el investigador lleva a cabo una serie de registros sucesivos en situaciones controladas de las conductas de un participante o un grupo pequeño en tres momentos temporales: antes, durante y después del tratamiento. En este estudio

⁸³ FONTES DE GRACIA, S., GARCIA-GALLEGO, C., QUINTANILLA COBIAN, L, RODRIGUEZ FERNANDEZ, R., RUBIO DE LEMUS, P Y SARRIA SANCHEZ, E. Fundamentos de investigación en..., cit., p. 73.

⁸⁴ FONTES DE GRACIA, S., GARCIA-GALLEGO, C., QUINTANILLA COBIAN, L, RODRIGUEZ FERNANDEZ, R., RUBIO DE LEMUS, P Y SARRIA SANCHEZ, E. Fundamentos de investigación en..., cit., pp. 73-76.

longitudinal la interrupción en la aplicación del tratamiento proporciona los datos para contrastar el antes y el después y, de esta manera, se podrá valorar su efecto⁸⁵.

Dentro del círculo académico del ámbito que nos ocupa, la Criminología experimental ha sido definida por SHERMAN como "*el conocimiento científico sobre la delincuencia y la justicia penal extraída de investigaciones basadas en la asignación aleatoria (random)*". Esto quiere decir que, se aplica el método experimental científico al examen de la transformación del concepto de delito, la lucha contra el delito, el análisis y alcance de los mecanismos de control social⁸⁶.

Tal y como opina este autor tan sólo puede avanzar la ciencia en la medida en que utilice investigaciones experimentales, esto es, para su correcto desarrollo servirían exclusivamente las investigaciones experimentales y las cuasi experimentales⁸⁷ ya que ellas son las únicas que tienen la capacidad de aportar evidencia empírica⁸⁸.

Sin embargo, se olvida de que cualquier método depende del objeto que se investigue. Dentro de esta ciencia, los investigadores pueden realizar estudios sobre los protagonistas principales de la delincuencia, el delincuente y la víctima, sin que se introduzca un escenario experimental ya sea por motivos éticos o porque, simplemente, el objetivo pretendido no sea buscar el binomio causa-efecto.

⁸⁵ FONTES DE GRACIA, S., GARCIA-GALLEGO, C., QUINTANILLA COBIAN, L, RODRIGUEZ FERNANDEZ, R., RUBIO DE LEMUS, P Y SARRIA SANCHEZ, E. Fundamentos de investigación en..., cit., pp. 76-77 y 240.

⁸⁶ LARRAURI, E. "*¿Qué es la criminología?*", Indret 3/2013, pp. 3-4; SERRANO SUAREZ, O. H. "*Nota preliminar circunscrita al concepto, función y rol de la criminología y la estadística en el ejercicio de la investigación académica*", Misión Jurídica Revista de Derecho y Ciencias Sociales, 2014, pp. 327-328.

⁸⁷ Al igual que en el experimento existe una intervención o tratamiento (variable independiente) cuyo efecto quiere medirse en la variable dependiente, no obstante, su control no es tan riguroso como en el experimento por dos motivos, el primero, los integrantes de los grupos no han obedecido a un criterio aleatorio sino que, por el contrario, los grupos ya están formados; el segundo, la investigación cuasi experimental se realiza en situaciones naturales donde la conducta objeto de estudio suele estar presente. Debido a estas deficiencias el investigador prestará más atención al estudio y control de las amenazas a la validez interna sobre todo a las variables extrañas, ahora bien, su validez externa es superior a la del experimento. Estos diseños son muy comunes en los programas de evaluación de la intervención psicológica o social; en FONTES DE GRACIA, S., GARCIA-GALLEGO, C., QUINTANILLA COBIAN, L, RODRIGUEZ FERNANDEZ, R., RUBIO DE LEMUS, P Y SARRIA SANCHEZ, E. Fundamentos de investigación en..., cit., pp. 190-212.

⁸⁸ LARRAURI, E. *¿Qué es la criminología?* ..., cit., p.4.

A pesar de que las investigaciones experimentales arrojan resultados empíricos, lo cierto es que la construcción del conocimiento no exige realizarlo exclusivamente mediante esta vía. En este sentido, como no podía ser de otra manera, frente a esta postura se han alzado voces críticas argumentando que se puede construir conocimiento científico sin tener que acudir irremediablemente al experimento, pues, a título de ejemplo, algunos autores sostienen que la observación, las investigaciones cuantitativas semi experimentales o la etnografía⁸⁹, obtienen igualmente los mismos resultados⁹⁰.

Resulta indudable la cualidad de la estrategia experimental de ofrecer las mayores garantías a la hora de desarrollar un estudio en el que contrastar hipótesis causales, si bien, bajo sus postulados tan sólo favorecería el avance del paradigma causal explicativo de la ciencia criminológica, a día de hoy prácticamente superado. Asimismo, si tenemos en cuenta que esta disciplina se ocupa del fenómeno humano, principalmente del delincuente y de la víctima, de sus comportamientos complejos no siempre puede quedar reducidos a un conjunto de variables. Por otra parte, una vez ya se ha superado el paradigma causal, no le interesa tanto a esta ciencia concluir relaciones de causalidad entre las variables, sino que está más interesada en su misión de controlar y prevenir la criminalidad, el estudio de la víctima y el control social. Estos elementos no pueden someterse exclusivamente a experimentos, sino que por su naturaleza son más aconsejables otros métodos de investigación.

⁸⁹ La etnografía junto con la investigación-acción y el estudio de caso son los métodos cualitativos más representativos. La etnografía se identifica con la descripción y el análisis de los grupos sociales y culturales a partir de la observación participante, entrevistas y las grabaciones, aunque también se pueden utilizar otras estrategias para recopilar datos. La labor de interpretación del investigador se realiza desde dentro del contexto que se examina a fin de explorar la naturaleza propia del fenómeno en vez de probar hipótesis sobre un pequeño grupo de casos, de tal forma que, analiza los datos extraídos, que no habrán sido codificados, con el fin último de dar significado a las acciones humanas fijándose en las descripciones verbales y explicaciones y dejando en un segundo plano la cuantificación y el estudio estadístico; en FONTES DE GRACIA, S., GARCIA-GALLEGO, C., QUINTANILLA COBIAN, L, RODRIGUEZ FERNANDEZ, R., RUBIO DE LEMUS, P Y SARRIA SANCHEZ, E. Fundamentos de investigación en..., cit., pp. 369-375.

⁹⁰ LARRAURI, E. ¿Qué es la criminología? ..., cit., p.4.

1.3.4. Ciencia interdisciplinar

Previamente se ha constatado que esta disciplina ostenta el rango de ciencia y que, además, se caracteriza por ser empírica, puesto que, no es necesario remarcar que, en ocasiones, pueda ser experimental al quedar incorporada esta nota junto con la observación dentro de la expresión ciencia empírica. Asimismo, un de las particularidades de este saber es que su conocimiento se construye sobre el terreno interdisciplinar, de manera que, los investigadores de este ámbito deben ser conscientes de las ventajas e inconvenientes que este aspecto trae consigo a la hora de realizar sus estudios⁹¹.

Hay que tener presente que la interdisciplinariedad puede abordarse en dos niveles, bien en la propia disciplina criminológica en la medida en que convergen en ella un conjunto armónico de saberes, o bien, la existente entre la criminología y el derecho penal pues de su entendimiento mutuo dependerá la efectividad de la normativa de asistencia y protección dirigida a las víctimas del terrorismo. Así que, en este punto se explicarán las nociones vinculadas de la interdisciplinariedad propia de la Criminología mientras que en un capítulo posterior se volverá a incidir sobre la relación entre la ciencia criminológica y el derecho penal.

La pluralidad de factores que intervienen en el fenómeno humano hace que el objeto de estudio de esta ciencia no sea comprensible o explicable en su totalidad, sino se toman en consideración las observaciones y los análisis de otros saberes que pueden converger en el área de la sociedad que interesa examinar. Así que, la diversidad de factores ha contribuido fehacientemente al nacimiento de la interdisciplinariedad. Una de las disciplinas que participan armónicamente

⁹¹ GOPPINGER, H. Criminología, Reus S. A., 1973, p. 7; NERECL señala a los propios investigadores y sus métodos como los principales escollos de la interdisciplinariedad, *“porque los profesores son productos de universidades centrados en las disciplinas, y porque los libros y las unidades de los cursos tienden a reflejar el punto de vista del especialista universitario de su escuela o su parcela de conocimiento, ellos tienden a ignorar la necesidad para una articulación curricular de una síntesis no solamente en el plano horizontal sino vertical. Consecuentemente, el alcance de cada curso de estudios tiende a ser conformado solamente para un segmento de la disciplina o el campo de estudio tiende a ser organizado de forma lineal, prescindiendo de si la secuencia es sociológicamente válida o no. De hecho, la secuencia puede ser planeada más por conveniencia académica o tradición que en términos de lógica de las formas”*; en RAMOS REQUEJO, R. *“La Sociología como ciencia interdisciplinaria”*, Revista interuniversitaria de formación del profesorado, 1987, p. 44.

en una investigación se encargará de coordinar sus métodos y resultados de acuerdo con el objeto de estudio que tienen en común, de tal forma que, no se permita la pérdida de autonomía de ninguna de ellas. A día de hoy sería conveniente extender la práctica de la interdisciplinariedad de las ciencias debido a que el avance científico depende en cierta medida del auxilio que pueda recibir de otros saberes⁹².

Hemos asistido a la evolución progresiva desde la utilización de los sistemas piramidales hasta el surgimiento de los circulares, cuyos autores apostaban por articular sus investigaciones sobre ejes que difieren en su fuente de conocimiento. Tradicionalmente, se aplicaban los esquemas piramidales en cualquier investigación con el propósito de buscar la preeminencia de una ciencia suprema y aquellas que le podían auxiliar durante su cometido, construyendo una especie de pirámide de conocimiento, tal y como señalaba BARATTA *"la vieja criminología estaba subordinada al derecho penal"*⁹³, si bien es cierto que esta posición está prácticamente superada en la actualidad.

La interpretación del cambio del sistema piramidal a la circular es fácil de comprender cuando se sabe y afirma que no existen ciencias superiores. Estos sistemas circulares indican cuál es el problema a resolver y propone una serie de disciplinas que puedan abordarlo, así se convierte en una manera de solucionarlo mediante un funcionamiento de retroalimentación más rápido y eficaz. Dentro del rango circular existen tres categorías: la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad⁹⁴ y la transdisciplinariedad. El denominador común de éstas es la convergencia de disciplinas que, en vez de que sobresalga una como directriz, concurren todas en situación de igualdad⁹⁵.

⁹² GUTIERREZ HINOJOSA, T. D. *"La explicación científica en Criminología"*, Revista Derecho Penal y Criminología, enero-junio 2012, p. 142.

⁹³ RODRIGUEZ MANZANERA, L. Criminología..., cit., pp. 40-41; BERGALLI, R., BUSTOS RAMÍREZ, J. Y MIRALLES, T. El pensamiento criminológico..., cit., p. 24.

⁹⁴ La UNESCO propuso a finales de los años sesenta empezar a trabajar mediante el enfoque interdisciplinario a fin de buscar soluciones a los problemas actuales desde los ámbitos científico y tecnológico; en PEÑUELA VELASQUEZ, L. A. *"La transdisciplinariedad. Más allá de los conceptos, la dialéctica"*, Andamios. Revista de Investigación Social, vol. 1, núm. 2, 2005, pp. 43-77.

⁹⁵ RODRIGUEZ MANZANERA, L. Criminología..., cit., pp. 41-42.

Es necesario ser consciente de qué nos puede ofrecer cada campo científico, sus métodos de trabajo y cuáles los sus límites e inconvenientes que pueden suponer a la hora de realizar un estudio científico⁹⁶. Este planteamiento es el punto de partida del sistema circular.

La primera, la multidisciplinariedad consiste en una especie de diálogo entre las disciplinas, cada una de las concurrentes explica a las demás sus ideas y conocimientos acerca de la problemática planteada, sin embargo, lo único que se consigue es una compilación de datos de distinto origen sin que medie entre ellos vinculación. En cambio, en la interdisciplinariedad, no se comunican simplemente los conocimientos aportados por cada campo desde sus propios métodos y perspectivas, sino que los mismos implican una verdadera relación entre ellos, superando el análisis parcial y aislado que pueden ofrecer por separado cada una de ellas. La investigación interdisciplinar supone un escalón superior sobre el nivel multidisciplinar concerniente al grado de coordinación, incluso, es posible alcanzar cierta integración de conocimientos⁹⁷.

Por último, mirando hacia el futuro, un sector de la doctrina ha empezado a apostar por la denominada transdisciplinariedad, este concepto alude a la construcción de una nueva ciencia a partir de los conocimientos preexistentes de las disciplinas contemporáneas. En cierta medida, da un paso más hacia adelante que la interdisciplinariedad basada en la interconexión de las disciplinas pues su fin último es llegar a la creación de un cuerpo de conocimiento superior e inédito que rebase todos los límites de las disciplinas vigentes⁹⁸.

Es imprescindible matizar qué nivel de interdisciplinariedad conviene alcanzar. Para ello, siguiendo la tipología expuesta por PEÑUELA VELASQUEZ se distinguen las siguientes categorías: a) la interdisciplinariedad lineal tipo 1 consiste en que el problema u objeto determinado a estudiar se analiza desde varias disciplinas, cada una de ellas explica algún elemento para su integral

⁹⁶ GOPPINGER, H. Criminología..., cit., p. 2.

⁹⁷ RODRIGUEZ MANZANERA, L. Criminología..., cit., p. 39; RAMOS REQUEJO, R. La Sociología..., cit., p. 44; ARIAS ALPIZAR, L. M. "Interdisciplinariedad y triangulación en ciencias sociales", Diálogos Revista Electrónica de Historia, 2009, pp. 122-124.

⁹⁸ ARIAS ALPIZAR, L. M. Interdisciplinariedad y..., cit., pp. 122-123.

comprensión, si bien, ninguna de aquéllas llega a sufrir cambios en la estructura de su conocimiento pues su centro de atención reside exclusivamente en la búsqueda de solución al problema formulado; b) la interdisciplinariedad lineal tipo 2 surge en el momento en que, dentro de los límites fijados para cada campo, un determinado factor clave, ya sea un método o teoría, una información o concepto puede servir de apoyo a la otra disciplina; no obstante, en este nivel sí que se presenta la posibilidad de que alguna de las empleadas pueda sufrir una serie de modificaciones; c) la interdisciplinariedad dialéctica se refiere a la interacción, intercambio y cooperación entre las disciplinas intervinientes, tanto la uno como la dos; d) el nivel dialéctico fractal simple supone la aparición de una nueva ciencia a partir de la conexión entre las disciplinas precedentes, a pesar de que ni tiene su explicación ni se agota simplemente en su suma; e) el nivel dialéctico fractal complejo, está constituido por los llamados niveles intermedios o fraccionados en los que tiene lugar la interacción. Supone un alto nivel de conceptualización y, además, tan sólo es posible alcanzar una realidad práctica en el caso de que se logre interpretar varios niveles de realidad y de los esquemas cognitivos constructivos. Por consiguiente, la interdisciplinariedad se puede traducir en un elenco de posibles niveles de interconexión entre los saberes implicados, el nexo de unión entre ambos se puede encontrar en los métodos y metodologías, en la formulación del mismo problema u objeto de estudio, en las teorías y conceptos, desde un abordaje operativo constituido por varios investigadores o mediante un saber que actúe como un enlace de coordinación⁹⁹. Este trabajo se va a ceñir a la categoría de la interdisciplinariedad dialéctica en función de que ambas disciplinas se van a enriquecer a partir de los conocimientos obtenidos por la otra en cuestión y viceversa. Esto es, los derechos establecidos para las víctimas podrán mejorarse mediante el estudio empírico que se realice desde la ciencia criminológica, al igual que, la reparación que subyace a los derechos concedidos a las víctimas del terrorismo podrá informar sobre la conveniencia de incorporarlos a los planes de desvictimización de otra tipología de víctima.

⁹⁹ PEÑUELA VELASQUEZ, L. A. La transdisciplinariedad. Más allá de los conceptos..., cit., pp. 11-13; ARIAS ALPIZAR, L. M. Interdisciplinariedad y..., cit., pp. 43-77.

1.3.5. Ciencia aplicada

Hasta aquí, no hay duda de que las notas que se han presentado caracterizan a la Criminología y, por ello, se afirma que es empírica e interdisciplinar. No obstante, aún queda por averiguar cuál es el alcance de su aplicabilidad. La presencia más o menos explícita de su aplicabilidad ha sido una constante en las formulaciones y su influencia debe guiar el avance de esta ciencia. Esta disciplina con una clara orientación de resolución de problemas dinámicos relacionados con la delincuencia carecería de lógica y sentido, si no buscara su intervención en la realidad.

Generalmente la alusión al nivel de aplicación de la Criminología suele encontrarse en las diferentes tipologías presentadas por los diferentes autores. En ellas, describen en qué consiste esta modalidad y cómo puede alcanzarse.

La tipología elaborada por LOPEZ REY, distingue cuatro categorías. La combinación de todas ellas forma la Criminología, aunque cada una tiene sus propios fines y metodología¹⁰⁰:

1. En el primer nivel se encuentra la Criminología científica o teórica, constituida por los conceptos, teorías, métodos y resultados derivados del examen individual y social de la criminalidad, del análisis de sus protagonistas principales, el delincuente y la víctima, junto con el estudio de la sociedad y su sistema penal. Su objetivo último es ofrecer conocimiento científico del fenómeno criminal, tenga o no relación con las necesidades prácticas, construido a través de una serie de exigencias científicas y metodológicas.
2. La gran diferencia que presenta la Criminología aplicada respecto a la modalidad que se acaba de examinar es que va más allá del nivel anterior; puesto que, incluye a la considerada "empírica", en la medida en que, excede del simple análisis del sistema penal alcanzando a los

¹⁰⁰ LOPEZ REY DE ARROJO, M. Criminología..., cit., pp. 3-9; RODRIGUEZ MANZANERA, L. Criminología..., cit., pp. 10-11; ; SERRANO GOMEZ, A. Historia de la..., cit., pp. 657-658; MARCHIORI, H. Criminología..., cit., p. 4.

mecanismos de reacción y control social. Parte de un programa y, durante su aplicación, deben participar profesionales provenientes de diferentes sectores. Su efectividad estará sujeta a un constante proceso de revisión.

3. Otro rango lo ostenta la denominada académica cuya función es estrictamente didáctica. Además de describir los conocimientos básicos de la Criminología (teorías, método, evolución...), su misión consiste en sintetizarlos para su mejor comprensión a efectos de enseñanza o transmisión. Se puede poner en contraposición con la llamada criminología mediática.

ZAFFARONI habla de la esencialidad de la criminología mediática o construcción social de la criminalidad para llegar al público en general. La cuestión estriba en el potencial desplegado por los medios masivos de comunicación durante el cumplimiento de su misión de construir la realidad social, sin tener que recurrir a las técnicas rigurosas de la criminología académica¹⁰¹.

4. Por último, la analítica. Entre las funciones básicas de esta categoría quedan comprendidas la revisión de todos los niveles anteriores a fin de corregir sus errores, a saber, eludir las pretensiones desorbitadas de la Criminología científica, la insuficiente de la aplicada, la académica insustancial y los posibles fallos en los que puede caer la política criminal; y, en definitiva, valorar el método de trabajo que han seguido y los resultados obtenidos a fin de demostrar si sus afirmaciones se pueden aceptar como válidas o no.

Tras examinar la clasificación ofrecida por LOPEZ REY, puede comprobarse que, quizá, la última categoría no merecería un especial reconocimiento ni siquiera la mención en un nivel exclusivamente destinado al tipo analítico, puesto que, en cada uno de los niveles precedentes lo lógico es que las propias investigaciones siguieran revisando sus teorías y análisis a medida que la

¹⁰¹ SERRANO SUAREZ, O. H. Nota preliminar circunscrita al concepto, función y rol..., cit., pp. 331-332.

sociedad evolucione. El progresivo desarrollo de la estructura social lleva aparejada indiscutiblemente las explicaciones, análisis y sus posibles mejoras a partir de sus revisiones.

En otro sentido, REDONDO ILLESCAS señala los cuatro niveles siguientes de la ciencia criminológica¹⁰²:

1. Descriptivo: descripción de las circunstancias de la aparición del hecho delictivo y la reacción social que despierta.
2. Explicativo: ordena sistemáticamente los hallazgos que producen la aparición de la delincuencia y la reacción social y, consecuentemente, ofrece las explicaciones que vinculan los conocimientos obtenidos.
3. Predictivo: detalla cuáles son las condiciones que favorecerán u obstaculizarán el surgimiento del hecho delictivo.
4. Aplicado: consiste en la intervención en las circunstancias que rodean a la delincuencia con el objetivo de reducir el índice del fenómeno criminal.

De la descripción de ambas tipologías se deduce que el problema principal es la materialización de la aplicación sin un adecuado desarrollo teórico como se propone. Es cierto que, en términos generales, siempre se enuncia el planteamiento del problema a investigar dentro de un marco teórico específico, es decir, por orden deberían desarrollarse, primero las teorías, luego las investigaciones y, por último, su aplicación. No obstante, esta afirmación puede conllevar al obstáculo de que una determinada investigación no cuente con conocimientos teóricos sólidos que sirvan de punto de inicio. Pues, implicaría que, sin avances en el desarrollo teórico no sería recomendable recurrir a la práctica.

Para intentar sortear este obstáculo es preferible acudir y tomar como referencia, en virtud de la aplicación de la interdisciplinariedad de esta ciencia, los postulados de la Psicología Social. En la citada disciplina, existen múltiples visiones acerca del entendimiento del término aplicación, sin embargo, entre ellas

¹⁰² TELLEZ AGUILERA, A. Criminología..., cit., p. 31.

destacan los tres enfoques siguientes: el primero, cuyos partidarios distinguen la investigación y la tecnología social; el segundo, en el que inciden en la oposición entre las vertientes básica y aplicada; y el último, el formado por modelos integrados que apuestan por una serie de ciclos de retroalimentación.

Desde la formulación que contrapone la investigación a la tecnología social, VARELA, establece que la investigación es una actividad de carácter analítico dirigida a aislar las relaciones entre las variables, frente a la denominada tecnología social que, al contrario, combina los conocimientos útiles para resolver un problema determinado. A la vez que sintética se caracteriza por ser pragmática, esto es, se interesa por el problema concreto sin estar preocupada por generalizar los resultados¹⁰³.

Muchos psicólogos defienden la perspectiva que distingue los conocimientos básicos y los conocimientos aplicados. El interés de los psicólogos sociales básicos consiste en el desarrollo de teorías y el diseño de investigaciones cuyo objetivo sea probarlas. En cambio, los psicólogos adheridos a la vertiente aplicada están exclusivamente centrados en la resolución de un problema y su consecuente incremento de calidad de vida en las personas. Los investigadores aplicados tienen dos opciones para tratar de buscar una solución al problema planteado, por una parte, pueden emplear la información previa proporcionada por los conocimientos teóricos que tienen a su disposición o, por otra parte, en el caso de carencia o insuficiente información debido al estado de la ciencia no hay más remedio que proceder a investigar para llegar a alguna conclusión. Estas dos alternativas a la hora de actuar permiten establecer las bases de la colaboración entre ambos ámbitos, de manera que los estudios básicos realizados en cualquier contexto aplicado permitan al investigador comprender el problema al que está tratando de poner solución, y el proceso inverso, los resultados de una investigación aplicada pueden promover o beneficiar el progreso de una teoría o, incluso en ciertos casos, implantar sus cimientos¹⁰⁴. A modo de ejemplo,

¹⁰³ GAVIRIA STEWART, E., CUADRADO GUIRADO, I. Y LOPEZ SAEZ, M. Introducción a la Psicología Social, Sanz y Torres, pp. 491-495.

¹⁰⁴ GAVIRIA STEWART, E., CUADRADO GUIRADO, I. Y LOPEZ SAEZ, M. Introducción a la Psicología..., cit., pp. 491-495.

imagínese el lector una situación que pudiera ser frecuente y deseable en el contexto cotidiano actual en el que se encargue a un criminólogo un plan de prevención de la delincuencia en un establecimiento comercial. En este supuesto hipotético, el criminólogo no precisaría iniciar una investigación sobre una materia novedosa pues podría recurrir sin mayor tipo de problemas al conocimiento básico disponible en el campo de las teorías de la oportunidad, y en él, decantarse por la aplicación de los postulados de la teoría de las actividades rutinarias sin perjuicio, de que una de sus funciones consista en determinar y evaluar las medidas a introducir. Sin embargo, este profesional requeriría emprender el desafío investigador previamente a ofrecer una posible solución a un caso de desvictimización en delito de hurto puesto que su escaso interés no ha generado investigaciones ni teóricas ni prácticas al respecto, además de que la desvictimización puramente criminológica no está excesivamente desarrollada. Por lo tanto, no se considera la perspectiva aplicada como un mero apéndice de las teorías, sino que se le reconoce la importancia y relevancia que merece.

El enfoque de los modelos cíclicos tuvo su origen en la preocupación y consecuente orientación de algunos psicólogos hacia la aplicación de sus modelos propios. Debido a su contribución a la ciencia normalmente se mencionan la investigación-acción y la Psicología Social de ciclo completo.

LEWIN, creador de la primera modalidad, concibe que la adquisición del conocimiento está estrechamente vinculada con la aplicación. Su formulación está dividida en tres etapas: planificación, actuación y evaluación. En la primera, teniendo presente que se va a intervenir en un contexto determinado, se conjuga el saber existente proveniente de desarrollos teóricos y conocimientos prácticos sobre la materia a la vez que se extrae información del medio de la realidad en la que se va a intervenir. De esta manera, en el paso siguiente, el investigador está en posición de poner a prueba en la realidad social la intervención diseñada para lograr la modificación deseada. Para contrastar la efectividad de la misma, procederá en la tercera fase a su evaluación, analizando específicamente tres

niveles: los objetivos perseguidos, la actuación realizada y lo conocimientos que le han sido útiles para su desarrollo e implementación¹⁰⁵.

La propuesta hecha por CIALDINI, empieza por la observación, en esta fase se obtiene la información necesaria que guiará la dirección de la experimentación. Una vez se ha recogido los datos se pasa a la siguiente fase de experimentación, en ella, como en cualquier investigación de este tipo, tiene lugar el control de las variables y la validez de los resultados. Si bien, ciertos resultados necesitan una validación externa y por ello se vuelve al punto de inicio para llevarla a cabo, es decir, a la observación¹⁰⁶.

Con una perspectiva distinta a la tradicional, podemos decir que, en la evolución normal de la ciencia criminológica marcada por la insuficiencia de estudios teóricos –en parte debido a su juventud- hace referencia a la idea de que el factor clave es su aplicación a problemas concretos, a pesar de que, siempre se sugiera la aplicación práctica a partir de los conocimientos teóricos. Este punto de vista se apoya perfectamente en la postura mantenida por ciertos colectivos de psicólogos sociales quienes se orientan a la resolución de problemas concretos ya sea recurriendo a la información previa disponible en el conocimiento teórico, o bien, ante los datos insuficientes procediendo a la investigación de los casos planteados para llegar a alguna conclusión, incluso aportando sus propios modelos. En cierta medida, los niveles defendidos por REDONDO ILLESCAS casarían perfectamente con esta postura, esto es, los pasos sucesivos de descripción del fenómeno y sus circunstancias, su explicación y predicción, llevarían a su ulterior aplicación y resolución del supuesto planteado. En definitiva, el mensaje que queremos transmitir de manera especial en este aspecto es que se puede proceder a una intervención con efectos prácticos pese a que el desarrollo teórico o avance en dicha materia tratada sea insuficiente por el momento.

¹⁰⁵ GAVIRIA STEWART, E., CUADRADO GUIRADO, I. Y LOPEZ SAEZ, M. Introducción a la Psicología..., cit., pp. 491-495.

¹⁰⁶ GAVIRIA STEWART, E., CUADRADO GUIRADO, I. Y LOPEZ SAEZ, M. Introducción a la Psicología..., cit., pp. 491-495.

1.4. Objetos de estudio

Los elementos específicos, sobre los que los profesionales de la ciencia criminológica han centrado sus esfuerzos en estudiarlos, pueden inferirse directamente de las definiciones con carácter restrictivo o de naturaleza amplia ofrecidas previamente. No obstante, es cierto que la delimitación de los objetos de investigación no ha sido un tema tan recurrente en las cuestiones controvertidas que han guiado a la literatura científica, puesto que, los círculos académicos se han preocupado más en definir la naturaleza de la Criminología, su rango de ciencia y en precisar cuáles son las diferencias cualitativas que presenta esta ciencia respecto a otras disciplinas¹⁰⁷.

Sobre esta cuestión MARCHIORI señala que los objetos de estudio han ido cambiando y evolucionando conforme se han ido atravesando las sucesivas etapas históricas, coincidiendo los elementos de investigación con los intereses sociales vigentes en cada periodo. Así, destaca que los elementos de investigación han sido los siguientes a lo largo del tiempo: 1) estudio del delito; 2) examen de la pena; 3) análisis del delincuente; 4) estudio de la criminalidad; 5) estudio de la reacción social-institucional; 6) estudio del costo económico-social del delito; 7) estudio de la víctima del delito y, por último, 8) el examen de los programas preventivos¹⁰⁸.

¹⁰⁷ GOPPINGER, H. Criminología..., cit., p. 2.

¹⁰⁸ En el desarrollo de la primera etapa dedicada al estudio del delito tendrá en efecto una influencia vital la escuela clásica que encontrará su máxima expresión en la figura de CARRARA. En este marco tiene lugar la consolidación de la concepción del delito en términos estrictamente jurídicos y en su análisis cobrará una importancia crucial el estudio de su elaboración, tipología y modalidades, donde tomará fuerza la búsqueda de respuestas a la naturaleza del delito, daño causado, peligro, lugar, instrumentos utilizados, participación y grado de determinación. Por su énfasis en encontrar una fórmula que aspire al equilibrio entre el delito y la pena, el estudio de la pena ocupa un lugar central en la segunda fase. Tradicionalmente, se aplicaba el mismo castigo a cualquier tipo de delito, frente a esta concepción vendrían a oponerse ciertos estudios jurídicos que trataron de resolver cómo responder mediante una pena al daño cometido. De ahí se deriva la evolución de la naturaleza y aplicación de la pena, desde su marcado carácter retributivo hasta su tratamiento y prevención, pasando por su consideración de retribución como herramienta de prevención. Rompiendo con la apreciación de la pena determinada como tratamiento, los criminólogos de la etapa destinada al estudio de delincuente, mantienen la defensa de la pena indeterminada, exigencia derivada del tiempo necesario para cada delincuente durante su tratamiento de rehabilitación. Esta idea es el resultado de las observaciones y estudios sistemáticos sobre el hombre delincuente que fijan el punto de inicio de la Criminología científica, marcada por la búsqueda en la historia individual, personalidad y contexto social la causa que motivó el delito, lejos ya de la

A pesar de su indudable aportación, la postura de la autora, fundamentada en la evolución confluyente entre el desarrollo histórico y los intereses sociales predominantes en cada contexto, no acaba de convencer por varios motivos. La razón principal reside en que, en los objetos de estudio enumerados aparecen tanto los elementos que sí pueden considerarse los verdaderos objetos de investigación de esta ciencia como las finalidades que persigue la Criminología. Esta pequeña confusión se observa cuando, en algunas etapas, señala el interés en el análisis del delito, víctima o delincuente, mientras que, en otras, estima que son los programas preventivos. Estrictamente, estos programas preventivos no son un objeto en sí mismo sino la finalidad última de la disciplina científica en cuanto su objeto podría reconducirse a los elementos previamente señalados,

consideración abstracta de este último. En el cuarto periodo centrado en la criminalidad, triunfa el análisis global del conjunto de hechos delictivos que se cometen en un determinado tiempo y lugar. La relación entre el delito y los datos sociales abre camino a nuevas perspectivas de análisis e interpretaciones, donde se plantean, entre otros, variables relativas a los índices de población, datos y alteraciones económicas, clima y geografía. A partir del entendimiento del delito como fenómeno social, surgieron diferentes enfoques: 1) teorías basadas en la anomia; 2) enfoques multifactoriales de la criminalidad; 3) teorías ecológicas; 4) teoría del aprendizaje-asociación diferencial; 5) teoría del control y, 6) teorías críticas. En la siguiente etapa, la Criminología atiende al estudio de la reacción social institucional, se interesa por la valoración de los procesos institucionales, que se encargan de la investigación de los delitos, cuál es la respuesta al conflicto social, cómo actúan las instituciones y cuál es el grado de conocimiento y aprendizaje de las instituciones que luchan contra la delincuencia. Posteriormente, los criminólogos rescatan las aportaciones acerca del estudio de la criminalidad recuperando su interés, si bien, en este periodo, tratan de responder cuál es el coste económico-social del delito. Este planteamiento distingue el costo económico: a) aproximación del delito en un determinado lugar; b) aproximación de un concreto delito; c) aproximación de la criminalidad; d) costo económico y social de la pena; e) costo social, daño moral provocado a la víctima. Hasta entonces los estudios se habían dirigido hacia el delito desde el punto de vista del delincuente dejando abandonada la víctima, no obstante, en la séptima fase, la problemática victimológica cobra una especial relevancia. Es un momento de expansión del protagonismo a la víctima que hasta aquel instante había permanecido olvidada. En líneas generales, a partir de 1946, se pueden diferenciar varios enfoques. El primero, los estudios victimológicos se empieza a conocer a la víctima y se contempla la relación entre el delincuente y la víctima, estos desarrollos provienen de los trabajos de MEDELSON, VON HENTIG y ELLENBERG. A raíz del primer Simposio Internacional de Victimología de 1973, surgen los pineros estudios sistemáticos de víctimas, cuyos principales autores son VIANO y DRAPKIN, y en la misma línea el segundo Simposio puso de relieve la importancia de la asistencia a la víctima. Mientras que en sus últimos años se realizan los estudios sobre victimización familiar y social, aparecen así los trabajos de SILVERMAN, GOPPINGER, KAISER y LOPEZ REY. Por último, la prevención ha estado presente en todas las teorías y desarrollos lo largo de todas las etapas. Es una cuestión trascendental ya que permite ampliar las miras del delito, delincuente, criminalidad, víctima y mecanismos de reacción, aunque no se le ha reconocido su trascendencia desde la reflexión jurídica y social hasta hace pocos años. Este movimiento prevencionista surge por los motivos siguientes: a) el aumento de la delincuencia grave; b) los daños ocasionados a la víctima, sociedad y cultura; c) la impunidad en el accionar de los delincuentes; d) la vulnerabilidad de las víctimas; e) los costos derivados; f) colapso en las instituciones policiales y judiciales; g) fracaso de las instituciones penitenciarias en su labor de recuperación del delincuente; h) ausencia de asistencia a las víctimas; i) reincidencia de los delincuentes; j) inexistencia de investigaciones sobre la criminalidad regional; k) la falta de personal experto en la materia; en MARCHIORI, H. Criminología..., cit., pp. 5-34.

como son, el delito o la propia víctima. Asimismo, ciertos objetos señalados pueden incluirse en otros, de esta manera, criminalidad puede reconducirse al estudio del delito y del delincuente. Lo mismo ocurre con los análisis de la pena, reacción social-institucional y del costo económico-social del delito que podrían incluirse bajo el objeto genérico control social.

Hemos asistido a los movimientos progresivos de desplazamiento y ampliación de los objetos de esta disciplina identificados, en una primera fase, en las figuras del delincuente y del crimen. Si bien, con el paso del tiempo, el interés científico se ha focalizado, además, hacia otros elementos pues junto con el análisis de los anteriores son capaces de ofrecer una visión más global e integral sobre el fenómeno delictivo. Esta ampliación surge raíz de tres hitos, que son, el redescubrimiento de la víctima, los estudios centrados en el control social del crimen y la aparición de nuevos modelos orientados a responder al hecho delictivo y garantizar por esta vía la seguridad ciudadana. De esta manera, los criminólogos dejan atrás la búsqueda exclusiva de las causas del delito y viran su actividad hacia la prevención y control del delito tomando como referentes a todos sus protagonistas de este fenómeno sin excepción, a saber, el delincuente, la víctima, el delito y el control social¹⁰⁹.

A modo de conclusión podemos decir que los objetos de la investigación criminológica descansan sobre los cuatro elementos identificativos coincidentes con el delito, el delincuente, el control social y la víctima. Ahora bien, puesto que como se manifestado anteriormente, para considerar a la Criminología sin lugar a dudas como acreedora del rango de ciencia requiere el cumplimiento de unos requisitos tasados, ello exige también la definición característica de cada uno de dichos objetos para adaptarse completamente al tercer criterio previsto¹¹⁰ o, por lo menos, presentar unos rasgos inequívocos que permitan a simple vista de los profesionales saber si nos encontramos o no ante su presencia y, de este modo, poder ocuparse de ellos.

¹⁰⁹ PEREZ ALVAREZ, F. Y DIAZ CORTES, L. Introducción a la Criminología..., cit., p. 49.

¹¹⁰ ROLDAN BARBERO, H. Introducción a la investigación criminológica, Estudios de derecho penal y Criminología, 2009, p. 1.

Así, debido a su importancia y por haber constituido una de las cuestiones más controvertidas a la hora de abordar las definiciones precedentes, en el apartado siguiente nos vamos a centrar prioritariamente en la descripción de estos elementos. Durante este recorrido, expondremos en primer lugar los problemas planteados sobre el delito, a continuación, nos referiremos al delincuente y, finalmente, haremos mención del control social y de la víctima. Esta ordenación en la explicación de los componentes no responde a un criterio guiado por su relevancia, sino que, por el contrario, se basa en que el control social y la víctima representan las dos últimas incorporaciones en el estudio de esta disciplina.

1.4.1. Delito

Sin lugar a dudas, uno de los elementos más investigados desde los principios de esta disciplina es el delito. Junto con su protagonista, el delincuente, han conformado los elementos más básicos, típicos y acordes con la ciencia criminológica, hasta tal punto que, como hemos observado previamente, el sector doctrinal de corte tradicional los señaló como sus objetos exclusivos de estudio para intentar explicar por qué las personas delincuentes cometen delitos o, dicho de otro modo, cuál es la razón de comportarse conforme lo hacen.

Desde hace bastantes siglos, el delito ha generado fascinación en la mayoría de las personas con independencia de la cultura, lugar o tiempo al que pertenezcan. Una parte de la población ha tratado de comprender este fenómeno y, lógicamente, este hecho ha tenido repercusión en el interés suscitado en la comunidad científica general. A lo largo de los tiempos, numerosos profesionales han tratado de descifrar sus claves, no sólo desde la perspectiva criminológica, sino que también el hecho delictivo ha cautivado a otros ámbitos entre los que destacan principalmente la filosofía, la sociología y especialmente la ciencia jurídica.¹¹¹.

¹¹¹ NUÑEZ PAZ, M. A. Y ALONSO PEREZ, F. Nociones de..., cit., p. 113; PEREZ ALVAREZ, F. Y DIAZ CORTES, L. M. Introducción a la Criminología..., cit., p. 49; HERRERO HERRERO, C. Criminología..., cit., pp. 135-136.

Obviamente, los filósofos, sociólogos y juristas han influido en la construcción y evolución del delito. Han aportado una compleja combinación de ideas y conceptos que han buscado contribuir al conocimiento delictivo. Principalmente, en todos estos campos se ha utilizado continuamente el término delito, si bien, es nuestra labor acudir a cada uno de ellos para dar respuesta a tres interrogantes básicos: primero, averiguar si asumen la misma concepción delito; segundo, dilucidar si cada ámbito del saber tiene su propia significación y, en última instancia, determinar si son coincidentes o no con la perspectiva criminológica, es decir, si la Criminología puede asumir como suya la concepción del delito formulada por cualquier otra ciencia o le es exigible delimitar su propia definición.

Antes de empezar a explicar qué entienden por delito cada una de las disciplinas especificadas, debemos advertir que solo pretendemos ofrecer una simple visión de cada perspectiva, haciendo énfasis solamente en sus planteamientos básicos.

En primer lugar, en las concepciones de corte filosófico, el delito consiste en la simple transgresión de la ley estatal provocada por el comportamiento del hombre siempre que éste sea moralmente imputable. Respecto a su actuación, el autor puede realizar esa vulneración mediante una conducta ya sea de carácter positivo o negativo (referida a la acción y a la omisión, respectivamente) e inexcusablemente, esta actividad, producirá un daño político¹¹².

La segunda aportación hace hincapié en la idea de hallar una expresión universal que sirva para todos los lugares y épocas. Esta idea ha estado presente de forma más o menos explícita en muchas de las teorías acerca del delito, no obstante, fue GAROFALO el que exploró específicamente esta cuestión. Este autor utilizó la expresión delito natural para aludir a las lesiones de los sentimientos fundamentales de la sociedad. Así, lo explicó como “...la lesión de

¹¹² NUÑEZ PAZ, M. A. Y ALONSO PEREZ, F. Nociones de..., cit., p. 113; PEREZ ALVAREZ, F. Y DIAZ CORTES, L. M. Introducción a la Criminología..., cit., p. 49; uno de los máximos exponentes fue CARRARA, para quien sus bases son de naturaleza ética o moral, propuso la siguiente definición “...el quebrantamiento de la Ley del Estado, promulgada para tutelar la seguridad de los ciudadanos, derivado de un comportamiento externo del hombre, sea negativo o positivo, moralmente imputable y políticamente dañoso”; en HERRERO HERRERO, C. Criminología..., cit., pp. 135-136.

la parte del sentido moral basado en los sentimientos altruistas fundamentales piedad y probidad, conforme a la medida en que se hallan en las razas humanas superiores; medida que es necesaria para la adaptación del individuo a la sociedad". Aunque la concepción positivista natural se abandonó por su notoria ambigüedad, es cierto que, su relevancia aun reside en la intención de ofrecer una formulación válida desde el punto de vista científico y que además cumpla con los requisitos de estabilidad y de máxima precisión posible¹¹³.

Ante ambas formulaciones se pueden realizar tres críticas, concretamente, una genérica y dos específicas. Por una parte, la primera modalidad se refiere a que en el caso de que se aceptara el concepto de delito proveniente de otra disciplina en los mismos términos en los que fue enunciado en su origen en el saber criminológico, no se atendería la adecuación al requisito de obligado cumplimiento para convertirse en ciencia, anteriormente explicado, relativo a la necesidad de poseer conceptos propios. Además, se puede observar que carecen de una característica inherente a la ciencia criminológica que es la ausencia de una visión global. A ello se añaden dos objeciones específicas dirigidas a la cada una de las perspectivas. La acepción filosófica no podría asumirse en la medida en que no siempre la consideración de moralmente reprobable es sinónima de delito, ni a la inversa, aquello valorado como buena moral no tiene por qué coincidir con la ausencia de delito. Mientras que la acepción sociológica, no abarca ni ofrece una explicación de los delitos que HERRERO HERRERO denomina convencionales y mucho menos los calificados como no convencionales¹¹⁴.

Si bien, el debate principal se ha producido entre las posturas criminológica y legal. Tradicionalmente, una de las cuestiones más problemáticas en torno al delito aparece como consecuencia de la necesidad de desvincularla con el concepto jurídico. Antes de analizar cuál es el sentido de los conceptos delito y conducta desviada, inicialmente hay que señalar que, en muchas ocasiones, el término delito se confunde con su acepción jurídica. Una de las primeras dudas

¹¹³ SERRANO MAILLO, A. Introducción a la..., cit., p.71.

¹¹⁴ Él mismo se pregunta, *"cómo encajar aquí, por ejemplo, delitos contra el "medio ambiente" o delitos relativos a la explotación humana..., cometidos con frecuencia, por aquellos que GAROFALO considera de "raza superior" ?*; en HERRERO HERRERO, C. Criminología..., cit., p. 136.

que se plantearon es la relativa a si el concepto de delito debe ser entendido como un concepto jurídico o, en su caso, como un concepto criminológico.

Respecto a la definición legal construida sobre la base del principio de legalidad, está recogida en el artículo 10 del código penal que establece que "*son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley*", y en concordancia, el artículo 13 especifica que "*son delitos graves las infracciones que la Ley castiga con pena grave. Son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave. Son delitos leves las infracciones que la Ley castiga con pena leve*". El código marca los límites sobre los hechos que cada sociedad considera delito y determina su correspondiente castigo. La inclusión de las conductas está sometida a una constante revisión y actualización como resultado de las presiones políticas. Esta situación conforma, en definitiva, un proceso dinámico a través de cual el sistema penal, teniendo en cuenta el avance de la sociedad y la atención que precisan sus necesidades, puede expandirse al incorporar nuevas figuras delictivas o, al contrario, restringir las conductas delictivas al despenalizarlas¹¹⁵.

En todo caso, el contenido del concepto legal resultaría a efectos científicos insatisfactorio por los siguientes motivos: a) es lógico que sea la propia disciplina la que defina su propio objeto, es decir, que delimite qué va a estudiar y cómo, cuál es su contenido y su naturaleza; b) el criterio que guía al legislador en la decisión de qué conductas deben ser consideradas delitos responde a los caracteres histórico y de oportunidad. Desde esta perspectiva es prácticamente imposible ofrecer una explicación causal del delito; c) una de las consecuencias de que las leyes destaquen por las notas de vaguedad e imprecisión es que en bastantes ocasiones no siempre alcanzan los jueces y juristas un acuerdo acerca de la interpretación de sus elementos; d) además, esas leyes penales están sometidas a constantes cambios, como ocurre en la tipificación de nuevos hechos delictivos y la destipificación o redefinición de los delitos tradicionales; e) las leyes penales y en general cualquier ley pueden ser el resultado de los intereses de los grupos sociales dominantes con la intención de protegerlos. De esta

¹¹⁵ GARRIDO, V., STANGELAND, P. Y REDONDO, S. Principios de Criminología..., cit., pp. 62-63.

manera, se puede ver acentuadas las diferencias entre los grupos sociales conforme a la concepción legal¹¹⁶. Por lo tanto, la perspectiva jurídica no aporta los elementos necesarios para cumplir con las expectativas propias de la Criminología, no le ofrece la información necesaria para comprender el fenómeno delictivo, no se pueden inferir las causas de aparición del delito, ni siquiera cuáles son las razones subyacentes de que un hecho determinado se considere delito y a su vez, cuál es la causa de atribuirle cierta gravedad. Es más, si se atendiera a la misma conceptualización, se convertiría en una mera herramienta auxiliar al servicio del derecho pena¹¹⁷.

Por estos motivos, es imprescindible para la ciencia criminológica que el delito deje de ser la mera abstracción jurídica tan necesaria para el ámbito jurídico, y que sea considerado como un hecho concreto determinado por una combinación de causas¹¹⁸.

No obstante, es cierto que el concepto criminológico del delito debe partir de la concepción penal, si bien a medida que avanza desde ese inicio se va apartando de él a fin de prestar atención a sus necesidades y expectativas; pues, a pesar de que no distan mucho entre sí, mientras que el derecho penal se centra en averiguar si una determinada acción encaja en la norma penal, la Criminología, en su caso, mira hacia los hechos, se interesa por la persona que realiza la conducta delictiva y, especialmente por la víctima que ha padecido los daños, protagonista olvidada por la ciencia jurídica. Desciende al fondo del problema subyacente a la comisión de un hecho delictivo, esto quiere decir que transita hacia una acepción más cultural con un trasfondo histórico¹¹⁹. La consecuencia derivada de los diferentes enfoques del derecho penal y de la criminología es fácilmente observable en la manera de proceder sus profesionales, debido a que mientras *"el penalista califica, el criminólogo analiza. El penalista actúa desde la normal legal, el criminólogo desde la realidad. En este sentido cabe afirmar que*

¹¹⁶ SERRANO MAILLO, A. Introducción a la..., cit., pp. 69-71.

¹¹⁷ GARRIDO, V., STANGELAND, P. Y REDONDO, S. Principios de Criminología..., cit., p. 61; PEREZ ALVAREZ, F. Y DIAZ CORTES, L. M. Introducción a la Criminología..., cit., pp. 49-50.

¹¹⁸ INGENIEROS, J. Criminología..., cit., p. 81.

¹¹⁹ LAMARCA, C. Criminología..., cit., p. 226; ROLDAN BARBERO, H. Introducción a la investigación..., cit., pp. 4-5; MATTHEWS, R. Criminología realista..., cit., p. 61

*el Derecho penal emite una calificación formal y la Criminología un diagnóstico real*¹²⁰.

Como se puede observar, la principal diferencia radica en su focalización sobre el delito, mientras que en el ámbito jurídico sus operadores se ocupan de reconducir los supuestos al contenido establecido en las normas, a la Criminología ya le interesa incluso el denominado campo previo del hecho delictivo. En este terreno, pueden intervenir tanto los enfoques marxistas como la teoría de las actividades rutinarias que tratan de buscar cuáles son las causas que motivan su aparición. Sin embargo, su función no se limita a las circunstancias antecedentes, sino que se extiende a las necesidades posteriores de la producción del delito, tales como, la intervención en los delincuentes y en las víctimas¹²¹.

En este contexto, SERRANO MAILLO esboza la denominada concepción consensual del derecho penal, que, aunque mantiene en la primera parte de su formulación una coincidencia más o menos clara con el concepto legal, reduce aún más su acotamiento a aquellas conductas que en el caso de ser descubiertas, las instancias formales pongan en marcha los mecanismos de persecución. En sus palabras *"delito es toda infracción de normas sociales recogidas en las leyes penales que tienda a ser perseguida oficialmente en caso de ser descubierta"*. Continúa este autor su explicación aclarando que el delito implica siempre la transgresión de las normas básicas que rigen en una sociedad puesto que, en realidad, las normas penales tan sólo contienen el castigo de las infracciones de las normas básicas más relevantes. A pesar de ello, constata la existencia de una cifra de hechos que podrían ser calificados como delictivos al estar tipificados, pero aun así las instancias oficiales encargadas no los persiguen a pesar de su conocimiento por dos motivos: uno de carácter instrumental, la carencia de

¹²⁰ NUÑEZ PAZ, M. A. Y ALONSO PEREZ, F. Nociones de..., cit., p. 115.

¹²¹ La prevención situacional parte de la premisa de que el delito puede prevenirse si se hace un estudio de los lugares y momentos donde aparecen. Anteriormente a la prevención, es necesario identificar los lugares y sus características precursoras o facilitadoras del hecho criminal cartográficamente. Su base teórica se encuentra en la Teoría de la elección racional y la Teoría de las actividades rutinarias. La característica principal de su estrategia es la tendencia a minimizar el número de oportunidades o incentivos de los transgresores, maximizando el riesgo de ser sorprendidos y, paralelamente, disminuyendo los beneficios del delito a través del diseño ambiental de las viviendas y de los espacios públicos; ROLDAN BARBERO, H. Introducción a la investigación..., cit., pp. 4-5.

instrumentos suficientes y, otro, debido a la posición de privilegio de quien los comete. Por lo tanto, a su juicio, existe una tendencia a perseguir las conductas que atentan contra las normas más básicas frente a las dirigidas contra normas consideradas menos importantes a nivel social, esto es, las normas penales son un reflejo más o menos acorde a las normas sociales básicas aceptadas por la mayoría de los integrantes de la comunidad, siempre que se rijan por un sistema democrático¹²².

Conviene resaltar que esta visión “provisional”, como resalta él mismo, responde a una visión puramente etiológica del delito, si bien, este intento tan meritorio de concretar minuciosamente esta definición, puede presentar una serie de obstáculos. Resalta el hecho de que no podrían ser incluidas y por lo tanto no serían merecedoras de una investigación criminológica aquellas conductas o fenómenos de reciente aparición que, en cierto contexto histórico, tengan la capacidad de generar preocupación entre los miembros de una comunidad en la medida en que de entrada no tendría posible cabida en ningún tipo delictivo.

Otra corriente ha optado por sustituir el concepto delito por la noción relativa a la desviación. Este fenómeno ha sido principalmente abordado desde cuatro enfoques diferenciados la desviación estadística, la desviación como enfermedad, la visión funcionalista y el interaccionismo simbólico, cuyo denominador común es la búsqueda de su significado. Según la perspectiva estadística, se asimila el comportamiento desviado a aquél que no cumple los parámetros habituales o, dicho de una forma más explícita, consiste en la conducta alejada del modo común de actuar los integrantes de la sociedad en términos estadísticos. Mientras que, en la segunda, los autores introdujeron diversas variables médicas, entre las que destaca la equiparación de desviación con “enfermedad”, “patología”, “disfunción” o “anomalía” del organismo –en este caso la sociedad-. Por su parte, el funcionalismo estructural también concibe la sociedad como un organismo, sin embargo, además de interpretar los comportamientos disfuncionales que ponen en riesgo la estabilidad social los analiza al igual que los procesos favorecedores de la estabilidad denominados

¹²² SERRANO MAILLO, A. Introducción a la..., cit., pp. 76-84.

funcionales. Por último, el interaccionismo, se refiere a la desviación como un procedimiento de carácter dinámico en el que intervienen dos grupos tanto los que tienen como misión aplicar las leyes como quienes las vulneran¹²³.

Esta apuesta ha tenido una gran recepción en la tradición americana, sus seguidores prefieren utilizar el término conducta desviada que acentúa su marcado carácter social y cultural. Los términos delito (legal) y desviación pueden diferir o coincidir en función de los supuestos, así ciertas conductas que pueden considerarse desviadas en la estructura social no tienen por qué estar tipificadas, por ejemplo, el consumo de drogas ilegales a pesar de que sí se contemple en el código penal conductas asociadas (tráfico de drogas); no obstante, es frecuente la aparición del caso inverso, conductas tipificadas que no se catalogan como conductas desviadas, como las infracciones urbanísticas¹²⁴.

Sin embargo, la asunción de la acepción comportamiento desviado conlleva implícitos una serie de inconvenientes. En primer lugar, el objeto de estudio de la Criminología sería extremadamente amplio, teniendo una repercusión importante en la tarea del criminólogo, quien se vería desbordado ante demasiadas acciones que no atentan gravemente contra los intereses y bienes ajenos. En segundo lugar, la imprecisión terminológica también gravita sobre la noción "desviado". Ninguna de las corrientes ha conseguido delimitar con un criterio estable las conductas que lo integran, al contrario, aceptan recurrir a criterios basados en el aspecto subjetivo como regirse conforme a la actuación de la mayoría o simplemente no se han preocupado de delimitar nítidamente los conceptos con los que operan, tales como, "disfuncional", "anomalía" o "patología". De esta ambigüedad manifiesta derivan, a su vez, dos situaciones problemáticas. Dentro de la sociedad, cada grupo puede entender de una manera diferente los comportamientos funcionales y disfuncionales, esto es, qué es beneficioso y perjudicial para una sociedad respectivamente, debido a que dependiendo de los objetivos perseguidos los procesos sociales que lo alejen de sus metas lo considerará disfuncional, en cambio, los comportamientos que lo

¹²³ GARRIDO, V., STANGELAND, P. Y REDONDO, S. Principios de Criminología..., cit., p. 61; PEREZ ALVAREZ, F. Y DIAZ CORTES, L. M. Introducción a la Criminología..., cit., pp. 67-69.

¹²⁴ ROLDAN BARBERO, H. Introducción a la investigación..., cit., pp. 2-3.

acerquen serán funcionales. Además, puede haber sectores que diferencien los conceptos delito y conducta desviada frente a otro grupo que consideran que el hecho delictivo está incluido en los comportamientos desviados. Desde esta perspectiva, la conducta desviada no es el objeto de estudio de la Criminología sino de la Sociología de la desviación¹²⁵.

Las opciones sugeridas que se inclinan hacia nociones alternativas al problemático término delito tales como conducta desviada o hecho antisocial no han dado los resultados esperados. Igualmente, su utilización no convence por razones basadas en su vaguedad e imprecisión. La única solución que pudiera resultar plausible consiste en delimitar los rasgos inherentes a la concepción criminológica de delito vinculada en todo caso con la producción de disfuncionalidad del sistema creado en la sociedad.¹²⁶

¹²⁵ SERRANO MAILLO, A. Introducción a la..., cit., pp. 69-71; no obstante, existen sectores a favor de otros términos en detrimento de delito que, a pesar de sus esfuerzos vuelven a caer en la falta de delimitación y ambigüedad de sus términos. En esta situación se encuentra ORELLANO WIARCO que mantiene que *"la Criminología cuenta con un objeto propio: el hecho antisocial, que es diferente al objeto del Derecho Penal y contribuye para que este pueda crear, modificar, o suprimir tipos delictivos"*. Afirma que, no es necesario que las conductas desviadas sean constitutivas de delito, pues incluso conductas que no tienen tal carácter pueden tener relevancia criminológica, esto es, cabe hablar de conducta desviada sin reunir las condiciones legalmente establecidas en el código penal ya que lo importante a efectos criminológicos es el ataque al componente social. No sólo ciertos autores a nivel individual han argumentado sus elecciones de términos alternativos, desde el construccionismo social, sus partidarios han sugerido que el delito es una construcción arbitraria sin fundamento en la realidad ontológica, de este modo, sería preferible hablar de "situaciones problemáticas". No obstante, hay que señalar que, se pueden diferenciar ambos conceptos en la medida en que para considerarse delito el hecho debe cumplir cuatro requisitos, si carece del tercero y cuarto, incluso ante la concurrencia de vulneración o victimización existirá simplemente una situación problemática. Las cuatro etapas son: la primera condición consiste en que la acción ha de ser legalmente reprochable y potencialmente interpretada como ilegal; en segundo lugar, se requiere la presencia de actores legítimos que denuncien el acto ante las autoridades, generalmente, serán las víctimas quienes lo hagan; en tercer término, además de que haya una estructura normativa que avale la definición del acto delictivo es necesario el requisito de reproche; y, por último, es ineludible que el sistema judicial reconozca las pretensiones de la víctima y, correlativamente, la culpabilidad del agresor. También los realistas de izquierdas se han ocupado de este asunto enfatizando la interacción creada entre los cuatro componentes integrantes del denominado "cuadro del delito": el delincuente, la víctima, el Estado y la opinión pública. Entienden que la diferencia entre el delito y las situaciones problemáticas, daños o formas de desviación está basada en que *"[el] concepto de desviación no requiere referencia a un grupo de normas constitutivas. Este concepto, entonces, podría sencillamente describir comportamientos no conformes. El concepto de delito, por el contrario, recuerda a un conjunto constitutivo de normas. Si el concepto describe también un evento, su característica distintiva es que su aplicación a una situación problemática concreta logra la misma situación que describe. La existencia del sistema de justicia penal, y el poder de la ideología de la ley penal agregan un valor extralingüístico al lenguaje"*; en MATTHEWS, R. Criminología realista..., cit., pp. 62-63; GUTIERREZ HINOJOSA, T. D. La explicación científica..., cit., p. 137.

¹²⁶ ROLDAN BARBERO, H. Introducción a la investigación..., cit., pp. 2-3.

En definitiva, pronunciarse en torno a cuál es el significado criminológico del delito resulta francamente complicado a vista de la evidente falta de consenso en la actualidad. La doctrina no plantea una solución unánime al problema, pero siendo necesario una toma de postura, es preferible optar por señalar los elementos que debe cumplir el delito para ser abarcado por la ciencia criminológica pues sólo así conseguiremos individualizar de manera adecuada su contenido. Hay que precisar que esta alternativa es perfectamente compatible con el cumplimiento del requisito básico para que la criminología conserve el rango de ciencia, esto es, tener conceptos propios, pues a pesar de que pueda utilizar la misma terminología del derecho penal sus concepciones son diferentes. Así, sus diferencias son una buena guía para discernir si una conducta encaja perfectamente en la naturaleza del delito a efectos criminológicos, entre ellas se deberían cumplir las siguientes:

- Consiste en un problema social y comunitario, esto quiere decir que, el delito causa afección no sólo a los órganos e instancias oficiales del sistema legal sino a toda la sociedad. Especialmente causa dolor al infractor, a la víctima y, por extensión, a toda la comunidad¹²⁷. El significado del problema social conlleva implícitamente el cumplimiento de una serie de requisitos. En primer lugar, debe tener una incidencia o frecuencia masiva en la población. A su vez, esta incidencia ha de distinguirse por la aflicción y el dolor. En segundo lugar, la manifestación del delito ha de tener cierta persistencia temporal. Y, finalmente, el contexto debe caracterizarse por la ausencia de consenso acerca de su etiología, técnicas de intervención eficaces y conciencia generalizada sobre su efecto nocivo. Por su parte, la consideración social hace referencia a una determinada actitud del investigador, esto es, la empatía. La capacidad de empatía evidencia interés por el problema que representa sin que entrañe ningún riesgo de carencia de objetividad o neutralidad en el proceder del investigador¹²⁸.

¹²⁷ NUÑEZ PAZ, M. A. Y ALONSO PEREZ, F. Nociones de..., cit., p. 116.

¹²⁸ PEREZ ALVAREZ, F. Y DIAZ CORTES, L. M. Introducción a la Criminología..., cit., pp. 50-51.

- Es un problema que nace en la comunidad y en la misma debe buscar sus posibles soluciones.
- Su análisis no persigue tan sólo el castigo del infractor, sino que existen otros objetivos como la explicación del hecho delictivo, la reparación del daño causado y su prevención o control en el futuro¹²⁹.
- Es un concepto real, fáctico, empírico, dinámico, aunque no normativo, de ahí que la apreciación del hecho criminal, delincuencia y su volumen dependan del control social¹³⁰.

En suma, pese a la carencia de una definición estrictamente criminológica, se puede asumir sin mayores complicaciones que la asunción de los requisitos que debe tener una conducta delictiva solventa el abordaje de todos los problemas que puedan aparecer en la realidad cambiante y, asimismo, facilita su adaptabilidad a nuevos retos que deba afrontar esta ciencia.

1.4.2. Delincuente

Para tratar de aproximarnos a las cuestiones relevantes sobre el estudio del delincuente es imprescindible abordar, en primer lugar, quién tiene la consideración de delincuente a fin de determinar el sujeto a examinar –objeto de estudio- y, posteriormente, una vez delimitado el individuo en cuestión se podrá proceder a su análisis y, extensivamente, a las dimensiones que lo rodean.

De entrada, se puede afirmar que el delincuente es el autor del delito, es decir, el infractor que provoca el drama social. Sin embargo, tal y como ciertos autores plantearon términos alternativos al delito, RODRIGUEZ MANZANERA propone la noción de desviado, al considerar que, los términos criminal y antisocial pueden tener un efecto negativo de carácter estigmatizante o valorativo en el individuo delincuente¹³¹. Ahora, bien, a pesar de las sutiles

¹²⁹ NUÑEZ PAZ, M. A. Y ALONSO PEREZ, F. Nociones de..., cit., p. 115.

¹³⁰ PEREZ ALVAREZ, F. Y DIAZ CORTES, L. M. Introducción a la Criminología..., cit., p. 51.

¹³¹ RODRIGUEZ MANZANERA, L. Criminología..., cit., p. 25; PEREZ ALVAREZ, F. Y DIAZ CORTES, L. M. Introducción a la Criminología..., cit., p. 51.

diferencias que se podrían apreciar en estos términos se pueden considerar que significan prácticamente lo mismo y que se pueden utilizar indistintamente, aunque, si bien es cierto que predomina la expresión delincuente, dependiendo del momento histórico y de la corriente de pertenencia de los criminólogos han optado por uno de ellos.

Hoy en día, en virtud de la postura mantenida acerca de la significación criminológica del delito la consideración del delincuente deberá atender sus parámetros. El protagonista de la acción que origina dificultades disfuncionales en los sistemas establecidos en la sociedad consistentes en la producción de problemas sociales y comunitarios que causen afección a sus integrantes o instituciones, se podrá convertir en el centro de estudio de investigaciones de carácter preventivo o de intervención. Por lo tanto, solamente el sujeto que cumpla estos requisitos será considerado delincuente a efectos criminológicos y, consecuentemente, podrá convertirse en el objeto de sus investigaciones.

Los desarrollos y avances sociales e históricos ejercen una notable influencia en el análisis del delincuente puesto que este tipo de estudio es sensible a las pautas que rigen el contexto social inmediato, a los factores de origen individual o social, así como a la específica orientación desde la que se está observando al protagonista de la acción delictiva.

Los esfuerzos realizados para investigar al delincuente han sido numerosos. A lo largo del tiempo han existido enfoques o corrientes divergentes que representan las distintas maneras de afrontar o entender al protagonista del delito. Cada uno presenta un estilo a la hora de estudiar a la persona, su conducta y las circunstancias y condiciones que pudieran influir en su decisión o actuación. Sin ánimo de exhaustividad, se van a describir sucintamente cuatro corrientes que son el reflejo de los paradigmas que han imperado en las sucesivas etapas de esta joven ciencia.

En la primera etapa, dominó el paradigma del libre albedrío y el disfrute de igualdad de las personas. La Escuela Clásica defendió la normalidad de todos los individuos con independencia de su vinculación con el fenómeno delictivo, de manera que cualquier sujeto que cometa un hecho delictivo, fruto de su decisión

errónea sobre la libertad sin influencia de agentes externos, es plenamente responsable de sus actos¹³².

En cambio, con el auge del positivismo, el hombre deja de ser esa figura ideal emblema de los clásicos, el infractor representa a un individuo prisionero de su patología (determinismo biológico) o de ciertos procesos causales exógenos a él (determinismo social). Así, en este periodo la atención se dirige a identificar las patologías presentes en los delincuentes ya que sus partidarios creyeron percibir los rasgos diferenciales entre los delincuentes y los no delincuentes. De esta forma, los esfuerzos para hacer frente al fenómeno delictivo se centrarían en este tipo de personas al suponer que el resto de los integrantes de la sociedad actuaban con normalidad al carecer de ellas¹³³.

El correccionalismo mira al infractor y ve un ser inferior, desvalido, incapaz de dirigirse en la vida, necesitado de la intervención tutelar del estado. De ahí que se aleje del retribucionismo y no se interese tanto de la restauración del orden jurídico vulnerado, sino que su propósito consista en la recuperación social del delincuente mediante la pena. Conciben la pena con connotaciones positivas

¹³² HERRERO HERRERO, C. Criminología..., cit., p. 144; PEREZ ALVAREZ, F. Y DIAZ CORTES, L. M. Introducción a la Criminología..., cit., p. 52.

¹³³ Según FIRETTI *"la Antropología criminal realiza dos distintas funciones con respecto a la doctrina positivista del Derecho penal: 1.º, confirma sus bases teóricas; y 2.º, le ofrece subsidios para el descubrimiento del reo y para la medición de la pena que debe imponérsele. En el actual estado de cosas, la Antropología criminal ha hecho mucho más desde el primer punto de vista que desde el segundo. Ha confirmado las nociones teóricas conjeturadas por la filosofía positivista, demostrando que realmente la anomalía de la conducta moral se enlaza con las anomalías permanentes del cerebro y de la persona entera, dando así una prueba experimental de la negación del libre albedrío, en la cual no encuentra ya un obstáculo la escuela positivista, sino el eje de todo su sistema. Por consiguiente, todas las observaciones necroscópicas (sólo posibles en el cadáver), deben considerarse como estudios hechos principalmente en relación con esta función primera, y de un modo subordinado con el propósito de descubrir el significado fisiológico más profundo de algún síntoma exterior; y por eso no deben tacharse de investigaciones inútiles. Viceversa, las observaciones hechas en el individuo vivo desempeñan simultáneamente una y otra función, con esta diferencia: que los resultados relativos a la función primera son siempre mucho más fáciles y seguros, puesto que basta la simple comprobación de uno o varios caracteres anormales para obtener aquéllos; mientras que, para conseguir los concernientes a la segunda función, es necesario establecer con rigor el significado y la importancia relativa a dichos síntomas. Pues bien, desde el primer punto de vista, la Antropología criminal ha llegado a la conclusión de que puede afirmarse con seguridad que el 40 por 100 de los reos son delincuentes natos, esto es, individuos orgánicamente malos y destinados a prepararse la vida delinquiendo; desde el segundo punto de vista, la Antropología criminal no ha llegado (y quizá no vaya más allá) sino a dar un simple indicio de lo que llamaría yo capacidad genérica para delinquir, y de estos resultados ofreció recientemente Lombroso un ejemplo luminosísimo en el estudio del proceso Zerbini"*; en TELLEZ AGUILERA, A. Criminología..., cit., p. 142; ROLDAN BARBERO, H. Introducción a la investigación..., cit., p. 5; HERRERO HERRERO, C. Criminología..., cit., p. 144; PEREZ ALVAREZ, F. Y DIAZ CORTES, L. M. Introducción a la Criminología..., cit., p. 52.

en la medida en que corrige la moral del culpable, esto es, sus intervenciones irán dirigidas y orientadas a modificar su voluntad desvinculadas, por completo, de su carácter negativo o aflictivo. Por lo tanto, la privación de libertad cumple las funciones de establecer en el nivel cognitivo individual la voluntad de actuar conforme a los parámetros legales, al mismo tiempo que, se erige en una herramienta útil de prevención social frente a posibles causas subjetivas de futura delincuencia¹³⁴.

En cambio, desde el enfoque marxista, que enfatiza el papel criminógeno del sistema económico, aducen a causas ajenas a la voluntad del delincuente. Sus premisas básicas pueden sintetizarse en los siguientes puntos: a) en la sociedad capitalista el conflicto se produce entre la clase dominante y la clase

¹³⁴ En España SILVELA *“De cualquier punto de vista, por tanto, que se mire, bien sea desde el de la víctima o sujeto pasivo, el de todos los hombres unidos por el vínculo común del Derecho o el del criminal mismo, se llega siempre al resultado de que si la pena ha de ser el restablecimiento del orden jurídico, ha de proponerse la corrección de la voluntad viciada. Además, por ser esta restauración jurídica, reclama como esencial y necesario el que contenga esa enmienda y mejora. Repetidas veces, en el curso de esta obra, hemos probado que toda reparación de una ley es esencialmente igual su cumplimiento, y que los actos por los que se llega a la primera son de idéntica clase que las que operan lo segundo. Las leyes, en efecto, se perturban de la misma manera que se cumplen, y se restauran de la propia suerte que se cumplen y se perturban. Y si el orden jurídico es espiritual y ético, sólo puede turbarse por actos espirituales y de la libre voluntad, y por tanto restablecerse, si fuera lesionado, por hechos del perturbador, mediante los que se dirija hacia el Bien que debió cumplir y realizar. Es ilusión engañosa –en la cual se cae muy a menudo, sin embargo- el suponer, que el encierro perpetuo, la mutilación y la muerte pueden por sí solos conseguir la reintegración de leyes puramente morales en su observancia y en su validez, cuando no contienen ninguno de los elementos necesarios para alcanzar el remedio que se busca. Ciertamente que el estado no emplea, al parecer, como pena sino medios sensibles y aún externos, como la privación del uso de algunos derechos, la pérdida temporal de la libertad exterior; pero será muy miope aquel que vea en ellos el fin último del castigo. Consiste éste en poner al culpable en condiciones de que se enmiende, y aunque sensibles, van dirigidas y encaminadas a modificar su voluntad o al interior de su conciencia. La reclusión no es medio penal, sino porque le aparta de la atmósfera corrompida en que ha vivido, le hace entrar en sí mismo, de quien el mundo exterior de ha tenido hasta entonces separado. Ajena a este propósito y como mero encierro será medida de precaución y de prudencia, pero no verdadera pena. Pregúntase por muchos, si es racional suponer que en todos los casos puede esperarse la enmienda del delincuente, y si no hay algunos en que es absurdo el creerlo, vista la enormidad del delito y la persistencia en el mal. Del arrepentimiento del reo más endurecido y degradado, no es a nuestros ojos lícito dudar, como no duda nunca la Religión que prodigándole hasta el último momento sus auxilios, confía en su salvación eterna, el hombre, hecho a imagen de Dios, como racional y libre, no pierde jamás irremisiblemente tales atributos, con los cuales siempre la rehabilitación es posible. Pero si irremisiblemente los perdiera, si estuviera encadenado por la fatalidad al mal, si no pudiera ya determinarse sino ser necesariamente determinado, ya no es un ser libre, ya no es un hombre, ya no es una persona. La imputabilidad ha desaparecido, y con ella la responsabilidad de los actos, y detrás de todo esto la justicia de la pena. Podrá ser un individuo peligroso, una bestia feroz, pero ajeno y extraño al orden jurídico, en el cual sólo a título de sujeto libre puede estar comprendido. Equiparado al loco furioso, debe ser tratado como él, debe en su consecuencia pensarse en privarle del poder externo de hacer daño, pero no es que espíe la falta, sufra castigo por el delito que no pudo evitar; en suma, nada tienen que ver entonces con el Derecho penal”*; en TELLEZ AGUILERA, A. Criminología..., cit., pp. 189-197; GARCIA-PABLOS DE MOLINA, A. Tratado de..., cit., pp. 840-842.

trabajadora; b) la criminalidad aparece a raíz de las contradicciones surgidas en el propio sistema capitalista; c) la ciencia criminológica de carácter tradicional ha asegurado y justificado las estructuras capitalistas basadas en las relaciones de dominación; d) la clase dominante utiliza la elaboración de las leyes y su posterior aplicación en su beneficio ya que garantiza la superioridad de sus intereses a la vez que someten a los integrantes de las demás clases; e) los agentes del control social formal son los encargados de “reclutar” a los individuos desviados; f) el origen de la criminalidad se encuentra en el conflicto entre las clases, por ello, la finalidad es acabar con el sistema capitalista. De esta manera, conciben el factor económico como la clave de la explicación del comportamiento delictivo, las estructuras capitalistas de la sociedad son las culpables mientras que el delincuente se convertiría en una mera víctima de la estructura del poder y las relaciones de dominación¹³⁵.

Posteriormente, tras la asunción de la normalidad del delito y del delincuente, las anteriores propuestas dejan de tener vigencia. Las contribuciones realizadas desde esta perspectiva ofrecen una panorámica de normalidad que permite la búsqueda de una respuesta científica y objetiva del problema criminal. El delincuente no es simplemente el individuo que tiene plena libertad sin que le afecten factores externos, ni siquiera un conjunto de estímulos determinados contra los que no puede luchar, es un hombre dinámico, real, histórico, un hombre como cualquier otro.

¹³⁵ En este sentido BONGER señala que el capitalismo es el factor criminógeno: *“hemos llegado al final de nuestros comentarios sobre la etiología de esos delitos y hemos demostrado que las causas principales son, en primer lugar, la actual estructura de la sociedad, que provoca innumerables conflictos; segundo, la falta de civilización y educación entre las clases más pobres; y, tercero el alcoholismo, que es, a su vez, consecuencia del ambiente social”*. Justifica la reacción violenta contra el sistema que oprime y desmoraliza a los individuos más pobres: *“la mayoría de los delincuentes son individuos cuyos sentimientos sociales están reducidos al mínimo y que perjudican a otros sólo por satisfacer sus propios deseos. Los delincuentes políticos de los que hablábamos, por el contrario, son diametralmente opuestos; arriesgan sus intereses más sagrados, su libertad y su vida, en bien de la sociedad; perjudican a la clase dominante sólo para ayudar a las clases oprimidas y, por consiguiente, a toda la humanidad (...). Mientras que el delincuente ordinario es, por lo común, l’homme canaille (...), el delincuente político es el homo nobilis”*; en TELLEZ AGUILERA, A. Criminología..., cit., p. 600; GARCIA-PABLOS DE MOLINA, A. Tratado de..., cit., pp. 840-842.

Con el transcurso del tiempo, el estudio del delincuente paulatinamente ha ido pasando de examinar a la persona del delincuente a fijarse en la conducta manifestada por él mismo.

En la actualidad, numerosas investigaciones realizadas sobre todo por los criminólogos formados en el campo de las ciencias de la conducta han liderado el redescubrimiento del delincuente. A diferencia de las corrientes precedentes que estaban interesadas fundamentalmente en las causas internas, externas o en la interacción de ambas en el individuo, esta nueva tendencia centra toda su atención fundamentalmente en la exploración de los aspectos de su personalidad. En concreto, sus estudios han revelado la evidencia que confirma la relación empírica de la delincuencia con ciertos factores relativos a la socialización, a los aspectos socioeconómicos y las condiciones del entorno físico¹³⁶.

Las investigaciones sobre el pensamiento y la actuación delictiva han constatado que puedan verse especialmente influenciados o modulados en el entorno familiar puesto que este ámbito tiene una especial incidencia en el desarrollo temprano del individuo a lo largo de sus primeros pasos en el proceso de socialización. Los resultados obtenidos en los estudios centrados en este aspecto han confirmado que el fenómeno delictivo puede estar asociado, en mayor o menor medida, a algunas situaciones que se producen durante su socialización. Entre ellas destacan la recurrencia elevada al castigo, la carencia de supervisión parental y la falta de comunicación entre padres e hijos. Junto a este primer agente vital de socialización interviene después la escuela, pudiendo incidir negativamente la falta de escolarización y el fracaso escolar que puede materializarse en dificultades en el proceso de aprendizaje, repetición de cursos y la posible aparición del proceso de autoexclusión de la escuela. Luego, la etapa juvenil podrá influir notablemente en los jóvenes. En esta etapa se debe prestar atención a la posible existencia de casos problemáticos en que los jóvenes presentan una visión de desconexión con la realidad cotidiana, y del mismo modo, a la interacción que pueda mantener con amigos delincuentes en la medida en

¹³⁶ ROLDAN BARBERO, H. Introducción a la investigación..., cit., p. 5; NUÑEZ PAZ, M. A. Y ALONSO PEREZ, F. Nociones de..., cit., p. 132.

que se incrementa la probabilidad de que cometa un hecho delictivo, a la vez que, supone un refuerzo a su comisión¹³⁷.

En la segunda línea de investigación, sus partidarios se ocupan de analizar y explicar las consecuencias que pueden derivarse del factor socioeconómico en estrecha relación con el surgimiento de la delincuencia. Así, a través de sus estudios, sostienen que este factor influye en las distintas formas de aparición de la delincuencia, concretamente, puede adoptar dos direcciones. En un contexto de recesión económica, no es extraño encontrar personas que revelen sentimientos de desesperación, si bien, estos pueden constituir la causa de motivación para que determinados sujetos decidan cometer algún delito, pues como se ha demostrado, conforme aumenta la tasa de paro el nivel de delincuencia también sufre un incremento. Por su parte, en una situación caracterizada por el crecimiento económico, la delincuencia vira hacia otros caminos más vinculados con la realidad social del momento, esto es, la delincuencia de cuello blanco y las infracciones contempladas en la normativa de libre competencia surgen en contextos económicos favorables¹³⁸.

Las aportaciones procedentes del examen de las circunstancias y condiciones referidas al entorno físico sobre el que se origina la delincuencia han demostrado que la delincuencia es bastante superior –alrededor de cuatro o cinco veces- en las grandes ciudades, sobre todo la tasa de delitos contra el patrimonio, respecto a las pequeñas ciudades y al ámbito rural. Si bien, otras investigaciones dirigidas a las subculturas destacan que las grandes ciudades son el caldo de cultivo idóneo para la aparición y realización de los hechos delictivos favorecido por el hecho de que una de las consecuencias inmediatas de este tipo de ciudad caracterizada por su volumen de densidad es el anonimato de sus ciudadanos y que beneficia por lo tanto a los delincuentes¹³⁹.

Sin embargo, hay que ser conscientes de los resultados parciales que han ofrecido las investigaciones realizadas en el marco teórico de sus corrientes de

¹³⁷ NUÑEZ PAZ, M. A. Y ALONSO PEREZ, F. Nociones de..., cit., p. 132.

¹³⁸ NUÑEZ PAZ, M. A. Y ALONSO PEREZ, F. Nociones de..., cit., p. 132.

¹³⁹ NUÑEZ PAZ, M. A. Y ALONSO PEREZ, F. Nociones de..., cit., p. 133.

origen. Los componentes relativamente independientes estudiados, como la personalidad del delincuente, las causas internas de las personas o las directamente extrínsecas al sujeto aportan información incompleta sobre el delincuente. Por ello, sería conveniente en función de la finalidad perseguida – como por ejemplo la prevención o la intervención- realizar un análisis integral que comprendiera no sólo el componente subjetivo referido a la persona del delincuente y las circunstancias que subyacen al mismo, sino que además es necesario examinar el elemento objetivo materializado en el delito para investigar la denominada delincuencia. La delincuencia entendida como el conjunto de las categorías objetiva y subjetiva, esto es, la acción objetiva que lleva a cabo el autor predispuesto, predomina en el panorama de investigación actual¹⁴⁰.

1.4.3. Control social

Obviamente, a medida que hemos ido avanzando en la exploración de esta ciencia, el aprendizaje que hemos obtenido en esta materia nos ha modulado nuestra visión acerca de las problemáticas a las que debemos dirigir nuestra atención y esfuerzos, a la vez que, nos abre las puertas a nuevos desafíos. Esto es precisamente lo que ocurrió con la incorporación del control social a los objetos de estudio de la Criminología.

El origen de este objeto criminológico tiene su fundamento en el interaccionismo simbólico¹⁴¹, modelo que pone precisamente de relieve la

¹⁴⁰ ROLDAN BARBERO, H. Introducción a la investigación..., cit., p. 5.

¹⁴¹ Esta corriente de pensamiento nacida de las premisas pertenecientes a la filosofía fenomenológica, la etnografía y la etnometodología, presenta una serie de postulados básicos a pesar de ser considerada heterogénea: 1) los seres humanos tienen capacidad de pensamiento; 2) la interacción social configura esta destreza; 3) a través de la interacción social los individuos desarrollan su aprendizaje acerca de los símbolos y significados que les facilitará la aptitud de pensamiento; 4) los símbolos y significados son los medios disponibles para las personas a fin de que puedan interactuar; 5) los individuos poseen la habilidad de cambiar o modificar los significados y símbolos en función de la interpretación que realicen durante la interacción; 6) la introducción de estos cambios tiene su origen en la destreza que poseen para interactuar consigo mismos posibilitando el análisis de las posibles alternativas que tienen y elegir una baremando sus ventajas o inconvenientes; 7) las pautas conformadas en la acción e interacción formarán los grupos y sociedades. Conforme a este planteamiento, la conducta o acción entendida como desviada también es el resultado de la atribución llevada a cabo durante estos procesos de interacción social a partir de la construcción de las definiciones y significados pertinentes a tal efecto; en TELLEZ AGUILERA, A. Criminología..., cit., pp. 502-507; GARCIA-PABLOS DE MOLINA, A. Tratado de..., cit., pp. 776-777.

definición de las conductas individuales a partir de la influencia del funcionamiento de las instancias sociales y de los procesos comunicativos. Concretamente, la teoría del etiquetamiento¹⁴² incide en el hecho de que son las propias instancias encargadas del control quienes definen al delincuente y al desviado¹⁴³.

Doctrinalmente se ha definido control social del delito como “*el conjunto de las instituciones, estrategias y sanciones sociales que pretenden promover y garantizar el sometimiento del individuo a los modelos y normas comunitarias. Para obtener la adaptación del individuo a estos postulados, la sociedad se sirve de dos tipos de instancias, las formales (policía, justicia y administración penitenciaria) y las informales (familia, escuela, profesión y opinión pública)*”¹⁴⁴.

¹⁴² Esta teoría también conocida por labeling approach defiende que el delito es una construcción social resultado de un procedimiento de interacción, de un proceso de atribución en el que las propias instancias formales del control social deciden qué es delito y quién es delincuente con su consecuente efecto estigmatizante. Este proceso definitorio e incriminatorio basado en los criterios de los poderes dominantes se dirige principalmente hacia las conductas de las clases más desfavorecidas. Su centro de estudio no lo ocupa ya la etiología de la delincuencia sino el control, esos procesos selectivos de definición y aplicación de los comportamientos que se calificarán como desviados. En un contexto caracterizado por las diferencias socio-estructurales de poder, un individuo frente a la imposibilidad de llevar a cabo una conducta conformista, acudirá a los comportamientos previamente definidos como desviados, como resultado se producirá de una desviación primaria (el etiquetamiento) la consecuencia de una conducta desviada secundaria (criminalidad). Fruto de la atribución de la etiqueta de desviado (desviación primaria) y la práctica, en consecuencia, de comportamientos desviados (desviación secundaria) y la conformidad con ella del propio sujeto, será él mismo quien desarrolle unas autodefiniciones que le lleven a identificarse con el estatus de desviado y a actuar de acuerdo a los que se espera que haga un desviado. En palabras de BECKER, “*los grupos sociales crean la desviación mediante la elaboración de normas cuya infracción constituye esa desviación, mediante la aplicación de tales normas a los individuos y mediante el etiquetamiento (“labeling”) de los mismos como desubicados (“outsiders”). Desde este punto de vista, la desviación no es una cualidad del acto o de la acción cometida por la persona, sino, más bien, una consecuencia de la aplicación, por otros, de las normas y sanciones a un “ofensor”. El desviado es una persona a quien ese “sambenito” le ha sido aplicado con éxito, la conducta desviada es el comportamiento así rotulado por la gente*”; en TELLEZ AGUILERA, A. Criminología..., cit., pp. 526-527; HERRERO HERRERO, C. Criminología..., cit., pp. 299-300.

¹⁴³ ROLDAN BARBERO, H. Introducción a la investigación..., cit., p. 8.

¹⁴⁴ En el mismo sentido, pero partiendo de dos premisas extraídas de su definición, la primera centrada en qué tipo de norma previamente establecida se ha infringido, la norma social ampliamente aceptada por la comunidad o las conductas tipificadas como delito. Por otra parte, la segunda atiende a quién debe responder ante la conducta caracterizada por su lesividad. A partir de ellas, se distinguen dos niveles, el control social de acción dirigido a que los miembros de un grupo acepten e interioricen los valores establecidos socialmente, y el segundo, el control social de reacción, interviene con los mecanismos articulados al respecto una vez se ha consumado la conducta catalogada de lesiva, a través del control difuso o informal ejercido por los grupos primarios como la familia o la escuela, y, el control institucionalizado o formal cuyo titular es la sociedad, encargándose mediante sus instituciones legalmente constituidas en responder con conductas no punitivas o punitivas; CORONA AGUIRRE, L. A. “*La participación ciudadana como parte integrante de la seguridad pública en México*”, 2005, pp. 4-17. Disponible en: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledf/corona_a_la/capitulo_2.html#. (Consultado 04/11/2016).

Junto a esta propuesta también se le considera *"la condición básica de la vida social, pues a través de él se asegura el cumplimiento de las expectativas de conducta y los intereses contenidos en las normas que rigen la convivencia, confirmándolas y estabilizándolas contrafacticamente, en caso de su fluctuación o incumplimiento, con la respectiva sanción impuesta en una determinada forma o procedimiento"*. En la misma línea, otra corriente de opinión propugna que *"es el conjunto de medios a través de los cuales una sociedad garantiza que la conducta de cada uno de sus miembros sea congruente con los parámetros de conducta previamente establecidos por ellos; de igual manera se refiere a la capacidad de respuesta de la sociedad ante el incumplimiento de dichos parámetros"*¹⁴⁵.

Como puede advertirse de las concepciones anteriores, la expresión control social se refiere a todos aquellos mecanismos relativos a la sociedad que garantizan la adecuación del comportamiento de sus integrantes dentro de los parámetros establecidos a tal efecto. De hecho, estas instancias pueden operar en dos niveles: en el primero de carácter puramente social, el protagonista principal es el control social informal frente al aparato legal y las estructuras privadas paralelas que apoyan su función, llamado control social formal, que interviene en segunda instancia una vez que ha fracasado la labor de los mecanismos informales. Respecto al control social formal es preciso delimitarlo del control del delito pues a simple vista pueden ser formulaciones sinónimas. Tal y como manifiesta KAISER, el control del delito se limita expresamente a las funciones de prevención y represión de los hechos delictivos¹⁴⁶, así se le puede considerar una variante del control social formal el cual tiene un significado más amplio, esto es, la relación entre ambas denominaciones responde a la integración del control del delito dentro del control formal. No estamos ante conceptos absolutamente sinónimos, sino que éste goza de una mayor amplitud conceptual al interesarse por el control de los delitos y extensivamente de los

¹⁴⁵ CORONA AGUIRRE, L. A. La participación ciudadana..., cit., p. 11.

¹⁴⁶ HERRERO HERRERO, C. Criminología..., cit., p. 183.

hechos considerados antisociales para conseguir la conformidad de las conductas a los valores sociales existentes.

Cualquier mecanismo de control social, con independencia de su pertenencia al carácter formal o informal, está constituido necesariamente por tres componentes esenciales, esto es, la norma, la sanción y el proceso; estos elementos persiguen la clara finalidad de garantizar las normas básicas reguladoras de la convivencia junto con su indispensable interiorización por parte de los miembros, y su posterior reforzamiento en la sociedad. Dicho de otra manera, mediante la definición –norma- y corrección –sanción y proceso- de la conducta considerada desviada en cualquier panorama de la vida cotidiana, tal como en el trabajo, en un hospital o en un partido de fútbol, se aseguran las normas básicas de convivencia del grupo cuya existencia no se podría asegurar si no se garantizara la presencia de los tres principios inherentes al control social¹⁴⁷.

Los mecanismos informales gozan de discrecionalidad y espontaneidad durante la aplicación de sus dispositivos de autodefensa siempre que los conflictos sean de poca entidad. Estos agentes tienen sus propios sistemas normativos y de sanciones como ya se ha puesto de manifiesto –norma, sanción y proceso- fundamental para los procesos de socialización. Sin embargo, cuando el conflicto reviste una mayor gravedad debe intervenir la justicia penal, esto es, el control social formal, aunque su actuación no se regirá con los principios de discrecionalidad y espontaneidad como en el caso anterior, sino que atiende a las normas diseñadas a tal fin la objetividad y el respeto a los derechos del sujeto¹⁴⁸.

Respecto al procedimiento, ambas instancias difieren en su actuación. Mientras que, en el ámbito informal, sus portadores no tienen descritos los comportamientos calificados como desviados, por lo tanto, tienen cierto grado de discrecionalidad para decidir qué presupuestos caben bajo tal denominación. Este

¹⁴⁷ HASSEMER, W. Y MUÑOZ CONDE, F. Introducción a la Criminología y al Derecho Penal, Tirant lo Blanch, 1989, p. 115.

¹⁴⁸ HASSEMER, W. Y MUÑOZ CONDE, F. Introducción a la Criminología y al..., cit., p. 115.

proceso se caracteriza por su flexibilidad y la falta de regulación, de forma que, puede diferir en cada procedimiento que se inicie. De la misma manera, las sanciones informales que se pueden imponer pueden variar puesto que tampoco existe una regulación expresa al respecto, sino que se basan igualmente en la discrecionalidad. No obstante, esta situación cambia en el ámbito formal, las sanciones que impone son siempre negativas y estigmatizantes¹⁴⁹.

Como se ha indicado en los párrafos precedentes, la justicia, la policía y la administración penitenciaria ejercen el denominado control social formal que solamente entra en funcionamiento después de que el control social informal haya fracasado en su objetivo. Paralelamente existen un conjunto de instancias pertenecientes al ámbito privado, que en la medida de sus posibilidades, pueden ejercer cierto control previo sobre los grupos considerados de riesgo. Este comunitarismo que abarca asociaciones o fundaciones de carácter privado ejercen un control difuso en estrecha conexión con los órganos estatales constituidos para cumplir con esta labor¹⁵⁰. El elenco de medidas a aplicar por estas instancias puede tener un carácter represivo o preventivo, concretamente, las alternativas a utilizar son sanciones como las penas o las medidas de seguridad, u otras medidas entre las que se encuentran los embargos o la

¹⁴⁹ Tal y como ejemplifica GARCIA-PABLOS, *“el padre puede sancionar al hijo que ha obtenido malas calificaciones, sin más. No existen normas de procedimiento al respecto, ni preceptos que determinen la clase de castigo, ni su entidad. El niño tampoco puede negarse a dar una explicación “sino en presencia de sus abogados”. La comunidad también castiga marginando o descalificando (sanciones) a sus miembros incómodos, descorteses o pendencieros, sin necesidad de someter tal decisión a normativa alguna. En ambos casos se trata de instituciones del control social “informal”. Sin embargo, las agencias del control social “formal” no pueden actuar con tal grado de discrecionalidad. La Policía, por ejemplo, no ha de detener a una persona sino en los casos y en la forma prevista por la Ley (art. 489 LECr.). Practicada la detención, el detenido debe ser informado inmediatamente de los derechos que le asisten (art. 520, nº2, LECr), entre otros: derecho a ser informado de los hechos que se le imputan y de las razones de su detención, derecho a guardar silencio, a no declararse culpable, a designar abogado y solicitar su presencia, a ser reconocido por un médico, etc. la detención sólo durará el tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones que permitan esclarecer los hechos y, en todo caso, no más de setenta y dos horas hasta que sea puesto el detenido a disposición de la autoridad judicial (art. 520, nº1, LECr). Esta no podrá imponer otras penas que las señaladas en la ley para el delito o falta cometidas (art. 1 y 32 CP) y, por supuesto, después del oportuno juicio público (art. 680 LECr), celebrado con toda suerte de garantías, en el que se desvirtúe la presunción de inocencia (arts. 24. 1ª CE) del imputado. La sentencia ha de estar motivada (arts. 24. 1ª y 120.3ª de la CE) y podrá ser recurrida en los casos previstos en la Ley. Su ejecución se llevará a cabo en la forma prevista en el ordenamiento (art. 3CP) bajo el control del juez de vigilancia penitenciaria (art. 76 LOGP), etc.”;* en GARCIA-PABLOS DE MOLINA, A. Tratado de..., cit., pp. 180-182.

¹⁵⁰ ROLDAN BARBERO, H. Introducción a la investigación..., cit., p. 9.

incautación, de acuerdo a los principios fundamentales de libertad, estado de derecho, humanidad, proporcionalidad, exigibilidad y adecuación¹⁵¹.

La instancia policial tiene como misión el mantenimiento del orden interno frente a las Fuerzas Armadas quienes se ocupan de la salvaguarda del orden exterior. Si bien, dentro del concepto ambiguo de orden interno tan sólo se ocupan de la prevención y represión de los hechos tipificados como delitos¹⁵².

Respecto a la administración de justicia, incluye no sólo a los tribunales sino también a los jueces, abogados y todos aquellos empleados y funcionarios del sistema judicial. Especialmente las decisiones judiciales suponen una cierta competencia de clasificación a las personas como delincuentes tras la celebración del proceso, atribuyéndole esta condición que con anterioridad no tenía¹⁵³.

¹⁵¹ NUÑEZ PAZ, M. A. Y ALONSO PEREZ, F. Nociones de..., cit., pp. 158-159.

¹⁵² Esta misión ha de contextualizarse en el estado de derecho que le dota de un carácter más transparente y abierto, brindando a los tribunales de justicia y a los representantes populares la facultad de ejercer control sobre esta institución, además resalta la necesidad de conseguir cierta vinculación social con los ciudadanos en términos de asistencia social. Dentro de su función destacan dos formas de control, represión y prevención, íntimamente relacionadas puesto que ambas difieren en los criterios aplicados de índole temporal y cuantitativa. La relación directa entre la represión y la prevención se explica porque ésta última es la respuesta que se da una vez se ha producido el hecho delictivo, mientras que la primera incide en las hipotéticas posibilidades de que aparezca el delito. Hay que tener presente que su actividad represiva es limitada, esta característica explica, de algún modo, el surgimiento de la cifra oculta de la delincuencia pues los hechos generalmente perseguidos se refieren principalmente a determinados estratos de la población, así, por ejemplo, su contacto directo con las capas más bajas de la población implica que no se denuncie un delito económico al no estar generalmente expandido en este ámbito. Estos obstáculos determinan su capacidad de represión limitada, provocando irremediablemente su influencia en la eficacia general preventiva de la labor policial, por una parte, sólo se alcanzará cierto nivel de coacción psicológica y, por otra, se verá modulada por agentes externos como la socialización previa del individuo. Son los primeros decisores sobre qué y quienes son sospechosos de vulnerar el orden interno establecido a partir de lo establecido en la propia ley y del marco general personal, de lugares, apariencias y comportamientos sospechosos, construido. De esta manera, son responsables de añadir una serie de pautas acerca de la selección, control y criminalización; en BERGALLI, R., BUSTOS RAMÍREZ, J. Y MIRALLES, T. El pensamiento criminológico II. Un análisis crítico, Temis, 1983, pp. 63-73; NUÑEZ PAZ, M. A. Y ALONSO PEREZ, F. Nociones de..., cit., pp. 159-160.

¹⁵³ Los portadores del control jurídico-penal tienen un papel relevante en mayor o menor grado en el control de la actividad judicial. Tal y como señaló SACK *"los jueces o el tribunal son instituciones que producen y aplican "realidad". La sentencia crea una nueva cualidad para el imputado, lo coloca en un status que no poseía sin la sentencia. La estructura social de una sociedad, que distingue entre ciudadanos fieles a las leyes y ciudadanos violadores de las leyes, no constituye un orden dado sino un orden producido continuamente de nuevo. Los mecanismos para la producción de este orden se pueden considerar como análogos a los mecanismos de reclutamiento que han sido puestos de manifiesto por la sociología de los estratos sociales y la sociología de los profesionales"*. Los elementos que intervienen en la construcción de las decisiones judiciales dependen en primer lugar de los caracteres más vinculados al juez tales como el rol que desempeña; en segundo lugar, trasladan a las sentencias su percepción acerca de las agencias emisoras del papel social y, por último, serán los propios ciudadanos quienes decidan si la actuación que esperaban del juez cumple con sus expectativas o no. Si bien, también los abogados pueden influir en la

Por último, la administración penitenciaria es la última instancia del sistema legal cuya misión consiste en ejecutar las penas privativas de libertad. Aquí, se ejercen el máximo nivel de autoridad sobre las personas¹⁵⁴.

Mientras que, la segunda modalidad de control, llamada informal, está formada por los agentes de los grupos primarios que durante el recorrido extenso de los procesos de socialización¹⁵⁵ y educación tienen la misión de asegurar que los individuos interioricen y acepten las pautas de conducta establecidas en la sociedad, que son transmitidas y aprendidas hasta que su conducta se convierta en conformista. Son los encargados de la formación y adaptación de los miembros de la comunidad puesto que su influencia es mayor al permanecer más próximos a él acompañándolo en todos los ámbitos de su vida, desde la familia, núcleo primario por antonomasia, pasando por la escuela y la instancia laboral, hasta que logre una actitud adecuada e idónea ajustada a los parámetros determinados en la sociedad que, en definitiva, sea conformista¹⁵⁶.

toma de decisiones judiciales ya que mediante su intervención en el proceso pueden contribuir a la condición de la actividad judicial. De hecho, a esta conclusión han llegado numerosas investigaciones sobre la actuación de estos profesionales. Las investigaciones norteamericanas al respecto han demostrado que el nivel de formación y la pertenencia a un estrato social ejercen influencia a la hora de tomar decisiones judiciales, junto a otros dos factores, la ética y que su actuación suele regirse preferiblemente de acuerdo a las exigencias de sus clientes por encima de sus principios profesionales; en BERGALLI, R., BUSTOS RAMÍREZ, J. Y MIRALLES, T. El pensamiento criminológico II. Un..., cit., pp. 73-90; NUÑEZ PAZ, M. A. Y ALONSO PEREZ, F. Nociones de..., cit., p. 160.

¹⁵⁴ Junto con la función de la pena privativa de libertad también vuelve a aparecer la disciplina de adaptación a las normas sociales transmitidas por las agencias informales. Esta disciplina será la base de la resocialización del sujeto; en BERGALLI, R., BUSTOS RAMÍREZ, J. Y MIRALLES, T. El pensamiento criminológico II. Un..., cit., pp. 95-119; NUÑEZ PAZ, M. A. Y ALONSO PEREZ, F. Nociones de..., cit., pp. 160-161.

¹⁵⁵ El origen de este concepto lo encontramos en la obra de SIMMEL que lo define como *“el proceso de conformación de la personalidad y a la continua transformación que a lo largo de todo ciclo vital experimentan los individuos gracias a la interacción, influencia y experiencias con otros individuos e instituciones sociales con los individuos entran en contacto a lo largo de su vida”*. Mientras que, también se puede explicar en los términos siguientes: *“el proceso de aprendizaje de las conductas sociales consideradas adecuadas dentro del contexto donde se encuentra el individuo en desarrollo junto con las normas sociales y valores que rigen esos patrones conductuales”*; en RIO RUIZ, M. A. *“Proceso de socialización: conceptos, funciones, tipos y agentes”*, p. 1. Disponible en: http://www.aloj.us.es/criminoticias/archivos/apuntes/soc_crim/Tema3_2parte.pdf. (Consultado el 04/05/2016); YUBERO, S. *“Socialización y aprendizaje social”*, en PAEZ ROVIRA, D., FERNANDEZ SEDANO, I., UBILLOS LANDA, S. Y ZUBIETA, E. (coords.). *Psicología social, cultura y educación*, 2005, p. 819.

¹⁵⁶ Obviamente, entre los agentes informales de control destacan por su relevante papel a lo largo de los procesos de socialización y educación de las personas los ámbitos familiar, escolar, laboral y los medios de comunicación. La familia es la primera autoridad a la que se somete el sujeto, desde esta instancia comienza a aprender las posiciones de sometimiento y amoldamiento a la convivencia social, basada en un criterio de carácter sociológico que produce un conjunto de reglas de conducta de acuerdo a los roles sociales impuestos, conforme el niño va creciendo su papel atribuido dentro de la familia va

La eficaz prevención de la delincuencia no descansa prioritariamente sobre la efectividad del control social formal más que en los mecanismos del control social informal, pues su efecto inhibitor también juega un papel relevante en la consecución de este fin. De manera que, para alcanzar cierto grado de prevención eficaz del fenómeno criminal es necesaria la colaboración e integración de ambos controles¹⁵⁷.

No hay que perder de vista que para afianzar la cohesión grupal pretendida es necesario requerir a los sistemas de control cierto grado de funcionalidad en su actuación, logrando un equilibrio entre los valores y bienes de carácter colectivo y la libertad de elección y realización personal, maximizando consecuentemente la conciliación de la transmisión y consolidación de los valores y bienes sociales básicos del grupo de pertenencia con los derechos, libertades y el respecto a la dignidad inherentes a las personas. Pues, en una situación de inexistente armonización entre los citados extremos, favorecería la aparición de problemas de disfuncionalidad y consecuencias criminógenas del sistema en dos sentidos alternativos, por una parte, la ausencia de control y, por otra parte, el control excesivo¹⁵⁸.

evolucionando y progresando hacia una participación más activa. En esta primera educación construida sobre valores morales aparecen los primeros controles sociales en la vida de los individuos. La escuela es la clave para el proceso de socialización en la medida en que incluye, por una parte, una estructura formal conformada por los procedimientos y programas preparados a efectos de la adquisición del currículo necesario que les capacitará para acceder al mercado laboral; y por otra parte, a los profesores y grupo de compañeros que le brindarán una serie de valores relativos al compañerismo, preocupación por los demás y responsabilidad, entre otros, a la vez que le ofrece situaciones más igualitarias en oportunidades. En cierto grado, su influencia se ve modulada por las actitudes de la familia que podrá suponer un refuerzo o un obstáculo a este tipo de educación. El ámbito laboral presenta un alto nivel de conformidad al depender del trabajador en gran parte su puesto de trabajo como ocurre con su permanencia en el mismo trabajo. En la esfera profesional, el control social ejerce un poder muy efectivo debido a que las desavenencias del trabajador pueden poner en peligro su continuidad en la pertenencia a la clase trabajadora que ofrece la recepción de un salario y la posibilidad de sentirse eficiente en la sociedad. Por último, los medios de comunicación de masas se han convertido en un gran mecanismo de control social debido a que intervienen cada vez más en el proceso de socialización tanto de niños como de adultos, ya vayan dirigidos a la educación o adoctrinamiento o bien a transmitir y perpetuar los valores sociales aceptados; en NUÑEZ PAZ, M. A. Y ALONSO PEREZ, F. Nociones de..., cit., pp. 156-158.

¹⁵⁷ GARCIA-PABLOS DE MOLINA, A. Criminología. Una introducción..., cit., p. 190.

¹⁵⁸ Estos obstáculos, para KAISER, al aseguramiento del estado social y de derecho surgirían siempre que se cumpliera uno de los dos supuestos: *“si el control social es demasiado rígido y sólo segura la persistencia del sistema social, se dará lugar a conductas de protesta, rebeliones y erupciones violentas en sociedad. Si, en cambio, falta el control social se verá la sociedad igualmente en peligro de supervivencia”*; en HERRERO HERRERO, C. Criminología..., cit., pp. 183-184.

Este interés progresivo y creciente en la ampliación de estudio de este objeto criminológico constituye una consecuencia necesaria del viraje de esta ciencia hacia el nuevo paradigma o modelo del control apoyado sobre todo por los postulados del labeling approach. Atrás queda el paradigma etiológico dedicado a estudiar el fenómeno criminal examinado en exclusividad al delincuente bajo los presupuestos de la Criminología Positivista, para dar paso a una nueva concepción en la que el control social se convierte en un elemento decisivo junto con su principal protagonista. La teoría del etiquetamiento no comparte la concepción del sistema legal como la simple aplicación de la ley de acuerdo con los intereses generales que, sin embargo, no llega a cuestionar su contenido, sino que, destaca la dimensión sociológica de la ley debido a que son las propias instituciones sociales quienes deciden asignar a un sujeto determinado el status de criminal, dejando, por lo tanto, de lado la valoración jurídico penal del comportamiento del agresor. De esta manera, es lógico que las instancias sociales sean selectivas, esto es, que se orienten hacia las conductas de las clases sociales menos favorables asignándoles a sus comportamientos la condición de delictiva.

Ahora bien, aunque durante mucho tiempo ha primado la tendencia positivista, cada vez son más los trabajos que se interesan por los planteamientos del paradigma del control. El resultado supone, ante todo, un cambio del objeto y metodología típicos del positivismo criminológico que otorgaba un lugar central al autor del hecho penal, precisamente para dar un impulso al desarrollo del conocimiento de la estructura del control hacia la que había girado el paradigma del control, convirtiéndose en un objetivo principal de la Criminología en aras a ofrecer una visión crítica de la definición y del control de la criminalidad¹⁵⁹.

Una de las consecuencias más notables que pueden derivarse del examen del control social bajo este paradigma imperante es que ofrece vía libre a los criminólogos para que observen la realidad sin influencias normativas. Esto es, les brindan la oportunidad de realizar un análisis crítico y sistemático a fin de

¹⁵⁹ PEREZ ALVAREZ, F. Y DIAZ CORTES, L. M. Introducción a la Criminología..., cit., p. 103; BERGALLI, R., BUSTOS RAMÍREZ, J. Y MIRALLES, T. El pensamiento criminológico..., cit., pp. 24 y 146.

poder extraer las conclusiones acerca de cambios institucionales necesarios que en cuyo caso puedan suponer una revisión teórica¹⁶⁰.

1.4.4. Víctima

Si realizamos un breve repaso a la literatura científica con el propósito de hacer una primera aproximación a la noción de víctima, nos encontramos la existencia de múltiples conceptos tales como víctima, sujeto pasivo o perjudicado que, aunque en ocasiones se utilizan indistintamente sin mayores matizaciones, la realidad es que no son completamente sinónimos.

De entrada, hay que señalar que, en todas las categorías converge el elemento común consensuado para la mayoría de los investigadores en la materia, que es la capacidad de sufrimiento que solamente la persona física puede experimentar de forma subjetiva. En sintonía con esta idea de sufrimiento, uno de los significados que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua le otorga a la víctima coincide precisamente con la *"persona o animal sacrificado a destinado al sacrificio"*. Y, siguiendo el mismo sentido, las Naciones Unidas la describen en plural, en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, como: *"las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencias de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder"*.

Como se puede comprobar, en cambio, la persona jurídica no tendría cabida bajo estas premisas por la simple razón de que no puede experimentar ninguna sensación de malestar ante la lesión de un bien jurídico protegido.

El tercer elemento se asocia con el sujeto pasivo que coincide con el titular del bien jurídico protegido lesionado o puesto en peligro. Sin lugar a dudas, puede asumirse perfectamente que esta acepción forma parte del significado anterior

¹⁶⁰ ELBERT, C. A. Manual básico de..., cit., pp. 13-14.

de víctima, si bien, sólo contempla a los afectados por delitos. Es obvio que, nadie tendría reparo en considerar víctima a la persona fallecida a consecuencia de un homicidio o al individuo a quien le han robado, siendo en los dos casos, los titulares del bien jurídico protegido en cuestión.

Sin embargo, en ocasiones, la distinción entre sujeto pasivo y perjudicado plantea más inconvenientes. El perjudicado se refiere a la persona que, sin pertenecer al ámbito del sujeto pasivo, esto es, no es el titular del bien jurídico protegido, pero, aun así, resulta dañado al recibir las consecuencias negativas del hecho punible y, en consecuencia, tiene derecho al resarcimiento civil de los perjuicios sufridos. Si consideramos el ejemplo del homicidio al amparo de esta acepción, los perjudicados serán los familiares del fallecido en cuanto sufren un daño a consecuencia de la comisión del homicidio sin que ellos sean la víctima o el titular del bien jurídico. En concordancia con esta categoría, en los Principios y Directrices sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones de las Normas de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, aprobados en la resolución 60/147 de la Asamblea General celebrada en el año 2005, se afirma que *"... el término víctima también comprenderá a la familia inmediata a las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia y víctimas en peligro para impedir la victimización"*.

En este punto conviene resaltar que, parte de los programas de ayuda, asistencia o protección destinados a las víctimas de delitos violentos incluyen disposiciones dirigidas a los familiares directos del sujeto pasivo del delito. No obstante, no es el ámbito legal el único que muestra interés en la figura del perjudicado puesto que, la mayoría de las asociaciones que representan la defensa de los intereses de las víctimas también les brindan su apoyo y asistencia como luego se verá en el epígrafe correspondiente.

Expuestos someramente estos conceptos, se puede afirmar que la víctima puede ser considerada no sólo aquella que directamente sufra las consecuencias negativas de un hecho delictivo –se sigue un concepto estricto de delito sin que se amplíe a los hechos antisociales- sino que también se considere a sus

familiares. Así, podemos adscribirnos a la definición de víctima de BORJA según la cual será *"aquella persona física que sufre directa o indirectamente, en su persona, bienes o derechos, los perjuicios derivados de la perpetración del hecho delictivo, sea como titular del bien jurídico protegido (sujeto pasivo, ofendido o agraviado), sea como paciente sobre el que se despliega la acción ilícita (sujeto de la acción), sea como ciudadano que ve mermado cualquier otro interés que pueda ser evaluado moral y económicamente (perjudicado)"*¹⁶¹.

Sin embargo, pese a que la figura victimal ha existido desde la comisión del primer delito, se le considera la gran olvidada de las investigaciones científicas hasta el surgimiento del movimiento victimal durante los años cuarenta. Si bien es cierto que, en contadas ocasiones, la ciencia criminológica sí que se ha fijado en la víctima y su problemática a pesar de ocuparse de ella en un momento posterior a la figura del delincuente y de una manera más laxa. En este sentido, encontramos importantes autores bajo la hegemonía de la Escuela Positiva que vieron la relevancia e importancia de esta cuestión para el desarrollo de la política criminal, aunque ninguna de sus aportaciones, que implican pequeños pasos hacia la transformación de la situación de las víctimas, se ha considerado con la entidad suficiente para presentarse como prácticas victimológicas. En efecto, se trata fundamentalmente de propuestas dirigidas a la compensación de la víctima y es interesante que veamos por adelantado las más relevantes.

Probablemente, uno de los aspectos más reseñables de la obra "Crimen, causas y remedios" de LOMBROSO, es el hecho que remarca en un par de párrafos la idea de la reparación de la víctima mediante su indemnización a cargo del agresor, correspondiendo las labores de determinar la compensación y asegurar los bienes del delincuente al Juez. Mientras que, FERRI propuso la reparación de la víctima sobre la base de que: a) sería el instrumento que releva a la pena de prisión a pesar de que supondría sancionar con una "real distinción de clase"; b) el trabajo del reo se aplicaría al pago por cumplimiento; c) se concedería en el caso de delitos menores; d) es una obligación del delincuente con la víctima; e) desempeñaría una función social por parte del Estado. Esta

¹⁶¹ BORJA JIMENEZ, E. Curso de Política Criminal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 61-68.

estructura de compensación de la víctima la construye tras percatarse que *"la víctima del crimen ha sido olvidada, aunque esta víctima produce una simpatía filantrópica mayor que la que provoca el criminal que ha producido el daño"*, pues es cierto que *"la atención completa de la escuela clásica se ha concentrado en la entidad jurídica del crimen"*¹⁶².

Sin llegar a realizar propuestas de mejora PRINS cuestionó y denunció el trato que recibe la víctima del delito comparándolo con el paso del delincuente por el centro penitenciario y la situación en la que se encuentra, incidiendo en que *"el hombre culpable, alojado, alimentado, calentado, alumbrado, entretenido, a expensas del Estado en una celda modelo, salido de ella con una suma de dinero legítimamente ganada, ha pagado sus deudas con la sociedad... pero la víctima tiene su consuelo, puede pensar que con los impuestos que paga al Estado ha contribuido al cuidado paternal que ha tenido el criminal durante su permanencia en la prisión"*¹⁶³. Al igual que el autor anterior, GARÓFALO, aun sin llegar a adoptar un posicionamiento tan crítico como aquél, dedica unas palabras a las víctimas de los delitos, *"esta clase de personas a que todo ciudadano honrado puede tener la desgracia de pertenecer, debía merecer que el Estado les dirigiese una mirada de benevolencia, una palabra de consuelo. Las víctimas de los delitos debían, seguramente, tener derecho a mayores simpatías que la clase de delincuentes, que parecer ser la única de que los actuales legisladores se preocupan"*. *"Defenderé la causa de los oprimidos por la maldad humana con el mismo ardor con que otros suelen combatir en defensa de los malhechores"*¹⁶⁴.

Con todo, es irremediable realizar un breve recorrido por la evolución de la investigación criminológica con la finalidad de averiguar por qué no se han invertido tantos esfuerzos en estudiar a la víctima. A su vez, esta aproximación nos permitirá tener una visión del estado actual de la ciencia criminológica en España que en este estudio es la que nos interesa.

¹⁶² PETERS, T. *"Criminología y Victimología"*, en BERISTAIN, A. Y DE LA CUESTA, J. L. (Comps.). *Victimología*, Universidad del País Vasco, 1990, p. 99; RODRIGUEZ MANZANERA, L. *Criminología...*, cit., p. 7.

¹⁶³ LANDROVE DIAZ, G. *Victimología*, Tirant lo Blanch, 1990, p. 25.

¹⁶⁴ RODRIGUEZ MANZANERA, L. *Criminología...*, cit., p. 8.

1.5. Institucionalización y evolución científica de la Criminología en España

Con el progresivo estudio de los cuatro elementos de investigación de esta disciplina científica relacionados, en primer lugar, con el delito y delincuente, y, con posterioridad, con las nuevas incorporaciones de la víctima y del control social empieza a cobrar entidad esta ciencia en torno al estudio de la dinámica criminal abordado desde diferentes perspectivas dentro de la dimensión social. Al avance de la disciplina criminológica, en este caso en el ámbito español, ha contribuido la paulatina institucionalización de esta rama del saber en la universidad que prácticamente hasta los años cincuenta no tuvo lugar. Junto con ella, el desarrollo criminológico se encuentra directamente relacionado con un conjunto de actores que han ido modelando su propio destino y, entre ellos, destacan la celebración de los eventos criminológicos y la aparición de los laboratorios, institutos y revistas dedicadas específicamente a esta materia.

En relación con estos factores, puede entenderse la institucionalización de la Criminología, fechada en poco más de un siglo, como un fenómeno que consiste en proyectar su discurso científico tanto en los diferentes ámbitos institucionales como en el desarrollo de sus prácticas. Concretamente esta significación se traduce en su reconocimiento por los poderes públicos, del tal forma que, es la propia administración la encargada de decidir acerca de la creación de centros dedicados a la investigación sobre los aspectos relevantes de esta disciplina¹⁶⁵.

Un breve acercamiento a estos aspectos nos permitirá averiguar cuál es el estado actual de la ciencia criminológica española, cuáles son los obstáculos que impiden sus avances y, en cierta medida, cómo se puede mejorar las investigaciones en este ámbito y, así, contribuir a su evolución científica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, son pocos los autores que se han animado a realizar una verdadera aproximación exhaustiva a la evolución

¹⁶⁵ ROLDAN BARBERO, H. Introducción a la investigación..., cit., p. 16.

científica que ha tenido lugar en España, al igual que, excede de la pretensión última de este trabajo, y, por lo tanto, posiblemente no aparezcan reflejados algunos hitos que pueden ser considerados importantes en las próximas páginas.

A pesar de la proximidad temporal del inicio de este fenómeno científico en España, es cierto que, previamente ya se había dado los primeros pasos en lo que actualmente se denomina investigación criminológica, cuyo origen se remonta a la época del Estado moderno a partir del periodo comprendido desde el siglo XV hasta finales del siglo XVIII. Este periodo se caracterizó por los tímidos acercamientos al examen de cuestiones relativas a la vida cotidiana que se realizaron mediante la observación de los hechos, la consulta de documentos y alguna entrevista sencilla, por lo tanto, se emplearon herramientas que a día de hoy son fundamentales y que, además, pasaron prácticamente desapercibidas hasta el siglo XIX¹⁶⁶. En la primera mitad del siglo XVI, ALFONSO DE CASTRO, a lo largo de su obra sistematizó el derecho penal bajo un riguroso análisis de corte filosófico teológico. El establecimiento del conjunto de leyes se dirige a asegurar el orden público, por este motivo, se les concede un poder conminatorio e intimidatorio, aunque, bajo unos parámetros de justicia para evitar la producción excesiva de efectos nocivos sobre el delincuente. En este planteamiento, entiende que la finalidad de la pena será restablecer el daño ocasionado en el orden social, si bien, a la vez debe respetarse la adecuación de esta sanción a la proporción de manera que se aleje de la crueldad excesiva¹⁶⁷. Por su parte, LARDIZABAL, a finales del siglo XVIII, determinó que la pena, proporcional a la lesión del bien jurídico, persigue garantizar la seguridad de los ciudadanos y la vida pública, y, en última instancia, la corrección del delincuente para mejorarlo, descartando, sobre todo, cualquier clase de tratos inhumanos¹⁶⁸.

¹⁶⁶ ROLDAN BARBERO, H. Introducción a la investigación..., cit., pp. 16-17.

¹⁶⁷ Según las palabras de este autor *“la pena ‘no sólo se impone para aterrar a los demás, sino también para que el delito sea castigado (...). Ni sólo por esto se impone la pena; sino, además, para que los delitos se eviten y el delincuente, urgiéndolo la pena, recapacite y cambie la condición de vida”*. Por ello, *“para medir, adecuadamente el delito, no sólo ha de examinarse su pura entidad; es preciso analizar todas las correspondientes y oportunas circunstancias tanto con relación al delito como del delincuente, porque éstas pueden aumentar; disminuir o, incluso, anular la culpa”*; HERRERO HERRERO, C. Criminología... cit., pp. 85-86; NUÑEZ PAZ, M. A. Y ALONSO PEREZ, F. Nociones de..., cit., p. 83.

¹⁶⁸ En este sentido LARDIZABAL señala que *“la enmienda del delinquirente es un objeto tan importante, que jamás debe perderle de vista el legislador en el establecimiento de las penas. Pero ¿cuántas veces por*

Como se puede advertir al ver sus intereses, ambos autores fijaron las pautas del correccionalismo. La perspectiva que defienden está estrechamente vinculada con el derecho penal y el derecho penitenciario, en cuanto entienden la sanción penal como el instrumento para conseguir que la voluntad del delincuente se acomode al orden social establecido, de manera que, esta segunda educación proporcionada a quien comete el hecho delictivo beneficie tanto al propio individuo como al resto de la sociedad. Entre los máximos exponentes de esta corriente se encuentran, también, ARENAL, SILVELA, CADALSO Y MANZANO y GINER DE LOS RIOS a los que en epígrafes anteriores ya se han mencionado¹⁶⁹.

Pese a estas primeras prácticas que podrían tildarse de criminológicas, esta ciencia nació a finales del siglo XIX en el momento en que el delito, delincuente y las penas interesaron no sólo al campo jurídico, sino que, despertaron curiosidad en otros terrenos, así, por ejemplo, este interés se puso de manifiesto años después en el Curso de Neuropsiquiatría Forense y Criminología que tuvo una especial relevancia, a pesar de que, no tuvo demasiada repercusión internacional. Este evento se celebró del 1 al 15 de abril de 1954 en la Escuela de Medicina Legal de la Universidad de Madrid con el objetivo primordial de resaltar las actividades compartidas por la Escuela de Medicina Legal y el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, entre otros, relativas a la neuropsiquiatría forense y la criminología¹⁷⁰. No obstante, los tres ámbitos que efectivamente contribuyeron al reconocimiento de la Criminología fueron el

defecto de estas, en vez de corregirse el delinquente; se hace peor y tal vez incurable hasta el punto de verse la sociedad en precisión de arrojarle de su seno como miembro acangrenado, porque ya no le puedo sufrir sin peligro de que inficione á otros con su contagio? La experiencia nos enseña, que la mayor parte de los que son fueron, y tal vez, si se les hubiera impuesto otra pena, hubiera ganado la sociedad otros tantos ciudadanos útiles y provechosos. Esto prueba la indispensable necesidad que hay que establecer casas de corrección, de que hablaré después, sin las cuales nunca se podrán proporcionar las penas, de modo que produzcan el saludable efecto de la enmienda en los que aun sean capaces de ella"; HERRERO HERRERO, C. Criminología... cit., pp. 86-87; NUÑEZ PAZ, M. A. Y ALONSO PEREZ, F. Nociones de..., cit., p. 84.

¹⁶⁹ CADALSO Y MANZANO explicaba que *"el principio reinante es que a cada delito se imponga su pena. Pero como se prescinde del delincuente y del penado, el efecto práctico que se toca es mandar a hombres a presidio para que se corrompan y sacarlos, luego de corrompidos, a la sociedad para que ofendan con más fuerza y la pongan en mayor peligro que si hubieran quedado impunes los delitos"; HERRERO HERRERO, C. Criminología... cit., p. 92; NUÑEZ PAZ, M. A. Y ALONSO PEREZ, F. Nociones de..., cit., pp. 84-85.*

¹⁷⁰ SERRANO GOMEZ, A. Historia de la..., cit., pp. 626.

penitenciario, el policial y el universitario -los dos primeros siempre vinculados al examen del control social- en los que el estudio jurídico del delito cedió paso al examen analítico del delincuente¹⁷¹.

El precedente más cercano de la primera institución oficial que comenzó a funcionar fue el Laboratorio de Criminología que se mantuvo activo durante dos años desde su creación en 1899. Mientras permaneció abierto tuvieron lugar dos cursos de carácter criminológico cuyo contenido versaba sobre las aportaciones de los autores más relevantes de aquel momento, como GARÓFALO, FERRI o TARDE, si bien, su creador, GINER DE LOS RÍOS, impartió la parte en que se hacía referencia a LOMBROSO. No obstante, el hito que marcó el nacimiento de la Criminología en España, sucedió exactamente en el cambio de siglo, esto es, en el año 1903 cuando se creó la Escuela de Criminología en Madrid mediante un Real Decreto. Con una clara intención docente, el programa de estudio, marcado por la influencia de los principios propios del tratamiento y mejora de los penados de la teoría de la tutela penal o correccionalismo, estaba dirigido, por una parte, a los alumnos que aspiraban a ingresar en el cuerpo de instituciones penitenciarias y, por otra parte, a aquellos funcionarios de prisiones pertenecientes a la escala auxiliar que quisieran ascender a la escala técnica. En los Decretos elaborados en los años 1903 y, específicamente, en 1913, se contempló la necesidad de proceder a la observación, clasificación y tratamiento de los penados en cuanto al cumplimiento de sus condenas. Posteriormente, en 1930, en la misma línea, el Reglamento Orgánico de los Servicios de Prisiones volvió a remarcar la institución del tratamiento individualizado dirigido a los condenados con penas de reclusión y prisión. Tres años más tarde, se incorporaron los "anexos" de carácter psiquiátrico junto con el llamado Servicio de Biología criminal en las prisiones de Madrid. No cabe duda de que ha habido intentos serios de realizar una Criminología clínica, no obstante, el resultado no ha obtenido los frutos deseados, quizá en parte, por la carencia de desarrollo y profundidad que precisaban las iniciativas planteadas, por la falta del personal

¹⁷¹ ROLDAN BARBERO, H. Introducción a la investigación..., cit., p. 17.

cualificado para cumplir con este fin o, incluso, porque no existían lugares óptimos para su correcta materialización¹⁷².

Por lo tanto, previamente a la celebración de los Congresos Internacionales sobre Criminología en España, ya se puso de manifiesto la necesaria colaboración entre los ámbitos criminológico y el penitenciario. Respecto a los Congresos sobre este último campo que tuvieron lugar en los años 1909, 1914 y 1920 fueron los lugares idóneos para incidir en que el correcto tratamiento de los condenados debe combinar el conocimiento criminológico y la práctica penitenciaria¹⁷³.

En el segundo campo en que comenzaron a impartirse contenidos criminológicos fue en el campo policial que coincidió en el tiempo con el movimiento penitenciario. La materia que mereció más atención dentro de los intereses de este ámbito fueron las técnicas de identificación, donde precisamente ese esfuerzo de investigación policial dio como resultado en el año 1913 la aparición de la primera revista denominada "Policía Científica"¹⁷⁴.

Por último, la Criminología en el ámbito universitario tardó un tiempo adicional en hacerse un hueco, debido, en parte, a motivos ajenos a JIMÉNEZ DE ASÚA que fue precisamente el primero en tratar de introducir esta materia en la vida universitaria. El estallido de la guerra civil truncó su intención de convertir la Escuela de Criminología -llamada en ese tiempo Instituto de Estudios Penales- en una cantera de investigadores dedicados a esta disciplina para la universidad. No fue hasta 1955 cuando se creó el primer Instituto de Criminología en la Universidad de Barcelona, si bien, a partir de éste, la figura de los Institutos de Criminología se generalizó y expandió a otras universidades españolas, así, el siguiente se implantó en la Universidad Complutense de Madrid en 1964. Hasta la década siguiente no siguieron con este ejemplo de instauración las ciudades de Valencia, Santiago de Compostela y San Sebastián. Posteriormente, se creó en Andalucía a principios de los años noventa, aunque, conviene precisar que,

¹⁷² ROLDAN BARBERO, H. Introducción a la investigación..., cit., p. 17; SERRANO GOMEZ, A. Historia de la..., cit. pp. 93-95; NUÑEZ PAZ, M. A. Y ALONSO PEREZ, F. Nociones de..., cit., p. 82.

¹⁷³ NUÑEZ PAZ, M. A. Y ALONSO PEREZ, F. Nociones de..., cit., pp. 81-82.

¹⁷⁴ ROLDAN BARBERO, H. Introducción a la investigación..., cit., p. 19.

Córdoba contó con una sección delegada del Instituto de Criminología de Madrid desde 1985 hasta 1991, aunque, primó en ellos la actividad académico-docente en vez de la investigación al estar integrados en las Facultades de Derecho¹⁷⁵.

A pesar de los esfuerzos efectuados por los defensores de la ciencia criminológica consistentes en introducir su estudio en los centros oficiales no se puede afirmar la existencia de una correlación directa con el incremento de su investigación. De hecho, no se puede postular una relación directa entre el esfuerzo realizado y la investigación, en el sentido de que, a mayores esfuerzos de reconocimiento de la Criminología se han obtenido mayores investigaciones de entidad suficiente en este ámbito. Sobre esta desconexión se han aportado varios motivos.

Una de las reflexiones más interesantes nos la ha proporcionado SERRANO GOMEZ cuando al referirse a la causa explicativa de esta desconexión repara en la vuelta experimentada durante los años 70 del pasado siglo, que se traduce en la recuperación de los postulados de la Escuela Clásica por los penalistas más preocupados por las cuestiones de la dogmática jurídica. Este redescubrimiento de los valores clásicos se impuso al movimiento del impulso criminológico, incluso, parte de la doctrina receló de los autores que continuaron dedicándose al saber empírico¹⁷⁶.

Durante esa misma época, el Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid organizó el VI Congreso Internacional de Criminología llamado "Investigación científica en Criminología", durante los días 21 a 19 de septiembre de 1970. Este evento quedó estructurado en torno a cinco secciones dedicadas cada una de ellas al debate de cuestiones relevantes en aquel momento, a saber: 1) la primera sección se destinó a tratar los problemas generales de la investigación científica de la ciencia; 2) la segunda abordó temas relativos a las investigaciones llevadas a cabo en el terreno de la probación y sus medidas análogas como pudiera ser la libertad provisional; 3) por su parte, la

¹⁷⁵ ROLDAN BARBERO, H. Introducción a la investigación..., cit., p. 19; HERRERO HERRERO, C. Criminología..., cit., p. 129.

¹⁷⁶ ROLDAN BARBERO, H. Introducción a la investigación..., cit., p. 19.

tercera se dirigió a los problemas subyacentes a su metodología; y las últimas sesiones se dedicaron a las investigaciones puestas en marcha¹⁷⁷.

En la primera de ellas, el debate se centró principalmente en tres aspectos, en primer lugar, en la necesaria colaboración con el derecho penal, pues uno de los objetivos de esta disciplina consiste en informar al legislador penal acerca de los preceptos legales que deben ser reformados, aunque para poder lograr esta finalidad en un futuro conviene superar el principal obstáculo, sus diferentes perspectivas ya que el sector penalista, a título ilustrativo, defiende el carácter retributivo de la pena, posición no compartida por los criminólogos quienes no apuestan por su utilidad para la recuperación del delincuente. Esta colaboración también se predica no con otras ciencias sino con su propia enseñanza, de tal forma que, reforzar su vinculación tendrá un efecto positivo en el desarrollo de la investigación criminológica. Esta coordinación se hace indispensable en el contexto en que se desea conseguir la pretendida interdisciplinariedad de las ciencias debido al incremento del número de profesionales que provienen de otros saberes¹⁷⁸.

En la segunda parte, se constató la inexistente evolución de los sistemas penitenciarios. Este estado tiene su reflejo en dos direcciones, por una parte, no existen resultados determinantes acerca de la efectividad de la pena sobre la reincidencia, esto es, cuál tiene un impacto más beneficioso o, si existen, otros sistemas alternativos más favorecedores que eviten la reincidencia. Por otra parte, sí se ha demostrado que los factores de la conducta criminal son los mismos que pueden afectar a la libertad provisional y, en consecuencia, se convierte en indispensable su examen con anterioridad a la concesión de este beneficio¹⁷⁹.

En lo que respecta a la metodología, no existe consenso sobre el sistema metodológico idóneo para la investigación criminológica porque cada uno de los profesionales tiende a optar por el suyo de formación. Además, también se

¹⁷⁷ SERRANO GOMEZ, A. Historia de la..., cit. pp. 623-625.

¹⁷⁸ SERRANO GOMEZ, A. Historia de la..., cit. pp. 623-625.

¹⁷⁹ SERRANO GOMEZ, A. Historia de la..., cit. pp. 623-625.

plantearon una serie de objeciones a las estadísticas criminales sobre todo al no atender a la llamada cifra negra pues si no se toma en consideración esta medida difícilmente se puede alcanzar el rigor científico necesario¹⁸⁰.

Con otro hilo argumental, llama la atención la postura mantenida por RIVERA, BERGALLI y VAN SWAANINGEN, quienes se muestran convencidos de que el problema del escaso índice de respuesta emitido por los estudiosos reside en los llamados "males endémicos de la universidad española". El primero de ellos, achaca a motivos puramente de control su llamado "despertar" de la Criminología, en la medida en que, esta disciplina se ha abierto un hueco en la enseñanza universitaria tan sólo para captar más clientes, hecho que tiene su reflejo en la creación paralela de puestos de docentes controlados por el poder académico. El segundo autor identifica la aparición y mantenimiento del auge de este campo no tanto en el interés científico suscitado sino, precisamente, en la confluencia de beneficios y ventajas de los propios profesionales académicos. Por último, el tercero, asocia el contexto de crisis generalizado en el estudio de estas materias con la visión simplista de la comunidad universitaria caracterizada por su desconfianza y estrechez de miras hacia otros terrenos de conocimiento. Este planteamiento ha sido matizado por ROLDAN BARBERO, pues a pesar de que se adscribe a esta crítica, incide en que el reconocimiento de la Criminología no tiene por qué quedarse estancado en este ámbito institucional. Debe trascender de sus fronteras ya que una cosa es la institución y aquellos que ejercen su control y, por otra parte, en un nivel individual, se encuentran sus profesionales que pueden desarrollar su labor dentro de ella.¹⁸¹

Con posterioridad, los días comprendidos entre el 15 y el 22 de junio de 1980 tuvo lugar la celebración del XXIX Curso Internacional de Criminología organizado por la Fundación Bartolomé de Carranza, la Sociedad Internacional de Criminología y la Diputación Foral de Navarra. Fruto del mismo, se publicó una obra que integró un total de 44 artículos distribuidos a lo largo de cinco apartados, dirigidos, respectivamente, a la introducción general, "nuevas

¹⁸⁰ SERRANO GOMEZ, A. Historia de la..., cit., pp. 623-625.

¹⁸¹ ROLDAN BARBERO, H. Introducción a la investigación..., cit., p. 20.

democracias”, “otras democracias”, “situaciones de corrientes y disciplinas criminológicas”, “seminarios” y “mesas redondas”¹⁸².

A partir de 1980, HERRERO pone el énfasis de la caracterización de la ciencia criminológica en cinco aspectos. Primero, la ruptura del casi-monopolio de los juristas en la investigación criminológica sobre todo los relacionados con el ámbito del Derecho penitenciario. Cada vez más, se publican estudios de autores procedentes de otros campos como la sociología, psiquiatría, pedagogía y especialmente de las ciencias del comportamiento¹⁸³. Sin embargo, puede surgir un problema metodológico en los supuestos en que los investigadores recurran exclusivamente a la aplicación de los métodos de su disciplina de origen sin lograr una integración con los conocimientos o métodos criminológicos, pues, se caería en el absurdo de analizar un objeto de la Criminología desde sólo un punto de vista sin lograr la integración de saberes o sin el avance de la metodología propia desde esta ciencia.

En segundo lugar, destaca la primacía de las teorías de la criminalidad en la explicación del delito sobre las teorías de la criminalización en cuanto señalan sus factores causantes de naturaleza psicobiológica, psicomoral o mantienen visiones eclécticas¹⁸⁴.

Tercero, el autor sigue explicando que es cierto que hemos asistido a un crecimiento de la presencia académica de esta ciencia puesto que, como ya se ha mencionado, se han creado numerosos institutos o centros dedicados a su estudio, al igual que, se imparten grados, seminarios y cursos sobre esta materia científica¹⁸⁵. No obstante, a pesar de su mayor relevancia en la vida académica no ha habido un correlativo aumento de la actividad investigadora de carácter empírico y aun cuando se lleva a cabo desde este enfoque suele realizarse de manera autónoma por personas y no por equipos coordinados en su labor¹⁸⁶.

¹⁸² SERRANO GOMEZ, A. Historia de la..., cit., p. 625.

¹⁸³ HERRERO HERRERO, C. Criminología..., cit., pp. 129-130.

¹⁸⁴ HERRERO HERRERO, C. Criminología..., cit., pp. 129-133.

¹⁸⁵ HERRERO HERRERO, C. Criminología..., cit., pp. 129-133.

¹⁸⁶ HERRERO HERRERO, C. Criminología..., cit., pp. 129-130.

Finalmente, y como consecuencia inmediata de la característica anterior, no existen escuelas de origen español, sino que, se han aceptado las bases teóricas criminológicas que provienen del exterior de nuestro país¹⁸⁷. En línea con esta afirmación, hay que tener presente que, el contexto criminológico español presenta ciertas diferencias respecto al ámbito internacional y puede no existir una plena aplicabilidad directa de sus postulados. Es cierto que cumple con los rasgos generales de la ciencia, juventud y apertura, a pesar de que, no se han desarrollado teorías o corrientes propias ya que todas han sido importadas. No obstante, además de las dificultades a las que se enfrenta la ciencia criminológica en cualquier lugar, en España tiene unos obstáculos añadidos para su correcta implantación y próspero desarrollo. En este sentido, su evolución se ve limitada principalmente por los siguientes escollos: su institucionalización, aunque reciente, continúa siendo insuficiente a día de hoy; la escasa producción científica relevante en esta materia; la ausencia de un reconocimiento de autoridad científico y sobre todo social y, por último, la no profesionalización de la disciplina.

A partir del conjunto sistemático de conocimientos teóricos y prácticos acerca de sus elementos de investigación se debe construir la profesión del criminólogo. Ahora bien, es requisito indispensable que esta profesión incluya los conocimientos teóricos y prácticos organizados, la vertiente práctica de las teorías para adaptarlos a la realidad social, un código deontológico regulador de las prácticas de sus profesionales y una cultura profesional conformada por los congresos y revistas dedicados a esta materia. Sin embargo, esta profesión no se ha llegado a generalizar. Además, esta generalización debería llevar implícito el reconocimiento social sobre su labor concretada en ciertas actividades que sólo el criminólogo estaría en condiciones de desempeñar correctamente y el apoyo de las instituciones que le favorecieran en su producción intelectual y en la integración de futuras generaciones de criminólogos profesionales, debido a que en el momento en que se reconociera su actividad la figura del criminólogo estaría en condiciones de poder optar a las instituciones.

¹⁸⁷ HERRERO HERRERO, C. Criminología..., cit., pp. 133-134.

La Criminología se ha caracterizado por un recorrido plagado de incertidumbres sobre todo respecto a su funcionalidad práctica en la propia realidad. Su historia no ha ayudado a desbancar esta concepción, al contrario, su pesimismo ha calado hasta el extremo de que ciertos sectores han afirmado que sus intervenciones no han producido efecto alguno y que, en ciertos casos, sus resultados han sido contraproducentes. Estos obstáculos son claramente perceptibles en la preocupación en materia de inseguridad, pues hay una tendencia que se ha ocupado de reducir considerablemente el mérito de múltiples reformas sociales han contribuido de manera fehaciente en la mejora de la calidad de vida de grupos determinados, a la reducción de la victimización y al aseguramiento de las libertades personales. Posiblemente, la excesiva atención prestada al aspecto contrario, relativo a la introducción de mayores controles y restricciones, haya eclipsado la aparición de registros escritos sobre esta hazaña, en definitiva, que se haya desmerecido uno de los mejores desarrollos de esta ciencia. Sin embargo, como dirían los criminólogos realistas, los pequeños logros se convierten en pequeñas ganancias que, a su vez, estas pequeña reformas y avances conducirán a ulteriores y mejorados desarrollos¹⁸⁸.

A día de hoy, GARCIA-PABLOS señala que la ciencia criminológica acentúa cada vez más su independencia respecto al Derecho penal, en la medida en que, pretende comprender el hecho criminal desde la realidad social y la propia visión del desviado –matiza que se suaviza el lenguaje empleado, optando por la utilización de los términos comportamiento desviado y desviado en vez de delito y delincuente-, avanzando y profundizando en los aspectos criminales vigentes como la delincuencia financiera o las nuevas modalidades delictivas. Ante la imposibilidad de erradicar los niveles de delincuencia por completo se persigue controlarlo dentro de ciertos parámetros considerados normales o aceptables para la sociedad, de aquí surge la especial apuesta de la Criminología por su labor de prevención. No obstante, amplía su atención más allá del delincuente, interesándole las figuras de la policía, procedimiento penal y, especialmente el control social, todo ello, sin olvidar a la víctima ya sea analizando el riesgo de

¹⁸⁸ MATTHEWS, R. Criminología realista..., cit., p. 75.

victimización para evitar futuras victimizaciones, en la colaboración de mejora de la relación con el sistema penal y, finalmente, el diseño de programas de reparación de la víctima.

En definitiva, después de realizar este breve recorrido con los inconvenientes que se han planteado al inicio de este epígrafe, podemos observar que, el desarrollo de la ciencia criminológica en España ha estado unido de manera especial con al ámbito penitenciario. A pesar de los esfuerzos que se han llevado a cabo para que proliferen las investigaciones científicas en este campo no han obtenido un resultado satisfactorio y una de las razones que quizá se podría tratar de solventar es la escasa profesionalización del criminólogo en España. Mediante la incorporación de este especialista al terreno laboral se contribuiría a la investigación científica en esta materia debido a que sería imprescindible construir conocimiento teórico para un correcto desempeño práctico de su labor.

1.6. Toma de postura

Hoy en día la mayoría de criminólogos contemporáneos estaría de acuerdo en afirmar que esta ciencia, caracterizada por ser empírica y por su especial orientación aplicada, se centra en el análisis del delito, el delincuente, el control social y la víctima. Si bien, a pesar de su apertura tanto a los conocimientos provenientes de otras disciplinas como a los nuevos desafíos que pueden surgir en una realidad cambiante, su juventud y, especialmente, el estado actual del desarrollo de la Criminología en España ha marcado su avance y evolución. Es cierto que, paulatinamente se han ido aunando más esfuerzos en los estudios focalizados hacia el control social –que actualmente son los que dominan el panorama- y la víctima, aunque, ésta última continúa siendo la menos investigada desde la perspectiva criminológica. Por lo tanto, es imprescindible para el progreso de esta disciplina centrarse prioritariamente en la intervención de la víctima pese a los escasos avances manifestados en su desarrollo teórico. La labor del criminólogo en esta materia puede convertirse en esencial en la medida en que su proximidad y visión integral acerca del fenómeno de las victimizaciones

presentes en la misma pueden contribuir a su reparación y consecuente desvictimización. En definitiva, la orientación práctica de la tarea de estos profesionales en el ámbito de las víctimas aun cuando no exista un cuerpo de conocimiento sólido que pueda guiar su labor, puede contribuir a la progresión y mejora en los programas de ayuda, asistencia y reparación destinados a las víctimas.

El propósito del recorrido que se ha trazado a lo largo de las diferentes premisas básicas sobre las que se fundamenta la Criminología -en cierta medida con una extensión significativa- que nos ha ocupado en el presente capítulo no ha sido otro que definir de una manera más precisa el marco teórico sobre el que se va a abordar este trabajo de investigación. En este sentido, el estudio de los derechos que integran las políticas de asistencia, ayuda y protección concedidos a las víctimas del terrorismo se realizará, en el capítulo correspondiente, desde la perspectiva de la ciencia criminológica, de aquí que, las cuestiones relativas a las definiciones amplias de la Criminología y la víctima como su elemento de investigación, ambas analizadas en los epígrafes precedentes, nos ayudarán en el capítulo segundo a la hora de posicionarnos a favor o en contra de que la Victimología, cuyos defensores entienden que la víctima es su objeto de estudio y no el de la Criminología, se ha convertido en una ciencia autónoma o, por su parte, es una rama de la ciencia criminológica. Mientras que, las indicaciones que se han señalado cuando hemos considerado esta ciencia como interdisciplinaria, empírica y aplicada nos guiarán tanto en el momento en que se aborde, con un mayor detenimiento, la interdisciplinariedad que subyace entre la relación que mantienen las ciencias jurídica y criminológica como en la lectura y explicación criminológica que se realice sobre las normativas estatal y autonómicas relacionadas con las políticas de protección y asistencia de las víctimas del fenómeno terrorista. A su vez, el carácter empírico de la Criminología se volverá a poner de manifiesto en el capítulo quinto donde se valorará la conveniencia de los derechos establecidos de acuerdo a la experiencia personal de un determinado número de víctimas directas o indirectas que han decidido voluntariamente participar en la entrevista propuesta. De esta manera, se volverá a incidir en la relación de interdisciplinariedad dialéctica entre ambos ámbitos, en

la medida en que, el estudio criminológico de esta normativa protectora puede proponer una mejora legislativa en la misma en base al estudio empírico y, por su parte, los derechos recogidos en las disposiciones legales pueden informar a la Criminología a la hora de establecer futuros programas de reparación y desvictimización de otro tipo de víctima.

CAPÍTULO 2. VICTIMOLOGÍA

En el presente Capítulo se van a abordar las cuestiones relativas a la Victimología en cuanto ha sido definida como “*el estudio científico de las víctimas*”. Bajo esta expresión subyace la especial preocupación del movimiento a favor de las víctimas sobre las circunstancias y problemas que envuelven a esta figura, especialmente, al afectado por el delito, tal y como se puso de manifiesto, durante la celebración del I Simposio Internacional en la ciudad de Jerusalén en el año 1973¹⁸⁹.

Con este propósito se va a hacer referencia, primero, al origen de esta materia y, tras este inciso, se va a realizar un breve análisis de la evolución de los Simposios Internacionales que han tenido lugar desde su comienzo hasta la actualidad. A continuación, se examinarán las diversas definiciones propuestas sobre la Victimología, el objeto de investigación que coincide con la víctima y, más tarde, se delimitarán las funciones que persiguen los especialistas de esta materia. De acuerdo con estas precisiones se podrá averiguar cuál es la tarea que el profesional de esta disciplina puede desempeñar.

Después de acercarnos a los aspectos reseñados en el párrafo anterior, estaremos en disposición de dilucidar si la denominada Victimología es una ciencia autónoma y, por lo tanto, independiente de la Criminología o, por su parte, forma parte de la ciencia criminológica. Para este cometido será imprescindible estudiar su concepto, objeto y metodología y comparar estos elementos con los establecidos para la Criminología.

¹⁸⁹ LANDROVE DIAZ, G. Victimología..., cit., pp. 19-20.

2.1. Origen de la Victimología

Se suele leer con bastante frecuencia que la investigación sobre víctimas fue prácticamente inexistente hasta el surgimiento de voces autorizadas a favor de este colectivo datado alrededor de los años cuarenta. Algunos afirmaron que precisamente en esa fecha la historia victimológica tiene su origen coincidiendo con la publicación de una serie de obras orientadas hacia la investigación de las víctimas. A pesar de su reciente aparición, con anterioridad a la fundación de la Victimología como centro neurálgico del interés mostrado por un grupo de investigadores hacia los afectados por los hechos delictivos, es cierto que hubo algunos acercamientos a la figura victimal. De hecho, como ya se adelantó en la primera parte del presente estudio, ciertas cuestiones que continúan siendo debatidas en la actualidad, pueden localizarse en el contexto criminológico del que proceden. Entre ellas, la reparación de la víctima o la forma en que el entramado estatal las ha tratado fueron temas abordados ya por LOMBROSO, FERRI, PRINS y GAROFALO, mucho antes de la reivindicación de este movimiento y, por esta razón se les puede considerar los precursores de lo que hoy en día constituye el quehacer científico en el campo de las víctimas.

Sin perjuicio de que, la aparición de la figura de la persona víctima se remonta mucho más atrás en el tiempo, en concreto, la víctima surgió en el instante en que el delincuente cometió el primer delito.

Sin embargo, no existe unanimidad a la hora de señalar a quién le corresponde la paternidad del término Victimología. El debate se ha generado entre dos posturas, por una parte, cierto sector doctrinal defiende que MENDELSON goza del privilegio de ser considerado el primero en acuñarlo durante su intervención ante un auditorio constituido por profesionales provenientes de los ámbitos de la psiquiatría, psicoanálisis y forense en el Hospital Coltzea de Bucarest en Rumanía. No obstante, otros autores disienten de la opinión expuesta pues se posicionan a favor de que, WERTHAM, autor de

la obra titulada "*The show of violence*" publicada en 1945, es el responsable de introducir el término Victimología en el ámbito científico¹⁹⁰.

En cualquier caso, pese a que no exista aquiescencia general sobre la paternidad de la expresión Victomología, los autores reseñados y las investigaciones y obras que han realizado, nos siguen dando pistas sobre el contexto histórico en el que surgió pues ambos son coincidentes en el tiempo. Por ello, es comúnmente aceptado en la doctrina que el nacimiento del movimiento victimológico representa la respuesta a las victimizaciones sufridas por los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. A esto hay que añadir que, no es extraño que precisamente los dos autores considerados los máximos exponentes internacionales en esta materia, esto es, MEDELSON y VON HENTIG, fueran el primero judío y el segundo un alemán que fue perseguido por los nazis. Paralelamente a este desarrollo inicial, se unió una tendencia creciente de visibilidad de la víctima en el panorama académico que comenzó a estudiar su situación y las circunstancias que las rodean. Otra aportación de gran relevancia durante este periodo fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas que el día diez de diciembre de 1948 proclamó la Declaración Universal de los Derecho Humanos, base de la futura Declaración de Principios

¹⁹⁰ A lo largo de este periodo vieron la luz multitud de publicaciones incluso antes de los citados años cuarenta. Ya en la Habana en 1930 quedó reflejada en una monografía la conferencia que tuvo lugar el año anterior en la misma ciudad sobre esta materia que contenía tres escritos acerca de la protección de la víctima del delito. Posteriormente, entre otros, MENDELSON publicó en la revista *Giustizia Penale* un estudio sobre las víctimas de violación en 1940, en 1947 "*Victimología: Nuevos Horizontes Bio-psico-social*" y en 1956 la *Victimología*. Mientras que VON HENTIG escribió en 1948 "*El criminal y sus víctimas*". A partir de aquí multitud de especialistas comenzaron a interesarse por la materia, cabe destacar entre ellos, a, ELLENBERGUER, FRY y SCHAFER; en VARONA MARTINEZ, G. *Asistencia a las Víctimas de Experiencias Traumáticas*, Universidad del País Vasco, p. 5. Disponible en: [http://www.sociedadvascavictimologia.org/images/documentos/Materiales%20postgrado/1%20TEMAS%20INTRODUCTORIOS/2%20Introducci%C3%B3n%20a%20la%20Victimolog%C3%ADa%20\(G.%20Varona\).pdf](http://www.sociedadvascavictimologia.org/images/documentos/Materiales%20postgrado/1%20TEMAS%20INTRODUCTORIOS/2%20Introducci%C3%B3n%20a%20la%20Victimolog%C3%ADa%20(G.%20Varona).pdf). (Consultado el 05/10/2016); BODERO, E. R. "*Orígenes y fundamentos principales de la Victimología*", *Iuris Dictio. Revista de Derecho*, núm. 3, 2001, pp. 74-75. Disponible en: <http://revistas.usfq.edu.ec/index.php/iurisdicio/article/view/543/614> (Consultado el 06/10/2016); MARQUEZ CARDENAS, A, "*La Victimología como estudio. Redescubrimiento de la víctima para el proceso penal*", *Revista Prolegómenos Derechos y Valores*, 2011, p. 30; RODRIGUEZ CAMPOS, C. "*Aspectos históricos y reflexiones sobre la Victimología y el derecho de victimal en México*", *Fundación de Victimología en España "in dubio pro víctima"*, pp. 5-6; FATTAH, E. A. "*Victimología: pasado, presente y futuro*", *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, núm. 16, 2014, p. r2:5.

Fundamentales de Justicia para Víctimas del Delito y Abuso de Poder que, a su vez, favoreció la proliferación de la literatura científica¹⁹¹.

Sea como fuere se puede afirmar que, el neologismo Victimología que apareció, por primera vez, en lengua inglesa –*Victimology*–, alrededor de los años cuarenta del pasado siglo, se adaptó mediante una traducción directa del término a las restantes lenguas, tales como la francesa –*Victimologie*– o la versión castellana. En esencia, se ha repetido el mismo proceso que se siguió con el vocablo Criminología que se adaptó de manera literal a la traducción francesa –*Criminologie*– y a la lengua castellana¹⁹². En buena medida, la utilización de la denominación Victimología no fue fruto de la casualidad, sino que se introdujo a conciencia para remarcar su ubicación disciplinar y, así, delimitar la frontera entre la Criminología y su interés por el delincuente y la Victimología conectada con la dimensión victimal.

Sin lugar a dudas, uno de los hitos clave para la Victimología no se produjo hasta los días comprendidos entre el 2 y el 6 de septiembre de 1973 cuando se celebró por primera vez en la ciudad de Jerusalén el I Simposio Internacional dedicado a las víctimas. La celebración de este evento lo propuso DRAPKIN durante su intervención en el VI Congreso Internacional de Criminología que tuvo lugar tiempo atrás en Madrid, a la vez que, algunos investigadores procedentes de la Criminología o de la Sociología criminal mostraron su preocupación por las víctimas y su relación con el delincuente¹⁹³. A lo largo de los debates que se sucedieron en el acontecimiento victimológico se presentó la definición del término Victimología como "*el estudio científico de las víctimas*". Ahora bien, esta concepción se dirigía exclusivamente a aquellas personas que se han visto afectadas por un hecho delictivo y la problemática a la que han tenido que hacer frente tras el suceso traumático¹⁹⁴.

¹⁹¹ RODRIGUEZ CAMPOS, C. Aspectos históricos y reflexiones..., cit., p. 5; BODERO, E. R. Orígenes y fundamentos..., cit., pp. 74-75.

¹⁹² MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. y AGUILAR CARCELES, M. M. Victimología: un estudio sobre la víctima y los procesos de victimización, Dykinson, 2011, pp. 6-7; BACA p. 17; LANDROVE DIAZ, G. Victimología..., cit., p. 19.

¹⁹³ GOPPINGER, H. Criminología..., cit., p. 362.

¹⁹⁴ Este evento representa un hito al ser la primera vez que la Victimología es reconocida en el ámbito internacional consiguiendo captar el interés de especialistas pertenecientes a diversas ramas del saber.

Es en esos momentos cuando el uso del término Victimología se va a normalizar en el ámbito científico, trayendo consigo una verdadera transformación conceptual puesto que se introdujo esta materia con el objetivo de que se le otorgue un lugar análogo al de otras ramas científicas. Entonces, aparecerán numerosos estudios y artículos identificados como literatura victimológica que integran ya las ideas que se habían aportado sobre las víctimas previamente en otras ramas y que, a la vez, han favorecido la constitución y desarrollo de esta materia.

Esta realidad, ha provocado que el estudio de la víctima se haya desarrollado desde perspectivas y enfoques dispares que, a su vez, han favorecido la aparición de múltiples maneras de entender y conceptuar la problemática que envuelve a la víctima. Este progresivo interés científico que ha despertado se ha reforzado, sobre todo, por los acontecimientos enumerados a continuación¹⁹⁵:

1. Las teorías de la Psicología Social adoptadas por los victimólogos
2. Las investigaciones de los psicólogos sociales sobre las conductas de ayuda
3. Las encuestas de victimización realizadas con datos reales
4. Los movimientos feministas

El concepto clave para entender la contribución de la Psicología Social a la materia victimal es la interacción puesto que se focaliza hacia los procesos que vinculan la persona con el contexto social en el que se desenvuelve. Esta influencia parece producirse preferentemente en la dirección que se inicia en el contexto social y se ejerce sobre la conducta y los procesos psicológicos de la

Para facilitar su organización se dividieron los temas a tratar en el mismo en cuatro secciones científicas: 1) es estudio de la Victimología, incluyendo en esta temática general las discusiones acerca de su concepto, cuál es su definición y la metodología más acorde en esta materia; 2) la víctima, tanto su situación en el proceso penal como sus tipologías; 3) la relación existente entre el binomio victimario y víctima en determinados delitos; 4) Sociedad y víctima, actitudes y políticas, para dar entrada a materias tan importantes como son la prevención, en tratamiento y el resarcimientos; LANDROVE DIAZ, G. Victimología..., cit., pp. 19-20; RODRIGUEZ MANZANERA, L. Victimología. Estudio de la víctima, ed. Porrúa, 2007, pp. 10-11.

¹⁹⁵ LANDROVE DIAZ, G. Victimología..., cit., pp. 30-31.

persona, pero de igual modo, el individuo al formar parte del contexto social se convierte en un agente de influencia sobre otras personas, hecho que explica la naturaleza cíclica de la influencia. En nuestra vida cotidiana nos influyen los procesos de atribución, esto es, la explicación que damos sobre las causas de los sucesos que nos ocurre tanto a los demás como a nosotros, especialmente, los relativos a acontecimientos inesperados y con consecuencias negativas. Las explicaciones que solemos ofrecer nos hacen percibir que controlamos nuestro ambiente, así WALSTER, al estudiar la atribución de responsabilidad, se dio cuenta de que el observador pone distancia entre el resultado del suceso y la probabilidad de que le pueda ocurrir la misma situación. Si lo percibe culpable, es decir, le atribuye responsabilidad del acontecimiento negativo que le ha ocurrido disminuye su percepción de experimentar unas circunstancias similares¹⁹⁶.

Además, también se han incorporado las aportaciones de los estudios realizados sobre las actitudes y la agresión. Genéricamente, estas últimas reflejan las dinámicas sociales que favorecen el desarrollo y mantenimiento de la agresión, de tal forma que, pueden ayudar a comprender la influencia de las interacciones sociales en la cronificación de los comportamientos agresivos. El comportamiento agresivo, al igual que ocurre con las restantes conductas, se adquiere y desarrolla en función de los principios del aprendizaje social. Una vez que aparece una conducta agresiva, el afectado también puede responder con el mismo método y puede generar el surgimiento de la escalada de violencia. Incluso, en determinados contextos, la no intervención de los observadores o el silencio ante las agresiones o actos violentos puede entenderse como una señal de conformidad con ellos, en consecuencia, contribuir al mantenimiento de la violencia. A este fenómeno se le conoce como la espiral del silencio¹⁹⁷. Así pues, no es complicado imaginar la trasposición de estas tres líneas de trabajo al ámbito

¹⁹⁶ GAVIRIA STEWART, E., CUADRADO GUIRADO, I. Y LOPEZ SAEZ, M. Introducción a la Psicología..., cit., pp. 145 y 156.

¹⁹⁷ GAVIRIA STEWART, E., CUADRADO GUIRADO, I. Y LOPEZ SAEZ, M. Introducción a la Psicología..., cit., pp. 327 y 328.

victimal en el que resulta esencial basarse en ideas que expliquen el comportamiento social en torno a la víctima.

En la segunda dimensión, el acontecimiento que desencadenó el interés por estudiar las conductas de ayuda fue el asesinato de Catherine Genovese en 1964¹⁹⁸. LATANEY y DARLEY fueron los primeros psicólogos sociales que se preguntaron cuándo las personas ayudaban y cuándo no lo hacían. Como consecuencia de los resultados de su investigación experimental elaboraron el primer modelo de decisión sobre la intervención en emergencias que propuso que la persona tan sólo ayudará si se cumplen sucesivamente todas las decisiones siguientes: 1) reconocer que algo pasa; 2) darse cuenta de que las circunstancias requieren que alguien ayude; 3) tomar la responsabilidad individual de ayudar; 4) sentirse capaz de ayudar y; 5) decidir cómo hacerlo. En cambio, cuántas más personas estén presentes menos probabilidad habrá de que alguna ayude. A este fenómeno se le conoce como *el efecto espectador*. Con posterioridad en los años 70 y 80, trataron de resolver el debate en torno a la pregunta por qué se ayuda, debido a que, se defendían dos posturas contradictorias. Por una parte, algunos investigadores se mostraron a favor de que se hacía por intereses personales frente a quienes lo explicaban de acuerdo a la motivación personal de satisfacer las necesidades del otro. Finalmente, en los años 90, se accedió a un tercer nivel de investigación en el que se centraron en estudiar por qué las personas constituyen grupos de ayuda y cuál es la mejor manera de gestionar la planificación del comportamiento de ayuda¹⁹⁹.

En el contexto que nos ocupa, las tres formulaciones son los marcos teóricos de referencia a partir de los cuales se ha desarrollado la investigación sobre la atención y ayuda a los afectados por los sucesos delictivos, en la medida

¹⁹⁸ “El 13 de marzo de 1964, Catherine (Kitty) Genovese fue atacada por un asaltante con un cuchillo cuando regresaba a su apartamento de Nueva York, a las 3 de la madrugada. Ella gritó diciendo que la apuñalaban. Mientras los vecinos miraban desde las ventanas, Kitty estuvo intentando escapar durante 35 minutos. Cuando el atacante se marchó, alguien llamó a la policía, y al rato ella murió. A pesar de haber 38 personas presenciando el incidente desde las ventanas de sus apartamentos, ninguna fue capaz de llamar a la policía hasta transcurridos 30 minutos desde su inicio. Se produjo una emergencia y nadie intervino”; en GAVIRIA STEWART, E., CUADRADO GUIRADO, I. Y LOPEZ SAEZ, M. Introducción a la Psicología..., cit., pp. 285-286.

¹⁹⁹ GAVIRIA STEWART, E., CUADRADO GUIRADO, I. Y LOPEZ SAEZ, M. Introducción a la Psicología..., cit., pp. 285-286, 302-303.

en que, la aparición del movimiento científico interesado en atender a la víctima, principalmente, en sus necesidades, las dificultades que manifiestan y los derechos que les concierne que, lógicamente, no ha de limitarse exclusivamente a los ámbitos de compensación y ayuda del estado, sino que, coincide sobre todo con el papel que juegan las respuestas en la planificación de la ayuda.

Por otro lado, sin entrar a valorar demasiados detalles, la corriente feminista que está integrada por multitud de orientaciones, ideologías y metodologías sumamente heterogéneas, reclamó la atención sobre la violencia que se ejercía sobre la mujer y que hasta entonces no había suscitado interés científico. Estas inquietudes no sólo derivaron en la elaboración de programas de asistencia dirigidas hacia ellas, sino que los resultados de sus aportaciones, el reconocimiento que precisaban y la lucha contra la discriminación se convirtieron en los fines a alcanzar con otros colectivos de víctimas considerados vulnerables tal y como es el caso que nos ocupa de las víctimas del terrorismo²⁰⁰.

Entre tanto, lo importante en el progreso de la formación del conocimiento científico es que apoyemos nuestras propuestas en un conjunto de datos siempre y cuando cumplan determinadas garantías de validez. Uno de los principales mecanismos a través de los cuales se construye el discurso victimal han sido las denominadas encuestas de victimización. Este instrumento aspira a reflejar los datos reales de la población victimizada a fin de delimitar la población que ha sido víctima e identificar las características socio-demográficas que las describen. A pesar de que esta herramienta puede ofrecer información sobre los patrones de victimización y para el examen de los parámetros espacial, temporal y social del delito, no aporta datos significativos que ayuden a comprender el proceso de selección de las víctimas, la relación entre la víctima y el delincuente y la dinámica psicológica y social presente en el comportamiento delictivos, entre otros²⁰¹.

²⁰⁰ LANDROVE DIAZ, G. *Victimología...*, cit., p. 31; SERRANO MAILLO, A. *Introducción a la...*, cit., pp. 504-505.

²⁰¹ LANDROVE DIAZ, G. *Victimología...*, cit., p. 31; FATTAH, E. A. *Victimología: pasado, presente...*, cit., p. r2:6.

2.2. Fundamentos y evolución de la Victimología

A lo largo de su corta historia, el interés en la víctima ha sufrido suertes muy diversas. Por una parte, tal y como se ha manifestado en el epígrafe precedente, hasta fechas bastante recientes el afectado por los hechos delictivos no ha formado parte de los grandes temas sobre los que se han centrado los investigadores. Por otro lado, la primacía del delincuente ha sido una constante a lo largo de la historia y esta focalización ha propiciado el desarrollo de enfoques criminológicos y legales solamente preocupados por el protagonista delictual y, en consecuencia, han influido de una manera indirecta en la marginación de la víctima.

Ciertamente parte de las reflexiones sobre el resarcimiento que, a día de hoy, la mayoría de la doctrina etiquetaría con el calificativo de "victimólogos" se realizaban ya en el siglo XX dentro del dominio del Derecho penal, aunque, como es lógico, estaban más ligados a la pena y a la labor estatal de la represión del delito sin que, en cambio, se centraran en la propia víctima. Igualmente, siguiendo el guion fijado en el marco jurídico, esta invisibilidad también ha estado presente en el sistema judicial que ha relegado al afectado por el hecho delictivo a un segundo plano.

Varios motivos se han alegado a fin de excusar el abandono de la víctima a lo largo del tiempo, entre otros, se alude a que los criminales son las personas que pasan a la historia en vez de las víctimas que pasan al absoluto olvido. En relación con esta postura, podemos encontrar argumentos que disculpan su escasa consideración en el miedo que nos ha causado el delincuente y, al contrario, este sentimiento de inseguridad no nos lo hace experimentar la víctima. Así, de acuerdo, con esta posición ha resultado más lógico prestar más atención al fenómeno criminal con el objetivo de prevenir su aparición. En cambio, existen psicólogos que aducen que el olvido de la víctima es fruto de la fascinación e identificación que sentimos con el criminal a nivel del subconsciente. Esta conexión con el delincuente se produce por el hecho de que lo vemos como un sujeto que no le importa transgredir o vulnerar las normas para conseguir sus objetivos o, dicho de otro modo, es un individuo desinhibido que intenta por

todos los medios alcanzar aquello que ansía. En cierta medida, continúan explicando que, todos somos conscientes de que queremos ciertas cosas ajenas o, en algunos momentos, no nos han faltado ganas de “empujar” a ciertas personas por lo que han hecho o dicho de nosotros, pero, aun así, nosotros nos hemos abstenido de llevarlo a cabo estas acciones. Por su parte, el delincuente obvia todos los parámetros sociales, que a nosotros nos han hecho desistir, y prosigue en su empeño hasta saciar su motivación y, precisamente, esta conducta del delincuente nos llama poderosamente la atención²⁰².

A su vez, la aceptación de la identificación con el criminal explicaría el éxito de las novelas negras, las series y películas centradas en el crimen y sobre todo las dedicadas a la vida del criminal. Mientras que, esta fascinación no la encontramos con el otro protagonista del hecho delictivo, esto es, la víctima, pues obviamente, nadie quiere verse en la piel de una víctima a la que han robado, injuriado o herido²⁰³.

Descendiendo a una dimensión social, la aparición de las víctimas implica el fracaso estatal en la función protectora de sus ciudadanos que tenían encomendada los organismos públicos, convirtiéndose, en algunas ocasiones, en un coste político al representar el fiel reflejo de la ineffectividad de las políticas sociales establecidas. Por ello, las víctimas recuerdan el fracaso de la misión de prevención del delito que le corresponde al Estado social y democrático de derecho²⁰⁴.

Al fin y al cabo, la irrupción de la víctima no ha de entenderse como un impedimento para el correcto funcionamiento del sistema penal. Las medidas de carácter no represivo que miran más hacia el favorecimiento del interés de la víctima y las medidas consistentes estrictamente en la imposición de penas al delincuente no han de entenderse completamente contradictorias. La Política Criminal integradora debe contemplar ambos extremos, pues, la primera postura a favor de incorporar respuestas de naturaleza divergente a la represiva parte

²⁰² BODERO, E. R. Orígenes y fundamentos..., cit., p. 74.

²⁰³ BODERO, E. R. Orígenes y fundamentos..., cit., p. 74.

²⁰⁴ BODERO, E. R. Orígenes y fundamentos..., cit., p. 74.

del presupuesto del descontento originado en las víctimas al ver que al acudir al sistema judicial para que intervenga y les resarza en sus derechos o intereses, precisamente aquellos de los que se han visto privados por la acción del agresor, tan sólo pueden obtener una respuesta represiva –las penas- que generalmente no les compensa o repara el daño que les ha producido el delito. Además, en la medida en que el Estado asume el deber de responder personalmente ante la producción de los delitos también acepta el compromiso de proteger y ayudar a los perjudicados, ya sea mediante la reparación que subyace al sistema penal o mediante la articulación de disposiciones legales que devuelvan a las víctimas al estatus de ciudadano, superando, de este modo, la victimización que han sufrido. De hecho, el primer paso para adoptar estrategias efectivas en la reparación de la víctima consiste en acudir a la literatura científica que se ha ocupado de su estudio, como es la Victimología, a fin de que pueda guiar en la instauración de las políticas de ayuda y asistencia al colectivo de afectados por los hechos delictivos. Al mismo tiempo, si se quiere obtener información precisa sobre el estado de las víctimas y los problemas que le rodean es necesario solicitar el apoyo de las asociaciones de víctimas, en la medida en que, pueden proporcionar experiencia en cuanto a las etapas de la victimización y, conforme a ellas, establecer las medidas oportunas de desvictimización.

No obstante, desde el instante en el que tiene buena acogida el estudio de la materia victimal por parte de la comunidad científica y, por lo tanto, se asume la temática de las víctimas como una nueva línea de investigación, empiezan a celebrarse encuentros científicos en el ámbito internacional alrededor de este colectivo donde los asistentes van poco a poco tratando de delimitar sus puntos esenciales y los retos a los que deben enfrentarse en cada momento. En las próximas páginas se va a hacer una pequeña referencia a cada Simposio que se ha organizado a nivel internacional con el propósito de observar la evolución que ha experimentado esta disciplina desde el punto de vista de los especialistas que han participado en ellos contribuyendo con sus aportaciones a su avance, al mismo tiempo que, nos permitirá interpretar en los apartados posteriores cuál es el objeto de estudio del campo victimal y las funciones o misiones que se esperan de acuerdo a los desarrollos existentes en el estado actual.

Como ya se ha expuesto, la conformación de los límites de esta disciplina comenzó con el primer Simposio internacional dedicado a las víctimas que se celebró en Jerusalén durante los días comprendidos entre el 2 y el 6 de septiembre de 1973, a petición de su presidente DRAPKIN quien propuso su celebración en un Congreso de Criminología previamente acontecido. Este evento se organizó en las cuatro secciones científicas siguientes: 1. El estudio de la Victimología que, a modo de presentación y tema introductorio, adelantó algunas cuestiones básicas relativas a su concepto, definición y metodología que, a su vez, hacían referencia a los principales ejes sobre los que pivota este campo de estudio. 2. Unida a la referida síntesis de contenidos aparece la figura de la víctima, por ello, se abordaron tanto su tipología como su participación en el proceso penal. 3. Además, se prestó atención a la posible relación existente entre los protagonistas de la dinámica criminal, esto es, el victimario y la víctima. 4. Por último, se analizó el contexto social sobre las actitudes y políticas proyectadas hacia el colectivo victimal a través de las materias directamente vinculada a ellas de prevención, tratamiento y resarcimiento. Con todo, se considera un momento clave la celebración de este evento al ser la primera vez que la Victimología se reconoció en el ámbito internacional, al mismo tiempo que, se produjo en medio de una fuerte expectación científica en la que sus debates lograron captar la atención de profesionales procedentes de diversos campos de formación y especialización ²⁰⁵.

Ahora bien, no habría que esperar demasiado tiempo hasta que surgieran nuevos intentos para profundizar de nuevo en la metodología y en las principales dimensiones de interés victimal. Durante el año 1975, en la ciudad italiana de Bellagio, tuvo lugar el Convenio Internacional de Estudios sobre Victimología en el que no sólo se tuvieron en cuenta las cuestiones más relevantes a la hora de precisar cuál es la vía idónea a través de la cual se puede acceder al conocimiento científico, sino que, además, se incluyó entre su programas las tres áreas sobre

²⁰⁵ RODRIGUEZ MANZANERA, L. Victimología. Estudio..., cit., pp. 10-11; DIAZ COLORADO, F. *“Una mirada desde las víctimas: el surgimiento de la Victimología. ensayo”*, Umbral Científico, núm. 9, 2006, p. 143. Disponible en: <http://www.redalyc.org/html/304/30400915/>. (Consultado el 27/05/2017); RODRIGUEZ MANZANERA, L. *“Situación actual de la Victimología en México. Retos y perspectivas”*, CODHEM, enero-febrero 2004, p. 72.

las que deben centrarse los estudiosos que coinciden, primero, con el papel que ha desempeñado la víctima en la dinámica criminal o, expresado de otra forma, en qué medida el individuo ha contribuido a su propia experiencia de victimización. Segundo, delimitar el reporte del delito, esto es, averiguar por qué acuden a los cuerpos policiales para solicitar ayuda. Y, tercero, analizar y tomar en consideración la influencia que tienen las decisiones adoptadas en la estructura judicial sobre las víctimas y, en el proceso inverso, es decir, en qué medida puede afectar el sujeto en los órganos decisorios²⁰⁶.

Una vez transcurridos tres años desde el primer Simposio, se organizó el segundo acontecimiento con proyección internacional en la ciudad de Boston _Massachusetts- los días del 5 al 11 de septiembre de 1976. En él se volvieron a retomar prácticamente los mismos temas que fueron previamente abordados por los especialistas en Jerusalén, de tal manera que, las secciones quedaron configuradas alrededor de tres debates. Por una parte, se trataron los fundamentos de la Victimología relacionados con la terminología básica, las finalidades, las clasificaciones victimales, la víctima en el procedimiento judicial y las víctimas de hechos de tránsito. Mientras que, en la segunda sección, se discutieron los aspectos más relevantes de las relaciones victimales, especialmente, las concernientes a las categorías de los delitos contra las personas y contra la propiedad, al mismo tiempo que, aludieron a los casos específicos de relación entre el binomio criminal-víctima y policía y, el delincuente político como víctima. Por otra parte, la atención volvió a recaer en la dimensión social que envuelve al afectado por los hechos delictivos, destacando por ello, cuatro niveles que son: a) compensación a las víctimas del delito; b) victimización comparativa; c) la víctima y los mass-media; d) victimización de la víctima por la sociedad. Fue justamente en el marco de este evento donde se incidió en la expansión a nuevas áreas que pudieran resultar de interés para los investigadores en Victimología, a la vez que, se alentaba al estudio comparativo de las

²⁰⁶ RODRIGUEZ MANZANERA, L. Victimología. Estudio..., cit., pp. 34-35; RODRIGUEZ MANZANERA, L. Situación actual de la Victimología..., cit., p. 72.

victimizaciones para dar cuenta, sobre todo, de la complejidad de la dinámica victimal²⁰⁷.

Con posterioridad, el tercer Simposio, celebrado en Munster del 3 al 7 de septiembre de 1979, se estructuró tanto en secciones como en grupos de trabajo. Las primeras se dividieron en seis apartados donde se consideraron no sólo las premisas básicas de este campo que tienen que ver con los conceptos, la presentación de los datos y resultados más relevantes en cuanto a los estudios de victimización hasta entonces elaborados, sino que, se refirieron también a los estudios de victimización, el papel que tiene el sujeto afectado en su proceso de victimización, su paso por el sistema de justicia penal y, en última instancia, las cuestiones sobre el tratamiento, reparación y prevención que se pueden establecer al respecto. En cuanto a las mesas de trabajo, descendiendo al nivel social, abordaron los aspectos relacionados con los problemas de urbanismo y prevención del crimen, la violencia ejercida dentro del ámbito familiar y, el supuesto específico de las víctimas de los crímenes violentos ocurridos durante el nacional-socialismo. Incluso, en su seno se constituyó la llamada la Sociedad Mundial de Victimología²⁰⁸. Al fin y al cabo, se puede comprobar respecto a los precedentes eventos un cambio de actitud, pese a que se hace referencia al lugar que ocupa la víctima durante su victimización, empieza a perder peso el examen de la relación víctima-agresor y sus tipologías en beneficio del interés de su prevención, tratamiento y reparación.

A continuación, los días 29 de agosto a 2 de septiembre de 1982 en las ciudades de Tokio y Kioto, respectivamente, tuvo lugar el cuarto Simposio Internacional de Victimología, tratándose durante esos días un total de cuatro temas agrupados en las siguientes secciones: 1) los problemas generales que presenta esta disciplina relacionados con las definiciones y teorías que establecieron los fundamentos del estudio actual de las víctimas; 2) la

²⁰⁷ RODRIGUEZ MANZANERA, L. Victimología. Estudio ..., cit., p. 11; DIAZ COLORADO, F. Una mirada desde las víctimas: el surgimiento..., cit., p. 143.

²⁰⁸ RODRIGUEZ MANZANERA, L. Victimología. Estudio..., cit., pp. 10-11; DIAZ COLORADO, F. Una mirada desde las víctimas: el surgimiento..., cit., p. 143; RODRIGUEZ MANZANERA, L. Situación actual de la Victimología..., cit., p. 72.

investigación empírica, métodos y los descubrimientos llevados a cabo hasta entonces; 3) los nuevos problemas o desafíos como las víctimas de delito de cuello blanco y las víctimas de los fenómenos de contaminación; 4) la asistencia a las víctimas que comprende las dimensiones de compensación, restitución, servicio a las víctimas y los centros de crisis. Asimismo, los asistentes a este acontecimiento mostraron un claro apoyo a la sociedad creada tres años atrás y procedieron a fijar los canales de comunicación que se seguirían en el ámbito internacional²⁰⁹.

Más tarde, en el año 1985, en la ciudad de Zagreb situada en Yugoslavia, se celebró el siguiente Congreso Internacional. Los temas que se trataron fueron los siguientes: 1. Diversas cuestiones de carácter teórico y conceptual; 2. Los métodos, técnicas y maneras de investigar en este campo; 3. El caso de las víctimas de abuso de poder; 4. Los mecanismos necesarios para asegurar justicia y, de igual modo, para reparar a las víctimas; 5. Asistencia a las víctimas y prevención de la victimización; 6. Las acciones que se pueden llevar a cabo en los ámbitos regional, interregional e internacional. Además, este acontecimiento destacó, en la medida en que, en el mismo se redactó la *"Declaración de principios básicos de justicia para las víctimas"*, que posteriormente, aprobaría el Congreso Internacional de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente en 1985 en Milán y luego lo adoptaría la Asamblea General de las Naciones Unidas²¹⁰.

Uno de los Simposios más extensos en cuanto a las temáticas que debatieron sus participantes tuvo lugar, por segunda vez, en Jerusalén durante los días comprendidos entre el 28 de agosto al 1 de septiembre de 1988 cuyo tema se denominó "los rostros de la Victimología". En él se aludió a los avances experimentados en este campo partiendo de la base en que la reconocen de

²⁰⁹ RODRIGUEZ MANZANERA, L. Victimología. Estudio..., cit., pp. 10-12; DIAZ COLORADO, F. Una mirada desde las víctimas: el surgimiento..., cit., p. 143; RODRIGUEZ MANZANERA, L. Situación actual de la Victimología..., cit., p. 73.

²¹⁰ RODRIGUEZ MANZANERA, L. Victimología. Estudio..., cit., pp. 10-11; DIAZ COLORADO, F. Una mirada desde las víctimas: el surgimiento..., cit., p. 143; RODRIGUEZ MANZANERA, L. Situación actual de la Victimología..., cit., p. 73.

acuerdo a tres parámetros, esto es, como una ciencia, un servicio de atención a las víctimas y un movimiento a favor de este colectivo²¹¹.

La mayoría de las aportaciones del Simposio titulado "Victimología en debate" celebrado en Río de Janeiro del 25 al 30 de agosto de 1991 se incluyeron dentro de las cinco categorías genéricas siguientes: 1) drogas –víctimas y victimización-; 2) las minorías; 3) los derechos que les corresponden a las víctimas en los casos de abuso de poder; 4) clases de víctimas en función de delitos sexuales, violencia intrafamiliar o secuestro; 5) cuestiones conceptuales y teóricas²¹².

Bajo el nombre "Victimización y delincuencia: estrategias para sobrevivir" se celebró el siguiente Simposio en la ciudad australiana de Adelaida desde el 21 al 26 de agosto de 1994, quedando su estructura configurada alrededor de un total de ocho temáticas concretas, a saber, paradojas y paradigmas que sustentan esta materia, la investigación elaborada hasta entonces sobre el criminal y la víctima, los aspectos relevante de contenido legal, la violencia intrafamiliar, el estrés postraumático que pueden desarrollar los afectados a consecuencia de la producción del delito, la prevención de la victimización, los servicios ofrecidos a las víctimas y, finalmente, la cultura de los derechos humanos. De entre todos estos tópicos destacaron las aportaciones realizadas desde las experiencias propias de cada país, al mismo tiempo que, los profesionales llamaron la atención, sobre todo, de las victimizaciones que tienen lugar en los ámbitos escolar, familiar y, especialmente, el dirigido hacia el colectivo de homosexuales²¹³.

Entre los días 25 y 29 de agosto de 1997 tuvo lugar el noveno Simposio internacional en la ciudad holandesa de Ámsterdam que versó sobre la protección de la víctima. Esta temática genérica abarcó los estudios y precisiones sobre la víctima gracias, en parte, a los datos ofrecidos por la "Encuesta Internacional

²¹¹ VILLAREAL SOTELO, K. Principios de Victimología, Universidad Autónoma de Tamaulipas: Oxford University Press, México, 2011, pp. 62-63.

²¹² RODRIGUEZ MANZANERA, L. Situación actual de la Victimología..., cit., p. 73; VILLAREAL SOTELO, K. Principios de..., cit., p. 63.

²¹³ RODRIGUEZ MANZANERA, L. Situación actual de la Victimología..., cit., p. 73; VILLAREAL SOTELO, K. Principio de..., cit., p. 64.

sobre víctimas del delito”. En segundo lugar, se dedicó una sección a los derechos de las víctimas convirtiéndose en el lugar apropiado para debatir los paradigmas de carácter reparatorio frente a los modelos tradicionales de naturaleza retributiva. En tercer lugar, las tendencias de apoyo hacia este colectivo que se dirigen a ampliar la atención y tratamiento y, finalmente, las victimizaciones concretas relacionadas con el abuso de poder y los crímenes de guerra, entre los que destacaron también los crímenes de odio²¹⁴.

Luego, en las fechas comprendidas desde el día 6 al 11 de agosto del año 2000, la ciudad de Montreal –Canadá- acogió el X Simposio Internacional de Victimología dedicado a la “Investigación y acción para el tercer milenio”. Aquí, antes que nada, se abordaron específicamente los temas sobre el apoyo, compensación y política existentes en el ámbito victimal. Después, en la siguiente sección se propuso la temática relacionada con la justicia reparatoria, la mediación y su cabida en las diferentes legislaciones. De este modo, a continuación, los especialistas abordaron las cuestiones acerca de la protección internacional para víctimas de abuso de poder y, finalmente, trataron la prevención de la victimización. Además, se aprovechó esta ocasión para celebrar el XV aniversario de la Declaración de los Principios Fundamentales de Justicia relativos a las víctimas del delito y del abuso de poder elaborada por la ONU. De entre todos los debates que se generaron, merece la pena señalar la propuesta que se efectuó de iniciar reformas en los países a fin de otorgar una mayor relevancia tanto a los derechos de las víctimas como, con carácter especial, los derechos de los menores²¹⁵.

Con el cambio de siglo, el XI Simposio tuvo lugar en Stellenbosch, -Sudáfrica-, con el tema “Nuevos horizontes en Victimología” del 13 al 18 de julio del año 2003. Esta cuestión genérica se dividió en cinco apartados, en primer lugar, el dedicado a los servicios ofrecidos a las víctimas donde se puso de manifiesto la gran cantidad de técnicas de tratamiento y métodos empleados por

²¹⁴ RODRIGUEZ MANZANERA, L. Situación actual de la Victimología..., cit., p. 73; VILLAREAL SOTELO, K. Principios de..., cit., pp. 64-65.

²¹⁵ RODRIGUEZ MANZANERA, L. Situación actual de la Victimología..., cit., pp. 73-74; VILLAREAL SOTELO, K. Principios de..., cit., pp. 65-66.

los profesionales procedentes de los diferentes países. En segundo lugar, se abordó la problemática subyacente a las víctimas de crímenes transnacionales con especial énfasis en los afectados por el fenómeno terrorista, en la medida en que, las acciones terroristas suelen causar un gran número de víctimas y, a su vez, su elección se produce de una manera indiscriminada, al igual que, también se hizo mención a la corrupción y el tráfico de personas. En tercer lugar, el debate se realizó en torno a la problemática de los derechos de las víctimas en el sistema de Justicia Penal, y la necesidad de incorporarlos a las legislaciones nacionales para que sean plenamente efectivos. En la penúltima sesión, los expertos se aproximaron al paradigma de la Justicia Restaurativa con la finalidad de que la víctima deje atrás el papel de testigo que tiene asignado en la mayoría de los sistemas judiciales actuales y pueda adquirir un rol más activo que reportaría efectos positivos en las dimensiones relativas al victimario, la reincidencia y la seguridad de la comunidad. Finalmente, las cuestiones más relevantes acerca de la naturaleza y alcances de la victimización como la violencia ejercida en el ámbito doméstico, hacia los niños, las víctimas sexuales, laborales y el fenómeno de los crímenes de odio²¹⁶.

Por su parte, el XII Simposio celebrado en Orlando –Estados Unidos- a lo largo de los días comprendidos entre el 20 y el 25 de agosto de 2006 se organizó sobre la temática “Realzando la misión”, de manera que, se establecieron cuatro subdivisiones, en la primera sesión que tuvo lugar, los expertos abordaron la defensa y los derechos de las víctimas y, en consecuencia, debatieron en torno a la siguiente pregunta formulada: ¿se convertirá la “Justicia de la Víctima” en el nuevo estándar del sistema de justicia penal? A continuación, se planteó el asunto relativo a los servicios para la víctima, esto es, ¿es tiempo de ir más allá de la investigación en crisis y de la defensa en la justicia penal? La tercera se ocupó de la investigación con el propósito de dar respuesta a si la Victimología tiene un lado teórico o empírico sobre el que apoyarse. En la última sección plenaria, se cuestionó si es conveniente que el foco primario en Victimología

²¹⁶ VILLAREAL SOTELO, K. Principios de..., cit., p. 63.

continúe siendo el crimen considerado ordinario, de tal forma que, se oriente hacia el crimen transnacional, tecnología, terrorismo y tráfico²¹⁷.

La ciudad japonesa de Mito reunió a los profesionales en esta materia con el XIII Simposio Internacional de Victimología en los días comprendidos desde el 23 al 28 de agosto de 2009. Las sesiones plenarias giraron alrededor de siete subtemas en honor al nombre que recibió la reunión denominada "Victimología y Seguridad Humana" que fueron exactamente: la teoría sobre Victimología y la Seguridad Humana, el proyecto de la Convención de la ONU sobre las Víctimas a la luz de los instrumentos internacionales y las normas del mismo carácter, el trabajo de la UNHCR y víctimas de abuso de poder, las víctimas refugiadas y personas desplazadas, publicaciones de víctimas en el sistema de justicia nacional, las respuestas que se producen frente al desastre de la victimización, el conjunto de intervenciones psicológicas y psico-traumatológicas, la construcción de una red y la coordinación de víctimas, las victimizaciones producidas sobre los indígenas y otros grupos sociales marginados y, por último, las victimizaciones especiales como las producidas en el ámbito de la violencia familiar, terrorismo, fraude y ciber víctimas²¹⁸.

Mientras que, el XIV Simposio Internacional de la Sociedad Mundial de la Victimología denominado "Justicia para las víctimas: perspectivas transculturales sobre el conflicto, el trauma y la reconciliación" se celebró en la Haya desde el 20 al 24 de mayo de 2012. De acuerdo con este planteamiento inicial, se debatieron cuestiones que versaban sobre la compensación que reciben las víctimas por los daños causados y su derecho a participar en el procedimiento que conozca su causa. Además, cuando trataron la problemática de la justicia restaurativa aportaron varios puntos de vista la víctima y el agresor, los enfoques existentes en este paradigma y cómo solventar los posibles casos en que la víctima presente sentimientos de ira frente al delincuente. Mientras que, en el área que se dedicó a la violencia contra las mujeres y los niños se cuestionó si a los últimos se les ofrecía un tratamiento adecuado, cómo se recuperan las

²¹⁷ VILLAREAL SOTELO, K. Principios de..., cit., p. 67.

²¹⁸ VILLAREAL SOTELO, K. Principios de..., cit., p. 67-69.

víctimas de violencia doméstica y cuáles son los riesgos y necesidades de las víctimas de la violencia ejercida dentro de las parejas. Por su parte, se prestó especial atención a los niños víctimas de abusos sexuales y, finalmente, la perspectiva relacionada con la justicia transicional.

Finalmente, el último de los acontecimientos internacionales celebrados hasta ahora coincide con el XV Simposio Internacional de Victimología que tuvo lugar en la ciudad australiana de Perth desde el 5 al 9 de julio de 2015 cuyo título fue "Victimización, justicia y curación: cuestionando las ortodoxias". Sobre la multitud de contribuciones científicas y profesionales que se aportaron, VARONA destacó una selección de intervenciones que se pueden agrupar en determinados temas. En relación con las tipologías de víctimas en función del delito padecido, sobresalieron los asuntos relativos a las menores víctimas de abuso sexual, las víctimas expuestas a la violencia doméstica o en edad escolar, el tráfico de seres humanos, las mujeres que han padecido violencia sexual, los afectados por los delitos de naturaleza online, también se refirieron a las poblaciones aborígenes, de fraude, refugiados, los progenitores agredidos por los menores y los indígenas afectados por la delincuencia medioambiental. A su vez, además, se incidió en los procesos de victimización y las respuestas que se les ofrece a los afectados una vez han sido agredidos como al trauma vicario que pueden experimentar, los modelos de servicios y las intervenciones terapéuticas dirigidas específicamente a ellas. Mientras que, al mismo tiempo, se enfocaron algunas sesiones hacia los enfoques que pueden adoptarse dentro del sistema de justicia penal como la mediación y la justicia restaurativa y, especialmente, los sistemas de justicia establecidos para los menores. Igualmente, hicieron referencia a la investigación en Victimología a fin de observar cuál es el estado actual de esta disciplina²¹⁹.

Después de explicar a grandes rasgos las temáticas principales que han sido abordadas en la reciente historia victimológica, puede comprobarse que, existen multitud de temas y planteamientos que han ido repitiéndose dada su importancia durante las sesiones celebradas en los Simposios internacionales. La

²¹⁹ VARONA MARTINEZ, G. "Conferencia 15º Simposio Internacional de Victimología (Perth, Australia, 5-9 de julio de 2015)", Revista de Victimología, núm. 2/2015, pp. 153-172.

razón que nos ha llevado a describir sucintamente la enumeración de las problemáticas debatidas es que nos proporciona una visión global no sólo de la evolución y estado actual de esta materia sino de sus siguientes pasos. Si nuestro interés reside en avanzar en esta disciplina es conveniente partir de la guía que nos han ofrecido los especialistas a través de sus aportaciones, esto es, las cuestiones que surgieron en los Simposios nos permiten diferenciar cuatro categorías de temas, en primer lugar, la definición de la Victimología, su metodología y los conceptos que integran este campo, en segundo lugar, las funciones o finalidades relativas sobre todo en la prevención y reparación de la victimización, en tercer lugar, los derechos y políticas de asistencia, atención y protección que se han implementado –esta cuestión se analizará en el capítulo cuarto del presente estudio- y, finalmente, el estudio de las víctimas ya sea sus clasificaciones o el estudio de las mismas en función del delito que les ha afectado.

Por lo tanto, antes de entrar de lleno en la exposición del contenido central del capítulo, comenzaremos explicando las premisas básicas de esta disciplina con el objetivo de comprender y analizar su definición, sin perjuicio, de que en epígrafes posteriores se vuelva a hacer alusión a la metodología y a los conceptos que conforman la terminología básica. Una vez se haya determinado que su centro de interés es el estudio de la víctima donde no sólo resulta ineludible acudir a las clasificaciones victimales que se han elaborado a fin de examinar el grado de participación del sujeto afectado en su propia dinámica de victimización sino que la propia estructura de los Simposios nos ofrece la pista de estudiar a la víctima de una determinada tipología para evitar generalizaciones, se abordarán sus funciones de prevención y desvictimización, incluyendo en esta última, el proceso de victimización y la reparación puesto que, de hecho, resulta difícil analizar muchas cuestiones básicas de la Victimología como las referentes al estudio de la víctimas sin considerar cuáles son las funciones específicas de este ámbito del saber.

2.3. Definición de la Victimología

A pesar de que a simple vista parece bastante obvio atribuir el significado de estudio de la víctima a la expresión Victimología, la verdad es que, transcurridos más de cincuenta años desde su aparición, sigue siendo problemático encontrar una definición con la que estén cómodos la mayoría de los investigadores tanto en el panorama nacional como en el internacional.

Debido a la pluralidad de enfoques, corrientes, orientaciones e interpretaciones se enunció la anterior función generalista asumida por los interesados en la materia victimal durante la celebración de su primer Simposio. Sin embargo, la definición adolece de excesiva ambigüedad y falta de exactitud en un intento por recabar el máximo interés de toda la comunidad científica –con independencia de su formación académica previa- y, como resultado, precisa una mayor concreción a la hora de delimitar su objeto de investigación a efectos teóricos y prácticos, en la medida en que, los propósitos que persigue este campo dependerán, ante todo, de su elemento de estudio.

Si comenzamos nuestro breve recorrido cuando el término Victimología empieza a utilizarse de un modo sistemático en el ámbito internacional, prácticamente la totalidad de la doctrina indicaba que su interés se encuentra en la propia persona que se ha convertido en víctima, así, MENDELSON la identificaba con la ciencia de las víctimas y la victimidad y, por su parte, incluso MARCHIORI que está más próxima en el tiempo, considera su objeto científico de estudio a las víctimas del delito. Estos ejemplos sugieren que el estudio de la víctima puede resultar de interés para cualquier investigador que desee ampliar el conocimiento acerca de esta figura, aunque, es cierto que, poco a poco, los autores han ido haciendo hincapié en los aspectos que entendían más relevantes en la elaboración de sus investigaciones y, consecuentemente, han tratado de delimitar su estudio. De aquí que, en la mayoría de las ocasiones, los criterios de análisis que proponen se fundamentaban en la formación académica de la que proceden²²⁰.

²²⁰ TAMARIT SUMALLA, J. M. *“La Victimología: cuestiones conceptuales y metodológicas”*, en BCA BALDOMERO, E., ECHEBURUA ODRIÓZOLA, E. Y TAMARIT SUMALLA, J. M. (coords.). Manual de

Dentro de la corriente predominante que asume la máxima del estudio de la víctima, un sector de la doctrina destaca su papel de protagonista activo en la producción del delito, ya sea de manera directa tal y como afirma GOLDSTEIN, según el cual esta materia *"estudia a la víctima no como efecto nacido en la realización de una conducta delictiva, sino como una de las causas, a veces, principalísima, que influyen en la producción de los delitos"* o de manera indirecta, esto es, vinculando la producción del hecho delictivo con la relación existente entre el victimario y la víctima. Esta última postura la defienden VETTER y SILVERMAN cuando hacen referencia a que *"el término Victimología denota el específico estudio de las relaciones criminal-víctima, un campo en el que los criminólogos se han visto involucrados por lo menos durante dos siglos"*²²¹.

Una de las principales direcciones a través de las cuales el discurso científico evolucionó fue el interés suscitado por las características individuales de las víctimas. Aquí subyace un cambio de actitud, ya no se le considera la causante de que el delincuente cometa un delito, sino que el énfasis lo ponen en las características que tienen y que, en base a ellas, el infractor elige al individuo frente a quien va a cometer el hecho delictivo. No obstante, dentro de esta línea de investigación, podemos observar tres orientaciones.

El primer enfoque parte de las premisas asumidas en el campo psicológico. De hecho, es el reflejo de la Psicología contemporánea que pretende entender y explicar la motivación, personalidad, los problemas personales y sociales, así como las diferencias individuales que presentan las víctimas. Dos de sus representantes fueron ABRAHAMSEN que afirma que *"... comprendería el estudio científico de la personalidad y otorgaría atención especial a los factores pertinentes al desarrollo emocional y social de la persona (o del grupo) que resulta víctima de un crimen"* y CORNIL que explica la Victimología sobre la base

Victimología, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, p. 17; MARCHIORI, H. Criminología..., cit., pp. 30-31; MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. y AGUILAR CARCELES, M. M. Victimología: un estudio..., cit., pp. 16-17.

²²¹ RODRIGUEZ MANZANERA, L. Criminología..., cit., pp. 15-16.

de la *"personalidad de la víctima, de sus actitudes y motivaciones realizadas por los criminólogos"*²²².

En segundo lugar, se distingue la corriente que, más allá de destacar en exclusividad los aspectos psicológicos como en el anterior, les otorga la misma relevancia a los factores físicos y, en su caso, a los sociales. Un claro ejemplo de este nivel de análisis nos lo proporciona AMELUNXEN al sostener que el *"origen personalidad, carácter, sexo, edad, situación de conciencia, cualidades espirituales y características corporales de la víctima, y sus relaciones familiares, profesionales y sociales"*. Incluso, RAMÍREZ GONZÁLEZ apuesta por el mismo tipo de formulación, aunque con las siguientes palabras *"la definiríamos como el estudio psicológico y físico de la víctima que, con el auxilio de las disciplinas que le son afines"*. Junto con esta explicación, a continuación, se atreve a indicar que el fin último de la Victimología, *"la formación de un sistema efectivo para la prevención y control del delito"*. De este modo, todas estas características personales se obtienen a través del *"análisis de los datos de los hechos ilícitos (circunstancias del hecho, características de la víctima y de los delincuentes, armas usadas...), la intervención de testigos y de la policía y de los sucesos posteriores por los que pasó la víctima, trata de buscar soluciones para reducir o eliminar la delincuencia y para reparar el daño causado a la víctima"*, tal y como describe LÓPEZ TAPIA²²³.

En cambio, la última dimensión pretende aglutinar la máxima información acerca del afectado. Representa la orientación más integral por cuanto alude a las aportaciones provenientes de otras ciencias sobre la figura victimal. Desde esta perspectiva, destaca ELLENBERG que apunta que la Victimología *"se ocupa de la víctima directa del crimen y que comprende el conjunto de conocimientos biológicos, sociales y criminológicos concernientes a la víctima"*. Tan sólo añadiendo un factor más en la definición, FATTAH la describe como *"aquella rama de la Criminología que se ocupa de la víctima directa del crimen y que designa el*

²²² RODRIGUEZ MANZANERA, L. Criminología..., cit., pp. 15-16.

²²³ MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. y AGUILAR CARCELES, M. M. Victimología: un estudio..., cit., p. 17; RODRIGUEZ MANZANERA, L. Criminología..., cit., pp. 15-16.

*conjunto de conocimientos biológicos, sociológicos, psicológicos y criminológicos concernientes a las víctimas*²²⁴.

GULOTTA coincide con FATTAH y ELLENBERG en señalar la importancia de los factores biológicos, psicológicos y sociales. Aunque también admite el destacado papel que juega la interacción que mantiene con el delincuente y, en este contexto, afirma que se trata *"una disciplina que tiene por objeto el estudio de la víctima, de su personalidad, de sus características biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales, de sus relaciones con el delincuente y del papel que ha asumido en la génesis del delito"*²²⁵.

Desde esta perspectiva, la idea del estudio de la víctima ha surgido principalmente para averiguar cuáles son las causas o características relacionadas con el afectado que desencadenan o propician el comportamiento delictivo siempre y cuando pueda constatarse un patrón conductual. Por tanto, intenta dar respuesta a la pregunta por qué determinadas características que presentan las víctimas están asociadas a que el delincuente cometa el delito. Al formular esta pregunta nos estamos interesando por la explicación de la conversión en víctima, es decir, para comprender como adquiere una persona el rol de víctima se focalizan en el análisis de las características y su comportamiento.

Transcurrido cierto tiempo, el significado y el alcance de la Victimología en el sentido tradicional que hemos explicado continúa teniendo vigencia. Sin embargo, cede paulatinamente protagonismo al estudio del proceso de victimización y desvictimización por el que transcurre la víctima, así, cuanto más estrechamente se atiende a ambos aspectos mejor pronóstico tendrá la víctima ante su nueva vida. Esto quiere decir que, ya no se trata simplemente de delimitar los rasgos comunes que presentan las víctimas en función de su categoría – aunque sea el primer paso- sino que, además, se trata de averiguar qué le ocurre a la víctima tras la comisión del hecho delictivo y cómo transita el camino hasta

²²⁴ MARCHIORI, H. Criminología..., cit., pp. 30-31; MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. y AGUILAR CARCELES, M. M. Victimología: un estudio..., cit., p. 16; RODRIGUEZ MANZANERA, L. Criminología..., cit., pp. 14-15.

²²⁵ MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. y AGUILAR CARCELES, M. M. Victimología: un estudio..., cit., p. 17; RODRIGUEZ MANZANERA, L. Criminología..., cit., p. 17.

lograr dejar atrás el rol de víctima, es decir, las circunstancias, inconvenientes y necesidades que le rodean en el proceso de victimización y desvictimización y, en definitiva, cuáles son las medidas que precisa para alcanzar su plena reparación.

Probablemente una de las aportaciones más destacadas en este campo sea de la BERISTAIN quien la entendió como *"la ciencia y el arte pluri, inter y transdisciplinar que –en íntima relación con la investigación y la praxis del Derecho penal, la Criminología, la Sociología, la Filosofía y la Teología- investiga la victimación primaria, secundaria y terciaria, así como sus factores etiológicos, sus controles, sus consecuencias y sus respuestas superadoras de los conflictos y la delincuencia. Presta atención al análisis bio-psicosocial de las diversas clases de víctimas, no sólo las directas e inmediatas"*. Gracias a esta definición queda patente la importancia de los procesos de victimización que puedan experimentar las víctimas directas y las indirectas y las medidas que puedan adoptarse para que superen los tres estadios²²⁶.

No obstante, una de las definiciones que más adeptos ha conseguido es la formulada por TAMARIT SUMALLA en los términos siguientes *"la ciencia multidisciplinar que se ocupa del conocimiento relativo a los procesos de victimación y desvictimación"*. En efecto, supone una progresión respecto a las definiciones más tradicionales debido a que clarifica cuál es exactamente su misión, si bien en las primeras conceptualizaciones se referían simplemente a las características de las víctimas, aquí no se mencionan los rasgos personales de la víctima ni a su propia persona sino la manera en que se ha convertido en víctima, el proceso de victimización, y el proceso para dejar la condición de víctima que es el proceso de desvictimización²²⁷.

Sin perjuicio de la consideración de ciencia de la Victimología, que con posterioridad se abordará esta cuestión, el principal inconveniente que presenta a simple vista esta conceptualización se encuentra en su elemento "multidisciplinar".

²²⁶ TAMARIT SUMALLA, J. M. La Victimología: cuestiones..., cit., pp. 17-18; MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. y AGUILAR CARCELES, M. M. Victimología: un estudio..., cit., p. 17.

²²⁷ TAMARIT SUMALLA, J. M. La Victimología: cuestiones..., cit., p. 17; MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. y AGUILAR CARCELES, M. M. Victimología: un estudio..., cit., p. 17.

Como ya se ha explicado en la primera parte del presente estudio cuando abordábamos la interdisciplinariedad de la Criminología, la multidisciplinariedad consiste en una especie de diálogo entre las disciplinas, cada una de las concurrentes explica a las demás sus ideas y conocimientos acerca de la problemática planteada, sin embargo, lo único que se consigue es una compilación de datos de distinto origen sin que medie entre ellos vinculación. En cambio, en la interdisciplinariedad, no se comunican simplemente los conocimientos aportados por cada campo desde sus propios métodos y perspectivas, sino que los mismos implican una verdadera relación entre ellos, superando el análisis parcial y aislado que pueden ofrecer por separado cada una de ellas. La investigación interdisciplinar supone un escalón superior sobre el nivel multidisciplinar concerniente al grado de coordinación, incluso, es posible alcanzar cierta integración de conocimientos.

De acuerdo con estas precisiones, puede entenderse que se pretendía hacer referencia a la interdisciplinariedad de la Victimología, de tal forma que, los investigadores en esta materia puedan crear una relación entre las diferentes explicaciones para afrontar el problema de la victimización y desvictimización de la víctima de una manera global atendiendo a todos los datos y sus posibles estrategias para superar el problema que tiene la víctima.

En efecto, no le falta razón al nombrar los dos procesos de victimización y desvictimización debido a que el análisis de ambos puede ofrecer una visión global de la forma en que la víctima adopta el rol de víctima y los mecanismos para que lo abandone y, así, conseguir la plena reinserción de la víctima y la sociedad, de manera, que pueda volver a enfrentarse a su nueva vida.

Otra propuesta de gran relevancia a los efectos del presente estudio es la formulada por MORILLAS. Tras realizar un breve repaso del panorama internacional y nacional la identifica con *"la disciplina científica que posee un método empírico e interdisciplinar encargado del estudio de la víctima, capaz de presentar información relevante sobre los procesos de victimización, sus formas*

*de actuación y prevención*²²⁸. De acuerdo con esta descripción, el énfasis científico recae además de sobre la persona víctima sobre los procesos de victimización, las formas de actuación y la prevención y no tanto en la persona víctima que se había propuesto en otras definiciones. El mero hecho de sólo hacer referencia al estudio de la víctima podría llevar al equívoco de plantear su estudio solamente desde una sola perspectiva y con ello se desvirtuaría toda posibilidad cuanto menos de que se convirtiera en una disciplina científica.

Hasta aquí es importante tener en cuenta que la función de la Victimología no debe circunscribirse a la mera enumeración de las características de las víctimas pues caería en un sinsentido y este hecho debe quedar reflejado en la definición de Victimología. Como mucho, puede aceptarse que, en el inicio del movimiento científico podría asumirse la premisa del estudio de la víctima sin mayores precisiones en base a que cualquier ciencia o disciplina en sus primeros estadios trata de recabar la máxima información sobre su objeto de investigación. Sin embargo, conforme avanzan las investigaciones deben ir delimitando cuáles son sus fines específicos que dan significado a ese estudio o, dicho con otras palabras, cuál es la razón por la que se procede a examinar a la víctima.

Si aquello que se pretende alcanzar es el estatus de ciencia con las investigaciones que se realizan, con independencia de que sea la Victimología o la Criminología que integre a la anterior, es contradictorio mantener que la mera recopilación de características presentes en las víctimas sea digna de esta condición. No se debe aceptar la excusa de que estamos ante un campo interdisciplinar para defender la acumulación de rasgos de la víctima que podría hacerse perfectamente desde otros saberes como el ámbito psicológico. La consideración de ciencia merece el esfuerzo de integrar conocimiento a fin de construir un verdadero análisis de la víctima y esto solamente se puede conseguir integrando el conocimiento que proporcionan otros ámbitos con el conocimiento adquirido del examen de los procesos de victimización y desvictimización típicos

²²⁸ MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. y AGUILAR CARCELES, M. M. Victimología: un estudio..., cit., p. 41.

del campo victimológico que, lógicamente, no son el centro de interés de ninguna otra ciencia.

Esta idea es muy sencilla de comprender con los ejemplos prácticos siguientes, un psicólogo que realiza un examen para evaluar los rasgos psicológicos de la víctima está realizando un estudio psicológico. Al igual ocurre con un jurista que examina los derechos que se conceden a las víctimas. Ni una ni otra investigación deberían poder catalogarse como criminológicas pues ofrecen una perspectiva desde su estricto ámbito –a pesar que esto ocurre con demasiada frecuencia-, todo ello, sin perjuicio de su gran aportación.

Por ello, si se pretende evolucionar en una ciencia criminológica focalizada sobre la figura victimal, los conocimientos que puedan provenir de otras ramas del saber deben integrarse con el estudio de los procesos de victimización y desvictimización que son los objetos de investigación propios de esta ciencia. De este modo, por ejemplo, un estudio sobre los derechos concedidos a las víctimas del terrorismo desde la perspectiva de los procesos de victimización y desvictimización sí que podría considerarse un estudio criminológico debido a que, además del correspondiente análisis de los derechos que les corresponden se circunscribe al procedimiento por el que se convierte en víctima y atraviesa las etapas para dejar atrás el rol de víctima que únicamente se examinan en el campo de la Victimología.

2.4. Objeto de investigación: la víctima

De las definiciones ofrecidas sobre la Victimología se puede constatar que el centro de interés de esta materia gira en torno a la figura victimal, no obstante, las investigaciones han ido evolucionado paulatinamente, pues, en principio la atención recayó sobre la relación entre la víctima el victimario y la contribución de aquél en la producción del delito, si bien, con el paso del tiempo, este análisis ha cedido protagonismo al examen de las características habitualmente presentes en las víctimas de un determinado delito y que, en base a ellas, se puede proceder al estudio de su victimización, desvictimización y prevención.

2.4.1. Estudio de las víctimas: clasificación victimal

La demanda social cada vez más favorable de la defensa, protección y apoyo de la víctima sobre todo durante su paso por el sistema judicial contribuyó de forma decisiva en la elaboración de las tipologías victimales. Los investigadores se vieron empujados a tratar de estudiar los rasgos de los afectados por los hechos delictivos y la forma más fácil y comprensible de plasmar, organizar y presentar sus resultados en el caso de que fueran obtenidos empíricamente o clasificarlos en función de criterios teóricos como la tipificación de nuevos delitos era recurrir a las tipologías²²⁹.

La proliferación de las clasificaciones víctimas se expandió rápidamente por ello no es extraño encontrar multitud de propuestas tanto en el ámbito internacional como en el nacional. Pese a esta novedosa tendencia su utilidad no ha quedado suficientemente acreditada. Una de las razones es que pueden existir tantas clasificaciones como autores hayan decidido elaborar la suya propia y, en este sentido, muchas de las que han aparecido no suponen ningún avance sino más bien algún retoque casi imperceptible de las anteriores²³⁰.

En el panorama internacional han destacado las tipologías elaboradas por MENDELSON, VON HENTIG, FATTAH, NEUMAN y JOUTSEN. Los dos primeros autores presentan su clasificación de acuerdo a la interacción entre la víctima y el ofensor y, en segundo lugar, destacan los aspectos que determinan el papel que cada uno de ellos tiene en la comisión del delito²³¹.

MENDELSON realizó una de las primeras clasificaciones en el ámbito victimal y por esta circunstancia ha sido una de las más comentadas y valoradas y, consecuentemente, ha servido de base a posteriores propuestas como la de FATTAH. El criterio que fundamenta su elaboración es la culpabilidad, a partir de

²²⁹ MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. y AGUILAR CARCELES, M. M. *Victimología: un estudio...*, cit., pp. 149-151.

²³⁰ MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. y AGUILAR CARCELES, M. M. *Victimología: un estudio...*, cit., pp. 149-151.

²³¹ MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. y AGUILAR CARCELES, M. M. *Victimología: un estudio...*, cit., pp. 149-151.

este parámetro se establece una relación inversa entre el agresor y la víctima, esto es, cuánto más culpable sea uno de los protagonistas el otro tendrá una responsabilidad menor. En el caso de la valoración gradual de la víctima existen dos puntos opuestos, entre los que se insertan otras situaciones intermedias, que son la mínima responsabilidad de la víctima y la máxima responsabilidad de la víctima. Así, este autor categoriza a la víctima de la forma siguiente²³²:

- *Víctima completamente inocente o ideal.* La primera categoría se refiere a la persona que se convierte en víctima sin que se le pueda responsabilizar por ningún motivo y, por consiguiente, no se le puede considerar provocadora de la producción del hecho delictivo. El único responsable es el delincuente. El ejemplo clásico es el niño.
- *Víctima de culpabilidad menor o víctima por ignorancia:* en este caso, la persona afectada sí que interviene en la comisión delictiva prestándose a ser victimizada, si bien, su cooperación responde a su falta de conocimiento o representación del alcance de la acción que ha realizado. Dentro de este tipo se encuentra la mujer embarazada que se provoca a través de medios impropios un aborto y, como consecuencia de su acción, muere.
- *Víctima tan culpable como el infractor y la víctima voluntaria:* representa a la víctima que libremente se somete a situaciones, circunstancias o condiciones que le pueden victimizar y acepta conscientemente los resultados que le puede acarrear. Tal puede ser el caso de la eutanasia activa o la llamada "ruleta rusa".
- *Víctima más culpable que el infractor:* en cambio, en esta categoría ya se considera a la víctima más favorecedora de la producción del delito que el propio delincuente, así, se contemplan dentro de esta denominación a la víctima provocadora y a la víctima imprudente. Ésta última se incorpora a la categoría al no tomar las medidas preventivas necesarias y arriesgar con su actuación convertirse en víctima. El

²³² MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. y AGUILAR CARCELES, M. M. Victimología: un estudio..., cit., pp. 153-155; RODRIGUEZ MANZANERA, L. Victimología. Estudio..., cit., pp. 81-84.

ejemplo paradigmático será la persona que no cierra la puerta de su casa exponiéndose a que un ladrón pueda entrar.

- *Víctima más culpable o únicamente culpable:* este tipo agrupa, a su vez, tres supuestos. En primer lugar, la víctima infractora o agresora, esto es, el agresor que comete una acción se convierte en la víctima por razón por ejemplo de la legítima defensa. En segunda lugar, la víctima simuladora que pretende que el juez condene a una tercera persona. Y, finalmente, la víctima imaginaria tal y como podría ocurrir en un caso de paranoia.

La consecuencia de la elaboración de esta clasificación es la propuesta de un sistema de penas basado en que la sanción del delincuente irá disminuyendo a medida que la víctima se integre en las categorías en las que tenga atribuida más responsabilidad. La sanción se le aplicará completa siempre y cuando el ofensor tenga la absoluta culpa –coincide con el tipo de la víctima inocente-, en mientras que, la sanción se le aplicará conforme al grado de participación de la víctima si se constata la participación –víctima por ignorancia, voluntaria, provocadora e imprudente- y, por último, se le absolverá cuando la culpa la tenga la víctima, esto es, la víctima es la agresora, simuladora o imaginaria.

Por su parte, la primera tipología elaborada por VON HENTIG se refiere a las “clases generales” –que actualmente hoy se denominan “víctimas especialmente vulnerables”-, que agrupa las siguientes clases²³³:

- *El niño.* El autor destaca este primer grupo por sus características específicas relativas a la debilidad física, inmadurez e inexperiencia al estar pasando por el proceso biológico y mental normal en cualquier individuo que se esté formando y desarrollando como adulto. Por estas razones no tiene la capacidad física, intelectual ni moral para enfrentarse a un adulto que trate de agredirlo. De hecho, pueden convertirse fácilmente en víctimas de delitos sexuales, de explotación

²³³ MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. y AGUILAR CARCELES, M. M. Victimología: un estudio..., cit., pp. 157-165; RODRIGUEZ MANZANERA, L. Victimología. Estudio..., cit., pp. 84-88.

laboral o ser utilizados como instrumentos de las organizaciones criminales.

- *Las mujeres.* Suelen ser víctimas de delitos de naturaleza sexual, contra la propiedad como los tirones de bolso o violentos puesto que generalmente el ofensor se prevalece de sus condiciones físicas frente a ellas.
- *Los ancianos.* Al igual que en la categoría anterior suelen convertirse en víctimas de delitos contra la propiedad.
- *Los débiles y enfermos mentales.* Entre ellos destaca a las personas intoxicadas debido a que son más propicias de cualquier delito, en especial, los relativos a la propiedad.
- *Los inmigrantes, las minorías y los tontos.* Los primeros y los segundos presentan dificultades para adaptarse a la sociedad y su cultura. Suelen convertirse en víctimas de prejuicios raciales y políticos. A los últimos, los considera "víctimas innatas" al aprovecharse el delincuente de su escasa inteligencia.

Además de la tipología anterior, VON HENTIG elaboró otra tipología en función de criterios psicológicos, quedando configurada del modo siguiente²³⁴:

- *El deprimido.* La persona deprimida experimenta inadecuación, pérdida de esperanza y disminución de la actividad física y mental. Estas circunstancias provocan que se torne más apática sin ganas de pelear y, por consiguiente, es más fácil que se torne víctima.
- *El ambicioso.* Las personas ambiciosas se vuelven victimizables en la medida en que son avariciosas y les motiva el ánimo de lucro.
- *El lascivo.* Generalmente se refieren a las víctimas de los delitos sexuales que propician la comisión del mismo.
- *El solitario.* Suelen ser víctimas de delitos contra la propiedad y estafas puesto que en su vida se mueven en busca del bienestar económico,

²³⁴ MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. Y AGUILAR CARCELES, M. M. Victimología: un estudio..., cit., pp. 157-165; RODRIGUEZ MANZANERA, L. Victimología. Estudio..., cit., pp. 84-88.

compañía, amor y felicidad, de tal forma que, en su ansia de conseguirlo rebajan sus defensas.

- *El atormentador.* Son personas que crean un clima donde ponen trabas a aquellos que les rodean poniéndoles dificultades, si bien, acaban siendo también víctimas del contexto difícil y tenso que han creado. Hay que tener presente que suelen estar afectados por trastornos de la personalidad o estar bajo la influencia del alcohol o las drogas.
- *El bloqueado, el excluido y el agresivo.* Son víctimas catalogadas de fáciles por distintos motivos como puede ser la marginación.

A su vez, partiendo de la anterior tipología psicológica puede diferenciarse en función de cuatro criterios las siguientes situaciones, en primer lugar, en virtud de la situación de la víctima, ésta puede ser una *víctima aislada*, esto es, la persona que al permanecer separada de la comunidad no puede valerse de la protección social que esta le puede brindar y por ello pone en peligro su integridad. En segundo lugar, la denominada *víctima por proximidad*, al contrario que la anterior, el hecho de mantenerse cercana con determinadas personas propiciaría su victimización, así se pueden diferenciar dentro de esta categoría: a) víctima por proximidad espacial –el caso de las aglomeraciones-; b) víctima por proximidad familiar –violencia intrafamiliar- y; c) víctima por proximidad profesional –médicos o enfermeros-.

El segundo criterio aplicado son los impulsos y la eliminación de las inhibiciones de la víctima relacionados con el ánimo de lucro, las ganas de vivir, la agresividad y el valor. Respecto a la *víctima con ánimo de lucro* coincide con los individuos que, por su motivación de obtener beneficios inmediatos, son más vulnerables de caer en las redes de explotación como puede ser laboral o de prostitución. Por su parte, las personas que precisan de un cambio de rumbo en su vida rutinaria y monótona buscan experiencias novedosas o nuevas sensaciones como pertenecer a bandas callejeras o el abuso de drogas y son las que integran la categoría *víctima con ansias de vivir*. En cambio, aquellos sujetos que un día fueron victimizados pueden cambiar su rol y convertirse en el ofensor

de sus victimarios, son las llamadas *víctimas agresivas*. Por último, la clase *víctimas sin valor* está integrada por el colectivo que representa a aquellos de “menor valor social”, nadie se preocupar por su devenir y, al mismo tiempo, el sistema judicial tampoco les impondrá ninguna sanción.

La tercera regla que aplica tiene que ver con la víctima con resistencia reducida que integra un total de seis supuestos. El primero es *la víctima por estados emocionales* que alude a las circunstancias que se pueden tener en cuenta a la hora de cometer una infracción como presentar más vulnerabilidad para recibir la ofensa. Los estados emocionales pueden ser el odio o el miedo. Por el contrario, existen personas que son más vulnerables por la etapa de la vida en la que se encuentra tal y como puede ser el caso de los menores de edad que en ciertas ocasiones no puede defenderse de agresiones, a este colectivo se le llama *víctima por transiciones normales en el curso de la vida*. Mientras que, la *víctima perversa o psicopáticos* son individuos víctimas de sus propios problemas como podría ser el caso de violadores o prostitutas. La *víctima bebedora* tiene más probabilidad de ser victimizada debido a su consumo de alcohol. La *víctima depresiva* también es más vulnerable de autolesionarse y en algunos casos de suicidarse. Al igual que la víctima depresiva la *víctima voluntaria* pone de su parte o en este caso da el consentimiento para que el ofensor cometa la conducta delictiva.

Finalmente, en función de la propensión de la víctima al delito, el autor propone un total de seis categorías. La primera es la llamada *víctima indefensa* que tras realizar una valoración de los costes y beneficios que puede obtener de la persecución del delito del que ha sido víctima, decide tolerar la lesión producida a que se le produzcan más daños. En cambio, la *víctima falsa* no es que tolere la lesión como el anterior, sino que él mismo se auto-victimiza con la finalidad de conseguir un determinado beneficio. El ejemplo clásico es la simulación de una baja laboral. La *víctima inmune* se diferencia del resto de categorías por el hecho de que tienen menos probabilidades de ser víctimas en virtud de su profesión – miembros del sistema judicial-. En cuarto lugar, se refiere a la *víctima hereditaria*, si bien, no la define. A continuación, la denominación *víctima reincidente* está

pensada para las personas que tienen más posibilidades en el futuro de ser nuevamente victimizadas. Finalmente, la *víctima que se convierte en agresor* indica que las personas previamente victimizadas pueden aprender la metodología y como desenvolverse para convertirse en delincuente.

Las tipologías presentadas por MENDELSON y VON HENTIG tuvieron el calado suficiente en FATTAH que elaboró la suya partiendo de las premisas de los anteriores autores. Respectivamente, incluye en su propuesta la valoración gradual de la responsabilidad que puede tener la víctima en la comisión del delito y la incorporación del tipo relativo a la víctima predispuesta²³⁵.

En un primer momento elaboró una clasificación atendiendo al factor de la responsabilidad asumida por la víctima en la que distinguía los siguientes tipos:

- *Víctima deseosa o suplicante*. Esta primera categoría coincide con el individuo que, fruto de sus ansias por conseguir en el menor tiempo posible algún propósito, facilita, comete o favorece la realización de delitos.
- *Víctima que consiente libremente o víctima voluntaria*. Es la persona que no impide la comisión del hecho delictivo, si bien, no participa activamente durante su comisión como en el caso anterior.
- *Víctima sin consentimiento*. Se refiere concretamente a los supuestos en que la víctima por ejemplo no ha consentido mantener relaciones sexuales con su ofensor, sin embargo, ni implica que, con anterioridad a su comisión, haya realizado conductas que hayan suscitado en el ofensor esa respuesta.

Con posterioridad, FATTAH, volvió a clasificar a las víctimas, pero en esta ocasión las clasificó en los cinco tipos que se enumeran a continuación:

²³⁵ MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. Y AGUILAR CARCELES, M. M. *Victimología: un estudio...*, cit., pp. 165-168; RODRIGUEZ MANZANERA, L. *Victimología. Estudio...*, cit., pp. 88-90; HERRERA MORENO, M. *Victimación. Aspectos generales*", en BACA BALDOMERO, E., ECHEBURUA ODRIÓZOLA, E., Y TAMARIT SUMALLA, J. L. (coords.). *Manual de Victimología*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, p. 83.

- *Víctima no participante.* Corresponde a la categoría que MENDELSONH denominó víctima ideal o con grado de responsabilidad nulo. De tal forma que se concibe esta expresión para agrupar a las víctimas ajenas a la comisión del hecho delictivo y sin que mantengan ningún tipo de relación con el ofensor.
- *Víctima latente o predispuesta.* Se refiere al colectivo de personas que es más fácil que adquieran el rol de víctimas teniendo en cuenta las características que presentan de naturaleza biopsicológica, social o psicológica desde la perspectiva del agresor.
- *Víctima provocativa.* En esta categoría se agrupa, por una parte, a la *víctima precipitadora* que facilitan las condiciones para que se produzca el delito y, por otra parte, la *víctima provocadora* que instiga la comisión del mismo.
- *Víctima participante.* Incluye a aquellas víctimas que intervienen de forma activa o pasiva durante la ejecución del delito.
- *Víctima falsa.* Se concibe esta categoría no sólo para integrar a las personas que simulan ser víctimas de un crimen, sino que además incorpora a las víctimas que se victimizan a ellas mismas con el objetivo de conseguir ciertos beneficios.

Una clasificación más moderna es la elaborada por NEUMAN sobre la base del contexto en el que se ha cometido el delito y las circunstancias de la acción delictiva. Así, diferencias tres grandes bloques²³⁶.

En primer lugar, atiende al criterio que valora la actitud de la víctima, por ello, dentro de las *víctimas individuales* se refiere, primero, a la *inexistente*. Bajo esta denominación alude tanto a la víctima que no ha tenido nada que ver con la producción del delito como aquellas que se han opuesto al hecho delictivo. El segundo tipo es la *culposa*. Distingue dentro de esta categorización a la

²³⁶ MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. Y AGUILAR CARCELES, M. M. Victimología: un estudio..., cit., pp. 168-172; RODRIGUEZ MANZANERA, L. Victimología. Estudio..., cit., pp. 93-94; HERRERA MORENO, M. Victimación. Aspectos..., cit., p. 85.

provocadora, la cooperadora y la coadyuvante. La diferencia principal entre las dos últimas es que la coadyuvante participa de modo activo mientras que la cooperadora puede participar como consecuencia por ejemplo de amenazas. Finalmente, enumera a la *dolosa*, para hacer referencia a los sujetos pasivos que están plenamente implicados en la comisión delictiva.

En el segundo grupo incluye a las *víctimas familiares*, esto es, la realización de este tipo de delitos ocurre dentro del ámbito familiar, de manera que, casi todos los sucesos delictivos pasan desapercibidos para el resto de la sociedad quedando al margen de los registros oficiales de delitos.

NEUMAN también dedica una categoría a las *víctimas colectivas*, es decir, a las víctimas que por su condición y circunstancias pueden constituir una verdadera comunidad victimal. Dentro de este apartado señala tres grupos diferenciados. Por una parte, *la víctima como nación* específicamente pensada para los casos de rebelión y conspiración. Mientras que la *víctima como comunidad social* incluye a las víctimas de los delitos de genocidio y de terrorismo. Por último, especifica *la victimización a grupos específicos* para referirse por ejemplo a los individuos que nuevamente son victimizados durante su paso por el sistema judicial.

La última categoría representa a los colectivos que por diversos motivos pueden ser excluidos socialmente y se llama *víctimas del sistema social*.

El último autor mencionado, JOUTSEN, plantea un nuevo enfoque que presenta bastantes diferencias con las tipologías anteriores. Ya no se basa tanto en las características personales de las víctimas, sino que parte de la perspectiva situacional-preventiva, esto es, se centra en los criterios de si la víctima ha tomado en consideración las medidas preventivas necesarias y, además, valora la intencionalidad del ofensor, de tal forma que, ha elaborado dos clasificaciones²³⁷.

²³⁷ MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. Y AGUILAR CARCELES, M. M. Victimología: un estudio..., cit., pp. 172-175; HERRERA MORENO, M. Victimación. Aspectos..., cit., p. 83.

En función de la primera que atiende a las medidas de precaución o prevención que se estima que la víctima hubiera debido tomar, este autor, distingue:

- *Víctima concienzuda o diligente* –corresponde con la víctima ideal o irreproachable-, es decir, el individuo que, a pesar de haber tomado las medidas estimadas necesarias para garantizar su seguridad, se convierte en víctima.
- *Víctima facilitadora*. Como su propio nombre indica, en este caso, favorece la comisión del delito, aunque, dentro de esta categoría, se pueden diferenciar, por una parte, la *víctima facilitadora accidental* que no ha tomado las precauciones necesarias sin tener en cuenta la determinación del agresor y, por otra parte, la *víctima facilitadora esencial o determinante* en la que su conducta debe presentar ciertas características que instiguen el delito.
- *Víctima invitadora*. El sujeto pasivo es consciente tanto del riesgo que asume como de las consecuencias que se pueden derivar de su comportamiento.

En cuanto al factor relativo a la intencionalidad de la víctima, distingue cuatro categorías:

- *Víctima provocadora*. La persona origina las circunstancias gracias a las cuales el hecho delictivo se comete.
- *Víctima consentidora*. Coincide con el individuo que asume el posible resultado de daño en su persona con independencia de su naturaleza material o no.
- *Víctima instigadora o promotora*. Facilita la acción delictiva, no obstante, se diferencia de la víctima provocadora en que no inicia la conducta.
- *Víctima simuladora*. Con el propósito de conseguir beneficios sobre todo de naturaleza económica, miente sobre la realización de un hecho delictivo.

No obstante, el panorama internacional no ha sido el único donde han aparecido tipología pues en el ámbito español también la doctrina se ha encargado de elaborarlas. Entre ellas destacan las propuestas por JIMENEZ DE ASUA, PERIS RIERA, LANDROVE, y MORILLAS FERNANDEZ²³⁸.

JIMENEZ DE ASUA fue el primer español en interesarse en la clasificación de las víctimas cuyo criterio es la determinación o no del sujeto pasivo, esto es, si el delincuente ha elegido a la víctima movido por el azar o por alguna circunstancia especial. De esta manera establece dos grupos, por una parte, las víctimas *indeterminadas o indefinidas* –aunque también recibe los nombres de indiferentes, anómalas o fungibles–, que se caracterizan por la elección basada en el azar que realiza sobre ellos el delincuente. Por otra parte, si el ofensor elige a la víctima se les denomina víctimas *determinadas o infungibles*. Los motivos que pueden llevar al agresor a escoger a su víctima dependerán de las características físicas o psicológicas que determine subjetivamente. Sin embargo, esta categorización puede subdividirse en dos clases²³⁹:

- Las *víctimas resistentes* ofrecen oposición al agresor. A su vez, este tipo agrupa a la *resistente real o explícita* en la que el individuo realiza un comportamiento defensivo y, a la *resistente presunta* que, debido a la imposibilidad material del momento no puede contrarrestar al ofensor.
- Las *víctimas coadyuvantes* que participan de modo activo en su victimización. Como resultado de su participación, se puede atenuar la sanción al agresor o, en su caso quitarle la compensación económica que le correspondería a la víctima en función del delito sufrido.

²³⁸ MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. Y AGUILAR CARCELES, M. M. Victimología: un estudio..., cit., p. 181.

²³⁹ MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. Y AGUILAR CARCELES, M. M. Victimología: un estudio..., cit., pp. 181-183; HERRERA MORENO, M. Victimación. Aspectos..., cit., pp. 82-83.

Con posterioridad, PERIS RIERA ya no se centra en la víctima como parte de la pareja criminal puesto que se focaliza en el papel que juega dentro de la dinámica multicausal del delito. En este contexto, el autor diferencia un total de cinco clases de víctimas sin que sean excluyentes entre sí, que quedarán categorizadas del modo siguiente²⁴⁰:

- *Víctima fungible o infungible*. Es la base del resto de categorías pues a partir de esta se desarrollan. Concretamente se dice que la víctima es *fungible* cuando la relación que mantiene con el agresor carece de relevancia en cuando víctima podría ser cualquier persona –víctima sustituible-. En cambio, cuando sí que se constata una relación entre el ofensor y la víctima bien porque la haya escogido por sus características bien porque la conocía previamente, hablamos de víctimas *infungibles*.
- *Víctima participante*. Con esta expresión se refiere a las víctimas que intervienen de forma activa en la producción del delito, si bien, dentro de este tipo se pueden diferenciar cuatro modalidades: 1) *víctimas por imprudencia* que hacen más fácil la producción del hecho delictivo – como puede ser el caso del individuo que no cierra la puerta de su casa y favorece la comisión de un robo-; 2) en cambio, las *víctimas alternativas* adquieren este rol por el mero azar; 3) las *víctimas provocadoras* son víctimas de sus propias acciones y este hecho determina la conducta delictiva –es el caso de retar al agresor a cometer un delito contra él-; 4) las consideradas *víctimas voluntarias* permiten ser sujeto activo de delitos instigados por ellos mismos –la eutanasia-.
- *Falsas víctimas*. Aluden a las personas que afirman que han padecido un delito sin que sean víctimas reales. No obstante, dentro de esta categoría se diferencian dos tipos, primero, la *víctima imaginaria* que ella misma cree que ha sido víctima de un delito y, segundo, la *víctima*

²⁴⁰ MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. Y AGUILAR CARCELES, M. M. Victimología: un estudio..., cit., pp. 183-186.

simuladora que es consciente que miente por diversas razones y se presenta como sujeto pasivo del hecho delictivo.

- Las denominadas *víctimas ocultas* coinciden con la "cifra negra".
- *El grupo como víctima* es el ámbito de menor avance científico, por ello, cree que es preciso mantener el control de las actividades gubernamentales que atentan contra colectivos vulnerables.

LANDROVE incide en una tipología de víctimas basada en los tipos penales específicos, esto es, se muestra a favor de una orientación más prácticas que las elaboradas hasta entonces. El criterio sobre el que fundamenta su formulación relacionada con los tipos penales de los que son sujeto pasivo, esto es, de la fungibilidad frente a la infungibilidad de las víctimas y así queda reflejado en los dos primeros grupos. Tomando como punto de partida estas premisas, señala las siete categorías que se presentan a continuación²⁴¹:

- Las *víctimas no participantes o víctimas fungibles* –víctimas inocentes o ideales- no tienen ningún tipo de relación con el agresor, de tal forma que, cualquier persona puede ser victimizada. Dentro de esta categoría donde las víctimas pueden ser sustituibles o intercambiables se pueden distinguir las *víctimas accidentales* que se convierten por razón del azar pues son el producto de encontrarse en el momento y lugar indicados, mientras que, las *víctimas indiscriminadas*, no existen relación entre la víctima y el agresor ni tan siquiera el agresor coincide con la víctima en la comisión del hecho delictivo ya que suele cometerse en ausencia del sujeto activo.
- *Víctimas participantes o infungibles*. Esta expresión quiere decir que tienen algún grado de responsabilidad sobre la producción del delito ya se considere su implicación voluntaria o involuntaria. Esta modalidad se suele diversificar en cuatro supuestos: en primer lugar, las *víctimas*

²⁴¹ MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. Y AGUILAR CARCELES, M. M. Victimología: un estudio..., cit., pp. 186-191; HERRERA MORENO, M. Victimación. Aspectos..., cit., pp. 85-86; LANDROVE DIAZ, G. Victimología..., cit., pp. 39-43.

poco precavidas que facilitan la comisión del delito al no tomar las suficientes precauciones. En segundo lugar, las *víctimas precipitadoras* que interviene de una forma más activa en la dinámica criminal. En tercer lugar, las *víctimas alternativas* que si bien es el azar el que determina su victimización son ellas las que voluntariamente asumen esa posición. Y, en cuarto lugar, las *víctimas voluntarias* que agrupan a las personas que libremente aceptan y asumen las consecuencias que se pueden derivar del delito.

- *Víctimas familiares.* La relación previa que mantiene con el agresor contribuye a aumentar la vulnerabilidad de la víctima dentro del ámbito doméstico.
- Con las *víctimas colectivas* se alude no ya al individuo sino al colectivo sometido a una victimización.
- *Víctimas especialmente vulnerables.* Las circunstancias y condiciones que están presentes en determinadas personas favorecen su victimización. Los principales factores que pueden predisponerlas son de naturaleza personal como las influencias biológicas o psicológicas y de carácter social como puede ser el estilo de vida.
- *Víctimas simbólicas.* No se dirige la acción delictiva contra la persona física sino por la ideología o sistema de valores que representa.
- *Falsas víctimas.* Como en tipología anteriores se refiere al conjunto de personas que defiende haber sido víctimas de un delito que en realidad no se ha producido. Se puede manifestar mediante engaño o simulación y entonces estaríamos ante una *víctima simuladora* o, la persona que lo alega padece trastornos mentales y se le denominaría *víctima imaginaria*.

MORILLAS FERNANDEZ parte de las clasificaciones de MENDELSON y VON HENTIG, aunque, introduce varias variables que las combina de acuerdo al criterio veracidad o falsedad de la condición de víctima, después incorpora el nivel

de victimización ya sea individual o grupal y, finalmente, valora el grado de culpabilidad de la víctima frente al ofensor²⁴².

Conforme a la primera pauta distingue entre la víctima falsa y la víctima real. El autor considera que la *víctima falsa* hasta que se demuestre lo contrario tiene la condición victimal. Bajo esta denominación, se encuadran las dos categorías siguientes:

- *Víctima imaginaria*. Se trata de la persona que cree ser víctima de algún delito debido a los factores biopsicosociales que presente. Tales factores pueden influir en las personas que sufren trastornos mentales, paranoicos o psicóticos para considerarse víctimas. También incluye como sujetos típicos de esta modalidad a los niños y ancianos.
- *Víctima simulada*. En cambio, en este tipo, la persona es consciente de que no es una verdadera víctima y, a pesar de ello, primando un interés propio o ajeno, actúan bajo tal rol.

Por su parte, las *víctimas reales* son los verdaderos afectados por los hechos delictivos. En función del número de víctimas se distinguen dos categorías:

- Las denominadas *individuales*. En el caso de que hubiere varias víctimas, no tienen ninguna relación entre sí ni tan siquiera existe representatividad de una de ellas sobre la totalidad del grupo agredido. No obstante, atendiendo al criterio que valora el grado de participación de la víctima en la dinámica delictiva, se puede distinguir, a su vez, cuatro categorías. En primer lugar, la víctima inocente, elegida por el victimario libremente. Esa elección puede deberse a varias circunstancias como son: 1) víctimas especialmente vulnerables y, en consecuencia, fácilmente victimizables. 2) víctimas accidentales a causa de fuerza mayor, esto es, no existe un responsable de su

²⁴² MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. Y AGUILAR CARCELES, M. M. Victimología: un estudio..., cit., pp. 191-201.

comisión, como puede ser el caso de un desastre natural. 3) la víctima inocente común que no participan en la producción del hecho delictivo ni se puede incluir en las subdivisiones precedentes. En segundo lugar, se refiere a la víctima voluntaria que coincide con la persona que se presta a adquirir el estatus victimal de una manera libre y voluntaria, tal es el caso de la eutanasia. En tercer lugar, aparece la víctima provocativa que, como se puede deducir por el nombre, incita al autor a cometer el delito. Se diferencia de la víctima voluntaria en que recurre al empleo de engaños y artimañas para provocar la ira del autor y conseguir de esta manera que cometa el delito, mientras que, la víctima voluntaria consiente directamente ante el autor su agresión. Por último, la víctima culpable describe la situación en la que la supuesta víctima es el agresor y el hipotético ofensor, en realidad, es la víctima del delito.

- *Víctima real colectiva.* Al contrario que ocurre con las víctimas individuales, las colectivas tienen una relación directa entre ellas, esto es, hay un nexo causal y una de ellas puede representar a las demás. El criterio de la representatividad se acepta en un determinado supuesto en el momento en que más de la mitad de los integrantes del colectivo han sido victimizados. No obstante, dentro de este grupo se acepta la existencia de dos categorías. Por una parte, la víctima colectiva difusa que remite al conjunto de víctimas afectadas por un delito que no se pueden aislar individualmente. Tan sólo se sabe que el hecho delictivo ha afectado a la globalidad, un ejemplo de esta categoría es una catástrofe. Frente a la víctima colectiva difusa, en la víctima colectiva propiamente dicha, sí que se den constatar el nexo causal y la representatividad previamente explicados.

2.4.2. Crítica a las clasificaciones victimales

Resulta bastante llamativo que en las clasificaciones se incida prioritariamente en el criterio de la intervención de la víctima en la dinámica criminal, esto es, en la mayoría de las propuestas se hace una valoración de si la víctima ha participado en la invitación, producción o ejecución del delito y este estudio se hace sobre el examen de dos extremos, por una parte, la víctima inocente y, por otra parte, la víctima responsable de la comisión del hecho delictivo.

A pesar de que pueda ser cuestionable solamente el interés mostrado por la doctrina en este aspecto tras haber transcurrido más de cincuenta años de sus inicios, el principal problema reside en que la corriente predominante entiende a la Victimología como el estudio científico de la víctima y para cumplir con esta función han elaborado las tipologías victimales. Sin embargo, si no se especifican las finalidades que se persiguen con estas elaboraciones más allá del estudio de la figura victimal, puede encontrarse una cierta contradicción entre el movimiento a favor de las víctimas que intenta subsanar el periodo de olvido de la víctima y que reclama programas de ayuda hacia este colectivo, y el quehacer científico prácticamente limitado a las clasificaciones victimales.

2.4.3. Estudio de las características de la víctima

Sin perjuicio de que hemos señalado en el epígrafe precedente que el éxito de esta materia reside en saber definir cuáles son las funciones específicas que persigue la Victimología, la tarea previa de un criminólogo consiste en examinar al individuo afectado por el hecho delictivo, puesto que, una correcta delimitación de sus características permitirá realizar tanto un programa de prevención victimal más acorde a los rasgos habituales en función de un tipo delictivo concreto como una estrategia de desvictimización que atienda específicamente a sus necesidades. En consecuencia, el estudio inicial de la víctima se oriente de una manera precisa hacia la prevención o la reparación del propio individuo.

El significado y alcance del concepto de víctima y, específicamente, el de víctima del terrorismo se estudiará en el capítulo tercero. No obstante, en este preciso instante sólo se va a realizar una pequeña introducción a las dos concepciones de víctimas -que se volverán a retomar- con el objetivo de plasmar, a continuación, lo que ahora nos interesa que son las características presentes en la víctima que debe examinar el criminólogo. A este respecto, se suele afirmar que existen dos posturas contrapuestas acerca del objeto de estudio en virtud de la concepción de la víctima y de la Victimología que se defienda, así TAMARIT destaca la presencia tanto de la concepción estricta como de la concepción amplia de víctima²⁴³.

Por un lado, el sector que defiende la concepción estricta parte de la consideración de la disciplina como el estudio científico, en exclusividad, de la víctima directa a consecuencia de la producción de un hecho delictivo. Esta postura se fundamenta en la existencia de las diversas características que manifiestan las víctimas de los delitos frente a los afectados por acciones reprochables socialmente pero que, a su vez, no son constitutivos de delito y junto a ellas las víctimas de accidentes o catástrofes naturales. Como se puede observar tampoco tendría cabida dentro de esta acepción el examen de las víctimas indirectas. Otro argumento que trata de reforzar esta tesis se sustenta en la lectura estricta de la normativa reguladora de la protección que distingue entre víctimas conforme a la tipología a la que pertenezcan. Por lo tanto, las finalidades de la restricción de la condición de víctima a tener en cuenta pretenden evitar la difusión social del sentimiento de victimización y, al mismo tiempo, el repunte de la demanda de ayudas sociales²⁴⁴.

Mientras que, por otro lado, frente a la equiparación de la víctima directa con el elemento de investigación único de la Victimología, la visión amplia se basa sobre todo en la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder elaborada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1985. Este documento internacional contempla

²⁴³ TAMARIT SUMALLA, J. M. La Victimología: cuestiones..., cit., pp. 18-24.

²⁴⁴ TAMARIT SUMALLA, J. M. La Victimología: cuestiones..., cit., pp. 18-24.

una significación más extensa de la palabra víctima, en la medida en que, no sólo circunscribe a los afectados por las acciones u omisiones que vulneren la legislación penal de un Estado Miembro al término de víctima. Junto con este reconocimiento también hace mención expresa a la víctima indirecta que coincide con los familiares o personas a cargo que mantengan una relación directa con la víctima directa. Incluso, además abarca una tercera dimensión que se refiere tanto a los afectados por los hechos reprochables socialmente que no constituyan delito como a las víctimas de accidentes y catástrofes naturales²⁴⁵.

Aquí se va a seguir una postura intermedia de las presentas en los párrafos anteriores puesto que, se considera, en una primera aproximación, objeto de estudio de esta materia tanto a la víctima directa como a la indirecta en función de la concepción amplia del delito, que se ha explicado en el primer capítulo, que integra al hecho delictivo y a los hechos antisociales.

El criterio secundado por la mayoría de la doctrina atiende a los factores de naturaleza endógena o exógena que nos pueden ayudar, por una parte, a medir el riesgo de victimización de un individuo y, por otra parte, a identificar quienes pueden ser las víctimas potenciales de un concreto tipo delictivo en función de los rasgos que la convierten en un sujeto más vulnerable. Concretamente, se habla de factores en lugar de causas en la medida en que los primeros facilitan, predisponen o favorecen la conversión de una persona en víctima mientras que las segundas producen la victimización²⁴⁶.

En el caso de las víctimas de la banda terrorista ETA abordar este estudio se convierte en una labor complicada debido a dos motivos, por una parte, tan sólo existe a día de hoy un registro oficial sobre los datos de los afectados por este fenómeno con resultado de muerte, sin perjuicio, de que sea una misión que la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional acabe de asumir con el propósito de elaborar la base de datos correspondiente con las demás victimizaciones con diferente resultado que se hayan producido.

²⁴⁵ TAMARIT SUMALLA, J. M. La Victimología: cuestiones..., cit., pp. 18-24.

²⁴⁶ MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. Y AGUILAR CARCELES, M. M. Victimología: un estudio..., cit., pp. 203-224.

Por otra parte, la información que podemos recabar de los estudios científicos publicados tampoco tiene todos los datos suficientes para que podamos realizar un examen criminológico exhaustivo de todas las variables, pues, en función de criterio que sigue cada investigador y, a su vez, de la información también limitada a la que tiene acceso al no constar un registro oficial con todos los datos necesarios imposibilitan esta tarea. En este sentido, los factores de naturaleza endógena a los que habitualmente se hace referencia al menos para presentar a las víctimas relativos a la edad o a los factores biológicos no se pueden averiguar, tan sólo se puede saber el factor referido al sexo que nos puede indicar si la comisión de este delito se dirige hacia determinado género. Respecto a los factores de naturaleza exógena que aluden al estado civil, nacionalidad, profesión y espacio y tiempo victimal se mencionará a los dos últimos, en la medida en que, sobre el primero no constan todos los datos y el segundo tampoco se sabe con certeza, aunque por los nombres y apellidos se pueda presuponer.

De acuerdo a la enumeración de las 914 víctimas mortales elaborada en el Informe Foronda y plasmada en su tabla número 26 en función de su profesión queda representada del modo siguiente²⁴⁷:

Profesión de la víctima mortal	Número víctima
Guardia civil	206
Policía armada o nacional	149
Víctima colateral	116
Oficial o suboficial del ejército	87
Civil acusado de confidente	60
Civil asesinado por el terrorismo de extrema derecha	38
Político o cargo público de la democracia	30
Acusado de narcotráfico	30

²⁴⁷ En el año 2013 el Instituto de Historia Social Valentín Foronda (UPV/EHU) recibió el encargo proveniente de la Dirección de Promoción de la Cultura del Gobierno Vasco de realizar un estudio sobre los contextos históricos del terrorismo que han tenido lugar en el País Vasco y la significación social que han adquirido sus víctimas.

Policía local	25
Miembro de ETA asesinado por terrorismo de extrema derecha	23
Civil	18
Equivocación o error de objetivo	15
Policía autonómica	14
Civil acusado de confidente, franquista o ultraderechista	12
Civil acusado de franquista o ultraderechista	11
Empresario extorsionado	10
Soldado	9
Político o cargo público de la dictadura	9
Miembro de la judicatura	6
Ex miembro de la organización terrorista	5
Acusado de participar en la "guerra sucia"	5
Funcionario de prisiones	5
Lemoiz	5
Civil acusado de confidente y de narcotráfico	4
Opositor ideológico del terrorismo de extrema derecha	3
Acusado de participar en la "guerra sucia" y civil acusado de franquista o ultraderechista	3
Empresario con conflicto laboral	2
Opositor ideológico de ETA	2
Policía armada o nacional y Leitzaran	2
Acusado de participar en la "guerra sucia", civil acusado de ultraderechista o franquista y de confidente	2
Gendarme	1
Leitzaran	1
Civil acusado de confidente y empresario extorsionado	1
Civil acusado de confidente y opositor ideológico de ETA	1
Empresario extorsionado y TAV	1
Acusado de participar en la "guerra sucia" y civil acusado de confidente	1

Acusado de participar en la “guerra sucia” y acusado de narcotráfico	1
Oficial o suboficial del ejército y miembro de la judicatura	1

Tabla 1: extraída del Informe Foronda. Los contextos históricos del terrorismo en el País Vasco y la consideración social de sus víctimas. 1968-2010.

Sin entrar a valorar la conveniencia o no de la categorización precedente, se puede observar que, el 59´52% de las víctimas mortales ostentan un significado político en cuanto representaban en cierta medida al estado español –entre ellos las diferentes policías, guardia civil, miembros de la judicatura, militares y políticos o cargos públicos- que puede estar relacionada directamente con la selección del objetivo terrorista. De una manera más precisa, el grupo que más resultados de muerte ha padecido corresponde con guardias civiles y policías que, se han convertido en objetivos primordiales desde los primeros pasos de la banda armada. Las categorías referidas a los militares diferencian los de alta y baja graduación, si bien, el número alcanzado por los segundos es superior a los pertenecientes al primero por el mayor impacto que han generado sobre el Estado. Por su parte, es cierto que, la policía local y la ertzaintza no han sido los objetivos propiamente dicho de la organización terrorista a pesar de la cantidad de víctimas mortales que han producido. En el caso de la policía autonómica, ha tenido víctimas a partir de 1985, sin embargo, parte de ellas han sido a consecuencia de enfrentamientos con etarras o en las tareas de desactivación de explosivos. De entre los ciudadanos civiles que casi constituyen la mitad de los fallecidos, una parte han sido políticos o altos cargos del Estado. Esta clase de víctimas ha atravesado dos periodos que tienen su punto de inflexión en el año 1980. Con anterioridad a esta fecha, se mató a un total de 19 cargos relacionados con conexiones franquistas²⁴⁸.

Si bien, si se realiza una comparación evolutiva, la mayor parte de víctimas que pertenecían al colectivo de policías y guardias civiles en una primera etapa que en la mayoría de ocasiones se le denomina “guerra de desgaste” no tiene

²⁴⁸ DE LA CALLE, L. Y SANCHEZ-CUENCA, I. “La selección de víctimas en ETA”, Revista Española de Ciencia Política, núm. 10, abril 2004, pp. 63-65.

tantas bajas a partir del año 1994, donde sufren más agresiones mortales los políticos y los cargos estatales. Se considera que los primeros caen desde el 45% al 21%, frente, al segundo grupo que experimenta un aumento desde el 2% al 29%²⁴⁹.

Es cierto que, las actuaciones terroristas pueden vincularse, sobre todo, en una primera etapa con el ejercicio de una profesión ya que han resultado especialmente afectados el colectivo de policías y guardias civiles, si bien, esa proclividad de victimización cambia en los últimos años en que tuvo lugar este fenómeno en el que los objetivos fueron principalmente los políticos y los cargos estatales. Aunque, como se puede observar, responden en ambos casos a una significación política y vinculada con los pilares básicos del estado social y democrático de derecho.

En cuanto a los factores relativos al espacio y tiempo se refieren a que el delito suele cometerse en el lugar y tiempo considerado "ideal" por los terroristas a fin de cumplir con sus pretensiones.

En primer lugar, la evolución de las víctimas mortales por años estrictamente de las víctimas de la banda terrorista ETA, sin perjuicio de que, con anterioridad se hayan incluido varias categorías más –como los miembros de ETA asesinados por grupos de extrema derecha o sus ex miembros de la organización– queda reflejada en la siguiente tabla:

Año	Número víctimas mortales
1968	2
1969	1
1972	1
1973	6
1974	19

²⁴⁹ Los datos vienen establecidos por el análisis de DE LA CALLE y SANCHEZ-CUENCA, si bien, hay que tener en cuenta que el artículo apareció publicado en el año 2004, antes de que, cesaran las acciones terroristas y con ellas los resultados de muerte; en DE LA CALLE, L. Y SANCHEZ-CUENCA, I. La selección de víctimas..., cit., pp. 63-65.

1975	14
1976	17
1977	11
1978	66
1979	80
1980	96
1981	32
1982	38
1983	40
1984	33
1985	37
1986	42
1987	52
1988	19
1989	18
1990	25
1991	45
1992	26
1993	14
1994	13
1995	16
1996	5
1997	13
1998	6
2000	23
2001	15
2002	5
2003	3
2006	2
2007	2
2008	4

2009	3
2010	1
Total	845

Tabla 2: extraída de la Tabla 21 del Informe Foronda. Los contextos históricos del terrorismo en el País Vasco y la consideración social de sus víctimas. 1968-2010.

De acuerdo con los datos anuales presentados en la tabla anterior, se puede observar que, el periodo en el que ha habido más acciones terroristas que han producido un mayor número de víctimas mortales corresponde con los años 1978 y 1980. Sin embargo, dentro de estas agresiones, las acciones dirigidas contra los confidentes o informadores empezó en el año 1975, alcanzando su punto más álgido entre los años 1978 y 1980, continuando hasta la mitad de los años ochenta la campaña contra ellos y, finalmente, apareciendo esporádicamente hasta los últimos años. Precisamente en el año 1980, la banda terrorista comienza a desplegar sus acciones hacia los narcotraficantes bajo el pretexto de que las sustancias estupefacientes dañan a los jóvenes vascos y, por ello, no pueden participar en su proyecto totalitario. Por último, cabe destacar que, a partir del año 1995, los terroristas cambian sus objetivos inicialmente establecidos por los representantes de los partidos políticos, concejales, miembros del sistema de justicia y periodistas pues, de esta manera, causaban un mayor impacto social y político con menos asesinatos bien seleccionados conforme a su finalidad de amedrentar a la sociedad que estaba en su contra²⁵⁰.

El último factor exógeno que se debe examinar es el relativo a la distribución geográfica de los atentados perpetrados. A este respecto, los datos que constan por provincias en el Informe Foronda son los siguientes:

Provincia/localidad	Víctimas
---------------------	----------

²⁵⁰ DE LA CALLE, L. Y SANCHEZ-CUENCA, I. La selección de víctimas..., cit., pp. 65-68.

Álava	45
Alicante	5
Barcelona	53
Bizkaia	225
Burgos	1
Cádiz	1
Cantabria	4
Castellón	1
Córdoba	1
Francia	44
Gerona	1
Gipuzkoa	324
Granada	3
Huesca	2
Islas Baleares	2
León	1
Logroño	4
Madrid	125
Málaga	1
Murcia	1
Navarra	43
Salamanca	1
Sevilla	7
Valencia	3
Venezuela	2
Zaragoza	14
Total	914

Tabla 3: extraída de la Tabla 25 del Informe Foronda. Los contextos históricos del terrorismo en el País Vasco y la consideración social de sus víctimas. 1968-2010.

Si se atiende a las zonas seleccionadas para cometer los atentados terroristas se podrá entender cuáles han sido las estrategias establecidas por la banda terrorista. Partiendo de criterio de oportunidad, existen ciertos patrones geográficos sistemáticos seguidos por los terroristas. Examinando el periodo comprendido entre 1978 y 2003, se comprueba que, en la primera etapa denominada "guerra de desgaste", la mayoría de los atentados, concretamente el 72'5%, tienen lugar tanto en el País Vasco como en Navarra. Fuera de estas zonas, las acciones terroristas se desplegaron en Madrid, Barcelona y Zaragoza en función de que, las dos primeras, representan los centros económicos y políticos y, por ello, conllevan más facilidades para cometerlos y un mayor número de víctimas potenciales. Además, de la diferencia cuantitativa de las actuaciones terroristas producidas dentro y fuera del País Vasco, existe una diferencia sustancial en cuanto a la selección del objetivo. Se puede apreciar que, las víctimas elegidas dentro del País Vasco representan un 88'1%, en base a que, los ataques indiscriminados no favorecerían el apoyo popular a la banda, frente al resto de España que oscila en torno al 56'2%. Si bien, conviene aclarar que, en Madrid la presencia de una mayor infraestructura de la organización terrorista elevó a un índice cercano al 71'7% la selección de las víctimas²⁵¹.

No obstante, si nos basamos en la evolución por periodos del fenómeno terrorista ocurrido en territorio español, se puede constatar que, disminuyó la tendencia a cometer atentados dentro del País Vasco entre los dos periodos, de manera que, en la "guerra del desgaste" el promedio alcanzada el 75% frente a la posterior etapa llamada "frente nacionalista" que descendió al 56%. Correlativamente a estos datos de descenso, se produjo un aumento en el resto de las provincias españolas, especialmente, en Madrid, debido al cambio de estrategia con la que buscaron potenciales víctimas entre los miembros de los partidos políticos del ámbito estatal, esto es, seleccionando a sus víctimas²⁵².

El examen a tiempo de estas características permitiría adelantarse o prever las condiciones propicias o víctimas potenciales de los hipotéticos futuros

²⁵¹ DE LA CALLE, L. Y SANCHEZ-CUENCA, I. La selección de víctimas..., cit., pp. 69-71.

²⁵² DE LA CALLE, L. Y SANCHEZ-CUENCA, I. La selección de víctimas..., cit., pp. 69-71.

acontecimientos de esta naturaleza, de manera que, su estudio dinámico sería la base de las políticas de prevención. De igual forma, parte de los factores sobre todo los asociados con la significación política subyacente a estas acciones nos informarían sobre el camino a seguir durante la superación de los tres estadios de la victimización y, especialmente, la relacionada con el reconocimiento institucional y social que contrarrestaría ese carácter político que propicia que la víctima experimente una sensación de mero instrumento en la pretensión terrorista.

2.5. Funciones de la Victimología

Tras haber revisado la evolución científica victimológica a través de las aportaciones profesionales y doctrinales realizadas en los Simposios Internacionales, las definiciones sobre el concepto de Victimología y de haber destacado la necesidad de llevar a cabo un estudio sobre la víctima, es el momento idóneo para abordar tanto la función de prevención como la de desvictimización y, para ello, se va a analizar qué ha dicho la doctrina sobre estas cuestiones.

De entrada, debemos ser conscientes que, existen autores que se muestran favorables a centrarse en las características personales o sociales de la víctima, frente a otros, quienes, por su parte, apuestan por estudiar los procedimientos de victimización y desvictimización. Sin embargo, como ya se ha mencionado en los epígrafes precedentes, ambas posturas no se traducen irremediablemente en una contradicción, sino que, por el contrario, más bien son complementarias. Desde esta perspectiva, BERISTAIN ofrece una alternativa que engloba todas las dimensiones de la víctima, cuando explica que *"nuestros especialistas deberán dedicarse al estudio físico, psíquico y social de la víctima, y habrán de analizar el desenvolvimiento del suceso victimizante como un todo, para poder concluir las respuestas que la sociedad, por medio de las instituciones pertinentes, debe llevar a cabo para prevenir la victimación, para tratar y atender*

a las víctimas , sin olvidar su relación con el victimario²⁵³. En definitiva, este autor construye esta materia sobre cuatro ejes vertebradores fundamentales que van más allá de la relación dinámica que pueda existir entre el autor de la agresión y la víctima y de la simple atención a las peculiaridades que tiene la víctima en los niveles físico, psíquico y social, al ser necesario, desde su punto de vista, abordar el análisis de otros temas inherentes a la conversión en víctima- el denominado proceso de victimización-, los problemas derivados de la adquisición de esta condición y su consecuente tratamiento y prevención. Con este planteamiento, deja entrever las tres coordenadas sobre las que debe asentarse la Victimología alrededor de la víctima que coincide con tres momentos temporales, esto es, el antes, durante y después de la comisión del hecho delictivo:

- Características personales (antes)
- Proceso de victimización (durante)
- Respuestas: tratamiento y prevención (después)

Insiste, con toda razón, a la hora de entenderlo como un todo debido a que el desconocimiento de alguna etapa ignoraría la realidad y las verdaderas implicaciones del delito en el sujeto afectado. Ciertamente, la ampliación de la Victimología a los problemas concernientes al proceso de victimización y los mecanismos de respuestas de las instituciones elaborados al respecto, muestran el creciente interés por el fenómeno victimal y la necesidad de estudiarlo de una manera integral sin olvidarse de cualquier factor relevante que pudiera presentar la víctima y que pudiera condicionar su evolución. Esto significa que, si no se toman en consideración las características personales y sociales de naturaleza endógena o exógena de las víctimas es prácticamente imposible conocer el alcance de las victimizaciones en la propia persona que lo ha experimentado y, además, se podría caer en el error de establecer los mismos programas generales

²⁵³ BERISTAIN IPIÑA, A. “La Victimología creadora de nuevos derechos humanos”, en BERISTAIN IPIÑA, A. Y DE LA CUESTA ARZAMENDI, J. L. (dirs.). Victimología: VIII Cursos de Verano en San Sebastián, 1990, pp. 207-208. Disponible en: <http://www.ehu.eus/documents/1736829/2030810/17+-Victimologia+creadora.pdf>. (Consultado el 22/02/2016).

de tratamiento, intervención y prevención victimal, sin atender a las peculiaridades de cada grupo de víctimas y, a su vez, los rasgos propios de cada víctima. Igualmente, resultaría incoherente, examinar la victimización sufrida por un individuo sin poder establecer una vinculación con los factores de protección o de riesgo característicos del mismo, ambas categorías fundamentales para poder dar una explicación razonable acerca del alcance de la victimización que ha padecido la víctima y sus posibles estrategias de afrontamiento, desvictimización y reparación.

En un sentido similar, FATTAH precisa que la finalidad de la Victimología Criminológica consiste en *"desarrollar, por el estudio profundo de la víctima, un conjunto de reglas generales y de principios comunes, así como otro tipo de conocimientos que pueden contribuir al desarrollo y al progreso de las ciencias criminológicas y jurídicas, permitiendo una mejor comprensión del fenómeno criminal, de los procesos criminogénicos, de la personalidad y de la peligrosidad del delincuente"*²⁵⁴. Teniendo en cuenta que el futuro de la Victimología debe transitar hacia nuevas tendencias de acuerdo con el progreso de cualquier disciplina, este autor, ha revisado sus respectivos estados pasado y presente para mejorar y profundizar en el estudio de las víctimas, con este propósito, ha sido capaz de identificar las líneas de investigación futuras que deberán estar relacionadas con el afianzamiento de la visión realista de la victimización y el consecuente abandono de la ampliación excesiva de los derechos de las víctimas, de tal forma que, se puede acotar su objeto de estudio conforme a su metodología y recopilación de datos. Por ello, conviene que, es preciso fomentar la investigación victimológica de la asistencia de la víctima y la repercusión que tiene en su persona la victimización, pues, a pesar de estar considerada un área en pleno auge no existen estudios empíricos que sustenten la intervención dirigida a sus necesidades, puesto que, estamos ante un terreno inexplorado que, a su vez, debe orientarse hacia el ámbito científico abandonando cualquier tipo de argumentación de índole política, constituyendo, en definitiva, la única forma de que la Victimología pueda prosperar. Por último, el progreso victimal se haya

²⁵⁴ RODRIGUEZ MANZANERA, L. Criminología..., cit., pp. 31-32.

en estrecha relación con el paradigma de la Justicia Restaurativa, entendida en clave humanista, cuyos fines son la curación, reparación y prevención de la victimización a través de las figuras de mediación, conciliación, restitución e indemnización²⁵⁵.

Por su parte, RODRIGUEZ MANZANERA, fija los tres niveles de estudio de la Victimología en²⁵⁶:

- Nivel individual: la víctima
- Nivel conductual: la victimización
- Nivel general: victimidad

El inconveniente que puede surgir a consecuencia de la distinción de los tres niveles de estudio reside en la presumible falta de interconexión entre las aportaciones realizadas en cada uno de ellos, en la medida en que, así planteados, los profesionales tan sólo se habrán dedicado a investigar aspectos parciales que explicarán exclusivamente una parte sin conocer los datos relevantes de los demás aspectos. Incluso, su deslinde podría dar lugar, en un futuro, al desarrollo propio de una metodología, terminología y un conjunto de principios.

Al mismo tiempo, aunque no se hayan referido directamente a las funciones de la Victimología, se han realizado multitud de esfuerzos con la finalidad de sintetizar todas las cuestiones que han sido abordadas en las tendencias de los sectores del movimiento científico y, en este sentido, uno de los más destacables delimita un total de cuatro tendencias en el círculo académico que nos ocupa que son los siguientes²⁵⁷:

La primera corriente enfoca sus conocimientos en la atención de la persona que se ha convertido en víctima. Los profesionales se centran en prestar ayuda psicológica y psiquiátrica al sujeto afectado por un violento de carácter violento

²⁵⁵ FATTAH, E. A. Victimología: pasado, presente..., cit., pp. r2:19-r2:24.

²⁵⁶ RODRIGUEZ MANZANERA, L. Criminología..., cit., pp. 31-32.

²⁵⁷ GARRIDO, V., STANGELAND, P. Y REDONDO, S. Principios de Criminología..., cit., pp. 660-661.

o sexual, así que, los esfuerzos irán dirigidos, sobre todo a evitar o a tratar el trastorno post-traumático.

El segundo enfoque se dirige, en cambio, hacia el estudio empírico de la propia victimización. El análisis de este fenómeno es vital para poder desarrollar tanto las teorías de la victimización como la elaboración de los programas de prevención.

Los estudios empíricos sobre el fenómeno de la victimización empezaron a realizarse en 1730 en Dinamarca. El ayuntamiento presionado por el aumento de los robos y las quejas de sus ciudadanos, encargó a un equipo de seis personas encuestar casa por casa a todos los ciudadanos. Se les preguntaba qué les habían robado y si sospechaban de alguien que lo hubiera cometido. Los resultados reflejaron 185 robos entre el total de 3.500 habitantes, este dato traducido por un criminólogo alcanzaba el índice del 1 al 2% de victimización anual en el delito de robo. Pasado bastante tiempo, en los años 40 y 50 surgió la técnica del autoinforme que constató que tras preguntar a los encuestados si han cometido delitos obtuvieron respuestas muy veraces. Si bien, dos décadas después, se optó por invertir el sentido de las preguntas resurgiendo el rol de víctima ya que parecía más fácil preguntar acerca de su experiencia como víctima que como agente activo del delito. No obstante, el hito más importante fue la Encuesta Nacional sobre Victimación Delictiva que se publica anualmente desde 1972. La Comisión Presidencial en EEUU decidió calcular el riesgo de ser robado o atracado, sin tener en cuenta los datos de las estadísticas policiales. La participación en este primer estudio alcanzó los 10.000 hogares o, exactamente 33.000 personas. La incorporación de las encuestas en la profesión criminológica ha tenido una relevancia bidireccional, por una parte, ofrece información sobre el análisis de la delincuencia sin perjuicio de los datos aportados por las instituciones públicas y, por otra parte, ha permitido acercarse a los factores de riesgo para convertirse en víctimas y, obviamente, facilita la función de prevención concretamente la implementación de programas con sus medidas correspondientes.

La consecuencia del estudio empírico sobre la victimización es la creación de teorías sobre el mismo fenómeno. Sobre todo, de los estudios centrados en robos, se ha comprobado la existencia de algunas personas que sufren un riesgo superior de experimentar la condición de víctima puesto que este índice no se distribuye de manera igual entre todos los miembros de la sociedad. En una primera aproximación, WOLFGANG investigó este punto en los delitos de homicidio donde encontró similitudes entre la víctima y su autor, aunque, HINDELANG fue el responsable de extender este análisis a otros tipos de delito. Su conocida elaboración denominada teoría de los estilos de vida señala que el riesgo de sufrir algún hecho delictivo varía en función de cómo vive el individuo. En el concreto estilo de vida de un sujeto, los factores sociodemográficos constituyen las expectativas de rol, frente a los aspectos pertenecientes a los ámbitos social y económico que limitan o imponen restricciones estructurales en la vida. De manera que, estas restricciones personales condicionan a la persona a adaptarse a su rol y esto es lo que se conoce como estilo de vida estrictamente. De él, dependerán sus amistades, las circunstancias del entorno de sus relaciones sociales y, en definitiva, influirá en la exposición al riesgo y probabilidad de victimización. Los resultados de las encuestas realizadas sobre la victimización señalan que el sector con más riesgo de padecer algún delito son los jóvenes. La razón reside en que su estilo de vida característico es más activo y, por lo tanto, corren más riesgos. En consecuencia, estos datos apoyan la teoría. Posteriormente, FELSON enunció la teoría de las actividades rutinarias en la que puso de manifiesto que, una persona motivada a cometer un delito, siempre que tenga el objetivo disponible sin la presencia de un guardián o más ampliamente ausencia de vigilancia, lo llevará a cabo.

Tercero, un sector está integrado por los partidarios de concentrarse en la situación de la víctima a lo largo del proceso penal en el que interviene. Han constatado que, ciertos aspectos señalados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las víctimas del delito, no se han llegado a materializar por completo. Entre las recomendaciones que se hicieron en esta declaración se encuentran los siguientes: la información a las víctimas de delitos acerca del procedimiento; introducir la posibilidad de que la víctima explique su

parecer o sus preocupaciones durante su participación en el proceso; por último, el empleo de mecanismos informales de resolución de conflictos como la mediación, arbitraje y principios de la justicia de tradición en etnias minoritarias.

Con la finalidad de encontrar un punto medio en el que la víctima tenga una mayor atención en el proceso sin que se pierdan las garantías procesales del acusado, se han propuesto alternativas de participación de la víctima durante el transcurso del procedimiento basadas en las recomendaciones de las Naciones Unidas o en la experiencia de otros países que han incorporado a sus sistemas. Las necesidades de las víctimas se reflejan en la siguiente enumeración: a) la elaboración de una política criminal que incluya la prevención de los delitos; b) necesidad de una atención con las condiciones básicas de humanidad, empatía y receptividad; c) garantizar en los supuestos de extrema gravedad, la protección judicial inmediata; d) ofrecer un servicio destinado a cubrir las necesidades primarias, entre los que se encontrarían las pólizas de hogar de las compañías de seguro; e) asegurar con la máxima celeridad la ayuda de carácter psicológica o psiquiátrica sobre todo en los delitos relacionados con las agresiones sexuales, violentas y los accidentes de tráfico; f) la introducción de un sistema de alternativas en la resolución de conflictos como la mediación o el arbitraje; g) la obligación de informar a la víctima sobre las decisiones que puedan afectarle a lo largo de un procedimiento; h) el establecimiento del sistema público de seguridad social dirigido a facilitar las prestaciones oportunas a las víctimas afectadas por los grados de incapacidad o invalidez.

Sobre las oficinas de asistencia a las víctimas se dice que no cubren los problemas básicos de las víctimas en el momento entran en contacto con el sistema judicial. De esta relación, las víctimas perciben principalmente su formalismo, frialdad y falta de celeridad, además de que, las funciones de información y asesoramiento provenientes de las oficinas ayudan, pero no consiguen del todo la prevención de la victimización y, precisamente, esta es la razón que motiva la introducción de reformas en el sistema legal. En cierta medida, la enumeración de los mecanismos anteriores al igual que la información ofrecida por personal preparado para atender a las víctimas sobre sus derechos

tratarían de solventar las deficiencias detectadas y facilitarían la restauración de la propia víctima.

Por último, existen movimientos políticos que miran hacia un determinado tipo de víctima concreto. Un ejemplo podría ser el movimiento feminista.

De la explicación de estos cuatro enfoques que priman en la investigación victimológica se puede concluir que, el primer paso ha de consistir en el análisis empírico del proceso por el que un individuo se ha convertido en víctima – victimización- con la finalidad de poder establecer con los datos extraídos los programas de prevención que mejor se adapten en función del tipo delictivo y de tratamiento y ayuda victimal que favorezca su recuperación y desvictimización, esto es, que deje atrás el rol de víctima, aunque, estos esfuerzos no deben centrarse exclusivamente en estrategias psicológicas y psiquiátricas.

Teniendo en cuenta los aspectos reseñados por la doctrina y que todas las disciplinas sociales pertenecen a las calificadas “ciencias jóvenes”, es lógico que vayan evolucionando a la vez que siguen los pasos de las denominadas “ciencias duras”, por ello, es imprescindible para su correcto desarrollo atravesar diferentes etapas durante su progresión teórica, sistemática y metodológica²⁵⁸. Así pues, se puede concluir que podemos distinguir varias fases en la construcción, aún inacabada, de la llamada Victimología:

- 1) En un primer periodo, que converge con el positivismo criminológico²⁵⁹, la víctima permanecía estática sin que nadie le prestara atención, por lo que, a esta etapa fue denominada del olvido de la víctima.

²⁵⁸ ELBERT, C. A. Manual básico..., cit., p. 28.

²⁵⁹ Las razones del olvido de la víctima en el ámbito científico se argumentan en los protagonistas principales del hecho delictivo. Por un lado, el delincuente representa a un individuo que causa fascinación e interés a la sociedad, el público en general tiende a identificarse más con él que con la víctima, en cuanto es un individuo que pelea por sus deseos y pretensiones sin ningún tipo de inhibiciones; durante su consecución, además, es capaz de vulnerar las normas reguladoras para conseguirlo. Por otra parte, la víctima se identifica con el sujeto débil, posición que nadie quiere ocupar, obviamente, como es lógico, suele causar menos empatía a ser un reflejo de fragilidad. Asimismo, la víctima recuerda el fracaso de la tarea principal encomendada al Estado de tutelar y proteger a los intereses de la comunidad, incluso, algún colectivo de víctimas puede suponer un coste político; en LANDROVE DIAZ, G. Victimología..., cit., pp. 25-26; RODRIGUEZ MANZANERA, L. Criminología..., cit., p. 5; CUAREZMA TERAM, S. J. “La Victimología”, en PICADO, S., CANÇADO TRINDADE, A. A. Y CUELLAR, R. (comp.). Estudios Básicos de Derechos Humanos V, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 1996.

- 2) En la segunda etapa, la víctima obtuvo un papel activo puesto que se consideró que contribuía a la aparición del hecho delictivo. Los pioneros en el inicio del movimiento a favor de las víctimas fueron VON HENTIG²⁶⁰ y MENDELSON²⁶¹, si bien, las primeras aportaciones en esta materia no se preocuparon por la persona de la víctima sino por el estudio de su posible contribución activa a la dinámica del hecho delictivo dentro de la interacción autor-víctima. Esto es, los primeros pasos de la Victimología se dirigieron a la víctima como posible causa de la aparición del delito ya sea propiciado por sus rasgos o comportamientos personales o en virtud de la relación que tiene con el victimario, configurando la denominada "Pareja Criminal"²⁶² y, de aquí, surgen las primeras clasificaciones de víctimas.
- 3) Sin embargo, como ya se ha explicado, el estudio de las víctimas que pone el acento en las características de las víctimas o las condiciones de una persona que acentúan su proclividad de convertirse en víctima, es decir, los llamados factores victimógenos²⁶³ son la base del ámbito prevencionista, ya que, su descripción está estrechamente relacionada con su estilo de vida que puede ofrecer una explicación acerca de la exposición, atracción o proximidad de la víctima a los acontecimientos delictivos. A esta función pueden contribuir tanto las encuestas de victimización como las encuestas los estudios centrados en los daños físicos, psíquicos y sociales que sufren las víctimas, incluso, durante el proceso penal²⁶⁴, aportando información y datos relevantes sobre el proceso de victimización.

Como es lógico, el avance lógico de una ciencia no puede quedarse estancado en la simple descripción²⁶⁵ de las características victimales,

Disponible en: <http://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/2246/estudios-basicos-05-1996.pdf>. (Consultado el 25/02/2016).

²⁶⁰ LANDROVE DIAZ, G. Victimología..., cit., p. 27; CUAREZMA TERAM, S. J. La Victimología..., cit., p. 299; FATTAH, E. A. Victimología: pasado, presente..., cit., p. r2:3.

²⁶¹ LANDROVE DIAZ, G. Victimología..., cit., pp. 27-30.

²⁶² CUAREZMA TERAM, S. J. La Victimología..., cit., pp. 299-300.

²⁶³ LAMARCA, C. Criminología..., cit., p. 226.

²⁶⁴ PETERS, T. Criminología y Victimología..., cit., pp. 100-103.

²⁶⁵ GUTIERREZ HINOJOSA, T. D. La explicación científica..., cit., p. 137.

sino que deben suceder a este estudio la orientación hacia la prevención o el tratamiento de la víctima.

- 4) También partiendo del estudio de la víctima se puede orientar hacia la intervención integral en ella con la finalidad de ayudarla a que sea capaz de salir de su rol de víctima. No obstante, en función del estado actual de la Victimología se deben fijar unos objetivos realistas, alcanzables en virtud del avance o progreso de la misma, debido a que, en ningún caso, es conveniente plantearse unos fines utópicos desvinculados tanto de la normal evolución de esta disciplina como de su investigación.

En consecuencia, la base de esta disciplina es el estudio de las características inherentes a la víctima de una determinada tipología delictiva, si bien, las funciones básicas de este examen o, dicho de otra manera, la finalidad de esta materia es la introducción de programas tanto de prevención como de la desvictimización integral de la víctima que implica su reparación integral.

2.6. La prevención victimal

El término prevención, que en un sentido genérico significa evitar o anticipar alguna cosa, en nuestro ámbito, alude a la realización de intervenciones previas a la aparición del hecho delictivo con el propósito de reducir las tres dimensiones relativas a las probabilidades de su comisión, reducir su frecuencia o, en su caso, disminuir su gravedad.

Este punto de vista coincide con la función de prevención del delito asignada a la ciencia criminológica, no obstante, en los últimos años y, sobre todo auspiciado por las investigaciones victimológicas se ha comenzado a hablar de la llamada prevención victimal. En este contexto, es lógico abordar las dos dimensiones con el objetivo de señalar, en su caso, cuáles son las diferencias que presumiblemente existen entre ambas categorías. Así que, es necesario traer a colación el estudio de las características de las víctimas que suelen verse

involucradas en una determinada tipología delictiva para poder vincularla con la prevención victimal.

En cuanto a la prevención del delito, en el 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en Brasil del 12 al 19 de abril de 2010, se definió esta expresión como *"la labor realizada para reducir el riesgo de que se cometan delitos y sus efectos perjudiciales en las personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia. La aplicación de la ley y las sanciones penales no se incluyen en este contexto, pese a sus posibles efectos preventivos"*. De tal forma que, las estrategias preventivas cuya finalidad sea mantener dentro de unos parámetros normales de la delincuencia, pueden integrarse en tres direcciones que atienden, respectivamente, al criterio social, a los aspectos relacionados con la comunidad y las circunstancias que propician la actividad delictiva.

En primer lugar, la perspectiva social está estrechamente relacionada con la aplicación de medidas del mismo carácter que incluyan las de naturaleza económicas, laborales y educativas que inciden sobre todo en los factores de riesgo y de protección presentes en los niños y adolescentes. Mediante estos programas de intervención se pretende aumentar su bienestar y fomentar el desarrollo y mantenimiento de conductas conformes a las normas sociales vigentes pues, en la medida en que, se consigan respuestas favorables hacia los comportamientos adecuados a los estándares sociales se neutralizarán las conductas desviadas y, en su caso, las delictivas.

Mientras que, la prevención dirigida a la comunidad tiene como objetivo modificar las condiciones en las zonas con alta probabilidad de que se produzcan delitos o, al contrario, de que sus habitantes se conviertan en víctimas. Son los casos típicos de barrios con problemas económicos, sociales y de falta de cohesión comunitaria.

Por último, el propósito de la prevención situacional consiste en disminuir las oportunidades para que se produzca la comisión delictiva, aumentar el riesgo para que el delincuente sea aprehendido y reducir las ganancias que puede obtener tras cometer el delito. Estas tres premisas se fundamentan en la

racionalidad del delincuente a la hora de valorar los riesgos y beneficios de su actuación y en la teoría de las actividades rutinarias.

Por su parte, es cierto que, en bastantes ocasiones los mecanismos de prevención a los que se refieren los documentos internacionales hacen hincapié tanto al ofensor y la víctima como a las circunstancias que rodean al contexto. A pesar de que no se elaboren demasiados programas de prevención dedicados al colectivo victimal, se ha constatado que se pueden identificar personas con determinados factores que las hacen más vulnerables para determinados tipos delictivos y pueden convertirse en víctimas. Al mismo tiempo, en los estudios de revictimización se ha puesto de manifiesto que existen lugares con circunstancias y personas con hábitos que tienen un mayor nivel de victimización múltiple²⁶⁶.

Tan sólo ciertos autores han dedicado algún espacio a lo largo de sus manuales y estudios al análisis de la prevención victimal. Quienes se han decidido a abordar el tema han tomado como punto de referencia las premisas subyacentes a la prevención de la delincuencia para lograr establecer las líneas generales de la prevención victimal y, por ello, consideran en primer lugar quienes son los destinatarios y en qué etapa de la comisión delictiva se va a introducir el programa, esto es, antes, durante o después de la comisión del delito²⁶⁷.

En primer lugar, la denominada prevención evolutiva toma como punto de partida el examen de los factores de riesgo y de protección que están presentes a lo largo de todas las etapas del desarrollo de las personas, por lo tanto, esta teoría se basa en la génesis de los comportamientos delictivos. Desde esta perspectiva se defiende la existencia de ciertos factores de riesgo similares en el ámbito individual, familiar y escolar en la mayoría de los sujetos que realizan hechos antisociales, de manera que, es posible la detección a tiempo de estos factores que predicen la posibilidad de la aparición de comportamientos que impliquen hechos antisociales y brinda, en consecuencia, la posibilidad de

²⁶⁶ BARBERET, R. *“La prevención de la victimación”*, en BACA BALDOMERO, E., ECHEBURUA ODRIÓZOLA, E., Y TAMARIT SUMALLA, J. L. (coords.). *Manual de Victimología*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pp. 235-236.

²⁶⁷ BARBERET, R. *La prevención de la...*, cit., pp. 238-239.

introducir programas de intervención previamente a la comisión de los hechos delictivos o desviados²⁶⁸.

Desde esta manera de comprender y abordar la prevención, los programas de intervención tienen un papel destacado pues de ellos dependerá la producción de conductas antisociales o, en algunos casos, delictivas en la vida de los individuos. Así que, con la finalidad de evitar la aparición de ambas, los programas se dirigirán al entrenamiento de las personas que presentan los factores de riesgo para trabajar la impulsividad y la baja empatía primordialmente. Si bien, junto a estos factores se debe prestar atención a la formación de los padres a fin de prevenir la falta de supervisión sobre sus hijos y los programas dirigidos a los colegios para detectar los problemas asociados a la ausencia de adaptación escolar del menor, el bajo rendimiento escolar y los patrones de agresividad escolar que pueden surgir en el desarrollo de la vida escolar puesto que todos estos factores están asociados a las conductas delictivas²⁶⁹.

Por su parte, la prevención situacional está vinculada con las teorías del crimen que presentan un modo alternativo de entender el fenómeno criminal. Bajo esta denominación se agrupan un conjunto de teorías desordenadas cuya característica común es la introducción de la noción oportunidad en su explicación del hecho delictivo. No buscan, como las teorías de la criminalidad, las causas últimas del delito, sino que, por el contrario, están interesadas en las formas de aparición del delito y su posible prevención a través de programas que neutralicen esas oportunidades. Parten de la premisa de que existen individuos motivados a cometer infracciones penales, buscando responder a tres cuestiones básicas: cuándo, dónde y bajo qué circunstancias estos delincuentes llevan a cabo sus actuaciones²⁷⁰. Dicho de otro modo, estudian los síntomas del delito con el objetivo de reducir los factores externos al sujeto que influyen en su oportunidad de llevar a cabo una conducta criminal concreta. En ellas, ya no se mira al

²⁶⁸ BARBERET, R. La prevención de la..., cit., pp. 241-242.

²⁶⁹ BARBERET, R. La prevención de la..., cit., p. 242.

²⁷⁰ MEDINA ARIZA, J. J. "El control social del delito a través de la prevención situacional", en Revista de Derecho y Criminología, núm. 2, Madrid, 1998, p. 283.

individuo delincuente, sino que, por el contrario, se presta especial atención y se interviene sobre las oportunidades o situaciones delictivas²⁷¹. De esta manera, se hace indispensable aludir al concepto y alcance del término oportunidad.

Los tres principales enfoques que estudian la oportunidad: la teoría de las actividades rutinarias, la teoría de los estilos de vida y la teoría de la elección racional del delincuente abordan su análisis desde diferentes perspectivas, sin embargo, llegan al mismo sitio²⁷². Su principal diferencia se encuentra a la hora de llevar la teoría a la práctica²⁷³. El elemento oportunístico incide tanto en la dimensión temporal, el momento en que ocurre el hecho delictivo, como en el espacial de la aparición del delito²⁷⁴.

COHEN Y FELSON señalaron que el crimen se produce en el momento en que convergen tanto en el espacio como en el tiempo tres factores: un objetivo adecuado, un delincuente motivado y que no haya ningún guardián capaz de proteger al primero. Esta situación se produce durante los actos cotidianos del día a día²⁷⁵. Lo que hace que un delito aparezca en un determinado lugar y tiempo está relacionado con aquellas oportunidades que ofrecen y favorezcan la comisión de los hechos delictivos²⁷⁶.

Los programas de prevención situacional se sustentan principalmente con dos tipos de técnicas, por una parte, el refuerzo del control social informal y, por otra parte, la eliminación de la oportunidad. Mientras que el primero, busca crear un sentimiento de identidad entre los integrantes de la comunidad con el objetivo de que se evite o interrumpa la comisión de los hechos delictivos mediante la manifestación externa de la cohesión e interacción social, esto es, por ejemplo, la persona que da la voz de alarma al detectar a un ladrón en casa de su vecino o la simple reunión de jóvenes en la calle que evita la comisión de delitos por

²⁷¹ BERNAL DEL CASTILLO, J. *“Prevención y seguridad ciudadana. La recepción en España de las teorías criminológicas de la prevención situacional”*, en Revista de Derecho Penal y Criminología, núm. 9, 2013, p. 279.

²⁷² FELSON, M. Y CLARKE, R. V. *“La ocasión hace al ladrón. Teoría práctica para la prevención del delito”*, Serie Claves del Gobierno Local 6, Fundación Democracia y Gobierno Local, 2008, p. 197.

²⁷³ MEDINA ARIZA, J. J. El control social del delito..., cit., p. 280.

²⁷⁴ BERNAL DEL CASTILLO, J. Prevención y seguridad..., cit., p. 280.

²⁷⁵ FELSON, M. Y CLARKE, R. V. La ocasión hace al ladrón..., cit., p. 197.

²⁷⁶ MEDINA ARIZA, J. J. El control social del delito..., cit., p. 284.

parte de terceros. Por su parte, la reducción del elemento oportunístico puede realizarse mediante múltiples formas, si bien, dentro de ellas, destacan los planes de reestructuración arquitectónica de zonas. Las medidas incluidas en estos planes pueden contemplar desde la construcción de un carril bici para fomentar su uso con la finalidad de que la mera presencia de ciclistas inhiba, en su caso, robos a los establecimientos cercanos, hasta la poda correcta de los árboles y arbustos pues, mediante esta técnica se pueden prevenir las agresiones y los robos ya que ocurren habitualmente en zonas en las que los delincuentes no suelen estar a la vista de todos. Junto con este tipo de medidas también se hace alusión a los programas de vigilancia vecinal, los sistemas de denuncia vecinales para lograr una mayor colaboración entre los vecinos a la hora de materializar las denuncias de delitos o, la información acerca de la conveniencia de señalar todas las propiedades que posee una persona puesto que, en el caso de que se la sustraigan, su recuperación será más fácil cuando los recuperen los agentes de la autoridad.

Finalmente, la prevención social se fundamenta en la teoría de la desorganización social que trata en última instancia de fomentar el control social informal. Según sus postulados, las zonas que presentan un mayor índice de delincuencia en una ciudad suele ser un área en transición en la que habitantes no tengan un sentimiento de identidad al estar conformada por una población heterogénea, deteriorada, con bajos ingresos, problemas sociales y que suelen cambiar fácilmente de domicilio²⁷⁷.

A pesar de que, ciertos autores han enfatizado la llamada prevención victimal sustentada en las teorías explicadas en los párrafos anteriores, se puede constatar que los estudios para prevenir la delincuencia descritos hasta este punto coinciden con aquéllas o, mejor dicho, las primeras están fundamentadas en los desarrollos teóricos cuyo propósito es reducir la delincuencia. De este modo, si comparamos ambas clases, la prevención del delito dirigida a reducir el peligro de que se cometan hechos delictivos y se propaguen sus consecuencias negativas en la comunidad puede articularse a través de programas que

²⁷⁷ BARBERET, R. La prevención de la..., cit., pp. 244-245.

interviene en la dimensión social. Las estrategias preventivas que atiendan este enfoque están pensadas fundamentalmente para los niños y adolescentes en la medida en que, adoptando medidas de carácter económico y educativo, entre otras, en virtud de los factores de riesgo y de protección que manifiesten durante esta etapa de desarrollo vital favorecen la asimilación y acomodación de las conductas acordes con las normas sociales vigentes del momento. De la misma manera, la denominada prevención evolutiva dentro del contexto victimal, también se dirige a detectar sobre todo los factores de riesgo que presentan con el objetivo de intervenir en ellos, aunque, en este caso, inciden en trabajar las variables personales como la impulsividad o la empatía puesto que están asociadas con conductas antisociales.

Siguiendo con este hilo argumentativo, la implantación de planes dirigidos a la comunidad y los programas victimales basados en su componente social se dirigen hacia zonas con mayores niveles de delincuencia. Estas áreas están constituidas por una población heterogénea y cambiante, que favorece la falta de cohesión comunitaria, cuyos habitantes suelen tener problemas económicos y sociales. El objetivo de la intervención en este nivel es modificar las condiciones de esta zona a fin de disminuir la probabilidad de la comisión de delito y, de una manera indirecta, la aparición de víctimas principalmente mediante técnicas que fomenten el control social informal.

En última instancia, con la misma denominación de prevención situacional se introducen programas que neutralicen la oportunidad del delincuente durante la dinámica delictiva a la par que se refuerce el control social informal teniendo presente tres factores que son el objetivo adecuado, el delincuente motivado y la ausencia del guardián. En consecuencia, como en los casos anteriores, se trata de reducir la posibilidad de que un sujeto se convierta en delincuente, aunque esta vez se incida más en la planificación y ejecución del delito y no mira tanto los factores que predisponen a un individuo a cometerlo.

Así pues, lo más recomendable sería optar por un cambio de perspectiva en el que prime el análisis de las características de la víctima que la predisponen a adoptar este rol, siempre que existan, y, conforme a ellas, el paso siguiente

consistiría en informarles pues estos rasgos diferenciales son los que nos van a permitir establecer las líneas generales de prevención más acordes con la tipología victimal en cuestión. En definitiva, esta estrategia se trata de adelantarse a la producción delictiva mediante la identificación de las víctimas potenciales a fin de informarles y, en su caso, formarlas. En efecto, lo ideal es un enfoque global integrado tanto por los planes de prevención del delito como los programas específicamente diseñados para las víctimas.

En el camino hacia el enfoque integrador de prevención se deben asumir los postulados que se dirigen al delito, al delincuente y la víctima pues, aunque se encuentran interconectados entre sí, no tiene por qué seguirse una estrategia exclusiva hacia uno de ellos ya que, de hecho, suelen establecerse medidas encaminadas a los dos primeros obviando a la potencial víctima. Así, en los casos actuales de bullying si se pretende lograr la máxima eficacia en la prevención las medidas deben tener en cuenta la detección del potencial agresor, a la vez que la potencial víctima –figura de la que suelen olvidarse los profesionales- y, por último, los espacios y momentos en los que suelen cometerse estas acciones.

Asimismo, este mismo planteamiento de prevención en el caso de las víctimas del terrorismo que nos ocupa en el presente estudio, que debería asumirse siempre y cuando continuara ese tipo de terrorismo activo, incluiría necesariamente una serie de estrategias dirigidas hacia los potenciales agresores y víctimas como al contexto espacio-temporal de la comisión de las acciones terroristas.

En primer lugar, asociada con la idea de la prevención evolutiva en la medida en que, conviene actuar de acuerdo a los factores de riesgo y protectores sobre todo presentes en las etapas básicas en las que los niños y adolescentes están inmersos en el proceso de conversión en adultos se podría haber considerado introducir la educación en valores en el ámbito de la enseñanza para fomentar el respeto a los derechos humanos en general y, de manera específica, los principios democráticos de convivencia y libertad. Entre los objetivos de la educación para la paz se establecerían: enseñar las circunstancias por las que debe transitar la convivencia pacífica, educar desde la visión crítica con la

finalidad de construir las bases de la justicia social y la convivencia pacífica, fomentar la adquisición de habilidades y actitudes para que se emplee la palabra en defensa de las ideas y no la violencia y, finalmente, fomentar las respuestas pacíficas. A la vez, ofrecer conocimiento del relato real y las causas de la victimización contribuiría a la separación entre víctimas y terroristas a fin de facilitar el apoyo a las primeras y, al contrario, deslegitimar a los segundos y a dar visibilidad al daño producido por los grupos terroristas. El fenómeno terrorista emplea la violencia para alcanzar sus fines políticos junto con un discurso que sirve de justificación a los atentados contra los valores y normas básicas de la sociedad, por lo tanto, constatar que su argumento de lucha política en la que se muestran como víctimas no tiene fundamento ya que ha sido su libre elección atentar contra los derechos básicos de la víctima serviría para deslegitimar este tipo de acciones.

En cambio, las medidas de prevención situacional se basarán en los lugares, tiempo y modos más habituales de producción de las acciones terroristas. De acuerdo con los datos que constan, las medidas se implementarían en el País Vasco y Navarra –después disminuyó en estas zonas y se cometieron en otras áreas españolas como Madrid, Barcelona y Zaragoza y, por ello, debería cambiar la ubicación de la introducción de las estrategias-, teniendo presente que, la mayoría de los atentados mortales se perpetraban mediante armas de fuego (64%), seguido por coche-bomba (18%) y bomba (12%)²⁷⁸.

Y, finalmente, con la intención de favorecer la prevención victimal se debería haber informado, formado y, sobre todo, dotado de los medios técnicos adecuados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que fueron la mayoría de los afectados en el primer periodo como por ejemplo con coches blindados y una mejor dotación de armamento o chalecos antibalas y, en el momento en que las actuaciones terroristas viraron hacia los políticos hubiera sido recomendable facilitarles protección personal.

²⁷⁸ DE LA CALLE, L. Y SANCHEZ-CUENCA, I. La selección de víctimas..., cit., pp. 65-66.

2.7. La desvictimización de la víctima

La segunda función de la materia victimológica estriba en la desvictimización del afectado o, dicho de otra manera, conseguir que la víctima supere el rol que ha adquirido tras sufrir un delito mediante las estrategias de reparación integral cuyo objetivo es que dejen atrás los estadios de victimización primaria, secundaria y terciaria en el caso de que no hayan podido atravesar satisfactoriamente alguna de las etapas precedentes.

Con el propósito de explicar ese complejo proceso de la dinámica victimal se va a explicar a continuación el proceso de victimización –integrado por la primaria, secundaria y terciaria- y luego, se darán unas breves pinceladas sobre la desvictimización y la reparación dado que, en el Capítulo cuarto, se abordarán pormenorizadamente todas las medidas de reparación integral previstas para las víctimas del terrorismo en las legislaciones estatal y autonómicas del territorio español.

2.7.1. Proceso de victimización

En una primera aproximación general se puede definir la victimización como el proceso que atraviesa una persona o grupo de personas para alcanzar la consideración de víctima, si bien, no se queda circunscrita a la simple acción del delincuente, sino que va más allá de ese momento espacio-temporal determinado, abarcando las consecuencias posteriores del hecho traumático. En sí, representa el producto de una pluralidad de factores combinados entre los que se puede incluir además de aquellos que intervienen en la precipitación de la acción y los elementos consecuencia del hecho, pudiendo distinguirse entre estos últimos dos dimensiones, las que afectan al estado psicológico de la víctima y las relativas al sistema socio-político, como por ejemplo las referidas al apoyo social, al tratamiento de la Administración de Justicia y, en su caso, la estabilidad económica o laboral a raíz del hecho delictivo²⁷⁹.

²⁷⁹ TAMARIT SUMALLA, J. M. La Victimología: cuestiones..., cit., p. 29; MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. Y AGUILAR CARCELES, M. M. Victimología: un estudio..., cit., pp. 88 y 109.

Para este cometido vamos a apoyarnos en la clasificación seguida mayoritariamente que diferencia la victimización primaria, secundaria y la terciaria y que serán desarrollados en las páginas siguientes²⁸⁰.

La victimización primaria se traduce en la experiencia individual y las consecuencias negativas que ha ocasionado el hecho delictivo a la víctima tanto de índole física, económica, psicológica como material. Conviene precisar que el aspecto psicológico alude al ámbito de lo inconsciente y de la desestructuración de la personalidad de un sujeto. En ocasiones, estos extremos transitan hacia trastornos tanto mentales como conductuales. Este término no debe confundirse con "daño moral", pues juegan en campos diferentes, el primero en el inconsciente, mientras que éste se percibe de manera consciente como un perjuicio más que como un padecimiento. Las lesiones psíquicas más comunes son el trastorno por estrés post-traumático, trastornos adaptativos mixtos y los trastornos de personalidad. Por ejemplo, en el caso de terrorismo, los efectos devastadores más comunes en las víctimas son los siguientes: los sentimientos de humillación, vergüenza, ira e impotencia; volver a revivir el suceso traumático; la disminución de la autoestima; descenso de la autoconfianza; y la dependencia y el aislamiento²⁸¹. En definitiva, con este concepto se hace referencia a las primeras consecuencias derivadas del delito.

²⁸⁰ RODRÍGUEZ MANZANERA, siguiendo a THORSTEN SELLIN, entiende la clasificación de la victimización primaria, secundaria y terciaria en un sentido diferente. En la primera comprende aquella que se dirige contra una persona individualizada, recayendo la agresión directamente sobre ésta. Mientras que, la victimización secundaria se refiere a la que sufren un conjunto determinado o una parte de la población, es decir, abarca a todas las personas que tienen una relación con la víctima propiamente dicha; y, por último, la victimización terciaria la sufre toda la población en general; en RODRÍGUEZ MANZANERA, L. *Victimología. Estudio...*, cit., pp. 72-73; frente a la distinción de las tres categorías del proceso general de victimización, hay autores que mantienen una postura crítica al respecto, entre otros, destaca MORILLAS que, señala que a pesar de que la definición del fenómeno de la victimización es pacífica no lo es tanto su clasificación, pues entiende que ha sido fruto de interés desmesurado tendente a avanzar en la ciencia sin que haya quedado claro cuáles son los criterios apropiados para ello, no obstante, sólo se refiere a la victimización terciaria ya que la primaria y la secundaria, admite, que cuentan con unos postulados consolidados; en MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. y AGUILAR CARCELES, M. M. *Victimología: un estudio...*, cit., p. 117.

²⁸¹ LANDROVE DÍAZ, G. *Victimología...*, cit., pp. 43-44; no obstante, GARCIA-PABLOS reduce los efectos ocasionados por el hecho delictivo tan solo a dos, los materiales y los psíquicos; en GARCIA-PABLOS DE MOLINA, A. *Criminología. Una introducción...*, cit., p. 107; PEREZ ALVAREZ, F. Y DIAZ CORTES, L. M. *Introducción a la Criminología...*, cit., pp. 68-69.

Una vez superada la victimización primaria surgen las victimizaciones temporalmente posteriores en las que hay que hacer especial hincapié porque suponen las fases más complicadas y a la vez más preocupantes que han de atravesar las víctimas a fin de alcanzar su desvictimización, especialmente las del terrorismo²⁸².

La victimización secundaria²⁸³ comprende los costes personales resultantes de la conexión entre el binomio víctima y sistema jurídico penal, esto es, su relación con la administración de justicia y la institución policial. Estos efectos nocivos derivan directamente de las declaraciones en sede policial y judicial, de la exploración de médico-forense, del contacto que puede mantener la víctima con su ofensor durante la celebración del juicio oral, incluso, del tratamiento mediático ofrecido por los medios informativos al respecto.

Una de las críticas bastante generalizada la constituye la falta de información suficiente del estado en el que se encuentran las diligencias policiales y judiciales que les afectan. Además, conforme está construido el proceso penal español, quizá de los aspectos que causan más dolor a la víctima es, sin duda, revivir la reconstrucción de los hechos traumáticos que ocasionan, en la mayoría de casos, que la propia víctima se sienta cuestionada por los agentes sociales y que no se le escuche durante a lo largo del mismo, circunstancia que achacan a la falta de humanidad del sistema legal²⁸⁴.

Este desencanto generalizado, opina LAMARCA, es fruto de la desinformación de las víctimas acerca de ciertos aspectos del proceso penal que les puede causar desconcierto en el momento en el que conocen de primera mano su funcionamiento, tales como los trámites a seguir para realizar una denuncia, cuál es el proceso de investigación de un delito o las consecuencias

²⁸² GARCIA-PABLOS DE MOLINA, A. Criminología. Una introducción..., cit., p. 184.

²⁸³ Esta etapa es clave para los procesos de desvictimización, recuperación y resiliencia que debe desarrollar la víctima a fin de que se refuerce sus potencialidades, teniendo en cuenta su entorno y su contexto, que le permitirán reducir el impacto de las consecuencias del delito y de la victimización secundaria, favoreciendo a la vez su recuperación en la medida en que pueda afrontar una vida lo más normal posible dentro de sus propias circunstancias; en VARONA MARTINEZ, G. Guía general de buenas prácticas en el trato con víctimas del terrorismo que evite la victimización secundaria, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, Vitoria-Gasteiz, 2015, pp. 33-34.

²⁸⁴ VARONA MARTINEZ, G. Guía general de buenas prácticas en el trato..., cit., p. 32.

que tendrá el autor del hecho delictivo una vez se le haya detenido. Ofrecer información sobre los mismos beneficiaría a la víctima en términos de tranquilidad y allanaría su afrontamiento a los cauces del proceso penal a los que tendrá que hacer frente²⁸⁵.

En la dimensión social, uno de los rasgos diferenciales que puede caracterizar específicamente la victimización terrorista gira alrededor de la actitud del acusado, generalmente no se siente culpable y siempre y cuando decida intervenir en el proceso penal tiende a justificar su acción cometida señalando la culpabilidad, ya sea directa o indirecta, de la víctima, exhibiendo una postura de orgullo sobre su conducta, y todo ello, en un contexto de apoyo público de sus partidarios asistentes a la celebración del juicio. El aspecto irremediabilmente vinculado con el comportamiento del agresor y su círculo de apoyo es la percepción de falta de apoyo que siente la víctima o, dicho de otra manera, la ausencia de un reproche social claro y directo hacia la acción que le ha llevado involuntariamente a convertirse en una víctima.

Estas situaciones de agresiones psíquicas no intencionadas se pueden traducir en una amplia gama de sentimientos negativos en la víctima como la pérdida de tiempo, desperdiciar su dinero, la falta de tacto con ella, ser ignorados o la sensación de la inversión de su rol de víctima, al ser tratada, en algunas ocasiones, como provocadora o como el acusado. Esta victimización se convierte en más perjudicial que la primaria ya que es el mismo sistema legal al que la víctima solicita justicia y protección quien le victimiza incrementando las consecuencias negativas del delito junto a otras de naturaleza psicológica o patrimonial.

Ante este panorama, el Comité de Ministros del Consejo de Europa se hizo eco de estos problemas y lanzó una serie de recomendaciones con el fin de proteger a las víctimas frente a la victimización secundaria y mejorar su posición

²⁸⁵ LAMARCA, C. Criminología..., cit., p. 227.

en el proceso penal. De este modo, instó a los Estados Miembros a adoptar una serie de medidas el 28 de junio de 1985, entre las que destacan las siguientes²⁸⁶:

1. La policía debe asegurar el trato correcto a las víctimas para evitar cualquier tipo de daño psicológico adicional; la formación de los profesionales será esencial para que las traten de manera comprensible, constructiva y tranquilizadora.
2. Informar a la víctima de las posibilidades existentes a fin de recibir ayudas materiales, médicas o psicológicas ya sean provenientes de instituciones públicas o privadas.
3. Información sobre el desarrollo de la investigación policial.
4. Información sobre el derecho a la reparación del delincuente y de indemnización, en su caso, del Estado.
5. El interrogatorio se debe hacer con el máximo respeto a sus derechos, especialmente a la dignidad y teniendo presente su situación personal. En ciertos supuestos, es recomendable la presencia de personal cualificado para que puedan asistirlos.
6. La víctima debe ser informada del día y lugar en que se celebrará el juicio, los requisitos para acceder a la justicia gratuita y las condiciones para obtener la restitución o reparación del daño.
7. Proteger la intimidad de la víctima
8. Proteger a la víctima y a su familia ante cualquier tipo de amenazas o ataques.

Ofrecer respeto, dignidad y trato correcto al afectado por el hecho delictivo puede reportarles ventajas durante el tránsito hacia su recuperación ya que perciben que la comunidad condena la victimización y que se quiere hacer justicia y, paralelamente, la víctima tiende a contribuir a la investigación y al proceso con una mayor disponibilidad. Las muestras de respeto pueden consistir en informar

²⁸⁶ LANDROVE DIAZ, G. *Victimología...*, cit., pp. 44-45; GARCIA-PABLOS DE MOLINA, A. *Criminología. Una introducción...*, cit., p. 107; TAMARIT SUMALLA, J. M. *La Victimología: cuestiones...*, cit., pp. 32-33, 184 y 198; PECHARROMAN LOBO, Y. "*Victimología*", en COLLADO MEDINA, J. (coord.). *Elementos básicos de investigación criminal*, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 2007, pp. 226-337.

sobre las fechas del juicio o mantener a la víctima informada sobre la evolución de su causa mediante la notificación. Su recuperación también se ve favorecida mediante la información que deben recibir sobre sus derechos, servicios y recursos que tienen a su disposición e, incluso, una explicación acerca de los procedimientos policiales y el proceso de investigación que se va a seguir. A tal fin, el entrenamiento a los agentes policiales debe comprender la detección de los efectos de victimización en la propia víctima como en sus familiares, entender cuáles son los costes del delito, comprender que el trauma lo puede experimentar cualquier tipo de víctima con independencia del delito padecido, reconocer las reacciones normales al acontecimiento traumático, ser consciente de los efectos a largo plazo de la victimización secundaria y del papel que desempeña como profesional, ser capaz de desarrollar habilidades idóneas de escucha, demostrar empatía, no juzgar y ser capaz de hacer sentir cómoda a la víctima. Finalmente, junto con estas consideraciones, durante la celebración del juicio, es indispensable proteger la integridad y privacidad del afectado puesto que el procesado puede buscar intimidar o menospreciarlo con su comportamiento²⁸⁷.

Por último, la victimización terciaria se refiere a los costes de la penalización que recaen sobre el infractor y terceros. Está vinculada con la idea de poner en una balanza los costes derivados de la infracción delictiva para las personas y la sociedad, en general, y los costes de la penalización en la persona del propio victimario que cometió el hecho delictivo, en terceros y la sociedad. En definitiva, esta expresión abarca, entre otros, los niveles de ansiedad generados en los internos de los centros penitenciarios o en las personas que su sustento depende económicamente de aquéllos²⁸⁸.

²⁸⁷ Manual de Justicia sobre el Uso y Aplicación de la Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctimas de Delito y Abuso de Poder.

²⁸⁸ Sin perjuicio de que existan otras corrientes defensoras de que la victimización terciaria se refiere a la víctima y a su entorno. Este movimiento a su vez, puede tener varias direcciones, la primera, en la que se centra en el entorno cercano de la víctima conformado por sus familiares y su círculo de amistades más cercano, subrayando que padecen un daño de carácter emocional al estar en contacto directo con los sufrimientos de la víctima. La segunda, incluye a todas las personas que presenciaron el hecho criminal sin que sufrieran daños personales, no obstante, estos testigos han desarrollado una serie de secuelas principalmente psicológicas a raíz del suceso traumático; en MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. Y AGUILAR CARCELES, M. M. *Victimología: un estudio...*, cit., p. 120. GARCIA-PABLOS DE MOLINA, A. *Criminología. Una introducción...*, cit., p. 107; TAMARIT SUMALLA, J. M. *La Victimología: cuestiones...*, cit., p. 33.

No obstante, desde una perspectiva más amplia hay autores que además de los costes para los victimarios también incluyen bajo esta denominación la situación de desamparo e incomprensión generada en la víctima por la reacción de su entorno social, tras haber superado las victimizaciones precedentes, esto es, la primaria y la secundaria²⁸⁹. Se tiende a asimilar al momento preciso en que tras la celebración del juicio el condenado vuelve a su vida cotidiana una vez ha alcanzado su libertad. Esta situación genera un estado de indefensión en la víctima al contemplar como su agresor retoma su vida arropado y vitoreado por sus simpatizantes mientras que sobre ella planea un sentimiento de aislamiento y marginación social. No resulta difícil, teniendo presente este contexto, que la víctima perciba la agresión que recibió como justificada²⁹⁰.

En orden a esta idea, es precisa la ayuda a las víctimas a través de la reintegración social con la finalidad de que se sientan capaces de vencer la sensación de aislamiento y alejamiento del resto de los integrantes de la sociedad. En el recorrido cuyo destino último es la nueva incorporación a la realidad social deben intervenir los miembros de la familia del afectado –en la mayoría de los casos, son la principal fuente de apoyo, no obstante, existen casos en que pueden culpabilizar al afectado de haberse convertido en víctima-, su entorno laboral –del mismo modo que cualquier persona, la víctima pasa la mayor parte de su día a día en el lugar de trabajo y, aquí, puede reprimir o aumentar su experiencia traumática, en la medida en que, el trabajo considerado normal puede tornarse para él desproporcionado a consecuencia del atentado terrorista-, amistades y los grupos de apoyo formados por los pares de iguales. En última instancia, la difusión de la educación pública en materia victimal fundamentada en la toma de conciencia sobre el alcance de la victimización, los problemas y

²⁸⁹ PANIAGUA SOLÓRZANO, W. *“La victimidad. Una aproximación desde el proceso de resarcimiento en la región de Ixhil del noroccidente de Guatemala”*, Athenea digital. Revista de pensamiento e investigación social, núm. 18, 2010, pp. 157-161. Disponible en: <http://atheneadigital.net/article/view/n18-paniagua/0> (Consultado el 02/09/2015).

²⁹⁰ GARCIA-PABLOS DE MOLINA, A. Criminología. Una introducción..., cit., p. 184; ECHEBURUA ODRIÓZOLA, E. Y GUERRICAECHEVARRIA, C. *“Especial consideración de algunos ámbitos de victimación”*, en BACA BALDOMERO, E., ECHEBURUA ODRIÓZOLA, E. Y TAMARIT SUMALLA, J. M. (coords.). *Manual Victimología*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, p. 199.

necesidades que pueden experimentar podrían sumarse a las fuerzas que tratan de reintegrarla favorablemente en las redes sociales²⁹¹.

Otro de los factores que tiene especial incidencia en esta etapa es la labor que desempeñan los medios de comunicación. En relación con su actividad, se ha señalado, primero, que sólo se acuerdan de la víctima en el momento en que es noticia. Segundo, el empleo del lenguaje no es siempre el más adecuado cuando en multitud de ocasiones en las propias noticias diferencian entre las víctimas inocentes y las víctimas no inocentes, correspondiendo el primer calificativo a aquellas que han sufrido un ataque indiscriminado frente a las integrantes del segundo grupo quienes han sido seleccionadas de antemano como fin de las acciones terroristas²⁹². La cobertura de los casos de víctimas si se abordan desde una visión sensible puede influir favorablemente en su recuperación, si bien, cuando se ofrece información de una forma más insensible puede contribuir a agravar el sufrimiento emocional y psicológico del afectado. Además, es posible que surja un conflicto entre la libertad de prensa e

²⁹¹ Por ejemplo, *“En Estados Unidos, el Congreso asigna una semana al año, generalmente a fin de Abril, como la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas. Durante esa semana, se presentan premios nacionales a organismos destacados de servicios a la víctima en todo el país. La Semana también da una oportunidad a las comunidades locales de rendir tributo a las víctimas del delito. El Departamento de Justicia de Estados Unidos patrocina el desarrollo de conciencia pública mediante una Guía de Recursos a ser usada por los programas de asistencia a las víctimas al planificar las actividades de la Semana Nacional de Derechos de las Víctimas. En esta guía han sido presentadas cientos de ideas para aumentar la conciencia pública sobre temas relacionados a las víctimas. Incluyen patrocinar vigiliias a luz de velas, maratones, carreras de rally, muros de conmemoración, y plantación de árboles; conducir foros; la publicación de editoriales y la difusión mediática de anuncios de servicios públicos; la exhibición de afiches y botones y distintivos; y la distribución de folletos y otras informaciones en tribunales, bibliotecas escolares y establecimientos de venta local”*; en Manual de Justicia sobre el Uso y Aplicación de la Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctimas de Delito y Abuso de Poder.

²⁹² Conviene resaltar en este punto que en el fenómeno terrorista no tiene cabida la distinción entre víctimas inocentes o accidentales y aquellas consideradas intencionales o no inocentes, esta clasificación resulta bastante simplista y carente de fundamento. Es cierto que el primer grupo se asocia a la ausencia de intencionalidad en la conducta de quien la produce de tal forma que la víctima adquiere este rol debido a circunstancias fortuitas que la han situado en el lugar y momento exacto en el que se produce el daño. Mientras que, la víctima intencional es el objetivo de la acción a pesar de que no siempre son coincidentes en la misma persona la víctima y el destinatario. Esta diferenciación tiene especial incidencia cuando se habla de “los objetivos naturales de la acción terrorista”, incluyendo bajo este término a los cuerpos y fuerzas de seguridad y los militares, frente a los civiles como sujetos “accidentales” que la acción no estaba personalizada hacia ellos. Dentro del concepto de víctima intencional también se ha tratado de hacer alguna distinción respecto a las víctimas de “daños colaterales” sobre todo en atentados indiscriminados, debido a que en principio no eran los destinatarios, sino que se debe a una razón accidental. Sin embargo, toda acción terrorista tiene una clara voluntad de producir daño siendo irrelevante la alusión a la intencionalidad; en ECHEBURUA ODRIÓZOLA, E. Y GUERRICAECHEVARRIA, C. Especial consideración de..., cit., pp. 194-195; GARCIA-PABLOS DE MOLINA, A. Criminología. Una introducción..., cit., p. 184.

información con los derechos de las víctimas a un trato digno y a su intimidad²⁹³. Por estos motivos, los profesionales de los medios de comunicación deberían adherirse a un código ético especial para el tratamiento del delito y la victimización con la finalidad de²⁹⁴:

- Proporcionar los datos considerados justos y objetivos con el propósito de evitar detalles excesivamente dramáticos
- Respetar la privacidad de las personas que elijan no comunicarse con los medios de comunicación
- No ofrecer datos sobre la víctima, delito o el agresor basados en meros rumores
- Aproximarse a las informaciones relativas al delito y a la victimización sin posiciones sensacionalistas o intrusivas tanto para la víctima como para su alrededor
- No publicar la identidad de una víctima menor de edad
- Nunca fotografiar o transmitir imágenes que muestren el dolor personal o el shock causado tras la comisión reciente de un hecho delictivo
- No publicar fotografías o imágenes en las que aparezcan víctimas fallecidas, bolsas de cuerpos o víctimas gravemente heridas

²⁹³ La Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, especifica en su art. 21 relativo al derecho a la protección de la intimidad lo siguiente: “1. Los Estados miembros velarán por que, durante el proceso penal, las autoridades competentes puedan tomar las medidas adecuadas para proteger la intimidad, incluidas las características personales de la víctima tenidas en cuenta en la evaluación individual contemplada en el artículo 22, así como las imágenes de las víctimas y de sus familiares. Además, los Estados miembros garantizarán que las autoridades competentes puedan tomar todas las medidas legales para impedir la difusión de cualquier información que pudiera llevar a la identificación de las víctimas menores de edad. 2. Respetando la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo, los Estados miembros instarán a dichos medios a aplicar medidas de autorregulación con el fin de proteger la intimidad, la integridad personal y los datos personales de las víctimas”. Mientras que el art. 34 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito referente a la sensibilización indica que “Los poderes públicos fomentarán campañas de sensibilización social en favor de las víctimas, así como la autorregulación de los medios de comunicación social de titularidad pública y privada en orden a preservar la intimidad, la dignidad y los demás derechos de las víctimas. Estos derechos deberán ser respetados por los medios de comunicación social”; en VARONA MARTINEZ, G., DE LA CUESTA ARZAMENDI, J. L., MAYORDOMO RODRIGO, V. y PEREZ MACHIO, A. I. Victimología: un acercamiento a través de sus conceptos fundamentales como herramientas de comprensión e intervención, 2015, pp. 29-30. Disponible en <http://www.ehu.es/documents/1736829/2010409/Manual+de+Victimologi%CC%81a+2015.pdf>. (Consultado el 04/06/2016).

²⁹⁴ Manual de Justicia sobre el Uso y Aplicación de la Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctimas de Delito y Abuso de Poder.

- Abstenerse de publicar fotografías o imágenes de los funerales de víctimas sin que conste el consentimiento de los familiares

Finalmente, hay que tener presente que la figura victimal puede convertirse en un instrumento de presión o una moneda de cambio en los pactos, negociaciones y estrategias “pacificadoras” que tienen lugar en la política y, en consecuencia, puede repercutir negativamente en el proceso de desvictimización del afectado. Asimismo, la entrada en las instituciones oficiales de aquellos que apoyan los medios y técnicas empleados por los terroristas va en contra, precisamente, del reclamo del reconocimiento público e institucional del sacrificio que han realizado y el sufrimiento que han padecido a consecuencia del fenómeno terrorista²⁹⁵.

2.7.2. Desvictimización y reparación

Cuando hablamos del significado de la palabra desvictimización nos estamos refiriendo al proceso inverso de la victimización mediante el cual una persona adquiere el rol de víctima tras sufrir un delito, así que, específicamente alude al proceso por el que la víctima deja de ser víctima –valga la redundancia– y, por tanto, consigue rehacer su nueva vida y reintegrarse por completo en el tejido social como el resto de los integrantes de la sociedad.

Esta idea se desprende de las aproximaciones que se han hecho sobre este concepto en el momento en que lo definen como un proceso de reparación o de reconstrucción en el que se incluye no sólo la indemnización, sino que, además, abarca la asistencia y el reconocimiento social sin olvidarse de que su plena integración evita futuras revictimizaciones, la estigmatización del afectado, la instalación en la victimización y la explotación del rol de víctima adquirido ya sea real o supuesto²⁹⁶.

²⁹⁵ GARCIA-PABLOS DE MOLINA, A. Criminología. Una introducción..., cit., p. 184.

²⁹⁶ TAMARIT SUMALLA, J. M. La Victimología: cuestiones..., cit., p. 34.

No obstante, conviene remarcar que nos encontramos ante un proceso sumamente difícil en el que intervienen múltiples factores, de tal forma que, no es suficiente con que la víctima realice un ejercicio simple como puede ser un acto de voluntad para dejar de ser víctima, ni tan siquiera, en la mayoría de ocasiones, sirve tan sólo reproducir la frase “perdono y olvido”, puesto que, es un proceso caracterizado por su complejidad y perduración en el tiempo, en el que, en efecto, pueden incorporarse ambas técnicas en el programa de reparación integral específico para un individuo –si se considera adecuado– siempre y cuando se atiendan las demás particularidades personales y sociales manifiestas en el propio afectado. Lógicamente, el criminólogo podrá acercarse a estas características especiales tras realizar el estudio de las características de la víctima y de examinar los procesos de victimización que ha experimentado la misma.

Durante el transcurso hacia su recuperación pueden y deben intervenir multitud sujetos, debido a que, no sólo les atañe a los profesionales de los diversos ámbitos que pueden entrar en contacto directo con la víctima ya sean los miembros del sistema de justicia penal, los cuerpos policiales, servicios sociales o los psicólogos, sino que, también, debe estar implicado el entorno próximo al afectado por el delito puesto que es básico construir y afianzar una red de apoyo estable y duradera a su alrededor dispuesta a favorecer, en la medida de sus posibilidades, su camino hacia la completa desvictimización²⁹⁷ sobre todo por la reticencia que algunas víctimas pueden mostrar para acudir a los especialistas dedicados a la recuperación y rehabilitación de los afectados por hechos delictivos.

Según CRAWFORD “*la reparación íntegra del perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito adoptará la forma de restitución, de indemnización y de satisfacción, ya sea de manera única o combinada. (...) El artículo 34 también deja bien sentado que, en determinados casos, la reparación íntegra sólo puede lograrse mediante la combinación de las diferentes formas de*

²⁹⁷ TAMARIT SUMALLA, J. M. La Victimología: cuestiones..., cit., p. 34; MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. Y AGUILAR CARCELES, M. M. Victimología: un estudio..., cit., p. 126.

*reparación. Por ejemplo, el restablecimiento de la situación que existía antes de la violación quizás no sea suficiente para una reparación íntegra porque el hecho ilícito ha ocasionado otros daños materiales (por ejemplo, el perjuicio originado por la privación del uso de bienes objeto de apropiación ilícita). Cabe, pues, que para borrar todas las consecuencias del hecho ilícito haya que recurrir a algunas o a todas las formas de reparación, según el tipo y alcance del perjuicio que se haya causado*²⁹⁸. De esta explicación se deduce que no existe una exclusiva forma de reparación a la víctima ya que, al contrario, es necesario, dependiendo del caso en particular, introducir varias estrategias de desvictimización y, esta es la razón por la que señala las tres maneras que considera incluidas dentro de la reparación como son la restitución, la indemnización y la satisfacción que, a su vez, conectan directamente con las ideas planteadas con anterioridad coincidentes con la indemnización, asistencia y reconocimiento.

Habitualmente, se considera que la víctima debe completar satisfactoriamente un total de cuatro fases a fin de alcanzar su reparación integral²⁹⁹:

1. Fase de impacto: en los momentos inmediatamente posteriores de sufrir el delito en los que es bastante habitual que la víctima esté en un estado de shock.
2. Fase de negación: el individuo que ha padecido el delito muestra sensaciones diversas pues, por una parte, proyecta desconcierto o incredulidad y, a veces, parece que tiene un control pleno sobre las circunstancias que lo rodean. Esta etapa muestra la vulnerabilidad de la víctima que puede verse fácilmente influenciada por las opiniones y posiciones de terceros sobre todo en la culpabilización a otras personas por la producción del fenómeno terrorista.
3. Fase de aceptación: el afectado es consciente del evento traumático que ha padecido y de las consecuencias que su producción ha tenido

²⁹⁸ MUÑOZ ESCANDELL, I. Los derechos de las víctimas del terrorismo en el ámbito internacional, Dykinson, Madrid, 2013, pp. 50-51.

²⁹⁹ MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. Y AGUILAR CARCELES, M. M. Victimología: un estudio..., cit., pp. 126-127.

sobre él. Aquí, en la mayoría de las ocasiones, al ser consciente de su vivencia recurre al apoyo y ayuda de las personas que integran su círculo próximo o acude a los profesionales especializados en este ámbito. Además, suele entrar en contacto con el sistema judicial en esta etapa. Uno de los problemas más habituales que suelen aparecer en esta fase es la falta de aceptación de su conversión en víctima que podrá ser un inconveniente en el camino hacia su desvictimización.

4. Fase de organización: es la última etapa que debe atravesar la víctima durante su recuperación para que se materialice completamente su desvictimización. Tras haber superado con éxito los periodos anteriores, la víctima es capaz de adaptarse a su antiguo estilo de vida con las modificaciones necesarias o, de un modo más genérico, reintegrarse socialmente con su nueva vida.

Por lo tanto, la víctima necesita tomar conciencia del daño que se le ha ocasionado o racionalizar aquello que le ha ocurrido y ser consciente de los efectos que ha tenido en su persona, adaptarse a la nueva situación y tratar de recuperarse de las consecuencias personales y materiales que se han producido a consecuencia del evento traumático.

La finalidad de la Victimología es la desvictimización de la víctima que se alcanza mediante su reparación integral, esto es, la introducción de una serie de estrategias que no sólo deben pertenecer al ámbito psicológico, al que habitualmente se acude en primera instancia, pues, el afectado puede experimentar otras necesidades completamente ajenas al campo psicológico. En el caso que nos ocupa de las víctimas del terrorismo, tanto en la normativa estatal como en la autonómica y, de una manera más clara, en la ley autonómica vasca, se recogen una serie de medidas que se encuentran asociadas a los derechos concedidos a este tipo de víctimas y que suponen en su conjunto la reparación integral ofrecida a este tipo de agraviados, tal y como lo recogen los documentos normativos. Asimismo, el alcance de la reparación integral prevista especialmente para este tipo de víctimas obtiene un mayor grado de significación, en la medida

en que, los derechos contemplados que están relacionados con la justicia, verdad, memoria, reparación, reconocimiento y dignidad se dirigen expresamente a contrarrestar los diversos estados de victimización que puede atravesar el afectado, esto es, la victimización primaria, secundaria o, en su caso, la terciaria. En consecuencia, la labor del criminólogo adquiere en este terreno un papel relevante debido a que sólo este profesional puede valorar a nivel científico si la incorporación de las medidas legislativas -que cuadran perfectamente con los estadios que le interesan a la Criminología- son necesarios y efectivos para las víctimas. Además, como se puede comprobar, la introducción de estas medidas de reparación integral tiene lugar a lo largo de las fases de impacto, negación y aceptación, si bien, en esta última la labor del criminólogo tiene una mayor relevancia, para que en el momento en que se desvictimice comience la etapa de organización.

Precisamente en esa última fase, la víctima debe ser capaz de integrar la experiencia del delito en su vida como cualquier otra vivencia de su día a día y, además, es recomendable que encuentre un sentido a esa experiencia. Sin embargo, es cierto que al igual que cada afectado ha vivido de una manera diferente el suceso traumático, cada uno de ellos necesitará una recuperación o construcción únicas en función de las características personales y sociales que presente el afectado y del estadio de victimización en el que haya encontrado inconvenientes para sobreponerse a él a la hora de incorporarse de nuevo a la sociedad³⁰⁰.

En definitiva, las medidas de reparación integral incluidas dentro de los derechos relativos a la verdad, reparación, justicia, reconocimiento, memoria y dignidad son las estrategias previstas en la normativa española sobre víctimas del terrorismo con el objetivo de que logren su desvictimización. Por lo tanto, de la efectiva implementación de este conjunto de medidas dependerá que la víctima consiga superar con éxito los estadios de victimización primaria, secundaria y

³⁰⁰ A fin de ayudar a la víctima a reflexionar sobre lo ocurrido se le pueden realizar las siguientes preguntas: *“¿Cómo ha afectado esto la comprensión de su vida?, ¿Ha afectado esto la percepción de sus valores?, ¿Cómo ve su pasado ahora que esto ha sucedido? Y ¿Cómo ve su futuro?”*; en Manual de Justicia sobre el Uso y Aplicación de la Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctimas de Delito y Abuso de Poder.

terciaria y, en consecuencia, volver a formar parte de un modo activo de la sociedad.

2.8. Autonomía de la disciplina victimológica

En la disciplina victimológica el principal debate que se ha generado y que, incluso, actualmente mantiene su vigencia tiene que ver con su autonomía científica. Entre las reflexiones doctrinales, que no han logrado resolver esta cuestión, aparecen cuatro posiciones claramente contrapuestas y diferenciadas³⁰¹:

- a) Los defensores de la Victimología como ciencia autónoma y, por ello, diferenciada de la Criminología en cuanto consideran que tiene un método, objeto de estudio y finalidad propios
- b) Los partidarios de considerarla una rama de la Criminología y, por lo tanto, desde esta perspectiva, no alcanzaría el rango de autónoma
- c) Autores que se muestran favorables de una posición intermedia entre la autonomía y la dependencia a la ciencia criminológica
- d) Aquellos que también recelan de su autonomía, sin embargo, van más allá, dudando de su propia existencia

De entrada, la tesis de la inexistencia de la Victimología debe rechazarse por el simple hecho de que significaría obviar la realidad social de las víctimas puesta de manifiesto a través del movimiento victimológico que ha tenido repercusión tanto en las legislaciones como en las políticas de protección y asistenciales que se han elaborado al respecto. Entre los defensores de esta corriente se encuentran grandes figuras como JIMENEZ DE ASUA, KAISER, LOPEZ REY, BRUINSMA y FISELIER que han aducido varios motivos como la incoherencia de utilizar varias ciencias para investigar la contribución de la víctima a la aparición de la dinámica criminal, la creencia errónea de que las víctimas son

³⁰¹ RODRIGUEZ MANZANERA, L. Victimología. Un estudio..., cit., pp. 14-21; MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. Y AGUILAR CARCELES, M. M. Victimología: un estudio..., cit., pp. 18-22.

un tipo específico de personas y ésta se convierte en la justificación para proceder a su estudio o, simplemente la razón de que impediría el desarrollo científico de la ciencia criminológica que, en sus inicios, se ocupó del afectado por el hecho delictivo³⁰².

En relación con la postura intermedia que mantiene, a la vez, la autonomía y la dependencia con la Criminología su máximo exponente es RODRIGUEZ MANZANERA. Este autor diferencia entre la llamada Victimología General y la Victimología Criminológica puesto que, la primera, es la que presenta un objeto propio –más amplio que el fenómeno criminal y la relación entre el delincuente y la víctima- y responde a las exigencias para convertirse en una verdadera ciencia fáctica y, por estas premisas, es autónoma. Mientras que, la denominada Victimología Criminológica forma parte de la síntesis criminológica por el hecho de que, junto con otras ciencias –como puede ser la penología- que se encargaría del análisis de la víctima vinculada con los hechos antisociales y que, no se podría llegar a una síntesis criminológica obviando su estudio³⁰³. Como se podrá comprobar con posterioridad, si se acepta la definición amplia de Criminología no tiene cabida este enfoque intermedio.

En lo que sí están de acuerdo tanto los partidarios de su autonomía como los defensores de incluirla dentro de la Criminología es en su categoría científica

³⁰² De una manera más amplia, JIMENEZ DE ASUA, indicó que las opiniones de MENDELSON eran “*harto ampulosas, exageradas y jactanciosas*” debido a que “*el asunto de consiste en crear una nueva ciencia, sino en poner varias a contribuir para establecer el papel de la víctima en los delitos*”. A pesar de que muestra una clara inconformidad da por válida la expresión “pareja penal” y llega a la conclusión de que “*los problemas de la víctima más que nuevos, aparecen hoy cargados de nuevo sentido. Pero si algo puede dañar a estos estudios es la exageración: el querer hacer con ellos una ciencia nueva, independiente de la Criminología y del Derecho Penal, con el título de Victimología o Victimiología*”. Mientras que KAISER afirmó que “*las necesarias uniformidad y multiplicidad del enfoque criminológico hacen por ello cuestionable independizar el estudio de la situación, comportamiento y personalidad de la víctima en un plano teórico o configurarlo como una rama autónoma de la investigación, la llamada Victimología*”. por su parte, LOPEZ REY fue el autor que adoptó una posición más enfrentada al afirmar que “*la Victimología no es más que el residuo de una concepción superada de criminalidad y de la Criminología*”, al mismo tiempo que señaló que “*es interesante señalar que la mayor parte de los sostenedores de la Victimología son los que, sin pretenderlo, contribuyen más efectivamente a su demolición*”. Finalmente, BRUINSMA y FISELIER argumentaron que la Victimología trata los mismos problemas que en su origen trató de remediar la Criminología, y esto, precisamente, supone un obstáculo en su hipotético desarrollo científico; en RODRIGUEZ MANZANERA, L. Victimología. Un estudio..., cit., pp. 20-21; MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. Y AGUILAR CARCELES, M. M. Victimología: un estudio..., cit., pp. 19 y 20.

³⁰³ MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. Y AGUILAR CARCELES, M. M. Victimología: un estudio..., cit., pp. 18-19;

–que no corresponde literalmente con la autonomía científica-. Siguiendo a RODRIGUEZ MANZANERA, es conveniente con el objetivo de cerciorarse del cumplimiento de este aspecto recurrir a dos premisas, en primer lugar, al concepto general de ciencia que, como ya se ha visto, se refiere al "*conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible*" y, en segundo lugar, a la clasificación de ciencia que las diferencia entre³⁰⁴:

- Por un lado, las ciencias denominadas formales o ideales cuya función es demostrar una hipótesis utilizando para ello la herramienta básica de la lógica y que, a su vez, los investigadores tienen entre su abanico de posibilidades el empleo de símbolos vacíos.
- Y, por otro lado, las llamadas ciencias fácticas, materiales o empíricas que, en su proceso para verificar la hipótesis planteada, la contrastan con la observación y/o la experimentación. A diferencia de las anteriores, en este tipo de investigación es común utilizar los símbolos interpretados.

De esta explicación concluye que la Victimología tiene cabida en las ciencias fácticas, materiales o empíricas al cumplir con las exigencias de racionalidad y objetividad. El primer factor significa la utilización de conceptos, juicios y razonamientos contruidos conforme a normas lógicas, de manera que, constituye un conjunto ordenado de ideas y teorías. Mientras que, el investigador alcanza el segundo requisito cuando se acerca al objeto de estudio y procede a comprobar las ideas propuestas con los hechos³⁰⁵, sin que medien durante su proceso de investigación interferencias ajenas al método como pueden ser las creencias subjetivas.

Este autor prosigue explicando que en el camino para convertirse la Victimología en acreedora de la categoría científica, además, debe cumplir los requerimientos que se exponen a continuación³⁰⁶:

³⁰⁴ RODRIGUEZ MANZANERA, L. Victimología. Un estudio..., cit., p. 28.

³⁰⁵ RODRIGUEZ MANZANERA, L. Victimología. Un estudio..., cit., p. 29.

³⁰⁶ RODRIGUEZ MANZANERA, L. Victimología. Un estudio..., cit., pp. 29-30.

- La facticidad entendida en los dos sentidos, esto es, por una parte, debe partir de los hechos y después, por la otra parte, se deben utilizar los datos empíricos con el propósito de volver a aquéllos. Sin embargo, este proceso no acaba en este punto, sino que, el investigador debe racionalizar la experiencia para ir más allá de los datos y superar la mera descripción, de tal forma que, la teoría sea factible y trascendente.
- Analítica: para el correcto tratamiento de la problemática planteada es conveniente desglosar los elementos que lo componen y, en consecuencia, exigir el requisito de especialización.
- Los datos obtenidos a lo largo de la investigación serán comunicables, claros y precisos.
- Toda idea debe ser verificada a través de la experiencia, observación o experimentación.
- Método: se refiere a la planificación que se debe llevar a cabo el investigador en cualquier estudio.
- Sistemática: toda la información recabada y obtenida debe estar conectada e interrelacionada tanto con el objeto de investigación como con la finalidad perseguida.
- El hecho victimal ha de estar sujeto a las leyes científicas.
- Tras examinar la experiencia, se puede estar en condiciones de predecir cómo abordar un problema en el futuro.
- Conocimiento abierto, esto es, todos los resultados están sujetos a refutación puesto que no existe un cuerpo de conocimiento único e inamovible. Así planteada esta idea se conecta directamente con la falibilidad.

Se puede comprobar que el conocimiento victimológico cumple con todas las precisiones explicadas de tal forma que no cabe duda de que tiene carácter científico. No obstante, el paso siguiente consiste en averiguar si la Victimología

se ha convertido en una ciencia autónoma o, por su parte, es más lógico considerarla una rama de la Criminología.

Las tres premisas que debe cumplir la Victimología para convertirse en una ciencia autónoma se refieren al objeto de estudio propio de su materia –objeto de estudio en sentido material- que se trate de un fenómeno positivo y que tenga la capacidad de ser sometido a examen, la metodología específica -objeto de estudio en sentido formal- y, por último, algunos autores, incluso, han esgrimido el argumento de la terminología propia a favor de la autonomía de esta disciplina. Este intento por elevarla a la consideración de ciencia mediante la elaboración de los términos propios lo explicó SANGRADOR del modo siguiente: *"la Victimología fue adquiriendo carta de identidad y, como acontece con todo nuevo campo de investigación, trató de definir su identidad y sus límites, crear una terminología propia y, en definitiva, ganarse un lugar respetable entre el conjunto de disciplinas ya establecidas. A lo largo de la década de los setenta, la Victimología entró ya en un estado de cierta madurez, adquiriendo entonces algunas de las características formales de una disciplina científica"*³⁰⁷.

Así que, a continuación, se van a explicar los tres requisitos que la Victimología debe cumplir para convertirse en ciencia autónoma.

³⁰⁷ Entre los principales defensores de su autonomía destaca MEDELSON quien la describe como una ciencia paralela a la Criminología, la primera se ocuparía de la víctima y la segunda del delincuente, argumenta que *"durante siglos, el criminal ha pertenecido únicamente al derecho, como una noción abstracta. Es hasta la segunda mitad del siglo pasado, como consecuencia de una revolución del pensamiento, que el criminal se convierte en un sujeto de estudio por una ciencia positiva. En nuestros días, la víctima se impone a nuestra atención como una rama especial de la ciencia positiva. La primera ciencia se ocupa de la terapéutica y de la profilaxis anticriminal, teniendo como criterio al criminal; la segunda se ocupará de la terapéutica y de la profilaxis que tienen como objeto la personalidad de la víctima. Esta ciencia, que nosotros principiamos a elaborar admite la existencia de dos vías paralelas para la descomposición del complejo criminógeno". "La Criminología se ocupa del criminal; la Victimología tendrá como sujeto el factor opuesto de la pareja criminal, la víctima". "Debemos comprender que los límites de la Victimología deben establecerse en relación al interés de la sociedad en los problemas de las víctimas. Por lo tanto, repetimos que todos los determinantes de la víctima, tales como: la sobrepoblación, la acción de la ley, el índice de natalidad, la desnutrición, las enfermedades epizooticas (íntimamente ligadas a la alimentación y las pérdidas materiales), la contaminación, etc., todos estos determinantes pertenecen al campo de la Victimología, disciplina que gradualmente afirmará su lugar en la ciencia"; en RODRIGUEZ MANZANERA, L. Criminología..., cit., p. 18; TAMARIT SUMALLA, J. M. La Victimología: cuestiones..., cit., pp. 18-24; HERRERO HERRERO, C. Criminología..., cit., p. 36; GARCIA-PABLOS DE MOLINA, A. Criminología. Una introducción..., cit., pp. 30-31.*

2.8.1. Objeto de estudio: la víctima

La delimitación de su objeto de estudio es de vital importancia para decidir si esta disciplina puede elevarse al rango de ciencia autónoma. En un primer acercamiento, es lícito aceptar que la víctima constituye su objeto de estudio, de tal forma que, MENDELSON, ANIYAR y MOURA establecieron los tres ejes de la Victimología: 1) el plano esencial bio-psico-social, que incluye los factores desencadenantes de un sujeto a víctima; 2) el criminológico, el nexo entre la personalidad, los factores bio-psico-social de la víctima y los problemas de criminalidad examinados desde el punto de vista terapéutico y profiláctico víctima; 3) por último el jurídico, relacionado con el resarcimiento en los casos que correspondan a la víctima³⁰⁸.

LOPEZ REY reflexionó al respecto *"cabe preguntarse cual, aparte de una proliferación de disquisiciones, debería ser su cometido. ¿Sería el de prevenir o reeducar a toda posible víctima? El papel de la víctima, incluso respecto a su personalidad, ha sido ya en parte tenido en cuenta por los Códigos penales, especialmente en la formulación de ciertas agravantes y atenuantes. Las mismas, al igual que ciertas figuras delictivas, muestran que las víctimas pueden ser provocadoras, poco escrupulosas y otras cosas más, pero ¿justificaría ello la erección de una disciplina nueva? ¿Puede tomarse en serio que, en todos los casos delictivos, se proceda al examen psicológico y psiquiátrico de la víctima a fin de determinar la coactuación de su personalidad? Aun suponiendo que ello fuera económicamente hacedero, ¿justificaría que las víctimas de los grandes agiotajes, contaminaciones, persecuciones políticas, de las torturas, de una serie de depredaciones en tiempo de paz y guerra, de motines y algaradas, de secuestros de personas, pasajeros y demás, del contagio venéreo, envenenamiento o deformación como consecuencia de ingerir sustancias alimentarias, productos farmacéuticos etc., las lesionadas como consecuencia de una serie de accidentes y otras muchas, fueran examinadas psicopsíquicamente? ¿Olvidan los que postulan la invención de la Victimología que solo tienen en cuenta una pequeña parte de la criminalidad para justificarla y que el sistema de*

³⁰⁸ RODRIGUEZ MANZANERA, L. Victimología. Un estudio..., cit., p. 30.

*cajas de indemnización y compensación, que no es nada nuevo, pero que funciona ya en bastantes países, da resultados más rápidos y mejores que los que podrían aportar los victimólogos? Si ha de ser inventada una Victimología, ¿por qué habría de reducirse sólo a lo criminal? ¿Sería necesario inventar una Victimología civil, comercial, industrial y muchas más?*³⁰⁹.

En un primer momento fue la relación entre la víctima y el delincuente la que acaparó la atención entre los investigadores, si bien, es cierto que han ido avanzado hacia otros aspectos paulatinamente y estos son³¹⁰:

- El rol de la víctima en el hecho delictivo: si lo ha propiciado o no
- Los problemas subyacentes a su asistencia jurídica, moral y terapéutica
- El miedo a la victimización de algunos grupos sociales
- Análisis de la criminalidad real a través de los informes elaborados y facilitados por las víctimas de delitos no perseguidos
- Señalar el papel preponderante de la víctima en los mecanismos de reacción de justicia punitiva y la determinación e imposición de las penas
- Evaluar y proponer disposiciones para que las víctimas accedan a una indemnización justa por los daños ocasionados por el delito

A día de hoy, de acuerdo con el último punto referido a la compensación, la investigación sobre la víctima debe dirigirse hacia la elaboración de programas de prevención atendiendo sobre todo las características más habituales que presentan los afectados por un determinado delito y la desvictimización de los mismos, esto es, lograr que las víctimas consigan dejar atrás su rol de víctima y lo incorporen como una experiencia a su vida sin que se queden estancados en el episodio traumático mediante las estrategias de reparación integral.

El primer problema para la Victimología se encuentra en que su objeto de estudio coincide con el de la ciencia criminológica, es decir, la víctima y el interés en los procesos de victimización y desvictimización. Es cierto que a lo largo de la

³⁰⁹ LANDROVE DIAZ, G. Victimología..., cit., pp. 34-35.

³¹⁰ LANDROVE DIAZ, G. Victimología..., cit., p. 21.

historia de la ciencia criminológica se ha prestado más atención al delincuente y al crimen, sin embargo, esto no quiere decir que no se incluyan a la víctima y al control social, especialmente si se parte de una definición amplia de Criminología. Por ello, en el caso de que se quiere optar por la autonomía de esta ciencia se debería solventar este obstáculo rechazando la tesis que incluye a la víctima dentro de los objetos de estudio de la Criminología.

2.8.2. Método de investigación

Como se puede recordar, la ciencia utiliza el método que es el medio, camino o procedimiento que sigue para llegar a formar el conocimiento sobre su objeto de estudio. Concretamente, en el ámbito científico es la manera de resolver los problemas con un mayor rigor que el exigible para alcanzar el conocimiento ordinario –por ejemplo, el proceder científico puede incorporar el control de las variables o la observación realizada dentro de unos parámetros prefijados-. Además, se ha señalado que pertenece a la categoría de las ciencias fácticas pues como señala RODRIGUEZ MANZANERA sigue los pasos de la Criminología en cuanto a su metodología así su punto de partida se encuentra en la observación y tras ella, ya procederá continuar con la definición del objeto y sus características a lo largo de la fase de descripción, seguida de la clasificación y, finalmente, la fase de explicación en la que formular las leyes y su verificación. De esta manera, alcanzar un conocimiento integral sobre la víctima requiere acudir a la aplicación del método interdisciplinario como, señala entre otros, los métodos de encuesta, métodos de archivo –se refiere a los datos que constan en la policía o en el médico forense-, métodos de observación, diseños experimentales e investigación no cuantitativa. La información suele obtenerse principalmente de la entrevista y de la observación directa de la propia víctima³¹¹.

No obstante, suele argumentarse a favor de su autonomía como ciencia que utiliza una herramienta propia que es la encuesta de victimización la cual permite la comparación de los datos ofrecidos por distintos países ya que, al

³¹¹ RODRIGUEZ MANZANERA, L. Victimología. Estudio..., cit., pp. 32-35.

mismo tiempo, complementan la información acerca de los valores de la criminalidad real que por otros caminos no se pueden obtener. Asimismo, pueden proporcionar información valiosa sobre los factores de vulnerabilidad y el modo de vida de la víctima, el miedo al delito, pero en este punto, conviene precisar que son más útiles para ofrecer datos para elaborar medidas de prevención y de política criminal en cuanto favorecen la comunicación sobre la distribución espacio-temporal de los delitos y las circunstancias que los rodean.

Ciertos autores han precisado los inconvenientes que pueden derivarse del empleo de las encuestas de victimización, entre las que se encuentran las siguientes:

- Para su correcta realización la víctima debe concebirse como tal, esto es autopercebirse, identificarse y aceptarse con esta condición pues, al contrario, no será posible que muestre una actitud abierta para contárselo al entrevistador.
- No es posible que reflejen la incidencia real de la criminalidad debido a varias razones, entre las que destacan, los argumentos que ponen de relieve la dificultad de contemplar los delitos en que no haya una víctima identificable.
- Los problemas formales derivados de la selección de la muestra y su representatividad respecto a la población total.
- Examinar muestras con pocos sujetos.
- Las dificultades inherentes a las propias víctimas, en la medida en que, puede ser que no se acuerden con exactitud de la victimización que padecieron por el transcurso del tiempo.

Entre las encuestas de victimizaciones que se han llevado a cabo se encuentran las destinadas a averiguar los valores de criminalidad y su incidencia espacial de la que resulta un buen ejemplo la realizada por el Ayuntamiento de Barcelona. En un ámbito más extenso se incluyeron aspectos como la tasa de victimización relacionada con delitos de seguridad personal, vehículos y domicilios, la tasa de denuncia, los sentimientos de seguridad y la percepción y

valoración sobre la policía autonómica y su labor en la encuesta de seguridad pública de Cataluña. Incluso, se han realizado encuestas de victimización a víctimas de hechos delictivos a nivel internacional, aunque su implantación puede conllevar obstáculos no tanto en su elaboración y recogida de datos sino sobre todo en la comparación de los datos obtenidos entre los diversos países puesto que, lógicamente, la tipificación de los delitos depende de cada estado, de manera que, uno de los problemas reside en la definición estatal de delito.

Igualmente, se puede sostener que las encuestas de victimización son el reflejo o, mejor dicho, la segunda versión de las estadísticas oficiales que constituye una herramienta útil y mejorada para medir las tasas de delincuencia como su predecesora, pero que además incorpora datos sobre la llamada "cifra negra" que no se ha contemplado hasta entonces ni se ha podido analizar sus resultados³¹².

Atendiendo a las dos premisas citadas, su objeto de estudio y la metodología que desarrolla su investigación no puede sostenerse que la Victimología sea una disciplina autónoma de la Criminología ni siquiera que ostente el rango de ciencia debido a que sigue estando integrada en ella, estudian el mismo tema, es decir, la víctima sin que existan diferencias sustanciales entre ellas. Por lo tanto, no tiene sentido elevar al rango de ciencia a todos los objetos de estudio de la ciencia criminológica, como se ha pretendido por ciertos sectores en el caso de las víctimas, pues del mismo modo, resultaría ilógico y contraproducente considerar al estudio centrado en el delincuente o en el control social, disciplinas aparte de la Criminología.

2.8.3. Terminología propia

El tercer argumento que se ha sostenido a favor de la autonomía de la Victimología es que se ha constituido un vocabulario victimológico básico que comprende los conceptos relativos a la víctima, victimario, victimización, desvictimización y victimógeno que ya se han abordado con anterioridad. Sin

³¹² LAMARCA, C. Criminología..., cit., p. 225.

embargo, la configuración de estas acepciones no sustenta que esta disciplina científica sea autónoma pues la clave está en que tiene el mismo objeto y método de estudio que la ciencia criminológica. De hecho, es lógico que, incluso, dentro de la Criminología se hayan introducido estas acepciones con el objetivo de delimitar el estudio de la víctima para convertirse en ciencia.

2.8.4. Toma de postura

Tal y como ya se ha adelantado, el problema de la autonomía de la Victimología reside en que, si mantenemos una concepción amplia de la Criminología, ambos campos tendrían el mismo objeto de estudio sin que mediara ninguna distinción entre el significado de víctima que los dos apoyan, por lo que, no es lógico que la Victimología se considere una ciencia aparte de la Criminología, sino que, al contrario, resulta más conveniente considerar que está integrada en ella. Asimismo, a pesar de que suelen argumentar los autores que se muestran a favor de su autonomía que tienen un método de investigación propio –la encuesta de victimización–, tampoco tiene peso suficiente para dotarla de la entidad de ciencia al estar incluida dentro de las encuestas que son técnicas habituales en la Criminología. Si bien, tampoco sería la única herramienta debido a que el especialista de este campo tiene vía libre para acudir a otras técnicas de investigación de naturaleza cuantitativa o cualitativa como en la Criminología que, quizá, sean más interesantes a la hora de estudiar los procesos de victimización y desvictimización de los afectados por los hechos delictivos³¹³. La encuesta tendría por finalidad saber quién ha sido víctima –en el pasado– mientras que los procesos de victimización y desvictimización atienden al momento que una persona ya es considerada víctima real con el objetivo de averiguar si se ha quedado estancada en alguna fase de su victimización que obstaculice su plena reinserción en la sociedad, evitando, en definitiva, que afronte su nueva vida. Por último, esta distinción no haría más que plantear nuevos obstáculos como,

³¹³ FATTAH, E. A. Victimología: pasado, presente..., cit., p. r2:10.

¿habría diferencia entre un criminólogo y un victimólogo?³¹⁴ Quizá, optar por esta diferenciación no haría más que ahondar en su controversia sin tener ninguna base teórica, práctica ni profesional, ya que obligaríamos a un profesional a decantarse por dedicarse a las víctimas o a los demás objetos criminológicos y, en segundo lugar, implicaría la preparación por separado de los dos tipos de profesionales atendiendo cada uno a su objeto de trabajo y metodologías diferenciadas.

A lo sumo, puede argumentarse que se le haya dado un nombre determinado como es Victimología con el objetivo remarcar la diferencia con el resto de objetos de estudio integrados en la Criminología como son el delito, el delincuente y el control social, de tal forma que, solamente la Victimología englobaría esta rama específica destinada al estudio de las víctimas con el de devolverle el protagonismo que le corresponde a la víctima, la considerada la gran olvidada del proceso penal. Convirtiéndose, en consecuencia, en una estrategia del movimiento a favor de las víctimas de concienciar acerca de su vulnerabilidad, el abandono al que se ha visto sometida por parte de la doctrina y la necesidad de devolverla al lugar que le corresponde, incluyendo la protección que merece y los derechos, a una situación de igualdad para el delincuente y la víctima en el proceso penal.

³¹⁴ LOPEZ REY invita a reflexionar cuando se pregunta que “...cuál, aparte de una proliferación de disquisiciones, debería ser su cometido. ¿Sería el de prevenir o reeducar a toda posible víctima? El papel de la víctima, incluso respecto a su personalidad, ha sido ya en parte tenido en cuenta por los Códigos penales, especialmente en la formulación de ciertas agravantes y atenuantes. Las mismas, al igual que son ciertas figuras delictivas, muestran que las víctimas pueden ser provocadoras, poco escrupulosas y otras cosas más, pero ¿justifica ello la erección de una disciplina nueva? ¿Puede tomarse en serio que, en todos los casos delictivos, se proceda al examen psicológico y psiquiátrico de la víctima a fin de determinar la coactuación de su personalidad? Aun suponiendo que ello fuera económicamente hacedero, ¿se justificaría que las víctimas de los grandes agiotajes, contaminaciones, persecuciones políticas, de los torturadores, de una serie de depredaciones en tiempo de paz y guerra, de motines y algaradas, de secuestros de personas, pasajeros y demás, del contagio venéreo, envenenamiento o deformación como consecuencia de ingerir sustancias alimenticias, productos farmacéuticos etc., las lesionadas como consecuencia de una serie de accidentes y otras muchas, fueran examinada psicopsíquicamente? ¿Olvidan los que postulan la intervención de la victimología que solo tienen en cuenta una pequeña parte de la criminalidad para justificarla y que el sistema de cajas de indemnización y compensación, que no es nada nuevo, pero que funciona ya en bastantes países, da resultados más rápidos y mejores que los que podrían aportar los victimólogos? Si ha de ser inventada una victimología, ¿por qué habría de reducirse sólo a lo criminal? ¿Sería necesario inventar una victimología civil, comercial industrial y muchas más?; en LANDROVE DIAZ, G. Victimología..., cit., pp. 34-35.

En definitiva, desde el ámbito empírico tan sólo se va a tomar en consideración la perspectiva criminológica ya que, como se ha explicado, integra la parte del estudio dedicado a las víctimas a la que suele denominarse Victimología, aunque a lo largo de la presente investigación se pueda utilizar indistintamente los dos conceptos, Criminología o Victimología, por entender que esta última denominación alude específicamente a la rama de la ciencia criminológica que estudia toda la problemática surgida alrededor de la víctima del delito. Esto es, el término genérico es la Criminología, si bien, se ha expandido entre la doctrina contemporánea la noción de Victimología a fin de dotar de más protagonismo a la víctima.

2.9. El papel del criminólogo

Después de realizar un breve recorrido por la evolución de la investigación victimológica y las aportaciones doctrinales realizadas al respecto, se puede precisar que el criminólogo puede ocuparse de ocho áreas de actuación según el Libro Blanco sobre el título de Grado en Criminología y que coinciden con los ámbitos policial, penitenciario, de vigilancia penitenciaria, victimológico, judicial, seguridad privada, política criminal y, por último, la marginalidad y la conducta desviada³¹⁵. Así planteados los posibles campos de actuación de los profesionales formados en esta ciencia, se puede observar que concuerdan con las funciones de la Criminología enumeradas en el Capítulo I, aunque, es cierto que, aparecen explicadas de una forma más parcelada en el Libro Blanco. En este sentido, mientras que los entendidos en víctimas se integran dentro del área victimológica, los expertos en el delincuente, delito y control social pueden desempeñar sus actividades en los ámbitos policial, penitenciario, judicial, seguridad privada, política criminal y marginalidad y la conducta desviada, dependiendo de la dimensión en la que estén interesados ya sea el campo de la prevención, reacción o tratamiento.

³¹⁵ GIMENEZ-SALINAS I COLOMER, E. (coord.). Libro Blanco sobre el Título de Grado en Criminología, p. 54. Disponible en: http://www.criminologia.net/pdf/observatorio/libro_blanco_actualizado.pdf (Consultado el 04/05/2017).

En primer lugar, la formación criminológica favorecería la incorporación de personas que ya tuvieran conocimiento previo sobre los conceptos de policía preventiva o el dominio de los mecanismos de control de la marginalidad con los que van a trabajar en su día a día y por esta razón, precisamente, beneficiaría y aumentaría la efectividad de la aplicación práctica. De esta manera, en la medida en que la titulación académica guarda una estrecha relación con los aspectos policiales contribuyendo al desempeño de una labor más adecuada y precisa se convierte en una formación profesional más idónea que el resto de titulaciones con las que generalmente se acceden a los cuerpos policiales. Además, teniendo en cuenta tanto las funciones como las situaciones concretas a las que se pueden enfrentar, contarían con una serie de capacidades y habilidades que les permitiría detectar y reconocer fácilmente los factores de riesgo o las situaciones de victimización más comunes en las víctimas. Por su parte, en el desarrollo de las tareas relaciones con la investigación de los accidentes de tráfico, el criminólogo está preparado para contribuir con conocimientos y fundamentos científicos en la reconstrucción de los mismos sin que sea necesario para ello acudir a los cursos específicos en materia de accidentes de tráfico a los que habitualmente concurren quienes van a ingresar en esta sección. En cuanto al campo de la marginalidad y la delincuencia, está suficientemente preparado para aportar las soluciones necesarias a través de la elaboración de los planes de prevención³¹⁶.

En el ámbito penitenciario existen dos dimensiones en las que el experto en Criminología puede profesionalizarse. Por una parte, puede ser un integrante de los equipos de tratamiento penitenciario o, en su caso, asumir la coordinación de los equipos técnicos encargados de elaborar el diagnóstico criminológico, la programación y la aplicación del tratamiento del delincuente. Con la incorporación de la figura del criminólogo se favorecería, a su vez, la distinción entre las funciones encomendadas al jurista y al criminólogo puesto que este último se encargaría específicamente de realizar la valoración criminológica de la clasificación, diagnóstico y tratamiento del interno. Por otra parte, este profesional podría encargarse de asesorar al Juez de Vigilancia Penitenciaria

³¹⁶ GIMENEZ-SALINAS I COLOMER, E. Libro Blanco sobre ..., cit., pp. 54-56.

mediante los informes basados en su formación de origen sobre los cambios de clasificación pertinentes, los permisos de salida y sobre la libertad condicional que correspondieren, entre otros³¹⁷.

Mientras que, su actuación en el ámbito judicial puede dirigirse a la aportación del conocimiento científico proveniente de su campo profesional al juez no sólo sobre los hechos delictivos que se están enjuiciando, sino que, también, puede ofrecer información sobre los factores criminógenos existentes en las circunstancias relacionada con la comisión delictiva o la personalidad del autor del delito. Incluso, dentro del sistema judicial, puede desempeñar su trabajo en la Justicia de Menores elaborando los informes pertinentes sobre la situación de los menores desde el punto de vista criminológico, esto es, acerca de su persona –como puede ser el grado de madurez- como de las circunstancias que pueden haber influido en la comisión del delito que se le ha imputado y, en su caso, el tratamiento más adecuado atendiendo sus condiciones individuales, situacionales y sociales y el pronóstico de una posible carrera delictiva que presente el menor en cuestión. Al mismo tiempo que, debe detectar las posibles situaciones de riesgo o desamparo en las que pueda encontrarse el menor de edad³¹⁸.

En cuanto a las actividades que puede realizar dentro del sector de la seguridad privada, los criminólogos tienen conocimientos específicos sobre el desarrollo de la dinámica de la seguridad relacionados con las actividades propias que desempeña el personal de seguridad privada, al mismo tiempo que, pueden ofrecer una opinión fundada de acuerdo a la adecuación de las actuaciones de los anteriores de acuerdo al derecho vigente. Teniendo presentes estas precisiones, la formación en criminología beneficiaría la labor que les corresponde a los jefes y directores de seguridad y, en su caso, también estarían capacitados para impartir clases para el personal de seguridad privada³¹⁹. Si bien, a pesar de que no se ha previsto expresamente, además de las anteriores tareas también sería, incluso, más lógico conforme a las destrezas adquiridas durante su

³¹⁷ GIMENEZ-SALINAS I COLOMER, E. Libro Blanco sobre ..., cit., pp. 57-60.

³¹⁸ GIMENEZ-SALINAS I COLOMER, E. Libro Blanco sobre ..., cit., pp. 62-63.

³¹⁹ GIMENEZ-SALINAS I COLOMER, E. Libro Blanco sobre ..., cit., pp. 64-65.

formación académica encomendarle la misión de elaborar los planes de prevención puesto que, según el art. 4 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, las finalidades de la seguridad privada son satisfacer las necesidades legítimas de seguridad y contribuir a prevenir las infracciones, entre otras³²⁰.

En otro campo de actuación, el criminólogo puede dedicarse a la detección y prevención de las situaciones de marginalidad y, en su caso, la aparición de los posibles supuestos de criminalidad que están en íntima conexión con las anteriores dado que, está plenamente capacitado para realizar pronósticos de comportamientos relacionados con la actividad delictiva y el análisis de las zonas de riesgo y, en base a ellos, introducir las estrategias de prevención o intervención precisas para combatirlos³²¹.

Por su parte, el experto en Criminología puede proporcionar los datos empíricos y el fundamento científico necesarios a los encargados de tomar las decisiones en Política Criminal a fin de que tengan en cuenta la información sobre

³²⁰ En un sentido más extenso el art. 5 de la Ley 5/2014, de 4 de abril de Seguridad Privada explica que *“1. Constituyen actividades de seguridad privada las siguientes: a) La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos. b) El acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas, incluidas las que ostenten la condición legal de autoridad. c) El depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos-valores, joyas, metales preciosos, antigüedades, obras de arte u otros objetos que, por su valor económico, histórico o cultural, y expectativas que generen, puedan requerir vigilancia y protección especial. d) El depósito y custodia de explosivos, armas, cartuchería metálica, sustancias, materias, mercancías y cualesquiera objetos que por su peligrosidad precisen de vigilancia y protección especial. e) El transporte y distribución de los objetos a que se refieren los dos párrafos anteriores. f) La instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas o a centros de control o de videovigilancia. g) La explotación de centrales para la conexión, recepción, verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de las señales de alarma, así como la monitorización de cualesquiera señales de dispositivos auxiliares para la seguridad de personas, de bienes muebles o inmuebles o de cumplimiento de medidas impuestas, y la comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en estos casos. h) La investigación privada en relación a personas, hechos o delitos sólo perseguibles a instancia de parte. 2. Los servicios sobre las actividades relacionadas en los párrafos a) a g) del apartado anterior únicamente podrán prestarse por empresas de seguridad privada, sin perjuicio de las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los despachos de detectives podrán prestar, con carácter exclusivo y excluyente, servicios sobre la actividad a la que se refiere el párrafo h) del apartado anterior. 3. Las entidades públicas o privadas podrán constituir, previa autorización del Ministerio del Interior o del órgano autonómico competente, centrales receptoras de alarmas de uso propio para la conexión, recepción, verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de las señales de alarma que reciban de los sistemas de seguridad instalados en bienes inmuebles o muebles de su titularidad, sin que puedan dar, a través de las mismas, ningún tipo de servicio de seguridad a terceros”*.

³²¹ GIMENEZ-SALINAS I COLOMER, E. Libro Blanco sobre ..., cit., pp. 66-67.

el fenómeno delictivo y las alternativas o programas que podrían introducirse para luchar contra el delito de acuerdo a las finalidades que persiguen y la efectividad que deseen obtener³²².

Y, finalmente, dentro del ámbito victimal, los profesionales en la ciencia criminológica pueden incorporarse a las Oficinas de Ayuda a las Víctimas que se encargan de ofrecer la asistencia a las víctimas de los delitos, esto es, se ocupan de proporcionarles la información sobre las acciones que pueden llevar a cabo y, en cierta medida, podrían enfocarse hacia la investigación en este campo a fin de mejorar y, si fuere conveniente, reformar la legislación de acuerdo a los derechos que les han concedido y la efectividad que se alcanza, según ellos, al estar en contacto directo con las víctimas, pues, en última instancia, se aspira a lograr la equiparación de la asistencia que reciben los delincuentes a la que se concede a las víctimas³²³.

Pese a las breves indicaciones que se han realizado en el Libro Blanco sobre la contribución criminológica en el campo victimológico, las actividades que el criminólogo puede desempeñar no pueden circunscribirse exclusivamente a las líneas genéricas enumeradas, puesto que, en base a sus conocimientos puede tener un papel significativo no sólo en la prevención victimal sino también en los estudios de la victimización y en el camino hacia la desvictimización que los afectados por hechos de naturaleza delictiva deben transitar hasta alcanzar su plena recuperación; esto es, más allá de la mera información sobre sus derechos y las acciones que pueden emprender en su particular situación. A fin de favorecer la reparación integral de la víctima no basta con facilitarle apoyo emocional durante el proceso penal, la información sobre sus derechos y el elenco de servicios disponibles para su caso, sino que, el profesional en este ámbito también debe ser capaz de abordar todas las dificultades que pueden experimentar cada una de las víctimas debido a que, *"cada víctima encuentra su propio modo de reconstruir una nueva vida. Del mismo modo que el trauma es experimentado en un modo normal pero único, también deben serlo la*

³²² GIMENEZ-SALINAS I COLOMER, E. Libro Blanco sobre ..., cit., p. 68.

³²³ GIMENEZ-SALINAS I COLOMER, E. Libro Blanco sobre ..., cit., pp. 61-62.

restauración y construcción de una nueva rutina, y el equilibrio debe ser único, aunque con elementos comunes.

*(...) Los consejeros no deberían juzgar, debería apoyar y ser receptivos en sus respuestas a las decisiones tomadas por las víctimas. Deberían ayudar a explorar las opciones que las víctimas enfrentan, pero permitir a las víctimas tomar sus propias decisiones definitivas*³²⁴. De hecho, la complejidad del proceso de reconstrucción de la víctima reside en que cada víctima experimenta unas necesidades durante los estadios de victimización primaria, secundaria y terciaria y, lógicamente, sobre ellos, debe focalizarse el criminólogo.

De esta manera, el criminólogo debe centrarse, ante todo, en el proceso de desvictimización asociado directamente con la reparación o la reconstrucción del afectado, si bien, este proceso debe comprenderse en un sentido más extenso ya que no es suficiente con concederle una indemnización económica, sino que, la reparación debe abarcar las dimensiones relacionadas con el reconocimiento social, la asistencia integral y, finalmente, la prevención de la revictimización que podría experimentar la víctima del evento traumático en un futuro³²⁵. Podemos decir que, frente a la asimilación que habitualmente se hace en el contexto victimal en cuanto el tratamiento o la recuperación del afectado se limita al ámbito psicológico, psiquiátrico o, en ciertos casos, a la asistencia social, aquí se va a tratar de ofrecer un enfoque realmente integrador que pueda abarcar todas las necesidades que puedan surgir en la víctima a raíz del atentado terrorista y que no queden necesariamente circunscritas a los ámbitos anteriores, teniendo en cuenta siempre los casos particulares de los afectados. En este sentido, la personalización es la clave del éxito del tránsito hacia la recuperación y su efectividad depende del estudio exhaustivo de la propia víctima y su victimización. A partir del análisis de estos dos aspectos, el criminólogo estará en disposición de trazar las posibles estrategias que ayuden a su desvictimización o, dicho de otro modo, a dejar atrás su rol de víctima en función de aquello que precise para

³²⁴ Manual de Justicia sobre el Uso y Aplicación de la Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctimas de Delito y Abuso de Poder; VILLACAMPA ESTARTE, C. *“La asistencia a las víctimas del delito: debate sobre los modelos de intervención”*, en TAMARIT SUMALLA, J. (coord.). Víctimas olvidadas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 175.

³²⁵ VILLACAMPA ESTARTE, C. La asistencia a las víctimas..., cit., p. 173.

volver a reintegrarse en su nueva vida como puede ser la asistencia médica, psicológica, psiquiátrica, comprensión, solidaridad o la muestra de respeto por parte tanto del sistema judicial y en términos genéricos de las instituciones como de su entorno social. Este último factor que se refiere al reconocimiento social que recibe la víctima tiene una especial trascendencia en su recuperación en base a que está vinculado con la idea de que la mayoría de las personas ya han sido o serán víctimas de cualquier hecho delictivo en algún momento de sus vidas, por lo tanto, la expansión de esta idea permitiría obtener una mejor recuperación y la pronta desvictimización del afectado con la ayuda de las personas que lo rodean cotidianamente³²⁶.

En este contexto se puede comprender perfectamente la visión u orientación práctica³²⁷ que debe guiar la labor que desarrolla el criminólogo a la hora de analizar la realidad social de las víctimas, es decir, el proceso por el que se ha convertido en víctima y su correlativo camino hacia la desvictimización. A partir de la información disponible proporcionada tanto por el desarrollo básico integrado por las teorías criminológicas elaboradas a lo largo de la historia de esta ciencia como de las investigaciones orientadas a la aplicación práctica y su consecuente inserción en la vida cotidiana, debe construir cualquier programa

³²⁶ ALLER, G. El derecho penal y la víctima, B de F, Montevideo, 2015, pp. 56-63.

³²⁷ *"No tiene por qué ser patrimonio y, menos monopolio, de las corrientes marxistas. La ciencia se hace para iluminar los distintos aspectos de la realidad y para actuar conforme a la comprensión de la misma. La ciencia no debe estar sometida a los "apriorismos" de las ideologías".* LE BLANC en los años treinta durante su discurso en la *"Sociedad Real de Canadá, Academia de las Letras y Ciencias Humanas"*, afirmó: *"En el otoño de 1965, el tema de discusión siguiente era propuesto a los estudiantes de "Licenciatura" en Criminología: ¿cómo definir la Criminología? Los definidores de la "nueva" criminología, más particularmente DENIS SZABO, afirmaban que su objeto: el crimen, la criminalidad y el criminal, no podían servir a la misma de única razón de ser. La Criminología, para existir como disciplina, debía constituirse en una ciencia y en una profesión. Una ciencia; es decir, una disciplina que desarrolla sus conocimientos a partir de un "vaivén" continuo entre la reflexión técnica y la investigación empírica. Una profesión; es decir, una praxis que articula los conocimientos y la acción, tanto en un plano de políticas criminales como de intervención directa respecto de los individuos y grupos. Lo uno y lo otro se fundamenta al amparo de la multidisciplinariedad. El enunciado de esta concepción halla su apogeo en el XVII Curso Internacional de Criminología, celebrado en Montreal en 1967 (Szabo, 1968). Esta definición de la Criminología nos proponía una misión específica; a saber, realizar integraciones. Nosotros hemos hecho nuestra misión, que nos exhortaba a combinar las nociones y los datos derivados de las diversas disciplinas, de efectuar interpretaciones a la luz de los hechos obtenidos de investigaciones empíricas y de utilizar las implicaciones de los conocimientos científicos para la práctica criminológica. Esta definición innovadora de la criminología nos proponía un programa de investigación apasionante; a saber, intentar una aproximación integradora de la conducta delictiva. Aproximación comprehensiva que pocas disciplinas científicas y profesiones proponen como ideal y que, rara vez, está puesto como tal en los escritos criminológicos de la última mitad del siglo veinte";* en HERRERO HERRERO, C. Criminología..., cit., pp. 28-29.

cuyo objetivo sea mejorar la calidad de vida de las personas en función de las particularidades y necesidades presentes en el afectado³²⁸, por ello, la utilidad de su tarea adquiere su significado pleno en la realidad social con la que mantiene una estrecha y constante conexión.

Ahora bien, a pesar de que a simple vista parece la lógica implementación de una disciplina en el entorno social considerando que se recurre a la teoría con la finalidad de buscar la solución que más convenga al problema que se presente, es cierto que en ocasiones, esta rutina no es aconsejable puesto que el criminólogo deberá empezar por investigar la materia en el caso de que no consten o existan datos o resultados sólidos en la ciencia sobre la misma, ya sea debido a la reciente aparición del problema o por el escaso interés que ha despertado en la comunidad científica³²⁹. No obstante, ambas formas de realizar Criminología son complementarias, pues, aunque la mayoría de los que se dedican a la investigación se encuentran dentro de la vertiente teórica por que buscan respuestas a fin de aportar más conocimiento científico, los criminólogos aplicados pueden valerse del conocimiento que han aportado los anteriores para conseguir una mayor adecuación a la reparación particular de la víctima en cuestión como de sus investigaciones realizadas durante la resolución del problema que se le ha planteado en su día a día beneficiando, al mismo tiempo, la construcción del conocimiento de los primeros.

En esta línea, teniendo en cuenta el estado actual de la ciencia en la materia victimal y sobre todo la capacidad que deben tener los criminólogos para responder de una forma adecuada y rápida a los nuevos retos que se les presentan en forma de problemas que experimentan las víctimas de nuevos hechos delictivos, deben adaptarse a las siguientes facetas durante el desempeño de su labor³³⁰:

³²⁸ GAVIRIA STEWART, E., CUADRADO GUIRADO, I. Y LOPEZ SAEZ, M. Introducción a la Psicología..., cit., pp. 500-501.

³²⁹ GAVIRIA STEWART, E., CUADRADO GUIRADO, I. Y LOPEZ SAEZ, M. Introducción a la Psicología..., cit., pp. 500-501.

³³⁰ GAVIRIA STEWART, E., CUADRADO GUIRADO, I. Y LOPEZ SAEZ, M. Introducción a la Psicología..., cit., pp. 500-501.

- Investigador: tanto el criminólogo teórico que se dedica a averiguar cuál es la mejor forma de reparar a un determinado tipo de víctimas de acuerdo a sus procesos de victimización y las características más habituales que presentan, como el criminólogo aplicado en el momento en que tenga que resolver cómo realizar una desvictimización sin que existan investigaciones sólidas sobre ella.
- Encargado de introducir y desarrollar programas: siempre y cuando los criminólogos teóricos hayan obtenido resultados favorables para su aplicación, aunque, el profesional que lo introduzca pueda adaptarlo en función de las necesidades de la víctima.
- Evaluador: el criminólogo puede encargarse de valorar si la aplicación de unas particulares medidas frente a la victimización favorecen el proceso de desvictimización del afectado y en qué medida o, en su caso, conviene realizar algunas mejoras en los programas de reparación integral previstos. En nuestro caso, en la parte empírica del presente estudio se llevará a cabo una evaluación de las medidas contempladas para hacer a la victimización primaria, secundaria y terciaria del fenómeno terrorista.

CAPÍTULO 3. SIGNIFICACIÓN Y ALCANCE DEL CONCEPTO VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

3.1. Interdisciplinariedad de la materia victimal

Después de descartar que la disciplina victimológica cumpla con los requisitos mínimos requeridos para convertirse en una ciencia autónoma y, por lo tanto, en un campo de estudio del que cabría esperar su perfecta diferenciación con la Criminología, el paso siguiente consiste en abordar si es factible y, en su caso, bajo qué condiciones puede entablarse la relación entre el ámbito criminológico y penal, teniendo en cuenta que ambas esferas del saber gozan de autonomía. Esta delimitación ha de fijarse a partir de los exámenes de sus objetos, intereses, métodos y tareas principales con la finalidad de constatar si las disciplinas pueden ser complementarias a la hora de investigar³³¹.

Tradicionalmente, se han mantenido posturas diferentes acerca de la relación subyacente entre el Derecho penal y la Criminología. Según OLIVERA DIAZ se pueden distinguir un total de cinco opiniones sobre el nexo de conexión existente entre ambas ciencias, a saber: 1) tesis de la subordinación de la Criminología; 2) tesis de la equiparidad; 3) tesis de la no existencia de la Criminología; 4) tesis de la subordinación del Derecho Penal; 5) tesis de la desaparición del Derecho Penal³³². Lógicamente, si partimos del hecho constatado de que los dos ámbitos de investigación son ciencias autónomas en virtud de su objeto de estudio y metodología empleadas, este argumento nos conduce a ver claramente la incompatibilidad manifiesta con las tesis que defienden ya sea la inexistencia ya sea la desaparición hipotética de alguna de las materias. Incluso, este hilo de argumentación conduce a rechazar una posible

³³¹ GOPPINGER, H. Criminología..., cit., p. 15; BERGALLI, R., BUSTOS RAMÍREZ, J. Y MIRALLES, T. El pensamiento criminológico..., cit., p. 24.

³³² RODRIGUEZ MANZANERA, L. Criminología..., cit., pp. 88-89.

relación de subordinación entre las protagonistas, en la medida en que, en el preciso instante en que acceden al rango de ciencia se encuentran al mismo nivel que las demás. Respecto a este extremo, no es extraño encontrar autores que, incorporándolas dentro de la categoría denominada ciencias criminales, aprovechen a fin de incidir en que sus actuaciones son paralelas sin que en ningún caso medie una relación de jerarquía³³³.

Una de las posibles consecuencias directas derivadas de la posición de igualdad en la que convergen ambas disciplinas podría ser su carácter complementario puesto que ya se ha señalado sobre este aspecto que *"la Criminología y el Derecho Penal son dos ciencias autónomas, pero no opuestas ni separadas, sino asociadas"*³³⁴. Con la intención de resolver este planteamiento acerca de la idea de asociación existente entre ambas, COBO DEL ROSAL y VIVES ANTON han puntualizado que prima la complementariedad entre los dos saberes, de tal forma que, *"el derecho penal y la criminología aparecen así como dos disciplinas que tienden a mismo fin con medios diversos. El derecho penal a partir del estudio de las normas jurídico-penales. La criminología a partir del conocimiento de la realidad. La crítica de las normas en su aspecto ideal y la crítica de la realidad reglada por ellas son complementarias. Innecesario es decir que desde tales planteamientos no cabe hablar de una contraposición entre saber criminológico y saber normativo"*³³⁵.

De hecho, ORTS y GONZALEZ CUSSAC indican que, durante el cumplimiento de las funciones encomendadas al Derecho penal relacionadas con la delimitación de las líneas generales de la política criminal y la elaboración, aplicación y ejecución de las normas penales se debe atender a la realidad social y, precisamente, este conocimiento lo aporta la Criminología³³⁶.

Asimismo, destacando el alcance del resultado marcadamente integrador que pueden obtener estos conocimientos, LOPEZ REY, con otras palabras, apunta

³³³ GOPPINGER, H. Criminología..., cit., p. 1.

³³⁴ RODRIGUEZ MANZANERA, L. Criminología..., cit., p. 93.

³³⁵ BERGALLI, R., BUSTOS RAMÍREZ, J. Y MIRALLES, T. El pensamiento criminológico..., cit., p. 24.

³³⁶ ORTS BERENGUER, E. Y GONZALEZ CUSSAC, J. L. Compendio de Derecho Penal. Parte General, 5ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 54-55.

que *"si el Derecho Penal es esencialmente un derecho protector de valores sociales, antes de formular la protección hay que adentrarse en el estudio de la realidad política, social y económica que ha de proteger. El uso de estadísticas, de encuestas sobre la práctica judicial y la ejecución de sanciones así como las disponibilidades para organizar dicha ejecución es fundamental, mucho más que la consideración teórica de los diversos aspectos de la Parte General"*³³⁷. Ciertamente, a pesar de que no aparece la expresión Criminología en esta pequeña explicación, se refiere directamente a los métodos de investigación que integran su campo, esto es, al examen previo de la realidad realizado mediante la utilización de estadísticas y encuestas a los efectos de adecuar la elaboración de las leyes penales al contexto donde se van a introducir. De ahí que, considere el primer paso para establecer la regulación protectora de los derechos el estudio criminológico anterior.

En términos generales, la complementariedad, tal y como señala PELAEZ, consiste en abordar un problema o el estudio de un caso concreto desde diversas vertientes, por ello, establece que *"la labor científica de síntesis exige diversos estadios conexos, todos igualmente necesarios. Cuando se plantea una cuestión, un problema, se forma una hipótesis de trabajo que después deberá investigarse en todos sus pormenores. Cada uno de los hechos particulares habrá de ser, luego, clasificado, procediendo a una generalización de los que son uniformes. De las generalizaciones proceden las conclusiones, que se convalidarán solamente cuando sean verificadas en la realidad, pasando así a constituir la solución del problema inicial. Una conclusión conduce inevitablemente a otra, a condición de habituarse a dar los pasos cortos y de no intentar salvar un solo salto toda la distancia"*³³⁸. La tarea de sintetizar los conocimientos provenientes de varias áreas de investigación va indisolublemente ligada al carácter complementario que guía el estudio, dado que, en la medida en que se vaya consiguiendo la integración de la información aportada desde cada campo se irá progresando en las etapas de resolución de la situación planteada.

³³⁷ RODRIGUEZ MANZANERA, L. Criminología..., cit., p. 93.

³³⁸ RODRIGUEZ MANZANERA, L. Criminología..., cit., p. 60.

Ahora bien, para conseguir una correcta complementariedad entre las dos ciencias y, consecuentemente, la integración de sus conocimientos a fin de ofrecer soluciones a un problema, es necesario acudir al estado actual de ambas disciplinas y averiguar cuáles son las ventajas y beneficios que se pueden extraer de esta visión múltiple.

Por una parte, en el escenario objetivo en el que se encuadra el Derecho penal, los operadores jurídicos se encargan prioritariamente de las tres funciones básicas de crear, interpretar y aplicar las normas, si bien, desde esta perspectiva prácticamente objetiva no se interesan tanto por los cambios que se producen día a día en la realidad social, de este modo, la concordancia perfecta entre la realidad actual y la regulación que se adapta a ella no siempre está presente³³⁹.

Es cierto que, en un estado idílico caracterizado por una realidad estática en la que no se produjeran cambios constantes no sería preciso realizar ninguna objeción a los planteamientos y al modo de proceder de esta materia. No obstante, en una sociedad como la nuestra, sujeta a variaciones y evoluciones constantes, no conviene dejar de lado esta consideración a la hora de desempeñar la labor jurídica. Tampoco se puede pretender que, por muy brillante y creativo que demuestre ser un operador jurídico, sea capaz de captar todas las facetas y aristas de una hipotética realidad venidera pues esta labor no le corresponde a él sino al criminólogo. A similares conclusiones ha llegado otro sector doctrinal cuyos defensores insisten en la necesaria construcción del Derecho penal que no se fije tanto en el pasado, sino que mire hacia el futuro, a la vez que, deje atrás el mundo abstracto para centrarse en los casos particulares, siendo preciso a tal efecto, que la ciencia jurídica se abra a otros campos como el criminológico para aproximarse a la realidad social³⁴⁰.

En esta disyuntiva, surge el necesario acercamiento entre el saber normativo –jurídico- y el saber empírico, que le permitiría al primero aproximarse a la realidad existente en un momento temporal concreto. Este acercamiento puede ser ofrecido por cualquier ciencia que esté en continuo contacto con la

³³⁹ JODRA ARRIBAS, F. Derecho Penal..., cit., p. 46.

³⁴⁰ JODRA ARRIBAS, F. Derecho Penal..., cit., p. 46.

sociedad, siendo su único requisito que esta rama del conocimiento se encargue de alguna de las facetas del fenómeno humano. Tal tarea puede encomendarse a la Criminología, ciencia que, como se ha expuesto con anterioridad, puede aportar datos sobre la llamada criminalidad, concepto abstracto que engloba la información acerca de su etiología, control social y víctima. Sería recomendable que, el penalista no se quedara en la mera estructura formal y externa de la norma, sino que además sería interesante que ahondara en el conocimiento criminológico a fin de conectar las normas con la realidad social contemporánea³⁴¹.

Por otra parte, la ciencia criminológica presenta ciertas diferencias con la ciencia jurídica en cuanto ya se preocupa por los hechos que tienen lugar en el llamado campo previo al delito. Si bien lo más interesante en este punto es que el criminólogo está capacitado para realizar un tipo de lectura más realista, sutil y tomando en consideración diferentes prismas sobre el fenómeno criminal, aspecto que también le preocupa al ámbito penal³⁴².

Esa lectura más realista sobre el fenómeno delictivo va unida intrínsecamente a la capacidad inherente de la Criminología de adaptarse con rapidez a la evolución que manifiesta la realidad social. En principio esta característica no ha sido extrapolada al derecho cuyo objeto de estudio implica mantener cierta estabilidad conforme a la seguridad jurídica, si bien, como señala SANZ CANTERO "*las leyes son continuamente repasadas por los nuevos medios y procedimientos criminales, de aquí que para el mejor cumplimiento de su fin, el Derecho Penal no puede prescindir de los conocimientos criminológicos*"³⁴³. Pese a que cada disciplina se rige por criterios que de entrada pueden parecer contrapuestos, por un lado, el campo jurídico se interesa por la estabilidad para garantizar la seguridad jurídica y frente a ella, por el otro lado, la ciencia criminológica presta atención a los cambios de la sociedad, no quiere decir que la integración de sus conocimientos sea excluyente.

³⁴¹ HASSEMER Y MUÑOZ CONDE, F. Introducción a la Criminología, Tirant lo Blanch, 2001, pp. 22 y 23; JODRA ARRIBAS, F. Derecho Penal..., cit., p. 31.

³⁴² PEREZ ALVAREZ, F. Y DIAZ CORTES, L. M. Introducción a la Criminología..., cit., p. 50.

³⁴³ RODRIGUEZ MANZANERA, L. Criminología..., cit., pp. 92-93.

Desde esta perspectiva, tras las consideraciones anteriores la propuesta de mantener una estrecha relación de colaboración y difusión de conocimientos entre los especialistas de ambos saberes cobra especial relevancia a efectos de obtener resultados óptimos. A pesar de todo, para salvar esa relación es preciso superar la visión conflictiva entre el normativismo y el empirismo que separa las aportaciones de cada ámbito sin que se tengan en cuenta otro tipo de datos. De hecho, una posible consecuencia de esta colaboración sea la superación de los inconvenientes que presentan, por un lado, la ineficacia en la solución de conflictos de las normas penales y, por otro lado, la escasa base empírica en la construcción de la regulación normativa³⁴⁴.

De la misma manera, pese al futuro prometedor que le aguarda a la Criminología han tenido mayor eco las pocas expectativas puestas en ella, fundadas principalmente en argumentos ligados a tres aspectos como son su desorientación científica, debilidad metodológica e incapacidad de contribuir eficazmente en una materia³⁴⁵. Al igual que ocurre en el ámbito jurídico, el perfeccionamiento de esta ciencia cuya misión no sólo se dirige a aportar una serie de conocimiento acerca de el crimen, el delincuente, la víctima y el control social, sino que también es destacable su aptitud de proporcionar una dosis de realismo que pueden contribuir a mejorar la regulación, descansa en su progresiva y reiterada aplicación para mejorar las tres debilidades de las que adolece.

Con todo ello, en el ámbito victimal en el que convergen tanto la ciencia criminológica como la ciencia jurídica, se deben superar un total de tres fases para considerar que se ha realizado un examen integral en esta materia, que se

³⁴⁴ HASSEMER Y MUÑOZ CONDE, F. Introducción a la Criminología..., cit., p. 24; la relación entre las disciplinas penal y criminológica, sostiene PINATEL, deviene cuanto menos problemática, de manera que para que progrese la primera es necesaria la ayuda del Derecho Penal, indicando que para construir este vínculo se hace indispensable partir de un conjunto de reflexiones, *"¿Puede negarse a la criminología el que demuestre sus posibilidades en el campo judicial, después de lo que ha hecho en el dominio de los menores y en el dominio penitenciario? ¿Se puede prohibir una hipótesis, sólidamente apoyada y prácticamente comprobable, el poder ser experimentada? ¿Se puede preferir una hipótesis, imposible de comprobar, como la de la prevención general?",* en PINATEL, J. *"Criminología y Derecho Penal"*, Anuario de Derecho penal y Ciencias penales, 1959, pp. 136-137.

³⁴⁵ LOPEZ REY DE ARROJO, M. *"Algunas observaciones críticas sobre violencia y justicia"*, Anuario de Derecho penal y Ciencias penales, Tomo 29, 1976, p. 248.

pueden sintetizar concretamente en las siguientes: 1) estudio del fenómeno victimal; 2) estudio dogmático; 3) proposiciones de lege ferenda³⁴⁶.

A lo largo de las etapas precedentes, enumeradas a nivel de guía orientativa, el primer obstáculo con el que nos podemos encontrar es la inexistencia de un desarrollo suficiente en el campo de la investigación de estos ámbitos, sobre todo, el referido a la Criminología, por ello, se conoce relativamente poco acerca del fenómeno en cuestión. Esta falta de investigación criminológica conduce a escasos trabajos de campo en materia victimal y esto puede haber tenido un reflejo en las políticas de protección y asistencia a las víctimas³⁴⁷.

No obstante, las investigaciones de corte criminológica sobre la situación y problemática de las víctimas del terrorismo pueden tener un influjo positivo en la mejora de la articulación propia de las políticas de protección y asistencia de las víctimas. El investigador en criminología tiene, entre sus tareas, conocer esos hechos, problemas o fenómenos sociales que otros profesionales no tienen por qué haberles dotado de la relevancia de la que son merecedores, formular los problemas hallados y, con el máximo rigor posible, tratar de ofrecer una solución o mejora al estado general de las víctimas y, de esta manera, contribuir al enriquecimiento del conocimiento³⁴⁸. De aquí que, sus aportaciones puedan convertirse en la clave de una regulación más adaptada a los parámetros de la sociedad vigente.

En los últimos cincuenta años, se ha llegado a plantear el interrogante acerca de si los criminólogos pueden ser los encargados de defender el orden o, de un modo más concreto, pueden asimilarse a los guardianes de los derechos humanos. Este interesante debate centrado en las próximas líneas de investigación de este saber pueden haberse visto condicionado por el hecho de que las corrientes conformadas por los modernos criminólogos críticos y radicales entienden que el enfoque tradicional que ha dominado esta disciplina es

³⁴⁶ SERRANO GOMEZ, A. Historia de la..., cit., p. 17.

³⁴⁷ SERRANO GOMEZ, A. Historia de la..., cit., pp. 19-20.

³⁴⁸ GUTIERREZ HINOJOSA, T. D. La explicación científica..., cit., p. 133.

excesivamente reducido y, por ello, una de sus futuras aspiraciones consiste en adentrarse en la temática relacionada con los daños sociales. Esta idea los realistas críticos la apoyan en una doble dirección, por un lado, rechazan la creencia de los límites de las disciplinas, esto es, sus fronteras y, por otro lado, han mostrado su profunda admiración por los científicos sociales encaminados con sus aportaciones hacia la reducción del sufrimiento, explotación y opresión en cualquiera de sus manifestaciones³⁴⁹, todo ello, directamente vinculado con la regulación y protección de las víctimas que tanto interesan a la Criminología y al Derecho penal.

En consecuencia, no se deberían reformar preceptos penales desconociendo la realidad victimal, sin la previa información acerca de los problemas que existen, pues obviando este paso no se podrían plantear correcciones o reformas eficaces³⁵⁰. En los capítulos anteriormente presentados se han abordado las circunstancias que han influido en el estudio actual de las víctimas desde la Criminología y, por ello, es coherente seguir las mismas directrices sobre el campo legal, siendo necesario, en momentos posteriores, realizar un repaso de la sucesiva normativa regulada en los diferentes ámbitos, internacional, europea y nacional dedicada a las víctimas y, especialmente, a las del terrorismo.

3.2. Razones del olvido de la víctima especialmente en la normativa internacional

Siguiendo con esta exposición, ahora es el momento idóneo para averiguar de una manera sucinta cuál ha sido el tratamiento que el ámbito jurídico ha ofrecido a la víctima y, en su caso, determinar la adecuación de su extensión a las necesidades manifestadas en la misma. Aquí podemos distinguir dos vertientes, por una parte, el estudio de la propia víctima como objeto de interés para esta

³⁴⁹ MATTHEWS, R. Criminología realista..., cit., p. 73.

³⁵⁰ SERRANO GOMEZ, A. Historia de la..., cit., p. 17.

ciencia y, por otra parte, las normativas internacionales que se han encargado de proteger y regular las situaciones en las que puede encontrarse aquélla.

En cuanto al primero de los aspectos reseñados, el Derecho penal siempre ha estado focalizado hacia la figura del delincuente, *"en tanto, la víctima queda marginada, en el drama penal para ser tan sólo un testigo silencioso, la ley apenas la menciona, la literatura científica la ignora, y por lo general queda en el más completo desamparo, lo que representa una sobrevictimización"*. Precisamente el origen del Derecho penal contemporáneo va unido a la neutralización de la víctima y su desplazamiento hacia el ámbito social y del Derecho civil y procesal, debido a que, el interés que pudiera suscitar el afectado ha sido reemplazado por la formulación del bien jurídico protegido. Bajo los enunciados abstractos del bien jurídico protegido, incluso, la víctima sufre un cambio puesto que se integra dentro de un nuevo concepto normativo denominado sujeto pasivo y titular del bien jurídico protegido. La dogmática ocupada en alcanzar un conjunto armónico, sistemático y jurídicamente seguro no encuentra otro modo de llegar a él si no es dejando de lado a los particularismos como puede ser la emotividad que desprende la víctima, de tal forma que, a mayor normativización o abstracción tan sólo puede atender a la ofensa al bien jurídico protegido y no a la propia víctima³⁵¹.

De manera correlativa, en el sistema judicial ha continuado vigente la desconfianza garantista frente a la víctima, pues, a pesar de que el Estado se ha responsabilizado de la administración de justicia, el sujeto que ha cobrado especial protagonismo en esta institución ha sido el victimario, de tal forma que, la víctima se ha visto relegada a un plano secundario. Concretamente, el proceso con la finalidad de ofrecer una solución objetiva e institucionalizada a un conflicto basada en las leyes contribuye al distanciamiento entre las partes, cuyos efectos negativos sobre éstas han sido constatadas empíricamente. Por una parte, el infractor tiende a considerar al sistema legal como su único interlocutor válido a

³⁵¹ HERRERA MORENO, M. *"Historia de la victimología"*, en BACA BALDOMERO, E., ECHEBURIA ODRIÓZOLA, E. Y TAMARIT SUMALLA, J. M. (coords.). *Manual de Victimología*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pp. 55-56; GARCIA-PABLOS DE MOLINA, A. *Criminología. Una introducción...*, cit., p. 94; RODRÍGUEZ MANZANERA, L. *Victimología. Estudio...*, cit., p. 4.

quien rendirle cuentas y depurar responsabilidades en detrimento de la víctima. Por otra parte, el afectado se siente menospreciado por el formalismo jurídico, pues, las posibilidades de la víctima de intervenir en el proceso penal son más bien escasas a pesar de la existencia de ciertas instituciones que de manera directa o indirecta faciliten su intervención –la querella, denuncia, acusación particular-³⁵².

Este panorama caracterizado por el olvido de la víctima en los ámbitos penal y judicial también es identificable en el contexto internacional, debido en parte, a su organización. La estructura de los propios organismos internacionales está vinculada directamente con sus finalidades de proteger los objetivos e intereses de los estados, por ello, en la medida en que el estado es el punto de partida del Derecho Internacional, se encargan de crear, interpretar y aplicar las diferentes normas internacionales. Desde esta perspectiva, no es extraño que no se le haya dado la importancia que merecen a los intereses victimales hasta fechas bastante recientes³⁵³.

Además, tampoco ha ayudado la circunscripción del fenómeno terrorista a determinados países, ya que, al afectar tan sólo a un grupo pequeño de países no se pusieron en marcha todos los mecanismos legales internacional disponibles a tiempo. Los documentos en este ámbito se han centrado principalmente en la lucha frente a este fenómeno a partir de los años sesenta, aunque, es cierto que, es una manera indirecta de proteger a las víctimas no es, ni mucho menos, suficiente y más cuando el victimario ha sido el principal protagonista en este campo³⁵⁴.

Con la aparición de la noción de los derechos humanos, las Naciones Unidas se han ocupado más de los victimarios a pesar de que las víctimas han sido las verdaderamente afectadas por las acciones que les han provocado graves

³⁵² HERRERA MORENO, M. Historia de la victimología..., cit., pp. 55-56; GARCIA-PABLOS DE MOLINA, A. Criminología. Una introducción..., cit., pp. 94-96.

³⁵³ FERNANDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, C. Y JIMENEZ GARCIA, F. Terrorismo y Derechos Humanos. Una aproximación desde el Derecho Internacional, Dykinson, 2005, pp. 3-4.

³⁵⁴ VARONA, G., LAMARCA, I., LÓPEZ DE FORONDA, F., PAGOLA, A. Y OCA, N. Atención institucional a las víctimas del terrorismo en Euskadi, Ararteko, Informe Extraordinario al Parlamento Vasco, 2009, pp. 51-52.

vulneraciones de derechos humanos. De la misma forma que ocurre en los procedimientos penales, aquí la actividad del citado organismo ha sido acaparada principalmente por el delincuente frente al escaso protagonismo que ha adquirido la víctima y que la ha sumido en el olvido³⁵⁵.

Es cierto que, a partir de los años cincuenta el resurgir de la víctima se ha hecho más patente gracias a los movimientos que se han postulado a su favor. No obstante, sus defensores aún tienen que hacer frente a los tres inconvenientes que se presentan sobre todo en el panorama internacional como son, primero, la corriente que defiende que los derechos de las víctimas del terrorismo ya están contemplados y reconocidos en los derechos que se le concede a la víctima de cualquier delito. Segundo, los obstáculos encontrados en el ámbito supranacional para alcanzar una definición de consenso sobre el fenómeno terrorista. Y tercero, la afirmación de que no se pueden atribuir conductas que lleven implícitas la afección de los derechos humanos a las organizaciones terroristas que no formen parte del entramado. En efecto, constituyen los tres principales argumentos que han tratado de justificar la escasa atención a los derechos de las víctimas del terrorismo en las Naciones Unidas³⁵⁶.

3.3. Concepto de víctima

De entrada, es obvio estar de acuerdo con la afirmación de que las víctimas del terrorismo pertenecen a la categoría general de víctimas del delito tal y como recuerda FERNANDEZ DE CASADEVANTE³⁵⁷. Además de la doctrina, las instancias internacionales se han preocupado de dotar de significación a este concepto genérico. Así, en este contexto, la Declaración de 1985 elaborada por la Organización de Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder, entiende por víctimas,

³⁵⁵ BODERO, E. R. Orígenes y fundamentos..., cit., p. 74; LANDROVE DIAZ, G. Victimología..., cit., p. 26.

³⁵⁶ MOTA, A. *“La protección de las víctimas del terrorismo en Naciones Unidas y el reconocimiento de sus derechos. Hacia un estatuto internacional de las víctimas del terrorismo”*, Real Instituto Elcano, 2012. Disponible en: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/es/zonas_es/terrorismo+internacional/ari51-2012. (Consultado 01/04/2017).

³⁵⁷ MUÑOZ ESCANDELL, I. Los derechos de las víctimas del terrorismo..., cit., p. 36.

*"las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder"*³⁵⁸.

Conforme a los Principios y Directrices sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones de las Normas de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, aprobados en la resolución 60/147 de la Asamblea General celebrada en el año 2005 "se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario (...) el término víctima también comprenderá a la familia inmediata a las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización" (V.8)³⁵⁹.

Siguiendo la misma dirección, en el ámbito de la Unión Europea, la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 por la que se establecen las Normas Mínimas sobre los Derechos, el Apoyo

³⁵⁸ Declaración de los principios básicos de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder. Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985. Disponible en: <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/VictimsOfCrimeAndAbuseOfPower.aspx>. (Consultado el 31/08/2015); Según GINER esta concepción es dinámica, pues está formulada de una manera abierta hacia cualquier cambio legislativo y social venidero, posibilitando su adaptación al derecho positivo para poder incorporar cualquier la nueva forma de victimización; en GINER ALEGRÍA, C. A. "Aproximación psicológica de la Victimología", Revista Derecho y Criminología, núm. 1, 2011 p. 29.

³⁵⁹ En el informe previo presentado por VAN BOVEN titulado *Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales*, este concepto tuvo un carácter más restringido, de acuerdo con la Declaración sobre principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución número 40/35 de 1985, que sintetizó con las siguientes palabras "una persona es víctima si ha sufrido lesiones físicas o mentales, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales; las víctimas pueden ser tanto directas como indirectas, por ejemplo, puede tratarse de familiares o personas a cargo de la víctima directa y pueden haber sufrido daños individual o colectivamente". Disponible en: <http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/boven.html>. (Consultado 01/04/2017).

y la Protección de las Víctimas de Delitos, y por la que se sustituye a la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo introduce en su art. 2,1 un concepto más amplio de la víctima pues aunque en un principio incluye a *“la persona física que haya sufrido un daño o perjuicio, en especial lesiones físicas o mentales, daños emocionales o un perjuicio económico, directamente causado por una infracción penal”*, también lo hace extensivo a *“los familiares de una persona cuya muerte haya sido directamente causada por un delito y que haya sufrido un daño o perjuicio como consecuencia de la muerte de dicha persona”*.

Según las directrices europeas, la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima parte de un concepto amplio de víctima siempre y cuando el origen de tal consideración sea la comisión de un delito que provoque daños físicos, morales o materiales, comprendiendo bajo esta expresión no sólo a la víctima directa sino también a la víctima indirecta. Si bien, en este último caso, la concesión de esta condición se supedita al cumplimiento de dos requisitos, primero, únicamente se puede otorgar a los afectados directamente por los supuestos tasados de muerte o desaparición de un familiar, y, segundo, estos familiares además deben acreditar que se encuentran inmersos en una situación de peligro que conlleve indicios relevantes para la aparición de los efectos causados por dicha victimización³⁶⁰.

Paralelamente, en la doctrina victimológica, las definiciones que han proporcionado los autores interesados en esta materia han seguido la misma

³⁶⁰ El art. 2 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima, establece lo siguiente: *“Las disposiciones de esta Ley serán aplicables: a) Como víctima directa, a toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o perjuicios económicos directamente causados por la comisión de un delito. b) Como víctima indirecta, en los casos de muerte o desaparición de una persona que haya sido causada directamente por un delito, salvo que se trate de los responsables de los hechos: 1.º A su cónyuge no separado legalmente o de hecho y a los hijos de la víctima o del cónyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ellos; a la persona que hasta el momento de la muerte o desaparición hubiera estado unida a ella por una análoga relación de afectividad y a los hijos de ésta que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ella; a sus progenitores y parientes en línea recta o colateral dentro del tercer grado que se encontraren bajo su guarda y a las personas sujetas a su tutela o curatela o que se encontraren bajo su acogimiento familiar. 2.º En caso de no existir los anteriores, a los demás parientes en línea recta y a sus hermanos, con preferencia, entre ellos, del que ostentara la representación legal de la víctima”*; DE HOYOS SANCHO, M. *“Víctimas del delito y acción penal”*, en DE HOYOS SANCHO, M. (dir.). *La Víctima del Delito y las Últimas Reformas Procesales Penales*, Aranzadi S. A., Pamplona, 2017, pp. 81-82.

línea que las normativas internacional, europea y española, salvo la aportación del elemento subjetivo que aparece en alguna de ellas. Respecto a la primera corriente en la que se hace hincapié en el elemento objetivo del padecimiento de un daño, una de las más antiguas nos la ofrece VON HENTIG utilizando los siguientes términos *"víctima, según la concepción de la vida, es la persona lesionada objetivamente en un bien jurídicamente protegido y que siente subjetivamente esta lesión con disgusto o dolor"*³⁶¹. Por su parte, STANCIU señala que, la víctima es el ser que sufre de un modo injusto, de modo que, el autor incide especialmente en sus dos elementos constitutivos básicos: el sufrimiento y la injusticia. Mientras que en un sentido más amplio en cuanto a los sujetos que pueden estar implicados, MEDELSON propone que *"es la personalidad del individuo o de la colectividad en la medida en que está afectada por las consecuencias sociales de su sufrimiento determinado por factores de origen muy diverso físico, psíquico, económico, político o social, así como el ambiente natural o técnico"*. Por otra parte, SEPAROVIC opina que la víctima es *"cualquier persona, física o moral, que sufre como resultado de un despiadado designio, incidental o accidentalmente"*. Ante el conjunto de acepciones presentadas, RODRÍGUEZ MANZANERA se adscribe a la tesis amplia que incluye al individuo o grupo afectados, incluso, por hechos fortuitos, entendiendo dentro de este concepto al *"individuo o grupo que padece un daño por acción u omisión propia o ajena, o por causa fortuita"*. Aludiendo a la vez a la particularidad de la víctima del crimen, ya que ésta se considera la persona física o moral que sufre un daño causado por un comportamiento antisocial, propio o ajeno, a pesar de que no le corresponda el derecho vulnerado³⁶².

Al igual que el autor anterior, la Sociedad Vasca de Victimología las conceptúa como *"aquellas personas que individual o colectivamente han sufrido daños físicos o psíquicos, pérdida financiera, patrimonial o menoscabo en sus derechos fundamentales como persona, todo ello independientemente de que la Justicia juzgue o no al delincuente o de la relación entre la víctima y agresor"*.

³⁶¹ HERRERO HERRERO, C. Criminología..., cit., p. 217.

³⁶² RODRÍGUEZ MANZANERA, L. Victimología. Estudio..., cit., pp. 55-66.

Así, queda puesto de manifiesto que pueden incluirse tanto al individuo como a la colectividad.

No obstante, ECHEBURUA añade además del elemento objetivo un segundo factor a considerar que está directamente relacionado con la conversión del individuo en víctima:

- El aspecto objetivo de la víctima referente a que adquiere esta condición quien haya sufrido de una manera directa o indirecta un hecho traumático que se haya ocasionado en virtud de una agresión humana, un accidente o una catástrofe natural. Es prescindible la declaración formal de delito por parte del sistema judicial.
- La vertiente subjetiva, por su parte, es la experimentación de interferencias negativas de la víctima durante el desarrollo de su día a día y que tiene su origen en el suceso traumático. Entre ellas destaca la incapacidad o dificultad de continuar con su vida o la manifestación de reacciones emocionales graves.

Lógicamente este colectivo cumple los requisitos contenidos en las definiciones precedentes ya que son personas que han padecido un daño con carácter físico, mental o material ocasionado por un delito sin perjuicio de que se pueda ampliar al familiar de aquéllas en determinados supuestos. Ahora bien, cabe preguntarse si los afectados por el fenómeno terrorista tienen características específicas adicionales que sería conveniente reseñar como consecuencia de los instrumentos utilizados por las organizaciones terroristas y la finalidad que persiguen.

A simple vista, es cierto que la victimización terrorista causa prácticamente los mismos resultados de muerte, lesión o amenaza que pudieran provocar otros hechos delictivos, de manera que, las definiciones traídas a colación serían válidas. Sin embargo, en un análisis más exhaustivo se puede observar que aquéllos presentan consecuencias o manifestaciones diferentes de cualquier otra categoría de víctimas a raíz del componente político de las acciones. La violencia, fuerza o amenazas empleadas de manera habitual en estas acciones utiliza el miedo que produce en los conciudadanos con la finalidad de alcanzar su meta

política, esto es, influir en la política de un estado, grupo de estados u organizaciones internacionales. El significado político de las acciones terroristas agrava la vulnerabilidad de los afectados pues a pesar de que se trata de un ataque contra el estado y el sistema democrático la actuación en sí misma recae en las víctimas. Las necesidades especiales que presentan estas víctimas y su significación justifican tanto el establecimiento de una definición propia de víctimas del terrorismo en la que se incluyan sus caracteres diferenciadores de afectados por otros delitos como un sistema de protección específica dirigida a atender y restaurar el estado de vulnerabilidad que padecen³⁶³.

3.4. Significación de la víctima del terrorismo

La tarea de buscar un significado exclusivo para la expresión víctimas del terrorismo que contenga todos los aspectos relevantes en cuanto a su específica victimización se ha visto obstaculizada principalmente por dos circunstancias. Por una parte, el hecho de que la doctrina internacional no haya encontrado una formulación de consenso acerca del concepto relativo al delito de terrorismo ha tenido una consecuencia directa sobre los afectados por este fenómeno, pues sino se delimitan las líneas generales del hecho delictivo difícilmente se va a poder señalar quienes son sus afectados. En este sentido, es cierto que a partir de 1972 se han llevado a cabo una serie de iniciativas a fin de elaborar un convenio contra el terrorismo en el que poder incluir a lo largo de su articulado el concepto de terrorismo, si bien, estas propuestas han fracasado³⁶⁴. Por otra parte, la falta de determinación de la Comunidad Internacional a la hora de

³⁶³ VARONA MARTINEZ, G. Guía general de buenas prácticas en el trato..., cit., pp. 14-15.

³⁶⁴ MOTA, A. La protección de las víctimas del terrorismo..., cit.; la Asamblea General en el art. 2 del Proyecto del Convenio General contra el terrorismo, contiene una definición de terrorismo: “*comete delito quien ilícita e intencionadamente y por cualquier medio cause: a) la muerte o lesiones corporales graves a otra persona o personas; o b) daños graves a bienes públicos o privados, incluidos lugares de uso público, instalaciones públicas o gubernamentales, redes de transporte público, instalaciones de infraestructura o el medioambiente; c) daños a bienes, lugares, instalaciones o redes...cuando produzcan o puedan producir un gran perjuicio económico... en caso de que el propósito de tal acto sea, por su naturaleza o contexto, intimidar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a hacer o dejar de hacer algo*”, en OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Derechos humanos, terrorismo y lucha contra el terrorismo, Folleto informativo núm. 32, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2016, p. 7.

indicar que las actuaciones cometidas en el marco terrorista producen violaciones de los derechos humanos no ha favorecido la incorporación de los rasgos diferenciadores de sus víctimas en una categoría concreta destinada a ellas³⁶⁵. No obstante, en la actualidad, dentro de este clima de incertidumbre ya se han matizado que, las acciones realizadas por terroristas cuyo fin último sea influir en la política de un estado causando un estado de miedo entre la población constituyen los dos componentes básicos del fenómeno terrorista³⁶⁶.

³⁶⁵ Las víctimas de delito aparecen definidas en la Decisión Marco del Consejo 2011/220/JAI de 15 de marzo de 2001 relativo al estatuto de la víctima en el proceso penal y en el ámbito del Consejo de Europa en el art. 2.1 del Convenio europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos de 24 de noviembre de 1983. Las víctimas de abuso de poder se encuentran definidas en la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder (Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985 en su punto 18). Las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario se encuentran en el punto 8 de la Resolución 60/147 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Por su parte, las víctimas de desapariciones forzadas están reguladas en el art. 4.1 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 20 de diciembre de 2006. Asimismo, las víctimas de violaciones del Derecho Internacional Penal se refieren al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 17 de julio de 1998 que queda circunscrito a los crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra; en MUÑOZ ESCANDELL, I. Los derechos de las víctimas del terrorismo..., cit., pp. 18-27.

³⁶⁶ MUÑOZ ESCANDELL, I. Los derechos de las víctimas del terrorismo..., cit., p. 35; en el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y seguimiento de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de 27 de febrero de 2002, se señaló que no se había ofrecido una definición completa con cierto grado de consenso internacional sobre el fenómeno terrorista. No obstante, a partir de ciertos elementos que se habían considerado esenciales para su construcción, en la Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, de la Asamblea General aprobada como anexo de su resolución 49/60, de 9 de diciembre de 1995, se señaló que *“los actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificar”*. Disponible en: http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/238906/E_CN.4_2002_18-ES.pdf?sequence=6&isAllowed=y. (Consultado 14/11/2016); por su parte, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se muestra a favor de una definición de consenso académico redactada de la siguiente manera: *“el terrorismo es un método de acción violenta reiterada que infunde ansiedad, empleado por actores individuales, grupales o estatales (semi) clandestinos, por razones idiosincráticas, criminales o políticas, donde –en contraste con el asesinato– los objetivos directos de la violencia no son los principales objetivos. Las víctimas humanas de la violencia se eligen generalmente al azar (objetivos de oportunidad) o selectivamente dentro de una población objeto (objetivos representativos o simbólicos), y sirven como generadores de mensaje. Los procesos de comunicación basados en la amenaza y en la violencia entre el terrorista (su organización), las víctimas (puestas en peligro) y los objetivos principales se utilizan para manipular el objetivo principal (la/s audiencia/s), convirtiéndolo en un objeto de terror, de demandas o de atención, dependiendo si se busca principalmente la intimidación, la coerción a la propaganda”*; VARONA, G., LAMARCA, I., LÓPEZ DE FORONDA, F., PAGOLA, A. Y OCA, N. Atención institucional a las víctimas..., cit., p. 49; CASSESE, en el mismo sentido, enumera los tres componentes básicos que deben constituirlo como son, primero, los actos criminales que la mayoría de ellos están tipificados en las legislaciones nacionales. Segundo, la intención que persiguen los actores con estas

En cuanto al contenido de la expresión víctimas del terrorismo, el Comité de Ministros del Consejo de Europa que fue el encargado de elaborar los Principios sobre la Protección a las Víctimas de Actos Terroristas en el año 2005, señaló que no se había hecho referencia expresa a ella en prácticamente ninguno de los Convenios Internacionales, el Convenio Europeo de Derechos Humanos ni tan siquiera en la jurisprudencia emitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ante este panorama, el Comité consideró conveniente acudir a lo dispuesto tanto en la Resolución de las Naciones Unidas de 1985 que establece una regulación de las víctimas en términos generales, como al art. 1 de la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea sobre la posición de las víctimas en el proceso penal de 15 de marzo de 2001, con el objetivo de averiguar cuáles son sus peculiaridades. De esta manera, entiende que la víctima del terrorismo es aquella persona que ha sufrido un daño directo derivado de un acto terrorista, ya sea de naturaleza física o psíquica. Además, admite la posibilidad de incluir bajo esta denominación a sus familiares en determinados casos³⁶⁷. Con estas breves pautas que han ido fijando los textos legales internacionales y europeos, las características básicas que presentan las víctimas de acciones terroristas pueden sintetizarse en los siguientes puntos: (1) persona que, individual o colectivamente, (2) padece un sufrimiento de manera injusta derivada de un acto terrorista, (3) éste se materializa en daños físicos, psíquicos o materiales y, (4) además, se percibe a sí mismo como víctima.

No obstante, si observamos con detalle la citada conclusión a la que han llegado las distintas instancias internacionales y europeas, la diferencia entre las víctimas de cualquier tipo de delito y las que han sufrido el fenómeno terrorista tan sólo se encuentra en el carácter terrorista de la acción. Esta característica objetiva diferencial se traduce en rasgos subjetivos producidos en sus afectados a consecuencia de las actuaciones terroristas.

acciones consiste en crear un estado de terror en la población o, en su caso, obligar a un gobierno o a una organización internacional a actuar de un determinado modo. Y, finalmente, la motivación ha de ser de carácter político o ideológico, por lo que no se aceptan razones pertenecientes al ámbito privado bajo esta expresión; en MOTA, A. La protección de las víctimas del terrorismo..., cit.

³⁶⁷ VARONA, G., LAMARCA, I., LÓPEZ DE FORONDA, F., PAGOLA, A. Y OCA, N. Atención institucional a las víctimas..., cit., pp. 50- 51.

Como se ha comentado en el apartado anterior, sería conveniente y deseable incorporar los dos elementos adicionales referentes a la especial vulnerabilidad y a la significación política al concepto en cuestión. Su inclusión favorecería tanto el acercamiento como la comprensión de este colectivo a la mayoría de la población, debido a que, el objetivo de desestabilizar el sistema político o democrático instaurado a la vez que busca crear un clima de miedo en la población también contribuye a la manifestación de vulnerabilidades determinadas en las víctimas que lo han padecido.

Si bien, a la hora de detallar estos aspectos reseñados que deben componer la definición de víctima del terrorismo se debería distinguir un concepto jurídico y otro criminológico teniendo presentes los objetivos que persiguen ambas materias. Respecto al término jurídico tan sólo sería necesario introducir la alusión a la significación política a los matices previos, esto es, (1) persona que, individual o colectivamente, (2) padece un sufrimiento de manera injusta derivada de un acto terrorista (3) con una intención o significación política, (4) que se materializa en daños físicos, psíquicos o materiales y, (5) además, el afectado debe percibirse a sí mismo como víctima. Estas precisiones quedan sobreentendidas en la normativa protectora de este colectivo ya que cumplen estos requisitos. La normativa específica española que se ha ocupado de regular el régimen indemnizatorio y de protección de este colectivo es la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo (en adelante Ley 29/2011, de 22 de septiembre), concretamente, es el primer texto legal que delimita quienes pertenecen a la categoría de víctima del terrorismo. Previamente, la Ley 32/1999 de Solidaridad no hizo ninguna referencia a este aspecto. Así, como se desprende de las disposiciones de la vigente regulación, solamente se atribuye la consideración de víctimas del terrorismo a las personas que, como consecuencia de una actuación de índole terrorista, hayan resultado fallecidas o hayan sufrido daños de carácter físico o psíquico, al mismo tiempo que hace extensiva esta condición al cónyuge o persona ligada al fallecido mediante una análoga relación de afectividad, sus padres, hijos, abuelos y hermanos por una motivación meramente honorífica.

Estas ideas conectan directamente con la formulación realizada por BURT sobre este aspecto. Según este autor, para poder acceder a los sistemas previstos de asistencia y compensación, la víctima debe recorrer una serie de fases hasta completar el proceso para convertirse en víctima a nivel real y oficial a ojos de la Sociedad. Este procedimiento consta de la superación de las siguientes etapas³⁶⁸:

1. La persona ha sufrido daños, ofensas o sufrimientos causados por instituciones u otras personas: para nuestro estudio esta fase se completa con la fecha en la que tuvo lugar el atentado.
2. La autodefinición como víctima: desde la perspectiva subjetiva de cada uno de los participantes, ¿se consideraron víctimas tras sufrir el hecho traumático? Aquí, lo más importante es la experimentación del sentimiento de injusticia que percibe la propia víctima, porque es en ese preciso instante cuando se autodefine bajo tal calificativo.
3. La víctima requiere el reconocimiento de otros sobre el daño sufrido y que valide la reclamación de su victimización: uno de los instrumentos oficiales que reconoce este padecimiento es la sentencia. En ella se les corrobora o certifica la autoría, se condena y se procede a indemnizar a consecuencia de la acción terrorista. Para ello, las víctimas recurren a las agencias de control formal. También existe una segunda vía de reconocimiento de esta condición, la resolución administrativa motivada en los documentos policiales existentes, ya que puede darse el caso de que no ha habido juicio al respecto o no ha llegado a buen término.
4. Validación de su rol de víctima a nivel oficial y sobre todo social: momento en que se les concede el reconocimiento oficial. La validación va más allá del mero reconocimiento otorgado por un organismo estatal. Para nuestras víctimas delimitamos este momento de validación social cuando se les informa su concesión a través de la acción honorífica del Estado configurada por la Real Orden de

³⁶⁸ HERRERO ALONSO, C. Y GARRIDO MARTÍN, E. "*Victimología: el impacto del delito, la víctima y el sistema legal. Una aproximación psicosocial*", Cuadernos de Derecho Judicial (ejemplar dedicado a: La criminología aplicada), núm. 7, 1998, pp. 27-28.

Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo en sus diferentes grados. La entrega de estas condecoraciones generalmente se celebra mediante un acto público, dotándolo de una significación pública y de alcance a toda la sociedad.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el interés criminológico reside prioritariamente en la recuperación de la víctima, es obvio que, los profesionales de este campo presten especial atención a los factores de indefensión que evidencian las víctimas. La diferencia principal a la que debe atender el criminólogo se encuentra en el hecho de que la persona se convierte en el mero instrumento de los terroristas frente al Estado, es decir, utilizan una técnica basada en la deshumanización que atenta contra los derechos básicos del ser humano y los intereses colectivos³⁶⁹. La vulnerabilidad que manifiestan es la consecuencia de las necesidades especiales que precisan. Los estudios sobre este colectivo han apuntado lo siguiente sobre sus necesidades especiales:

- Presentan una manifestación diferente respecto a otras víctimas, sobre todo, los resultados apuntan un mayor índice de victimización secundaria derivada por la sensación que experimentan de abandono social e institucional
- Exteriorizan victimizaciones más intensas cuyo origen se encuentra en la falta de reconocimiento de su condición de víctima y el escaso apoyo social que reciben
- Por ello, es indispensable articular políticas victimales destinadas exclusivamente a ellas para su recuperación

Esta distinción que se ha planteado entre los dos conceptos, jurídico y criminológico, debe entenderse complementaria en base a que la significación política característica de la vertiente jurídica encuentra su punto de conexión con

³⁶⁹ MUÑOZ ESCANDELL, I. Los derechos de las víctimas del terrorismo..., cit., pp. 35-36.

la vulnerabilidad de las víctimas característica del enfoque criminológico y, de aquí, deriva la importancia de la interdisciplinariedad de las ciencias.

Como se puede comprobar la condición de víctima del terrorismo prevista en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, que se le concede en exclusividad a los heridos de naturaleza física o psíquica a consecuencia de una acción terrorista cumple no sólo con los requisitos básicos –(1) persona que, individual o colectivamente, (2) padece un sufrimiento de manera injusta derivada de un acto terrorista, (3) con una intención o significación política, (4) que se materializa en daños físicos, psíquicos o materiales y, (5) además, el afectado debe percibirse a sí mismo como víctima- sino que también se le otorga el reconocimiento oficial y social proclamado por BURT. Y, de esta manera, este entendimiento casa perfectamente con el enfoque criminológico, en la medida en que, los afectados puedan afectar mostrar indicios de vulnerabilidad o indefensión dependiendo del estadio de victimización primaria, secundaria o terciaria en el que se encuentren, pues la manifestación de estos síntomas es la que interesa al criminólogo. Todo ello sin perjuicio de que la circunscripción a los heridos ya sea de naturaleza física o psíquica –hay que remarcar que la propia ley concede esta distinción a los familiares de los fallecidos tan sólo a nivel honorífico- debería ser más amplia pues en las acciones terroristas también pueden resultar afectadas otras figuras que la propia ley nombra como los amenazados, coaccionados, ilesos y los familiares de todos ellos que presenten síntomas de vulnerabilidad.

3.5. La vulneración de los derechos humanos en las víctimas del terrorismo

La vulnerabilidad presente en este conjunto de víctimas tras su paso por las etapas sucesivas de victimización primaria, secundaria y terciaria se halla íntimamente conectada con la posible comisión de violaciones de derechos humanos³⁷⁰. La remisión expresa a la vulneración de los derechos humanos, a la

³⁷⁰ “Los derechos humanos son valores universales y garantías jurídicas que protegen a personas y grupos contra acciones y omisiones primordialmente de agentes del Estado que interfieren con las libertades fundamentales, los derechos y la dignidad humana. El espectro completo de los derechos humanos implica

hora de caracterizar a las víctimas del terrorismo, realizada tanto en el Preámbulo de la ley estatal 29/2011 como en la exposición de motivos de la ley autonómica 4/2008 adoptada en el País Vasco, muestra una manifestación clara y contundente en la defensa de la incorporación de este colectivo a la citada categoría. Con estas afirmaciones ambos legisladores se oponen frente a la postura tradicional que se postula a favor de su exclusión argumentando que no cumplen los requisitos mínimos para ser consideradas acreedoras de dicha categoría.

En este escenario, el legislador estatal que ha decidido apartarse de la posición secundada por la doctrina mayoritaria, con la finalidad de defender su tesitura y en un intento por solventar las dudas que pudiesen surgir en la interpretación de las disposiciones, ha incidido al comienzo del texto legal en que *"esta ley asume igualmente una idea relativamente novedosa, que impregna todo su articulado y es que las víctimas del terrorismo son, en efecto, víctimas de violaciones de derechos humanos"*³⁷¹.

Paralelamente, en el marco autonómico, la ley 4/2008 del País Vasco, de 19 de junio, de Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo, no sólo se limita a enunciar este principio que se constituye en una guía de interpretación del resto del articulado tal y como se ha plasmado en la ley estatal, sino que además, aquí el legislador se ha referido directamente a la condición que, a su juicio, es la causa por la que no se incluyen dentro de esta denominación, esto es, la naturaleza privada de los sujetos que producen los hechos delictivos. Adicionalmente, con el objetivo de apoyar su postura enumera las acciones que han ocurrido y que contemplan en su seno vulneraciones de los derechos humanos. En este sentido, establece que *"la práctica y la jurisprudencia internacional y comparada han mostrado claramente que puede haber*

el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, así como el derecho al desarrollo. Los derechos humanos son universales, es decir, pertenecen intrínsecamente a todos los seres humanos, y son independientes e indivisibles"; en OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Derechos humanos, terrorismo..., cit., p.3.

³⁷¹ Preámbulo de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

violaciones graves de los derechos humanos perpetrados por grupos privados que actúan al margen del Estado, al igual que, en ocasiones se ha demostrado que algunos de estos grupos privados pueden actuar con el asentimiento del propio Estado o de sectores del mismo”.

En el caso vasco, estamos ante varias décadas de violencia terrorista, con casi un millar de personas asesinadas; violaciones constantes de derechos esenciales como la vida, la integridad física o psíquica, la libertad de expresión o la seguridad personal. Podemos hablar, por tanto, de la existencia de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, tanto las cometidas por el terrorismo de ETA como las protagonizadas en el pasado por grupos de extrema derecha y el propio GAL”.

La resolución de esta cuestión no es solamente significativa para decantarse a favor o en contra de que cualquier individuo o grupo terrorista sin vinculación estatal pueda realizar conductas que impliquen violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, puesto que también, es clave en aras a determinar si estas actuaciones conllevan la asunción de obligaciones por parte del aparato estatal.

Esto no quiere decir que por no entrañar vulneraciones de los derechos humanos no se haya abordado hasta ahora la problemática que les rodea, sino que, se ha planteado desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario al tomar conciencia de que son conductas fácilmente reconducibles a los tipos denominados como crimen internacional y crimen contra la humanidad. La justificación que alegan para no apoyar la inclusión del fenómeno terrorista dentro del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se encuentra en que estas acciones han sido cometidas por actores que carecen de naturaleza estatal, ya que, por el contrario, en este ámbito el presupuesto base es la preocupación exclusiva por las víctimas de violaciones que generen obligaciones internacionales de las que fueran competentes los propios Estados³⁷².

³⁷² MUÑOZ ESCANDELL, I. Los derechos de las víctimas del terrorismo..., cit., p. 20.

En concreto, este sector predominante en las Naciones Unidas defiende que, el Estado, en la medida en que, cumple con las exigencias necesarias para convertirse en sujeto de derechos y obligaciones a la vez, solamente él está en condiciones de vulnerar los derechos humanos. Esta postura surgió tras la Segunda Guerra Mundial en el momento en que apareció el Derecho Internacional de los Derechos Humanos con el objetivo de tratar de enmendar los excesos cometidos por los Estados totalitarios. De esta necesidad histórica, se desarrolla entonces un planteamiento para el que la única vía para ser acreedores de esta consideración sea la existencia de un actor estatal debido a que dotar a una organización de naturaleza terrorista de obligaciones supondría concederle cierta personalidad³⁷³.

Lógicamente este punto de vista ha trascendido y ha tenido impacto especialmente en nuestro país que cuenta con bastantes episodios terroristas a sus espaldas. La idea de que el terrorismo desarrollado en España no implicaba una vulneración de los derechos humanos ha estado muy extendida y, al mismo tiempo, ha podido tener repercusión en cuanto a la asunción de obligaciones. Pues, ciertamente, en este ámbito determinado la mayor parte de las acciones terroristas las han perpetrado agentes no estatales. Sin embargo, en la actualidad, se puede asumir sin mayores complicaciones que los actores sin vinculación estatal puedan cometer violaciones de los derechos humanos del mismo modo que los agentes estatales³⁷⁴.

En este sentido, CLAPHAM y FERNANDEZ DE CASADEVANTE, han sido los dos autores principales que han impulsado una corriente contraria a la postura más tradicional por la sencilla razón de que, según ellos, no es preciso centrarse

³⁷³ MOTA, A. La protección de las víctimas del terrorismo..., cit.

³⁷⁴ Concretamente el punto 5 del Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y seguimiento de la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos indicaba que: *“una estrategia internacional eficaz contra el terrorismo debería utilizar los derechos humanos como marco de unión. La idea de que las violaciones de los derechos humanos son admisibles en determinadas circunstancias es errónea. La esencia de los derechos humanos es que la vida y la dignidad humanas no deben verse comprometidas jamás, y que ciertos actos, ya sea que los cometan agentes estatales o no estatales, no están nunca justificados para ningún fin. La normativa internacional de derechos humanos y el derecho internacional humanitario definen los límites de la conducta política y militar permisible. El enfoque irresponsable de la vida y la libertad humana socava las medidas de lucha contra el terrorismo”*. Disponible en: http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/238906/E_CN.4_2002_18-ES.pdf?sequence=6&isAllowed=y. (Consultado el 16/11/2016).

tanto en el carácter público o privado de quienes han cometido la acción sino en el resultado producido. Ambos parten más bien una concepción amplia y protectora hacia las víctimas afectadas por acciones realizadas por agentes no estatales, en la que manifiestan que la máxima realización de los derechos humanos es la defensa y la protección de los derechos y libertades fundamentales de los individuos, que coincide con la idea misma de la dignidad de los seres humanos. La titularidad de los derechos inalienables que ostentan todas las personas por el mero hecho de serlo conlleva, a su vez, la obligación de ser respetados por todos. Esta concepción hace suya la arraigada perspectiva de la posesión del derecho del individuo a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De tal forma que, esta nueva tesitura se presenta así como una nueva vía cuyo fin último consiste en comprender un espectro más amplio de víctimas, un avance necesario en el terreno internacional, en el mismo sentido que una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial se concedió al individuo la consideración de responsable por la comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad en el derecho penal internacional³⁷⁵.

Concretamente FERNANDEZ DE CASADEVANTE explica que para argumentar la existencia de la vulneración de los derechos humanos simplemente basta con recurrir a la lectura de los documentos procedentes de las Naciones Unidas. En estos textos, se incide en que las acciones terroristas persiguen, por una parte, la destrucción a nivel individual de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales inherentes a cualquier persona y, por otra parte, a nivel estatal, buscan desestabilizar el sistema democrático, la integridad territorial y la seguridad del Estado, dicho de otro modo, su intención es básicamente desequilibrar al gobierno legítimamente constituido. Estas reflexiones, asimismo, están reflejadas en la conferencia mundial sobre derechos humanos, celebrada en 1993 en Viena, en la que se trataron los temas relacionados con los "Derechos Humanos y terrorismo"³⁷⁶.

³⁷⁵ MOTA, A. La protección de las víctimas del terrorismo..., cit.

³⁷⁶ En el párrafo número 17 se especifica que *"los actos, métodos y prácticas terroristas en todas sus formas y manifestaciones, así como los vínculos existentes en algunos países con el tráfico de drogas, son actividades orientadas hacia la destrucción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia, amenazan la integridad territorial y la seguridad de los Estados y desestabilizan a gobiernos"*

Durante el recorrido por los textos internacionales de los que se ha valido para fundamentar su postura, cita en la mayoría de los casos, las ideas formuladas por la Sra. K KOUFA, Relatora Especial sobre "Terrorismo y Derechos Humanos" que, plasmadas a lo largo de sus informes, van aportando luz sobre esta problemática. En primer lugar, vincula los derechos humanos con el terrorismo en la medida en que este fenómeno desafía el patrocinio de aquéllos puesto que mediante sus acciones hostiga, de manera específica, la vida y la dignidad humana. En este contexto, la citada ofensa a los derechos humanos constituye la razón última de la creación de las Naciones Unidas. Con posterioridad, en el informe preliminar emitido el 7 de junio de 1999, profundizó en la relación existente entre ambos aspectos, si bien, no sólo señaló la amenaza a la vida, libertad y dignidad de las personas, sino que también precisó que puede afectar al ámbito de la sociedad democrática y, en última instancia, a la paz social y el orden público. Las ofensas a estas esferas cometidas mediante acciones terroristas pueden provenir tanto del Estado como de agentes no estatales. Por último, en el año 2001, la Relatora Especial de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos incidió directamente en que las acciones terroristas las podían realizar tanto los Estados como los agentes no estatales y que, en virtud de sus actuaciones, quedaban afectados los derechos humanos en todo caso³⁷⁷.

En la afeción de los derechos humanos más básicos de la persona como la vida, a no ser objeto de torturas y, en general, al orden democrático, a la paz y a la seguridad que tienen lugar con ocasión del fenómeno terrorista, es la que justifica la consideración de violaciones de los derechos humanos y no la naturaleza estatal o no de su actor³⁷⁸.

legítimamente constituidos. La Comunidad internacional debe tomar las medidas oportunas para reforzar su cooperación a fin de prevenir y combatir el terrorismo"; FERNANDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, C. Y JIMENEZ GARCIA, F. Terrorismo y Derechos Humanos..., cit., pp. 52-53; MUÑOZ ESCANDELL, I. Los derechos de las víctimas del terrorismo..., cit., p. 45.

³⁷⁷ FERNANDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, C. Y JIMENEZ GARCIA, F. Terrorismo y Derechos Humanos..., cit., pp. 53-55.

³⁷⁸ En palabras de KOUFA "Para decirlo a nivel más general y amplio, el terrorismo constituye una clara amenaza contra el concepto de derechos humanos en que se basa la creación de las Naciones Unidas, y para la vida y la dignidad de las personas", con posterioridad, precisó que "las acciones terroristas, tanto si son cometidas por los Estados como por actores no estatales, pueden menoscabar el derecho a la vida,

Retomando el primer ámbito precisado por KOUFA de afectación directa a los derechos básicos e individuales relativos a la vida, a la libertad y a la dignidad, su fundamentación está recogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de los Derechos civiles y políticos. Antes de explicarlos brevemente es conveniente realizar un pequeño inciso sobre ambas normativas. La interpretación de que cualquier persona o grupo puede cometer acciones que entrañen vulneraciones de los derechos humanos debe realizarse conforme a lo dispuesto en el art. 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 5 del Pacto Internacional de los Derechos civiles y políticos pues, esencialmente, los contenidos de estos instrumentos internacionales van dirigidos a los Estados³⁷⁹.

Obviamente estas esferas inherentes a la persona son las primeras que se ven afectadas por el fenómeno terrorista. Conforme a esta observación, la Relatora Especial dice textualmente que *"claramente cuando grupos de individuos recurren a actos de terrorismo y, al hacerlo, matan o causan lesiones a individuos, les privan de su libertad, destruyen sus bienes, o utilizan las amenazas o la intimidación para sembrar miedo... Además, los efectos*

el derecho a no ser objeto de torturas ni de detención arbitraria, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, el derecho a la salud, a la subsistencia (alimentación), al orden democrático, a la paz y a la seguridad, el derecho a la no discriminación y a todas las demás normas de protección de los derechos humanos. En realidad, no existe probablemente ni un solo derecho humano que no esté expuesto a los efectos del terrorismo"; en FERNANDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, C. Y JIMENEZ GARCIA, F. Terrorismo y Derechos Humanos..., cit., pp. 53-55. Igualmente, se ha señalado que el terrorismo tiene efectos destructivos debido a que: *"a) amenaza la dignidad y la seguridad de los seres humanos en todas partes, pone en peligro o cobra vidas inocentes, crea un entorno que destruye el derecho de la población a vivir sin temor, pone en peligro las libertades fundamentales y tiene por objeto destruir los derechos humanos; b) tiene efecto negativo sobre el establecimientos del imperio de la ley, socava la sociedad civil pluralista, procura la destrucción de las bases democráticas de la sociedad y desestabiliza gobiernos legítimamente constituidos (...);* en OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Derechos humanos, terrorismo..., cit., p. 8.

³⁷⁹ En este sentido, el art. 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que *"Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamado en esta Declaración"*. Por su parte el art. 5 del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos dispone que *"Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el presente Pacto o a su limitación en mayor medida que la revista en él"*. De acuerdo con las precisiones similares que se reflejan en sendos textos, no sólo se refiere al Estado, sino que lo hace extensivo a otros agentes como los grupos y las personas en particular; en FERNANDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, C. Y JIMENEZ GARCIA, F. Terrorismo y Derechos Humanos..., cit., pp. 56-57.

*devastadores del terrorismo en la vida, la libertad y la dignidad del individuo han sido claramente expresados y documentados en los debates y en las declaraciones pertinentes sobre terrorismo por parte de los órganos y organismos competentes de las Naciones Unidas (...), así como de las organizaciones intergubernamentales regionales*³⁸⁰.

Incluso, el Tribunal Europeo de Derechos Humano en el asunto Irlanda c. Reino Unido –Sentencia de 18 de enero de 1978- matizó que *"es evidente que los grupos o las personas pueden violar también los derechos humanos y las libertades fundamentales enumerados en ellos de otras personas"*. Con posterioridad también establece que *"esto es particularmente cierto en el caso del terrorismo, ya que el terrorismo no sólo desdeña la vida y la dignidad humana, sino que además conduce a la muerte y a las lesiones de personas inocentes"*³⁸¹.

En cuanto al derecho al disfrute de la sociedad democrática, el propio Comisario de Derechos Humanos resaltó, por una parte, las actuaciones cometidas directamente en nuestro país, señalando que *"no hace falta, pues, que esta acción terrorista de ETA esté directa y sistemáticamente en el origen de la violación de los derechos humanos fundamentales de las personas que son víctimas directas de sus crímenes, y de todas las demás que, dado el sistema de terror ambiente, se sienten restringidas en el libre ejercicio de sus derechos cívicos y políticos, en tanto que ciudadanos de una verdadera democracia y cuando no se identifican con las opciones de los independentistas. En resumen, la acción de ETA pasa conscientemente por el crimen o la extorsión individual, para intentar crear un clima general de miedo, en el que una parte de la población, no nacionalista, y en particular sus elementos representativos e intelectuales, se sienten amenazados de tal suerte que renuncian a ejercer sus derechos y abandonan el País Vasco, o recurren a la protección policial, con todo lo que ello supone, como dificultades en la actuación política, son contar la angustia personal y familiar. Y no hay que olvidar que el voto a favor de opciones*

³⁸⁰ FERNANDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, C. Y JIMENEZ GARCIA, F. Terrorismo y Derechos Humanos..., cit., p. 58.

³⁸¹ FERNANDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, C. Y JIMENEZ GARCIA, F. Terrorismo y Derechos Humanos..., cit., p. 56.

*no nacionalistas se ha vuelto especialmente arriesgado en las pequeñas aglomeraciones donde los nacionalistas radicales controlan las alcaldías. Desde este punto de vista es evidente que la acción terrorista está dirigida directamente contra el funcionamiento del sistema democrático y la libertad de los ciudadanos*³⁸².

No obstante, el Comisario va más allá destacando los hechos denominados de "violencia callejera" debido a que también interfieren negativamente en el correcto desarrollo del sistema democrático implantado. A este respecto, explicó que este tipo de violencia *"que va desde el ataque a los comercios, el incendio de autobuses y mobiliario urbano, el ataque contra los consejeros municipales, parlamentarios, periodistas y sus familias, incluida la colocación en las calles de carteles con la imagen de personas denunciadas como españolistas que, en muchos casos, han sido después víctimas de atentados, mortales en algunos casos, es en sí un elemento determinante de la sensación (realidad) de inseguridad en la que viven numerosos ciudadanos directamente afectados (cerca de tres mil personas en el punto de mira, según los testimonios), y es en todos los casos una causa directa de la imposibilidad para una parte de la comunidad de ciudadanos de ejercer libremente sus derechos cívicos y políticos"*³⁸³.

En última instancia, las acciones de carácter terrorista que, como se ha comentado, utilizan métodos para infundir miedo o amenaza, pueden producir perturbaciones en los climas de paz y seguridad, ya sea a nivel nacional o internacional. Las actuaciones dirigidas a matar o dañar a personas, destruir bienes o, simplemente, facilitar la aparición de situaciones de alarma, terror o tensión entre la población, propician la desestabilización del equilibrio constituido por la paz y el orden social³⁸⁴.

³⁸² FERNANDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, C. Y JIMENEZ GARCIA, F. Terrorismo y Derechos Humanos..., cit., p. 62.

³⁸³ FERNANDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, C. Y JIMENEZ GARCIA, F. Terrorismo y Derechos Humanos..., cit., pp. 62-63.

³⁸⁴ FERNANDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, C. Y JIMENEZ GARCIA, F. Terrorismo y Derechos Humanos..., cit., pp. 63-64.

En efecto, de acuerdo con las constataciones realizadas por el Comisario de Derechos Humanos y la Relatora Especial, se puede afirmar que el objetivo del terrorismo es destruir a los mismos derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley, aspectos recogidos en la Carta de Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales. Aunque, quedan especialmente afectados, por una parte, el derecho a la vida, a la integridad y a la libertad y, por otra parte, los gobiernos y los sistemas democráticos instaurados³⁸⁵.

Las víctimas del terrorismo son las únicas a las que se les reconoce expresamente la condición de víctimas de violaciones de derechos humanos. Esta afirmación está conectada, en consecuencia, con el nacimiento de una serie de obligaciones jurídicas vinculantes del Estado cuya función consiste en ofrecer un sistema de compensación a los afectados por este fenómeno. Así que, no sólo surten efectos los textos pertenecientes a la normativa internacional de protección a las víctimas de Naciones Unidas, del Consejo de Europa o la Unión Europea, sino que además el Estado asume el compromiso de garantizar y reforzar el estatus normativo de la víctima, integrado por derechos estrechamente ligados con los valores constitucionales y universales proclamados en las sociedades democráticas, que se concreta en su reconocimiento y apoyo integral.

3.6. Los beneficiarios y titulares de las prestaciones en las políticas de protección, ayuda y asistencia a las víctimas del terrorismo

En este apartado es preciso distinguir con la suficiente precisión las situaciones previstas tanto en la normativa estatal como en las diversas normativas autonómicas debido a que, con una simple lectura ligera sin atender a los pequeños matices recogidos en las disposiciones, no es fácil diferenciar las posiciones en las que pueden verse inmersos los afectados. De entrada, atendiendo al rigor literal del texto estatal, el legislador ha procedido a fijar los

³⁸⁵ OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Derechos humanos, terrorismo..., cit., pp. 7-8.

límites de la figura victimal y para ello, de una parte, determina a qué sujetos les corresponde la condición de víctimas del terrorismo y, por otra parte, alude a los denominados titulares o beneficiarios de las ayudas y prestaciones e, incluso, también hace referencia a los destinatarios de una especial atención. Sin embargo, esta delimitación puede resultar una tarea complicada por el hecho de que no existe un único texto legal, sino que además de existir una ley y reglamento estatales hay una serie de normativas autonómicas complementarias cuyas redacciones pueden presentar sutiles diferencias.

Las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana y del País Vasco³⁸⁶ han decidido aprobar sus propias leyes que contienen las medidas y ayudas cuya aplicación tendrá un carácter subsidiario y complementario respecto a las elaboradas por otros organismos por el mismo concepto tal y como precisan en sus respectivos articulados³⁸⁷. De esta manera, sus previsiones cumplen con la finalidad de ofrecer el reconocimiento merecido a las víctimas y, asimismo, instaurar un sistema centrado en su protección y asistencia para facilitarles, en la medida de lo posible, la reparación y el alivio con independencia de la naturaleza de los daños sufridos a consecuencia de las acciones terroristas.

La mayoría las normativas autonómicas enumeradas han sido aprobadas tras la primera ley de carácter estatal destinada a ellas, esto es, la Ley 32/1999,

³⁸⁶ Respectivamente se han aprobado la Ley 10/2010, de 15 de noviembre, relativa a medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía; la Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las víctimas del terrorismo de Aragón y el Decreto 89/2014, de 10 de junio, del Departamento de Presidencia y Justicia por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la ley 4/2008; la Ley 6/2005, de 27 de diciembre, de medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo y de creación del Centro Extremeño de Estudios para la Paz de Extremadura; la Ley 12/1996, de 19 de diciembre, de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo de Madrid; la Ley 7/2009, de 2 de noviembre, de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo de Murcia y el Decreto 105/2012, de 27 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la ley 7/2009; la Ley 9/2010, de 28 de abril, de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Foral de Navarra –si bien con anterioridad había un decreto-; la Ley 1/2004, de 24 de mayo, de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana; la Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo del País Vasco y el Decreto 290/2010, de 9 de noviembre, de desarrollo del Sistema de Asistencia Integral a las Víctimas del Terrorismo, aunque previamente se habían aprobado sucesivos Programas de Ayuda.

³⁸⁷ FERNANDEZ COLLADOS, M. B. *“Medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía”*, en SEMPERE NAVARRO, A. V. (dir.). Reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo: estudio de la normativa básica estatal y autonómica, Eolas, 2014, p. 256.

de 8 de octubre, de Solidaridad con las víctimas del terrorismo y el Pacto por las Libertades y contra el terrorismo firmado en el año 2000. No obstante, esta regla general presenta dos importantes excepciones como son la Ley 12/1996, de 19 de diciembre, de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid y el Decreto Foral número 254/1988, de 27 de octubre, por el que se reguló la concesión de ayudas a los afectados por atentados terroristas, aunque, este segundo texto está derogado actualmente³⁸⁸.

Es cierto que en el ámbito autonómico no existe ningún título competencial específico que las acredite a regular sobre esta materia, aunque, la ausencia de esta previsión no ha supuesto ningún inconveniente para que hayan sido capaces de diseñar un sistema de protección a favor de las mismas a partir de los títulos competenciales que tienen asumidos en las esferas de sanidad, vivienda, acción social y enseñanza. No obstante, las Comunidades Autónomas de Aragón, Andalucía y Comunidad Valenciana que aprobaron sus estatutos con

³⁸⁸ El primer Pacto que mencionó a las víctimas del terrorismo fue el de Ajuria Enea firmado el 12 de enero de 1988 que en su punto número 12 hacía referencia por primera vez a las mismas en los siguientes términos: *“reiteramos nuestro apoyo al texto consensuado en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco en relación con las ayudas a víctimas de atentados terroristas y sus familiares, en sesión celebrada el 13 de mayo de 1987”*. Por su parte, la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las víctimas del terrorismo trató de rendir homenaje a las víctimas del terrorismo, máximos exponentes de los valores de la convivencia, tolerancia y libertad a través de su reconocimiento con el otorgamiento de las distinciones honoríficas y la solidaridad. Fruto de esta solidaridad se reguló un sistema de indemnización por los daños de carácter físico o psíquico, sin perjuicio de la previsión de compensaciones para financiar los tratamientos médicos, prótesis e intervenciones quirúrgicas y la exención de las tasas académicas. No obstante, el legislador especificó que garantizar el derecho de los afectados a ser indemnizados no se consigue con la mera compensación material, sino que la compensación de las víctimas tan sólo se alcanzará con el cese de la violencia. Un año después, el punto 7 del Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo firmado en el año 2000 establecía que: *“las víctimas del terrorismo constituyen nuestra principal preocupación. Son ellas quienes más directamente han sufrido las consecuencias del fanatismo y de la intolerancia. Sabemos que la democracia nunca podrá devolverles lo que han perdido, pero estamos dispuestos a que reciban el reconocimiento y la atención de la sociedad española. La Ley de Solidaridad con las víctimas del Terrorismo ha sido una expresión unánime y cualificada de su reconocimiento moral y material. Pero nuestras obligaciones no han terminado. Debemos esforzarnos por preservar su memoria, por establecer un sistema de atención cotidiana y permanente. Su colaboración con la sociedad española en la batalla contra el terrorismo sigue siendo necesaria ya que nadie mejor que las víctimas para defender los valores de convivencia y respeto mutuo que quieren destruir aquellos que les han infligido tal sufrimiento. Para promover esa colaboración, ambos partidos nos comprometemos a impulsar, junto con las asociaciones de víctimas, la creación de una Fundación en la que estén representadas dichas asociaciones que coordinan sus actividades con las fundaciones ya existentes”*; en GARCIA MENGUAL, F. La incorporación de la protección de las víctimas del terrorismo al ordenamiento jurídico: especial referencia a la legislación autonómica”, en CATALA I BAS, A. H. (coord.). El reconocimiento de las víctimas del terrorismo a través de la legislación y la jurisprudencia, Colección Cátedra Abierta núm. 9, 2013, p. 229-230.

posterioridad al año 2006, incorporaron la mención de apoyo a las víctimas del terrorismo entre los derechos de los ciudadanos y los principios rectores que guían la política de su Comunidad³⁸⁹. Con todo, las diversas disposiciones autonómicas tienen en común los criterios de complementariedad, subsidiariedad y proximidad sobre los que se asientan sus bases³⁹⁰.

El origen de los caracteres de complementariedad y subsidiariedad sobre los que se asientan fundamentalmente las legislaciones autonómicas se encuentra en la derogada Ley 32/1999, de Solidaridad con las víctimas del terrorismo, en la medida en que, aquéllas se redactaron con el fin de completar de acuerdo con sus competencias el régimen indemnizatorio de este documento legal circunscrito exclusivamente a los daños físicos o psicofísicos, las ayudas para los tratamientos médicos y la exención de las tasas académicas. Dentro del catálogo de medidas autonómicas, no sólo se prevén también indemnizaciones por el mismo concepto de daños personales, sino que además en función de sus competencias se han incorporado disposiciones referentes a los ámbitos de la vivienda o el empleo público, aspectos que lógicamente, no estaban comprendidos en la ley estatal. Sin embargo, en la vigente Ley 29/2011, de 22 de septiembre, se ha producido un cambio significativo de nomenclatura, ya no se habla de complementariedad sino de compatibilidad. La razón de esta modificación reside en que tras el examen textual de las normativas estatal y autonómicas bajo el prisma de la complementariedad podía aparecer el caso en que un afectado pudiera acceder a tres compensaciones económicas por el mismo concepto, esto es, la pertinente mediante la ayuda estatal, más la compensación en un territorio autonómico por el criterio de ciudadanía política e, incluso, la procedente por el criterio de territorialidad de otra Comunidad Autónoma³⁹¹. Por tanto, se trata de una medida correctora de la regulación precedente con el objetivo de que los titulares puedan acceder igualmente a las

³⁸⁹ La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía elevó a la categoría de principio rector la atención de las víctimas derivadas de delitos y, específicamente, a aquellas de las acciones terroristas; en FERNANDEZ COLLADOS, M. B. Medidas para la asistencia y atención..., cit., p. 232; GARCIA MENGUAL, F. La incorporación de la protección de las víctimas..., cit., pp. 231-232.

³⁹⁰ GARCIA MENGUAL, F. La incorporación de la protección de las víctimas..., cit., pp. 233-234.

³⁹¹ GARCIA MENGUAL, F. La incorporación de la protección de las víctimas..., cit., pp. 238-239.

ayudas, pero tan sólo si son compatibles entre ellas y, en consecuencia, restringe la posibilidad de que un mismo interesado pueda acogerse a normativas autonómicas diferentes.

El punto de partida de la regulación estatal es la condición de víctimas del terrorismo que no coincide estrictamente con la titularidad de los derechos y prestaciones recogidos en la normativa de protección. Como se ha comentado con anterioridad en el apartado dedicado a la significación y delimitación de esta expresión, la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, solamente atribuye la consideración de víctimas del terrorismo a las personas que, como consecuencia de una actuación terrorista, hayan fallecido o hayan sufrido daños físicos y/o psíquicos. Si bien, al mismo tiempo, lo han hecho extensivo al cónyuge o persona ligada al fallecido por una análoga relación de afectividad, sus padres e hijos, abuelos y hermanos exclusivamente a efectos honoríficos.

Al contrario, el legislador ha optado por comprender un elenco más amplio de titulares de derechos y prestaciones, entre ellas, se incluyen un total de seis categorías de personas físicas. Además de los fallecidos y los heridos físicos y psíquicos, se incluyen, primero, a las personas que sin ser víctimas o titulares de ayudas, prestaciones o indemnizaciones sufrieran daños materiales – resarcimientos por daños materiales-; segundo, los ilesos a efectos honoríficos y de condecoraciones que no tienen derecho a compensación económica; tercero, el cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, los padres e hijos, abuelos y hermanos de los fallecidos; y, finalmente, los familiares de los heridos que hayan sufrido lesiones incapacitantes en sus diferentes grados hasta el segundo grado de consanguinidad a efectos honoríficos y de condecoraciones sin derecho a compensación económica. En última instancia, también hace acreedores de una especial atención a aquellos que acrediten haber padecido amenazas o coacciones directas de manera reiterada sin que queden abarcados ni por la condición de víctima del terrorismo ni por el rango de titular de algún derecho o prestación³⁹².

³⁹² La Ley 39/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las víctimas del terrorismo era mucho más restrictiva en este aspecto. Enumeró en su artículo 3 dos categorías de beneficiarios –no utilizó el término

En el mismo sentido, el Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011, cuyo objetivo principal es el desarrollo de los regímenes de ayudas, resarcimientos, indemnizaciones y condecoraciones, indica que les corresponden, primero, a las víctimas de actos terroristas que se perpetren tanto dentro como fuera de las fronteras españolas o en los territorios que estén bajo la jurisdicción española. En el caso de que las acciones terroristas hayan ocurrido fuera de España, se requiere la concurrencia de alguna de las dos circunstancias siguientes: o bien, que los daños los hayan producido grupos que actúen en España o, alternativamente, el objetivo del ataque sea el Estado o sus intereses. Segundo, la categoría de los amenazados y, por último, los integrantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el personal al servicio de las Administraciones Públicas en operaciones de paz y seguridad que formen parte de los contingentes españoles en el exterior objeto del ataque terrorista.

A medida que avanzan las disposiciones reglamentarias ya no se refieren solamente a los destinatarios enumerados, sino que van especificando los titulares a quienes les corresponden los diferentes derechos y prestaciones que abarcan más categorías que los primeros. Respecto a los sujetos que ostentan la condición de víctima del terrorismo determinan, en primer lugar, los titulares en los casos de fallecimiento que serán, por una parte, su cónyuge no separado legalmente o la persona que mantenga una análoga relación de afectividad conviviendo de forma estable por lo menos los dos años anteriores a la

titulares-. En primer lugar, las propias víctimas de acciones terroristas o producidas por un individuo o individuos pertenecientes a bandas o grupos armados o, alternativamente, su objetivo consista en alternar gravemente la paz y la seguridad humana. Para concretar quienes pueden incluirse se debe recurrir a la lectura del artículo 2, conforme al cual, las víctimas deben haber sufrido daños de carácter físico o psicofísico, quedando excluidos, por lo tanto, los amenazados, ilesos y titulares de bienes materiales dañados. Además, en los supuestos de fallecimiento se prevén dos situaciones excluyentes. Por una parte, si existe una sentencia firme se atenderá a su contenido pues en ella se habrán designado los derechohabientes o herederos que se convertirán en los beneficiarios. En defecto de sentencia firme, le corresponderá al cónyuge no separado a efectos legales o, en su ausencia, la persona que hubiera convivido con el fallecido por lo menos durante los dos años anteriores a la actuación terrorista siempre que la análoga relación de afectividad a la del cónyuge fuera permanente, salvo que hubiesen tenido descendencia ya que en estos casos bastará con la simple convivencia, y los herederos en línea resta descendente o ascendente hasta el segundo grado de parentesco; en KAHLE CARRILLO, D. T. Y SEMPERE NAVARRO, A. V. *“Titulares de los derechos y prestaciones”*, en SEMPERE NAVARRO, A. V. (dir.). Reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo: estudio de la normativa básica estatal y autonómica, Eolas, 2014, pp. 61-63.

producción de los hechos, aunque este requisito no será preciso acreditar cuando mediara descendencia entre ellos ya que sólo se requerirá la convivencia, y por otra, sus hijos. En su ausencia, ocuparán la posición de titular con carácter sucesivo y excluyente los padres, nietos, hermanos y abuelos. En defecto de los anteriores, los hijos de la persona con la que conviva y los menores que el fallecido tuviere bajo régimen de acogimiento permanente o preadoptivo siempre que exista la dependencia económica. Mientras que los afectados por daños físicos o psíquicos reconocidos como víctimas del terrorismo son los titulares del derecho al resarcimiento por los daños sufridos. Por su parte, en el Título III dedicado a los daños materiales no se ha hecho mención a los titulares o beneficiarios de los daños producidos que sean resarcibles. Finalmente, en el caso de los amenazados no se les califica como titulares, sino que les reconoce directamente como acreedores de ayudas³⁹³. En definitiva, los destinatarios serán las personas afectadas por la acción terrorista y sus familiares³⁹⁴.

Por otra parte, en una primera aproximación a las disposiciones de carácter autonómico, se pueden sintetizar, con el objetivo de mostrar una visión genérica de los titulares, un total de cuatro modalidades de beneficiarios³⁹⁵ de

³⁹³ En este sentido los arts. 6, 9, 13 y 42,4 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

³⁹⁴ En las disposiciones generales, el legislador ha optado por prescindir de las definiciones de víctima de terrorismo y del término genérico terrorismo que son habituales en esta materia. Se ha considerado más conveniente esta opción legislativa peculiar, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial, que responde a la voluntad de comprender el máximo número posible de casos en su aplicación. El significado de terrorismo utilizado en el articulado prescinde de su elemento estructural o, dicho de otra manera, de la pertenencia a una organización tras analizar la evolución de este concepto. En un primer momento, en el delito de terrorismo debían concurrir cuatro componentes: fáctico, medial, estructural y teleológico. La interpretación del Tribunal Constitucional era restrictiva de manera que sólo se identificase a las víctimas del terrorismo con aquellas que se encuentran configuradas como tales en los delitos del terrorismo en el código penal. No obstante, quedaban excluidas del régimen de ayuda previsto los supuestos en que la investigación sobre la autoría no era concluyente si era una banda armada. Poco a poco se fueron destinando ayudas a los daños materiales producidos por desórdenes o vandalismo a pesar de que no constara que detrás de estos actos existiese una banda organizada de carácter terrorista. Sin embargo, el código penal de 1995 contempló los denominados casos de “terrorismo individual”, esto es, ya no es imprescindible pertenecer o estar integrado en la banda organizada, basta con la comisión de determinadas acciones con la intención de alterar gravemente la paz pública. Por lo tanto, en la elaboración de esta ley han decidido adherirse a un concepto más amplio de acuerdo con normativa penal.

³⁹⁵ La acreditación de la condición de persona beneficiaria a los efectos del reconocimiento de las indemnizaciones se otorgará a través de resolución del titular de la Consejería competente en la materia. El encargado considerará los siguientes documentos: “a) En primer lugar, el Documento Nacional de Identidad, el pasaporte o el libro de familia, y un certificado de empadronamiento. b) En segundo lugar, si no fuera posible aportar el certificado de empadronamiento a los efectos de acreditar la vecindad

las prestaciones en materia de terrorismo sin perjuicio de que, con posterioridad, en el apartado dedicado al derecho de reparación, se incida con mayor profundidad en este aspecto. En casi todas las Comunidades Autónomas se ha hecho referencia no sólo en los artículos específicos destinados a enumerar los beneficiarios de la ley sino también a lo largo de las disposiciones que conforman la misma las diferentes categorías existentes cada una con el tipo de ayuda que le corresponde.

En primer lugar, serán beneficiarias tanto las personas físicas como las personas jurídicas que hayan padecido daños derivados de actividades terroristas. Tal y como explica la ley valenciana a las primeras les corresponden una serie de indemnizaciones de acuerdo a daños físicos o psíquicos que han padecido. La titularidad de la prestación económica la tendrá la propia víctima siempre y cuando haya sido declarada en alguna de las situaciones tasadas de gran invalidez, incapacidad permanente absoluta, incapacidad permanente total, incapacidad permanente parcial, incapacidad temporal o, en su defecto, si ha padecido lesiones permanentes de carácter no invalidante. Sin embargo, en otras normativas autonómicas como la andaluza o la navarra también se prevé la inclusión de las personas retenidas, extorsionadas, amenazadas y coaccionadas, aunque estrictamente no presenten daños físicos o la evaluación de los daños psíquicos sea más complicada. Concretamente, se ha hecho referencia a las personas que hayan sido retenidas por los terroristas para utilizar su vehículo durante la comisión del atentado o se haya empleado para facilitar su huida. Junto con estos afectados se ha mencionado la especial situación de los

administrativa, se valorará un certificado de la Secretaría de la Corporación Local donde se encontrase residiendo la persona beneficiaria con la indicación de esta cuestión y el periodo de referencia. c) En tercer lugar, si no fuera posible la acreditación de la vecindad por lo anterior, se valorará la prestación de Hojas de Servicios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o la Cartilla Militar. d) En cuarto lugar, si no fuera posible la acreditación con ningún documento de los anteriormente citados, se valorará la presentación de un certificado de la Oficina de Registro Civil en cuanto a los cambios de nacionalidad o del Ministerio de Interior en cuanto a expediciones de documentos nacionales de identidad. e) Finalmente, si no fuera por todo lo anterior posible la acreditación de vecindad, se valorará la presentación de testamento notarial que recoja el domicilio de la persona beneficiaria”, de acuerdo con los arts. 2 y 3 de la Orden de 31 de octubre de 2013, por la que se desarrollan las competencias de la Consejería de Justicia e Interior establecidas en la Ley 10/2010, de 15 de noviembre, relativa a medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía respecto a las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos y por situación de dependencia.

amenazados que vivieran con protección y se encuentren en situación de imposibilidad de desempeñar su trabajo habitual con normalidad. Para ellos, en virtud de sus circunstancias, se han previsto ciertas ayudas.

También se hace mención especial a las denominadas indemnizaciones por situación de dependencia. Esta concreta prestación económica se puede conceder a aquellas personas que puedan acreditar estar inmersas bajo estas condiciones, es decir, el precepto específico abarca los supuestos en que el cuidador de naturaleza no profesional de las personas acreditadas oficialmente como dependientes resulte víctima del terrorismo siempre que exista un nexo familiar entre ambos y que el resultado sea de fallecimiento o se le reconozca al propio cuidador la situación de dependencia nivel II. Este nivel adicional de protección está destinado exclusivamente a las personas dependientes que cumplan cumulativamente los requisitos anteriores.

En cambio, las reparaciones por daños materiales se concederán a los titulares de los bienes que hayan resultado dañados. Los beneficiarios podrán percibir las ayudas a causa de los daños materiales producidos en las viviendas de las personas físicas, en los establecimientos mercantiles o industriales, en los elementos productivos de las empresas, en las sedes de los partidos políticos, sindicatos u organizaciones sociales y en los vehículos –se excluyen los establecimientos de titularidad pública³⁹⁶. Estos beneficiarios podrán ser, primero, los titulares de los bienes dañados a consecuencia de la acción terrorista; segundo, los arrendatarios u ocupantes que hayan efectuado la reparación de los desperfectos; y, finalmente, la comunidad de vecinos en el caso de afección de los elementos comunes que se encuentran en los inmuebles³⁹⁷.

En tercer lugar, alude a los llamados afectados. Este grupo coincide en general con los familiares más allegados o personas vinculadas a la víctima mediante una análoga relación de afectividad, u otras personas que convivan con ella de manera estable y dependan económicamente de la misma, a pesar de que

³⁹⁶ Si el inmueble dañado es una vivienda no habitual tan sólo se podrán conceder ayudas con un límite máximo del 50% de los daños totales. Esta previsión no estaba contemplada en la anterior regulación.

³⁹⁷ La referencia a los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal es una novedad sobre el precedente Decreto 163/2005, de 4 de noviembre, del Consell.

es más común referirse a ellos en los supuestos de fallecimiento. Estas expresiones que se utilizan en la mayoría de las regulaciones estatales y autonómicas, han sido desarrolladas en el reglamento valenciano. De esta manera, bajo la expresión “familiares más allegados o próximos” se incluyen el cónyuge o la persona vinculada a él por análoga relación de afectividad, sus hijos y sus padres. Si bien, también se acepta la posibilidad de ampliar este concepto, siempre que se cumpla el requisito de dependencia económica de la víctima, a los menores en régimen de acogimiento familiar, nietos, hermanos y abuelos. Mientras que “relación afectiva análoga a la conyugal” se vincula con la idea de estabilidad en la convivencia que, queda justificada, con la cohabitación mantenida por un tiempo no inferior a los dos años anteriores a la producción del atentado. No obstante, para cumplir con este requisito, bastará acreditar la simple convivencia en el caso de que exista descendencia en común o que conste su inscripción en el registro de unión de hecho. Por lo tanto, en el caso de fallecimiento, los titulares serán, en primer lugar, el cónyuge no separado legalmente o la persona ligada a él con análoga relación de afectividad, y los hijos o menores en acogimiento –familiar permanente o preadoptivo- que dependa económicamente de la víctima. En ausencia de ellos, serán beneficiarios los padres de la víctima. Si no hubiera ninguno de los anteriores, la titularidad la tendrán los nietos, hermanos y abuelos de manera excluyente por este orden. Los dos últimos supuestos también deben cumplir el requisito de dependencia económica. En su defecto, sus padres, aunque no es necesario el cumplimiento de la exigencia económica. Y, por último, accederían a la indemnización las personas convivientes con la víctima con cierto grado de estabilidad siempre y cuando pudiera demostrar una relación de dependencia económica³⁹⁸.

Finalmente, respecto a la última modalidad, existen ciertas disposiciones que especifican y desarrollan los requisitos que se deben cumplir para acceder a

³⁹⁸ Anteriormente a la aprobación del Decreto 109/2010, de 16 de julio, del Consell, en el caso de fallecimiento de la víctima sólo se contemplaban los tres primeros supuestos, si bien, con algunas diferencias. Todos los beneficiarios debían acreditar el cumplimiento de dos requisitos, esto es, la dependencia económica de la víctima y al mismo tiempo la convivencia estable con la misma. Además, había una sutil diferencia en cuanto a los menores en acogimiento familiar en la medida en que sólo se tenía en cuenta aquellos menores en régimen de acogimiento permanente sin contemplar la modalidad de preadopción.

las subvenciones que están especialmente dirigidas a las asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones que, sin ánimo de lucro, se dediquen a la representación de las víctimas y a la defensa de sus intereses.

En todo caso, los heridos ya sean de carácter físico o psíquico a quienes se les concede la distinción de víctimas del terrorismo –al igual que a los fallecidos a consecuencia de una acción terrorista- coincide en la propia víctima la titularidad de las prestaciones que le corresponden en virtud de los daños que haya sufrido. En los supuestos de fallecimiento serán los titulares o beneficiarios de las ayudas sus familiares directos que, como especifica la ley estatal, se les concede la consideración de víctimas del terrorismo, pero exclusivamente a efectos honoríficos tal y como establece la ley estatal –las diversas normativas autonómicas no hacen alusión a ellas-. En el caso de daños materiales, los dueños serán beneficiarios de las ayudas destinadas a resarcir este tipo de desperfectos. Por su parte, los amenazados y coaccionados serán objeto de una especial atención sin que se aluda a ellos en términos de titulares de derechos o prestaciones. Por último, en el caso de los ilesos o afectados, esto es, los familiares de los heridos con independencia de su naturaleza, tan sólo se les hace referencia a efectos de condecoraciones. Junto con todos los afectados también podrán ser beneficiarias de ayudas las asociaciones o entidades que se dediquen a la representación y defensa de sus intereses.

Hay que tener presente que no todas las personas que se encuentran en alguno de los supuestos anteriores obtienen directamente las ayudas y prestaciones recogidas en la normativa protectora puesto que, para ello, es preciso además cumplir el resto de exigencias establecidas en la ley estatal y, en su caso, en la autonómica correspondiente.

El texto legal nacional acota aún más su ámbito de aplicación exigiendo unas concretas condiciones temporales, personales y territoriales. La primera premisa básica a la que se alude es la territorialidad, esto es, los hechos deben haberse producido en territorio nacional o, en su caso, territorios bajo la jurisdicción española. Guiándose por el mismo criterio, las Comunidades Autónomas que han regulado esta materia han tenido en cuenta este aspecto y

así lo han reflejado a lo largo de su articulado. Todas coinciden en la exigencia de que las acciones terroristas tengan o hayan tenido lugar en su territorio autonómico para que puedan acceder a las ayudas que conceden –consisten en la mayoría de ocasiones en un aumento del 30% de la cantidad concedida por la Administración central-. Sin embargo, salvo Madrid que actualmente sólo prevé este condicionamiento³⁹⁹, a partir de este requisito cada una ha considerado conveniente aumentar el número de exigencias o, alternativamente, han ofrecido otras opciones para recibir las prestaciones como puede ser que los afectados estén vinculados por razón de la vecindad o residencia. Concretamente se pueden sintetizar las exigencias adicionales del modo siguiente:

- En la Comunidad Valenciana es imprescindible aportar la condición de valenciano siempre que los hechos hayan ocurrido en territorio nacional o extranjero y, además, que el beneficiario no reciba ayuda del lugar donde se produjo⁴⁰⁰
- En Murcia debe cumplir el requisito relativo a la condición política de murciano en el caso de que las acciones hubiesen ocurrido ya sea en territorio nacional o en el extranjero⁴⁰¹

³⁹⁹ No obstante, en la Comunicación de 10 de enero de 2017 hecha por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se precisa que la futura ley sobre las víctimas del terrorismo *“amparará a quienes sufran daños como consecuencia de una acción terrorista, con independencia del lugar donde se haya cometido. En el caso de las acciones terroristas fuera de la Comunidad de Madrid, las personas físicas y jurídicas afectadas tendrán que acreditar su empadronamiento y residencia en la región durante, al menos, los cinco años anteriores a la entrada en vigor de la ley”*.

⁴⁰⁰ Concretamente, el art. 3 de la Ley 1/2004, de 24 de mayo, de ayuda a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Valenciana, establece los requisitos generales para poder acceder a las ayuda de la Comunidad Valenciana: *“a) que el atentado haya tenido lugar en el territorio de la Comunidad Valenciana o, cuando la víctima ostente la condición de valenciano o valenciana, en cualquier otro lugar del territorio español o extranjero, siempre que en este supuesto no hubiese percibido ayudas por el mismo concepto de la Comunidad Autónoma donde se hubiere perpetrado; b) que los daños sean consecuencia de un acto terrorista, cuando así sea considerado por las fuerzas o cuerpos de seguridad, o sea reivindicado por un grupo terrorista y que la autoridad judicial así lo ratifique mediante resolución; c) que los interesados se comprometan a ejercitar las acciones para la reparación de los daños que procedan, y a comunicar las ayudas que hubieran podido recibir por parte de otras administraciones o instituciones públicas o privadas”*.

⁴⁰¹ El art. 2 de la Ley 7/2009, de 2 de noviembre, de ayuda a las víctimas del terrorismo de la Región de Murcia explica que, *“1. La Ley serán de aplicación a las víctimas y demás personas físicas y jurídicas mencionadas en el artículo 4 de la Ley que resulten perjudicadas por los actos de terrorismo cometidos en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 2. También serán de aplicación a las víctimas y a las personas mencionadas en el artículo 4 de la Ley, que gocen de la condición política de murciano, en los términos previstos en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aún cuando hubieran acaecido en cualquier otro lugar del territorio español o en el extranjero”*.

- En Extremadura y Andalucía se establecen dos vías para solicitar las ayudas, o bien, que el hecho terrorista se haya cometido en su territorio y que, además, el posible beneficiario aún resida allí o, tenga la condición política de la comunidad⁴⁰²
- En Aragón se requiere la aportación la condición de aragonés si ha sufrido la acción terrorista en cualquier otro lugar –nacional o extranjero- para ser considerado beneficiario⁴⁰³
- En la Comunidad Foral de Navarra se solicita aportar la condición política en los casos en que el acto terrorista se hubiera llevado a cabo fuera de este territorio siempre que no haya recibido otra prestación económica⁴⁰⁴

⁴⁰² En el caso de Extremadura la Ley 6/2005, de 27 de diciembre, de medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo y de creación del centro extremeño de estudios para la paz de Extremadura, matiza en su art. 3 lo siguiente: *“1. Tendrán la consideración de beneficiarios de las medidas de asistencia y atención reguladas en la presente Ley, aquellos en que concurren los siguientes requisitos: 1.1. tengan la condición de víctima del terrorismo o familiar (...). 1.2. estén empadronados o se empadronen con posterioridad al hecho causante en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Extremadura (...). 2. También tendrán la consideración de beneficiarios: 2.1. quienes estén incluidos en el apartado 1.1. de este artículo aunque no residan en la Comunidad Autónoma de Extremadura, siempre que gocen de la condición de extremeñidad, en los términos establecido en el artículo 2 de la Ley 3/1986, de 24 de mayo, de la Extremeñidad (...). 2.2. quienes reúnan los requisitos previsto en el apartado 1.1. de este artículo, aunque no estén empadronados en ningún municipio de esta Comunidad, siempre que el acto o el hecho causante se haya producido en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, mientras permanezca en dicho territorio. 2.3. quienes hayan convivido de forma estable con la víctima y dependiendo de ella, aunque sin relación de parentesco, durante al menos los dos años inmediatamente anteriores a la fecha del acto o hecho causante, siempre que reúnan además el requisito previsto en el apartado 1.2. de este artículo”*. Por su parte, el art. 4 de la Ley 10/2010, de 15 de noviembre, relativa a medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, enumera los requisitos generales: *“a) que los daños ocasionados sean consecuencia de un acto terrorista, cuando así sea considerado por las fuerzas o cuerpos de seguridad, mediante certificación de la Delegación del Gobierno o declarado por resolución judicial (...); b) que la víctima ostente la condición política de andaluz o andaluza, en los términos previstos en el artículo 5 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Asimismo, tendrán la consideración de beneficiarios de tales medidas, aunque no tengan la condición política de andaluces o andaluzas, las víctimas de un acto producido en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, mientras permanezcan en dicho territorio (...); c) que los interesados se comprometan a ejercitar las acciones para la reparación de los daños que procedan, y a comunicar las ayudas que hubieran podido recibir por parte de otras administraciones o instituciones públicas o privadas”*.

⁴⁰³ El apartado 1 del art. 2 de la Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Aragón determina su ámbito de aplicación en los siguientes términos: *“La presente Ley será de aplicación a las víctimas y afectados de actos de terrorismo o de hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana, cometidos en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asimismo, se aplicará respecto de estos mismos hechos cuando se produzcan en cualquier otro lugar del territorio español o en el extranjero (...)”*.

⁴⁰⁴ Concretamente, la Ley Foral 9/2010, de 28 de abril de ayuda a las víctimas del terrorismo de Navarra, delimita que: *“1. La presente Ley Foral será de aplicación a las personas físicas o jurídicas que sufran daños*

- En el País Vasco se acepta la alternativa de justificar la residencia en su ámbito cuando el hecho causante se haya perpetrado fuera de sus límites⁴⁰⁵

En segundo lugar, el criterio relativo a la nacionalidad se presenta de modo alternativo a la territorialidad, con la finalidad no sólo de que tengan cabida aquellos que hayan sido objeto de una acción terrorista en España o en territorios bajo su jurisdicción, de manera que, también puedan acogerse a la regulación protectora todas las personas con nacionalidad española con independencia de su lugar de comisión, o, los participantes en operaciones de paz y seguridad que sean objetivo de una acción terrorista llevada a cabo por personas integradas o no en organizaciones o grupos criminales siempre y cuando se dirijan contra los intereses españoles.

Y, por último, el requisito de la temporalidad que consiste en que los hechos que dan origen a la consideración de beneficiario hayan ocurrido a partir del 1 de enero de 1960⁴⁰⁶. La elección de esta fecha responde a la voluntad del legislador de ofrecer una atención integral a los afectados por el terrorismo, por ello, no piensa solamente en los hechos futuros, sino que también pretende abarcar aquellos hechos que ocurrieron con anterioridad a la promulgación de la

en Navarra como consecuencia o con ocasión de atentados terroristas cometidos por personas integradas en bandas o grupos organizados y armados y sus conexos, con especial atención a aquellos cometidos por personas integradas en la banda terrorista ETA, siempre que aquellos actos sean reivindicados por dichos grupos u organizaciones terroristas, o que, de una interpretación armónica de los hechos antecedentes, coetáneos o posteriores, pueda deducirse racionalmente que los daños se han causado por tal actividad terrorista y así se determine en la forma prevista en el artículo 5.1.a) de esta Ley Foral. También será de aplicación a las personas físicas que sufran daños fuera del territorio de Navarra siempre que ostenten la condición política navarra durante la vigencia de esta Ley Foral y no hayan recibido ayudas por el mismo concepto de otra Comunidad Autónoma”.

⁴⁰⁵ Finalmente, la Ley 4/2008, de 19 de junio, de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, indica en el apartado 3 del art. 2 que: “*las medidas previstas en esta ley se aplicarán cuando los hechos se cometan en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi o cuando, pese a haber acaecido fuera del mismo, la persona afectada estuviera domiciliada en la Comunidad Autónoma de Euskadi. No obstante, las ayudas previstas en el capítulo I del título III de esta ley sólo serán aplicables en caso de acciones terroristas ocurridas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi”.*

⁴⁰⁶ Uno de los cambios más significativos del ámbito de aplicación respecto a la anterior Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las víctimas del terrorismo, es su ampliación temporal establecido en su art. 2,2 debido a que ésta sólo contemplaba indemnizar las acciones perpetradas durante el 1 de enero de 1968 hasta la entrada en vigor de este mismo texto legal que hubiesen ocasionado daños físicos o psicofísicos.

ley, incluso, podrá tener efecto retroactivo sobre los supuestos en cuanto hayan recibido indemnizaciones o ayudas por cuantía inferior conforme a la previsión legal actual. No obstante, las Comunidades Autónomas no han seguido al pie de la letra el establecimiento de este requisito pues en cuanto a él, si observamos las diversas redacciones pueden apreciarse con claridad tres tratamientos diferenciados. En primer lugar, las leyes del País Vasco y Navarra no delimitan un periodo concreto, mientras que, siguiendo la línea marcada por la antigua Ley 32/1999 de Solidaridad con las víctimas del terrorismo, las leyes aprobadas en la Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Andalucía tan sólo podrán acceder a las prestaciones los casos en que los hechos motivantes hayan ocurrido a partir del 1 de enero de 1968⁴⁰⁷ y, finalmente, Aragón y Madrid no señalan ningún periodo temporal al que atenerse⁴⁰⁸.

Los regímenes establecidos para las ayudas, resarcimientos, indemnizaciones y condecoraciones están destinados exclusivamente a aquellos que puedan acreditar la condición de afectado mediante dos vías: a) la sentencia firme que contemple el derecho a la indemnización en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños de la acción terroristas; b) las diligencias judiciales oportunas o que se haya incoado el proceso penal para su enjuiciamiento. La condición de víctima o derechohabiente, el grado de daños sufridos y la naturaleza de los hechos podrá hacerse constar por cualquier medio de prueba admisible en derecho ante la Administración General del Estado. En el caso particular de la acreditación de los afectados fuera del territorio español o en las operaciones de paz y seguridad que formen parte del contingente español se solicitará informe a los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Defensa y del Interior.

Sin embargo, además de las exigencias comunes anteriores, las legislaciones valenciana y andaluza, requieren a los interesados la constatación

⁴⁰⁷ Específicamente, la Comunidad Valenciana y Andalucía se refieren a los hechos causantes de daños físicos o psíquicos, mientras que la ley extremeña hace una remisión genérica a los hechos causantes sin que, como en los anteriores, se especifiquen las consecuencias de daños físicos o psíquicos y, por último, la ley de Murcia señala a las víctimas y afectados por hechos terroristas –por este matiz se entiende que es más restrictiva como la valenciana y la andaluza-.

⁴⁰⁸ GARCIA MENGUAL, F. La incorporación de la protección de las víctimas..., cit., p. 236.

de dos requerimientos formales como son, por una parte, la existencia de una relación causal entre los daños producidos con la actuación terrorista ya sea certificada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o la autoridad judicial y, alternativamente, también se acepta a estos efectos la vía de la reivindicación del grupo terrorista. Por otra parte, los afectados deben adquirir el compromiso tanto de ejercer las acciones pertinentes dirigidas a la reparación pos los daños que procedan, como de comunicar cualquier ayuda que puedan percibir procedente de las administraciones o de las instituciones pertenecientes al ámbito público o privado⁴⁰⁹.

3.7. Las víctimas directas y las víctimas indirectas

Antes de empezar a explicar en qué consisten las medidas de las políticas de protección y ayuda establecidas para la reparación de las víctimas del terrorismo conviene hacer una última parada en la clasificación habitual que se hace en esta materia a la hora de distinguir si nos encontramos ante víctimas directas o, en su caso, los sujetos pertenecen a la categoría de las denominadas víctimas indirectas. Esta alusión también resulta imprescindible ante el panorama actual caracterizado por la falta de consenso sobre el concepto de víctimas del terrorismo como ha puesto de manifiesto FERNANDEZ DE CASADEVANTE, a la vez que, la distinción que hace la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, sobre los titulares o beneficiarios de las prestaciones y las propias víctimas quizá no deba aceptarse de una manera rigurosa desde una perspectiva criminológica⁴¹⁰.

Es cierto que, parte de los autores se muestran a favor de incluir entre las víctimas a los individuos que han sufrido daños a consecuencia de la producción de hechos de carácter no intencional. Si bien, resulta discutible y problemática la conveniencia de incorporar la categoría de víctimas de catástrofes naturales o accidentales dentro del catálogo de víctimas directas o indirectas. Obviamente existe un denominador común a todas las modalidades de víctimas, con independencia de su naturaleza, consistente en la sensación de sufrimiento que

⁴⁰⁹ GARCIA MENGUAL, F. La incorporación de la protección de las víctimas..., cit., p. 238.

⁴¹⁰ MUÑOZ ESCANDELL, I. Los derechos de las víctimas del terrorismo..., cit., p. 41.

experimenta el afectado, pero a pesar de ello, una interpretación lógica conforme al significado criminológico de delito entendida como una conducta desviada o antisocial, nos invita a excluirlas por la propia exigencia que subyace a su entendimiento de transgresión de una norma social o legal intencionada realizada por un individuo, requisito que, como se puede observar, no se cumple en las catástrofes naturales o accidentes.

De manera que, en virtud de la posición que se sigue este trabajo, las víctimas directas son aquellas personas que han sufrido de manera directa la agresión, mientras que la víctima indirecta engloba a aquellas que padecen las consecuencias del daño a pesar de que no lo han experimentado en primera persona, o, dicho de otro modo, son las personas que padecen las consecuencias de un hecho traumático que ha recaído sobre una persona cercana a ellos –es decir, la víctima directa-. A estas últimas, hay que prestarles una especial atención debido a que son las grandes olvidadas de los sistemas de ayuda y, en consecuencia, el daño psicológico que pueden manifestar puede llegar a tener los mismos efectos que los producidos sobre la víctima directa. Este hecho tiene especial trascendencia en el tema que nos ocupa, sobre todo se puede apreciar perfectamente en los casos en que la víctima directa sobrevive al atentado o acción terrorista, pero se queda en una situación de incapacidad grave. Estas circunstancias pueden contribuir a la aparición de psicopatologías en la víctima indirecta especialmente cuando mantenga una convivencia estable y continuada con ella. La adscripción a esta postura entraña un inconveniente adicional en cuanto existen un número mayor de víctimas indirectas por la sencilla razón de que por cada víctima directa existen⁴¹¹:

- a) Testigos que estaban presentes en el momento en que ha tenido lugar el atentado sin que hayan sufrido menoscabo en su integridad física o bienes, incluso, quedan circunscritos a este grupo los integrantes de los dispositivos de ayuda inmediata en cualquiera de sus modalidades, ya se ocupen de organizar el rescate, atender a los heridos o recoger los cadáveres

⁴¹¹ ECHEBURUA ODRIÓZOLA, E. Y GUERRICAECHEVARRIA, C. Especial consideración de..., cit., p. 196.

- b) Aquellas personas que tienen relación de parentesco o consanguinidad con la víctima directa con independencia de que hayan presenciado la comisión del atentado

El interés del criminólogo en ambos tipos de víctima tiene su origen en la producción de la agresión. El acontecimiento traumático que conlleva se le ha comparado con la acción de tirar una piedra a un estanque. La fuerza con la que se emite este comportamiento genera la reacción inmediata de originar ondas sucesivas. Esta situación trasladada a nuestra materia de estudio implica que esas "ondas" no sólo afectan en primer lugar a la víctima estricta, sino que también provoca reacciones en su entorno principalmente el relativo al segundo grupo anterior⁴¹².

La onda expansiva que aparece tras el suceso traumático ejerce su acción siguiendo un patrón de círculos concéntricos, donde el primer círculo está constituido por las propias víctimas, pasa por el segundo círculo en el que los familiares de éstas tienen que hacer frente al dolor y readaptarse a la nueva vida que tienen por delante y, en su caso, podría haber un tercer círculo integrado por compañeros, entorno cercano o cualquier persona que puedan sentirse afectados ante la incertidumbre generada por eventuales riesgos posteriores de la misma entidad.

Al mismo tiempo, mantener un contacto directo y prolongado en el tiempo con una víctima que haya padecido un trauma grave puede conllevar el surgimiento de un clima imperado por un estresor crónico. Su influencia puede llegar hasta tal punto de convertirse en el responsable de un deterioro físico y psíquico favorecido por la convivencia con la víctima. De hecho, el conviviente puede desarrollar trastornos emocionales y ser considerada víctima secundaria como algunos autores proponen.

De acuerdo con la finalidad de esta investigación, se considera víctima directa a los sujetos que hayan sufrido cualquier tipo de agresión terrorista en

⁴¹² ECHEBURUA ODRIÓZOLA, E. Y GUERRICAECHEVARRIA, C. Especial consideración de..., cit., p. 196.

primera persona, mientras que, la víctima indirecta será primordialmente el allegado de aquélla siempre que mantenga una relación estable y cercana con la víctima. El problema de esta categorización es que, a simple vista, no encuentra una completa acomodación en las leyes de protección pensadas para este colectivo.

Como ya se ha puesto de relieve, tanto la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, como en el Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011, conceden la designación especial de víctima del terrorismo exclusivamente a las personas que puedan acreditar la producción de unos resultados tasados, esto es, fallecimiento o heridas de carácter físico o psíquico. Los demás individuos que pudieran resultar afectados los dirige a otras categorías, ya sea, de titulares o beneficiarios de ayudas o prestaciones, o bien, al grupo que requiere una especial atención. En definitiva, el legislador vincula esta consideración a la producción de los daños más graves que puedan experimentar la persona en su propio cuerpo a consecuencia de una acción terrorista.

A pesar de contener una definición de acciones terroristas que apunta hacia una inclusión de múltiples categorías entre sus posibles víctimas directas, pues podríamos pensar que tienen cabida no sólo las personas heridas o fallecidas sino también los ilesos, amenazados, coaccionados o secuestrados, subyace una interpretación sumamente restrictiva del mismo texto legal estatal conforme a la cual solamente se aceptan bajo la denominación víctimas del terrorismo a los heridos como consecuencia de daños de carácter físico o psicológico y los fallecidos –a los familiares de estos últimos se le concede la misma consideración exclusivamente a efectos honoríficos por lo que no quedaría estrictamente comprendidos aquí-. Una de las razones que puede explicar la decisión de excluir a los ilesos, amenazados y coaccionados de esta denominación puede ser la necesidad de acotar el número de víctimas oficiales en la medida en que su inclusión tendría un reflejo en el régimen indemnizatorio y sistema de protección establecidos al respecto, aumentando considerablemente el número

de casos a atender y correlativamente la capacidad de respuesta del Estado – salvo los secuestrados que sí tienen derecho a resarcimiento económico-.

A lo largo de las disposiciones se determina que los ilesos y aquellos que ostentan la condición de amenazados se les concederá la acción honorífica en grado de Insignia, mientras que a las personas secuestradas se les otorgará el grado de Encomienda. Más allá de la vertiente reconocimiento y condecoraciones, las personas que acrediten vivir situaciones de amenazas o coacciones sufridas de manera directa y reiterada en su vida diaria que proceda de las organizaciones terroristas, las Administraciones Públicas les prestarán una especial atención. Con este propósito se prevé en el apartado 4 del art. 42 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011, la posibilidad de destinar ayudas a los amenazados a fin de facilitarles el traslado de localidad, el abandono de su residencia, los gastos de escolarización y cualquier otro tipo de gastos derivados de esta situación.

Concretamente este punto se ha desarrollado en algunas legislaciones autonómicas como en el País Vasco. Llama la atención el precepto referido a la prevención de sistemas de seguridad, pensado para aquellas personas ya sean físicas o jurídicas que, siendo objeto de amenazas, coacciones o acoso se vean obligadas por razones de seguridad a instalar medidas o sistemas para garantizar su protección en sus viviendas, establecimientos o vehículos. La idoneidad de su instalación será informada por el órgano competente en materia de seguridad del País Vasco, si su resultado es favorable los poderes públicos podrán sufragar sus costes derivados de una necesidad de seguridad o de una situación de riesgo invertidos en los bienes muebles e inmuebles de personas físicas o jurídicas⁴¹³.

Las medidas constitutivas de los sistemas de seguridad que en la ley se articularon junto a los daños, en el reglamento se han regulado en un capítulo aparte en el que además se establece su procedimiento propio. La subvención de carácter no reintegrable, consiste en el abono de un porcentaje de la

⁴¹³ Art. 17 de la Ley 4/2008, de 19 de junio, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo, y los arts. 16 a 19 del Decreto 290/2010, de 9 de noviembre, de desarrollo del sistema de asistencia integral a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

instalación del sistema de seguridad siempre que no supere los 100.000 euros por beneficiario. Esta subvención no abarcará la instalación de aquellas medidas obligatorias por ley. El procedimiento para su concesión consta de tres fases, la presentación de la solicitud, la instrucción y la resolución. En la primera de ellas, al igual que ocurre en el procedimiento general de resarcimiento de daños, la solicitud del interesado irá acompañada de los datos y documentos exigidos⁴¹⁴. Si se diera el caso de que faltara alguno en la solicitud, se le requerirá que subsane. En la fase relativa a la instrucción, la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo procederá en sus actuaciones de una manera similar que en el procedimiento destinado al resarcimiento de daños genéricos, esto es, comprobará los hechos y datos alegados pudiendo solicitar documentación complementaria; pese a que, tras comprobar todos los datos requerirá un análisis de la situación de riesgo con su correspondiente informe sobre la existencia de una situación de acoso, amenaza o coacción relacionada directamente con las acciones terroristas y la idoneidad de las medidas de seguridad solicitadas a la Viceconsejería de Seguridad del Departamento de Interior. Este órgano tendrá un plazo de un mes para elaborar el informe oportuno al que se le atribuye un carácter preceptivo y vinculante. Finalmente, teniendo en cuenta la instrucción la Dirección dictará y notificará la resolución en el plazo máximo de dos meses. Si transcurrido el plazo no se tuviera constancia de la resolución ni de la notificación la solicitud se estimará favorable.

Pese a que con mayor o menor acierto se prevén medidas destinadas al reconocimiento y reparación de los afectados –como se puede ver por ejemplo con las que les corresponden a los amenazados- en función de la entidad de los daños que puedan presentar con independencia de la denominación que reciban,

⁴¹⁴ En este caso, el art. 17 de la Ley 4/2008, de 19 de junio, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo, exige la presentación de los siguientes datos y documentos: “a) *Copia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento acreditativo de su personalidad.* b) *Relación de medidas de seguridad a implantar y su presupuesto.* c) *Importe de las ayudas que hubiera recibido por parte de otras administraciones o instituciones públicas o privadas, o declaración por la que se compromete a comunicarlas.* d) *Compromiso de facilitar cuantas actuaciones de fiscalización se promuevan desde los órganos competentes de la Comunidad Autónoma en esta materia.* e) *La documentación específica que, en función de la ayuda solicitada, se señale en el correspondiente modelo normalizado de solicitud que se pondrá a disposición de los solicitantes en la página web www.euskadi.net.”.*

ya sea víctima, titular, afectado o sujeto a quien le corresponde una especial atención, todas ellas presentan los requisitos necesarios para incluirse dentro de las categorías de víctima directa o víctima indirecta y, por lo tanto, son objeto de interés de la ciencia criminológica.

La razón de ampliar los límites de la figura victimal y, consecuentemente, incluir a los grupos señalados reside en que todos y cada uno de estos afectados se han visto involucrados en primera persona en una actuación terrorista, ya sean agresiones directas o amenazas⁴¹⁵, tiene su fundamento en la redacción de las disposiciones legales. En ellas, la acción subyacente al fenómeno terrorista se define como *"la llevada a cabo por personas integradas en organizaciones o grupos criminales que tengan por finalidad o por objeto subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública"* e igualmente *"cuando sus responsables no sean personas integradas en dichas organizaciones o grupos criminales"*⁴¹⁶. El énfasis de esta descripción no reside tanto en la pertenencia

⁴¹⁵ El art. 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, establece que: *"Las personas que acrediten, en los términos del artículo 3 bis de la Ley, sufrir situaciones de amenazas o coacciones directas y reiteradas, procedentes de organizaciones terroristas, serán objeto de especial atención, en el marco de sus competencias por parte de las Administraciones Públicas"*; mientras que, la condición de ilesos tan sólo aparece en el título sexto dedicado a los reconocimientos y condecoraciones, especificando en el apartado 2 del art. 52 lo siguiente: *"Esta acción honorífica se otorga con el grado de Gran Cruz, a título póstumo, a los fallecidos en actos terroristas; con el grado de Encomienda, a los heridos y secuestrados en actos terroristas; y con el grado de Insignia, a los que tengan la condición de amenazados, a los ilesos en atentado terrorista, así como al cónyuge del fallecido o persona ligada con él por análoga relación de afectividad, los padres y los hijos, los abuelos, los hermanos y los nietos de los fallecidos, así como a los familiares de los heridos que hayan sufrido lesiones incapacitantes en sus distintos grados hasta el segundo grado de consanguinidad"*.

⁴¹⁶ En el mismo sentido que el art. 3 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, se ha descrito la acción terrorista abarcando a las personas integradas o no en bandas terroristas o similares en las leyes andaluza y vasca. En la primera, la Ley 10/2010, de 15 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía *"se entiende por acción terrorista la llevaba a cabo por personas integradas en bandas o grupos armados que actúen con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública y la seguridad ciudadana. Igualmente se entenderá incluidos los actos dirigidos a alcanzar dicha finalidad aun cuando sus responsables no estén formalmente integrados en bandas o grupos terroristas"* en su art. 4. Por su parte, en la Ley 4/2008, de 19 de junio, del País Vasco se establece en su art. 2 que *"la acción terrorista o la acción de personas que, integradas en bandas o grupos armados, actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana. Será aplicable igualmente aun cuando los responsables de esas acciones no estén formalmente integrados en grupos o bandas constituidas con tal fin pero tengan el mismo propósito"*. Sin embargo, la redacción del texto legal estatal ha ampliado los responsables de la acción terrorista ya que, con anterioridad, las regulaciones no contemplaban a las personas no integradas en estas organizaciones, quedando, por tanto, excluidas. En este sentido, el art. 1 la Ley 32/1999, de 8 de octubre, definía a los actos de terrorismo como *"hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana"*, con la misma redacción aparece en el art. 2 de la Ley 4/2008, de 17 de junio, de Aragón y,

de la persona a un grupo terrorista, sino que con ocasión de la acción o agresión terrorista se persiga la finalidad de perturbar el orden constitucional, la paz o seguridad ciudadana.

A efectos criminológicos cada uno de ellos atraviesa un tipo de proceso de victimización y, de aquí, deriva la necesidad de incorporar todas las categorías dentro de las llamadas víctimas directas o indirectas –estas últimas las integrarán los familiares de las víctimas directas, los afectados-. Lógicamente en todas las categorías subsiste una acción o agresión, incluso, en los supuestos de amenazas también se cumple esta premisa en cuanto debe existir una acción de amenazar. Si bien, lógicamente cada tipo de acción terrorista puede afectar una esfera personal del individuo sin que queda considerar que haya primacía de unos ámbitos de la persona sobre otros. No es lo mismo, la afección a la integridad física o psíquica prioritariamente vulnerada por un ataque directo mediante la acción terrorista –aquí los daños se constatan-, que una amenaza, la cual provoca un sentimiento de vulnerabilidad e indefensión en su propia libertad. De este modo, el proceso de victimización y desvictimización de unas y otras es diferente atendiendo a las peculiaridades de cada tipo.

posteriormente, en el año 2010, el art. 2 de la Ley Foral 9/2010, de 28 de abril, de Navarra se refirió a “*los atentados terroristas cometidos por personas integradas en bandas o grupos organizados y armados y sus conexos*”. Previamente a la promulgación de estas dos leyes, la Ley 12/1996, de 19 de diciembre, de Madrid, contempló la misma visión restrictiva en su art. 1 en los siguientes términos “*actividades delictivas por bandas armadas o elementos terroristas*”. Finalmente, merece la pena destacar que el Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo en su art. 2 sólo menciona las acciones cometidas” por *organizaciones y elementos terroristas*” a pesar de que la ley que desarrolla ya había ampliado su catálogo en este aspecto.

CAPÍTULO 4. POLITICAS DE PROTECCION, AYUDA Y ASISTENCIA A

LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Con carácter previo a abordar el análisis de las políticas de protección conviene recordar que lo característico de los derechos fundamentales es que son derechos subjetivos creados por la Constitución, esto es, preexistentes a su configuración y delimitación legislativa. Debido a tal origen se imponen al legislador en cuanto ofrecen resistencia a una intervención legislativa que pretendiese llevarse a cabo, en exclusiva, según consideraciones ordinarias de utilidad pública o interés general. Es decir, son derechos y valores contramayoritarios, pues no basta una mayoría legislativa reforzada para definir sus contornos. El art. 53.1 CE recuerda a los poderes públicos, singularmente al poder legislativo que nos representa, que la ley que pretenda regular el ejercicio de un derecho fundamental "*deberá respetar su contenido esencial*".

Al vincular a los poderes públicos, esto es, al legislador, los derechos fundamentales son origen inmediato de derechos y obligaciones y no meros principios programáticos o declaraciones bienintencionadas, no existiendo más excepciones a este principio de aplicación inmediata que las que imponga la misma CE expresamente, o bien las que se deduzcan ineludiblemente de la naturaleza misma de la norma. Los derechos fundamentales son, por tanto, verdaderos derechos subjetivos que permiten a su titular su exigencia ante los tribunales frente a los poderes públicos cuando dicho derecho sea conculcado. Es decir, los derechos fundamentales desarrollan constitucionalmente frente al poder público una eficacia vinculante que tiene carácter inmediato y directo.

La eficacia constitucional de los derechos tiene del mismo modo una proyección mediata en tanto que con su reconocimiento y protección no sólo se trata de garantizar el respeto de los poderes públicos o los derechos fundamentales sino también de funcionalizarlos al mismo, esto es, de conseguir su plena efectividad, por lo que la acción de los poderes públicos, ha de estar orientada a hacerla posible. En este sentido, ha dicho el Tribunal Constitucional que *“los derechos fundamentales no incluyen solamente derechos subjetivos de defensa de los individuos frente al Estado, y garantías institucionales, sino también deberes positivos por parte de éste (...). Pero, además, los derechos fundamentales son los componentes estructurales básicos, tanto del conjunto del orden jurídico objetivo como de cada una de las ramas que lo integran, en razón de que son la expresión jurídica de un sistema de valores, que, por decisión del constituyente, ha de informar el conjunto de la organización jurídica y política; son, en fin, como dice el artículo 10 de la Constitución, el «fundamento del orden jurídico y de la paz social». De la significación y finalidades de estos derechos dentro del orden constitucional se desprende que la garantía de su vigencia no puede limitarse a la posibilidad del ejercicio de pretensiones por parte de los individuos, sino que ha de ser asumida también por el Estado. Por consiguiente, de la obligación del sometimiento de todos los poderes a la Constitución no solamente se deduce la obligación negativa del Estado de no lesionar la esfera individual o institucional protegida por los derechos fundamentales, sino también la obligación positiva de contribuir a la efectividad de tales derechos, y de los valores que representan, aun cuando no exista una pretensión subjetiva por parte del ciudadano. Ello obliga especialmente al legislador, quien recibe los derechos fundamentales «los impulsos y líneas directivas», obligación que adquiere especial relevancia allí donde un derecho o valor fundamental quedaría vacío de no establecerse los supuestos para su defensa”. (STC 53/1985, FJ 4 y, en el mismo sentido, SSTC 129/1989 y 181/2000).*

En este contexto y en virtud del homenaje, reconocimiento, respeto y solidaridad hacia todos los afectados por el fenómeno terrorista, se promulgó la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, cuyo fin último consiste en ofrecer un apoyo integral

vital a éstos en su proceso de reparación. La pretendida reparación, concebida al servicio principalmente de las víctimas, titulares, afectados y sujetos a quienes les corresponde una especial atención –o en términos criminológicos, la víctima directa y la víctima indirecta-, no está en modo alguno limitada al resarcimiento puramente económico, sino que se extiende también a las dimensiones moral, política y jurídica asentadas todas ellas sobre los principios básicos de memoria, dignidad, justicia y verdad.

El texto legal desarrolla esta finalidad y así se indican como tales las siguientes: "a) *Reconocer y promover la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo y asegurar la reparación efectiva y la justicia con las mismas.* b) *Dotar de una protección integral a las víctimas del terrorismo.* c) *Resarcir a las víctimas, mediante las indemnizaciones y ayudas previstas en la Ley, de los daños personales y materiales sufridos como consecuencia de la acción terrorista.* d) *Fortalecer las medidas de atención a las víctimas del terrorismo, dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito de la protección social, los servicios sociales y sanitarios.* e) *Reconocer los derechos de las víctimas del terrorismo, exigibles ante las Administraciones Públicas, y así asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto.* f) *Establecer mecanismos de flexibilización y coordinación en el conjunto de trámites administrativos que son precisos para obtener las indemnizaciones, ayudas y prestaciones previstas en la Ley.* g) *Establecer un marco específico en el tratamiento procesal de las víctimas, especialmente en los procesos en los que sean partes. Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra el terrorismo.* h) *Reconocer y apoyar a las personas objeto de amenazas y coacciones de los grupos terroristas y de su entorno*".

Cabe apreciar una evidente similitud entre los fines enumerados por la legislación estatal y las progresivamente desarrolladas a lo largo de los años en las normativas autonómicas. Las Comunidades Autónomas han introducido medidas a favor de este colectivo mediante dos vías, por una parte, la Comunidad Valenciana, Aragón y Andalucía cuyos Estatutos de Autonomía son posteriores al

año 2006, han incorporado a los mismos un catálogo de derechos inherentes a los ciudadanos a la vez que subrayan unos principios rectores que deben regir la actuación de los poderes públicos. Aprovechando esta configuración, los respectivos legisladores autonómicos han hecho referencia expresa a las víctimas del terrorismo. No obstante, las Comunidades Autónomas que no han optado por la vía descrita, han apelado a títulos competenciales propios en materia de asistencia y bienestar social, sanidad y educación, entre otros, debido a que los programas destinados a ellas suelen estar directamente relacionados con estas materias⁴¹⁷.

Un intento de sistematización de los derechos reconocidos en tal prolija y diversa normativa autonómica permite tener como referente la ley 4/2008 del País Vasco, pues, en la medida en que, el impacto terrorista ha sido mayor en su territorio, enuncia con una mayor claridad y precisión los valores que protegen a las víctimas. Centrándonos en la normativa vasca, cabe recordar que ya en el año 1988 la administración autonómica vasca implementó por primera vez medidas para reducir los efectos del terrorismo, en concreto, un programa de ayudas destinado a sus afectados y, tras él, se sucedieron múltiples modificaciones en esta materia. Posteriormente, el Decreto 214/2002 de 24 de septiembre, incorporó al sistema de ayudas novedades que mejoraron su tutela y protección. Los mecanismos utilizados para lograr este fin se materializaron en la efectiva inserción laboral, la atención a las necesidades especiales relativas a la vivienda, la ampliación sobre las ayudas del ámbito educativo y, asimismo, se elevaron las cuantías indemnizatorias⁴¹⁸.

Con el transcurso del tiempo, la experiencia en la aplicación de este programa junto con la paulatina concienciación de la sociedad vasca en la necesidad de implementar medidas para favorecerles el día a día⁴¹⁹ y la necesidad

⁴¹⁷ GARCIA MENGUAL, F. La incorporación de la protección de las víctimas..., cit., pp. 231-233.

⁴¹⁸ Exposición de Motivos de la Ley 4/2008, de 19 de junio, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo.

⁴¹⁹ En el Plan de Paz y Convivencia del año 2006, el propio Gobierno Vasco señaló que *“para nuestra sociedad, la violencia terrorista es un anacronismo incompatible con el compromiso ético y con las prioridades vitales de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Responder positivamente a este clamor social y dar satisfacción a los deseos de la sociedad vasca para superar definitivamente la etapa de conculcación de los derechos humanos y mejorar la convivencia, ha sido el norte de la acción de este*

de evaluar la efectividad del programa en aras a conseguir la solidaridad, reconocimiento y homenaje público a su colectivo, aconsejaron la comprobación en términos de efectividad de este programa a fin de alcanzar un mayor perfeccionamiento en su regulación. Fruto de ese proceso de revisión nace la ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo la cual surge con la vocación de fortalecer el compromiso adquirido con las víctimas y con el resto de la ciudadanía vasca para garantizar la futura convivencia que deberá ser construida sobre la memoria de las víctimas, dejando atrás los olvidos, la invisibilidad y la incompreensión⁴²⁰.

La ley está articulada alrededor de dos ejes, el primero, relativo a las medidas sistematizadas acerca de las cuestiones materiales y asistenciales, aunque, la novedad se encuentra en la segunda dimensión. Inspirados en los documentos internacionales de Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la Unión Europea sobre la protección de las víctimas ante las violaciones graves de los derechos humanos y la práctica y la jurisprudencia internacional que han demostrado que, incluso, grupos privados aparte del aparato estatal pueden cometer violaciones graves de los derechos humanos, han elaborado un conjunto de derechos de las víctimas desde las perspectivas ética y política. Los afectados por el terrorismo, por tanto, se consideran víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, que cuenta con más de un millar de personas asesinadas y violaciones constantes de derechos esenciales inherentes a la vida, la integridad ya sea física o psíquica, la libertad de expresión o la seguridad personal. Desde esta concepción de sujetos de derechos, la ley ha estipulado su contenido programático atendiendo en cada modalidad a sus destinatarios⁴²¹:

Proyecto. Queríamos plasmar, de forma precisa y evaluable, el compromiso que asumió este Gobierno con una sociedad que nos exige ser un agente activo en favor del respeto a los derechos humanos y la convivencia”.

⁴²⁰ Exposición de Motivos de la Ley 4/2008, de 19 de junio, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo.

⁴²¹ Exposición de Motivos de la Ley 4/2008, de 19 de junio, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo.

- Los derechos de las víctimas: justicia, dignidad, reconocimiento y reparación
- Los derechos compartidos entre las víctimas y los miembros de la sociedad: la verdad, la memoria y su significación política
- Los derechos de la ciudadanía vasca: la paz, libertad y convivencia

Asimismo, esta clasificación jurídica puede interpretarse desde la perspectiva de su incidencia en aras a disminuir, mantener o prevenir las victimizaciones que son los procesos que les interesan a los criminólogos. De tal forma que los podemos enunciar a efectos criminológicos del siguiente modo:

- De acuerdo con los efectos derivados de la victimización primaria del fenómeno terrorista, los derechos a la verdad y a la reparación contribuyen a averiguar qué ha pasado, cuáles han sido sus consecuencias y qué tipo de reparación les corresponde
- Por su parte, los derechos al reconocimiento y a la justicia son clave frente a la aparición y mantenimiento de la victimización secundaria que surge a raíz del contacto con el aparato burocrático. El reconocimiento de las instituciones puede favorecer la superación de este estadio
- Finalmente, la victimización terciaria se puede hacer frente con las medidas integradas en los derechos a la dignidad y a la memoria que persiguen el reconocimiento social de los afectados

Llegados a este punto, procede abordar el contenido de los derechos de las víctimas y los derechos que comparten éstos con los miembros de la sociedad. A pesar de la importancia manifiesta de los derechos propios otorgados a la ciudadanía vasca, esto es, la paz, libertad y convivencia, su tratamiento excede de la pretensión de este estudio, si bien, en la medida en que se logre la reparación integral de las víctimas correlativamente podría conseguirse un clima de paz, libertad y convivencia.

4.1. Derecho a la verdad

En el mismo nivel la legislación autonómica vasca hace referencia a los derechos relativos a la verdad y a la memoria cuya titularidad corresponde expresamente no sólo a los individuos afectados de un modo directo por el terrorismo sino también a todos los integrantes de la sociedad, por ello, el legislador especifica que ambos pertenecen a la categoría de los derechos en el sentido de derechos compartidos⁴²². En cuanto al primero enuncia el derecho a conocer los hechos ocurridos a raíz de la necesidad básica humana de saber con exactitud cuáles han sido las violaciones de los derechos humanos que se han producido mediante las acciones terroristas. Si bien, junto con ella, implica delimitar las verdaderas causas de victimización y, en consecuencia, favorecer su posterior reconocimiento institucional y social⁴²³.

La distinción fundamental entre ambos derechos reside en que la verdad supone la obtención de unos datos objetivos mientras que la memoria se enfoca hacia la mirada de la víctima sobre aquéllos. De hecho, la verdad centra sus esfuerzos en la determinación de los hechos y así lo explica IGLESIAS con las siguientes palabras *"... no es un ladrillo que arrojar a la cabeza del contrario sino una efusiva reconstrucción de cada momento histórico lo más honesta posible intelectualmente, en función de los datos investigados que se posean, que se brinda al lector o al estudioso, al ciudadano en suma, de forma que, además del conocimiento en sí del pasado, en la mayor medida de lo posible, tenga, si así lo*

⁴²² Según el punto 17 del informe final revisado elaborado por JOINET acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos de acuerdo con la resolución 1996/119 de la Subcomisión: *"no se trata sólo del derecho individual que toda la víctima o sus familiares tienen a saber lo que ocurrió, que es el derecho a la verdad. El derecho a saber es también un derecho colectivo que hunde sus raíces en la historia, para evitar que puedan reproducirse en el futuro de las violaciones. Como contrapartida, al Estado le incumbe, el <<deber de recordar>>, a fin de protegerse contra esas tergiversaciones de la historia que llevan por nombre revisionismo y negacionismo; en efecto, el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y debe por ello conservarse. Tales son los principales objetivos del derecho a saber como derecho colectivo"*. Disponible en:

http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/principios_sobre_impunidad_y_reparacione_s.pdf. (Consultado el día 05/04/2017).

⁴²³ Exposición de Motivos de la Ley 4/2008, de 19 de junio, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo.

quiere, elementos para poder decidir su propia postura en el presente y su elección para el futuro: lo que de ninguna manera tiene que volver a repetirse". En cambio, la memoria añade la experiencia de la víctima y esta es la razón por la que MATE indica "lo que la víctima añade al conocimiento de la realidad es la visión del lado oculto o, mejor, del lado ocultado, silenciado, privado de significación". A fin de clarificar esta idea continúa manifestando que "podemos hacernos la idea de ese plus si traemos a cuento la reflexión del vecino de a pie en el País Vasco: no si aquí no pasa nada, son cosas de la prensa que exagera. Para la víctima las cosas son diferentes y su mirada no es exagerada: descubre que cualquiera que piense o actúe de una determinada manera está expuesto en el País Vasco. Las víctimas y los espectadores pueden mirar lo mismo y ver cosas diferentes"⁴²⁴.

En este contexto, con la finalidad última de contribuir a la recuperación de la víctima y su entorno, se contemplan en el texto legal las siguientes medidas relativas al derecho a la verdad: 1) garantizar su recuerdo y reconocimiento, contando en la medida de lo posible, con la presencia y participación de los propios afectados; 2) facilitar que las víctimas y sus familiares puedan, siempre que quieran, acceder a los archivos oficiales en los que consten datos o información ya sea para la defensa de sus derechos o con la finalidad de investigación histórica; 3) conseguir la identificación personal de la víctima en los supuestos en que no se haya identificado o su paradero no conste. Mientras que, en los supuestos en que constara el fallecimiento, se facilitará a los interesados la información del lugar en el que fue enterrado⁴²⁵.

Es cierto que, mediante estos medios se pretende que las víctimas obtengan su recuperación, no obstante, la primera medida responde de una manera más estricta al derecho al reconocimiento que integra un conjunto de estrategias frente a la victimización secundaria. Por el contrario, la consulta de los archivos oficiales y la identificación de la víctima sí que constituyen vías para

⁴²⁴ VARONA, G., LAMARCA, I., LÓPEZ DE FORONDA, F., PAGOLA, A. Y OCA, N. Atención institucional a las víctimas..., cit., p. 277.

⁴²⁵ Art. 7 de la Ley 4/2008, de 19 de junio, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo.

garantizar el derecho a la verdad y, en suma, se puede afirmar que ambos son mecanismos puestos a disposición de los afectados con el objetivo de prevenir la aparición o superar la victimización primaria.

4.1.1. Significado del derecho a la verdad

El significado del derecho a la verdad ha ido evolucionando para abarcar todos sus posibles ámbitos de aplicación, esto es, se han ido incorporando progresivamente los aspectos y las circunstancias básicas que precisan conocer las víctimas o los afectados por las violaciones de los derechos humanos. Inicialmente se dirigió únicamente a conocer la suerte y el destino de las personas desaparecidas, aunque, con posterioridad, se han añadido otros elementos a fin de comprender todas las situaciones de violaciones graves de los derechos humanos que no sólo tuvieran el resultado de fallecimiento. Sobre esta cuestión el Alto Comisionado de las Naciones Unidas matiza que conlleva el derecho a solicitar y obtener la información sobre los cinco aspectos siguientes: las causas que han motivado el trato injusto que han percibido las víctimas; los progresos y los resultados de la investigación; las circunstancias en las que se produjeron las violaciones de los derechos humanos; la suerte y el paradero de las víctimas en los supuestos de fallecimiento o desaparición; y, por último, la identidad de los autores⁴²⁶.

De modo que, actualmente y en el escenario del fenómeno terrorista en que nos encontramos, *"el derecho a la verdad entraña tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones perpetradas y su motivación"*⁴²⁷ o, formulado de otro modo, qué tipo de vulneraciones de derechos humanos han cometido los terroristas a través de sus actuaciones, quiénes han llevado a cabo estas acciones, cuáles han sido sus motivaciones, las condiciones y circunstancias contextuales de la actuación

⁴²⁶ Punto 38 del Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el Estudio del derecho a la verdad.

⁴²⁷ MUÑOZ ESCANDELL, I. Los derechos de las víctimas del terrorismo..., cit., pp. 92-98.

terrorista, y, para finalizar, quiénes han sido las víctimas y las consecuencias que han padecido y sus circunstancias.

El alcance del derecho a la verdad que integra la información sobre los hechos ocurridos y sus circunstancias, sus autores y las víctimas debe trascender de la órbita individual de los afectados para conseguir un impacto social, debido a que, no sólo puede quedarse en la esfera privada de las víctimas, sino que debe proyectarse hacia el resto de la sociedad para que sea reconocida oficial y públicamente⁴²⁸.

Con todo ello, resulta evidente que se estará facilitando la finalidad última de la reparación de la víctima que conlleva, al mismo tiempo tal y como se recomienda desde instancias internacionales, implantar medidas de satisfacción que puede incluir todas o parte de las medidas siguientes⁴²⁹:

- la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad
- la búsqueda de las personas desaparecidas
- la declaración oficial que restablezca la dignidad

⁴²⁸ Este reconocimiento, para BARAHONA DE BRITO, *“devuelve a las víctimas a la sociedad, que reconoce su sufrimiento, proporcionándoles una forma de justicia distributiva o social, y proporcionando recursos no convencionales tales como la toma de conciencia social, la memoria colectiva, la solidaridad y la superación de la baja autoestima”*; en GOMEZ ISA, F. *“Verdad, justicia y reparación para las víctimas por violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos”*, en GOMEZ ISA, I., ETXEBARRIA MAULEON, X., ETXEBARRIA ZARRABEITIA, X., PEREZ MACIAS, I. Y ECHEBURUA, E. *Justicia, verdad y reparación de los derechos de las víctimas a las tareas de la sociedad*, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2014, p. 14.

⁴²⁹ El punto 22 de los Principios y directrices sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparación adoptados por la Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005, establece literalmente lo siguiente: *“La satisfacción ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o parte de las medidas siguientes: a) Medidas eficaces para conseguir la cesación de las violaciones continuadas; b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad; d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades; f) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones; g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas; h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles”*.

- una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos

En efecto, en la medida en que los poderes públicos consigan cumplir con los aspectos reseñados favorecerán la superación del estadio de la victimización primaria al quedar constatado que ellas son las víctimas y, consecuentemente, es un paso importante para lograr la plena recuperación de la víctima.

4.1.2. Mecanismos para hacer efectivo el derecho a la verdad

La víctima del terrorismo en cuanto reúne la condición de víctima de vulneraciones de los derechos humanos tiene derecho a acceder y consultar los datos que consten en los procedimientos que se realizaron para esclarecer los hechos e identificar a los autores de las agresiones. De ahí que la verdad esté estrechamente relacionada con el derecho a la justicia porque la investigación efectiva, completa e imparcial, el proceso y el resultado del mismo que evite la ausencia de la impunidad constituye la vía para determinar los hechos, las víctimas y declarar la responsabilidad de los autores públicamente⁴³⁰.

En este sentido, íntimamente vinculado con la obtención de la información y datos se encuentran las tareas encomendadas a la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, cuyas funciones se centran en⁴³¹:

- Proporcionar cualquier referencia al estado en que se encuentre el proceso en el que esté interesado por su condición de víctima
- Asesorar acerca del curso y los pasos que se deben seguir en los procesos tanto penales como contencioso-administrativos en que se vean incursos a causa del fenómeno terrorista

⁴³⁰ VARONA, G., LAMARCA, I., LÓPEZ DE FORONDA, F., PAGOLA, A. Y OCA, N. Atención institucional a las víctimas..., cit., p. 276.

⁴³¹ Art. 51 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

- Ofrecer el acompañamiento personal al afectado durante la celebración del procedimiento penal cuyo origen sea la acción terrorista
- Durante la participación de las víctimas en los procesos judiciales se les asegurará su seguridad e intimidad de tal forma que se garantice su protección frente a las injerencias ilegítimas, actuaciones de intimidación, represalia, ofensa o que presenten connotaciones denigrantes hacia ellas
- Facilitar diversas vías de comunicación con la víctima sobre la ejecución penitenciaria inclusive el momento del cumplimiento íntegro de la condena. Se le dará traslado especialmente en los supuestos de concesión de beneficios penitenciarios o la excarcelación de los penados

En la actualidad, esta Oficina está creando una base de datos que contenga la información sobre todas las víctimas del terrorismo y la identificación de su causa judicial con la finalidad de facilitarles, cuando lo precisen y así lo requieran, la información del procedimiento. La creación de la base de datos es el primer paso para cuantificar las victimizaciones derivadas del fenómeno terrorista y ofrecer los datos oficiales de España: *"cuántas personas han perdido su vida, han sufrido lesiones de diverso grado, han sido amenazadas, secuestradas, coaccionadas, cuántos hubieron de abandonar sus lugares de residencia, etcétera, en orden a la satisfacción del derecho a la verdad de las víctimas del terrorismo y sus familiares, así como en aras de la conservación de la memoria histórica"*. Ambas actuaciones de la Oficina de Asistencia a las Víctimas se han puesto en marcha al detectar que, algunas víctimas que en un primer momento no quisieron participar en el proceso penal si, con posterioridad, se han interesado en obtener información y así se lo han transmitido a la Administración, ésta no tiene los datos suficientes para identificar su causa judicial y, por lo tanto, no han podido acceder a la información a la que tienen derecho⁴³².

⁴³² Así lo puso de manifiesto la Oficina de Asistencia e información a las Víctimas del Terrorismo en el informe que elaboró en enero de 2016. En él se explicó que *"en términos generales, la víctima del terrorismo a lo largo del tiempo ha permanecido desinformada acerca del proceso penal en el que se encontraban afectos sus derechos [...]". Si la víctima que en un primer momento no se decidió a participar en el proceso penal por miedo o por hallarse aún bajo los efectos del shock a causa del atentado sufrido,*

Ni siquiera existe un registro oficial sobre las causas por los delitos de terrorismo pues se encuentran dispersos en los archivos de las diversas Administraciones y, por ello, es imposible vincular los casos judiciales para ese ilícito con las víctimas lo que dificulta, en consecuencia, la garantía del derecho a la verdad⁴³³.

Además, desde el ámbito internacional se insiste en que el Estado tiene el deber de preservar los archivos que contengan los datos de los hechos ocurridos y la información sobre los agresores y las víctimas en los supuestos de violaciones de los derechos humanos, y a este respecto, los poderes públicos deberían⁴³⁴:

- Adoptar medidas a fin de impedir la sustracción, destrucción y desviación de la información y, por tanto, de asegurarla a lo largo del tiempo
- Elaborar un registro de los archivos que se dispongan y, en el caso de que existan archivos fuera del territorio nacional, también se hará referencia a ellos con el propósito de poder colaborar con los países terceros que los contengan, comunicarlos y, si fuera necesario, restituirlos

En definitiva, la Oficina de Atención a las Víctima está trabajando en la elaboración del registro oficial que contenga todos los aspectos mencionados en las líneas anteriores, y en el momento en que se consiga, el Estado ya estará en condiciones de asumir la obligación de preservar los archivos que tenga incorporados en la base de datos.

cambiaba su actitud (situación por otro lado muy habitual) y, reponiéndose a sus miedos y a su dolor, decidía finalmente personarse en el procedimiento o al menos obtener alguna información, carecía de los datos necesarios para que la Administración identificara su causa judicial (fundamentalmente, el número de procedimiento) quedándose sin acceso a la información y, a la postre, sin acceso a la justicia”; en DEFENSOR DEL PUEBLO. Estudios sobre los derechos de las víctimas de ETA. Su situación actual, Madrid, 2016, p. 10.

⁴³³ DEFENSOR DEL PUEBLO. Estudios sobre los derechos de las víctimas..., cit., p. 10.

⁴³⁴ Punto 17 del informe final revisado elaborado por JOINET acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos de acuerdo con la resolución 1996/119 de la Subcomisión.

4.1.3. Fines criminológicos del derecho a la verdad

Como hemos señalado, procede vincular el derecho a la verdad con los fines criminológicos. Para ello, conviene ver con carácter previo cuál es el propósito que se persigue desde la perspectiva criminológica con el aseguramiento y difusión del derecho a la verdad, de tal forma, que es necesario realizar una pequeña mención al panorama actual de las víctimas del terrorismo en el territorio español y que se aborda en el epígrafe siguiente.

4.1.4. Situación del fenómeno terrorista en España

En relación con las victimizaciones terroristas cometidas en España, cerca del 44% del total de los asesinatos producidos por la organización terrorista ETA no han obtenido una resolución judicial, no se sabe quiénes han sido sus autores ni, en su caso, quiénes dieron las órdenes. A finales del año 2014, la asociación Dignidad y Justicia puso en conocimiento del Defensor del Pueblo que todavía quedaban 377 asesinatos sin resolver por motivos diversos, como son, la prescripción del delito, falta de pruebas, negligencias judiciales, cuestiones burocráticas o por la aplicación de la Ley de Amnistía del año 1977⁴³⁵. Además de que con anterioridad ya se ha expuesto que no existen registros oficiales del resto de victimizaciones que se han producido –amenazas, coacciones, lesiones o daños- ni de sus afectados. De modo que, estas circunstancias ponen trabas en el acceso de las víctimas a la información y los datos que consten en la Administración y, por consiguiente, en el fin de deslegitimación del terrorismo.

4.1.5. Deslegitimación terrorista

La finalidad del derecho a la verdad, en términos criminológicos, que ofrece el conocimiento del relato real y las causas de victimización contribuye a la separación entre víctimas y terroristas a fin de facilitar el apoyo a las primeras y la deslegitimación de los segundos.

⁴³⁵ DEFENSOR DEL PUEBLO. Estudios sobre los derechos de las víctimas..., cit., p. 10.

La explicación más certera pretendida con el derecho a la verdad no sólo ayudará a deslegitimar el terrorismo sino a dar visibilidad del daño causado por las organizaciones terroristas sobre todo en los foros internacionales de las Naciones Unidas, Consejo de Europa y la Unión Europea. La colaboración internacional es necesaria para resolver los delitos que aún faltan en el territorio español. En contra de visibilidad, en concreto, desde el entorno de los simpatizantes del entorno de ETA, tal y como señala el Defensor del Pueblo, se han esforzado para difundir un relato favorable a sus pretensiones a nivel internacional y, en algunos casos, han surtido efecto como cuando Bélgica negó la extradición de una terrorista en el año 2013⁴³⁶.

El fenómeno terrorista utiliza la violencia como medio para alcanzar sus fines políticos, no obstante, no sólo se sirve de ella, sino que la acompaña de un discurso que trata de justificarla debido a que el atentado contra los valores y las normas básicas de la sociedad, sobre todo, cuando afectan a personas producen

⁴³⁶ Así BECERRIL explicó que “Bélgica negó la extradición en 2013 de una terrorista, tras cursar la Audiencia Nacional dos órdenes de búsqueda y captura. Algunas razones que adujeron desde la Sala de Inculpación del Tribunal de Gante, con diferentes apuntes históricos para poner en contexto, fueron las siguientes: <<Franco prohibió el euskera inmediatamente después de invadir las provincias vascas. La región fue considerada como la provincia de los traidores y la población fue castigada. Perdieron el derecho de autodeterminación [...]. Franco falleció en 1975. La transición a la democracia fue un proceso paulatino, pero se mantuvo la represión de los vascos. Los hechos ocurridos hace más de treinta años inculpan a la recurrente se sitúan en dicho marco>>. <<Del contexto histórico aquí descrito se desprende que la recurrente era activa en el movimiento de resistencia armada como joven veinteañera. Entre tanto, es una activa mujer profesional de 55 años con una vida normal en Gante>>. <<A juicio del Tribunal, Sala de Inculpación, en este caso existen serios motivos para opinar que la ejecución de este mandato europeo de detención infringiría los mencionados derechos fundamentales, ya que los acusados de hechos criminales con móviles presumiblemente terroristas están sometidos en España a un régimen de privación de libertad en condiciones inhumanas que ir acompañadas de torturas y un contacto muy limitado con el mundo exterior (familia, defensor y asistentes), al existir indicaciones en tal sentido. En efecto, tales condiciones inhumanas han sido denunciadas recientemente todavía en informes del Comité Europeo para la prevención de las torturas y tratos o castigos del Consejo de Europa de 2011>>. <<El Juez de Primera Instancia y Fiscalía opinan indebidamente que existe una presunción de respeto por los derechos fundamentales por parte de España, incluso para antiguos miembros de los movimientos de resistencia vascos, a los que la recurrente ha pertenecido presumiblemente. En primer lugar, nunca existe una presunción de respeto por los derechos humanos. En segundo lugar, la misma ley contradice la existencia de una presunción de respeto por los derechos humanos, ya que un sospechoso sujeto a un mandato europeo de detención, tiene el derecho de demostrar o de hacer admisible la existencia de serios motivos para temer una violación de los derechos humanos. Esta garantía adicional se ofrece precisamente dentro del contexto jurídico europeo estricto. Informes de organizaciones internacionales apoyan este temor serio. En tercer lugar, la ley no exige en ningún caso que se demuestre que los derechos fundamentales serían violados con toda certeza. Teniendo en cuenta las consideraciones arriba expuestas, los demás argumentos aportados por la recurrente y por la Fiscalía ya no son admisibles>>”; en DEFENSOR DEL PUEBLO. Estudios sobre los derechos de las víctimas..., cit., pp. 15-16.

un gran impacto y, de aquí, deriva la insistencia del grupo terrorista alegando sus razones y justificaciones⁴³⁷.

La justificación de las acciones terroristas se construye en torno a un discurso lo más convincente posible para el resto de la sociedad, de tal forma que, su base será la existencia de un conflicto que de sentido al sufrimiento que causan a sus víctimas. De la forma en la que se proyecte este discurso dependerá la obtención de apoyos que ayudarán a cumplir sus fines y la visibilidad que se dé de la organización terrorista en los medios de comunicación y en el resto de los países⁴³⁸.

Con la finalidad de construir una identidad grupal y así ofrecer una imagen más verosímil muestran que están sufriendo una situación injusta como colectivo que va creando un sentimiento de apoyo y solidaridad de los integrantes del propio grupo y, consecuentemente, van contribuyendo a la difusión de que la solución pasa por el cambio radical. En virtud de la descripción de la supuesta situación que están viviendo cuanto más dramática sean las circunstancias por las que están pasando mayores sacrificios exigirán a sus integrantes y, a su vez, más justificada quedarán sus acciones frente a la opinión pública⁴³⁹.

El tercer elemento en la elaboración de su discurso legitimador consiste en señalar al culpable de generar la situación de injusticia que están padeciendo debido a que la postura del supuesto responsable es la causante de sus acciones violentas. Si bien, al ser conscientes de que no van a encontrar apoyo en su recurso a las acciones violentas, su estrategia consiste en mostrarse ante la opinión pública a favor del diálogo y de los medios pacíficos para solventar sus problemas. Sin embargo, alegan que, sus intentos son infructuosos dado que no

⁴³⁷ SABUCEDO, J. M., RODRIGUEZ CASAL, M. Y FERNANDEZ FERNANDEZ, C. "Construcción del discurso legitimador del terrorismo", *Psicothema*, vol. 14, septiembre 2002, pp. 72-73.

⁴³⁸ SABUCEDO, J. M., RODRIGUEZ CASAL, M. Y FERNANDEZ FERNANDEZ, C. Construcción del discurso..., cit., p. 73.

⁴³⁹ SABUCEDO, J. M., RODRIGUEZ CASAL, M. Y FERNANDEZ FERNANDEZ, C. Construcción del discurso..., cit., p. 73.

les dejan y, consecuentemente, sólo les queda la opción de recurrir a la violencia⁴⁴⁰.

Durante su discurso, a la par que justifican su recurso a la violencia también tratan de desautorizar a las víctimas recurriendo a varios mecanismos. Por una parte, pueden tratar de deshumanizarlas o cosificarlas aludiendo a ciertas características que las representan que no comparten con el intragrupo y, por lo tanto, con el resto de la sociedad a la que el grupo terrorista defiende. Por otra parte, una estrategia que suelen utilizar consiste en asignarles rasgos con connotaciones peyorativas de naturaleza social. La razón de que deslegitimen a la verdadera víctima es que pretenden mostrarse ellos mismos como las víctimas, de manera que, al presentarse como las víctimas justifican la violencia que emplean por el mero hecho de que responden a la situación que ha creado su adversario. Además, con esta maniobra consiguen centrar la atención de la opinión pública en las circunstancias de su situación y sus pretensiones en vez de reparar en las acciones terroristas cometidas y sus consecuencias⁴⁴¹.

En definitiva, lograr cuantificar las diversas categorías de las victimizaciones terroristas que han tenido lugar en territorio español, es decir, no sólo los daños personales con resultado de fallecimiento sino además los daños personales de los heridos, las victimizaciones de los amenazados, secuestrados, extorsionados, ilesos y los daños materiales producidos, junto con los datos oficiales de sus víctimas igualmente integradas en los tipos de victimización –tan sólo hay datos sobre las víctimas mortales- y, por último, la difusión de la deslegitimación del terrorismo, esto es, constatar que su argumento de lucha política en la que se muestran como víctimas no tiene sustento puesto que ha sido una decisión atentar contra los derechos básicos de sus víctima que nada tenían que ver con su proyecto totalitario, son los pasos necesarios para alcanzar la verdad de lo ocurrido y así materializar el derecho compartido a la

⁴⁴⁰ SABUCEDO, J. M., RODRIGUEZ CASAL, M. Y FERNANDEZ FERNANDEZ, C. Construcción del discurso..., cit., p. 73.

⁴⁴¹ SABUCEDO, J. M., RODRIGUEZ CASAL, M. Y FERNANDEZ FERNANDEZ, C. Construcción del discurso..., cit., p. 73.

verdad de los afectados por el terrorismo con el resto de los miembros de la sociedad.

4.2. Derecho a la reparación

La reparación generalmente aparece asociada con la idea de la asistencia integral y comprende un conjunto de medidas que se han constituido alrededor de los siguientes principios: a) el esfuerzo por devolver a la víctima a las circunstancias previas que tenía a la acción terrorista; b) apoyar y facilitar a la víctima la consecución de los parámetros de libertad, identidad, vida familiar y social que disfrutaba con anterioridad; c) procurar su vuelta a su vida cotidiana, especialmente, a su residencia habitual y a su lugar de trabajo, en la medida de lo posible. Si no fuera conveniente, se le facilitará el cambio de residencia y su integración en el mercado laboral; d) facilitar su acceso al conjunto de prestaciones y asistencia en el menor tiempo posible; e) prestar atención a las necesidades que aparezcan en sus ámbitos personales para mitigar los daños producidos y, en definitiva, garantizar su bienestar⁴⁴².

4.2.1. Alcance del derecho a la reparación

Este sistema abarca las prestaciones y medidas administrativas que faciliten la restitución de todo aquello considerado restituible y, al mismo tiempo, trata cubrir todos los ámbitos en los que la víctima pueda tener necesidades con el fin que se recupere y pueda volver a su vida con total normalidad. Por ello, se explica que la intervención pública pretende la rehabilitación personal y su reintegración social, esto es, que abandone su status de víctima. Esta visión es novedosa en la actual regulación. Con anterioridad, se fijó un programa de ayudas constituido por medidas de resarcimiento y de prestaciones asistenciales –subvenciones directas a fondo perdido a las víctimas, la excepción de determinados requisitos para que pudieran acceder a algunos derechos y

⁴⁴² Art. 5 de la ley 4/2008, de 19 de junio, de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

prestaciones públicas y, el apoyo al movimiento asociativo-, regido por el principio de solidaridad. Mediante su revisión, se consideró que no sólo este sistema debía regirse por el principio de solidaridad, sino que además los poderes públicos debían asumir parte de responsabilidad por la producción de los daños, articulando un sistema de protección y asistencia donde se incorporan igualmente las prestaciones. Esto quiere decir que, se supera la concepción de adición de medidas administrativas de ayuda para que todas estén interrelacionadas con el denominador común que trata de ofrecer solución a todas las necesidades de las víctimas⁴⁴³.

De acuerdo con las disposiciones estatales y autonómicas sobre la protección y asistencia a las víctimas es fácilmente comprobable que, a lo largo de sus articulados, aglutinan dos vertientes del derecho a la reparación a pesar de que los explican de manera conjunta sin determinar cuáles son las finalidades explícitas de los dos sentidos que pueden adoptar.

La reparación en sentido estricto coincide con las medidas de ayuda, resarcimiento y prestaciones asistenciales, en cambio, la vertiente más amplia de este derecho no sólo persigue aminorar los efectos negativos producidos en la victimización primaria como la anterior sino que junto con los demás derechos reconocidos en la ley estatal y en las autonómicas –verdad, justicia, reconocimiento, dignidad y memoria- persigue, en última instancia, la rehabilitación personal y la reintegración social del afectado, de tal modo que, abandone su rol de víctima definitivamente o, dicho de otra manera, supere los estadios de la victimización primaria, secundaria y terciaria.

Por ello, a fin de facilitar la explicación de la reparación se va a distinguir, por una parte, su ámbito estricto y, por otra parte, su visión más amplia que integre la totalidad de los derechos reconocidos legalmente.

⁴⁴³ Exposición de Motivos de la ley 4/2008, de 19 de junio, de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4.2.2. Reparación en sentido estricto

La dimensión más estricta de la reparación, que trata de prevenir o reducir los efectos de la victimización primaria, está constituida, por una parte, por las indemnizaciones previstas para los afectados por el fenómeno terrorista. Mientras que, por otra parte, se articula a favor de poner a disposición de los anteriores un sistema de asistencia sanitaria y psicológica, y un conjunto de prestaciones sociales tales como las ayudas educativas o laborales.

4.2.3. Indemnizaciones

Las indemnizaciones previstas para los daños personales abarcan las ayudas por fallecimiento, incapacidades permanentes, lesiones permanentes no invalidantes, incapacidad temporal, secuestro, responsabilidad civil fijada en sentencia y las ayudas excepcionales por daños sufridos en el extranjero; mientras que, las indemnizaciones destinadas a cubrir los daños materiales comprenden los daños en viviendas, en establecimientos mercantiles o industriales, en sedes de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales y, finalmente, en vehículos.

El encargado de la tramitación y resolución del procedimiento relativo al reconocimiento de las indemnizaciones por los daños corporales, materiales y el resto de prestaciones es el Ministerio del Interior. Se iniciará con la presentación de la solicitud por la persona interesada o, también se ofrece la opción, de poder realizarlo mediante un representante acreditado. Junto con ella se adjuntará la documentación acreditativa de la condición de víctima. El órgano competente en materia de atención a víctimas dependiente del Ministerio será el instructor. Existen cinco supuestos en los que se podrá suspender el procedimiento: a) cuando se le requiera al interesado la subsanación de deficiencias o que aporte documentos; b) si se estima conveniente la evaluación médica de las lesiones sufridas por los afectados; c) la necesidad de tasación pericial de daños materiales por parte del Consorcio de Compensación de Seguros; d) cuando se solicite informe a los titulares de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de

Cooperación, de Defensa y del Interior; e) cuando deban solicitarse otros informes preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a órganos de la Administración General del Estado o de otras Administraciones Públicas. Finalmente, se dictará la resolución pertinente por el titular del Ministerio del Interior en un plazo máximo de doce meses, sin perjuicio de las ayudas al estudio a las que corresponderá un plazo de seis meses⁴⁴⁴.

Paralelamente, también se prevé la estructura administrativa de cada Comunidad Autónoma a fin de tramitar y resolver los procedimientos iniciados a fin de solicitar las indemnizaciones por los daños personales, materiales y las prestaciones a las que pueden acceder los afectados⁴⁴⁵.

4.2.4. Indemnizaciones y ayudas por fallecimiento

Como regla general, en el plazo máximo de un año desde la producción de la acción terrorista que originó el resultado de fallecimiento los titulares del derecho al resarcimiento podrán solicitar que se le reconozca el derecho a la indemnización, salvo que se vuelva a abrir el mismo plazo debido a que a consecuencia de las heridas sufridas se produzca el fallecimiento. Por orden de preferencia, los titulares serán las siguientes personas⁴⁴⁶:

- el cónyuge de la persona fallecida siempre y cuando no conste que estuvieren legalmente separados, o la persona con quien hubiera convivido con análoga relación de afectividad de forma estable por lo menos durante los dos últimos años anteriores al fallecimiento. Sin

⁴⁴⁴ Arts. 28 a 30 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y los arts. 48 a 53 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

⁴⁴⁵ Art. 4 de la Ley 1/2004, de 24 de mayo, de la Generalitat, de ayuda a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Valenciana; arts. 25 y 26 de la Ley 4/2008, de 19 de junio, de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma del País Vasco; arts. 6 y 7 de la Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Aragón; arts. 6 y 7 de la Ley Foral 9/2010, de 28 de abril, de ayuda a las víctimas del terrorismo; arts. 26 a 29 de la Ley 7/2009, de 2 de noviembre, de ayuda a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; y art. 6 de la Ley 10/2010, de 15 de noviembre, relativa a medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

⁴⁴⁶ Arts. 17 y 28 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, y el art. 6 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

embargo, en el caso de que hubieran tenido descendencia común será suficiente con acreditar la convivencia. Junto con el cónyuge o persona vinculada a él con análoga relación de afectividad también serán titulares los hijos del fallecido.

- en ausencia de los anteriores, por orden sucesivo y excluyente serán los beneficiarios los padres, nietos, hermanos y abuelos de la persona que haya resultado fallecida.
- ante la falta de las personas anteriores, se otorgará la titularidad de este derecho a los hijos de la persona conviviente y los menores que estén sujetos al régimen de acogimiento familiar permanente o preadoptivo de la persona fallecida siempre que dependiera económicamente de ella.

La cantidad que corresponde a la indemnización por fallecimiento será de 250.000€, si bien, los beneficiarios tendrán derecho a un incremento de la cantidad fija de veinte mensualidades del indicador público de renta de efectos múltiples sobre la cuantía percibida de acuerdo a sus cargas familiares, esto es, se concede en virtud de cada uno de los hijos o menores acogidos que dependiesen económicamente de la víctima fallecida⁴⁴⁷.

Asimismo, la Administración General del Estado abonará los gastos derivados del traslado, sepelio e inhumación y/o incineración de las personas fallecidas previa presentación de las facturas en el caso de que no se hallen cubiertos por una póliza de seguros hasta el límite de 6.000€⁴⁴⁸.

Estas previsiones son específicas de los titulares de las indemnizaciones por fallecimiento sin perjuicio de las ayudas que les pueden corresponder por los daños materiales, para tratamientos médicos, asistencia sanitaria y psicosocial complementaria, educativas, en materia de vivienda, las denominadas extraordinarias para cubrir situaciones de necesidad y el abono extraordinario de

⁴⁴⁷ Art. 19 y Tabla I del Anexo I de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y art. 7 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

⁴⁴⁸ Art. 12 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y art. 8 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

la cuantía establecida en sentencia firme en concepto de responsabilidad civil por los daños físicos o psíquicos.

4.2.5. Ayudas e indemnizaciones en concepto de incapacidad permanente

Los titulares del derecho al resarcimiento por daños físicos o psíquicos – daños personales- que les supongan lesiones permanentes invalidantes serán las personas que los hayan padecido a consecuencia del fenómeno terrorista. Las indemnizaciones que se prevén son las siguientes⁴⁴⁹:

- gran invalidez: 500.000€
- incapacidad permanente absoluta: 180.000€
- incapacidad permanente total: 100.000€
- incapacidad permanente parcial: 75.000€

El plazo del que disponen los beneficiarios será de un año a contar desde que se produjo el alta o la consolidación de las secuelas conforme acredite el Sistema Nacional de Salud. Si con posterioridad a la citada acreditación se produjera un agravamiento de las secuelas o el fallecimiento siempre con causa directa en la acción terrorista se abriría de nuevo el plazo de un año para que pudiera demandar la diferencia cuantitativa que procediere⁴⁵⁰.

⁴⁴⁹ Art. 18 y Tabla I del Anexo I de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y art. 10 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011. No obstante, de acuerdo con el art. 22 ter. de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y el art. 12 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011, el Ministerio del Interior podrá anticipar a cuenta de la ayuda definitiva un total de 18.030,36€ en los casos en que por la gravedad de las lesiones producidas se presuma la declaración de gran invalidez, incapacidad permanente total o absoluta. El inicio de este trámite se puede hacer a instancia de parte o de oficio mediante la tramitación de un expediente urgente por parte del órgano instructor en materia de atención victimal. En este expediente tras comprobar la existencia de una relación causal entre la acción terrorista y las lesiones se examinarán los informes médicos valorativos de la presumible incapacidad futura de la víctima y propondrá una resolución de la cantidad que debe ser anticipada a la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.

⁴⁵⁰ Art. 28 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

Del mismo modo que en el caso de fallecimiento, los titulares tendrán derecho a que la cantidad percibida en concepto de indemnización se vea incrementada en una cantidad fija de veinte mensualidades del indicador público de renta que proceda, siempre y cuando, tenga hijos o menores acogidos que dependieran económicamente de ellos en el momento de la comisión del hecho delictivo⁴⁵¹.

El dictamen emitido por el equipo de valoración de incapacidades determinado por el Instituto Nacional de Seguridad Nacional en el que se integrará un representante del Ministerio del Interior vinculado con la atención a las víctimas del terrorismo tendrá carácter preceptivo para la calificación de las lesiones a efectos indemnizatorios. En cambio, si las víctimas pertenecen a las Fuerzas Armadas, Guardia Civil o Cuerpo Nacional de Policía la calificación de sus lesiones la realizarán sus propios órganos médico-periciales acompañados por la persona designada por el Ministerio del Interior⁴⁵².

Todo ello, sin perjuicio de las ayudas que les pudieren corresponder, al igual que a los beneficiarios de las indemnizaciones y ayudas por fallecimiento, en materia de vivienda, las destinadas a paliar situaciones de necesidad, las pertenecientes al ámbito educativo, las previstas para los tratamientos médicos, asistencia sanitaria y psicosocial complementaria o el abono extraordinario de la cantidad impuesta en concepto de responsabilidad civil en sentencia firme.

4.2.6. Indemnizaciones y ayudas por lesiones permanentes no invalidantes.

Con independencia del acceso al abono extraordinario de la cantidad impuesta en concepto de responsabilidad civil en la sentencia firme, al resarcimientos por los daños materiales, a las ayudas en materia de vivienda, por

⁴⁵¹ Art. 19 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y art. 10 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

⁴⁵² Art. 28 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y art. 11 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

los tratamientos complementarios médicos, asistencia sanitaria y psicosocial que pudieran necesitar, la exención en las tasas académicas y las denominadas ayudas extraordinarias para situaciones de necesidad, las víctimas que hayan sufrido lesiones serán titulares de las indemnizaciones y ayudas por las lesiones permanentes no invalidantes⁴⁵³.

Para acceder a la indemnización es necesario que los interesados presenten una solicitud en el plazo de un año a contar desde la producción de los daños o, dicho de otro modo, el inicio del periodo comienza en la fecha en que le han dado el alta o se hayan consolidado las secuelas según lo constate el Sistema Nacional de Salud. La calificación de estas lesiones las podrá efectuar la asesoría médica adscrita a la unidad administrativa encargada de instruir las ayudas e indemnizaciones⁴⁵⁴.

La cuantía de la indemnización por las lesiones permanentes no invalidantes se determinará conforme al sistema de valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor y de acuerdo al baremos que resulta de aplicar la legislación de Seguridad Social sobre las cuantías de las indemnizaciones de las lesiones, mutilaciones y deformaciones definitivas y no invalidantes, producidas por accidente de trabajo o enfermedad, sin que pueda exceder el total de 75.000€⁴⁵⁵.

4.2.7. Indemnizaciones y ayudas por incapacidad temporal

La incapacidad temporal de la víctima queda delimitada al tiempo en el que recibe asistencia sanitaria y no puede ejercer sus actividades profesionales

⁴⁵³ Arts. 9 y 10 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

⁴⁵⁴ Art. 28 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y el art. 11 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

⁴⁵⁵ Art. 18 y la Tabla II del Anexo I de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y el art. 10 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

o habituales. El plazo del que disponen para solicitar la indemnización por este concepto es de un año a partir de la fecha en que han recibido el alta según lo acredite el Sistema Nacional de Salud⁴⁵⁶.

La cuantía de indemnización que les corresponde a los titulares coincide con el duplo del indicador público de renta diario del periodo en el que se encuentran en situación de incapacidad temporal con el máximo de 18 mensualidades⁴⁵⁷.

También, en los casos que proceda, podrá acceder a otros tipos de ayuda como las reflejadas en los epígrafes anteriores.

4.2.8. Indemnizaciones de carácter autonómico

Los afectados por daños físicos o psíquicos con resultado de fallecimiento, gran invalidez, incapacidad permanente absoluta, incapacidad permanente total, incapacidad permanente parcial, incapacidad temporal y lesiones de carácter definitivo no invalidantes podrán acceder a las indemnizaciones previstas en las legislaciones autonómicas siempre que previamente se haya solicitado y concedido por parte de la Administración General de Estado las ayudas por el mismo concepto. Si se cumple este requisito, el órgano autonómico complementará la cuantía otorgada por la administración estatal con el equivalente al 30% de la cantidad concedida⁴⁵⁸.

⁴⁵⁶ Art. 28 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y los arts. 10 y 11 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

⁴⁵⁷ Art. 10 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011. Si bien, podrán solicitar la anticipación de una cantidad a cuenta de la cuantía definitiva. Las cantidades a cuenta serán el resultado de multiplicar el duplo del indicador público de renta vigente en la fecha en la que se produjo la lesión por los días de incapacidad. Su abono tendrá carácter trimestral. Los anticipos están regulados en el art. 22 ter. de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y en el art. 12 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

⁴⁵⁸ En este sentido, los arts. 5 y 6 de la Ley 1/2004, de 24 de mayo, de la Generalitat, de ayuda a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Valenciana; arts. 7 y 8 de la Ley 10/2010, de 15 de noviembre, relativa a medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía; arts. 8 y 9 de la Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Aragón. En el caso de fallecimiento, la Comunidad Autónoma de Madrid, abonará una cuantía de 3.000.000 pesetas que será compatible con cualquier otra subvención según el

Cuando la víctima como consecuencia de sus lesiones se le haya reconocido la situación de dependencia de acuerdo con las previsiones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en cualquiera de sus niveles, podrá ser beneficiario de indemnizaciones. Su tramitación se regirá mediante un procedimiento de urgencia a efectos de valoración cuya cuantía económica de determinará en función del grado de dependencia⁴⁵⁹:

- El incremento en un 30% para las personas reconocidas con un grado III. Grado dependencia, niveles 1 y 2
- El aumento de un 20% para las personas cuya valoración sea de un grado II. Dependencia severa, niveles 1 y 2
- El incremento de un 10% para las personas que tengan reconocido un grado I. Dependencia moderada, niveles 1 y 2

No obstante, en relación con la situación de dependencia, no sólo se contempla este supuesto, sino que se extiende a los posibles casos en que el cuidador no profesional de una persona dependiente resultare víctima del terrorismo. A tal efecto, se ha previsto un nivel adicional de protección para la persona dependiente que consiste en una ayuda pecuniaria por importe de 9.000€. Para poder acceder a este importe económico es preciso que se acredite la situación de dependencia y que se cumplan los siguientes requisitos: a) debe existir una relación familiar entre el cuidador y la persona dependiente y, b) el cuidador como consecuencia del atentado terrorista fallezca o se le reconozca la

art. 18 bis de la Ley 12/1996, de 19 de diciembre, de ayuda a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Mientras que el art. 6 de la Ley 7/2009, de 2 de noviembre, de ayuda a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establece el límite de 60.000€ por los daños sufridos.

⁴⁵⁹ Arts. 13 a 15 de la Ley Foral 9/2010, de 28 de abril, de ayuda a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Navarra; arts. 14 y 15 de la Ley 10/2010, de 15 de noviembre, relativa a medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía; arts. 12 bis, ter y quáter de la Ley 1/2004, de 24 de mayo, de la Generalitat, de ayuda a las víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana. Asimismo, el art. 3 del Decreto 109/2010, de 16 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la ley 1/2004, de 24 de mayo, define "Condición de dependiente" como *"los sujetos que precisan de la atención o ayuda para poder desarrollar sus actividades cotidianas de manera autónoma. Su condición puede tener el origen en la edad, enfermedad o en una discapacidad"*.

situación de dependencia de grado II. Dependencia severa, o de grado III. Gran dependencia⁴⁶⁰.

4.2.9. Indemnización por secuestro

La indemnización por secuestro exige el cumplimiento de unos requisitos para su concesión. No sólo basta con que la persona haya sido secuestrada como consecuencia de una acción terrorista, sino que además debe haberse exigido alguna condición para su liberación. De modo que, si cumple ambos requisitos será titular por este concepto de indemnización⁴⁶¹.

En cuanto a su cuantía, se abonarán 12.000€ por el acto del secuestro y el triple del indicador público de renta diario por cada día que haya durado hasta el límite máximo de 75.000€⁴⁶².

Asimismo, siempre y cuando reúna las exigencias necesarias podrá optar a las ayudas destinadas al abono de la cuantía impuesta en concepto de responsabilidad civil en la sentencia firme por los daños de naturaleza física o psíquica causados, por los daños materiales, ayudas para el tratamiento médico, asistencia sanitaria o psicológica complementaria que precisara, para la vivienda y para las situaciones de necesidad. Son prácticamente las mismas ayudas a las que pueden acceder los titulares de ayudas por fallecimiento, incapacidades temporal, permanente y permanente no invalidante salvo las previsiones de las exenciones y/o ayudas al estudio.

⁴⁶⁰ Arts. 12 bis, ter y quáter de la Ley 1/2004, de 24 de mayo, de la Generalitat, de ayuda a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Valenciana y arts. 13 a 15 de la Ley Foral 9/2010, de 28 de abril, de ayuda a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Navarra.

⁴⁶¹ Art. 22 bis. de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y el art. 13 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

⁴⁶² Art. 22 bis. Y Tabla III del Anexo I de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y el art. 14 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

4.2.10. Responsabilidad civil fijada en sentencia penal

Como ya se ha puesto de manifiesto en cada uno de los epígrafes anteriores destinados a los diferentes titulares de ayudas e indemnizaciones, todos y cada uno de ellos pueden acceder, siempre que proceda, al abono extraordinario de la cuantía en concepto de responsabilidad civil por fallecimiento o por los daños de carácter físico o psíquico impuesta en la sentencia firme⁴⁶³.

La cantidad que corresponde en estos supuestos se establecerá en la sentencia firme y, en todo caso, los límites serán los siguientes⁴⁶⁴:

- fallecimiento: 500.000€
- gran invalidez: 750.000€
- incapacidad permanente absoluta: 300.000€
- incapacidad permanente total: 200.000€
- incapacidad permanente parcial: 125.000€
- lesiones no invalidantes: 100.000€
- secuestro: 125.000€

En las sentencias en las que no se reconozca o permite reconocer una cantidad por el concepto de responsabilidad civil, se abonarán las siguientes cuantías previstas en el anexo I de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre⁴⁶⁵:

- fallecimiento: 250.000€
- gran invalidez: 500.000€
- incapacidad permanente absoluta: 180.000€
- incapacidad permanente total: 100.000€
- incapacidad permanente parcial o secuestro: 75.000€

⁴⁶³ Art. 20 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y art. 15 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

⁴⁶⁴ Art. 20 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y el apartado 3 del art. 16 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

⁴⁶⁵ Art. 20 y el Anexo I de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y el art. 16 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

- lesiones no invalidantes: 75.000€

4.2.11. Ayudas excepcionales por los daños sufridos en el extranjero.

Las ayudas de carácter excepcional están pensadas para los españoles víctimas de una acción terrorista fuera del territorio español siempre y cuando se cumplan tres circunstancias adicionales. La primera, los afectados no tienen que formar parte de los contingentes de España en el extranjero. Segundo, el grupo terrorista responsable no tiene que actuar habitualmente en España y, por último, la finalidad de la acción terrorista no tiene que ser ni el Estado español ni los intereses españoles⁴⁶⁶.

Si concurren las condiciones anteriores, el beneficiario tendrá derecho a percibir una ayuda económica en los términos siguientes⁴⁶⁷:

- a) en el caso de que el español tenga su residencia habitual en el país en el que se ha producido en la acción terrorista, tendrá derecho a percibir el 50% de las cantidades establecidas para las indemnizaciones por fallecimiento, incapacidades permanentes, lesiones permanentes no invalidantes, incapacidad temporal y secuestro
- b) en cambio, si no tiene fijada su residencia habitual en el país en el que se ha cometido el acto terrorista, tendrá derecho a percibir el 40% de las indemnizaciones previstas para los supuestos de fallecimiento, incapacidades permanentes, lesiones permanentes no invalidantes, incapacidad temporal y secuestro

⁴⁶⁶ Art. 22 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y art. 20 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

⁴⁶⁷ Art. 22 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y art. 21 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

Esta ayuda tiene un carácter subsidiario, esto es, se abonará cuando los afectados no haya percibido indemnización o ayuda del estado donde se cometió la acción terrorista o, en su caso, la haya percibido, pero en una cantidad inferior a la prevista en la legislación española procediendo a reconocerle la diferencia con la cantidad establecida en esta última⁴⁶⁸.

Finalmente, hay que tener en cuenta que, el reconocimiento de esta ayuda por el estado español no genera ningún tipo de efectos en otras legislaciones⁴⁶⁹.

4.2.12. Daños materiales

La sección segunda del capítulo segundo del título tercero de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, prevé las distintas categorías de indemnizaciones para los daños materiales producidos con ocasión de acciones terroristas cubren los daños en viviendas, en los establecimientos mercantiles o industriales, en las sedes de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales, y finalmente, en los vehículos.

Las solicitudes de los interesados tendrán un plazo máximo de un año desde la producción de los daños para requerir el reconocimiento de este derecho. Los resarcimientos tendrán el carácter subsidiario respecto a los demás reconocidos por las Administraciones Públicas o derivados de los contratos de seguro y, en ningún caso, la cuantía podrá superar el valor del daño que se ha producido a raíz del hecho terrorista ni abarcar los desperfectos causados en los bienes de titularidad pública. Lógicamente, si perciben cualquier resarcimiento la cuantía que recibirán se reducirá en la cantidad que han percibido por estos conceptos. Ahora bien, los servicios del Consorcio de Compensación de Seguros se encargarán de elaborar la tasación pericial que incluirá, tras valorar los daños

⁴⁶⁸ Art. 22 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y art. 22 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

⁴⁶⁹ Art. 22 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

indemnizables, aquellos que deban ser resarcidos tanto por el Consorcio como por la Administración⁴⁷⁰.

En los expedientes de resarcimiento de daños materiales cuya cuantía sea inferior a 1.803,04€ será obligatorio en informe pericial del Consorcio de Compensación de Seguros para la resolución administrativa. En cambio, si no alcanza los 600€ y quedara acreditado mediante factura o presupuesto de reparación original no será necesario dicho informe pericial⁴⁷¹.

4.2.13. Daños producidos en las viviendas

Las disposiciones que abordan los resarcimientos de los daños materiales distinguen los causados en la vivienda habitual y en las que no cumplan esta condición. Para conseguir delimitar las dos categorías se ha definido la vivienda habitual en el reglamento como *"la edificación que constituya la residencia de una persona o unidad familiar durante un período de, al menos, seis meses al año. Igualmente se entenderá que la vivienda es habitual en los casos de ocupación de ésta en tiempo inferior a un año, siempre que se haya residido en ella un tiempo equivalente, al menos, a la mitad del transcurrido desde la fecha en que hubiera comenzado la ocupación"*⁴⁷².

⁴⁷⁰ Arts. 23 y 28 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y art. 23 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

⁴⁷¹ Art. 29 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

⁴⁷² Art. 24 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011. En la misma dirección lo definen algunas legislaciones autónomas en materia de víctimas del terrorismo. El Decreto 109/2010, de 18 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 1/2014, de 24 de mayo, de la Generalitat, de ayuda a las víctimas del terrorismo que derogó al mismo tiempo el Decreto 163/2005, de 4 de noviembre, conceptuó la vivienda habitual en los siguientes términos: *"residencia durante al menos seis meses al año o, en el caso de que el tiempo fuera inferior a un año se entenderá si cumple la mitad del tiempo transcurrido desde el inicio de la ocupación de la vivienda"*. Por su parte, la Ley 4/2008, de 17 de julio, de Aragón, de medidas a favor de las víctimas del terrorismo, entiende esta expresión como la edificación coincidente con la residencia de una persona o unidad familiar con un tiempo mínimo de 183 días. En los supuestos estrictos de ocupación de una vivienda por tiempo inferior al señalado, en cambio, se exige haber residido por lo menos la mitad del tiempo desde que empezó la ocupación. Según el art. 8 de la Ley 12/1996, de 19 de diciembre, de Madrid sobre las ayudas a las víctimas del terrorismo es la *"edificación que constituya la residencia de la persona durante el plazo de, al menos, seis meses al año. Igualmente se entenderá que la vivienda es habitual en los casos de cambio de la misma, siempre que en la nueva se haya residido durante el plazo proporcional al*

Por un lado, será indemnizable en la vivienda habitual de las personas físicas los desperfectos causados en la estructura, instalaciones y mobiliario –no se incluyen los elementos considerados de naturaleza suntuaria- de modo que sea preciso repararlos para que vuelvan a recuperar las condiciones de habitabilidad previas⁴⁷³.

Por otro lado, serán resarcidos en las viviendas no habituales los mismos daños ocasionados en las viviendas habituales, si bien, la diferencia es la cuantía pues sólo comprenderán el 50% de los daños con el límite de 113.680€⁴⁷⁴.

Además, se prevé que las personas afectadas que tengan que abandonar su vivienda de manera temporal a fin de proceder a su reparación puedan tener parte de los gastos originados por el alojamiento provisional sufragados por el Ministerio del Interior con el límite de 90€ diarios en el caso de optar por un establecimiento hotelero o con un máximo de 1.500€ mensuales si se trata del alquiler de una vivienda. A estos efectos, la Administración General del Estado podrá contar, a su vez, con convenios con otras Administraciones Públicas u organismos que se dediquen a la asistencia y auxilio de los damnificados por catástrofes o siniestros⁴⁷⁵.

indicado". Finalmente, el apartado 2 del art. 8 de la ley 7/2009, de 2 de noviembre, de ayuda a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Murcia, la explica como *"la edificación que constituya la residencia de una persona o unidad familiar durante un periodo mínimo de 6 meses al año. Asimismo, se entenderá que la vivienda es habitual en los casos de ocupación de ésta por tiempo inferior a un año, siempre que se haya residido en ella un tiempo equivalente, al menos, a la mitad del transcurrido desde la fecha en que hubiera comenzado la ocupación"*.

⁴⁷³ Art. 24 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y art. 24 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

⁴⁷⁴ Art. 24 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y art. 24 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

⁴⁷⁵ Art. 24 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y art. 25 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

4.2.14. Daños en establecimientos mercantiles o industriales

El valor de las reparaciones cubre los daños sufridos en la estructura, instalaciones, mobiliario y equipo pertinentes para que los establecimientos mercantiles o industriales recuperen el funcionamiento habitual que tenían con anterioridad al atentado terrorista. A tal fin, se ha establecido el límite máximo de 113.680€ en el reglamento⁴⁷⁶.

Excepcionalmente, y sobre todo en el supuesto en que la interrupción de la actividad del establecimiento implique riesgo de pérdida de puestos de trabajo, la Administración General del Estado podrá subsidiar préstamos para que se reanude con independencia de las anteriores reparaciones⁴⁷⁷.

4.2.15. Daños en las sedes de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales

El resarcimiento por los daños producidos se dirige no sólo a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales que incluyen las asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro que se dediquen a la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo, sino que también tienen cabida en estas disposiciones las sedes o los lugares de culto pertenecientes a confesiones religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas⁴⁷⁸.

⁴⁷⁶ Art. 25 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y art. 26 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

⁴⁷⁷ Art. 25 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y art. 26 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

⁴⁷⁸ Art. 26 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y art. 27 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

La cuantía de la indemnización será la necesaria para que se vuelva a poner en marcha el mismo funcionamiento que tenía con anterioridad y pueda reanudar la actividad⁴⁷⁹.

4.2.16. Daños en los vehículos

Son indemnizables los desperfectos ocasionados tanto en los vehículos particulares como en los vehículos destinados al transporte terrestre ya sea de personas o mercancías, siempre y cuando, en el momento de la producción de los daños los titulares dispongan de la póliza de seguro obligatorio de vehículo vigente⁴⁸⁰.

La cuantía prevista para estos casos, con carácter general, cubrirá los gastos necesarios para su reparación, no obstante, en los supuestos de destrucción del vehículo o que la reparación supere el valor venal consistirá en el importe de un vehículo de similares características y condiciones en el mercado hasta el límite máximo de 30.500€⁴⁸¹.

4.2.17. Indemnizaciones por daños materiales en la legislación autonómica

Las indemnizaciones destinadas a sufragar las reparaciones por daños materiales que se incrementarán en un 30% de las concedidas, con un carácter complementario a las concedidas por la Administración General del Estado o, en su caso, subsidiario de las compañías aseguradoras –con un límite máximo del valor de los bienes- se otorgarán a los titulares de los bienes dañados. Esta ayuda

⁴⁷⁹ Art. 25 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y art. 26 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

⁴⁸⁰ Art. 27 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y art. 28 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

⁴⁸¹ Art. 27 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y art. 28 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

comprenderá los daños ocasionados a las viviendas de las personas físicas, a los establecimientos mercantiles o industriales, a los elementos productivos de las empresas, sedes de los partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales y en los vehículos, siempre y cuando, cumpla con los requisitos de territorialidad de la Comunidad Autónoma que lo legisló con el límite que cada uno precise⁴⁸².

4.2.18. Prestaciones

En el ámbito asistencial, las prestaciones en materia de salud física y psicológica, educación, formación laboral, vivienda y empleo tienen dos finalidades, la primera, demostrar la voluntad real de colaboración con los afectados en aras a que superen en cuanto antes las consecuencias negativas que han padecido y, segundo, reflejar el compromiso de solidaridad adquirido por la sociedad donde reconocen el sufrimiento injusto de la víctima y su entorno familiar.

4.2.19. Ayuda sanitaria, psicológica y psicopedagógica complementaria

En el primer ámbito, se contemplan las medidas de atención sanitaria. Respecto a la preparación de los profesionales sanitarios les facilitarán la participación en programas de sensibilización y formación continua a fin de que pueda conseguir un nivel superior de mejora e impulso acerca del diagnóstico, asistencia e intervención integrales realizadas de forma coordinada y la rehabilitación de quienes han sufrido el azote terrorista, ya que ellos atenderán a las víctimas y les corresponderá la labor de proponer las medidas que estimen necesarias para su atención. A este fin, el Sistema Nacional de Salud deberá

⁴⁸² Arts. 7 a 11 de la Ley 1/2004, de 24 de mayo, de la Generalitat, de ayuda a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Valenciana; arts. 9 a 12 de la Ley 10/2010, de 15 de noviembre, relativa a medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía; arts. 10 y 11 de la Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Aragón; arts. 12 a 16 de la Ley 12/1996, de 19 de diciembre, de ayuda a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Madrid; y los arts. 7 a 12 de la Ley 7/2009, de 2 de noviembre, de ayuda a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

contemplar la atención no sólo sanitaria sino también psicológica, psicopedagógica y psiquiátrica para los heridos de índole física o psíquica y a la unidad familiar de los fallecidos. Mientras que, las ayudas previstas para financiar los tratamientos médicos e intervenciones quirúrgicas con causa en el atentado de las víctimas con daños físicos y/o psíquicos y los familiares de los fallecidos complementarán a la dispensada por el Sistema Nacional de Salud.

Especialmente se ha avanzado en la concreción del tratamiento psicológico y el apoyo psicopedagógico. De una parte, se otorga el derecho a la financiación del coste de la atención psicológica con un límite siempre que conste una prescripción facultativa previa. Incluso, la Administración General del Estado podrá llevar a cabo conciertos con otras Administraciones Públicas o con entidades privadas especializadas en esta materia a fin de favorecer y facilitar dicha asistencia. Por la otra parte, el precepto sobre el apoyo psicopedagógico parece ir en sintonía al relativo al régimen específico de asistencia a las víctimas en el sistema educativo contenido en la ley; pues, éste está pensado para lograr la continuación de los estudios de los heridos y familiares de los asesinados, por ello, les pueden asignar un tutor o establecer un sistema alternativo para su atención individualizada. Mientras que, en el reglamento, se prevé que el Ministerio y las Comunidades Autónomas desarrollarán las medidas necesarias para que, los estudiantes pertenecientes a los niveles de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria que, a consecuencia del fenómeno terrorista, precisen apoyo educativo por padecer problemas de aprendizaje o adaptación social puedan recibir el apoyo psicopedagógico necesario con carácter prioritario y gratuito.

La atención sanitaria también ofrece cobertura a aquellas personas que no estén incluidas dentro del sistema público de salud. En estos casos, el órgano de instrucción demandará información a la Dirección de Atención sobre su condición de víctima o posible beneficiario.

Los gastos provenientes del implante de prótesis, de sus mejoras periódicas y del proceso de rehabilitación que deba hacer el afectado a consecuencia de la acción terrorista, correrán a cargo de la Administración. Si

bien, en el caso de que estos gastos no tuvieran la cobertura del sistema de protección sanitaria ordinaria, el afectado deberá dirigirse a la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo mediante una solicitud de abono junto con la documentación exigida⁴⁸³. La Dirección, atendiendo los documentos presentados comprobará tanto los hechos ocurridos como veracidad de los datos anexados, aunque si lo estima conveniente podrá solicitar al afectado documentación complementaria o practicar cualquier actuación de instrucción imprescindible. La resolución sobre este tipo de ayuda deberá ser dictada y notificada en un plazo de seis meses. Sin embargo, una vez agotado el plazo sin que conste que se haya dictado o notificado, se entenderá favorable. Así que, en el momento en que se acrediten las facturas devengadas ante la Dirección procederá al pago de la subvención.

Por su parte, la regulación de la asistencia psicológica ha introducido una serie de mejoras respecto a la disposición legal que la contemplaba. El afectado pueda optar para recibir el tratamiento psicológico prescrito –con un límite máximo de 3.500 euros por persona- no sólo de los medios públicos adscritos al sistema sanitario del País Vasco y a los privados, sino que además podrá recurrir a aquellos concertados por la propia Dirección. El afectado que desee acceder a las ayudas deberá acreditar los aspectos siguientes:

- El tratamiento que precisa tenga su origen en acciones terroristas ocurridas en la misma comunidad autónoma o aun habiendo sido perpetradas fuera de ella, conste su domiciliación en el País Vasco
- El tratamiento debe ser prescrito por un facultativo del Servicio Público de Sanidad

⁴⁸³ Los documentos a presentar los especifica el art. 22 del Decreto 290/2010, de 9 de noviembre, de desarrollo del sistema de asistencia integral a las víctimas del terrorismo del País Vasco, en los siguientes términos: "...a) Copia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento acreditativo de su personalidad. b) Certificado expedido por facultativo del Servicio vasco de salud en el que conste la necesidad del implante, su mejora y, en su caso, la rehabilitación, así como que el mismo no está cubierto dentro de los parámetros de protección sanitaria pública ordinaria. c) Importe de las ayudas que hubiera recibido por parte de otras administraciones o instituciones públicas o privadas, o declaración por la que se compromete a comunicarlas. d) Compromiso de facilitar cuantas actuaciones de fiscalización se promuevan desde los órganos competentes de la Comunidad Autónoma en esta materia".

4.2.20. Derechos laborales

Dentro de los derechos laborales y de Seguridad Social, se reconoce el derecho de reordenación del tiempo de trabajo y a la movilidad geográfica a los heridos en sus diferentes categorías, al cónyuge o persona con una análoga relación de afectividad y a los hijos tanto de los fallecidos como de los heridos siempre que concurren dos requisitos en el supuesto, primero, una sentencia judicial firme, se hubieran dispuesto las necesarias diligencias o se hubiera dado inicio al proceso penal para su enjuiciamiento y, segundo, la existencia previa de un reconocimiento del Ministerio del Interior. Estos mismos tendrán derecho a ser beneficiarios de las medidas de bonificación a la contratación y de las políticas activas de empleo⁴⁸⁴.

Siempre que los heridos, a su vez, sean funcionarios públicos o personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, con su normativa específica, se les otorga el derecho a reducir o reordenar su tiempo de trabajo junto con la movilidad geográfica de centro de trabajo de acuerdo con la legislación específica. Si la víctima ejerce este último derecho tendrá una repercusión positiva en la figura de su cónyuge o persona vinculada a él por análoga relación de afectividad puesto que se le concede orden preferente para ocupar un puesto

⁴⁸⁴ El apartado 2 del art. 82 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dedicado a la movilidad por razón de violencia de género y por razón de violencia terrorista, establece que *“Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, y los hijos de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de funcionarios y de víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así como los funcionarios amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas características, cuando la vacante sea de necesaria cobertura o, en caso contrario, dentro de la comunidad autónoma. Aun así, en tales supuestos la Administración Pública competente estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que el interesado expresamente solicite. Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso. En todo caso este derecho podrá ser ejercitado en tanto resulte necesario para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente. En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia terrorista se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia”*.

de trabajo igual o de características parecidas al que desempeñaba cuando haya plaza disponible en la misma localidad⁴⁸⁵.

En el ámbito autonómico, el personal a su servicio –entre el que se incluye el personal estatutario sanitario y el personal docente- que presentara daños físicos o psicofísicos de singular gravedad ocasionados por actuaciones terroristas, motivado por las circunstancias personales en cada caso, tendrán derecho a un traslado considerado forzoso a otro puesto de trabajo similar al que venía desempeñando cuando por razones de seguridad, protección o con fines asistenciales así lo requieran. Se les exime, por las mismas razones, de los requisitos temporales para poder adscribirse a la situación de excedencia. En su caso, durante su jornada laboral tendrán la consideración de justificadas las faltas o ausencias que necesitaran ya sean totales o parciales siempre que la decisión de acudir provenga de los servicios de atención o salud⁴⁸⁶.

4.2.21. Ayudas educativas

En el caso de las ayudas para el sistema educativo, se contempla la exención de las tasas académicas, no obstante, la disposición legal dedicada a la concesión de ayudas al estudio encuentra su desarrollo en el reglamento. Se prevén los requisitos, contenido e incompatibilidades. Las cuantías fijadas de las ayudas para iniciar o continuar dependerán del nivel de enseñanza que se curse. Si bien, serán incompatibles con las percibidas por los mismos conceptos de otras Administraciones.

⁴⁸⁵ Art. 35 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y art. 35 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

⁴⁸⁶ Así, el art. 24 de la Ley 1/2004, de 24 de mayo, de la Generalitat, de ayuda a las víctimas del terrorismo.

4.2.22. Reparación en sentido amplio

En segundo término, aparece estipulada la dimensión amplia del derecho a la reparación, fundamentado en el principio de solidaridad⁴⁸⁷, que consiste en la aplicación del sistema de asistencia integral de manera continua de acuerdo con los criterios de proporcionalidad, flexibilidad y adaptabilidad. Los poderes públicos mediante la adopción de medidas pertenecientes a las esferas de la restitución, indemnización, rehabilitación, atención y satisfacción moral dependiendo del daño causado, perseguirán la efectividad de la reparación integral. No sólo se requieren medidas económicas, sino que se entienden necesarias aquellas que puedan facilitar la convivencia pacífica, la reconstrucción y la transformación social. La reparación, aquí considerada, significa estrictamente el reconocimiento de los padecimientos injustos de las víctimas, de manera que, la interacción de ambos principios conduce a una situación de encuentro entre las víctimas y la sociedad. Los resultados del establecimiento de este contacto se reflejarán en diferentes direcciones: la solidaridad manifestada por la ciudadanía facilitará la dignificación de la vida de las víctimas, a la vez que, las vías incorporadas para mantener el reconocimiento y la asistencia a las mismas, les servirá de instrumento de conciliación con una parte de su pasado.

La visión del sentido amplio de este derecho se fundamenta en la guía elaborada por las Naciones Unidas dirigida a proveer apoyo social, emocional, psicológico y financiero a las víctimas. Este Manual explica que *"el fin de un programa de asistencia a la víctima es asistir a las víctimas a enfrentar sus traumas emocionales, participar en el proceso de justicia penal, obtener reparación y enfrentar problemas asociados a la victimización"*. De manera que, los objetivos específicos perseguidos *"del programa son hacer lo siguiente:*

⁴⁸⁷ En la medida en que la sociedad vasca y sus instituciones han ido avanzando en la concienciación sobre la situación de las víctimas caracterizada en multitud de ocasiones por la desafección de gran parte de la comunidad de la que son miembros, han ido apareciendo muestras de reconocimiento y solidaridad hacia ellas. La Dirección de Atención a las víctimas del terrorismo, con la intención de afianzar el reconocimiento y la solidaridad, ha promovido las actividades consistentes en el reconocimiento y la memoria –actos de reconocimiento y homenaje y el contacto individualizado con familias de víctimas, entre otros-, el apoyo a la elaboración de la Ley de Solidaridad con las víctimas del terrorismo y, la introducción de los testimonios directos del fenómeno terrorista en los programas de educación; en Plan de Paz y Convivencia. Primera evaluación anual, Gobierno Vasco, pp. 19-22.

- (a) Incrementar el compromiso de los Gobiernos y organizaciones a hacer todo lo posible para ayudar a las víctimas;*
- (b) Incrementar el alcance y disponibilidad de los servicios a las víctimas durante la victimización y a lo largo de las secuelas;*
- (c) Ampliar las oportunidades de la víctima de participar en todas las etapas críticas del proceso de justicia penal y asegurar la consideración del impacto de la victimización sobre la víctima en todos los sistemas de justicia penal y tribunales internacionales;*
- (d) Aumentar la coordinación y el trabajo en redes de todas las instituciones apropiadas indicadas, organizaciones, grupos y familias, sistemas comunitarios y de parentesco, que provean servicios a las víctimas o afecten el tratamiento de las víctimas para poder desarrollar un sistema integrado de asistencia a la víctima;*
- (e) Mejorar la calidad del alcance a las víctimas necesitadas y su tratamiento;*
- (f) Estar alerta con respecto a las necesidades únicas de nuevas poblaciones de víctimas, o de víctimas poco atendidas⁴⁸⁸.*

Como se puede observar, la respuesta recomendada se aborda no sólo desde la instancia judicial sino también incorpora a los sistemas informales – comunidad y familia- a fin de garantizar la reparación integral de la víctima. Por lo cual, los valores de verdad, justicia, reconocimiento, memoria y dignidad junto con la reparación estricta contribuyen a afianzar el proceso de reparación integral de los individuos afectados por acciones terroristas. Este tipo de reparación representa la finalidad última de las normativas tanto estatal como autonómicas referidas a la protección y reconocimiento conferidos a las víctimas a quienes se les reconoce expresamente haber padecido en primera persona diferentes clases de violaciones de los derechos humanos⁴⁸⁹.

⁴⁸⁸ Manual de Justicia sobre el Uso y Aplicación de la Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctimas de Delito y Abuso de Poder.

⁴⁸⁹ CABRERA SUÁREZ, L. A. “El derecho a la memoria y su protección jurídica: avance de investigación”, Pensamiento jurídico núm. 36, enero-abril 2013, p. 185.

4.3. Derecho a la justicia

El contenido del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco presentado durante el año 2006 ha sido la principal fuente de inspiración en la sistematización que ofrecemos de los valores enumerados en la legislación autonómica vasca. Fundamentalmente, este texto es fruto de los numerosos esfuerzos aunados para hacer realidad la pretendida cultura de los derechos humanos cuyos componentes básicos son la vida, la reparación y la educación en valores⁴⁹⁰.

De acuerdo con el cúmulo de principios básicos que deben regir la proclamación de los derechos de las víctimas, se encuentra el derecho a la justicia en el mismo nivel que la dignidad, reconocimiento y reparación, integrando conjuntamente los derechos concedidos en particular a las víctimas del terrorismo. A pesar de que todos los que conforman esta categoría son indispensables para la consecución de una reparación integral en una dimensión amplia, el primero se ha convertido en una de las principales reivindicaciones de los afectados por este fenómeno y de las asociaciones que los representan, debido a que, la información acerca del proceso penal, la situación penitenciaria y las medidas frente a la victimización secundaria son sus principales demandas a fin de mejorar la regulación en esta materia⁴⁹¹.

No les faltaba razón en sus propuestas de mejora sobre la normativa, en la medida en que, una correcta aplicación de todos estos extremos relacionados principalmente con la información se convierten en parte de los instrumentos

⁴⁹⁰ Las finalidades de las actuaciones previstas en este Plan se construyeron sobre la base de tres ejes vertebradores enmarcados en el contexto de la cultura de los derechos humanos: el primero, el respeto a la vida y a los derechos humanos de cualquier persona; el segundo, la memoria, el reconocimiento y la consecuente necesidad de reparación de los daños producidos a las víctimas y; en tercer lugar, la implantación y desarrollo de iniciativas y políticas específicas destinadas a la educación de los valores de paz y a la prevención y evitación de acciones que puedan vulnerar los derechos y las libertades. En la cúspide de este sistema reside el respeto a la vida que se convierte en el presupuesto fundamental para el desarrollo de los demás derechos pertenecientes a la esfera personal y colectiva.

⁴⁹¹ Expresamente, han reclamado los siguientes derechos: *“a la información sobre los procesos judiciales y a personarse en ellos; a conocer en cualquier momento, la situación penitenciaria de los agresores; al alejamiento de los que no quieren convivir. Derecho a que se apliquen órdenes de alejamiento, incluyendo casos de amenazas; a la no victimización secundaria por parte de la Administración (trámites administrativos complejos y largos, tribunales evaluadores que hacen sentir a la víctima culpable de los hechos, falta de coordinación, falta de humanidad en el trato, falta de información, falta de formación de los profesionales que atienden a las víctimas, etc.)*; en VARONA, G., LAMARCA, I., HERNANDEZ, J., LOPEZ DE FORONDA, F., PAGOLA, A. Y OCA, N. Atención institucional a las víctimas..., cit., p. 267.

básicos implementados para vencer los inconvenientes que plantean tanto la aparición y mantenimiento de la victimización secundaria en las víctimas que entran en contacto con el sistema penal como el abandono definitivo del estereotipo, que prácticamente a día de hoy está desterrado, asociado a la necesidad de venganza y no de justicia que persiguen las víctimas.

4.3.1. Referencias normativas

En esta materia, la actividad de las Naciones Unidas no se restringe en exclusividad ni al contenido de los arts. 8 a 11 proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que reconocen, respectivamente, el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, el derecho a ser oído públicamente ante un tribunal independiente e imparcial, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a un juicio en el que se aseguren las garantías de la defensa ni a las previsiones dispuestas al respecto en el Pacto Internacional de los Derechos civiles y políticos. Sus principales logros también residen en la elaboración de otros instrumentos normativos como la Declaración de los Principios Básicos de Justicia para Víctimas del Delito y Abuso de Poder adoptada el 29 de noviembre de 1985. En este documento, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó la introducción de medidas de acuerdo con la tipología de la víctima en los diversos niveles de acción internacional, regional y nacionales con la intención de mejorar el acceso, trato justo, restitución, compensación y asistencia de las mismas, incluso, cumpliendo con la finalidad descrita incorporó y enumeró los pasos para prevenir la victimización⁴⁹².

Posteriormente, durante la celebración de la quinta sesión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas, se acordó una resolución a fin de elaborar un manual que desarrollara los principios de aplicación presentes en la Declaración. La respuesta a la resolución del Consejo Económico y Social número 1996/14 fue la redacción del Manual de Justicia sobre

⁴⁹² GOMEZ ISA, F. Verdad, justicia y..., cit., p. 28.

el uso y aplicación de la Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctimas del Delito y Abuso de Poder⁴⁹³.

Este texto recoge una serie de directrices y sugerencias sobre los sistemas legales y estructuras de apoyo y atención para que sean las propias administraciones estatales quienes consideren, analicen y, en su caso, valoren su inclusión tras ponerlas a prueba. El principio general que subyace y guía sus recomendaciones consiste en conocer las necesidades de la víctima, por ello, enuncia que a *"toda organización de asistencia diseñadora de política de asistencia a la víctima debería entender el impacto de la victimización para promover la comprensión de la necesidad de asistencia"*. Así que, en el ámbito estricto de la administración de justicia que es el que nos interesa, esta premisa se traduce en *"asegurar que todas las víctimas tengan acceso al sistema judicial, así como apoyarlas a través del proceso de justicia, y que el sistema de justicia esté diseñado para minimizar los obstáculos que las víctimas pueden enfrentar al buscar justicia"*, esto es, explica un conjunto de medidas para combatir la victimización secundaria, los modos de tratamiento con respeto y conocimiento a la víctima, la información que debe recibir acerca de sus derechos, obligaciones y la evolución del caso en el que esté involucrado y la formación de los profesionales que las asistan en todos los niveles⁴⁹⁴.

En cuanto a las líneas directrices expuestas por la Recomendación (85) 11 adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa relativa a la posición de la víctima del derecho penal y proceso penal, están pensadas y dirigidas a todos los niveles de la administración de justicia. En todo caso, durante las sucesivas etapas del procedimiento y sobre todo en la declaración de la víctima, se recomienda tratarla con el máximo respeto hacia su situación, circunstancias, derechos y dignidad. En la fase del juicio, es necesario que la víctima sea informada no sólo de la fecha y lugar de celebración del juicio sino también de la posibilidad real que tiene de obtener la restitución, reparación y la asistencia

⁴⁹³ Manual de Justicia sobre el Uso y Aplicación de la Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctimas de Delito y Abuso de Poder.

⁴⁹⁴ Manual de Justicia sobre el Uso y Aplicación de la Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctimas de Delito y Abuso de Poder.

jurídica. Igualmente, el derecho genérico correspondiente al público en general deberá respetar y proteger ante todo la dignidad inherente a los afectados y, por consiguiente, evitar los posibles ataques que se pudieran producir hacia su persona mediante esta vía. No obstante, frente a estas recomendaciones centradas en atender las necesidades de las víctimas, cuyas medidas de intervención aplicada se dirigen expresamente hacia las dos vertientes de la información y la evitación o reducción de la victimización secundaria, algunos autores han manifestado su temor a que el suceso traumático de la víctima afecte personalmente a los profesionales de la administración de justicia derivado del trato humano caracterizado por la empatía hacia la víctima y el garantismo penal⁴⁹⁵.

Tras repasar los efectos negativos que conllevan las victimizaciones primaria y secundaria, y poner de manifiesto la necesidad de combinar los esfuerzos de los servicios público y privado para mejorar la intervención en los problemas victimales más comunes, la posterior Recomendación (87) 21 adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 17 de septiembre de 1987, sobre la asistencia a las víctimas y la prevención de la victimización, aconseja, en primer lugar, recabar toda la información relativa a los datos de victimización y los consecuentes problemas que aparecen en las víctimas para crear programas específicos de asistencia y ayuda. Con estos datos en su dominio, los servicios encargados de esta labor ya pueden poner en conocimiento de la población en general y especialmente a los profesionales que les atienden los obstáculos a los que tiene que hacer frente las víctimas en su día a día. Tras

⁴⁹⁵ Estas recomendaciones provienen de la constatación de seis consideraciones: 1. La contribución, en ciertos supuestos, del sistema de aumentar los problemas de las víctimas. 2. Las funciones primordiales de la justicia reside en atender las necesidades y la protección de los intereses victimales. 3. Sería conveniente establecer los cauces para lograr la confianza de la víctima en el proceso penal. 4. Además de los anteriores, debería optarse en la justicia penal por tener presente los perjuicios ocasionados a la víctima sin perjuicio de su naturaleza física, psicológica, material o social. 5. Tomar en consideración la posibilidad de facilitar de reconciliación entre la víctima y el victimario. 6. Y finalmente, tener en cuenta las necesidades e intereses victimales a lo largo de la celebración del proceso penal; en Recomendación (85) 11, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 28 de junio de 1985, sobre la posición de la víctima en el marco del derecho penal y del proceso penal. disponible en: www.victimas.org/html/legislacion/85_11.pdf. (Consultado el 24/03/2017); VARONA, G., LAMARCA, I., HERNANDEZ, J., LOPEZ DE FORONDA, F., PAGOLA, A. Y OCA, N. Atención institucional a las víctimas..., cit., p. 268.

la comprobación de su necesidades mediante los estudios de victimización es indispensable realizar, paralelamente, una revisión de los servicios y estructuras que les prestan apoyo a fin de que puedan valorar si con los mecanismo previstos reciben ayuda inmediata, asistencia continuada con especial hincapié durante su intervención en el proceso judicial, una correcta coordinación entre los servicios de naturaleza pública y privada, el desarrollo de políticas de prevención y la detección de futuras victimizaciones mediante la identificación de factores asociados a la vulnerabilidad⁴⁹⁶.

4.3.2. Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre, relativa a las normas mínimas sobre los derechos, apoyo y protección de las víctimas de delitos

Por otra parte, las tres prioridades asentadas en la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, consisten en asegurar que la víctima del delito reciba toda la información y apoyo necesarios, garantizar su participación en el proceso penal y, por último, preservar su protección y reconocimiento.

De manera específica, la organización y explicación de este texto puede realizarse conforme a los cinco derechos básicos correspondientes a la víctima, esto es, el derecho a la información, el derecho a la participación en el proceso penal, el derecho a la protección, el derecho a la asistencia y, por último, el derecho a la reparación⁴⁹⁷.

La referida información y el consecuente apoyo cuentan con un total de cinco dimensiones. La primera vertiente implica el derecho a entender y a ser

⁴⁹⁶ Recomendación (87) 21, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, el 17 de septiembre de 1987, sobre la asistencia a las víctimas y la prevención de la victimización. Disponible en: www.victimas.org/html/legislacion/87_21.pdf. (Consultado 24/03/2017).

⁴⁹⁷ PEREZ RIVAS, N. "Los derechos en la Unión Europea. Análisis de la Directiva 2012/29/UE", Boletín CeDe Usc, Vol. II, febrero 2014, pp. 1-10. disponible en: http://revistas.usc.es/boletincede/boletins_2014/NFebreiro2014. (Consultado 24/03/2017).

entendido. Tras su cumplimiento surge el derecho a recibir información de la autoridad competente en la materia desde el primer instante en que contacte con ella. Mediante esta vía, puede conocer, entre otros: a) la manera correcta de interponer denuncias; b) los servicios de los que puede recabar apoyo y atención; c) el modo de proceder y los requisitos que debe cumplir para acceder a los sistemas de protección, asesoramiento y asistencia jurídica, indemnizaciones, interpretación y traducción y reembolso de los gastos ocasionados durante el proceso; d) el procedimiento relativo a la reclamación en el caso de que el proceso no hubiera respetado sus derechos; e) los datos de contacto para las comunicaciones sobre su causa y; f) finalmente, la existencia de mecanismo de justicia reparadora. Tercero, el derecho a recibir información sobre su causa. El consiguiente derecho a la traducción e interpretación, y, por último, el acceso a los servicios de apoyo a las víctimas⁴⁹⁸.

De igual forma que el derecho a la información, la articulación relativa a la participación en el proceso penal prevé las posibles acciones que la víctima pueda decidir si quiere realizar o no en función de la situación en la que se encuentra y el estado del proceso. Así, se incluyen dentro de esta categoría, el derecho básico a ser oído; los derechos que le corresponden siempre y cuando adopte la decisión de no continuar el procesamiento; las garantías ofrecidas en el contexto de los servicios de justicia reparadora; los servicios de asistencia jurídica gratuita; el reembolso de gastos; la restitución de bienes y, en su caso, la manera de obtener una decisión relativa a la indemnización por parte del infractor en el curso del proceso penal. En todo caso supone una garantía para que la víctima pueda ser escuchada antes, durante y después del proceso penal siempre que esté relacionado con la causa en la que esté inmersa, de esta manera, no sólo queda circunscrito estrictamente a la celebración de la vista ya que las medidas para facilitar la comunicación trascienden del citado momento procesal⁴⁹⁹.

⁴⁹⁸ Arts. 3 a 10 de la Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre, relativa a las normas mínimas sobre los derechos, apoyo y protección de las víctimas de delitos.

⁴⁹⁹ Arts. 10 a 17 de la Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre, relativa a las normas mínimas sobre los derechos, apoyo y protección de las víctimas de delitos.

En cuanto a la protección y reconocimiento brindados a la víctima, el Estado se compromete a poner en funcionamiento y a disposición del interés de la víctima los mecanismos que más se ajusten y eviten, ante todo, el contacto directo de la víctima y sus familiares con el agresor. Con este propósito, por ejemplo, se pueden acondicionar las salas para que no coincidan las partes a la vez durante la celebración del juicio. No obstante, este derecho no está limitado exclusivamente a esta medida pues precisamente, como regla general, con anterioridad a la celebración de juicio existe la obligación de velar por la realización de las investigaciones penales sin dilaciones indebidas para proteger a la persona afectada, al igual que, se le requiere someterse a los mínimos reconocimientos o declaraciones. Incluso se les permite el acompañamiento de otra persona diferentes de su abogado –salvo resolución motivada- en su declaración. Además, se prevé la protección de sus características personales e imágenes tanto suyas como de sus familiares y, en su caso, deberán promover la evaluación individual para determinar si precisan medidas especiales de protección⁵⁰⁰.

A pesar de que el derecho de asistencia integral y el derecho a la reparación mantienen una relación muy estrecha llama la atención que la asistencia ofrecida por los servicios especializados –con independencia de la procedencia pública o privada- en los ámbitos psicológico, social, sanitario y jurídico pretende abarcar todas las esferas en las que pudiera verse afectada la víctima. En cambio, a la hora de precisar la dirección de la reparación la ley tan sólo se refiere a la reparación de carácter pecuniario a la que tiene que hacer frente el infractor⁵⁰¹.

Por último, hay que destacar que, por una parte, las medidas para minimizar la victimización secundaria consisten en la formación de los profesionales que estén en contacto con ellas y, por otra parte, no obliga a la mediación penal ni que se tome en cuenta los posibles acuerdos reparadores que

⁵⁰⁰ Arts. 18 a 24 de la Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre, relativa a las normas mínimas sobre los derechos, apoyo y protección de las víctimas de delitos.

⁵⁰¹ Arts. 8, 9 y 16 de la Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre, relativa a las normas mínimas sobre los derechos, apoyo y protección de las víctimas de delitos.

hayan alcanzado las partes tan sólo exigen la facilitación de casos penales a los servicios de justicia reparadora⁵⁰².

4.3.3. Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima

De conformidad a las exigencias europeas de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las normas mínimas sobre los derechos, apoyo y la protección de víctimas del delito, el objetivo de la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la víctima del delito es ofrecer a la víctima una respuesta pluridimensional especialmente jurídica y social dirigida tanto a la reparación del daño en un proceso penal como a minimizar los posibles efectos traumáticos causados. Para su cumplimiento, elabora un catálogo de derechos pertenecientes a los ámbitos procesal y extraprocesal de las víctimas, sin perjuicio de la remisión a normativas específicas sobre determinados tipos de víctimas.

Correlativamente a la extensión del concepto de víctima la pretensión de reconocimiento, protección y apoyo se ha ampliado a las dos dimensiones citadas con la intención de ofrecer un amparo integral a la víctima. Por una parte, los denominados derechos extraprocesales comunes a todas las víctimas se regulan alrededor del derecho a la información que nace previamente a la iniciación del proceso penal y se extenderá hasta la interposición de la denuncia y durante todo el proceso penal. Desde el primer contacto que mantiene con los funcionarios o autoridades, se ha introducido la novedad de ofrecerle la posibilidad de que vaya acompañada por la persona que elija a fin de que se sienta más arropada en cada actuación. La información que se irá actualizando conforme se superen las sucesivas fases del procedimiento, facilitada por las autoridades o las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, se transmitirá en un lenguaje claro, sencillo y accesible, acerca de las medidas de asistencia, apoyo y protección disponibles; el modo de ejercicio de su derecho a denunciar, de asesoramiento y defensa jurídica; sobre las indemnizaciones y reembolso de los gastos judiciales; los servicios de interpretación, traducción y comunicación que le puedan ser de interés; los datos

⁵⁰² Arts. 25 y 26 de la Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre, relativa a las normas mínimas sobre los derechos, apoyo y protección de las víctimas de delitos.

de contacto de la autoridad encargada de su tramitación; a solicitar ser notificada de las resoluciones; los servicios de justicia restaurativa y las medidas de efectividad de sus intereses si residen fuera de la Unión Europea. Se ha hecho una mención expresa al derecho de la víctima como denunciante, que comprende los derechos a obtener una copia certificada y, la asistencia lingüística gratuita y la traducción escrita de la copia si no entiende o habla las lenguas oficiales. Junto a él, en el caso de que haya presentado la solicitud para recibir las notificaciones, se le informará sobre la celebración del juicio, la acusación y específicamente acerca de la resolución de no iniciación del procedimiento penal; la sentencia; las resoluciones que acuerden la prisión, puesta en libertad o posibilidad de fuga; las medidas cautelares adoptadas y cualquiera que ponga en riesgo su seguridad. Asimismo, de acuerdo con la normativa europea se desarrolla el derecho a la interpretación y traducción, extensible a las personas con limitaciones auditivas o de expresión oral, aplicable tanto a las entrevistas –incluidas las policiales– como a las vistas. El derecho a la traducción escrita y gratuita de la información esencial también se encuentra integrado especialmente la decisión de poner fin a la causa y la designación de hora y lugar de la celebración del juicio. Por último, las víctimas y sus familiares podrán acceder a los servicios de apoyo y asistencia cuya actuación se centrará en varias fases de acogida inicial, orientación, información y las medidas disponibles de protección, con independencia de que la evaluación individual o la vulnerabilidad asociada a ciertos tipos de víctimas que aconsejen otros apoyos⁵⁰³.

Por otra parte, el primer derecho reconocido perteneciente a la dimensión procesal consiste en la participación en el proceso que ve reforzado su efectividad a través de la regulación dos mecanismos, primero, la notificación de las resoluciones de sobreseimiento y archivo y, además, el derecho a recurrirlas. Segundo, su derecho a obtener el pago de las costas con preferencia al pago de los gastos causados al Estado y también, el reembolso de los gastos derivados del ejercicio de sus derechos. A su vez, se conceden varias vías de participación en la ejecución de las penas, las víctimas podrán recurrir los autos de clasificación

⁵⁰³ Arts. 3 a 10 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima.

del penado en tercer grado, cuando se refieran al límite de cumplimiento de condena y si concede la libertad condicional. Además, se les dota de legitimación para interesar que se impongan medidas para asegurar su seguridad al liberado condicional y para que pueda facilitar información para resolver la ejecución de la pena, la responsabilidad civil o el comiso. La intervención de la víctima en la fase de ejecución no es incompatible con el monopolio estatal de la ejecución de las penas, sino que se presenta como una herramienta útil para favorecer la confianza y colaboración de la víctima con el sistema penal. Se les facilita la presentación de solicitud de asistencia de justicia gratuita ante el funcionario o autoridad que se encarga de la información a fin de evitarles trámites por las diferentes oficinas. La víctima puede obtener la devolución inmediata de los bienes de su propiedad previamente incautados, siempre que no influya en el correcto desarrollo del proceso. Por último, en el caso de que se contemplen los requisitos de reconocimiento de los hechos y consentimiento del infractor, el consentimiento de la víctima y no entrañe riesgo para su seguridad ni posibles futuros perjuicios, el estatuto permite acceder a servicios de justicia restaurativa orientados a la reparación material y moral de la víctima⁵⁰⁴.

Las medidas de protección en el proceso se recogen en un título aparte. Su objetivo es asegurar la efectividad frente a las represalias, intimidación, victimización secundaria, daños psíquicos o agresiones dirigidas a la dignidad que puedan tener lugar, especialmente, en los interrogatorios y en las declaraciones que participen como testigos. Esto es, para garantizar su vida, integridad, libertad, seguridad y, al mismo tiempo, proteger su intimidad y dignidad se pueden adoptar durante la investigación, persecución y enjuiciamiento medidas de protección, entre otras, de carácter físico, la utilización de salas separadas a fin de evitar el contacto visual o garantizar que puedan ser oídas sin estar presentes en la sala de vistas. Del mismo modo, para evitar la victimización secundaria se debe tomar la declaración de la víctima tras la denuncia, el mínimo número de declaraciones y reconocimientos realizados por profesionales que cuenten con la necesaria formación y también pueden ir acompañadas en todas

⁵⁰⁴ Arts. 11 a 18 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima.

las actuaciones por una persona a su libre designación. La adopción de algunas medidas requiere previamente la evaluación individualizada de la víctima orientada a averiguar si existen necesidades especiales y las posibles medidas que se puedan adoptar. Durante el tiempo que dure su aplicación, teniendo en cuenta las circunstancias sobrevenidas, deben actualizarse. Las medidas de protección específicas se adoptarán tomando como referencia las características de las personas, la naturaleza concreta del hecho delictivo, las circunstancias, el daño producido, la gravedad y la vulnerabilidad manifestada por la víctima⁵⁰⁵.

Por último, regula la estructura y organización de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas. Los profesionales integrados en ellas informarán como mínimo acerca de cinco aspectos básicos: los derechos que le corresponden a la víctima, el sistema público de indemnización, el acceso a los servicios especializados disponibles, el apoyo emocional que pueden recibir y el asesoramiento sobre los derechos económicos que le asisten, especialmente, el proceso para reclamar la indemnización pertinente de daños y perjuicios sufridos y el acceso a la justicia gratuita. Además, destaca a efectos criminológicos la función de valorar si el afectado precisa de apoyo o asistencia psicológica, psicosocial o asistencia, o sería conveniente acompañarlo al juicio⁵⁰⁶.

Tras realizar este breve recorrido por las regulaciones más importantes dedicadas a todos los tipos de víctimas –de acuerdo con los objetivos planteados para el presente estudio- procedentes de las instancias internacionales, europea y española, llama la atención que han abordado en dos sentidos diferentes el derecho a la justicia de las víctimas y así ha quedado reflejado en los textos legales. La premisa fundamental del ámbito internacional es la preocupación por el bienestar de los afectados por los hechos delictivos. Sobre todo, remarcan que la víctima se vuelve especialmente vulnerable cuando recibe en impacto de la victimización en el momento en que entra en contacto con el sistema judicial, de manera que, teniendo en cuenta las particularidades de este contexto, este derecho se debe orientar a *"minimizar los obstáculos que las víctimas pueden*

⁵⁰⁵ Arts. 19 a 23 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima.

⁵⁰⁶ Arts. 27 a 29 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima.

enfrentar al buscar justicia”, y ello, conlleva a que sean los propios estados quienes comprueben la efectividad de sus programas y servicios y, en su caso, valoren si procede modificarlos.

En cambio, la construcción de la normativa europea, a la que sigue la española, no gira principalmente en torno a las necesidades victimales y la victimización que pudiera repercutir sobre ella, sino que se configura alrededor de un catálogo de cinco derechos básicos que les corresponden y sólo en uno de ellos se asocian las medidas de protección a la prevención del fenómeno de la victimización secundaria.

Así que, en definitiva, los organismos internacionales responden desde una fundamentación criminológica, en la medida en que, a partir de la evaluación de las necesidades y del impacto de victimización valoran la conveniencia o no de las estructuras judiciales y políticas de protección, mientras que, el ámbito europeo mira hacia la víctima bajo un prisma estrictamente jurídico, concediéndole un conjunto de derechos sin analizar previamente la situación general en la que se encuentran. Tan sólo en un derecho, las medidas de protección que se pueden conceder cumplen, en cierta medida, la función de atención a sus necesidades particulares y evitar su victimización.

4.3.4. Contenido del derecho a la justicia

Las disposiciones reguladoras del acceso a la administración de justicia procedentes de las normativas internacionales y europeas, se pueden sintetizar en los cinco aspectos siguientes que son los más relevantes para la víctima⁵⁰⁷:

1. La participación tanto en el proceso como en las actuaciones penales
2. El aseguramiento y protección de la dignidad, intimidad y seguridad
3. El derecho a la información
4. La garantía de la reparación y asistencia en los ámbitos jurídico, material, psicológico, moral y social

⁵⁰⁷ VARONA, G., LAMARCA, I., HERNANDEZ, J., LOPEZ DE FORONDA, F., PAGOLA, A. Y OCA, N. Atención institucional a las víctimas..., cit., pp. 268-271.

5. Prevención de futuras victimizaciones, o sea, de la repetición de ulteriores delitos

Lógicamente, estas cinco dimensiones enumeradas deben estar contenidas dentro del derecho a la justicia que le corresponde a cualquier víctima según se desprende de las normativas protectoras examinadas, por lo tanto, a continuación, es conveniente analizar si se han incorporado y, en su caso, en qué medida, en las leyes estatal y autonómicas específicas de las víctimas del terrorismo.

4.3.5. Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo

En un sentido amplio, el derecho a la justicia implica la asunción de una doble exigencia por parte del estado. De un lado, abarca el deber público de crear y mantener el aparato judicial encargado de recibir y procesar las denuncias, de la investigación y, en su caso, de realizar el correlativo enjuiciamiento de los supuestos de violaciones de derechos humanos que son los que nos ocupan en este estudio. Y, por otro lado, la vertiente de este derecho se traduce, además, en la obligación de los estados a adoptar el conjunto de medidas pertinentes a fin de evitar la impunidad de las vulneraciones graves y sistemáticas de los derechos humanos⁵⁰⁸. En un contexto como el nuestro donde priman las exigencias básicas del estado de derecho, la aceptación gubernativa de estas responsabilidades conlleva a que la justicia proporcione, en primer lugar, el resarcimiento debido a las víctimas, en segundo lugar, a garantizar la no aparición del desamparo de los afectados durante el transcurso del proceso y, por último, la condena de los terroristas, siempre que proceda. En definitiva, la labor de los poderes públicos en esta administración se centra tanto en impedir la impunidad

⁵⁰⁸ GOMEZ ISA, F. Verdad, justicia y..., cit., p. 18.

de los crímenes terroristas como en el aseguramiento del cumplimiento íntegro de las condenas impuestas a los terroristas que los hayan cometido.

Este contenido esencial del derecho a la justicia lleva implícitos en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, los derechos y garantías concernientes a la asistencia jurídica gratuita –regulada en el art. 48-, la garantía de la mínima lesividad en la participación en el proceso –art. 49- y la disposición de información especializada –art. 50-. Como se puede observar, la obtención de información y la participación mínima en el proceso penal podrán aminorar los efectos negativos derivados de la experimentación del sentimiento de desamparo de la víctima y, al mismo tiempo, la asistencia jurídica gratuita le permite emprender las acciones conducentes a obtener el resarcimiento o la condena, si fuera el caso.

La formulación de la asistencia jurídica gratuita significa que los afectados por el fenómeno terrorista pueden obtener la representación y defensa de sus intereses de modo gratuito en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa ya sea directa o indirecta en la acción que ha generado la condición de víctima. El ámbito subjetivo de este derecho se reconoce exclusivamente a aquellas personas que puedan ser consideradas como víctimas con independencia de sus recursos económicos, de tal forma que, les corresponde tanto a las personas que hayan sufrido daños físicos y/o psíquicos derivados del fenómeno terrorista, como a los familiares, convivientes o dependientes de la persona fallecida –por tanto, alude al concepto de víctima del terrorismo estricto seguido por la Ley 29/2011, de 22 de septiembre-. El único requisito que se les exige para poder hacer valer este derecho es que soliciten su intención de servirse de él⁵⁰⁹.

⁵⁰⁹ En este punto el texto legal, de acuerdo con el art. 17, fija el orden siguiente: “a) El cónyuge de la persona fallecida, si no estuvieren legalmente separados, o la persona que hubiere venido conviviendo con ella de forma permanente con análoga relación de afectividad al menos los dos años inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieren tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia; y los hijos de la persona fallecida. b) En caso de inexistencia de los anteriores, serán destinatarios, por orden sucesivo y excluyente, los padres, los nietos, los hermanos y los abuelos de la persona fallecida. c) En defecto de los anteriores, los hijos de la persona conviviente y los menores en acogimiento familiar permanente de la persona fallecida, cuando dependieren económicamente de ella”. No obstante, en los supuestos en que coexistan el cónyuge o conviviente de hecho y los hijos, o, personas con el mismo grado de parentesco, se ha estipulado que les corresponda a ambos en iguales condiciones;

La mencionada presunción de la condición de víctima del terrorismo que se realiza y que vincula directamente el surgimiento del derecho a la justicia gratuita, sin perjuicio de los recursos económicos de los que disponga el solicitante, se ha incorporado recientemente a la ley en virtud de la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Previamente a esta modificación operada en el año 2015, era condición necesaria para las víctimas que quisieran acceder a este beneficio acreditar no disponer de suficientes recursos económicos. No obstante, en la actualidad, en el momento en que se formule denuncia o querrela o, se inicie el procedimiento por delito de terrorismo en ese preciso instante se adquiere la condición de víctima a los efectos de obtener la asistencia jurídica gratuita. Dicho derecho se perderá siempre y cuando se dicte sentencia absolutoria o archivo firmes del procedimiento en cuestión pues ya no tendrá oficialmente la condición de víctima, si bien, no se le exigirá la devolución del coste de los servicios disfrutados de modo gratuito⁵¹⁰.

Junto con el beneficio de la asistencia jurídica gratuita se enuncia la garantía de la mínima lesividad de la que es acreedora especialmente la víctima del terrorismo a lo largo de su participación en el proceso penal en el que tenga causa. Este principio lleva implícito que sus titulares –los heridos de naturaleza física y/o psíquica y los familiares, convivientes o dependientes de la persona fallecida, que coinciden con los titulares del derecho anterior- sufran las mínimas incomodidades o perjuicios durante su intervención. Concretamente, las precauciones que se implementarán irán dirigidas a evitar que no mantengan una relación directa visual o sonora con los imputados o acusados por la actuación terrorista. De igual forma, durante la tramitación del proceso, los jueces o tribunales protegerán su dignidad y seguridad personal evitando ante todo el empleo de signos o inscripciones con ánimo de ofenderlas⁵¹¹.

GUTIERREZ PEREZ, M. *“Protección de las víctimas en los procesos judiciales, reconocimientos y condecoraciones”*, en SEMPERE NAVARRO, A. V. (dir.). Reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo: estudio de la normativa básica estatal y autonómica, Eolas, 2014, pp. 147-149.

⁵¹⁰ GUTIERREZ PEREZ, M. Protección de las víctimas en los procesos..., cit., pp. 147-149.

⁵¹¹ Art. 49 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo; GUTIERREZ PEREZ, M. Protección de las víctimas en los procesos..., cit., pp. 149-150.

Finalmente, las Administraciones Públicas competentes en Justicia tienen la obligación de articular las vías de información específicas a fin de que los titulares de este derecho puedan conocer de primera mano el estado del procedimiento en el que tengan un legítimo interés y las acciones judiciales que pudieran iniciar. A diferencia de los dos derechos anteriores, la titularidad es más extensa al incorporar a las personas que hayan sufrido daños materiales con independencia de su consideración de víctimas del terrorismo junto con los heridos por daños de naturaleza física y/o psíquica, y, los familiares, convivientes y dependientes de los fallecidos a consecuencia de una acción terrorista. Entre las medidas para llevar a la práctica este derecho, se contempla la regulación de las funciones de la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional⁵¹²:

- a) Dar información acerca del estado del procedimiento que afecte a la víctima
- b) Facilitar el asesoramiento necesario sobre los procesos penales y contencioso-administrativos que les afecten
- c) Fomentar el aseguramiento de la seguridad e intimidad mientras que estén participando en los procedimientos con la intención de protegerlas frente a posibles injerencias ilegítimas o actos de intimidación o represalias y cualquier otro acto de ofensa o denigración
- d) Ofrecer el acompañamiento personal a la celebración del juicio
- e) Determina los mecanismos de información referentes a la ejecución penitenciaria, el cumplimiento íntegro de las penas y los casos de concesión de beneficios o excarcelación de los penados

⁵¹² Art. 50 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

4.3.6. Ley 4/2008 de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo

A la par que las disposiciones estatales relativas a las obligaciones del Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco ha sido la única que ha prestado atención a este aspecto de acuerdo a sus competencias. En la exposición de motivos de la ley vasca, se explican las dos dimensiones del derecho a la justicia, esto es, la justicia legal que gira alrededor de la ley y la correctiva que se refiere especialmente a la reparación de los daños sufridos por la víctima y, al mismo tiempo, a las actuaciones encaminadas a buscar las responsabilidades de las acciones cometidas. Si bien, teniendo en cuenta las competencias que tiene asumidas el Gobierno Vasco en esta materia, tan sólo regula ciertos aspectos considerados complementarios para facilitar el ejercicio del derecho de justicia. En el marco de sus competencias, los poderes públicos velarán por el acceso a la tutela judicial efectiva de las víctimas que, garantice por un lado sus derechos y se tenga en cuenta sus circunstancias especiales, y por el otro, se prevengan las situaciones que puedan ocasionar desamparo. Los mecanismos para su aseguramiento serán los siguientes: a) ofrecerles la información acerca del estado del procedimiento que les afecta; b) brindarles los recursos y el acceso a los procedimientos que les pudiera interesar a lo largo de los procesos penales o contencioso-administrativos en los que se viera inmerso, de carácter jurídico, económico, técnico o incluso psicológico; c) proponer la opción de acompañar al afectado en el juicio⁵¹³; d) durante su intervención en el procedimiento, se

⁵¹³ Sobre este aspecto, el Manual de Justicia sobre el Uso y Aplicación de la Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctimas de Delito y Abuso de Poder en el apartado B) del Capítulo II, establece que *“los programas de apoyo a las víctimas deberían proveer al menos los siguientes servicios de asesoramiento, apoyo terapéutico: a) apoyo emocional: terapia de apoyo individual y grupal; b) asistencia directa: con derivaciones o asistencia directa con refugios, albergues protectores; c) información: como prevenir más victimización y abuso de sustancias, e información y derivación de los servicios sociales, de salud y salud mental. Además, los programas de apoyo a la víctima deberían incluir los siguientes servicios o terapias de apoyo: a) apoyo emocional: consejo, terapias a lo largo plazo e intervención en salud mental para responder al trauma; b) asistencia directa: asistencia con reemplazo de los documentos robados, dañados o de algún modo extraviados, y arreglos conducentes a la reparación o reemplazo de propiedad robada, dañada o de algún modo extraviada; c) información: información y derivación sobre recursos legales fuera del sistema de justicia penal, que incluya ombudsen, asociaciones de derechos humanos y medios de recursos locales o internacionales”*.

evitarán las acciones dirigidas a su ofensa o humillación, mediante el aseguramiento de su seguridad e intimidad.

De acuerdo con el enunciado general de los servicios jurídicos que le pueden corresponder a los afectados contemplado en la ley, el reglamento ha procedido a su desarrollo. Las personas afectadas o los familiares de los fallecidos en primer grado y sus cónyuges podrán solicitar a la Dirección una subvención para hacer frente a los gastos ocasionados por la defensa y representación jurídica en el enjuiciamiento del delito que dio origen. Esta subvención resultará incompatible con las dispuestas en la Ley de Asistencia de Justicia Gratuita por el mismo concepto. La cuantía establecida para el resarcimiento no superará en ningún caso las tarifas contempladas en esta normativa. Las costas que pudieran corresponder a quienes ejercitaren la acción acusatoria se devolverán con cargo a fondos públicos por su intervención en el proceso penal. El inicio del procedimiento se realizará con la presentación de la solicitud del interesado junto con los documentos requeridos⁵¹⁴. Tras la comprobación de los hechos y de los datos presentados y, la realización de las actuaciones pertinentes de carácter complementario que pudieran precisar para completar el expediente, tales como, el requerimiento de documentación adicional o cualquier acto de instrucción, la Dirección en un plazo máximo de seis meses dictará y notificará la resolución. El pago de la subvención se efectuará una vez se haya acreditado documentalmente la intervención profesional, previa presentación de las facturas.

Como se puede observar, prácticamente ambas leyes, que siguen las estructuras determinadas en las legislaciones europeas y española dedicadas a las víctimas en general, realizan las mismas previsiones de modo que sugiere la importancia de la información para las víctimas y sus allegados. Su recepción puede convertirse en una gran herramienta de preparación ante su futura

⁵¹⁴ Concretamente, el art. 20 del Decreto 290/2010, de 9 de noviembre, de desarrollo del sistema de asistencia integral a las víctimas del terrorismo del País Vasco se refiere a: *"a) Copia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento acreditativo de su personalidad. b) Descripción de la ayuda solicitada. c) Copia del personamiento en el oportuno procedimiento judicial. d) Aceptación por el Abogado y procurador de su elección de la representación y defensa en juicio. e) Importe de las ayudas que hubiera recibido por parte de otras administraciones o instituciones públicas o privadas, o declaración por la que se compromete a comunicarlas. f) Compromiso de facilitar cuantas actuaciones de fiscalización se promuevan desde los órganos competentes de la Comunidad Autónoma en esta materia"*.

participación en el proceso penal, asesoramiento y garantía de su seguridad e intimidad, medidas que pueden contribuir a la prevención de la victimización secundaria puesto que favorecen no sentirse desamparados. La asistencia jurídica gratuita facilita la participación de la víctima en el proceso penal –derecho enunciado en el ámbito europeo-. Durante su transcurso el derecho a la información y las medidas de protección prevendrán la victimización secundaria. Sin embargo, no parte de la preocupación de la víctima como ocurre en las Naciones Unidas.

4.3.7. La demanda de justicia de las víctimas del terrorismo

Las demandas de justicia, que expresamente realizan las víctimas y las asociaciones que defienden sus intereses, frente a la impunidad de las vulneraciones de los derechos humanos a las que se han visto expuestas revalorizan el sistema penal. Los afectados son los primeros interesados en acudir a la justicia penal para que se les reconozca haber padecido injustamente las violaciones de sus derechos a raíz de las acciones terroristas.

En cambio, no es del todo cierto el deseo de venganza que se les ha asociado, en determinados sectores durante algún tiempo, en detrimento de la búsqueda de la justicia que reclaman. En la Ponencia de Víctimas del Parlamento vasco de 2004 se optaba por apoyar a las víctimas para que lucharan “*contra el odio y los deseos de venganza*”. Esta postura relacionada con el estereotipo de que la víctima “*quiere venganza y no justicia*” fue detectado años atrás por la Fiscalía General del Estado y así se expuso en la Memoria de la Fiscalía General de Estado del año 2008⁵¹⁵.

Antes que nada, conviene precisar que el sentimiento de odio siempre aparece en la víctima proyectado hacia el responsable de su victimización. Esta

⁵¹⁵ BACA BALDOMERO, E. “*Los procesos de desvictimización y sus condicionantes y obstáculos*”, en BACA BALDOMERO, E., ECHEBURUA ODRIÓZOLA, E. Y TAMARIT SUMALLA, J. M. (coords.) Manual Victimología, Tirant lo Blanch, 2006, p. 272; Memoria de la Fiscalía General de Estado del año 2008; DOMÍNGUEZ IRIBARREN, F. “*El efecto sobre los terroristas del apoyo a las víctimas del terrorismo*”, en CATALA I BAS, A. H. (dir.). El reconocimiento de las víctimas del terrorismo a través de la legislación y la jurisprudencia, Colección Cátedra Abierta núm. 9, 2013, pp. 98-99.

reacción inicial negativa es una respuesta normal y habitual en toda persona afectada por agresiones humanas e incluso por hechos accidentales. No obstante, con el paso del tiempo, generalmente la víctima suele racionalizar este sentimiento y lo acaba convirtiendo en un deseo de justicia⁵¹⁶.

Si bien, la venganza va más allá del odio puesto que ese sentimiento se trata de materializar. La psicología cognitivo-conductual entiende la venganza como *"infligir daño a otros tras la percepción de un agravio por parte de otro"*, se trata en sí de un acto de represalia. Por lo tanto, es un sentimiento motivado, una respuesta a la agresión previamente recibida que aparece con un estado de sobrecarga emocional que contribuye a la activación de conductas agresivas con la finalidad de conseguir su meta de retribución o lo que es lo mismo la compensación que considera que merece. Este estado implica que el individuo: 1) experimente ira; 2) responsabilice al provocador o perpetrador y; 3) ve factible realizar el acto de venganza. El motivo de venganza es un presupuesto para el surgimiento de la agresión afectiva o reactiva que se refiere a las agresiones producidas para causar daño cuyo origen se encuentra en los impulsos⁵¹⁷.

Sin embargo, los referidos deseos de venganza no han aparecido en las víctimas del terrorismo y ello porque no existe constancia de que ninguno de los afectados se haya tomado la justicia por su mano, es más, todos han acudido a las vías establecidas legalmente para acceder a la justicia. Incluso se puede advertir que el recurso a este mecanismo social también es un instrumento que, en cierta medida, puede prevenir la aparición de este sentimiento⁵¹⁸.

⁵¹⁶ BACA BALDOMERO, E. Los procesos de..., cit., pp. 262-263.

⁵¹⁷ El motivo, explicado mediante los postulados de las teorías del impulso, es causar daño como consecuencia de los sucesos que han ocurrido en su entorno. En nuestro caso, la victimización terrorista que ha producido daños y dolor en muchas víctimas y personas cercanas podría convertirse en una premisa para que desarrolle actitudes de venganza; GAVIRIA STEWART, E., CUADRADO GUIRADO, I. Y LOPEZ SAEZ, M. Introducción a la Psicología..., cit., pp. 323-339.

⁵¹⁸ Tal y como señala DOMINGUEZ IRIBARREN nos encontramos en *"un país en el que ni una sola víctima se ha tomado la justicia por su mano, en un país en el que hemos oído a decenas de padres, esposas o hijos de los asesinados perdonar a los asesinos cuando todavía estaba caliente el cuerpo de su ser querido, en un país en el que ver a un asesino pedir perdón es algo insólito y en el que hasta hace poco no se hablaba de los mecanismos de alimentación del odio que impulsa a quienes matan"*; en DOMINGUEZ IRIBARREN, F. El efecto sobre los terroristas del apoyo..., cit., p. 99.

En la misma dirección, el propósito de la Memoria de la Fiscalía General del Estado ha sido desmitificar el estereotipo por cuando incide en que *"existe otro aspecto... que es conocer qué quiere realmente la víctima. El diagnóstico fue contundente: no quiere machacar, sólo pide justicia. En general no están interesadas en tomar decisiones contra el autor.*

También quieren información. El delito ha provocado la quiebra de la confianza en el ser humano. La capacidad de predecir no funciona ya. La información sobre lo que ha de suceder y cómo puede suceder, tiene un efecto indudable en la reconstrucción de todo lo que ha fallado. Pero la información ha de ser concreta, útil y escueta. Si se facilita información, el mundo vuelve a ser controlable y surge de nuevo la dignidad. Las víctimas que han tenido información, valoraba la psicóloga, cuando se dicta sentencia, aunque no esté de acuerdo, tienen más sensación de que se ha hecho justicia, y "puede pasar página"⁵¹⁹.

Por consiguiente, una vez que se observa que la búsqueda de la justicia de las víctimas ha relevado el estereotipo del deseo de venganza asociado a ellas, es el momento idóneo para humanizar el contacto de la víctima con el sistema judicial de acuerdo con las disposiciones de las Naciones Unidas. La incorporación de las medidas basadas en conceptos criminológicos puede promover la mejora del funcionamiento del sistema judicial puesto que con un trato más humano el afectado percibe un mayor apoyo y previene la victimización secundaria sin perjuicio de la resolución de la causa.

4.3.8. Victimización secundaria

La finalidad última de las Naciones Unidas consiste en hacer frente al impacto que causa en la víctima su paso por el sistema judicial o, dicho de otro modo, impedir la aparición o disminuir los efectos de la victimización secundaria.

⁵¹⁹ En la Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2008 se hizo referencia a la sección del Fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal del año 2007, en el que se contempla la visión de una psicóloga participante en una Jornadas para Fiscales acerca de los estereotipos existentes sobre las víctimas y la explicación que hace esta especialista sobre sus demandas.

Según el Manual de Justicia Sobre el Uso y Aplicación de la Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctimas de Delito y Abuso de Poder *"se refiere a la victimización que ocurre no como un resultado directo de la acción delictiva sino a través de la respuesta de las instituciones y los individuos hacia la víctima"*. Esta victimización para TAMARIT *"constituye un conjunto de coste personales que tiene para la víctima de un hecho delictivo su intervención en el proceso penal en el que éste es objeto de enjuiciamiento"*. La misma técnica la utiliza KUHNE cuando la explica como *"todas las agresiones psíquicas que la víctima recibe indefectiblemente tanto durante el periodo de investigación policial como a lo largo del procedimiento"*. Igualmente, VARONA la define como *"una falta de entendimiento del sufrimiento del impacto y las consecuencias de la victimización primaria manifestada mediante una serie de conductas o actitudes. Supone un daño añadido posterior al de la victimización primaria. El daño se debe principalmente a una actitud negligente o a una falta de humanidad que hace que la víctima se sienta cuestionada, confundida o agobiada por los trámites, o que reviva de forma innecesaria el suceso traumático sufrido. Produce sentimientos de soledad, incomprensión, falta de ayuda y desconfianza hacia las instituciones y ahonda o prolonga en el tiempo los efectos de la victimización primaria"*⁵²⁰. Así que se deduce que la víctima experimenta sentimientos negativos, de incomprensión y falta de humanidad a raíz del contacto que mantiene con las instituciones.

En el instante en que entran en contacto con el sistema judicial, todos los tipos de víctimas tienen como en común que se convierten en sujetos pasivos, e incluso, muchos de ellos se muestran disconformes al considerar que no reciben la suficiente información sobre el desarrollo de las diligencias policiales y judiciales. Además, durante la celebración del juicio se encuentran con el agresor y el grupo de simpatizantes que los apoyan y esta situación genera la sensación en la víctima de no sentirse apoyada ni escuchada en el proceso penal.

Sin embargo, la diferencia principal con el resto de víctimas la encontramos en que los propios acusados por delito de terrorismo no es que ni siquiera se

⁵²⁰ VARONA MARTINEZ, G. Guía general de buenas prácticas en el trato..., cit., p. 32.

sientan culpables, sino que en muchas ocasiones responsabilizan de sus actos a la propia víctima. El patrón conductual de estos agresores consiste en justificar su comportamiento, sentirse orgulloso de sus actuaciones y si no tienen argumentos para culpabilizar a la víctima se refiere a ella como un daño colateral de su finalidad.

La base de la prevención de la victimización secundaria que, en principio se puede aplicar a cualquier clase de hecho delictivo, consiste en formar a los profesionales que entran en contacto con la víctima. Aunque sería conveniente *"proveer apoyo y asistencia especial a los profesionales de asistencia a la víctima, que están constantemente expuestos a la angustia de las víctimas y pueden consecuentemente sufrir un trauma y estrés crónicos, además del hecho de que también pueden volverse víctimas"*. Trabajar con víctimas puede ser una labor muy gratificante a la vez que puede hacer surgir la sensación de vulnerabilidad en los profesionales que trabajan estrecha y continuamente con ellas, pues les puede acarrear desgaste, victimización vicaria, alteración de las creencias y fatiga de la compasión. Estar expuesto diariamente a las consecuencias de acontecimientos traumáticos y victimizaciones, puede influir en la aparición de un cansancio emocional, físico y mental que puede ir acompañado de alteraciones de sueño o dolores de cabeza, entre otros síntomas. Esta situación puede contribuir a que se vuelvan distantes e impersonales en los sucesivos contactos con otras víctimas, e incluso, sentirse irritados y ansiosos sobre todo durante su jornada laboral. A esto se le conoce como desgaste. Mientras que, la victimización vicaria surge en el momento en que experimenta las mismas reacciones que el superviviente. Por su parte, los profesionales que a su vez hayan sido victimizados corren un riesgo mayor de la alteración de sus creencias provocada por el desgaste y la victimización vicaria. Finalmente, el estrés traumático secundario manifestado en los profesionales se le conoce por la expresión fatiga de la compasión. Este estado es un claro reflejo de la incapacidad de poner

distancia con el relato victimal y la reacción manifestada por la víctima y la fuerte empatía que le ha generado ésta⁵²¹.

El acompañamiento de la víctima a lo largo del proceso penal les brinda la oportunidad de expresar sus sentimientos y quejas siempre que se evite la confrontación directa con el agresor y sus simpatizantes, pues mediante esta simple acción pueden equilibrar sus emociones y prevenir la cronificación de sus problemas.

Estas medidas son las que permitirán humanizar los recursos judiciales, de tal forma que, su correcta implementación pueda contribuir a prevenir la victimización secundaria permitiendo, a su vez, captar y atender las necesidades particulares de la víctima.

4.4. Derecho al reconocimiento

Al igual que ocurre en el derecho a la justicia, el objetivo del derecho al reconocimiento consiste en la atención y apoyo manifiesto de las instituciones hacia la víctima, aunque, en este caso, de un modo más amplio y no limitado al sistema judicial. De tal modo que, la finalidad última de las medidas que se contemplan bajo este derecho es la prevención de la victimización secundaria debido a que solamente puede ser causada por el sistema institucional.

4.4.1. Aproximación al derecho de reconocimiento

El derecho al reconocimiento expresamente conferido a las víctimas del terrorismo no sólo se refiere a las dimensiones de un concepto amplio de apoyo que se materializan, primero, en términos económicos a través de la articulación de un sistema de indemnizaciones y, segundo, en las ayudas ofrecidas dentro de los ámbitos sanitario, psicológico y educativo, sino que, principalmente incide en la incorporación de medidas de dignificación social como pueden ser la entrega

⁵²¹ Manual de Justicia sobre el Uso y Aplicación de la Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctimas de Delito y Abuso de Poder.

de condecoraciones y el apoyo a las entidades que defienden los intereses de las víctimas, entre otras⁵²².

Ciertamente, el mecanismo de medidas y prestaciones previsto en el texto legal es una muestra de la preocupación de la sociedad por las víctimas tras los periodos de olvido y desprecio en las que se han visto inmersas después de verse afectadas por el fenómeno terrorista. Y esta es la razón de que no se considere suficiente establecer un sistema indemnizatorio que comprenda tanto la vertiente material como la moral, sino que debe darse un paso más en el reconocimiento y dignificación de la memoria de las víctimas, puesto que, la medida de reivindicación de la memoria de los padecimientos sufridos injustamente es esencial para la recuperación, desvictimización y el inicio de una nueva vida de los afectados⁵²³.

4.4.2. Las direcciones del derecho al reconocimiento

El derecho al reconocimiento de las víctimas del terrorismo ha tomado dos direcciones convergentes y complementarias, por una parte, la vertiente individual dedicada exclusivamente a la persona a quien se le ha concedido la categoría de víctima del terrorismo y, en algunos casos, también incluye a las personas afectadas, ilesos y a los amenazados –sujetos que según la ley y reglamentos estatales merecen una especial atención-. Y, de un modo general, la perspectiva colectiva de este derecho está compuesto por un conjunto de medidas que pretenden ofrecer un reconocimiento especial a todo el colectivo afectado por el terrorismo.

Entre las medidas destacan, a nivel individual, la concesión de las tres categorías de condecoraciones y la posibilidad de baremar o de convertirse en un criterio evaluable ser víctima del terrorismo a efectos de su profesión, destino o lugar de residencia. Mientras que, en el nivel dedicado a todo el colectivo de afectados, se constituye el Centro Nacional para la Memoria –que por su finalidad

⁵²² FERNANDEZ COLLADOS, M. B. Medidas para la asistencia y atención..., cit., p. 233.

⁵²³ GARCIA MENGUAL, F. La incorporación de la protección de las víctimas..., cit., pp. 226-227.

de prevención terciaria se explicará dentro del derecho a la memoria-, se ha determinado un día de celebración de recuerdo y homenaje a ellas, se ha creado el Consejo vasco de participación y, finalmente, se ha establecido expresamente el derecho a la asociación de las víctimas.

Desde una perspectiva criminológica, una correcta implementación de las medidas previstas y, en algunos casos, con alguna aplicación correctiva que fuera necesaria se convertiría en una herramienta frente a la aparición y el mantenimiento de la victimización secundaria.

4.4.3. Condecoraciones

Las personas afectadas por el terrorismo tienen derecho a recibir una o varias condecoraciones, según el caso. A tal efecto, la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo cuyo fin es honrar a las víctimas del terrorismo comprende tres grados de la acción honorífica⁵²⁴:

- Gran Cruz que se concederá a título póstumo a los fallecidos en actos terroristas. Los titulares de esta distinción serán los familiares, convivientes o personas vinculadas mediante una relación de dependencia con la persona fallecida⁵²⁵.
- Encomienda, que se conferirá a quienes hayan padecido daños ya sean físicos o psíquicos de carácter permanente y a los secuestrados en acciones terroristas.
- Insignia, que se otorgará a los sujetos que hubieran acreditado su condición de amenazado, a los ilesos en atentados terroristas, y

⁵²⁴ Arts. 52 a 55 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

⁵²⁵ Arts. 4.2 y 17 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo que establece el orden de preferencia para ser titulares en los términos siguientes: “...a) El cónyuge de la persona fallecida, si no estuvieren legalmente separados, o la persona que hubiera venido conviviendo con ella de forma permanente con análoga relación de afectividad al menos los dos años inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieren tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia; y los hijos de la persona fallecida. b) En caso de inexistencia de los anteriores, serán destinatarios, por orden sucesivo y excluyente, los padres, los nietos, los hermanos y los abuelos de la persona fallecida. c) En defecto de los anteriores, los hijos de la persona conviviente y los menores en acogimiento familiar permanente de la persona fallecida, cuando dependieren económicamente de ella”.

además, a determinados familiares de los asesinados, a saber, su cónyuge o la persona ligada a él por análoga relación de afectividad, los padres y los hijos, los abuelos, hermanos y los nietos de los fallecidos, y a los familiares de los heridos hasta el segundo grado de consanguinidad que tuvieran lesiones incapacitantes en sus distintos grados, a efectos honoríficos.

El plazo determinado para presentar la solicitud de otorgamiento de la condecoración será de cinco años a partir de la producción de la acción terrorista o desde que la Administración Pública tuviera conocimiento de su producción. Si se propone la concesión de la Gran Cruz se resolverá mediante Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Interior, mientras que, si se tratara de las distinciones de la Encomienda o Insignia, la resolución le corresponderá al Ministro del Interior y será dictada en nombre de S. M. el Rey. Todas estas condecoraciones tendrán el carácter personal e intransferible⁵²⁶.

La Gran Cruz otorga tratamiento de excelencia y la Encomienda de ilustrísimo señor o ilustrísima señora, no obstante, su concesión no implica el surgimiento de derecho a ayudas o prestaciones. Una vez que se ha otorgado la

⁵²⁶El art. 62 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011, establece la descripción de las condecoraciones en los términos siguientes: *“Los distintivos correspondientes a los distintos grados de la Real Orden responderán a la siguiente descripción: a) Gran Cruz: Consistirá en una placa de 85 milímetros de diámetro total, de metal dorado formado por cuatro brazos hendidos a lo largo, iguales y simétricos, cuya parte central o llama va esmaltada en rojo. Alternándose con estos brazos llevará cuatro ráfagas bruñidas de cinco facetas. En el centro de la Cruz y en forma circular irá esmaltado el Escudo de España en sus colores y en la mitad del brazo superior de la misma, la corona real. En el reverso de la Gran Cruz se encontrará una corona circular, con bordes dorados de 1 milímetro, esmaltada en negro, de 35 milímetros de diámetro y 4 milímetros de grosor, donde constará grabada en letra dorada y mayúsculas la siguiente inscripción «reconocimiento y memoria», apareciendo una pequeña cruz latina en la parte inferior. En el interior se encontrará un círculo esmaltado en rojo de 17 milímetros de diámetro, con un cuadrado dorado de 10 milímetros en su interior. b) Encomienda: Consistirá en una placa de iguales características que las descritas para la Gran Cruz, con la diferencia de su tamaño, que será de 60 milímetros de diámetro. Se portará pendiente del cuello mediante una cinta de 45 milímetros de ancho con los colores de la Orden, rojo y blanco, midiendo las franjas blancas que ocupan los bordes de la cinta 4,5 milímetros. Todo el conjunto de la cruz pende de una corona de laurel en metal dorado. En el reverso de la Encomienda se encontrará una corona circular, con bordes dorados de 1 milímetro, esmaltada en negro, de 25 milímetros de diámetro y 4 milímetros de grosor, donde constará grabada en letra dorada y mayúsculas la siguiente inscripción «reconocimiento y memoria», apareciendo una pequeña cruz latina en la parte inferior. En el interior se encontrará un círculo esmaltado en rojo de 17 milímetros de diámetro, con un cuadrado dorado de 10 milímetros en su interior”*.

condecoración, la Cancillería de la Real Orden expedirá el título correspondiente, del mismo modo, todas las concesiones que se realicen quedarán recogidas en un Libro Registro⁵²⁷.

Sin embargo, no se le concederá la distinción que le pudiera corresponder a la víctima cuando quede acreditado que haya realizado comportamientos contrarios a los valores recogidos en la Constitución y a los Derechos Humanos reconocidos en los tratados internacionales, ya sea, durante su trayectoria personal o en su desempeño profesional⁵²⁸.

Además de las disposiciones referentes a las condecoraciones a nivel estatal, las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia han previsto la posibilidad de conceder, bajo determinadas condiciones, las distinciones honoríficas propias su región, sin embargo, tan sólo las dos últimas han desarrollado estos preceptos⁵²⁹.

Por su parte, la Generalitat podrá conceder distinciones y honores a las víctimas o entidades que hayan destacado con su labor de defensa y sacrificio contra el terrorismo. A tal efecto reguló el Decreto 63/2009, de 8 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el reglamento del procedimiento de concesión de la Distinción de la Generalitat a víctimas de actos terroristas o como reconocimiento por la lucha contra el terrorismo. La distinción podrá otorgarse, siempre que el acto terrorista que motive su entrega se haya producido en la

⁵²⁷ Art. 61 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

⁵²⁸ Apartado 2 del art. 53 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

⁵²⁹ Según el art. 26 de la Ley 10/2010, de 15 de noviembre, relativa a medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se podrán conceder distinción y honores a las víctimas, a las instituciones o entidades que hayan destacado por la lucha y sacrificio contra el fenómeno terrorista, para ello, se valorarán las circunstancias que aparezcan en cada caso. Si bien, las víctimas a las que se le vaya a conceder que sean o hayan sido cargo público tendrá un alcance significativo con la colocación de placas, nomenclatura o actos parecido. En un sentido similar, el art. 22 de la Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Aragón, establece que, le corresponde al Gobierno de Aragón, si así lo considera atendiendo las circunstancias, conceder a las víctimas, instituciones o entidades distinciones honoríficas como reconocimiento a su lucha y sacrificio por el fenómeno terrorista.

Comunidad Valenciana o el afectado tenga la condición política de valenciano,
a⁵³⁰:

1. Las personas que hayan resultado heridas o secuestradas a consecuencia de un acto terrorista
2. Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Autonómica y Local que hayan participado de manera relevante en la lucha o prevención del fenómeno terrorista, o en la defensa y protección de las víctimas y sus familiares mediante acciones solidarias y excepcionales o que impliquen riesgo más allá de sus obligaciones profesionales
3. Instituciones, entidades y personas que hayan desempeñado actividades significativas con el objetivo de paliar situaciones personales o colectivas de víctimas o afectados
4. Los profesionales que en el ejercicio de su actividad en momentos posteriores a la acción terrorista hayan intervenido de manera meritoria superando los límites de sus obligaciones

De manera que, se puede otorgar la Alta Distinción de la Generalitat, a título póstumo, a las víctimas del terrorismo que hayan resultado fallecidas a consecuencia de la acción terrorista. Hasta el día de hoy, estas condecoraciones han sido concedidas mediante el Decreto 191/2003, de 3 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se concede la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana, a título póstumo, a las víctimas del terrorismo. En segundo lugar por el Decreto 196/2009, de 30 de octubre, del Consell, por el que se concede la Alta Distinción de la Generalitat, a título póstumo, a las víctimas del terrorismo, y la Distinción de la Generalitat a víctimas de actos terroristas o en reconocimiento por la lucha contra el terrorismo y, finalmente, por el Decreto 42/2012, de 9 de marzo, por el que se concede la Alta Distinción de la Generalitat, a título póstumo,

⁵³⁰ Arts. 1, 2 y 3 del Decreto 63/2009, de 8 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento de concesión de la Distinción de la Generalitat a víctimas de actos terroristas o como reconocimiento por la lucha contra el terrorismo.

a víctimas de terrorismo, y la Distinción de la Generalitat a víctimas de actos terroristas o en reconocimiento por la lucha contra el terrorismo.

Asimismo, se ha otorgado la concesión de la Distinción de la Generalitat a los heridos o secuestrados por las acciones terroristas mediante el Decreto 179/2010, de 29 de octubre, del Consell, por el que se concede la Distinción de la Generalitat a víctimas de actos terroristas o en reconocimiento por la lucha contra el terrorismo y el Decreto 196/2009, de 30 de octubre, del Consell, por el que se concede la Alta Distinción de la Generalitat, a título póstumo, a las víctimas del terrorismo, y la Distinción de la Generalitat a víctimas de actos terroristas o en reconocimiento por la lucha contra el terrorismo.

Por otra parte, en virtud de la Ley 3/2015, de 17 de febrero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 8 de noviembre, de Honores, Condecoraciones y Distinciones de la Región de Murcia se crean dos condecoraciones honoríficas nuevas tras examinar que no existía hasta entonces ninguna distinción específica para homenajear la dignidad, coraje y esfuerzo de las víctimas del terrorismo y de aquellas persona que hubieran destacado en la lucha, prevención y ayuda a los afectados por el fenómeno terrorista. Esta regulación es fruto de la disposición de la Ley 7/2009, de 2 de noviembre, de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que establecía la posibilidad de concederles una condecoración honorífica⁵³¹. Concretamente se concederán⁵³²:

1. La Medalla a las víctimas del terrorismo de la Región de Murcia a las víctimas fallecidas, secuestradas o que hayan resultado heridas –de naturaleza física o psíquica- o con cualquier tipo de secuelas, siempre que la acción terrorista se haya producido en la Región de Murcia o el afectado tenga la condición política de murciano ya sea en el momento

⁵³¹ El art. 25 de la Ley 7/2009, de 2 de noviembre, de ayuda a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia dispone que: *“El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, previa valoración de las circunstancias que concurran en cada caso, siempre que exista una justificación fehacientemente demostrada, podrá conceder a las víctimas, así como a las personas, instituciones o entidades que se hayan distinguido por su lucha y sacrificio contra el terrorismo, los honores, condecoraciones y distinciones previsto en la Ley 7/1985, de 8 de noviembre, de Honores, Condecoraciones y Distinciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en el Decreto 25/1990, de 3 de mayo, por el que se desarrolla la misma”*.

⁵³² Arts. 1 y 2 de la Ley 3/2015, de 17 de febrero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 8 de noviembre, de Honores, Condecoraciones y Distinciones de la Región de Murcia.

en que se produjo el atentado o con anterioridad al 4 de diciembre del año 2009.

2. La Medalla de reconocimiento en la lucha contra el terrorismo de la Región de Murcia se otorgará a las entidades, instituciones, personas físicas o jurídicas que hayan realizado acciones significativas para minimizar las consecuencias negativas experimentadas por las víctimas o sus allegados o, en los momentos posteriores a la producción de la acción terrorista hayan ayudado con un carácter meritorio a los afectados⁵³³.

Además, con el propósito de cumplir con el programa de actuación llamado "Estrategia de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo de la Región de Murcia 2016-2020" se crea la "Tarjeta de Víctima de Actos Terroristas", "Tarjeta de Afectado por Actos Terroristas" y la "Tarjeta de Condecorado con la Medalla a las Víctimas del Terrorismo" como documentos acreditativos a los efectos de su reconocimiento como destinatarios de ayudas, prestaciones e indemnizaciones dentro del programa de actuación citado. Respectivamente, la primera se concederá, previa solicitud, a las víctimas de los actos terroristas con la condición política de murciano. Mientras que, la segunda se entregará a los afectados, es decir, a los familiares de las víctimas hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, cónyuge o persona que mantenga una análoga relación de afectividad. Y, finalmente, la Tarjeta de Condecoración le corresponderá a aquellos que

⁵³³ El Decreto número 12/2016, de 2 de marzo, por el que se modifica el Decreto 25/1990, de 3 de mayo, por el que se desarrolla la Ley 7/1985, de 8 de noviembre, de Honores, Condecoraciones y Distinciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia añade un nuevo art. 2 bis para establecer las características físicas, de inscripción y símbolos que portaran las medallas, así determina que: "1. La Medalla a las víctimas del terrorismo de la Región de Murcia consiste en una pieza metálica circular, de cinco centímetros de diámetro y anilla en su parte superior, que, sobre el campo de plata de filete brillante y fondo mate, llevará en relieve, en su anverso, el escudo de la Región y, orlando el campo, la siguiente leyenda perimetral en letras capitales latinas: <<Región de Murcia. A las Víctimas del Terrorismo>>. En su reverso, figurará el nombre de la persona galardonada. 2. La Medalla de reconocimiento en la lucha contra el terrorismo de la Región de Murcia tendrá las mismas características que la anterior, salvo la inscripción de la leyenda perimetral que será la siguiente: <<Región de Murcia. En reconocimiento por la lucha contra el terrorismo>>. 3. Las Medallas penderán de broche plateado y cinta de color azul marino en raso, de cinco centímetros de longitud y cuatro centímetros de anchura".

habiendo sido condecorados con la Medalla a las Víctimas del Terrorismo de la Región de Murcia no tengan la condición de murciano⁵³⁴.

Precisamente en la concesión de las distinciones honoríficas autonómicas es donde se puede apreciar una mayor desigualdad entre las normativas de protección de las víctimas pues solamente dos comunidades autónomas son las que han desarrollado su otorgamiento siempre que los fallecidos, heridos, amenazados y las personas o instituciones que hayan resaltado en la lucha o prevención contra el terrorismo tenga la condición política de la Comunidad Autónoma Valenciana o de la Región de Murcia o los hechos que hayan motivado su concesión se produjeran en su territorio.

4.4.4. La condición de víctima del terrorismo como criterio evaluable

A efectos honoríficos, la consideración de víctima del terrorismo podrá ser un criterio evaluable a tener en cuenta a la hora de conceder condecoraciones o, en su caso, las recompensas derivadas que pudieran corresponderle en virtud de su profesión, ocupación o lugar en el que tiene fijada su residencia⁵³⁵.

En el caso especial de los miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los empleados públicos les servirá de mérito especial y de condición relevante a efectos valorativos en la concesión de condecoraciones en sus respectivos ámbitos profesionales.

Por otra parte, se deja abierta la posibilidad de puntuar en las convocatorias de concurso de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de carrera la acreditación de la condición de víctimas del terrorismo

⁵³⁴ Orden de 6 de marzo de 2017 de la Consejería de Presidencia por la que se crean en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la “Tarjeta de Víctima de Actos Terroristas”, la “Tarjeta de Afectado por Actos Terroristas” y la “Tarjeta de Condecorado con la Medalla a las Víctimas del Terrorismo”.

⁵³⁵ Art. 55 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

o de amenazado, siempre y cuando, el acceso a la plaza en cuestión dependa de la protección y asistencia social del afectado⁵³⁶.

4.4.5. Actos de reconocimiento a las víctimas del terrorismo

Los poderes públicos serán los encargados de impulsar un conjunto de medidas activas para garantizar su recuerdo y reconocimiento dentro de un marco de respeto y dignificación creando canales que facilitarán su reconocimiento. Tales mecanismos pueden distinguirse en tres grupos, el primero de ellos, están constituido por los actos, símbolos, monumentos o elementos de similares características que tengan por objetivo reconfortarlas a nivel moral o restaurar el sistema de dignidad, reputación y derechos propios de este colectivo. En el mismo sentido, el segundo se refiere a la asistencia y presencia protocolaria de las víctimas en los actos institucionales que les afecten favorecerán su reconocimiento a nivel social. Por último, se ha determinado un día de celebración del recuerdo y homenaje dedicado a ellas. Se han concretado dos fechas en las que las instituciones realizarán actos para preservar su memoria e impulsar los principios éticos, concretamente, el día 27 de junio dedicado al recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo y el día 11 de marzo en el que se celebra el día europeo dedicado al colectivo⁵³⁷.

⁵³⁶ En este sentido, el art. 79 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, modificado por la disposición final 6.2 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, establece que: “1. El concurso, como procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo, consistirán en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos por órganos colegiados de carácter técnico. La composición de estos órganos responderá al principio de profesionalidad y especialización de sus miembros y se adecuará al criterio de paridad entre mujer y hombre. Su funcionamiento se ajustará a las reglas de imparcialidad y objetividad. 2. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto establecerán el plazo mínimo de ocupación de los puestos obtenidos por concurso para poder participar en otros concursos de provisión de puestos de trabajo. 3. En la convocatorias de concursos podrá establecerse una puntuación que, como máximo, podrá alcanzar la que se determine en las mismas para la antigüedad, para quienes tengan la condición de víctima del terrorismo o de amenazados, en los términos fijados en el artículo 35 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, siempre que se acredite que la obtención del puesto sea preciso para la consecución de los fines de protección y asistencia social integral de estas personas. Para la acreditación de estos extremos, reglamentariamente se determinarán los órganos competentes para la emisión de los correspondientes informes. En todo caso, cuando se trate de garantizar la protección de las víctimas será preciso el informe del Ministerio del Interior...”.

⁵³⁷ Arts. 58 a 60 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección a las Víctimas del Terrorismo y el art. 65 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el

En el mismo sentido, también se celebran encuentros, jornadas y encuentros en todo el territorio nacional. Entre ellas en el último anuario estadístico del Ministerio del Interior publicado se señala la reunión informativa que mantuvo la directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo y las dos subdirectoras generales con las víctimas de Canarias en la Delegación del Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria en 23 de marzo de 2015⁵³⁸.

Al mismo tiempo, los representantes de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo participan en actividades internacionales. A pesar de que no están dirigidas exclusivamente a las víctimas que residan en territorio nacional, es una forma de reconocimiento. En el año 2015, se celebró, entre otras, una mesa redonda en el Parlamento Europeo denominada "Victims' role in the prevention of radicalization" en la que intervinieron víctimas del terrorismo y europarlamentarios y, al día siguiente, se inauguró la exposición "Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado contra el terrorismo: un homenaje a la víctima"⁵³⁹.

4.4.6. La participación de las víctimas del terrorismo

Respecto a la participación, este principio se ha materializado en la creación del Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo. Su función primordial consiste en canalizar la participación de las víctimas en todos los ámbitos que les afecten, uno de los casos comprendidos será la posibilidad

Reglamento de la Ley 29/2011. El día 11 de marzo de 2017 la Asociación Víctimas del Terrorismo convocó un acto de homenaje a los fallecidos y heridos en acciones terroristas con el descubrimiento de una placa en Valencia. *"Es la consecuencia del acuerdo alcanzado entre la entidad y el Ayuntamiento, después del fallido intento en abril de 2016 de que saliera adelante la rotulación de una calle. En aquella ocasión, los partidos con representación municipal fueron incapaces de ponerse de acuerdo en algo tan sencillo (...) al final ha salido lo primero, en forma de placa en la base de una escultura dedicada a la paz y la concordia"*. disponible en: <http://www.lasprovincias.es/comunitat/201703/03/recuerdo-victimas-terror-20170303001328-v.html>. (Consultado el 01/04/2017).

⁵³⁸ Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, 2015, pp. 757-758.

⁵³⁹ Además, en el ámbito de las Naciones Unidas tuvo lugar una reunión especial del Comité contra el Terrorismo que se celebró en Madrid los días 27 y 28 de julio del año 2015 y, una sesión sobre víctimas del terrorismo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que participaron los ministros del Interior y de Asuntos Exteriores y Cooperación. Después, se inauguró la exposición "En pie de foto internacional. La mirada de la víctima" en la sede de las Naciones Unidas; en Anuario Estadístico del Ministerio del Interior..., cit., pp. 757-758.

de que propongan políticas de actuación en esta materia a las administraciones públicas. Esta entidad estará constituida por las asociaciones tanto de víctimas como pacifistas, cuya presidencia la ocupará una persona de reconocido prestigio elegida por consenso de las administraciones y de la sociedad civil. El derecho de participación se estima que juega un papel relevante en el transcurso de la reparación de las víctimas, por ello, tienen una especial consideración las asociaciones que representan sus intereses y dan voz a sus necesidades.

El Decreto 75/2016, de 17 de mayo, del Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo establece que las funciones del Consejo, que se reunirá dos veces al año en sesión ordinaria y en sesión extraordinaria siempre que fuera necesario, serán las siguientes⁵⁴⁰:

- a) Estar informados sobre los proyectos de disposiciones de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco relacionados con las políticas públicas de víctimas del terrorismo
- b) Encauzar las vías de comunicación entre las asociaciones de víctimas del terrorismo y las administraciones públicas vascas en materia de víctimas del terrorismo
- c) Sugerir criterios para repartir las ayudas y subvenciones públicas dirigidas a las organizaciones y asociaciones siempre y cuando desempeñen su actividad en materia victimal al Gobierno Vasco
- d) Ofrecer las iniciativas y propuestas pertinentes a fin de mejorar y avanzar en las políticas públicas de este colectivo a las administraciones públicas vascas
- e) Canalizar los modos de participación a las víctimas del terrorismo con el objetivo de escuchar, atender, orientar y asesorarlas de manera personalizada. Igualmente, también se atenderán sus sugerencias y reclamaciones

⁵⁴⁰ Art. 4 y 9 del Decreto 75/2016, de 17 de mayo, del Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo.

4.4.7. El derecho a la asociación

Cualquier asociación, fundación o entidad constituida en una *“organización de apoyo a las víctimas”* ha sido definida en virtud de la Decisión Marco del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativo al estatuto de la víctima en el proceso penal como *“organización no gubernamental constituida legalmente en un Estado miembro y cuyas actividades de apoyo a las víctimas de delitos, sean gratuitas y ejercidas en condiciones adecuadas, sean complementarias de la actividad del Estado en este ámbito”*⁵⁴¹.

La libertad de asociación ha permitido dotar a las asociaciones de víctimas del terrorismo de un papel muy importante pues se centran en la identidad común de todo el colectivo desempeñando su representación y la defensa de los intereses de sus afectados⁵⁴².

La primera exigencia para este tipo de asociaciones consiste en verificar que son de utilidad pública, y para ser consideradas como tales, deben cumplir los siguientes requisitos generales⁵⁴³:

⁵⁴¹ Art. 1.d) de la Decisión Marco del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal; MUÑOZ ESCANDELL, I. Los derechos de las víctimas del terrorismo..., cit., pp. 102-109.

⁵⁴² El art. 22 del Pacto de Derechos civiles y políticos establece que *“1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse entre ellos para la protección de sus intereses. 2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición de restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas y de la policía...”*. Por su parte, el art. 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales dispone que *“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho a fundar, con otros, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses. 2. El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la ley, constituyen medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos. El presente artículo no prohíbe que se impongan restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la Administración del Estado”*.

⁵⁴³ De acuerdo con el art. 32,1 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación: *“A iniciativa de las correspondientes asociaciones, podrán ser declaradas de utilidad pública aquellas asociaciones en las que concurren los siguientes requisitos: a) Que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general, en los términos definidos por el artículo 31.3 de esta Ley, y sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de víctimas del terrorismo, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de promoción y protección de la familia, de protección de la*

- a. La actividad de la asociación no se dirige exclusivamente a beneficiar a sus socios, sino que también pueden verse favorecidos de sus esfuerzos y labores cualquier otra persona que cumpla las condiciones exigidas de acuerdo con su finalidad
- b. En el caso de que los miembros que integren los órganos de representación de la asociación reciban retribución, ésta no puede provenir de fondos o subvenciones de naturaleza pública
- c. A fin de garantizar y asegurar el correcto desarrollo de los fines previstos en su estatuto deben contar con los medios personales y materiales idóneos
- d. Las asociaciones deben estar constituidas, esto es, se requiere que estén inscritas en el Registro que les corresponda y en funcionamiento ininterrumpido de manera que cumplan con sus objetivos previstos, o por lo menos, durante los dos años anteriores a la presentación de la solicitud

Las asociaciones, fundaciones y entidades, sin ánimo de lucro, que se dediquen exclusivamente a la representación y defensa de los intereses de las

infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a la personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza. b) Que su actividad no esté restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a cualquier otro posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos por la índole de sus propios fines. c) Que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo hagan con cargo a fondos y subvenciones públicas. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, y en los términos y condiciones que se determinen en los Estatutos, los mismos podrán recibir una retribución adecuada por la realización de servicios diferentes a las funciones que les corresponden como miembros del órgano de representación. d) Que cuenten con los medios personales y materiales adecuados y con la organización idónea para garantizar el cumplimiento de los fines estatutarios. e) Que se encuentren constituidas, inscritas en el Registro correspondiente, en funcionamiento y dando cumplimiento efectivo a sus fines estatutarios, ininterrumpidamente y concurriendo todos los precedentes requisitos, al menos durante los dos años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud”; GUTIERREZ PEREZ, M. Protección de las víctimas en los procesos..., cit., pp. 180-181.

víctimas del terrorismo podrán acceder a las subvenciones siempre que realicen alguna de las siguientes actividades⁵⁴⁴:

- Programas de desarrollo del movimiento asociativo. A efectos de si concesión se tendrá en cuenta tanto el número de víctimas y familiares asociados como la financiación propia de cada entidad de los gastos generales de funcionamiento y gestión y los derivados de actividades sobre sensibilización social

En cuanto al movimiento asociativo se priorizará la concesión de subvenciones a aquellas asociaciones que cuenten con un mayor número de asociados. El volumen de víctimas se hará público al órgano que vaya a dar la subvención mediante un procedimiento siempre con el consentimiento de los interesados, al igual que la labor que desempeñan desde dentro de la asociación a favor de las víctimas del terrorismo⁵⁴⁵.

- Programas de desarrollo del movimiento fundacional destinados a complementar la dotación fundacional y los gastos de las actividades de sensibilización social
- Proyectos de asistencia a favor de las víctimas del terrorismo y sus familiares en los ámbitos material, sanitario, psicológico, social, laboral o legal. Dentro de estos ámbitos se dirige sobre todo a las circunstancias de los afectados que no hayan quedado cubiertas por las ayudas ordinarias previstas en la ley o que se puedan atender de un modo más eficaz por esta vía

Asimismo, se exige que las entidades beneficiadas por las subvenciones cumplan con los siguientes requisitos⁵⁴⁶:

⁵⁴⁴ Bases tercera y cuarta de la Orden INT/2026/2012, de 21 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las convocatorias para la concesión de ayudas destinadas a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a las víctimas del terrorismo.

⁵⁴⁵ GUTIERREZ PEREZ, M. Protección de las víctimas en los procesos..., cit., p. 181.

⁵⁴⁶ Base quinta de la Orden INT/2026/2012, de 21 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las convocatorias para la concesión de ayudas destinadas a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a las víctimas del terrorismo.

- Estar legalmente constituidas y tener personalidad jurídica
- Su objeto exclusivo debe ser la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo
- Acreditar la representatividad de las víctimas que tiene su entidad y su capacidad para poder desarrollar la actividad por la que solicitan subvención
- Demostrar hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y sociales
- Haber justificado las ayudas recibidas por el mismo concepto previamente del Ministerio del Interior y no tener pendientes obligaciones de reintegro
- Contar con la estructura y la experiencia operativa necesarias para cumplir con los objetivos propuestos
- No estar inmerso en otras prohibiciones para obtener la condición de beneficiario

No obstante, en el ámbito autonómico también se prevén subvenciones de carácter anual para las asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro que las representen y defiendan sus intereses. A tal efecto se articulará un procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva valorando la adecuación de las propuestas presentadas y las finalidades, la capacitación organizativa, técnica y experiencia de la entidad y la representatividad e implantación social y territorial de la Comunidad Autónoma en cuestión⁵⁴⁷.

⁵⁴⁷ El procedimiento estipulado para la concesión de las subvenciones dispuesto en el Capítulo III del Decreto 89/2014, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las víctimas del terrorismo, se tramitará de acuerdo al régimen de concurrencia competitiva. Previamente a la presentación de la solicitud las entidades deben cumplir los siguientes requisitos: a) estar legalmente constituidas e inscritas en los Registros correspondientes; b) tener el domicilio social en el ámbito exigido; c) realizar actividades subvencionables; d) entre sus finalidades estatutarias deben constar la sensibilización social, ayuda, asistencia o representación de los intereses victimales; e) estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social; h) haber justificado las ayudas anteriormente recibidas. En el caso de que la entidad reciba subvenciones de otras administraciones, la del Gobierno de Aragón no será superior al 80% del coste de la actividad a desarrollar. La convocatoria se recogerá en el Boletín Oficial de Aragón a través de una Orden del Consejo de Presidencia y Justicia. En el plazo de 10 días hábiles desde su publicación, la entidad interesada dirigirá una única solicitud junto con la documentación requerida a la Secretaría

Los preceptos legales autonómicos son un reflejo del avance en la política de gestión de las políticas públicas sobre las víctimas del terrorismo, puesto que se plantea un sistema basado preferentemente en la colaboración de las instituciones y las asociaciones de víctimas. Las asociaciones se convierten en agentes activos en la atención de las víctimas. Este es uno de los motivos que han originado las decisiones de las administraciones de destinar recursos económicos a las actividades realizadas por las organizaciones en la medida en que cuenten con ciudadanos que padecieron las consecuencias terroristas en el territorio de su comunidad entre sus integrantes o habitualmente lleven a cabo actividades con este colectivo y su domicilio social se encuentre registrado en la comunidad autónoma. Los programas que pueden ser objeto de subvención tendrán que cumplir alguno de los siguientes fines, ya sea la atención, el apoyo humano, los acompañamientos a las víctimas, la orientación o su asistencia psicosocial, o por su parte, las actividades dirigidas a la organización de cursos, foros, seminarios, proyectos educativos o de promoción de los valores éticos y democráticos que tengan como objeto central esta materia⁵⁴⁸.

General Técnica del Departamento de Presidencia y Justicia. Si la documentación no fuera correcta se le requerirá que subsane en el plazo improrrogable de 15 días hábiles. Los criterios a efectos de valoración examinados por la Comisión de Valoración de todas las solicitudes presentadas serán las siguientes: a) el número de socios víctimas de las asociaciones cuyos atentados se hubieran cometido en el territorio autonómico de Aragón o tuvieran la condición política de aragoneses o, en los supuestos de otras entidades su experiencia y solvencia; b) los programas desarrollados durante los tres años anteriores; c) el proyecto que se presenta; d) los medios personales y materiales de la propia entidad destinados para el desarrollo del proyecto. El Servicio de la Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia y Justicia –órgano instructor- visto el expediente y el informe formulará la propuesta de resolución. La resolución definitiva comprenderá la resolución de las entidades subvencionadas y la cuantía otorgada, y la elevará al Consejero de Presidencia y Justicia. A propuesta de éste el Gobierno de Aragón mediante Acuerdo concederá las subvenciones en un plazo máximo de resolución y notificación de 6 meses y, asimismo, se publicará en el Boletín Oficial de Aragón. Las entidades deberán aceptar la concesión a través de un escrito dirigido a la Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia y Justicia en un plazo de 10 días desde la notificación del citado Acuerdo. Las entidades que hayan resultado beneficiarias estarán obligadas a: a) cumplir con el objetivo, desarrollo del proyecto y plazo; b) hacer constar los medios de difusión utilizados; c) someterse al control financiero de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón; d) comunicar la recepción de otras subvenciones con el mismo concepto; e) acreditar estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social; f) tener a su disposición los libros contables, registros diligenciados, documentos auditados y los justificantes de la aplicación de los fondos percibidos. La justificación, al final del ejercicio, quedará constatada con la presentación de la memoria explicativa y los gastos derivados.

⁵⁴⁸ Exposición de Motivos de la Ley 4/2008, de 19 de junio, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo.

En este contexto las asociaciones de las Comunidades Autónomas del País Vasco, Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón y Murcia registradas en ellas, con víctimas que hayan sufrido el fenómeno terrorista en su territorio o que desempeñen actividades en su territorio podrán tener las siguientes actividades subvencionadas⁵⁴⁹:

- a) Apoyo al movimiento asociativo, su funcionamiento, gestión, desarrollo de programas enfocados a la dignificación de las víctimas, educación y concienciación social;
- b) El auxilio técnico;
- c) Las tareas de asistencia legal, material, social y psicológica de las víctimas y los afectados;
- d) La formación y orientación de las propias víctimas con la finalidad de facilitar su reinserción

Sin embargo, quedarán excluidas del acceso a las subvenciones las entidades de derecho público, los partidos políticos, universidades, sociedades civiles y colegios profesionales⁵⁵⁰.

⁵⁴⁹ Art. 21 de la Ley 4/2008, de 17 de junio, de la Comunidad Autónoma de Aragón, de medidas a favor de las víctimas del terrorismo. Concretamente el apartado 2 del art. 13 de la Ley 1/2004, de 24 de mayo, de la Generalitat, de ayuda a las víctimas del terrorismo, en atención a las finalidades de las entidades, la Conselleria las podrá conceder a: *“a) Apoyo al movimiento asociativo, complementando y coadyuvando a la financiación, en parte, de los gastos generales de funcionamiento y gestión generados como consecuencia de las actividades dedicadas a la atención asistencial a las víctimas del terrorismo y de sus familiares, así como el auxilio técnico para el desarrollo de sus objetivos, o generados como consecuencia del desarrollo y ejecución de programas de actividades de dignificación de las víctimas, o actividades destinadas a la educación y concienciación social contra la lacra terrorista en cualquiera de sus manifestaciones, defendiendo los valores de convivencia pacífica y democrática. b) Ayudas dirigidas preferentemente a complementar la acción de la administración en el campo de la asistencia legal, material, social o psicológica de las víctimas, individual o colectivamente consideradas, con especial atención a aquellas situaciones que no pudieran atenderse con los tipos ordinarios de ayudas o que pudieran socorrerse de forma más eficaz a través de los programas de actuación de las asociaciones. c) Formación y orientación profesional a las víctimas del terrorismo en orden a facilitar la integración social”*. En sintonía con las anteriores, la ley andaluza contempla que las actividades subvencionadas deberán versar sobre: a) apoyo al movimiento asociativo, complementando y coadyuvando a la financiación; b) ayudas destinadas a complementar la acción asistencial ofrecida por la Administración en los campos de la asistencia legal, material, social o psicológica de las víctimas; c) formación y orientación profesional de las propias víctimas con tal de facilitarles su posible integración social.

⁵⁵⁰ Art. 20 del Decreto 109/2010, de 16 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 1/2004, de 24 de mayo, de la Generalitat, de ayuda a las víctimas del terrorismo.

4.4.8. Lectura criminológica de la labor de las asociaciones de víctimas del terrorismo

Las subvenciones destinadas a sufragar los gastos derivados de los programas de apoyo al movimiento asociativo, al movimiento fundacional y a los proyectos de asistencia a favor de las víctimas del terrorismo y sus familiares tienen como fin último la desvictimización de los afectados.

A pesar de que persiguen una encomiable labor, en muchos casos, adolecen en su estructura organizativa de un apoyo profesional fundamental para afrontar la asistencia y defensa de los intereses victimales, salvo alguna excepción.

En la mayoría de las asociaciones las personas encargadas de la atención a las víctimas –igualmente ocurre en otras asociaciones que apoyan a cualquier tipo de víctimas-, esto es, aquellas que reciben a la víctima y tratan de asesorarla en primera instancia. Es una víctima. Sin perjuicio, de que con posterioridad en ciertos casos que precisen asesoramiento legal o psicológico se les remita a profesionales en las citadas materias dado que las subvenciones sólo cubren un periodo temporal en el ámbito que, en su caso, se hubiera solicitado. Es cierto que, cualquier afectado que recurra a estas entidades se siente más reconfortado y comprendido cuando tiene delante a una persona que ha pasado por un suceso traumático muy parecido, no obstante, puede traer consigo algunos problemas.

Las víctimas que se encargan de asesorarlas, gratuitamente en la mayor parte de las ocasiones, no dejan de ser una víctima, es decir, tienen la experiencia de un hecho traumático por ello tienen empatía hacia los afectados, si bien, no son expertos en la reparación o desvictimización de una víctima.

Sería necesario y sumamente conveniente introducir de manera continua, y no de forma puntual como ocurre con los programas subvencionados de apoyo que los dirige una profesional en un periodo o los colabores que se puedan ofrecer a ayudarles, la figura del criminólogo. Este profesional está perfectamente capacitado para averiguar qué tipo de ayuda precisa el afectado que recurre a

estas entidades puesto que puede delimitar si la víctima está estancada en algún estadio del proceso de victimización, esto es, primaria, secundaria o terciaria y proceder en consecuencia. De tal forma que, los programas de asistencia generalmente subvencionados de naturaleza psicológica, legal y material respondan a la recuperación de la victimización primaria. Por su parte, en los supuestos en que detecte obstáculos en la superación de la victimización secundaria puede invitarles a los actos de homenaje que se celebren a favor del reconocimiento de las víctimas. Mientras que, si los impedimentos para completar su proceso de desvictimización están relacionados con la falta de apoyo social se le puede recomendar, cuando esté preparado, para relatar su experiencia victimal, aunque simplemente sea ante un pequeño grupo de víctimas.

De forma indirecta, la integración de este profesional que trabaja en la realidad social ofrecería la evidencia del estado actual de las víctimas sin que se pueda tildar a las demandas que realizan las entidades de víctimas de parciales y sesgados.

En definitiva, esta profesionalización de las entidades que se encargan del apoyo y defensa de los intereses victimales favorecería el estado de las propias víctimas.

4.5. Derecho a la dignidad

Los Preámbulos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos determinan que el reconocimiento de la dignidad inherente a todas las personas es la base fundamental de los derechos relativos a la libertad, justicia y paz y precisamente sobre él se han construido⁵⁵¹. Tomando como referencia estos postulados, el

⁵⁵¹ La Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 establece en su Preámbulo que “...la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966, expone que “...conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables”.

apartado 1 del art. 10 de la Constitución establece que *"la dignidad de la persona, los derechos que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y de la paz social"*. Como se puede observar la Constitución no dice qué ha de entenderse por dignidad; así que, hay que recurrir al Tribunal Constitucional para averiguar su significado, en este sentido, el Fundamento Jurídico 4º de la Sentencia del Tribunal Constitucional número 120/90 especificó que *"la dignidad (es) un mínimum invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar, de modo que, sean unas u otras las limitaciones que se impongan en el disfrute de derechos individuales, no conlleven menosprecio para la estima que, en cuanto ser humano, merece la persona"*⁵⁵².

De manera que, ese mínimum que integra la dignidad se materializa en los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente en el Título I, pues, el disfrute efectivo de esos derechos individuales son los que contribuirán al desarrollo de un clima en el que los principios más amplios de paz social, libertad, justicia y orden público rijan y guíen la sociedad, tal y como se desprende de la redacción de los textos anteriores.

Sin embargo, en el texto legal de asistencia y protección a las víctimas del terrorismo, el concepto relativo a la dignidad humana tiene una dimensión más amplia pues va más allá de la simple afección de los derechos fundamentales. La mera equiparación entre la vulneración de los derechos fundamentales y el quebranto de la dignidad humana no tiene sentido en este contexto, en la medida en que, estos derechos individuales constitucionalmente recogidos se intentan resarcir mediante las previsiones que conforman el derecho a la reparación. Por ello, teniendo en cuenta el hecho de que la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, nombra referentes cívicos a las víctimas del terrorismo en base al ataque a la dignidad que han recibido, esta afirmación implica necesariamente la presencia

⁵⁵² SANCHEZ GONZALEZ, S. *"Los derechos fundamentales en la Constitución española de 1978"*, en SANCHEZ GONZALEZ, S. (coord.). *Dogmática y práctica de los derechos fundamentales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pp. 23-25.

de algunas circunstancias especiales que las haga acreedoras de esta específica condición.

4.5.1. Fundamento criminológico del derecho a la dignidad

El fenómeno terrorista se caracteriza por utilizar a las víctimas como simples instrumentos para imponer su proyecto totalitario vulnerando en su cometido las bases del Estado de Derecho. Tal y como se refleja en la Comisión de Expertos para la definición del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo *"todas las víctimas son iguales en su realidad de víctimas. Es posible, sin embargo, establecer distinciones entre las víctimas: algunas lo son por ser símbolo del Estado que se ataca. Otras son víctimas aleatorias, víctimas que accidentalmente fueron objeto de una violencia terrorista que buscaba producir una masacre para obtener algún rédito político. Otras víctimas lo son porque a través de ellas, seleccionadas de forma discriminada, se busca atemorizar a todo un grupo social. Algunas lo son porque en ellas el terrorista quiere mostrar su fuerza y su capacidad de chantaje. Todas ellas están unidas en la intencionalidad política del terrorista"*. Esta intencionalidad política que subyace a sus acciones es la que consigue deshumanizar a las víctimas tanto al nivel físico de su individualidad como al nivel de su personalidad en el camino hacia su pretensión de negación del Estado de Derecho⁵⁵³.

La conversión de las víctimas en los medios para alcanzar sus objetivos políticos acrecienta ese sufrimiento padecido injustamente incluso más allá de las heridas físicas o psíquicas que pudieran haberles ocasionado. Esta deshumanización manifestada en su utilización instrumental es el fundamento del ataque a la dignidad humana establecido en el texto legal y, en suma, es el argumento esgrimido para hacerlas acreedoras de la condición de referentes cívicos en la defensa de los valores humanos⁵⁵⁴.

⁵⁵³ Comisión de Expertos para la definición del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, pp. 13, 27-29.

⁵⁵⁴ Comisión de Expertos para la definición del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, pp. 27-29.

El sufrimiento o menoscabo que padece el afectado por el fenómeno terrorista puede verse en cierta medida reflejado en las manifestaciones internas o externas producidas por los daños morales. A este respecto, la Audiencia Provincial de Salamanca en fecha 5 de febrero de 2009 sintetizó las principales ideas que han surgido en la evolución de la jurisprudencia sobre los daños morales: *"La doctrina jurisprudencial ha venido a establecer que la situación básica para que pueda darse lugar a un daño moral indemnizable consiste en un sufrimiento o padecimiento psíquico (SSTS de 22 de mayo de 1995, 19 de octubre de 1.996 y 24 de septiembre de 1.999), y como tal se ha referido al impacto psíquico o espiritual (STS de 23 de julio de 1.990), impotencia, zozobra, ansiedad, angustia (STS de 6 de julio de 1.990), la zozobra, como sensación anímica de inquietud, pesadumbre, temor o presagio de incertidumbre (STS de 22 de mayo de 1.995), el trastorno de ansiedad, impacto emocional, incertidumbre consecuente (STS de 27 de enero de 1.998), impacto, quebranto o sufrimiento psíquico (SSTS de 12 de julio de 1.999 y de 31 de mayo de 2.000). conforme señaló ya la STS de 25 de junio de 1.984, en el momento actual predomina la idea del daño moral, representado por el impacto o sufrimiento psíquico o espiritual que en la persona pueden producir ciertas conductas, actividades o, incluso, resultados, tanto si implican una agresión directa o inmediata a bienes materiales, como si el ataque afecta al acervo extramatrimonial o de la personalidad, y por ello la reparación del daño moral, si bien no atiende a la reintegración del patrimonio, va dirigida, principalmente, a proporcionar en la medida de lo humanamente posible, una satisfacción como compensación al sufrimiento que se ha causado. Y asimismo ha establecido la doctrina jurisprudencial que en la indemnización por daños morales su valoración no puede obtenerse de una prueba objetiva, sino que a tal efecto han de tenerse en cuenta y ponderarse las circunstancias concurrentes en cada caso (STS de 19 de octubre de 2.000)"*⁵⁵⁵. En definitiva, la deshumanización a la que se somete a la víctima conduce a que experimente situaciones de impotencia, inquietud, temor, angustia, ansiedad o padecimientos psíquicos, de modo que, el surgimiento de

⁵⁵⁵ CASADO ANDRES, B. *"El concepto del daño moral bajo el prisma de la jurisprudencia"*, Revista internacional de Doctrina y Jurisprudencia, volumen 9, 2015, pp. 21-22.

estos sentimientos son los que motivan la reparación que persigue, dentro del parámetro humanamente posible, la compensación al sufrimiento causado tal y como explica la sentencia citada. Y de ello se ha ocupado el legislador al incorporar un conjunto de medidas para contrarrestar el ataque a la dignidad de las víctimas.

A este sentimiento de cosificación que suele emerger en este colectivo hay que sumarle un segundo factor significativo para la instauración del sentimiento de deshumanización que sienten los afectados por el terrorismo que es el desinterés o la falta de entendimiento social que han despertado tradicionalmente.

En la mayoría de ocasiones, vivir un acontecimiento traumático lleva aparejada intrínsecamente la necesidad de compartir el suceso que ha experimentado la misma víctima con otras personas. A pesar de la aparición de esta necesidad inherente a la condición social del ser humano, es cierto que, no muchas de ellas se sienten animadas a relatar su vivencia y las secuelas que en su caso hayan desarrollado. El temor a que no le crean en su narración, que la culpen de aquello que le ha sucedido o que simplemente muestren indiferencia hacia ellas son las razones que explican que no lo compartan.

NOELLE-NEUMAM denominó "espiral del silencio" a las posturas de silencio o no manifestación de su opinión contraria acerca de los contextos caracterizados sobre todo por la producción de actos violentos o la aparición de agresiones. Esta falta de expresión conlleva una interpretación de apoyo o, por lo menos, de aceptación o no inmiscuición del clima de violencia. El mantenimiento de este escenario favorece la retroalimentación de la agresividad a la vez que va mermando la esperanza de las víctimas de conseguir respaldo por parte de la sociedad, y, cada vez más, son menos probables las corrientes en contra de la violencia, sino que contrariamente se desarrollan comportamientos defensivos de evitación de la posición y tolerancia hacia los agresores⁵⁵⁶.

⁵⁵⁶ GAVIRIA STEWART, E., CUADRADO GUIRADO, I. Y LOPEZ SAEZ, M. Introducción a la Psicología..., cit., pp. 328-329.

La dignidad de las víctimas se ve fundamentalmente afectada y mermada en la medida en que, con mejor suerte, son ignorados o, en el peor de los casos, son plenamente conscientes de que sus propios victimarios gozan de impunidad política y moral puesto que pueden contar libremente su experiencia en su mal llamada “lucha armada”, mientras que, las víctimas pasan a ser consideradas culpables⁵⁵⁷. En un contexto donde ha dominado la indiferencia o el desinterés hacia el fenómeno terrorista y, en particular, hacia las víctimas en el periodo en que sus actuaciones tuvieron su mayor índice de concentración ha influido en que las sensaciones que experimentan de impacto emocional, padecimiento psíquico, ansiedad o angustia –que son las que justifican la enunciación del derecho a la dignidad- sean muy complicados de reparar, incluso más que las lesiones físicas y psíquicas, debido a que, no simplemente han sido sus medios para llevar a cabo sus intenciones políticas sino que además se han visibilizado más apoyos hacia sus victimario que a ellos en un clima social de indiferencia⁵⁵⁸.

4.5.2. Regulación del derecho a la dignidad

En el Preámbulo de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, se han sistematizado las líneas definitorias del derecho a la dignidad, que pueden diferenciarse en un nivel individual y en otro colectivo, construidas en torno al trato correcto y respetuoso, el sistema de ayudas, prestaciones y condecoraciones y, por último, la relevancia de las asociaciones o entidades que defienden sus intereses.

En primer lugar, en un plano personal, la dignidad inherente a las víctimas las consagra y eleva a la consideración de referentes cívicos en la salvaguarda del sistema democrático, en la medida en que, representan los exponentes más básicos y claros de la defensa de la libertad y del Estado de Derecho frente al fenómeno terrorista. Como resultado del tratamiento de símbolo ético y

⁵⁵⁷ MALDONADO MONTOYA, J. P. “*Tutela institucional y apoyo a las víctimas del terrorismo*”, en SEMPERE NAVARRO, A. (dir.). Reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. Estudio de la normativa básica estatal y autonómica, Eolas Ediciones, 2014, p. 187.

⁵⁵⁸ MALDONADO MONTOYA, J. P. Tutela institucional y apoyo..., cit., p. 187.

benefactor de la democracia, el Estado asume la obligación para con ellos de garantizarles un trato correcto y respetuoso, si bien, no sólo se circunscribe simplemente a la concesión de los derechos que les corresponden, sino que también los hace extensivos a la articulación y aseguramiento del sistema de ayudas, prestaciones y condecoraciones previstos a tal efecto⁵⁵⁹. Aunque, las medidas de dignificación de las víctimas solamente se han hecho presentes en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, pues con anterioridad la Ley de Solidaridad no las contemplaba⁵⁶⁰.

El segundo principio definitorio de la dignidad de las víctimas significa convertirlas en símbolo de la defensa de la libertad propugnada por el Estado democrático de derecho frente a la amenaza terrorista. Los poderes públicos a través de la articulación del sistema de ayudas, prestaciones y condecoraciones contribuirán a este fin. Asimismo, reconocen un papel fundamental a las asociaciones, fundaciones y movimientos cívicos en el apoyo a las víctimas y sus familiares, por este motivo, les reconoce la condición de interlocutores legítimos y en la deslegitimación del terrorismo, y, por último, la visibilidad de las víctimas⁵⁶¹.

Sin embargo, de la explicación que ha ofrecido el legislador en el Preámbulo acerca de este derecho, tan sólo la garantía del trato correcto y respetuoso hacia las víctimas por parte de la sociedad en general y su consideración de interlocutores legítimos, en cuanto son ejemplos de la defensa de la libertad y del Estado de Derecho, responden estrictamente a la defensa de la dignidad. El resto de las precisiones que se han realizado sobre el sistema de ayudas, prestaciones y condecoraciones no intervienen de un modo directo en la protección de la dignidad.

Con el propósito de asegurar el trato respetuoso hacia este colectivo, han recibido una mención especial en la ley los derechos relativos al tratamiento de

⁵⁵⁹ Preámbulo de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

⁵⁶⁰ MALDONADO MONTOYA, J. P. Tutela institucional y apoyo..., cit., p. 222.

⁵⁶¹ Preámbulo de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

información articulados en un capítulo aparte. Además, la previsión de estos derechos es una manera de demostrar tanto el compromiso adquirido por la sociedad sobre su defensa y protección como de asegurar su perpetuación a lo largo del tiempo. A tal fin, los medios de comunicación fomentarán la protección de la imagen de la víctima y el tratamiento que se ofrezca sobre ella debe respetar los derechos humanos, la libertad y la dignidad. Especialmente se protegerá su intimidad sobre todo la relativa a los datos personales. Por lo tanto, se considerará ilícita la publicidad que contenga connotaciones vejatorias, despreciativas, sensacionalista o con ánimo de lucro en torno a las mismas. Ante esta publicidad, se prevén los mecanismos de cesación y rectificación, sin perjuicio, de las medidas que puedan adoptar las instituciones encargadas de velar para que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones conforme a los valores y principios consagrados en la Constitución⁵⁶².

A continuación, el texto legal señala las vías para hacer efectiva la dignidad pública de los integrantes de este colectivo. La defensa de la dignidad social la asume el Estado y, en base a esta obligación, concreta su actuación de prohibir mostrar elementos que inciten al elogio del fenómeno terrorista, sus grupos y sus miembros en público. Entre los elementos prohibidos se encuentran los monumentos, escudos, insignias, placas y, en sí, cualquiera otro objeto que pueda conmemorarlos en la vía pública. Las Administraciones Públicas puedan adoptar las medidas necesarias para retirarlos del espacio público sin perjuicio de las actuaciones de las víctimas y sus familiares para salvaguardar su derecho al honor y a la dignidad. Además, estas medidas impeditivas recaerán en aquellos actos públicos que supongan, por un lado, descrédito o humillación para el afectado y su entorno y, por otro lado, la exaltación de las motivaciones terroristas⁵⁶³.

Paralelamente en la legislación autonómica vasca, con miras a afianzar el respeto a la dignidad de las víctimas, los poderes públicos podrán utilizar los

⁵⁶² Arts. 42 a 47 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

⁵⁶³ Art. 61 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

mecanismos oportunos dirigidos tanto a garantizar un clima de seguridad, bienestar físico o psíquico general como a la prohibición de eventos o actos públicos que pudieran entrañar descrédito o menosprecio a este colectivo. Especialmente, en el ámbito judicial, las medidas irán encaminadas a evitar consecuencias traumáticas tras su paso por el sistema judicial. No obstante, siendo conscientes de que la adopción de estas medidas no es suficiente para asegurar el tratamiento con humanidad y respeto, se ha previsto el impulso y apoyo a las campañas de sensibilización y formación del personal que trabaja en los medios de comunicación a fin de que puedan proteger la intimidad y la imagen del círculo de las víctimas en sus informaciones. Este sistema de formación sería también aconsejable destinarlo a los integrantes de equipos encargados de la asistencia a las víctimas y a los profesionales que por su labor estarán en contacto con ellas, tales como, los miembros de la Administración de Justicia, servicios sociales y de la Policía del País Vasco⁵⁶⁴.

Por otra parte, su consideración de interlocutores legítimos en materia terrorista está relacionado con la tutela institucional. A estos efectos, el Ministerio del Interior se responsabiliza de mantener los cauces de ayuda y orientación centrados en la unidad victimal y en la formulación de propuestas acerca de la normativa u organización que puedan mejorar el régimen de protección y asistencia. Es fundamental esta labor para seguir en constante actualización de acuerdo a las nuevas necesidades a las que se pueden enfrentar los afectados en su día a día⁵⁶⁵.

Dentro de las funciones de asesoramiento, evaluación y colaboración institucional, el Ministerio otorga gran importancia a la elaboración de estudios e informes sobre la situación de las víctimas, las posibles mejoras legales de las medidas de protección y de asistencia. El informe realizado sobre las

⁵⁶⁴ La dignidad humana es la génesis de la construcción de la sociedad y sus instituciones, sobre sus cimientos se formularán los consensos valorativos y normativos propios de cualquier comunidad. La defensa de la dignidad es la clave para que se pueda reconocer los derechos y tenga lugar su plena consolidación, al mismo tiempo que, la otra consecuencia transita hacia el aseguramiento efectivo del desarrollo de cada persona en todos sus ámbitos; en Plan de Paz y Convivencia. Primera evaluación anual, Gobierno Vasco, p. 11.

⁵⁶⁵ Art. 62 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

circunstancias del colectivo se remitirá todos los años al Parlamento. Para llevar a cabo su preparación, el órgano de la Administración General del Estado podrá contar con el apoyo de las Comunidades Autónomas, entidades locales, agentes sociales y las asociaciones de víctimas. A este tipo de asociaciones, consideradas representantes de las víctimas, se le ha reconocido su significativa contribución a la causa, especialmente, en sus aportaciones de contribuir a la unión de todas las víctimas, la defensa de los intereses y la mejora de su condición y fomentar la concienciación social frente al terrorismo y el mantenimiento de la memoria. Por su destacado papel activo en este ámbito, desde las administraciones se favorece su creación y mantenimiento⁵⁶⁶.

De manera específica, los últimos preceptos reglamentarios se refieren a la tutela de las víctimas que comprende el informe de la situación de las víctimas del terrorismo y hace alusión a la Carta Europea de Derechos dedicada a este colectivo. Ciertamente, el Reglamento matiza que el canal a través del cual se recogerán las necesidades que se hayan detectado sobre sus circunstancias es la Fundación Víctimas del Terrorismo. Además, ha plasmado la disposición relativa a la Carta Europea en un artículo para articular que el Ministerio del Interior junto con las asociaciones más representativas elaboraría un borrador que elevarían a la Comisión Europea para el estudio y aprobación de una Carta Europea de Derechos de las Víctimas del Terrorismo⁵⁶⁷.

4.5.3. Finalidad criminológica del derecho a la dignidad: educación en valores

Como se ha puesto de manifiesto, el derecho a la dignidad expresamente reconocido a las víctimas del terrorismo es el resultado de su consideración de referentes cívicos y, precisamente, estos valores humanos que son los que les elevan a exponentes de la libertad y del Estado de Derecho deben impulsarse en

⁵⁶⁶ Art. 63 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

⁵⁶⁷ Arts. 66 y 67 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011.

los proyectos educativos con la finalidad de evitar futuras victimizaciones terroristas.

Asimismo, la educación en valores en el ámbito educativo permitirá preservar la dignidad de las víctimas. Las administraciones correspondientes deben apoyar los proyectos y planes sobre los valores de libertad, democracia y paz, entre los que sería preferible incluir testimonios directos para fomentar el respeto de los derechos humanos en general y específicamente los principios democráticos de convivencia y libertad. Al mismo tiempo, mirando hacia el futuro y la prevención de la victimización, la dignidad de las víctimas está vinculada directamente con las medidas relacionadas con la defensa de la libertad y los principios democráticos y, en este sentido, la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, ha establecido que *"las Administraciones educativas al objeto de garantizar el respeto de los derechos humanos y la defensa de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, impulsarán planes y proyectos de educación para la libertad, la democracia y la paz, en los que se procurará la presencia del testimonio directo de las víctimas del terrorismo"*⁵⁶⁸. Pues son ellas las que pueden inculcar estos principios de convivencia básicos⁵⁶⁹.

Una de las novedades de la ley es el Programa anual de Educación para la Paz y los Derechos Humanos para toda la ciudadanía navarra acerca de los valores democráticos, derechos humanos y no violencia que fomenta el Gobierno de Navarra. Su Departamento de Educación difundirá todos los años un programa educativo pensado para los centros de Educación Secundaria públicos y concertados acerca de la convivencia y la democracia ante el terrorismo.

⁵⁶⁸ Art. 59 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

⁵⁶⁹ El 10 de enero de 2017 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid analizó el informe de la futura Ley de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid. La comunicación oficial emitida al respecto, se especifica que *"el Ejecutivo regional incluirá contenidos relacionados con el terrorismo y las víctimas en el currículo correspondiente de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Además, impulsará charlas, visitas y actividades en los centros educativos dependientes de la Comunidad con el testimonio de víctimas, para informar y sensibilizar a los alumnos sobre el terrorismo y sus consecuencias"*.

Entre los objetivos de la educación para la paz y la convivencia se han establecido los siguientes⁵⁷⁰:

- Mostrar las condiciones por las que debe discurrir la convivencia humana pacífica
- Conocer, asumir y valorar los derechos y obligaciones consecuentes de la dignidad humana
- Educar desde la visión crítica con la finalidad de construir las bases de la justicia social y la convivencia pacífica
- Fomentar la adquisición de habilidades y actitudes para que se utilice la palabra para la defensa de las ideas
- Contribuir a la reflexión de las consecuencias de las conductas y acciones violentas o contrarias a la convivencia
- Fomentar la capacidad de la respuesta pacífica
- Contribuir a la capacidad de reconocimiento, solidaridad y reparación hacia las víctimas que hayan padecido de manera injusta la violencia

La tarea de transmitir los valores de libertad, democracia y paz dentro de la cultura de los derechos humanos está estrechamente vinculada con el relato de las actuaciones terroristas y las consecuencias que han generado. Sin embargo, la enseñanza de esta historia reciente plantea ciertos inconvenientes: *“¿Cómo enseñar lo inenseñable? ¿Cómo convocar al pasado sin que este se transforme en un lastre difícil de llevar? ¿Cómo encontrar en el pasado nuevos sentidos que doten de vitalidad al presente? (...) ¿Qué decir y cómo reflexionar sobre conductas violatorias de los Derechos Humanos? ¿Para qué y por qué hacerlo? ¿A través de qué recursos y estrategias? ¿Hay que recuperar el pasado como un texto completo, progresivo y lineal o aceptar que va a llegarnos con intermitencias, desde las brumas de la memoria? ¿Cómo lo interrogamos desde*

⁵⁷⁰ SERVICIO DE PARTICIPACION EDUCATIVA, ATENCION AL PROFESORADO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DEL GOBIERNO DE NAVARRA. Convivencia en paz y terrorismo. Un tema de hoy, Departamento de educación del Gobierno de Navarra, 2014, p. 14. Disponible en: [https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/584607/Convivencia+\(Bachiller\)%2003+marzo.pdf/eef3afd1-41b4-45b0-9c55-8c9144a8def5](https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/584607/Convivencia+(Bachiller)%2003+marzo.pdf/eef3afd1-41b4-45b0-9c55-8c9144a8def5). (Consultado 29/03/2017).

*el presente?*⁵⁷¹.

El principal obstáculo de la narración de esta parte de la historia y su consecuente enseñanza de los valores democráticos para evitar su no repetición en un futuro dentro de los currículos de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato se encuentra en la diferencia intergeneracional entre los jóvenes y la historia pasada sobre el fenómeno terrorista, y ello, provoca el problema añadido de entablar un diálogo entre el presente y el pasado, esto es, transmitir las experiencias pasadas y las enseñanzas relacionadas con esos hechos traumáticos a una generación que no ha vivido sucesos similares.

4.6. Derecho a la memoria

La memoria junto con los valores de dignidad, justicia y verdad forman las piedras angulares sobre las que se asienta y afianza el proceso de reparación integral de los individuos afectados por acciones terroristas. Este tipo de reparación representa la finalidad última de las normativas tanto estatal como autonómicas referidas a la protección y reconocimiento conferidos a las víctimas a quienes se les reconoce expresamente haber padecido en primera persona diferentes clases de violaciones de los derechos humanos⁵⁷².

En la dimensión de reconocimiento social se integra el valor relativo a la memoria que, a su vez, se halla intrínsecamente vinculado al derecho a la verdad. En una primera aproximación, la verdad se traduce en la obligación asumida por los poderes públicos de averiguar tres puntos: las causas de la victimización, quién ha sido el causante de la acción delictiva y, por último, determinar las víctimas, de tal forma que, éstas se sientan apoyadas por el sistema institucional. Además, a la hora de señalar qué ocurrió deben adoptar una posición firme de

⁵⁷¹ ROSEMBERG, J. Y KOVACIC, V. Educación, Memoria y Derechos Humanos. Orientaciones pedagógicas y recomendaciones para su enseñanza, Proyecto Multinacional “Memoria y Derechos Humanos en el Mercosur. Biblioteca y Materiales Didácticos”, marzo 2010, p. 17.

⁵⁷² CABRERA SUAREZ, L. A. El derecho a la memoria..., cit., p. 185; COMPANY ALCAÑIZ, M. “Un enfoque criminológico del derecho a la memoria de las víctimas del terrorismo”, en SILVA JUNIOR, D., MARTINEZ-ZAPORTA ARECHAGA, E. Y MOURA DE ARAUJO, D. (dirs.). Human rights and universal legal, Autografía, Barcelona, 2017, p. 225.

condena al terrorismo en cualquier de sus posibles manifestaciones. De igual manera, el relato del suceso que pone de manifiesto la violación de los derechos humanos dejará de lado, en consecuencia, las equidistancias de carácter político o moral, las ambigüedades y las neutralidades valorativas, ciñéndose en exclusiva a la valoración objetiva de los hechos⁵⁷³.

De modo que, la memoria consiste en la garantía no sólo de la lucha contra el olvido sino también el mantenimiento del recuerdo de las víctimas con un especial hincapié en el significado político que adquiere su victimización. Sin

⁵⁷³ El Informe de la Relatora explicó que “Louis Joinet, antiguo relator Especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, enumeró un conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, centrados en cuatro pilares: el derecho a saber, el derecho a la justicia y el derecho a obtener reparación, y las garantías de no repetición (E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1). El derecho a saber se define no sólo como el derecho de las víctimas individuales o sus parientes próximos a saber lo que ocurrió (el derecho a la verdad), sino también como un “derecho colectivo que hunde sus raíces en la historia, para evitar que puedan reproducirse en el futuro las violaciones” (párrafo 17). El principio 2 reza como sigue: “el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado. Esas medidas tienen por objeto preservar del olvido la memoria colectiva, entre otras cosas para evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas”. El Sr. Joinet afirmó la necesidad de adoptar medidas de preservación de la memoria colectiva: “A nivel colectivo, las medidas de carácter simbólico, en concepto de reparación moral, como el reconocimiento público y solemne por el Estado de su responsabilidad, las declaraciones oficiales de restablecimiento de la dignidad de las víctimas, los actos conmemorativos, los bautizos de vías públicas, y las erecciones de monumentos facilitan el deber de recordar” (ibid., párr. 42). Diane Orentlicher, Experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios del Sr. Joinet, que pasó a denominarse Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, con elementos similares sobre el deber de preservar la memoria (E/CN.4/2005/102 y Add.1). Los principios definidos en otros informes del Relator Especial de la Subcomisión, Theo van Boven (E/CN.4/1997/104), y el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos, Cherif Bassiouni (E/CN.4/2000/62), constituyeron la base de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobados por la Asamblea General en su resolución 60/147. En dicha resolución, la Asamblea General reiteró que los procesos de preservación de la memoria histórica se integran en la problemática general de las reparaciones y reconoció que la satisfacción de las víctimas había de incluir, cuando procediese y entre otros elementos importantes, la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad; una declaración oficial o decisión judicial que restableciese la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; una disculpa pública que incluyera el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades; conmemoraciones y homenajes a las víctimas; y la inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles”; en VARONA MARTINEZ, G. El derecho a la memoria de las víctimas del terrorismo, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria, 2015, pp. 18-19; Puntos 28 a 31 del Informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales, Farida Shaheed. Procesos de preservación de la memoria históricos de 23 de enero de 2014, 9-10; COMPANY ALCAÑIZ, M. Un enfoque criminológico..., cit., p. 226.

embargo, aquí no se agota su cometido pues va más allá buscando hacer realidad el merecido reconocimiento social del que son acreedores.

4.6.1. Significado del derecho a la memoria

Como se ha comentado en el apartado anterior hay que diferenciar nítidamente los derechos a la verdad⁵⁷⁴ y la memoria. El primero de ellos, entendido como el conocimiento de los hechos ocurridos, deriva de la necesidad básica de conocer con certeza las violaciones de derechos humanos producidas mediante las acciones terroristas, delimitar las verdaderas causas de victimización y avalar dicho reconocimiento social. Todo ello, siempre en beneficio de las víctimas y su entorno. Las medidas contempladas al respecto son: 1) garantizar su recuerdo y reconocimiento, contando en la medida de lo posible, con la presencia y participación de los propios afectados; 2) facilitar que las víctimas y sus familiares puedan, siempre que quiera, acceder a los archivos oficiales en los que consten datos o información ya sea para la defensa de sus derechos o con la finalidad de investigación histórica; 3) conseguir la identificación personal de la víctima en los supuestos en que no se haya identificado o su paradero no conste. Si bien, cuando el afectado resultare fallecido facilitarles la información del lugar en el que fue enterrado⁵⁷⁵.

⁵⁷⁴ En la Resolución 2005/66 relativo al derecho a la verdad adoptada en la 59ª Sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 20 de abril de 2005 se estableció que significa *“el derecho que asiste a las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos y violaciones graves de las normas internacionales de derechos humanos, así como a sus familiares, en el marco del sistema jurídico interno de cada Estado, de conocer la verdad sobre esas violaciones, en particular la identidad de los autores y las causas, los hechos y las circunstancias relacionados con las violaciones”*. Por su parte el Estudio sobre el derecho a la verdad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de 2006 indicó *“El derecho a la verdad entraña tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones perpetradas y su motivación. En los casos de desaparición forzosa, desaparición de personas, niños secuestrados o nacidos durante la cautividad de una mujer víctima de una desaparición forzosa, ejecuciones secretas y ocultación del lugar de sepultura de la víctima, el derecho a la verdad tiene también una faceta especial: el conocimiento de la suerte y el paradero de las víctimas”* (2009 y 2010); en MUÑOZ ESCANDELL, I. Los derechos de las víctimas del terrorismo..., cit., pp. 92-98; COMPANY ALCAÑIZ, M. Un enfoque criminológico..., cit., p. 228.

⁵⁷⁵ Art. 7 de la Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo del País Vasco; COMPANY ALCAÑIZ, M. Un enfoque criminológico..., cit., p. 230.

En cuanto al segundo, que significa el reconocimiento de los hechos ocurridos a nivel social, se trata de un presupuesto esencial para hacer posible la convivencia, la paz y la libertad. La memoria incluirá un aspecto objetivo consistente en la narración de las injusticias que han padecido las víctimas en las actuaciones terroristas. Junto a él, el componente subjetivo hará referencia a las personas que lo hayan padecido ya sean fallecidos, los heridos, secuestrados, extorsionados, amenazados y sus familiares. Además del conocimiento sobre los hechos incorporará, finalmente, la alusión al componente político, pues el objetivo de las acciones era eliminar las libertades básicas del Estado democrático de derecho y el derecho de la ciudadanía a la convivencia integradora. La memoria y su significación política contribuirán a la deslegitimación del terrorismo en sus facetas ética, social y política.

El derecho a la memoria tiene un trasfondo en la normativa internacional de los derechos humanos a pesar de que estrictamente no fue incluido como tal en el catálogo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Si bien, su fundamento básico debemos buscarlo en el reconocimiento de la dignidad humana. En este sentido, NEUMAN ya precisó que *"los términos dignidad humana o derechos humanos encierran conceptos de universalidad capaces de traspasar cualquier sistema político-social. Son valores idénticos que no sólo deben sentirlos todos los habitantes del planeta, sino hacerse efectivos por sobre las contradicciones de cualquier formulación o interés. Si tuviera que delimitar el concepto y sabiendo que las opiniones sobre ciertas cosas soy yo, y no las realidades de esas cosas, me animo a establecerlo por lo que es su ausencia o, mejor dicho aún, su contrario. En ese caso debo decir con Malraux: no sé muy bien qué es la dignidad humana; si conozco, bien, muy bien, lo que es la humillación"*⁵⁷⁶. Aquí se encuentra su importancia, el centro de la memoria es la afirmación de la dignidad humana de la víctima, el reconocimiento y consolidación de sus derechos y el rechazo firme a su efecto contrario, la humillación.

⁵⁷⁶ BERISTAIN, A. Y NEUMAN, E. Criminología y dignidad humana (diálogos), Depalma, Buenos Aires, 1989, pp. 2-3; COMPANY ALCAÑIZ, M. Un enfoque criminológico..., cit., p. 230.

La dignidad humana se encuentra en la génesis de la construcción de la sociedad y sus instituciones, sobre sus cimientos se formularán los consensos valorativos y normativos propios de cualquier comunidad. La defensa de la dignidad es la clave para que se puedan reconocer los derechos y tenga lugar su plena consolidación, al mismo tiempo que, la otra consecuencia transita hacia el aseguramiento efectivo del desarrollo de cada persona en todos sus ámbitos⁵⁷⁷.

El punto 13 del Informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos culturales referido a los procesos de preservación de la memoria histórica de fecha 23 de enero de 2014, presentado en el seno de las Naciones Unidas, esboza la función polifacética de la memoria. El enfoque temporal de las múltiples medidas abarca el pasado –el relato de los hechos, su recuerdo y homenaje–, el presente –restañar las heridas– además de que se debe mirar hacia el futuro –evitar nuevas manifestaciones mediante la educación en valores y la concienciación de las repercusiones negativas de los hechos desencadenantes–. De acuerdo con las dimensiones que se pretenden alcanzar implicará a la esfera privada e individual de las personas, esto es, su reflexión privada, si bien, también la dimensión social pues mediante su divulgación se empezará a recorrer el camino hacia una cultura de participación donde se pueda adoptar una postura crítica sobre los hechos ocurridos y la conveniencia de desterrar la violencia⁵⁷⁸.

Fundamentalmente, el derecho a la memoria representa la firme convicción de la sociedad española de recordar a las víctimas del terrorismo, a todos los que perdieron la vida, a los afectados por heridas físicas o psicológicas y quienes vieron perturbado su derecho a la libertad. En este reconocimiento prima ante todo el significado político de las actuaciones terroristas pues se convierte en una herramienta de justicia y con cierto carácter civilizador, de educación y fomentos de los valores esenciales de una sociedad democrática mediante la deslegitimización ética, social y política del uso de la violencia en su proyecto totalitario y excluyente.

⁵⁷⁷ VARONA MARTINEZ, G. El derecho a la memoria..., cit., pp. 17-19; COMPANY ALCAÑIZ, M. Un enfoque criminológico..., cit., p. 230.

⁵⁷⁸ Informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales, Farida Shaheed; COMPANY ALCAÑIZ, M. Un enfoque criminológico..., cit., p. 231.

En definitiva, la verdad trata de averiguar en qué consistió la actuación terrorista, cuáles son las causas de la victimización, quién la llevó a cabo y quién fue la víctima de la acción. En este sentido, a pesar que de no se indique de una manera expresa en los textos legales, principalmente, el derecho a la verdad queda reflejado en los documentos que consten en los archivos oficiales al respeto. Mientras que, la memoria, se interesa no sólo por el acto delictivo, qué ocurrió, quienes fueron las víctimas y las personas que los perpetraron en sí, sino que busca sobre todo el reconocimiento social de las víctimas con su consecuente expresión del significado político de su victimización. Esto es, va más allá del componente estrictamente objetivo para destacar los valores subjetivos de las acciones terroristas. La memoria puede convertirse en esencial para la recuperación de la víctima durante los procesos de victimización que atraviesa en su camino hacia su nueva vida. Así, la verdad pretende ofrecer un relato objetivo de lo ocurrido frente a la memoria que trata de mostrar un aspecto subjetivo de los hechos, no sólo qué pasó sino también los sentimientos, las emociones y las opiniones de las personas afectadas de una manera injusta.

4.6.2. Medidas del derecho a la memoria

Los poderes públicos tienen el deber de impulsar una serie de medidas con el objetivo de garantizar tanto el reconocimiento como el recuerdo dentro de los parámetros del respeto y la dignificación del colectivo de víctimas. De esta manera, enumera a efectos ejemplificativos la celebración de actos, o levantar monumentos, símbolos o similares, así como la creación del Centro Nacional de la Memoria para las Víctimas del Terrorismo cuyas finalidades estipuladas son las siguientes⁵⁷⁹:

- Transmitir los valores éticos y básicos de una democracia base de su reconocimiento
- Construir una memoria colectiva

⁵⁷⁹ GUTIERREZ PEREZ, M. Protección de las víctimas en los procesos..., cit., pp. 161-163; COMPANY ALCAÑIZ, M. Un enfoque criminológico..., cit., pp. 232-233.

- Transmitir la defensa de los derechos humanos y las libertades frente al terrorismo

También se introduce el deber protocolario de las instituciones de invitar a los actos que les puedan afectar a las víctimas del terrorismo, como medida a su vez favorecedora de su reconocimiento social y la determinación del día del recuerdo y homenaje, el día 27 de junio y el día europeo de las mismas el día 11 de marzo, cuya celebración persigue mantener su memoria y la reivindicación del valor ético que encarna⁵⁸⁰.

Finalmente, se pretende contar con la asistencia de víctimas directas para que puedan narrar su experiencia en los programas y planes educativos de las administraciones educativas siempre que tengan por finalidad la consideración y el respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y, especialmente, la defensa de la libertad, paz y convivencia. El testimonio de las víctimas pretende garantizar el respeto y el afianzamiento de los derechos humanos y la defensa de la libertad que se incluyen dentro de los principios democráticos de convivencia. El relato es el reflejo precisamente de la vulneración de los mismos⁵⁸¹.

4.6.3. Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo

Con la intención de asegurar la difusión de los valores democráticos y éticos que representan quienes han sufrido el fenómeno terrorista, constituir y mantener su memoria colectiva y, por último, concienciar a la ciudadanía en los parámetros de libertad y de los derechos humanos y frente a las actuaciones

⁵⁸⁰ GUTIERREZ PEREZ, M. Protección de las víctimas en los procesos..., cit., pp. 161-163; COMPANY ALCANIZ, M. Un enfoque criminológico..., cit., p. 233.

⁵⁸¹ GUTIERREZ PEREZ, M. Protección de las víctimas en los procesos..., cit., pp. 161-163; COMPANY ALCANIZ, M. Un enfoque criminológico..., cit., p. 233.

terroristas, se constituye el Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo⁵⁸².

En el año 2015, la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo (FCMVT) abrió sus puertas en la sede de Vitoria-Gasteiz en la Comunidad Autónoma del País Vasco, con el objetivo de *"ir más allá de la transmisión de información sobre lo acontecido en la historia del terrorismo en España... Ese más viene dado por la mirada de las víctimas y por lo vivido por las víctimas que recuerdan"*⁵⁸³.

La función del Centro Memorial es fomentar la mirada moral y la reflexión crítica desde el pasado hacia la construcción de un futuro más justo, libre y sin victimizaciones en el que las víctimas sirvan de recordatorio para que ningún proyecto político vulnere a las personas. A través del acercamiento de las experiencias de las víctimas y los tipos de terrorismo a la ciudadanía se pretende defender y asegurar el Estado de Derecho y sus valores cívicos, a la vez que, deslegitimar las justificaciones que se han manifestado a favor del terrorismo y el significado político de las víctimas⁵⁸⁴.

También está prevista una segunda subsede del Centro Memorial dedicada a las víctimas del terrorismo yihadista en Madrid. La ubicación de esta futura sede está justificada por el número elevado de víctimas del yihadismo provocado en Madrid tras los atentados del 11-M⁵⁸⁵.

Una de las medidas incorporadas con el objetivo de asegurar su recuerdo y reconocimiento, a la vez que, les reconforta a nivel social es la constitución de una exposición en el Centro de la Memoria. A tal fin la exposición permanente del Centro Memorial de Vitoria-Gasteiz busca producir una experiencia en el

⁵⁸² Art. 57 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección a las Víctimas del Terrorismo; DEFENSOR DEL PUEBLO. Estudios sobre los derechos de las víctimas..., cit., p. 44.

⁵⁸³ DEFENSOR DEL PUEBLO. Estudios sobre los derechos de las víctimas..., cit., p. 45; Comisión de Expertos para la definición del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, pp. 11-12; DOMINGUEZ, F. "El año de la creación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo", en Balance del terrorismo en España 2015, Cuadernos del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, núm. 1, Vitoria, 2016, p. 13.

⁵⁸⁴ Comisión de Expertos para la definición del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, pp. 15-16.

⁵⁸⁵ DEFENSOR DEL PUEBLO. Estudios sobre los derechos de las víctimas..., cit., p. 46; DOMINGUEZ, F. El año de la creación del Centro Memorial... cit., p. 16.

visitante y potenciar la idea entre los asistentes de que no pueden volver a suceder este tipo de victimizaciones puesto que no existe ninguna justificación ética, social y política del terrorismo, en la medida en que, su fin es destruir los valores, los derechos y las libertades de las sociedades democráticas. A lo largo de su recorrido se irá haciendo referencia cronológica a las víctimas del terrorismo, sobre todo, a sus testimonios y a la evolución política, las actitudes mostradas por la sociedad y las estrategias políticas, legislativas, policiales y judiciales que se han seguido en cada etapa⁵⁸⁶.

4.6.4. El relato directo de las víctimas del terrorismo

Después que las instituciones jurisdiccionales determinen la verdad de los hechos mediante la aplicación de los mecanismos de prueba del derecho, es la hora de que la sociedad empiece a construir la memoria y una de esas prácticas es el testimonio de las víctimas a través de su relato⁵⁸⁷.

El relato, contado por supervivientes o allegados que hayan vivido en un clima de silencio o miedo propio de las victimizaciones terroristas, consiste en la construcción reflexiva de la vivencia del sobreviviente⁵⁸⁸.

⁵⁸⁶ Atendiendo al hilo argumental se prevén incorporar las siguientes salas: a) Sala con la idea y realidad del zulo para transmitir la imagen y la experiencia de un zulo junto con el bullicio de manifestaciones y los gritos en contra del españolismo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este espacio se incluirán imágenes de secuestrados, de agujeros producidos por bombas y cintas rotas de film que simbolizan las vidas de las víctimas; b) Sala del bosque, que busca simbolizar mediante una analogía las vidas sesgadas y los árboles talados –árboles con las caras de las víctimas-; c) La sala del agujero-zulo de la soledad trata de acercar la soledad que experimentaron los familiares de las víctimas asesinadas sobre todo durante los funerales sin acompañamiento social; d) La sala del silencio de la sociedad representa el silencio de la sociedad vasca tras un asesinato y después de una breve pausa en silencio vuelve la normalidad; e) Sala del Parlamento y su negación, donde va ganando terreno el color de los terroristas y sus simpatizantes frente a otras personas representadas por otros colores y, cuando estas últimas van cayendo por los márgenes su color se vuelve rojo emulando a la sangre; f) En la sala de los procesos de toma de decisión aparecen imágenes de conversaciones cruzadas y da paso a una imagen del parlamento donde se debate de forma ordenada. Esta secuencia se confronta con otra seria desde la imagen de conversaciones cruzadas hasta otra en la que se impone una voz cuyo portador pone una pistola sobre la mesa...; en Comisión de Expertos para la definición del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, pp. 26-31.

⁵⁸⁷ CALVEIRO, P. *“Testimonio y memoria en el relato histórico”*, Acta Poética 27(2), otoño 2006, p. 69; COMPANY ALCAÑIZ, M. Un enfoque criminológico..., cit., p. 234.

⁵⁸⁸ CALVEIRO, P. Testimonio y memoria..., cit., pp. 70-79; COMPANY ALCAÑIZ, M. Un enfoque criminológico..., cit., p. 234.

Conviene precisar que para lograr la correcta trasmisión de la experiencia victimal, el narrador no debe centrarse exclusivamente en el daño que le han causado, en describir el *"terror específico, inscrito sobre su cuerpo de manera cuidadosa y sistemática"*, pues además de ello es necesario plasmar la historia que subyace a la acción terrorista de una manera abierta, explicando las circunstancias que rodearon los hechos tanto antes como después de su producción. La razón reside en conseguir que los propios oyentes, prioritariamente otras víctimas y sus familiares más allegados, la comunidad directamente afectada por el fenómeno terrorista y, especialmente, los jóvenes durante su proceso de educación en valores, sean capaces de formar parte de esa historia, esto es, que en cierto modo se pongan al mismo nivel que la víctima⁵⁸⁹.

Sin embargo, el relato de un suceso traumático no tiene la mera función de contar una historia. El testimonio tiene la capacidad de vincular la experiencia con la razón crítica. Por una parte, la narración consigue que la propia víctima revise su experiencia traumática, le permite pensar en otras visiones acerca de lo ocurrido, barajar otras posibles explicaciones, y consecuentemente, dar un paso hacia delante en su recuperación incorporándolo a sus vivencias personales en vez que suponga un lastre para toda su vida. Por otra parte, el punto de vista reflejado en el relato ayuda y favorece la reflexión crítica del auditorio acerca suceso traumático, le invita a compartir postura y abrir nuevos enfoques de análisis de la experiencia y la trascendencia que pueden tener las victimizaciones en un futuro⁵⁹⁰.

⁵⁸⁹ Punto 94 del Informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales, Farida Shaheed; CALVEIRO, P. Testimonio y memoria..., cit., pp. 78-84; COMPANY ALCAÑIZ, M. Un enfoque criminológico..., cit., p. 234.

⁵⁹⁰ CALVEIRO, P. Testimonio y memoria..., cit., pp. 70-84; *"Para muchas víctimas, la experiencia de la victimización es un evento inesperado que interrumpe sus vidas y las víctimas pueden sentirse abrumadas por su aparente pérdida de control (...) Esta etapa de relatar lo sucedido y validación provee a las víctimas de una oportunidad de expresar sus sentimientos y sus experiencias, y relatar su "historia" (...). Mientras que el proceso de permitir a los sobrevivientes "contar su historia" puede parecer un concepto simple, el proceso no es fácil. Las víctimas pueden necesitar decir su historia una y otra vez, el proceso repetitivo es un modo de juntar las piezas y organizar cognitivamente el hecho, de manera que pueda ser integrado en sus vidas. La primera memoria del hecho probablemente este estrechamente focalizada en una percepción sensorial o una actividad particular que ocurrió durante el delito (...). A medida que el tiempo pasa, la memoria revelará otras partes del hecho. Estos pedazos de memoria volverán como sueños, pensamientos intrusos y simplemente en el proceso de contar la historia. La historia de la victimización probablemente*

De esta manera, aunque siempre y cuando sea posible es preferible contar con varios testimonios para que el auditorio pueda conectar los elementos comunes de todas las experiencias, un solo relato sirve para mostrar una realidad ajena que reclama cierta validación social para que sean capaces de *"desanda(r) el camino del silenciamiento y el olvido para emprender el difícil camino de la memoria"*⁵⁹¹.

4.6.5. La empatía: una interpretación criminológica de la memoria

Actualmente, el término empatía se utiliza constantemente en las relaciones cotidianas de la vida como sinónimo de "ponerse en lugar del otro". Sin embargo, la literatura en este campo ha señalado ciertas características más que integran su definición. De hecho, este estado afectivo, de una manera sucinta y sin entrar en debates, se refiere a la capacidad que poseen los individuos a la hora ya sea de inferir o experimentar las emociones o pensamientos de la persona que observan. Esta situación de observancia y escucha activa producen sentimientos de simpatía, comprensión y ternura en quien atiende⁵⁹².

cambiará a lo largo del tiempo a medida que las víctimas sepan cosas nuevas y usen la información para reorganizar sus memorias (...). El poder descubierto en poner los sentimientos y hechos en palabras es extraordinario. Existe a menudo una profunda emoción en contar a otra persona que un ser querido ha muerto, aun el mencionar el nombre del ser querido. Las palabras exactas para describir los hechos y experiencias son a menudo muy importantes, por ejemplo, llamar delitos por conducción en estado de ebriedad "choques" en vez de accidentes"; en el apartado C) del Capítulo II del Manual de Justicia sobre el Uso y Aplicación de la Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctimas de Delito y Abuso de Poder; COMPANY ALCAÑIZ, M. Un enfoque criminológico..., cit., pp. 234-235.

⁵⁹¹ CALVEIRO, P. Testimonio y memoria..., cit., pp. 67-79; COMPANY ALCAÑIZ, M. Un enfoque criminológico..., cit., p. 235.

⁵⁹² Es cierto que existen multitud de definiciones sobre este término, si bien, la comúnmente aceptada es la siguiente: *"la acción y la capacidad de ser sensible a, comprender o darse cuenta de, los sentimientos, pensamientos y experiencias de otra persona, sin que esos sentimientos, pensamientos y experiencias hayan sido comunicados de una manera objetiva o explícita"*. En ella, se destaca que no hay una simple vía para transmitir un pensamiento o una vivencia pues además de la comunicación oral o escrita la expresión corporal tiene un importante poder de comunicación de sentimientos y emociones. Y, como destacaría MORENO, es una interacción, es *"un encuentro de dos frente a frente; y cuando tú estés cerca, yo tomaré tus ojos y en su lugar colocaré los míos, y tú tomarás mis ojos, en su lugar pondrás los tuyos; entonces yo miraré en ti con tus ojos y tú mirarás en mí con los míos"*; en OLMEDO CARRILLO, P. Y MONTES BERGES, B. *"Evolución conceptual de la empatía"*, Iniciación a la Investigación, núm. 4, 2009, pp. 1-4. Disponible en: <http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/ininv/article/view/307/289>. (Consultado el 17/12/2016); GONZALEZ DE RIVERA Y REVUELTA, J. L. *"Empatía y ecpatía"*, Psiquis, núm. 25(6), 2004,

Dentro de esta capacidad suele distinguirse dos clases: la empatía cognitiva y la empatía emocional. El significado de la primera consiste en ponerse en lugar del otro, esto es, adoptar la posición o punto de vista de la otra persona, que coincidiría plenamente con el sentir cotidiano de la expresión. Asimismo, la empatía emocional presente, a su vez, dos direcciones, la primera, referida a la acción de experimentar las mismas respuestas emocionales que otra persona – llamada empatía paralela- frente a la denominada empatía reactiva que consiste en reaccionar de una forma emocional ante las experiencias que la otra persona viva o haya vivido.

De acuerdo con la finalidad del derecho a la memoria, traspasando el ámbito legal y tomando en cuenta un enfoque más cercano al individuo, más humano y propio de la realidad, descendiendo, por tanto, a un terreno individual en el que se tenga en cuenta a la víctima, cabe remarcar que uno de los principales componentes, o mejor dicho aún, la finalidad misma del derecho a la memoria materializado en los discursos de las víctimas es la búsqueda de la empatía cognitiva de la sociedad y sobre todo de las generaciones que no han vivido la lacra terrorista. El relato victimal se convierte en el máximo exponente de la memoria.

Una lectura propia del campo criminológico no se fija tanto en el merecido reconocimiento social de este colectivo, sino que ve en el trasfondo de este derecho una herramienta de utilidad bidireccional tanto para la sociedad como para la propia víctima.

La memoria, representada por la voz de las víctimas, supera el ámbito del derecho a la verdad que comprende de una manera objetiva los hechos ocurridos, quienes son las víctimas y las circunstancias del evento criminal; no le interesan tanto estos aspectos sino poner voz a las personas que se vieron injustamente involucradas en los sucesos. La vivencia victimal, la historia detrás de ella y su vida tras el suceso traumático humanizan a un auditorio. Consiguen crear en la mayoría de los casos un nexo empático, un vínculo de valores para no volver a

pp. 243-245; GAVIRIA STEWART, E., CUADRADO GUIRADO, I. Y LOPEZ SAEZ, M. Introducción a la Psicología..., cit., pp. 290-295; COMPANY ALCAÑIZ, M. Un enfoque criminológico..., cit., p. 235.

cometer los errores ocurridos en el pasado. La competencia emocional de la empatía se alcanza mediante la escucha activa, la comprensión y la asertividad de los oyentes. De esta manera, se convierte la empatía en una herramienta útil de construcción de la memoria y su perpetuación a lo largo del tiempo. Es necesario para llevar a este derecho a la práctica conocer a las víctimas, saber cuáles son sus sentimientos y la atención que precisan, en definitiva, ver con sus propios ojos su historia de victimización no buscada⁵⁹³.

4.6.6. Hacia la recuperación de la víctima

Como se ha puesto de manifiesto en apartados anteriores, los valores de justicia, dignidad, verdad y memoria son básicos en la consecución de la reparación de la víctima. Es cierto que, conforme se han aprobado las sucesivas normativas reguladoras se ha incidido en el hecho de que no basta con el resarcimiento económico, sino que se contempla un concepto amplio de reparación integral que abarca asimismo el reconocimiento moral que merecen⁵⁹⁴.

A estos efectos, la normativa vasca en el art. 5 de la ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, establece que:

"1.- Los poderes públicos vascos, con base en el principio de solidaridad con las víctimas y por medio del sistema de asistencia integral previsto en el título III de esta ley, promoverán una reparación efectiva e integral a las víctimas del terrorismo, arbitrando medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, atención y satisfacción moral.

2.- La aplicación del sistema de asistencia integral previsto en el título III de esta ley atenderá prioritariamente a los siguientes principios y finalidades:

⁵⁹³ CARUANA VAÑO, A. Y TERCERO GIMENEZ, M. P. (coords.) Cultivando emociones. Educación emocional de 3 a 8 años, Generalitat Valenciana. Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, Valencia, 2011, p. 166; COMPANY ALCAÑIZ, M. Un enfoque criminológico..., cit., p. 237.

⁵⁹⁴ Preámbulo de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo.

a) Procurar, en la medida de lo posible, la devolución a la víctima a la situación anterior a la provocación del daño.

b) Favorecer el restablecimiento de la libertad, identidad, vida familiar, social y política de la víctima.

c) Promover el regreso de la víctima a su lugar de residencia y la reincorporación a su empleo en condiciones adecuadas o, en su caso, el cambio de residencia y una política favorable a su integración laboral.

d) Garantizar la accesibilidad a las prestaciones del sistema de protección y asistencia con la máxima celeridad requerida por la situación de la víctima.

e) Atender a los distintos ámbitos que afectan a la vida cotidiana de la víctima, para la creación de condiciones de bienestar que palién el daño ocasionado por el acto terrorista en estos ámbitos.

3.- *Las medidas reparadoras comprenden igualmente el impulso de un conjunto de actuaciones públicas destinadas a proporcionar a las víctimas una satisfacción moral y restablecer públicamente su dignidad, reputación y derechos. Así, se promoverá de manera consensuada con las propias víctimas y con sus asociaciones, en su caso, la realización de ceremonias de homenaje, la erección de monumentos conmemorativos, las iniciativas a nivel local que busquen el reconocimiento y la empatía con las víctimas del terrorismo, la presencia del testimonio de las víctimas en proyectos de educación para la paz y la convivencia, así como otras expresiones de carácter simbólico a través de las cuales se manifieste el apoyo y reconocimiento social, ético y político a las víctimas del terrorismo”.*

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la reparación consiste en las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, atención y satisfacción moral, la memoria contribuye sobre todo a la rehabilitación y satisfacción moral, puntos esenciales en el proceso de desvictimización de la víctima o lo que es lo mismo su reparación.

Los relatos victimales a la vez que contribuyen a la construcción de la memoria del fenómeno terrorista ocurrido en España también puede ejercer efectos positivos tanto en la víctima directa como en la víctima indirecta en la medida en que una vez que son capaces de transmitir su experiencia a un auditorio, en la mayoría de los casos, los oyentes devuelven el significado que han buscado trasladar. De esta manera, el reconocimiento que les brindan con su empatía y comprensión del suceso traumático por el que han pasado, se traduce en un avance en el proceso lógico de reparación. El reconocimiento y comprensión son las herramientas más útiles para evitar que se perpetúen el olvido, la incomprensión y el silencio por el que han pasado o tienen la impresión incluso, actualmente, por el que están pasando.

Así, una manera de averiguar la efectividad del relato victimal integrado entre las actuaciones de la memoria es la medición de la victimización tanto antes como después de que narren su experiencia ante un grupo de oyentes siempre y cuando tengan estabilizada su línea base.

En este sentido, las Jornadas dedicadas a los Guardias Civiles Víctimas del Terrorismo, celebradas en Madrid en mayo de 2016, constituyeron una excelente oportunidad para comprobar la efectividad del indicado relato representado por la narrativa experiencial de dos víctimas.

Hay que tener presente que se debe medir precisamente la victimización terciaria pues dentro de ella se encuentra el reconocimiento por parte de su familia, amistades, el entorno laboral y el resto de los integrantes de la sociedad. De esta manera se pudo comprobar lo siguiente:

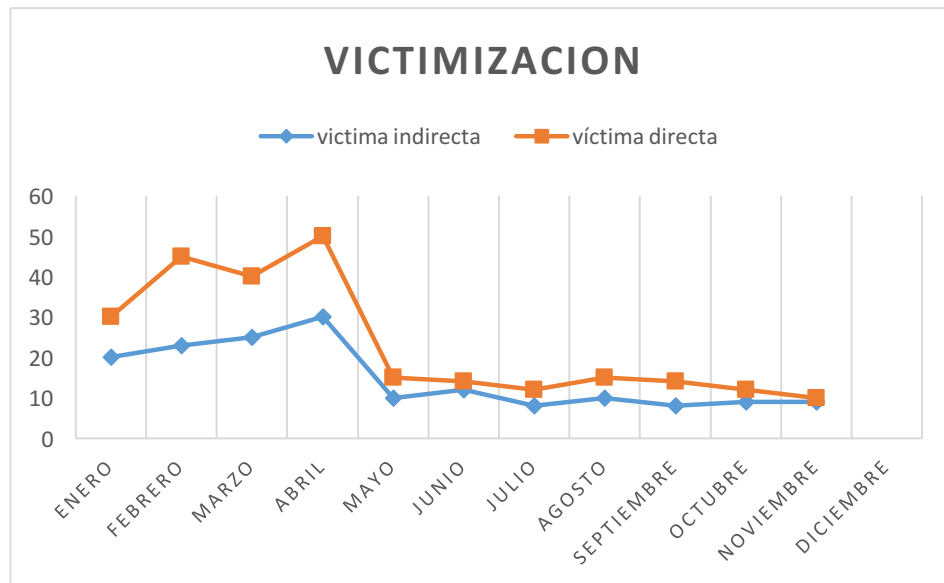


Gráfico 1: medidas de victimización de la víctima directa e indirecta a lo largo de un año.

Tal y como refleja la figura 1 en el mes de mayo se produjo un punto de inflexión en las medidas de la victimización terciaria. Precisamente en este mes tuvo lugar su participación en las jornadas donde pudieron contar libremente sin cualquier tipo de indicación cuál fue su experiencia victimal, esto es, qué pasó y bajo qué circunstancias y, en consecuencia, las repercusiones que hubo en su vida a partir de la acción terrorista.

Como se puede comprobar previamente a su celebración del evento las puntuaciones de victimización estaban en un nivel superior debido a la correlación de los diferentes episodios que viven en su día a día que aún siguen relacionados con el terrorismo, como puede ser la agravación mes a mes de las heridas sufridas y la repercusión que tiene en su vida cotidiana. Esto sirve tanto para la víctima directa como para la indirecta, o también podría ser el impacto de cualquier noticia en materia de terrorismo. Es lógico que cualquier persona que se haya visto afectada ya sea de modo directo o indirecta por las acciones terrorista, tenga de entrada una mínima puntuación sobre este aspecto.

Si bien, a partir de que contaran su experiencia, se ha constatado ese mismo nivel un significativo descenso y su posterior mantenimiento de unos niveles mínimos. El relato supuso para las propias víctimas un acto de liberación

que lleva como resultado además darse cuenta que los asistentes tomaron conciencia y comprendieron su proceso de conversión en víctimas sin que buscaran esa situación.

4.6.7. La desvictimización y el derecho a la memoria

El proceso sucesivo de las tres victimizaciones, explicadas y examinadas en el apartado anterior, están estrechamente relacionadas con el proceso de desvictimización de las víctimas ya que pueden convertirse en decisivas para que inicien o tengan más dificultades para recuperarse del suceso traumático.

Al mismo tiempo, tenemos que hacer una breve reflexión en el tema de la instalación de la victimidad, en este punto debemos preguntarnos si a una víctima del terrorismo le conviene tener reconocida esta condición a efectos de obtener ventajas más allá de las establecidas legalmente o, si, por el contrario, le puede acarrear ciertos perjuicios. La instalación de la victimización se desarrolla en el proceso de construcción social de la victimidad que aparece normalmente en el momento en que se atribuye a nivel social la condición de víctima a un individuo y él mismo se autodefine bajo tal rol. Estas circunstancias coinciden con las fases enumeradas por BURT para acceder a los sistemas de asistencia y compensación. Durante esta articulación aparecen una serie de interacciones en las que dominan un conjunto de elementos de índole histórico y cultural, además de las diferentes dinámicas de apoyo o rechazo a las víctimas y su visibilidad, esto es, las conductas de aceptación y ayuda o aversión provenientes de su familia o entorno, elementos esenciales en su victimización terciaria, como se ha indicado previamente. Teniendo en cuenta este contexto, la instalación de la victimidad puede expresarse como un status, una patología, un estigma o como un privilegio⁵⁹⁵. Hemos clasificado estas expresiones atendiendo al resultado beneficioso o perjudicial que pudieran tener para las víctimas:

⁵⁹⁵ TAMARIT SUMALLA, J. *"Paradojas y patologías en la construcción social, política y jurídica de la victimidad"*, InDret, núm. 1/2013, pp. 5-6.

INSTALACIÓN EN LA CONDICIÓN DE VÍCTIMA			
PERSPECTIVA SUBJETIVA DE LA VÍCTIMA			
POSITIVA		NEGATIVA	
Status	Privilegio	Estigma	Patología
X	X	✓	X

Tabla 4: elaboración propia sobre los efectos de instalación de la condición de víctima.

En función de la información aportada por las propias víctimas de la muestra, a lo largo de las entrevistas mantenidas con ellas, podemos rechazar la visión positiva de las víctimas sobre su victimización por dos motivos básicos. Primero, no han conseguido alcanzar un ningún nivel superior o mejorar la posición que ya tenían⁵⁹⁶; y segundo, no han tenido ninguna ventaja ni a nivel de una nueva ocupación laboral, política ni social. Aquellos que han seguido trabajando, en el caso de que hayan accedido a una escala superior jerárquica se debe a sus méritos profesionales independientemente de su condición de víctima del terrorismo. Mientras que, aquellos que por sus lesiones reconocidas legalmente no pudieron continuar desempeñando su labor, no han accedido a ningún trabajo con relevancia social o política, no han recibido ninguna otra contraprestación económica o de cualquier otra naturaleza, más allá de las estipuladas a los estrictos efectos de su correspondiente indemnización.

También se tiene que eliminar la idea de la patología ya que ninguno de los participantes ha experimentado alguna enfermedad diagnosticada al respecto, este extremo ha quedado acreditado en la victimización primaria pues ninguno desarrolló lesiones psíquicas, ni tampoco se puede considerar que se

⁵⁹⁶ El estatus abarca un conjunto de derechos pertenecientes a una concreta posición social. Hablando en un supuesto hipotético, en el caso de las víctimas se trataría de un estatus adscrito, es decir, alcanzado en función de una circunstancia independiente de su voluntad, al provenir de un ataque terrorista. Obtener un estatus superior supondría ser acreedor de mayores derechos. Sin embargo, como se explica, esta idea no es aplicable al caso de esta muestra.

instauran dentro de la denominada patología social, puesto que su comportamiento está considerado normal o, dicho de otro modo, sus conductas se acomodan a los parámetros considerados normales dentro de la sociedad.

En cuanto al estigma, podemos concretar que los procesos de elaboración, construcción y reproducción de argumentos estigmatizadores son un fenómeno universal e innato de las relaciones humanas. La palabra estigma se utiliza para referirse a un atributo desacreditador hacia una persona o grupo. Se puede definir como una condición, rasgo o atributo personal de un individuo que lo distingue del resto considerados "normales", siendo la causa para encuadrarlos en una categoría social específica. Esta construcción cultural de la Sociedad fija su contenido alrededor de esa "diferencia" o característica peculiar del grupo, mostrándoles el resto de miembros respuestas o actitudes negativas o de rechazo. Según GOFFMAN, estos miembros construyen una teoría, una ideología para explicar la inferioridad de la persona que estigmatizan y ofrecen argumentos sobre la peligrosidad que representa. Con estos argumentos avalan la práctica de conductas discriminatorias, que pueden llevar, aun sin percatarse quien las realiza, a hacer más complicada la vida del estigmatizado. A la vez, este constructo social puede servir de instrumento de defensa para el grupo mayoritario o la Sociedad en general. Los efectos que pueden causar a las víctimas estigmatizadas asociadas al fenómeno terrorista pueden vincularse a dos componentes, el primero, el emocional, como los prejuicios y las reacciones emocionales negativas; y el segundo, el componente conductual que engloba la discriminación o los comportamientos de rechazo⁵⁹⁷.

La estigmatización o exclusión simbólica de la víctima consiste en un proceso en el que una persona (la víctima) se excluye de la comunidad humana. Uno de los instrumentos para hacer frente a este proceso es la desvictimización pues busca la reintegración social de la víctima y la desinstalación de la victimidad⁵⁹⁸. Este proceso consiste en la reparación o reconstrucción a las

⁵⁹⁷ GOFFMAN, E. Estigma. La identidad deteriorada, Amorrortu, 1º ed. 10º reimpresión, Buenos Aires, 2006, pp. 13-15; RENGEL MORALES, D. "La construcción social del otro. Estigma, prejuicio e identidad en drogodependientes y enfermos de sida", *Gazeta de Antropología*, núm. 21, 2005, p. 2.

⁵⁹⁸ TAMARIT SUMALLA, J. M.: La Victimología: cuestiones..., cit., pp. 33-34.

víctimas, en él participan diferentes actores y circunstancias. Durante su desarrollo, uno de los factores clave es el reconocimiento y la asistencia a las víctimas, de manera que, incidiendo en estos factores y cubriendo sus necesidades psicosociales se pueda prevenir su revictimización, la estigmatización y el eventual riesgo de instalación en la victimación.

Este proceso de desvictimización puede verse “modulado” por la reacción social frente a las víctimas. En el caso de que el entorno de la víctima le reconozca su condición acarrearía unos efectos reparadores para aquélla, suponiendo que el apoyo y la proximidad de las personas ayudan a hacer efectivo el proceso de desvictimización de la propia víctima⁵⁹⁹.

Aquí, debemos hacer una matización, si las víctimas han recibido tratamiento psicológico es más probable que se consiga una recuperación, siempre que sea de forma constante y haya prescripciones de manera regular. Hay que destacar que, suelen finalizar el tratamiento satisfactoriamente las víctimas con un mejor funcionamiento, mientras que, aquellas necesitadas de más ayuda lo abandonan.

Con todo lo expuesto hasta ahora se puede decir que, el reconocimiento de su condición de víctima no les ha supuesto mayores ventajas, sino que, en todo caso, si partimos de los estudios previos de las victimizaciones atravesadas, puede haberse convertido en un factor en cierta manera estigmatizante para ellos.

⁵⁹⁹ TAMARIT SUMALLA, J. M. La Victimología: cuestiones..., cit., pp. 40-41.

CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN, AYUDA Y ASISTENCIA DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

5.1. Planteamiento de la situación actual de las víctimas del terrorismo

Tal y como se ha adelantado en el Capítulo tercero, las investigaciones de naturaleza criminológica relacionadas con la situación y la problemática de las víctimas del terrorismo pueden tener un efecto positivo en la mejora de la previsión, redacción e implementación de las políticas de protección y asistencia elaboradas para los afectados, sobre la base de que, el criminólogo tiene entre sus tareas conocer los hechos, problemas o fenómenos sociales subyacentes a esta categoría victimal con el fin de ofrecerles una solución o mejora de su estado tras la victimización padecida. De esta manera, las aportaciones criminológicas pueden convertirse en la clave tanto para adaptar la regulación a los parámetros sociales vigentes como para mejorar la aplicación práctica de las medidas legislativas⁶⁰⁰.

Esta afirmación tiene su fundamento, y así se ha señalado en el Capítulo segundo, en que una de las funciones del criminólogo consiste en intervenir en el proceso de desvictimización que se asocia directamente con la reparación o la reconstrucción del afectado, si bien, este proceso debe comprenderse en un

⁶⁰⁰ En la parte teórica se incidió en que este trabajo iba a ceñirse a la categoría de la interdisciplinariedad dialéctica -que se refiere a la interacción, intercambio y cooperación entre las disciplinas intervinientes, tanto entre el llamado uno como en la denominada dos- en función de que ambas disciplinas se van a enriquecer a partir de los conocimientos obtenidos por la otra en cuestión y viceversa. Esto es, los derechos establecidos para las víctimas podrán mejorarse mediante el estudio empírico que se realice desde la ciencia criminológica, al igual que, la reparación que subyace a los derechos concedidos a las víctimas del terrorismo podrá informar sobre la conveniencia de incorporarlos a los planes de desvictimización de otra tipología de víctima. Por ello, señala SERRANO GOMEZ que, en el ámbito victimal en el que convergen tanto la ciencia criminológica como la ciencia jurídica, se deben superar un total de tres fases para considerar que se ha realizado un examen integral en esta materia, que se pueden sintetizar concretamente en las siguientes: 1) estudio del fenómeno victimal; 2) estudio dogmático; 3) proposiciones de lege ferenda; en SERRANO GOMEZ, A. Historia de la..., cit., p. 17.

sentido extenso ya que no es suficiente con concederle una indemnización económica, sino que, la reparación debe abarcar las dimensiones relacionadas con el reconocimiento social, la asistencia integral y, finalmente, la prevención de la revictimización que podría experimentar la víctima del evento traumático en un futuro⁶⁰¹. Podemos decir que, frente a la asimilación que habitualmente se hace en el contexto victimal, en cuanto el tratamiento o la recuperación del afectado se limita al ámbito psicológico, psiquiátrico o, en ciertos casos, a la asistencia social, aquí se va a tratar de ofrecer un enfoque realmente integrador que pueda abarcar todas las necesidades que puedan surgir en la víctima a raíz del atentado terrorista y que no queden necesariamente circunscritas a los ámbitos anteriores, teniendo en cuenta siempre los casos particulares de los afectados.

Ahora bien, como se ha manifestado al abordar el Capítulo cuarto dedicado al estudio de las diversas normativas estatal y autonómicas existentes sobre esta cuestión, las disposiciones dedicadas exclusivamente a las víctimas del terrorismo ya recogen un conjunto de medidas relacionadas con su asistencia, ayuda y protección. En concreto, las finalidades de las disposiciones contempladas a lo largo de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, consisten en *"reconocer y atenuar, en la medida de lo posible, las consecuencias de la acción terrorista en las víctimas y en sus familias o en las personas que hayan sufrido daños como consecuencia de la acción terrorista"*⁶⁰².

De hecho, la interpretación criminológica de esta formulación legal nos permite considerar que estas medidas pueden tener una naturaleza desvictimizante en cuanto su objetivo primordial consiste en disminuir o, dicho de una forma más específica, contrarrestar los efectos negativos que pueden desarrollar en su día a día las víctimas, sus familias y las personas que hayan resultado dañadas tras la consumación delictiva. Sin embargo, hay que recordar que el proceso de desvictimización puede alcanzar un nivel alto de complejidad debido a que, la víctima debe recorrer múltiples estadios de victimización y,

⁶⁰¹ VILLACAMPA ESTARTE, C. La asistencia a las víctimas..., cit., p. 173.

⁶⁰² Art. 2 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

finalmente, ser capaz de superarlos con éxito a fin de alcanzar su plena recuperación tras verse afectada por un evento traumático como son, en el presente estudio, los atentados terroristas y, consecuentemente, reanudar su nueva vida cotidiana.

Con el propósito de materializar la desvictimización o, dicho de otra manera, facilitar la reconversión de la víctima en la persona que era previamente a la producción de la acción terrorista o, en su caso, la aceptación de la nueva vida que se le presenta por delante una vez ha asumido las nuevas circunstancias y condiciones personales, sociales o de cualquier otra naturaleza que la van a acompañar en su día a día, el legislador ha decidido introducir en la normativa reguladora de la protección, ayuda y asistencia a las víctimas del terrorismo la concesión una serie de derechos que integran y coinciden, a su vez, con las medidas para sobreponerse a las victimizaciones primaria, secundaria y terciaria que el afectado suele experimentar habitualmente una vez ha sufrido el incidente crítico.

A pesar del indudable esfuerzo realizado por el legislador a la hora de prever las medidas adecuadas e idóneas en virtud de las características sumamente específicas que presentan este tipo de víctimas y el contexto en el que han adquirido esta condición, resulta oportuno llevar a cabo un estudio piloto sobre el *conocimiento*, la *conveniencia* y la *efectividad* del conjunto de medidas contempladas desde la visión de las propias víctimas, en la medida en que, su experiencia victimal puede ser clave a fin de sugerir mejoras tanto en la legislación actual como en la manera de implantarlas o de llevarlas a cabo en la práctica.

5.2. Objetivos y metodología

Previamente se ha explicado que la ley está articulada alrededor de dos ejes, el primero, relativo a las medidas sistematizadas acerca de las cuestiones materiales y asistenciales, aunque, la novedad se encuentra en la segunda dimensión. Inspirados en los documentos internacionales de Naciones Unidas, el

Consejo de Europa o la Unión Europea sobre la protección de las víctimas ante las violaciones graves de los derechos humanos y la práctica y la jurisprudencia internacional que han demostrado que, incluso, grupos privados aparte del aparato estatal pueden cometer violaciones graves de los derechos humanos, han elaborado un conjunto de derechos de las víctimas desde las perspectivas ética y política. Los afectados por el terrorismo, por tanto, se consideran víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, que cuenta con más de un millar de personas asesinadas y violaciones constantes de derechos esenciales inherentes a la vida, la integridad ya sea física o psíquica, la libertad de expresión o la seguridad personal. Desde esta concepción de sujetos de derechos, la ley ha estipulado su contenido programático atendiendo en cada modalidad a sus destinatarios:

- Los derechos de las víctimas: justicia, dignidad, reconocimiento y reparación
- Los derechos compartidos entre las víctimas y los miembros de la sociedad: la verdad, la memoria y su significación política
- Los derechos de la ciudadanía vasca: la paz, libertad y convivencia

Asimismo, hemos interpretado criminológicamente esta clasificación jurídica, que abarca las dos primeras dimensiones al afectar directamente a las víctimas, debido a que los derechos incluidos en las categorías precedentes pueden contribuir a la disminución, mantenimiento o prevención de las victimizaciones que son, en efecto, los procesos que les interesan a los profesionales de esta ciencia. De tal forma que hemos considerado enunciar los derechos a efectos criminológicos del siguiente modo:

- De acuerdo con los efectos derivados de la victimización primaria del fenómeno terrorista, los derechos a la verdad y a la reparación contribuyen a averiguar qué ha pasado, cuáles han sido sus consecuencias y qué tipo de reparación les corresponde
- Por su parte, los derechos al reconocimiento y a la justicia son clave frente a la aparición y mantenimiento de la victimización secundaria

que surge a raíz del contacto con el aparato burocrático. El reconocimiento de las instituciones puede favorecer la superación de este estadio

- Finalmente, la victimización terciaria se puede hacer frente con las medidas integradas en los derechos a la dignidad y a la memoria que persiguen el reconocimiento social de los afectados

Por ello, tras realizar esta interpretación criminológica de la regulación vigente el siguiente paso lógico consiste en averiguar, en última instancia, cuál es la *efectividad* de las estrategias de desvictimización de acuerdo con la percepción subjetiva de las propias víctimas que tienen sobre las medidas de reparación integral relacionadas con los derechos a la verdad, reparación, justicia, reconocimiento, memoria y dignidad que se han previsto tanto en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, como en las normativas autonómicas de Andalucía, Aragón, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana y del País Vasco que las han complementado. Esto es, cuáles conocen, a cuántas han tenido acceso en función del tipo de víctima o afectado que sean y en qué medida ha contribuido a su recuperación que coinciden, respectivamente, con el *conocimiento*, la *conveniencia* y la *efectividad* de las mismas.

Conforme a este planteamiento y con el objetivo de valorar el *conocimiento*, la *conveniencia* y la *efectividad* de las medidas de desvictimización previstas en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, se ha decidido utilizar la entrevista semiestructurada en la medida en que se les ha preguntado sobre el conocimiento y el consecuente acceso que han tenido a las medidas legales y, además, se les ha permitido manifestar su opinión sobre cada una de ellas, pues, su experiencia victimal es la que nos brinda una visión sobre la efectividad o no que presentan las medidas y que nos permitirán averiguar cuáles son los obstáculos a los que han de hacer frente las víctimas y si es posible mejorar la normativa a este respecto. En definitiva, el método cualitativo responde a nuestro objetivo puesto que trata de entender los problemas a los que se han enfrentado

los afectados tras verse involucrados involuntariamente en la victimización terrorista y ponerlos en relación con las medidas de desvictimización, esto es, su *conocimiento, conveniencia y efectividad* para, en última instancia, proponer mejoras legislativas y de naturaleza práctica sobre la base de la experiencia victimal. De tal forma que, hay que tener presente que la entrevista semiestructurada en la que se han destacado previamente las cuestiones o tópicos que se desean abordar –las medidas legislativas integradas en los derechos que les corresponden a las víctimas o afectados- parte de la premisa de que el conocimiento es contextual y situacional, esto es, trata de profundizar en la complejidad de las experiencias dentro de su contexto particular que, a continuación, comprobaremos por los rasgos diferenciales de nuestra muestra. El énfasis en conocer con más profundidad estas experiencias que pueden aportar los participantes también es una de las razones por las que se ha decidido prescindir de los cuestionarios o encuestas.

En cuanto a la constitución de la muestra hemos sido conscientes de que las víctimas de estos sucesos traumáticos no siempre quieren participar en este tipo de estudios, a pesar de que persiguen la mejora de su atención, y esta es la razón por la que la muestra es reducida a efectos cuantitativos. La participación se ha ofrecido a las víctimas que han acudido a eventos victimales en los que se informó sobre el objetivo del presente estudio e, incluso, alguna de ellas se puso en contacto con otros afectados para explicarles en que consiste esta investigación y han accedido voluntariamente a entrevistarse telefónicamente. Sin embargo, por motivos personales, algunos de los participantes han preferido redactar ellos mismos las respuestas a cada pregunta que se les ha formulado y, en este sentido, un total de cuatro participantes se han adherido a esta modalidad, sin perjuicio, de que se haya contactado después con ellos para clarificar alguna contestación.

5.3. Participantes

Como ya se ha puesto de relieve, tanto la ley 29/2011, de 22 de septiembre, como en el Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que

se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, conceden la designación especial de víctima del terrorismo exclusivamente a las personas que puedan acreditar la producción de unos resultados tasados, esto es, fallecimiento o heridas de carácter físico o psíquico. Los demás individuos que pudieran resultar afectados los dirige a otras categorías, ya sea, de titulares o beneficiarios de ayudas o prestaciones, o bien, al grupo que requiere una especial atención. En definitiva, el legislador vincula esta consideración a la producción de los daños más graves que puedan experimentar la persona en su propio cuerpo a consecuencia de una acción terrorista.

A pesar de contener una definición de acciones terroristas que apunta hacia una inclusión de múltiples categorías entre sus posibles víctimas directas, pues podríamos pensar que tienen cabida no sólo las personas heridas o fallecidas sino también los ilesos, amenazados, coaccionados o secuestrados, subyace una interpretación sumamente restrictiva del mismo texto legal estatal conforme a la cual solamente se aceptan bajo la denominación víctimas del terrorismo a los heridos como consecuencia de daños de carácter físico o psicológico y los fallecidos –a los familiares de estos últimos se le concede la misma consideración exclusivamente a efectos honoríficos por lo que no quedaría estrictamente comprendidos aquí-. Una de las razones que puede explicar la decisión de excluir a los ilesos, amenazados y coaccionados de esta denominación puede ser la necesidad de acotar el número de víctimas oficiales en la medida en que su inclusión tendría un reflejo en el régimen indemnizatorio y sistema de protección establecidos al respecto, aumentando considerablemente el número de casos a atender y correlativamente la capacidad de respuesta del Estado – salvo los secuestrados que sí tienen derecho a resarcimiento económico-.

Pese a que con mayor o menor acierto se prevén medidas destinadas al reconocimiento y reparación de los afectados –como se puede ver por ejemplo con las que les corresponden a los amenazados- en función de la entidad de los daños que puedan presentar con independencia de la denominación que reciban, ya sea víctima, titular, afectado o sujeto a quien le corresponde una especial atención, todas ellas presentan los requisitos necesarios para incluirse dentro de

las categorías de víctima directa o víctima indirecta y, por lo tanto, son objeto de interés de la ciencia criminológica.

De acuerdo con la finalidad de esta investigación, se considera víctima directa a los sujetos que hayan sufrido cualquier tipo de agresión terrorista en primera persona, mientras que, la víctima indirecta será primordialmente el allegado de aquélla siempre que mantenga una relación estable y cercana con la víctima⁶⁰³. De tal forma que, a efectos criminológicos, podemos considerar víctima directa a toda persona afectada directamente por la acción terrorista en sus diversas dimensiones ya sea con resultado de fallecimiento o los heridos, amenazados, coaccionados, secuestrados o ilesos. De igual manera, tendrían la consideración de víctima indirecta los familiares de los anteriores.

Por lo tanto, en nuestro estudio vamos a analizar una muestra de personas que han experimentado el fenómeno terrorista de una manera directa –la denominada víctima directa- o de una forma indirecta –la víctima indirecta-. A todos los participantes se les ha solicitado su opinión acerca de las disposiciones previstas en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, mediante una serie de preguntas sobre cada uno de los derechos que engloban estas medidas y que, a la vez, asisten a los propios afectados.

Estos afectados de modo directo se convierten en el instrumento de los terroristas frente al Estado, es decir, estos últimos utilizan una técnica basada en la deshumanización que atenta contra los derechos básicos del ser humano y los intereses colectivos. La violencia, fuerza o amenaza que emplean los terroristas durante sus actuaciones delictivas utiliza el miedo que producen en los ciudadanos con el objetivo de conseguir su fin político que no es otro que influir en la política estatal. Esta manera de proceder en la que las acciones terroristas

⁶⁰³ En este sentido la Exposición de Motivos de la Ley 4/2008, de 19 de junio, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo reconoce que *“conocemos, eso sí, un alcance inmediato y directo de esta tragedia: el inmenso dolor y sufrimiento provocado por los asesinatos, las amenazas, los secuestros, las extorsiones y los chantajes. Las víctimas del terrorismo y sus familiares y allegados son la expresión personal y cercana de esta consecuencia. Constituyen, lamentablemente, el grupo de nuestra sociedad, específica y calculadamente elegido, que ha pagado en sus carnes y en sus almas el tributo del terror y el fanatismo”*.

adquieren un significado político puede agravar la vulnerabilidad de los afectados y, de aquí deriva la necesidad de estudiar las características y el entorno de las víctimas para poder vincularlos con las medidas de desvictimización.

Sin embargo, en cuanto a la descripción de las características personales que presentaban en el momento en que se produjo el incidente crítico que se va a abordar a continuación, se ha considerado conveniente distinguir entre la víctima directa y la víctima indirecta a la hora de elaborar un perfil medio de los individuos que integran ambas figuras en este estudio piloto. Como tendremos ocasión de comprobar, la única diferencia se encuentra en el enfoque que se ha hecho sobre la profesión que desempeña la víctima directa, esto es, a ésta se le ha preguntado cuál es el motivo por el que han accedido a esta profesión y si ha cambiado de parecer tras sufrir el atentado mientras que, a la víctima indirecta se le ha preguntado cuál es la opinión que le merece la profesión de la víctima directa y si ha cambiado desde entonces. En definitiva, se les está preguntado sobre el mismo concepto desde las diferentes perspectivas que por el lugar que ocupan deben tener. Lógicamente, junto con esta distinción, se ha prestado más atención al relato del suceso traumático ofrecido por la víctima directa puesto que precisamente es quien lo ha vivido en primera persona y, al contrario, la víctima indirecta relata una versión de referencia o de su propia experiencia vivida en esos instantes, por ello, se procederá a describirlo con más detalles a pesar de que también a las víctimas indirectas se les ha pedido que compartan lo ocurrido.

Concretamente, nuestra muestra consta de un total de diez participantes (N=10) que han accedido voluntariamente a entrevistarse para cumplir con los objetivos establecidos en el presente estudio piloto, de los cuales seis son víctimas directas y cuatro son familiares de víctimas directas y, por lo tanto, entendemos que éstos últimos pertenecen a la categoría de víctima indirecta, sin perjuicio de que, la mayoría de ellos ostentan la condición oficial de víctima del terrorismo o la condición oficial honorífica de víctimas del terrorismo que ambas son otorgadas a nivel institucional.

En la parte teórica del presente estudio, hemos hecho referencia a la formulación de BURT en la que destaca que, las víctimas deben recorrer una serie de etapas para convertirse en una víctima real. Esto es, la acreditación de daños, la autodefinición de víctima y el reconocimiento que puede demostrarse, en nuestro caso, mediante los derechos que le corresponden por su condición o por las condecoraciones. Conforme a los datos proporcionados por nuestros participantes podemos reflejarlos en la siguiente tabla⁶⁰⁴:

			RECONOCIMIENTO	
SUJETOS	ATENTADO	AUTODEFINICIÓN VÍCTIMA	DERECHOS	CONDECORACIÓN OFICIAL
1	Guerra de Desgaste"	Víctima directa	Acceso ayudas, prestaciones y derechos	Encomienda
2	"Guerra de Desgaste"	Víctima indirecta	Acceso ayudas, prestaciones y derechos	No corresponde
3	"Guerra de Desgaste"	Víctima indirecta	Acceso ayudas, prestaciones y derechos	No corresponde

⁶⁰⁴ 1. La persona ha sufrido daños, ofensas o sufrimientos causados por instituciones u otras personas: para nuestro estudio esta fase se completa con la fecha en la que tuvo lugar el atentado. 2. La autodefinición como víctima: desde la perspectiva subjetiva de cada uno de los participantes, ¿se consideraron víctimas tras sufrir el hecho traumático? Aquí, lo más importante es la experimentación del sentimiento de injusticia que percibe la propia víctima, porque es en ese preciso instante cuando se autodefine bajo tal calificativo. 3. La víctima requiere el reconocimiento de otros sobre el daño sufrido y que valide la reclamación de su victimización: uno de los instrumentos oficiales que reconoce este padecimiento es la sentencia. En ella se les corrobora o certifica la autoría, se condena y se procede a indemnizar a consecuencia de la acción terrorista. Para ello, las víctimas recurren a las agencias de control formal. También existe una segunda vía de reconocimiento de esta condición, la resolución administrativa motivada en los documentos policiales existentes, ya que puede darse el caso de que no ha habido juicio al respecto o no ha llegado a buen término. 4. Validación de su rol de víctima a nivel oficial y sobre todo social: momento en que se les concede el reconocimiento oficial. La validación va más allá del mero reconocimiento otorgado por un organismo estatal. Para nuestras víctimas delimitamos este momento de validación social cuando se les informa su concesión a través de la acción honorífica del Estado configurada por la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo en sus diferentes grados. La entrega de estas condecoraciones generalmente se celebra mediante un acto público, dotándolo de una significación pública y de alcance a toda la sociedad.

4	"Frente Nacionalista"	Víctima directa	Acceso ayudas, prestaciones y derechos	Encomienda
5	"Guerra de Desgaste"	Víctima indirecta	Acceso ayudas, prestaciones y derechos	Le corresponde la Insignia, pero no la ha solicitado
6	"Frente Nacionalista"	Víctima directa	Acceso ayudas, prestaciones y derechos	Encomienda
7	"Guerra de Desgaste"	Víctima indirecta	Acceso ayudas, prestaciones y derechos	Insignia
8	"Guerra de Desgaste"	Víctima directa	Acceso ayudas, prestaciones y derechos	Encomienda
9	"2004-actualidad"	Víctima directa	Acceso ayudas, prestaciones y derechos	En trámite
10	"Guerra de Desgaste"	Víctima directa	Acceso ayudas, prestaciones y derechos	Encomienda

Tabla 5: adaptación de la formulación de BURT por la que los sujetos se convierten en verdaderas víctimas.

De acuerdo con el cumplimiento de los requisitos enumerados por BURT según los cuales todas las víctimas anteriores pueden acceder a los sistemas previstos de asistencia y compensación en función de las circunstancias que se irán delimitando en los epígrafes siguientes, se pueden considerar verdaderas víctimas con independencia de su naturaleza directa o indirecta. Si bien, en primer lugar, vamos a comenzar con el estudio de las víctimas que forman parte de la muestra y que, como ya se ha adelantado, hemos diferenciado las categorías de víctima directa y víctima indirecta, aunque, tras sus descripciones se examinará conjuntamente el entorno victimal.

5.3.1. Víctima directa

Las víctimas directas del fenómeno terrorista que conforman parte de la muestra pertenecen o han pertenecido al Cuerpo de la Guardia Civil que, como ya se ha indicado con anterioridad, junto con la Policía Nacional son los colectivos que han sufrido el mayor número de atentados terroristas en términos cuantitativos a lo largo de la historia española. De hecho, un total de 5 participantes continúan en situación de actividad frente a los demás que se han jubilado o han pasado a segunda actividad por los motivos que veremos a continuación⁶⁰⁵.

Las características personales más relevantes a efectos de nuestro objetivo de investigación son las relacionadas con la edad, estado civil y, especialmente, el motivo de su ingreso en esta profesión pues, como tendremos ocasión de comprobar, nos pueden aportar información significativa más allá de la estrictamente sociológica, de tal forma que, no sólo se va a proceder a describir a los sujetos participantes de acuerdo a las características anteriores, sino que, su elección tiene la finalidad de establecer, sobre la base de la información proporcionada, conexiones entre estos mismos datos y entre éstos y las correspondientes medidas frente a la victimización primaria, secundaria o terciaria que les corresponda legalmente en función de sus circunstancias acreditadas.

De acuerdo con este planteamiento inicial, en primer lugar, la información que nos han proporcionado relativa a la edad en la que se convirtieron en víctimas de un ataque terrorista y, al mismo tiempo, se ha considerado conveniente

⁶⁰⁵ En este sentido, el Preámbulo de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo establece que *“por ello, esta Ley, a través de su sistema de ayudas, prestaciones y condecoraciones, quiere rendir un especial reconocimiento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas por la eficacia siempre demostrada en la lucha contra la amenaza terrorista y porque, lamentablemente, son las que han aportado el mayor número de víctimas mortales y de heridos tanto en los ataques terroristas cometidos en territorio nacional como en los perpetrados por el terrorismo internacional. Este homenaje no sería genuino ni completo si, al mismo tiempo, no se reconoce el papel que han desempeñado las familias de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, del Ejército, de la Ertzaintza, “Mossos d’Esquadra”, o de los policías locales, víctimas todos de atentados terroristas. El esfuerzo, la resistencia, el coraje y la dignidad demostrada en estos difíciles años son, sin duda alguna, un ejemplo de civismo y de compromiso con la democracia, la Constitución y sus valores”*.

introducir la información sobre la situación laboral actual de cada uno de ellos, se especifican de forma conjunta en la siguiente tabla:

INTERVALO DE EDAD	NÚMERO DE PERSONAS	SITUACION LABORAL ACTIVA ACTUAL
20 – 24	3	2
25 – 29	2	2
30 – 34	1	1

Tabla 6: elaborada a partir de los datos proporcionados por las personas objeto del estudio sobre la edad de las víctimas en el momento de atentado y su situación laboral actual.

Tras analizar la información plasmada en la tabla anterior, se puede comprobar que, el 83'3% de los entrevistados continúa trabajando a día de hoy. Además, se puede inferir que, todos los sujetos que pudieron continuar trabajando lo han hecho y actualmente se encuentran desempeñando su labor habitual encomendada a pesar de que, a alguno de ellos, por la gravedad de las lesiones sufridas pudieron optar por retirarse de la actividad laboral. En cambio, los motivos que aconsejaron al único guardia civil a retirarse están relacionados con la incompatibilidad de las secuelas padecidas tras el atentado terrorista y las características específicas que precisaba para poder ejercer con efectividad el cometido asociado a su lugar de trabajo. Esta víctima manifiesta que *"lleva aparatos de audición en los dos, entonces claro, te limitan claro yo estaba en el GAR y me tuve que ir, de tráfico me tuve que ir, de Policía Judicial también y, al final, no me quedó otra vía que irme a la calle porque yo lo que no quería era levantar una barrera después de haberme promocionado o camarero o*

carpintero. Le pedí a la Dirección seguir trabajando, me denegaron el tema y me tuve que ir..."

Todos los varones víctimas directas estaban casados o tenían pareja en el momento en que sufrieron el ataque terrorista, sin embargo, dos de ellos se separaron de sus respectivas parejas en un lapso de tiempo no muy largo desde la producción del atentado. Ambos explican que el suceso traumático ha estado relacionado o, dicho de otro modo, es uno de los motivos que propiciaron la decisión de separarse, así, uno de los afectados explica que *"después del atentado me divorcié. No directamente, pero algo tuvo que ver"*.

Por su parte, la totalidad de los entrevistados señala la vocación como el principal motivo de su ingreso en el cuerpo de la Guardia Civil, en este sentido, por ejemplo, uno de ellos señala que *"de mi familia soy yo sólo Guardia Civil, pero me crie frente a un cuartel y me llamaba la atención la austeridad, la seriedad, la manera de hacer en aquel tiempo. Por vocación. No tenía a nadie de la familia -se refiere dentro de la institución- pero lo tenía muy claro desde pequeño"*. Igualmente, la edad de los participantes en el momento de la agresión refuerza la idea de la vocación pues, aunque, sea de manera indirecta puede estar relacionada con la insistencia que han mostrado en su recuperación física para continuar con su trabajo ya que todos tienen la consideración de heridos -en este sentido, a todos se les ha concedido la Encomienda- y, en relación con esta consideración, una de las víctimas directas indica que *"tardé dos años en recuperarme de mis heridas físicas y, aun así, decidí volver a incorporarme al trabajo. Tan sólo tenía 28 años"*.

Según explica la Exposición de Motivos de la Ley 4/2008, de 19 de junio, del País Vasco *"las acciones de ETA no son casuales, ni sus objetivos y estrategias son fruto del azar o la improvisación. Ante la imposibilidad de establecer por vías pacíficas su proyecto totalitario y excluyente, pretenden imponerlo a través del ejercicio de la violencia terrorista, utilizando la sangre de personas inocentes, las víctimas, para aterrorizar al conjunto de la ciudadanía buscando su desistimiento"*, por ello, es necesario hacer referencia al ataque terrorista. En cuanto a la comisión del atentado, se ha valorado tanto el modo de producción

de la acción terrorista como el lugar y el tiempo en que tuvo lugar. Así, por una parte, se puede considerar que el 83'3 % de los casos analizados corresponde con la materialización mediante la colocación de explosivos que, en la mayoría de ellos, fueron activados a distancia. Esta forma de proceder era la tercera más utilizada por la banda terrorista ETA a la que precedían la utilización de las armas de fuego y el coche-bomba en los supuestos de asesinato tal y como se ha indicado en otras investigaciones⁶⁰⁶.

Por otra parte, la distribución geográfica y el momento temporal de su producción se va a realizar conforme a las tres fases expuestas por SÁNCHEZ CUENCA: 1) Guerra revolucionaria (1960-1978); 2) Guerra de desgaste (1978-1998); 3) Frente nacionalista (1998-2000). Si bien, en nuestro contexto, se atenderá a la segunda y tercera etapas y además se añadirá una etapa posterior de acuerdo a los sujetos de nuestra muestra. Partiendo de este planteamiento los datos que obtenemos son los siguientes⁶⁰⁷:

	GUERRA DE DESGASTE (1978-1994)	FRENTE NACIONALISTA (1995-2003)	2004- ACTUALIDAD
DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA	País Vasco y Navarra (72'5%)	-País Vasco y Navarra (56'2%)	-País Vasco y Navarra

⁶⁰⁶ Conforme a esta línea argumental, se establece que *“la inmensa mayoría de las muertes se produce por arma de fuego (64 por 100), seguido por el coche-bomba (18 por cien) y las bombas (12 por cien)”*; en DE LA CALLE, L. Y SANCHEZ-CUENCA, I. La selección de víctimas..., cit., p. 66.

⁶⁰⁷ La distinción entre estas etapas la realiza de acuerdo a las teorías de la elección racional a través del empleo de modelos de juego. En la primera etapa –que comprende la primera muerte, la transición política a la democracia y el proceso constituyente-, sigue un patrón acción-represión-acción, si bien, en el momento en que la banda se da cuenta de que la estrategia no va a prosperar, comienza a utilizar la estrategia de desgaste basada en el modelo attrition war y, por esto, a esta fase se le denomina guerra de desgaste. Finalmente, el grupo terrorista cede protagonismo a las fuerzas nacionalistas a la hora de conseguir la independencia puesto que es consciente de que el Estado no va a ceder, es la etapa llamada frente nacionalista; en <https://alfanje.wordpress.com/2010/04/15/eta-contra-el-estado-las-estrategias-del-terrorismo-ignacio-sanchez-cuenca/> (Consultado el 12 de agosto de 2017).

		-Fuera de los anteriores (43'8%)	-Fuera de los anteriores
MUESTRA	3 dentro del País Vasco y Navarra	1 dentro del País Vasco y Navarra 1 fuera de los anteriores	1 dentro del País Vasco y Navarra

Tabla 7: elaboración a partir de los datos proporcionados por las personas objeto de este estudio sobre el lugar y periodo en que se convirtieron en víctimas.

De acuerdo a la tabla anterior, podemos realizar dos observaciones. En primer lugar, los supuestos examinados en nuestra muestra están repartidos entre las tres etapas prefijadas, de modo que, en el momento en que abordemos el examen de las medidas previstas para hacer frente a la victimización primaria, secundaria y terciaria será el instante idóneo para comprobar si existen diferentes opiniones entre los participantes y si está relacionada esta diferencia con el tiempo en que se produjo la agresión terrorista. Mientras que, en segundo lugar, podemos ver que, concuerdan perfectamente con las etapas señaladas –aunque sólo se hayan analizado hasta ahora en las investigaciones científicas los atentados con resultado de fallecimiento-, en la medida en que, sobre todo en la primera fase ocurren estos ataques dentro del territorio del País Vasco y Navarra y, en cambio, en la segunda, tenemos participantes que los han sufrido tanto dentro como fuera del País Vasco y Navarra.

Una vez hemos aludido tanto a las características personales de las víctimas directas como a los rasgos más relevantes en cuanto a la realización del hecho delictivo, podemos sintetizar que la selección victimal intencionada, basada en la manera en que los terroristas han realizado la agresión –como hemos precisado mediante la explosión o la utilización de armas-, convierte a las personas afectadas en simples instrumentos de significación política sobre todo

porque han sido seleccionados por la institución a la que pertenecen y, asimismo, por la vinculación de esta institución con el estado español. En consecuencia, este aspecto relacionado con su profesión vocacional puede ser un factor de vulnerabilidad, en la medida en que, puede repercutir especialmente en algún estadio de victimización pues, ante la falta de medidas efectivas para contrarrestarlas, puede agravar su victimización.

5.3.2. Víctima indirecta

Dentro de la categoría criminológica denominada víctima indirecta se han incluido los familiares de víctimas del terrorismo que han adquirido esta condición al verse afectados por ataques terroristas con resultado de fallecimiento y con resultado de heridos. Esto es, se han incorporado a esta clasificación victimal tanto a los familiares de los fallecidos a quienes se le ha concedido a consecuencia de este evento traumático la consideración oficial de víctima del terrorismo a efectos honoríficos como a los familiares de los afectados que resultaron heridos en atentados de naturaleza terrorista. La diferencia entre unos y otros reside en una primera aproximación en que, además de la condición citada, en los derechos que les corresponden. Según el texto legal, a los familiares directos de los fallecidos se les concede la indemnización económica, derechos y ayudas psicológicas, educativas y laborales, mientras que, a los segundos salvo la primera enumerada pueden tener acceso a las demás.

Como ya se ha adelantado al comienzo de este epígrafe, forman parte de esta denominación un total de cuatro participantes que, a su vez, la mitad son familiares de personas que han fallecido tras la materialización de acciones terroristas frente a la otra mitad que son familiares directos de heridos a consecuencia de la producción de atentados terroristas. Dentro de este grupo – un poco más heterogéneo que el previamente descrito- la mayoría de los participantes son civiles frente a tan sólo el 25% que pertenece al mismo Cuerpo que la víctima directa, esto es, a la Guardia Civil.

Este grupo tiene especial interés en cuanto pueden experimentar la denominada victimización indirecta que, precisamente, está muy poco estudiada a pesar de que existe un gran número de personas que podrían experimentarla y no sólo los familiares de los fallecidos sino también los familiares de los heridos que son los que habitualmente viven y comparten su día a día con las víctimas directas terrorismo. En este sentido, tal y como se ha señalado en el Capítulo tercero, el acontecimiento traumático se ha comparado con la acción de tirar una piedra a un estanque. Esta situación trasladada a nuestra materia de estudio implica que esas “ondas” no sólo afectan en primer lugar a la víctima estricta, sino que también provoca reacciones en su entorno principalmente el relativo a sus familiares⁶⁰⁸.

La onda expansiva que aparece tras el suceso traumático ejerce su acción siguiendo un patrón de círculos concéntricos, donde el primer círculo está constituido por las propias víctimas, pasa por el segundo círculo en el que los familiares de éstas tienen que hacer frente al dolor y readaptarse a la nueva vida que tienen por delante.

Al mismo tiempo, mantener un contacto directo y prolongado en el tiempo con una víctima que haya padecido un trauma grave puede conllevar el surgimiento de un clima imperado por un estresor crónico. Su influencia puede llegar hasta tal punto de convertirse en el responsable de un deterioro físico y psíquico favorecido por la convivencia con la víctima. De hecho, el conviviente puede desarrollar trastornos emocionales y ser considerada víctima secundaria como algunos autores proponen.

Los sujetos que se han adscrito a esta categoría victimal tenían una edad media de 28 años en el momento en que se produjo el hecho delictivo, salvo el supuesto de un familiar que era menor de edad. Se debe agregar a esta breve referencia de las características personales de estos afectados que, todos en el instante en que se produjeron los hechos estaban casados y actualmente siguen con el mismo estado civil a excepción, lógicamente, del sujeto participante menor

⁶⁰⁸ ECHEBURUA ODRIÓZOLA, E. Y GUERRICAECHEVARRIA, C. Especial consideración de..., cit., p. 196.

de edad. Esto indica que, en los supuestos analizados, no ha interferido negativamente en este aspecto personal, al contrario que, esta circunstancia sí que ha tenido que ver, al menos indirectamente, en la experiencia de alguna víctima directa como ya se ha puesto de manifiesto.

En cuanto a la materialización del atentado que ha ocasionado la consideración de víctima indirecta de los participantes, al igual que en el caso de las víctimas directas, se va a señalar el momento en que se produjo, el lugar y la manera en la que se llevó a cabo. Atendiendo a las dos primeras, se constata lo siguiente:

	GUERRA DE DESGASTE (1978-1994)	FRENTE NACIONALISTA (1995-2003)	2004- ACTUALIDAD
DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA	País Vasco y Navarra (72'5%)	-País Vasco y Navarra (56'2%) -Fuera de los anteriores (43'8%)	-País Vasco y Navarra -Fuera de los anteriores
MUESTRA	-2 dentro del País Vasco y Navarra -1 fuera de estos territorios		

Tabla 8: elaborada a partir de los datos proporcionados por las víctimas indirectas objeto de nuestro estudio sobre el lugar y periodo en que adquirieron tal condición.

Como se puede comprobar, todas las experiencias de victimización indirecta se agrupan en la fase denominada "Guerra de Desgaste", si bien, aquí conviene realizar un matiz, en la medida en que, hay un atentado que no corresponde con el patrón de distribución geográfica que era habitual en esos tiempos como se ha señalado con anterioridad en otras investigaciones. De hecho, el 75% de los sujetos entrevistados son afectados por el terrorismo de forma indirecta por hechos ocurridos dentro del País Vasco y Navarra –que, como se puede observar eran el escenario del 72'5% de los atentados con resultado de muerte- frente al 25% que tuvo lugar fuera del País Vasco y Navarra.

En cuanto a la comisión del hecho delictivo en sí, de los relatos victimales compartidos se puede precisar que, el 25% se llevó a cabo mediante el empleo de arma de fuego frente al 75% que se materializó a través de la colocación de explosivos. Entre estos últimos, el 66'7% de los artefactos explosivos fueron activados a distancia. Al igual que, en la manera terrorista de proceder en los supuestos analizados de las víctimas directas, se constata de nuevo la intencionalidad terrorista en su perpetración.

Por su parte, tal y como se ha matizado en el comienzo de este epígrafe al abordar la presentación de los participantes en este estudio, se les ha preguntado su opinión acerca de la profesión de la víctima directa, esto es, guardia civil, con la intención de averiguar si han cambiado de parecer tras el incidente crítico pues en el caso de que así fuera sería conveniente prestar atención a las circunstancias relativas a la victimización primaria. Teniendo presentes todas las respuestas que nos han ofrecido, existe un sentimiento generalizado y compartido por todas las víctimas indirectas de orgullo y vocación y así, por ejemplo, lo expresa uno de los participantes: *"en todos los colectivos hay de todo, es un sentimiento, es muy especial. No cambio la opinión, estoy muy orgulloso del cuerpo y de mi padre"*. Si bien es cierto que, estrictamente esta respuesta fue del 75% de las víctimas indirectas entrevistadas en principio, debido a que, en un primer momento un entrevistado contestó que sí ha cambiado de opinión sobre su profesión. No obstante, cuando nos interesamos en este cambio de opinión experimentado y se le volvió a preguntar a qué se

debió exactamente esta modificación, respondió que se debe principalmente al trato no correcto dispensado por esta institución, de modo que, no puede reconducirse estrictamente a un cambio de opinión sobre el desempeño de esta profesión ya que matizó, a continuación que es *"muy sacrificada y con mucha vocación –la profesión-. No he cambiado de opinión. Como institución la Guardia Civil deja mucho que desear en un sentido humanitario. No se han preocupado en ningún momento de los afectados"*. Por lo tanto, se puede concluir que todas las víctimas indirectas están orgullosas de la profesión de la víctima directa.

5.3.3. Entorno victimal

La última afirmación de un participante, en la que apunta la falta de apoyo laboral, nos dirige directamente a interesarnos sobre el apoyo que han recibido tras el suceso traumático y, especialmente, desde los ámbitos familiar, laboral y social en un sentido más amplio puesto que nos pueden acercar al tipo de reconocimiento que han podido tener. Los datos recogidos sobre las dimensiones enumeradas se reflejan en el siguiente gráfico:

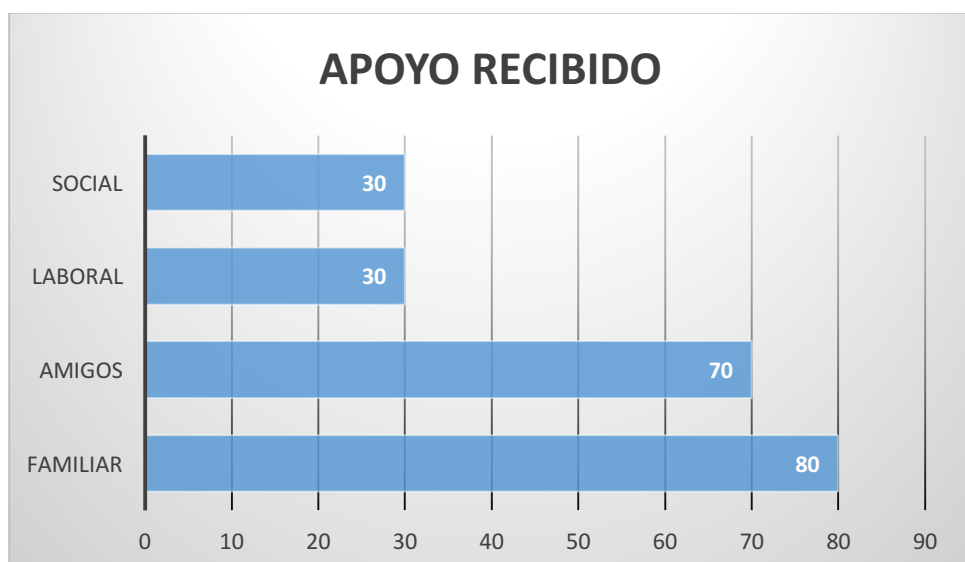


Gráfico 2: elaborado a partir de los datos proporcionados por las personas objeto de este estudio sobre el apoyo social, laboral, de amistad y familiar recibido.

De los resultados integrados en el gráfico anterior, se puede comprobar que, en términos genéricos el apoyo fundamental que han recibido los sujetos de esta muestra pertenece al ámbito familiar, sin embargo, llama la atención que son precisamente las víctimas indirectas por parte de una víctima herida quienes no han destacado esta dimensión-este porcentaje asciende a un 20%- . Así una de ellas explicó que *“recibí apoyo familiar dos días luego nada”*. Una de las razones puede ser que la atención familiar se ha focalizado tan sólo hacia la víctima directa y, en cambio, las personas cercanas que viven de forma estable y continuada con la víctima –como es el caso de las víctimas indirectas- que también se ven afectadas, aunque sea de un modo indirecto en su día a día por las nuevas circunstancias personales del afectado a las que tiene que hacer frente y conseguir integrar en su nueva vida, no han sido objeto de apoyo ni comprensión. Esta idea está vinculada con la teoría de los círculos concéntricos que refleja que el impacto no sólo afecta a la víctima directa, sino que, a la vez, puede tener repercusión en las personas que viven de manera estable y continua con el afectado en la medida en que tienen que readaptarse a su nueva vida. Al contrario, las víctimas indirectas a causa de fallecido en un ataque terrorista no se encuentran en la misma situación puesto que, por una parte, un participante ha incidido en que se tuvieron que apoyar mutuamente tanto su madre como él y, otro de los casos, el participante perdió a sus tres familiares más próximos. Por su parte, en las experiencias de las víctimas directas todas han señalado la importancia de la familia, aunque, como se vio con anterioridad, un 20% se separó de sus parejas, si bien, también han destacado el apoyo del resto de sus familiares.

No obstante, resalta que el apoyo procedente de los ámbitos social y laboral son coincidentes –exactamente el 70% considera que no ha sido adecuado frente al 30% que lo han estimado correcto- y, sobre todo, que más de la mitad de los entrevistados opinan que no han sido correctamente tratados. En el momento en que se les ha preguntado sobre el entorno laboral nos hemos interesado especialmente por el entorno laboral de la víctima directa, si bien, en

el caso de las víctimas indirectas, ellas mismas han hecho alusión tanto al del afectado directo como al suyo al tener la misma opinión sobre ambos. En este sentido, han hecho un mayor hincapié en este aspecto que en el apoyo recibido por parte de la sociedad en general, pues, mientras en este último se han limitado a decir en un 70% de los casos que no ha sido bueno, sobre el primero han sido más exhaustivos en sus explicaciones y lo han señalado como más negativo para ellos. Varias de las opiniones que han compartido sobre esta cuestión han sido las siguientes: *"la Guardia Civil en esos años, a pesar de todo lo que habíamos sufrido, no te apoyan, no tienes un apoyo directo no es como ahora"*. En la misma dirección, otro participante señala *"de compañero y el jefe de tráfico que era donde yo estaba no. Nada más que tengo malas palabras para ellos porque, incluso, me dejaron de lado y a mi mujer también... es que son tantas cosas que me han hecho que en este aspecto sí que estoy dolido"*. Otra víctima directa explica que *"no fue adecuado el apoyo laboral porque ese día fueron dos y ya está. Al cabo del tiempo, por parte nuestra, nadie me preguntó oye cómo estás, cómo sigues. En aquel tiempo eras uno más ni te llama nadie para decirte o preguntarte o hacerte un seguimiento"*.

Estos comportamientos llevados a cabo por sus compañeros o superiores pueden responder al llamado "efecto contagio", este puede tener una significación de herramienta de protección frente "al mal ajeno". Desde su ámbito laboral han realizado una atribución defensiva del ataque sufrido por sus compañeros de profesión a fin de reducir la amenaza que representa el fenómeno terrorista para todos los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, en especial, para su propia integridad. Utilizan este mecanismo protector para intentar mantener o restablecer un clima o sensación de seguridad y control durante su desempeño laboral en el contexto del acecho terrorista en el que se veían inmersos. De esta manera, trataron de no mostrarse empáticos o identificados con las víctimas ante la posibilidad de poder correr la misma suerte que ellos, es decir, ante la posibilidad de resultar dañados en una acción de esta índole. De este modo, este elemento se traslada al llamado "tercer círculo", que engloba a los compañeros de trabajo que pueden sentirse afectados por el temor o indefensión ante posible futuros ataques. El efecto contagio está relacionado

con la convivencia con la víctima. Esto explicaría todas las actitudes generadas hacia ellos principalmente las de invisibilidad a fin de poner distancia de por medio y no temer que les pudiera ocurrir lo mismo⁶⁰⁹.

Al igual que ocurre con las opiniones relativas al apoyo social, el 30% de los participantes han señalado que, para ellos, el trato ha sido correcto, si bien, hay que destacar en este aspecto que el 20% de estos últimos entrevistados vinculan el hecho de haber padecido un ataque terrorista con el día a día de su profesión puesto que, explican que, son acciones que podían sufrir cualquier día como que les atropellaran en el desempeño de su cometido. Se puede apreciar que aquí existe una clara distinción entre las víctimas que lo asumen como una experiencia más de su trabajo –el caso de los últimos participantes- o, como víctimas con independencia de que se hayan convertido en objetivo por su profesión, en cierta medida, éstos tienen un mayor índice de victimización.

Finalmente, el escaso apoyo social que han manifestado haber tenido tanto la mayoría de las víctimas directas como las víctimas indirectas puede explicarse, en parte, con las dos hipótesis que se plantearon en una investigación previa realizada por SANCHEZ-DUARTE y SAMPEDRO en la que se aludió al estatus socio laboral de las víctimas y la distribución geográfica de la comisión delictiva en relación con el interés mediático suscitado.

En cuanto a la primera hipótesis relacionada con el estatus socio laboral de las víctimas se planteó si la pertenencia a determinados grupos profesionales podía estar influida o relacionada con la atención mediática que les brindaron a los afectados. Con el propósito de determinar este aspecto, agruparon a las víctimas mortales en función de las tres etapas expuestas por SANCHEZ CUENCA que son: 1) Guerra revolucionaria (1960-1978); 2) Guerra de desgaste (1978-1998); 3) Frente nacionalista (1998-2000). No obstante, decidieron modificar esta última fase tanto con la denominación que pasó a ser llamada “Fase de propuestas políticas” y, a su vez, se varió su lapso temporal que pasó a

⁶⁰⁹ COMPANY ALCAÑIZ, M. “El estigma de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad víctimas del terrorismo en su victimización”, Revista electrónica de Ciencias Criminológicas, núm. 1, 2016, pp. 25-26.

comprender los años desde 1995 hasta el 2007. Por lo tanto, obtuvieron los siguientes resultados⁶¹⁰:

Grupo profesional	1º etapa: 1968-1978	2º etapa: 1978-1995	3º etapa: 1995-2007	TOTAL
Militares	0	84 (12,3%)	9 (10,4%)	93 (11%)
GC, CNP, Local y Autonómica	36 (50%)	324 (47,4%)	25 (29,1%)	385 (46%)
Empresarios	2 (2,8%)	32 (4,7%)	3 (3,5%)	37 (4,4%)
Políticos	6 (8,3%)	7 (1%)	19 (22,1%)	32 (3,9%)
Periodistas	0	1 (0,1%)	2 (2,3%)	4 (0,5%)
Funcionarios penitenciaria	0	2 (0,2%)	2 (2,3%)	4 (0,5%)
Magistrados, jueces, fiscales	0	1 (0,1%)	5 (5,8%)	6 (0,7%)
Otros	28 (38,9%)	233 (34,1%)	21 (24,5%)	282 (33,5%)
TOTAL	72 (9%)	684 (81%)	86 (10%)	842 (100%)

Tabla 9: elaborada a partir de los datos ofrecidos por la investigación realizada por SANCHEZ-DUARTE y SAMPEDRO sobre las etapas y las profesiones de los asesinados.

De acuerdo con los datos obtenidos, los autores explican la distribución de fallecidos en cada una de las fases describe una figura piramidal puesto que, en la primera etapa -1969-1978- se produjo un total del 9% del total, mientras que, en la segunda fase se produjo un repunte donde se concentraron el 81% del total de fallecidos y, finalmente, esta cifra descendió hasta el 10% en la tercera etapa. Por esta razón deducen que, si vincularan el aumento de las víctimas con una

⁶¹⁰ SANCHEZ-DUARTE, J. M. y SAMPEDRO BLANCO, V. F. “Visibilidad mediática y terrorismo: El caso de las víctimas de ETA”, Textual y Visual Media 4, 2011, pp. 198-200.

mayor repercusión mediática, el grueso de la información sobre las víctimas debía haber aparecido en la segunda etapa. No obstante, no es lo que ocurrió pues no existe una relación lineal directa entre la información y número de víctimas, esto es, mayor dedicación informativa cuantas más víctimas mortales haya⁶¹¹.

Pese a que mantienen que las cifras mortales emulan una figura piramidal, sostienen que hay varias excepciones sobre todo si se compara la primera fase tanto con la segunda como con la tercera y entre los grupos profesionales entre sí. Los políticos, magistrados, funcionarios de instituciones penitenciarias describen una trayectoria lineal con un leve ascenso en la última etapa y este fenómeno, incluso, se acentúa en el caso de los políticos. Si bien, la mayoría se concentra en el grupo de fuerzas y cuerpos de seguridad sobre todo en las dos primeras fases, en la medida en que, los objetivos se diversifican en la tercera, donde repuntan los políticos⁶¹².

Además, inciden en que, en los periódicos examinados, a partir de 1996 muestran un mayor interés por las víctimas, alcanzando las cuotas más altas de piezas informativas en las treguas de 1995 y 2005. De manera que, apuntan la existencia una correlación entre el aumento de repercusión mediática con la profesión a la que pertenecen los asesinados⁶¹³.

La banda terrorista asesinó en la última etapa a más representantes de la opinión pública y del orden político y en este contexto los medios de comunicación colaboraron tanto en ampliar la estrategia etarra de coaccionar la opinión pública y a sus representantes como de aumentar la desigualdad con los sectores con menos protagonismo público⁶¹⁴.

Sin embargo, el cambio de estatus laboral de los afectados originó un proceso que generó dos grupos: las víctimas silenciadas y las víctimas homenajeadas. En las primeras se encuentran cerca del 90% del total de fallecidos, guardias civiles, militares y población civil. Por la otra parte, en las

⁶¹¹ SANCHEZ-DUARTE, J. M. y SAMPEDRO BLANCO, V. F. Visibilidad mediática..., cit., pp. 198-200.

⁶¹² SANCHEZ-DUARTE, J. M. y SAMPEDRO BLANCO, V. F. Visibilidad mediática..., cit., pp. 198-200.

⁶¹³ SANCHEZ-DUARTE, J. M. y SAMPEDRO BLANCO, V. F. Visibilidad mediática..., cit., pp. 198-200.

⁶¹⁴ SANCHEZ-DUARTE, J. M. y SAMPEDRO BLANCO, V. F. Visibilidad mediática..., cit., pp. 198-200.

víctimas homenajeadas se abarca sólo al 10% del total que fueron dotados de un poder simbólico traducido en protagonismo efectivo cuyo reconocimiento de su estatus se ve favorecido gracias a los medios y los políticos, magistrados o periodistas que los erigieron en actores válidos en las decisiones y debates políticos⁶¹⁵.

En la segunda hipótesis relacionada con el factor geográfico que plantean estos autores, abordan si el incremento del número de atentados terroristas con resultado de fallecimiento cometidos fuera de los territorios del País Vasco y Navarra ha provocado un correlativo aumento de la atención mediática sobre estos hechos delictivos o, al contrario, no ha sido determinante. Teniendo en cuenta este objetivo decidieron diferenciar dos periodos de tiempo, por un lado, la fase que comprende los años 1976 hasta 1998 y, el segundo que abarca los años entre 1998 y 2007. La razón de señalar el año 1998 como punto de inflexión se debe a que, a partir de esta fecha, desciende el número de atentados cometidos dentro del País Vasco y Navarra –pasa del 75% al 56%- y, por su parte, paralelamente, aumentan fuera de estos territorios. De esta manera señalan los datos plasmados en la siguiente tabla⁶¹⁶:

LUGAR DE ASESINATO	PORCENTAJE DE VÍCTIMAS CON RESULTADO DE FALLECIMIENTO
Dentro del PV y Navarra	72,4%
Fuera del PV y Navarra	27,6%

Tabla 10: elaborada a partir de los datos ofrecidos por la investigación realizada por SANCHEZ-DUARTE y SAMPEDRO sobre el lugar del asesinato y sus porcentajes.

A pesar de que se han concentrado la mayoría de los asesinatos dentro del País Vasco y Navarra, al mismo tiempo, se pueden advertir fluctuaciones de

⁶¹⁵ SANCHEZ-DUARTE, J. M. y SAMPEDRO BLANCO, V. F. Visibilidad mediática..., cit., pp. 198-200.

⁶¹⁶ SANCHEZ-DUARTE, J. M. y SAMPEDRO BLANCO, V. F. Visibilidad mediática..., cit., pp. 200-202.

acuerdo al periodo temporal de que se trate, de esta manera, constatan en función del momento anterior o posterior a 1998 que⁶¹⁷:

LUGAR DEL ASESINATO	HASTA 1998	DESDE 1998
Dentro PV y Navarra	75%	56%
Fuera del PV y Navarra	25%	44%

Tabla 11: elaborada a partir de los datos ofrecidos por la investigación realizada por SANCHEZ-DUARTE y SAMPEDRO sobre el lugar del asesinato hasta 1998 y desde 1998.

De acuerdo con la información anterior concluyen que, a lo largo de la actividad de la banda terrorista, las víctimas se han concentrado principalmente en las tres provincias del País Vasco –en las que se concentraron en torno al 67,4% del total de asesinatos- y si, además, a este porcentaje se le añade que en Navarra se produjo cerca del 5% el número total alcanza dentro de estos territorios casi las tres cuartas partes de los asesinatos⁶¹⁸.

No obstante, en cuanto a las piezas periodísticas se puede comprobar que, la atención mediática aumentó a partir de 1998, momento que coincide con el incremento de la comisión de acciones terroristas con resultado de muerte fuera del País Vasco y Navarra. Esto es, a partir de 1998 disminuyeron los atentados en el País Vasco y Navarra –pasó del 75% al 56%- , si bien, los medios de comunicación nacionales aumentaron la cobertura de los afectados de manera significativa⁶¹⁹.

En conclusión, al aumentar el número de víctimas fuera del País Vasco, los medios de comunicación nacionales incrementaron la cobertura periodística sobre este fenómeno y sus consecuencias y, precisamente, esta mayor atención en ambos periódicos que alcanzaron cotas del 20% y 8%, respectivamente, hasta

⁶¹⁷ SANCHEZ-DUARTE, J. M. y SAMPEDRO BLANCO, V. F. Visibilidad mediática..., cit., pp. 200-202.

⁶¹⁸ SANCHEZ-DUARTE, J. M. y SAMPEDRO BLANCO, V. F. Visibilidad mediática..., cit., pp. 200-202.

⁶¹⁹ SANCHEZ-DUARTE, J. M. y SAMPEDRO BLANCO, V. F. Visibilidad mediática..., cit., pp. 200-202.

el año 1998. A partir de esa fecha dedicaron casi el total de la atención mediática, en concreto, ocho de cada diez supuestos en el caso de el periódico El País y, nueve de cada diez casos en el periódico El Mundo. No obstante, cada uno ha tenido un ritmo diferente en cuanto al número de fallecidos. En conjunto, cubrieron poco sobre ellas cuando más víctimas había. El descenso o la inexistencia de las víctimas se dio en periodos de máxima visibilidad. Hubo más atención mediática en los momentos en que los españoles no situaron el terrorismo etarra como principal problema. Esto corresponde el modelo de elitismo institucional, en cuanto al aumento de la cobertura mediática en ambos periódicos coincidiendo con el ascenso socio-laboral de las víctimas, y, el incremento de las víctimas fuera del territorio casco. Esto quiere decir que, en el momento en que las élites empezaron a ser víctimas, la actividad periodística se centró en ellos, debido a que la notoriedad institucional va acompañada de proyección informativa⁶²⁰.

Por todo lo expuesto y teniendo presente las características de nuestra muestra, se puede ver perfectamente la conexión que existe entre las hipótesis formuladas por SANCHEZ-DUARTE y SAMPEDRO y la percepción de las víctimas, debido a que, cerca del 70% de los participantes han precisado que no han tenido ningún tipo de apoyo social y esto puede estar relacionado, en cierta medida, con la cobertura informativa. Como han indicado ambos autores el interés mediático no se incrementó hasta que las víctimas no estaban vinculadas con determinadas profesiones y, a la vez, las acciones terroristas tuvieron un mayor impacto fuera de los territorios del País Vasco y Navarra, así que, si por una parte tenemos en cuenta que todos los entrevistados están relacionados con la Guardia Civil y que en la mayoría de los casos examinados se cometieron los atentados con anterioridad al año 1998 y dentro del País Vasco y Navarra puede ser uno de los motivos por el que no recibieron ningún apoyo social. Esto es, si no aparecía demasiada información en los medios de comunicación era más complicado que la propia sociedad tomara conciencia del verdadero impacto de este fenómeno

⁶²⁰ SANCHEZ-DUARTE, J. M. y SAMPEDRO BLANCO, V. F. Visibilidad mediática..., cit., pp. 200-202.

y, consecuentemente, hubiera una falta de apoyo social manifiesto hacia los afectados.

Tras realizar el estudio victimal tanto de las víctimas directas como de las víctimas indirectas en el que se han abordado sus características personales y sociales y, al mismo tiempo, el apoyo que han recibido se puede concluir que la principal vulnerabilidad que presentan los participantes es la falta de apoyo que han tenido desde los ámbitos de la sociedad en general y, sobre todo, de su entorno laboral. Estos últimos pueden resultar significativos, de manera especial el laboral, puesto que se les ha victimizado por representar la institución a la que pertenecen o al estado español, esto es, han sido seleccionados como víctimas por su significado político y este aspecto puede tener repercusiones en los estadios de victimización primaria, secundaria y terciaria como tendremos ocasión de comprobar.

5.4. Resultados

Tanto en el epígrafe dedicado al planteamiento del problema como el dirigido a explicar los objetivos y la metodología que se iba a utilizar en este estudio, hemos hecho hincapié en que se trata, ante todo, de realizar un análisis a modo de primera aproximación sobre las medidas de naturaleza desvictimizante previstas en el texto legal y su incidencia o repercusión en los propios afectados por el fenómeno terrorista. De este modo, con el propósito de evaluar las medidas comprendidas a lo largo de las disposiciones legales se ha determinado llevarlo a cabo de acuerdo a las tres dimensiones siguientes a fin de obtener una visión global:

- En primer lugar, nuestro interés se dirige a averiguar cuál es el *conocimiento* efectivo de la medida que tienen los propios afectados. La pregunta sobre esta vertiente es un paso ineludible debido a que, si no poseen un correcto conocimiento como pueden ser los casos en los que la víctima o afectado no conozca realmente cuál es su contenido resultaría ilógico preguntarle sobre su efecto reparador. Aquí

se tendrán en cuenta las tres situaciones en las que se pueden encontrar los participantes. Primero, si los entrevistados *conocen la medida* o saben cuál es su contenido –tanto si han recibido la información a nivel oficial como por haber consultado las disposiciones legales-. Segundo, cuando *no la conocen* –bajo esta categoría se incluirán los supuestos en que “han oído algo, pero no saben de qué se trata”-. Y, tercero, el *conocimiento tardío*, esto es, cuando cercioramos que ha pasado un lapso de tiempo considerable desde la aprobación del texto legal hasta que han sabido de su existencia.

- En segundo lugar, tras averiguar si conocen las medidas y previamente a preguntar acerca de su naturaleza reparadora –siempre y cuando la respuesta a las dos primeras haya sido afirmativa o al menos a la del acceso- conviene que nos expliquen si han accedido a ellas. Este es el motivo por el cual hemos llamado *conveniencia* a esta segunda dimensión, en la medida en que, el legislador ha decidido otorgar unas determinadas concesiones en función de la clase victimal de que se trate-. En esta dimensión valoraremos si el afectado *ha accedido*, ha tenido un *acceso tardío*, *no ha podido acceder*, *no ha querido acceder*, *está en trámite* o, en su caso, *no le corresponde*.
- Finalmente, una vez hemos constatado que han accedido a ella, ya estamos en disposición de preguntar qué percepción tienen las víctimas sobre su naturaleza reparadora y si consideran que les ha ayudado en su recuperación –la llamada *efectividad*-. Aquí se determinará si la medida ha alcanzado el estatus de *reparadora* o, por su parte, la consideran *no reparadora*.

La razón de plantear la evaluación desde estas tres perspectivas no es otra que poder realizar un verdadero examen crítico de la problemática actual de las víctimas debido a que no podremos afirmar que una medida tiene la naturaleza de reparado o no si la víctima no la conoce o no ha accedido a ella ya sea porque no tiene acceso a las mismas –sus circunstancias no están previstas legalmente-

o porque simplemente ha considerado no solicitarlas. Además, abordando estos tres aspectos estaremos en condiciones de dilucidar si realmente las víctimas conocen el régimen de asistencia, protección y ayuda al que se pueden acoger o, por su parte, desconocen la normativa. Tras examinar todas estas cuestiones las circunstancias serán óptimas para proponer mejoras teniendo en cuenta las experiencias victimales de nuestros entrevistados.

5.4.1. Derecho a la verdad

Como ya se adelantó en la parte teórica de la presente investigación, la victimización, entendida como el proceso que atraviesa una persona para adquirir la consideración de víctima, puede dividirse en los estadios de victimización primaria, secundaria y terciaria. La primera de ellas, se refiere a la experiencia victimal y las consecuencias de naturaleza negativa que experimenta a consecuencia de la producción del hecho delictivos tanto de índole física, económica, psicológica como material. Conviene precisar que el aspecto psicológico alude al ámbito de lo inconsciente y de la desestructuración de la personalidad de un sujeto. En ocasiones, estos extremos transitan hacia trastornos tanto mentales como conductuales. Este término no debe confundirse con "daño moral", pues juegan en campos diferentes, el primero en el inconsciente, mientras que éste se percibe de manera consciente como un perjuicio más que como un padecimiento. Las lesiones psíquicas más comunes son el trastorno por estrés post-traumático, trastornos adaptativos mixtos y los trastornos de personalidad. Por ejemplo, en el caso de terrorismo, los efectos devastadores más comunes en las víctimas son los siguientes: los sentimientos de humillación, vergüenza, ira e impotencia; volver a revivir el suceso traumático; la disminución de la autoestima; descenso de la autoconfianza; y la dependencia y el aislamiento⁶²¹. En definitiva, con este concepto se hace referencia a las primeras consecuencias derivadas del delito.

⁶²¹ LANDROVE DÍAZ, G. Victimología..., cit., pp. 43-44; no obstante, GARCIA-PABLOS reduce los efectos ocasionados por el hecho delictivo tan solo a dos, los materiales y los psíquicos; en GARCIA-PABLOS DE

Por lo tanto, debido a que la victimización primaria alude tanto a la comisión del hecho delictivo como a los efectos negativos que se derivan de la producción de éste, se puede considerar que, por una parte, el derecho a la verdad contribuye a describir la acción terrorista y las circunstancias en las que se ha cometido y, por otra parte, el derecho a la reparación –en un sentido estricto- trata de paliar las consecuencias negativas que puede experimentar la víctima tras haber sufrido el hecho traumático. De manera que, por estas razones se ha considerado que las medidas integradas en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, relacionadas con los dos derechos anteriores tienen un carácter desvictimizante en cuanto a la victimización primaria.

Tras las precisiones realizadas sobre el estadio de la victimización primaria y sus correspondientes medidas de posible carácter desvictimizante previstas a lo largo del texto legal vamos a comenzar haciendo alusión a la verdad. En el Capítulo cuarto nos referimos a que actualmente y en el escenario del fenómeno terrorista en que nos encontramos, *"el derecho a la verdad entraña tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones perpetradas y su motivación"* o, formulado de otro modo, qué tipo de vulneraciones de derechos humanos han cometido los terroristas a través de sus actuaciones, quiénes han llevado a cabo estas acciones, cuáles han sido sus motivaciones, las condiciones y circunstancias contextuales de la actuación terrorista, y, para finalizar, quiénes han sido las víctimas y las consecuencias que han padecido a consecuencia de la comisión delictiva⁶²².

MOLINA, A. Criminología. Una introducción..., cit., p. 107; PEREZ ALVAREZ, F. Y DIAZ CORTES, L. M. Introducción a la Criminología..., cit., pp. 68-69.

⁶²² En este sentido, el Preámbulo de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, explica que "Igualmente, los poderes públicos contribuirán al conocimiento de la verdad, atendiendo a las causas reales de victimización y contribuyendo a un relato de lo que sucedió que evite equidistancias morales o políticas, ambigüedades o neutralidades valorativas, que recoja con absoluta claridad la existencia de víctimas y terroristas, de quien ha sufrido el daño y de quien lo ha causado y que favorezca un desenlace en el que las víctimas se sientan apoyadas y respetadas, sin que quepa justificación alguna del terrorismo y de los terroristas. En este sentido, la presente Ley es también una manifestación de la condena más firme de la sociedad española hacia el terrorismo practicado en nuestra historia, incompatible con la democracia, el pluralismo y los valores más elementales de la civilización. Nuestro reconocimiento a sus víctimas mediante esta Ley es la mejor forma de denunciar su sinrazón a lo largo de todos estos años.

La información pertinente acerca de qué ha ocurrido, quienes han sido los agresores y, en consecuencia, quienes son las víctimas está vinculada con las disposiciones legales relacionadas con la información especializada y la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo puesto que la verdad implica tener acceso a los datos que consten en la Administración sobre el acontecimiento traumático. En relación a las funciones encomendadas a la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo en la Audiencia Nacional, destaca facilitar información tanto del estado de los procedimientos que les afecte como de la ejecución penitenciaria siempre brindado una atención personalizada a la víctima o el afectado⁶²³.

En consonancia con las disposiciones legales de carácter estatal, incluso, en las normativas autonómicas también se ha hecho referencia a este derecho, tal y como es el caso del art. 7,1 la Ley 4/2008, de 19 de junio, del País Vasco que establece que *"los poderes públicos vascos contribuirán al conocimiento de la verdad sobre las violaciones de derechos humanos derivadas de acciones terroristas y las causas reales de la victimización, así como al reconocimiento*

⁶²³ Por su parte, el art. 50 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, dispone que: "1. Las Administraciones Públicas con competencia en materia de medios materiales sobre la Justicia, en colaboración con los órganos de gobierno del Poder Judicial, establecerán los mecanismos de información personalizada que permitan a las personas señaladas en el artículo 4 de la presente Ley conocer el estado de los procedimientos en los que son parte y, en su caso, de las acciones judiciales que pueden iniciar en defensa de sus derechos. Específicamente, el Ministerio de Justicia establecerá una Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo en la Audiencia Nacional. 2. Los citados mecanismos de información pueden consistir en la creación de oficinas específicas, en la presentación telemática de informaciones y en cualquier otro que permita obtener la información que deseen aminorando la dificultad de obtener la misma. 3. Las personas que presten la citada información y atención deberán tener la cualificación suficiente para evitar la duplicidad de trámites y las personaciones innecesarias ante los correspondientes órganos jurisdiccionales". Mientras que el art. 51 del mismo texto legal establece que: "Entre las funciones de la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional se encuentran: Facilitar información sobre el estado de los procedimientos que afecten a las víctimas del terrorismo; Asesorar a las víctimas del terrorismo en todo lo relacionado con los procesos penales y contencioso-administrativos que les afecten; Ofrecer acompañamiento personal a los juicios que se celebren en relación a los actos terroristas de los que traigan causa los afectados; Promover la salvaguarda de la seguridad e intimidad de las víctimas en su participación en los procesos judiciales, para protegerlas de injerencias ilegítimas o actos de intimidación y represalia y cualquier otro acto de ofensa y denigración; Establecer cauces de información a la víctima acerca de todo lo relacionado con la ejecución penitenciaria, hasta el momento del cumplimiento íntegro de las penas. Particularmente, en los supuestos que supongan concesión de beneficios o excarcelación de los penados".

público de dicha verdad, a fin de satisfacer los derechos que al respecto asisten a las víctimas y sus familiares". De acuerdo con la voluntad manifiesta de los legisladores tanto del ámbito estatal como autonómico, una de las prioridades básicas consiste en conocer aquello que ha ocurrido e, intrínsecamente vinculada a ésta, se encuentra facilitar la información o los datos obtenidos a los afectados por el fenómeno terrorista pues, al fin y al cabo, esos hechos son los que han propiciado su consideración de víctimas del terrorismo y, por ende, han motivado la concesión de los derechos consecuentes.

Teniendo presente que nuestro objetivo es obtener información sobre el acceso que han tenido a los datos que obren en la Administración por la causa en la que se vieron afectados se han preguntado dos aspectos estrechamente vinculados como son el conocimiento y acceso al relato oficial de los hechos referido a la sentencia y, a su vez, a cualquier dato que esté en la Administración siempre y cuando esté relacionado con los hechos delictivos, debido a que, no en todos los casos se ha llegado a dictar sentencia y, en otros, algunos participantes además han conocido los atestados o las diligencias de investigación con independencia de la sentencia.

Por una parte, sobre el acceso a los datos que constan en la Administración relacionados con las acciones terroristas en las que se han visto involucrados de forma involuntaria los sujetos de esta muestra, prácticamente la totalidad de los participantes, en torno al 90%, *no conocía* la previsión de que podían acceder a los datos obrantes en la Administración en relación con los hechos que han padecido. Esto es, no conocían que a nivel legal esta medida les correspondía o se les había reconocido mediante la concesión del derecho a la verdad -en virtud de las disposiciones legales- a las víctimas del terrorismo. Sin embargo, pese a este desconocimiento, parte de los entrevistado se han interesado en obtener información. Y a este respecto, podemos comprobar lo siguiente:

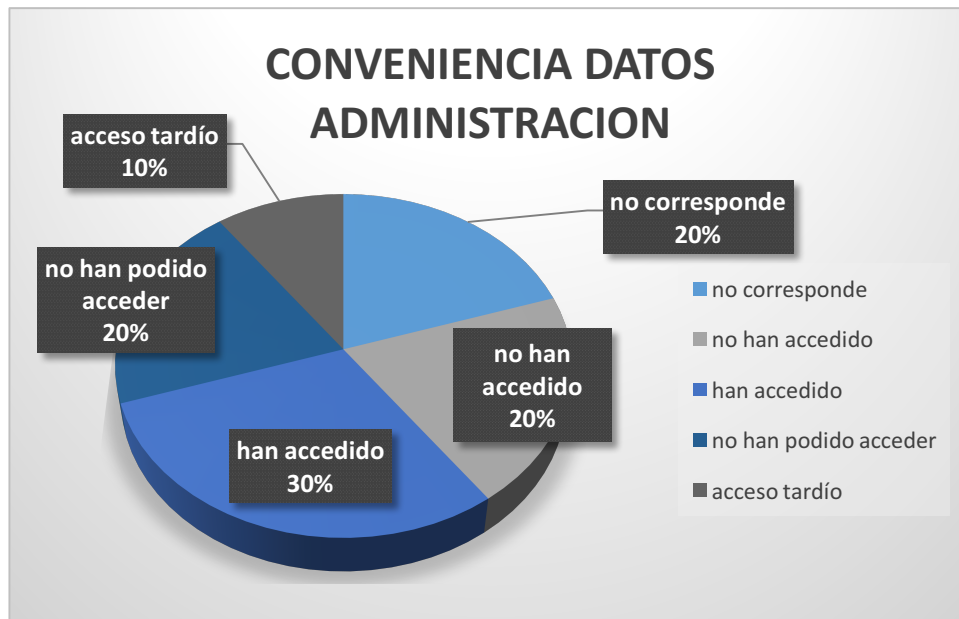


Gráfico 3: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el acceso a los datos que consten en la Administración.

De los resultados dispares que se han plasmado en el gráfico anterior, se puede apreciar que el 30% *ha accedido* a los datos que están en la Administración sobre el atentado en el que han sido la parte afectada. No obstante, cerca del 20% intentó acceder a cualquier tipo de información, pero lo consiguieron –*no han podido acceder*-. Y, finalmente, el 10% han tenido un *acceso tardío* pues tal y como manifiesta “*me enteré por Facebook que se ha vuelto a abrir el caso y nadie ha avisado*”. Si bien, hay que tener en cuenta que el 20% *no les corresponde* en la medida en que son víctimas indirectas por parte de un herido. A pesar de todo, han tenido *acceso* un total del 40%.

Por su parte, el relato oficial materializado en la sentencia, igual que ha ocurrido en la medida anterior, el 90% de los entrevistados *no conoce* que se prevé en las disposiciones legales dedicadas a las víctimas del terrorismo por su vinculación con el derecho a la verdad. No obstante, los interesados también han intentado acceder a ella. Los resultados al respecto son los siguientes:

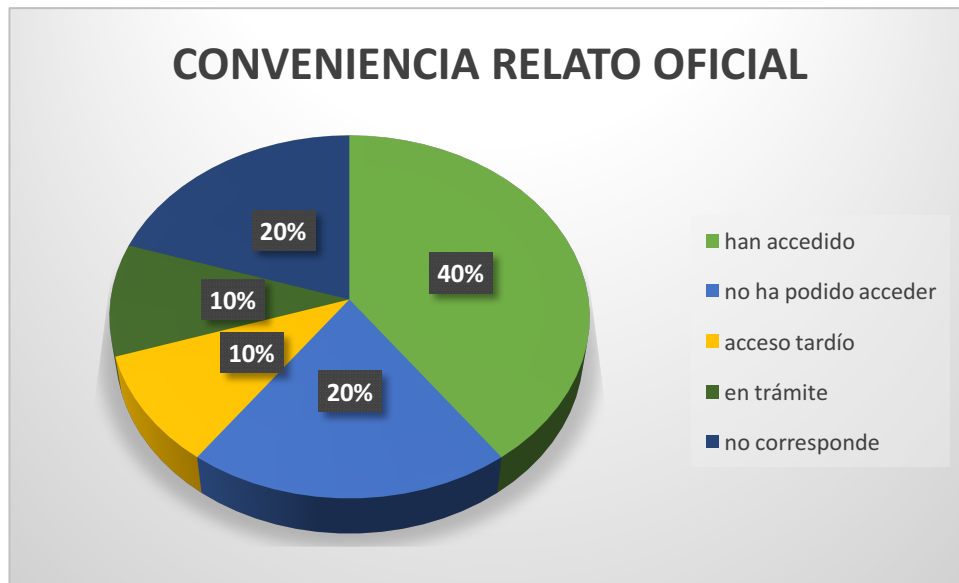


Gráfico 4: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el acceso al relato oficial de la victimización terrorista.

De este modo se puede precisar que el 40% ha tenido *acceso* a la sentencia dictada sobre los hechos de los que resultó víctima. En cambio, el 10% *no ha podido acceder* puesto que no se llegaron a esclarecer los hechos. Con el mismo porcentaje se encuentran quienes han tenido un *acceso tardío* sobre el que destacan "*me enteré después por terceras personas*". Al igual que en la anterior medida, el 20% *no les corresponde* puesto que ha sido la propia víctima directa quien ha tenido acceso y conocimiento de la sentencia.

Los datos que hemos obtenido al analizar el conocimiento y conveniencia tanto del relato oficial como de los datos obrantes en la Administración son bastante similares en tanto puede desprenderse del examen de los gráficos anteriores. Pues, en cierta medida, el 90% de los individuos afectados por el terrorismo *no conocía* que esta previsión estaba dentro de la normativa de víctimas. Asimismo, el acceso a los datos que constan en la Administración alcanza el 40% mientras que el *acceso* a la sentencia se estima en torno al 50%. Al mismo tiempo, en ambos *no han podido acceder* el 20% e, igualmente, al

mismo porcentaje *no le corresponde* directamente este derecho a favor de la víctima directa. Esta similitud de resultados queda reflejada a continuación:

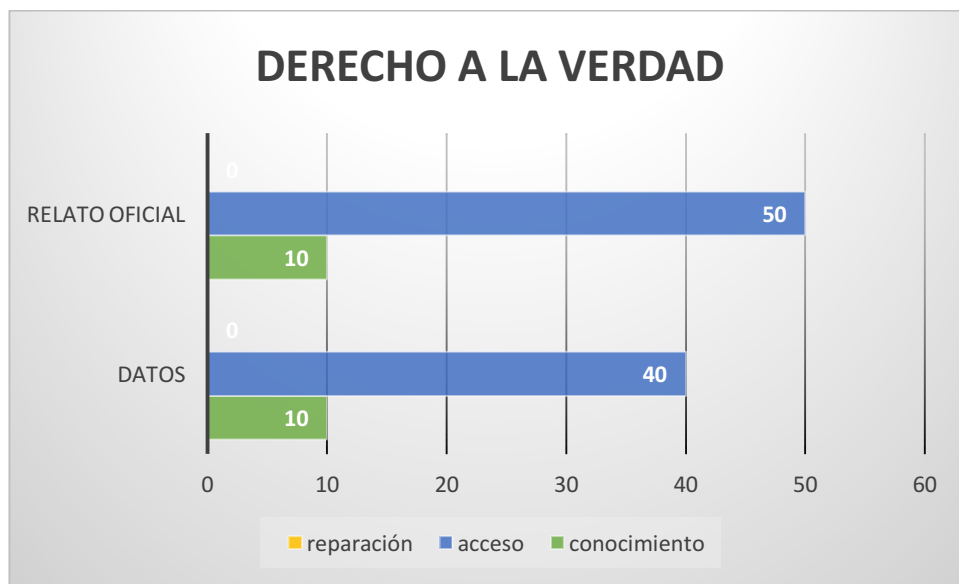


Gráfico 5: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento, acceso y reparación de las medidas incluidas en el derecho a la verdad.

Además, como se ha reflejado en el gráfico anterior, ambas medidas cuyo objetivo es contrarrestar los efectos de la victimización primaria se consideran *no reparatoras* por la totalidad de la muestra puesto que parte de los entrevistados, incluso, plantean que, aunque supieran con exactitud las circunstancias del atentado no les repararía el daño causado. Tal y como ha señalado un participante sobre esta cuestión: *"quizá saber quiénes fueron repare a la viuda no a mí"*. Esto es, en el momento en que se les pregunta si les repara o les repararía conocer toda la información que se disponga en relación con los hechos que motivaron su consideración de víctimas, lo asocian con la identidad de los autores y esta asimilación puede deberse a que en la mayoría de los casos examinados, los entrevistados vivieron el suceso en primera persona, se lo pudo contar la propia víctima o estuvieron en el lugar de los hechos –en torno al 90%- y, en efecto, son conscientes de los hechos que ocurrieron sin que precisen de

una corroboración oficial. No obstante, se puede constatar que los participantes simplemente no opinan que averiguar quiénes fueron los agresores no sería reparadora, sino que, determinados sujetos, aun teniendo la posibilidad, prefirieron no consultarlo. Así lo manifiesta una de las víctimas: *"no le doy importancia al nombre del terrorista. Sé que fue el Comando Costa y con esto ya sé suficiente. Prefiero no saber el nombre concreto"*. Con estas palabras da a entender que no quiere, por voluntad propia, focalizar quienes han perpetrado el atentado, sino que le es suficiente con saber algún dato genérico como en este caso ha sido el Comando que lo llevó a cabo.

En definitiva, de acuerdo con los datos obtenidos, será posiblemente uno de los derechos más desconocidos de todos los concedidos por la ley pese a que una parte considerable –prácticamente la mitad- ha solicitado información. Las razones por la que posiblemente el 20% no haya podido acceder a los datos que consten en la Administración sean la ausencia de registros oficiales de víctimas, la desconexión de las víctimas y las causas judiciales junto con los casos que aún están por resolver. En la actualidad, la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo está creando una base de datos que contenga la información sobre todas las víctimas del terrorismo y la identificación de su causa judicial con la finalidad de facilitarles, cuando lo precisen y así lo requieran, la información del procedimiento. La creación de la base de datos es el primer paso para cuantificar las victimizaciones derivadas del fenómeno terrorista y ofrecer los datos oficiales de España.

Asimismo, parte de las experiencias victimales compartidas por los entrevistados están relacionadas con el 44% del total de los asesinatos producidos por la organización terrorista ETA que no han obtenido una resolución judicial, no se sabe quiénes han sido sus autores ni, en su caso, quiénes dieron las órdenes. Por ello, ya se adelantó en la parte teórica del presente estudio que, a finales del año 2014, la asociación Dignidad y Justicia puso en conocimiento del Defensor del Pueblo que todavía quedaban 377 asesinatos sin resolver por motivos diversos, como son, la prescripción del delito, falta de pruebas,

negligencias judiciales, cuestiones burocráticas o por la aplicación de la Ley de Amnistía del año 1977⁶²⁴.

No obstante, mayoritariamente opinan que la versión oficial que comprenda qué pasó, quienes cometieron los hechos delictivos –se refieren tan sólo a la banda terrorista sin dar los nombres de sus integrantes-, con qué motivaciones, cómo lo hacían y quienes han sido las víctimas serviría, ante todo, para que no se olvidara parte de la historia española y que las futuras generaciones además de que supieran la verdad de lo ocurrido durante cierto periodo de tiempo no volvieran a caer en los errores en los que se ha caído sobre todo los relativos a la indiferencia mostrada hacia los afectados por este fenómeno. Precisamente esta idea que apuntan las víctimas, como tendremos ocasión de comprobar, está directamente vinculada con la educación en valores que está incluida dentro de las medidas frente a la victimización terciaria. Si bien, aquí cabe hacer alguna consideración puesto que la educación en valores está vinculada tanto con la verdad como con la memoria. Por una parte, la verdad se traduce en el conocimiento del pasado que se debería transmitir previamente al relato victimal que está asociado con la memoria. La finalidad del derecho a la verdad, en términos criminológicos, que ofrece el conocimiento del relato real y las causas de victimización contribuye a la separación entre víctimas y terroristas a fin de facilitar el apoyo a las primeras y la deslegitimación de los segundos. La explicación más certera pretendida con el derecho a la verdad no sólo ayudará a deslegitimar el terrorismo sino a dar visibilidad del daño causado por las organizaciones terroristas a las futuras generaciones y estos son precisamente los principales anhelos de los sujetos participantes en esta investigación.

5.4.2. Derecho a la reparación

En el momento en que hablamos de reparación lo asociamos con el sistema previsto legalmente que abarca las prestaciones y las medidas administrativas que favorezcan todo aquello considerado restituible y, al mismo

⁶²⁴ DEFENSOR DEL PUEBLO. Estudios sobre los derechos de las víctimas..., cit., p. 10.

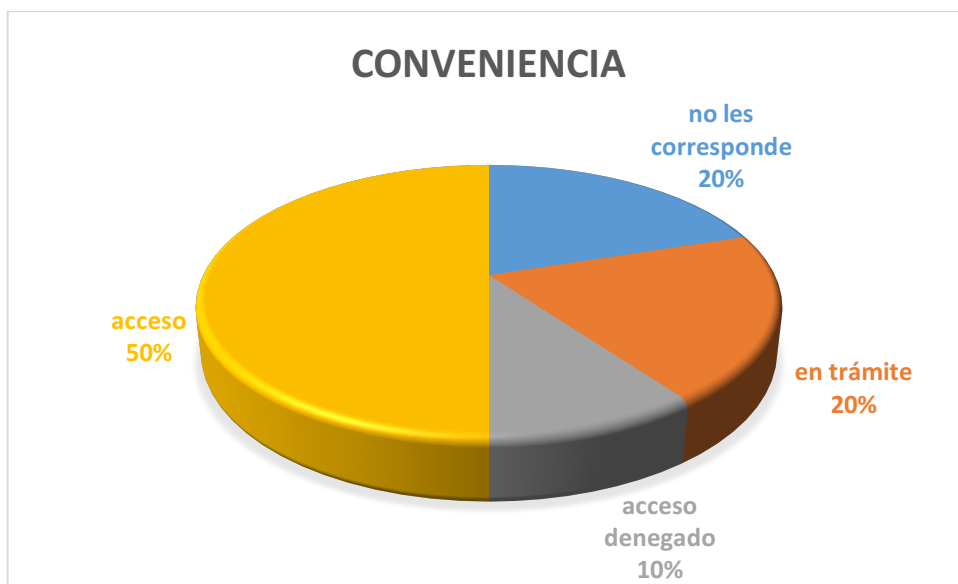
tiempo, trata de cubrir todos los ámbitos en los que la víctima pueda tener necesidades con el fin de que se recupere y pueda volver a su vida cotidiana con total normalidad. Por ello, se explica que la intervención pública pretende la rehabilitación personal y su reintegración social, esto es, que abandone su status de víctima. Frente a la dimensión amplia de la reparación que incluye las medidas de todos los derechos, la dimensión más estricta, que trata de prevenir o reducir los efectos de la victimización primaria, está constituida por las indemnizaciones por daños personales previstas para los afectados, el sistema de asistencia donde se aludirá a la ayuda psicológica y, finalmente, al conjunto de prestaciones sociales tales como las medidas educativas y las laborales.

En primer lugar, se van a abordar las tres dimensiones de *conocimiento, conveniencia y efectividad* relacionadas con las indemnizaciones previstas para los daños personales donde se incluyen las ayudas por fallecimiento, incapacidades permanentes, lesiones permanentes no invalidantes, incapacidad temporal y la responsabilidad civil fijada en sentencia firme debido a que, como hemos comprobado con anterioridad, los sujetos participantes han estado involucrados con acciones terroristas con resultado de fallecimiento o heridos de forma directa o indirecta.

Tras entrevistarnos con ellas, hemos constatado que, prácticamente la totalidad de la muestra conocía la inclusión de la indemnización por daños personales en la ley 29/2011, de 22 de septiembre, en concreto, el 90% ha contestado afirmativamente frente al 10% que, pese a que no conocía que estaba prevista en el texto legal, es cierto que también ha accedido a la indemnización económica⁶²⁵.

⁶²⁵ En el caso de fallecimiento, según el art. 17 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, “...se abonarán las cantidades dispuestas en el anexo I. 2. Los titulares de este derecho, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, serán, por orden de preferencia, las siguientes personas: a) El cónyuge de la persona fallecida, si no estuvieren legalmente separados, o la persona que hubiere venido conviviendo con ella de forma permanente con análoga relación de afectividad al menos los dos años inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieren tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia; y los hijos de la persona fallecida. b) En caso de inexistencia de los anteriores, serán destinatarios, por orden sucesivo y excluyente, los padres, los nietos, los hermanos y los abuelos de la persona fallecida. c) En defecto de los anteriores, los hijos de la persona conviviente y los menores en acogimiento familiar permanente de la persona fallecida, cuando dependieren económicamente de ella. 3. En el caso de la concurrencia prevista en el apartado a), la ayuda se repartirá por mitades, correspondiendo una al cónyuge o conviviente y la

Dentro de la *conveniencia* la indemnización podemos realizar una serie de distinciones entre los participantes. En primer lugar, existen dos víctimas indirectas a las que *no les corresponde* esta medida, puesto que, en su caso son familiares de una víctima directa que ha resultado herida y, por tanto, debemos incluirlas dentro de la categoría no les corresponde. En segundo lugar, el 20% están *en trámite* a efectos de que se les conceda. El 10% a pesar de que sí han tratado de solicitar esta concesión económica se la han denegado. Como consecuencia, a día de hoy, tan sólo el 50% de los entrevistados han sido indemnizados pese a que oficialmente el 70% sí que ostenta la condición de víctima del terrorismo o la condición de víctima del terrorismo a efectos honoríficos. En definitiva, teniendo en cuenta que, la previsión legal la conocen el 90%, los datos que ellos mismos nos han proporcionado sobre su conveniencia queda reflejado en el siguiente gráfico a efectos de clarificarlos:



otra a los hijos, distribuyéndose esta última entre ellos por partes iguales. 4. En los supuestos de concurrencia de personas con el mismo parentesco, la cuantía total se repartirá entre ellas por partes iguales". Mientras que el art. 18 de la citada ley establece que "Las víctimas del terrorismo que como consecuencia del delito sufran daños personales tendrán derecho a las indemnizaciones fijadas en las tablas I, II y III del anexo de esta Ley para los distintos grados de incapacidad, lesiones no invalidantes y secuestro.

Gráfico 6: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre la conveniencia de la indemnización.

Además, se les ha preguntado en qué medida la indemnización económica concedida por los daños causado por el fenómeno terrorista les ha reparado de este suceso traumático y sus consecuencias, salvo al participante a quien se la han denegado. Esta pregunta también se les ha realizado a las víctimas indirectas que son familia directa de un herido, en la medida en que, de un modo indirecto han podido observar si la cuantía percibida por la víctima directa le ha podido reparar o no a la víctima o les ha venido bien para superar la victimización en términos familiares. En este sentido, una de las víctimas directas ha manifestado que *"es una ayuda, pero no repara el daño"*, mientras que la víctima indirecta familiar de un fallecido ha comentado que *"es una ayuda económica, no repara ni el dolor ni el disgusto. La vida de mi padre no la repara"* y, finalmente, un participante víctima indirecta familiar de un herido ha explicado que *"no me ha reparado de las consecuencias físicas y emocionales del atentado en sí porque los daños no se pueden pagar –se refiere a los padecidos por la víctima directa–"*. En efecto, todos los participantes han apuntado que la han considerado una ayuda económica que, por el contrario, no ha tenido efectos reparadores de las consecuencias de la consumación de la acción terrorista.

Además de la compensación económica, se prevé que la ayuda psicológica pueda recibirse inmediatamente tras la materialización del atentado terrorista –según los arts. 9 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, y el art. 30 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, que lo desarrolla-, disposiciones que, por la temporalidad de los hechos, solamente se le ha ofrecido al 10% y que no ha creído conveniente recibir en función de sus circunstancias personales, laborales y sociales. Además de esta previsión, se contempla la posibilidad de recibir ayuda psicológica siempre y cuando los afectados y familiares sufran secuelas a consecuencia del suceso traumático. En este sentido, el *conocimiento* de las víctimas directas e indirectas de estas medidas se sintetiza en la siguiente tabla:⁶²⁶

⁶²⁶ El art. 33 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011, establece que: *"1. Las víctimas y amenazados y sus familiares o personas con quienes*

	conocimiento	no conocimiento
conocimiento oficial	20%	
conocimiento tardío	50%	
TOTAL	70%	30%

Tabla 12: elaborada a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento de la ayuda psicológica.

De estos datos se desprende que, a pesar de que sólo el 70% de los participantes manifiesta que conoce esta previsión legal, lo cierto es que todos podrían acceder a la misma sobre todo a las últimas previsiones relacionadas con las secuelas que pueden experimentar con posterioridad al evento traumático ya que la propia ley la prevé tanto para las víctimas –heridos- y familiares de los heridos y fallecidos. Sin embargo, de los participantes que han dicho conocerla sólo una parte ha solicitado recibir ayuda psicológica. Los resultados sobre el acceso –que lo hemos incluido dentro de la expresión conveniencia- del 70% que la conoce y, al mismo tiempo, la tiene concedida es la siguiente:

convivan, que sufran secuelas psicológicas derivadas de los actos de terrorismo que se manifiesten con posterioridad, tendrán derecho a la financiación del coste de la atención psicológica, previa prescripción facultativa, con un límite de 3.600 euros por tratamiento individualizado.² A tal efecto, la Administración General del Estado podrá establecer los oportunos conciertos con otras Administraciones Públicas o con entidades privadas especializadas en dicha asistencia. En defecto de los oportunos conciertos, la Administración General del Estado podrá financiar el coste de los tratamientos individuales requeridos, siempre que quede acreditada, a juicio de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, su necesidad, vinculación con las acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento y falta de adecuación al trauma causado por las acciones terroristas del tratamiento psicológico prestado por el sistema de previsión público o privado. La ayuda correspondiente se abonará por trimestres vencidos al profesional interviniente, previa presentación de las facturas originales de los honorarios correspondientes”.

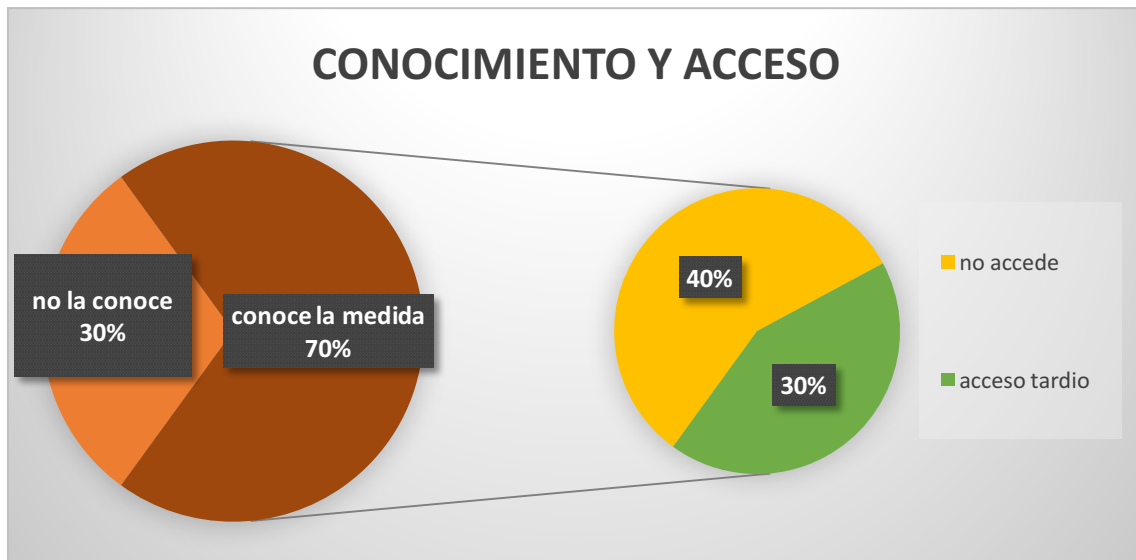


Gráfico 7: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento y acceso a la ayuda psicológica.

Como se puede observar en los gráficos presentados, el 50% ha precisado que la *conoció tardíamente* -del 70% que conoce la medida-, así lo explica uno de los participantes: *"ni me la ofrecieron ni la recibí en los primeros años, aunque, con posterioridad, sí que se informó que se podían solicitar estos servicios"*. No obstante, dentro de la dimensión relacionada con el acceso tan sólo el 30% de aquellos que la conocen la ha solicitado de modo igualmente tardío. A la pregunta cuándo la solicitaron se comprueba que hace menos de cinco años que la solicitaron puesto que responden *"hace un año"* o *"la solicité hace unos años"*. Dentro de los motivos que les ha llevado a recibir la ayuda psicológica nos encontramos con razones para normalizar su día a día o por motivos de insomnio que indirectamente pueden tener un trasfondo en el hecho traumático. Pese a su recepción, todos coinciden en que la ayuda no es reparadora y así lo han comentado: *"ayuda, pero no repara, llegó tarde"* o *"me ha ayudado, pero no me ha reparado"*. Por lo tanto, podemos concluir que, según los solicitantes de dicha medida, la ayuda psicológica favorece en el camino hacia la recuperación, pero no la califican como reparadora.

Finalmente, teniendo en cuenta las circunstancias de todos los afectados podemos adelantar que todos están en condiciones de acceder a las medidas contenidas en los ámbitos laboral y educativo según la estipulación del propio texto legal. Por una parte, dentro de las ayudas en el sistema educativo se ha determinado, en primer lugar, la exención de tasas académicas en los centros de estudios oficiales para las víctimas e hijos de heridos y fallecidos. En segundo lugar, la concesión de las ayudas de estudio siempre y cuando a consecuencia de la acción terrorista se deriven daños personales que le incapaciten del ejercicio de su profesión que se puede conceder al estudiante, viudo, pareja de hecho o hijo de fallecido, padres, hermanos, tutores o guardadores. Y, en tercer lugar, contempla la posibilidad de nombrarle tutor a los heridos y familiar de fallecido para que le facilite la continuación de sus estudios⁶²⁷. Mientras que en los derechos laborales encontramos tres dimensiones de ayudas. Por una parte, tendrá derecho a la reordenación de su tiempo de trabajo y movilidad los heridos, su cónyuge o la persona con quien mantenga una relación estable, sus hijos y los hijos de los fallecidos. Al mismo tiempo, los anteriores también pueden ser beneficiarios de la bonificación a la contratación y de las políticas activas de empleo. Y, por otra parte, los heridos que tengan la condición de funcionario público tendrán derecho a la reordenación o reducción de su jornada de su

⁶²⁷ El Capítulo Quinto de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección a las Víctimas del Terrorismo, se dedica a las ayudas educativas e integra la exención de las tasas educativas, las ayudas al estudio y el régimen de asistencia en el sistema educativo. En este sentido, el art. 38 del texto legal se refiere a que: *“Las Administraciones Públicas competentes y, en su caso, las autoridades educativas adoptarán, en los distintos niveles educativos, las medidas necesarias para asegurar la exención de todo tipo de tasas académicas en los centros oficiales de estudios a las víctimas de actos terroristas definidas en el artículo 4, apartado 1, de la presente Ley, así como a los hijos de aquéllos que hayan fallecido en acto terrorista o de aquéllos que han sufrido daños físicos y/o psíquicos a consecuencia de la actividad terrorista”*. Mientras que, el art. 39 alude a que *“1. Se concederán ayudas de estudio cuando como consecuencia de un acto terrorista se deriven para el estudiante, para su viudo o viuda, pareja de hecho o hijos del fallecido, o para sus padres, hermanos, tutores o guardadores, daños personales que los incapaciten para el ejercicio de su profesión habitual. 2. Las normas de desarrollo de la presente disposición determinarán las modalidades de las ayudas, sus cuantías y las condiciones para su percepción, estableciendo, en todo caso, su incompatibilidad con las percibidas, por el mismo concepto, de otras Administraciones Públicas”*. Por último, el art. 40 explica que *“1. Las Administraciones Públicas con competencia en materia educativa podrán establecer un sistema de atención específica a las víctimas del terrorismo a que se refiere el artículo 4 de esta Ley, en sus apartados 1 y 2, mediante la designación de tutores u otros sistemas que permitan la atención individualizada y faciliten la continuación de los estudios que estaban realizando o que pudiesen realizar. 2. Asimismo, las citadas autoridades, en colaboración con los directores y responsables de los centros docentes, procurarán, si fuera preciso, adaptar el régimen docente a sus condiciones físico-psíquicas”*.

tiempo de trabajo y a la movilidad geográfica⁶²⁸. En principio, todos los entrevistados, previo análisis de sus circunstancias, pueden acogerse por lo menos a alguna de las medidas previstas para cada ámbito y, por lo tanto, se ha procedido a preguntarles a todos acerca del conocimiento, acceso y, en su caso, naturaleza reparadora de las medidas en cuestión.

Si bien, se ha decidido analizar conjuntamente, en virtud de los resultados arrojados, las medidas previstas en los dos ámbitos y así se reflejan en los gráficos siguientes:

⁶²⁸ Art. 33 de la Ley 20/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección a las Víctimas del Terrorismo, determina que: *“Las personas que hayan sufrido daños físicos y/o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad durante al menos dos años anteriores y los hijos, tanto de los heridos como de los fallecidos, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reordenación de su tiempo de trabajo y a la movilidad geográfica”*. El art. 34 dispone que: *Las personas que hayan sufrido daños físicos y/o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad durante al menos dos años anteriores y los hijos, tanto de los heridos como de los fallecidos, tendrán derecho, de conformidad con el artículo 3 bis y previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, a ser beneficiarios de las medidas de bonificación a la contratación y de las políticas activas de empleo previstas en la legislación específica”*. Y, finalmente el art. 35 regula que: *“1. Las personas a las que se refiere el artículo 4, en su apartado 1, que tuviesen la condición de funcionarios públicos tendrán derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo y a la movilidad geográfica de centro de trabajo, en los términos que se determinen en su legislación específica. 2. En el caso de que se ejercite el derecho a la movilidad geográfica previsto en el apartado anterior, los cónyuges o personas vinculadas por análoga relación de afectividad con aquéllos, tendrán derecho preferente a ocupar un puesto de trabajo igual o similar al que vengan desempeñando, si hubiera plaza vacante en la misma localidad. 3. Estos derechos, en la medida en que resulte compatible con su propio régimen jurídico, serán aplicables, igualmente y en los términos que establezca su legislación específica, al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas”*.

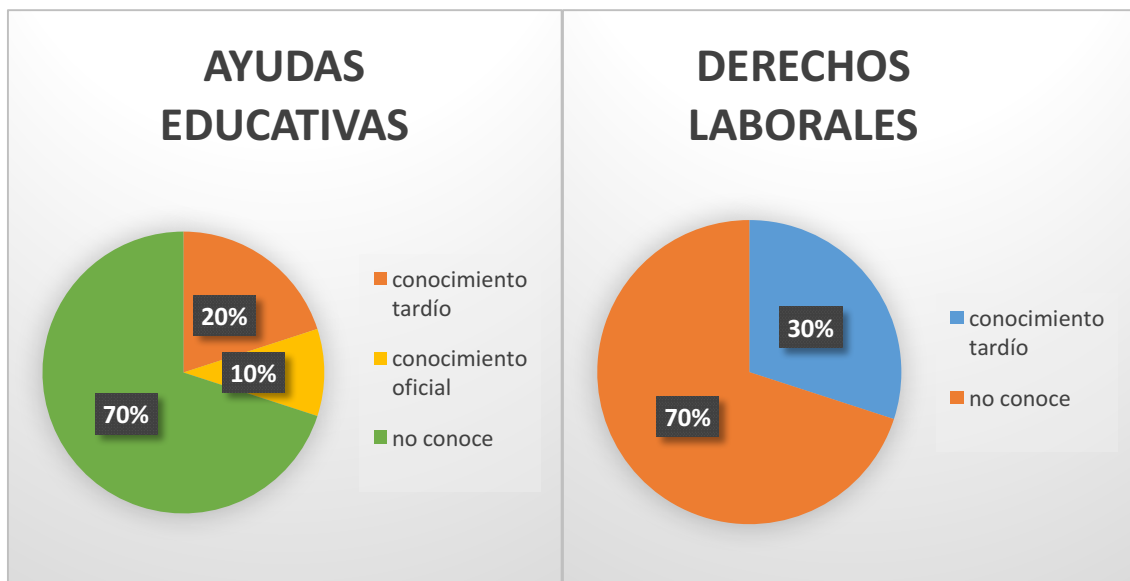


Gráfico 8: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento de las ayudas educativas y los derechos laborales.

Como se puede apreciar en ambos gráficos solamente el 30% de las víctimas que ha formado parte de esta muestra *han conocido* estas ayudas y derechos. En concreto, en cuanto a las ayudas educativas el 10% las ha conocido a nivel institucional en un tiempo que considera correcto y el 20% ha sabido de la existencia de la misma pasado bastante tiempo desde su previsión y, por lo tanto, se puede afirmar que el 30% *conoce* realmente su regulación. Mientras que, el 30% que dice conocer los derechos laborales matiza que ha sido hace relativamente poco tiempo por ello se ha considerado conveniente incluirlos en “*conocimiento tardío*”. La inclusión se ve claramente justificada cuando los participantes afirman: “*sí porque el otro día nos dieron una charla, vino la Subdirección, pero es la primera que te dan y que te informan un poco de las condiciones*”.

Sin embargo, tan sólo el 10% ha *accedido* a ambas. Para explicar el motivo por el que sólo este porcentaje ha solicitado sendas ayudas conviene recordar la descripción que se hizo en el epígrafe anterior de las características personales de las víctimas participantes en esta muestra. A lo largo tanto de la

descripción de las víctimas directas como de las víctimas indirectas se hizo mención a que la edad de las víctimas directas en el momento de la comisión delictiva estaba comprendida entre los 20 y 34 años y, de manera similar, la edad media de las víctimas indirectas era de 28 años en el momento de su comisión, salvo el caso de un menor de edad. Esto quiere decir que, en cierta medida, tan sólo el menor de edad ha estado en disposición real de beneficiarse de lo contemplado en el texto legal debido a que tanto las víctimas directas como el resto de las víctimas indirectas en función de la edad que tenían cuando tuvo lugar el atentado ya habían superado la edad en la que se suele proseguir con los estudios a la vez que estaban trabajando. Por ello, tan sólo el participante que en el momento de la acción terrorista era menor de edad ha solicitado la exención de tasas educativas y ser beneficiario de la bonificación y de las políticas activas de empleo, en la medida en que, es el sujeto idóneo para solicitarlas en función de la edad. Igualmente, al estar el resto de los entrevistados trabajando no tiene sentido que accedan a la bonificación de la contratación y de las políticas activas de empleo. Lo mismo ocurre con las ayudas educativas sin perjuicio de que alguna decida recurrir a ellas en un futuro. No obstante, el 10% que ha accedido a las mismas no destaca su carácter reparador puesto que sostiene que *"una cosa es que yo me pueda beneficiar de medidas para seguir estudiando o para trabajar y otra muy distinta es la reparación de unos daños de los que nunca se va a recuperar"* –se refiere a la víctima directa–.

Llegados a este punto podemos realizar una visión conjunta de las medidas desvictimizantes previstas para la victimización primaria, esto es, las incluidas tanto en el derecho a la verdad como en el derecho a la reparación atendiendo al conocimiento que han tenido de ellas –conocimiento y conocimiento tardío–, la conveniencia referida tan sólo al acceso a las mismas –acceso y acceso tardío– y, finalmente, el carácter reparador de la medida. Para aproximarnos correctamente a estos extremos es necesario plasmar, por una parte, los datos obtenidos por cada medida con independencia de su vinculación con un derecho concreto y, por otra parte, los porcentajes que le corresponden en general a cada derecho –incluyendo todas sus medidas previstas legalmente–. De este modo se presentan los siguientes gráficos:

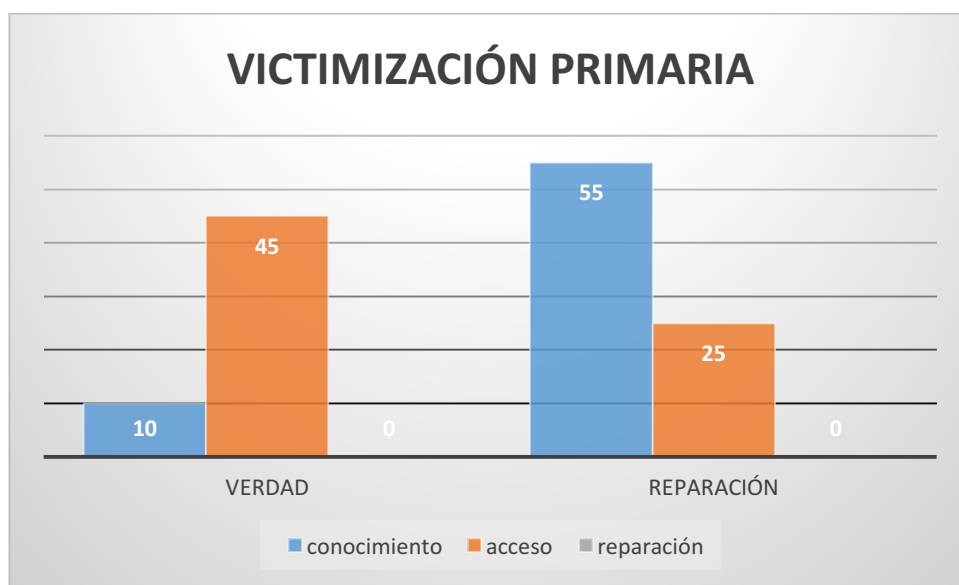


Gráfico 9: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento, acceso y reparación de los derechos a la verdad y reparación.

En primer lugar, se puede advertir del análisis conjunto de los derechos a la verdad y a la reparación que integran las medidas para hacer frente a la victimización primaria -tal y como se ha puesto de manifiesto con anterioridad- que los participantes en esta muestra tienen un mayor *conocimiento* acerca del derecho a la reparación frente al derecho a la verdad, no obstante, en el momento en que hablamos del *acceso* real el porcentaje entre ambos se invierte ganando un mayor protagonismo el derecho a la verdad. No obstante, si procedemos a examinar una a una las medidas de ambos derechos y a comparar sus resultados conjuntamente nos damos cuenta de que el *conocimiento* y *acceso* varía dependiendo de la medida de que se trate y no tanto del derecho al que pertenece, en la medida en que, podemos realizar un análisis sesgado si lo hacemos en su conjunto. Por ello, es necesario delimitar el *conocimiento*, *acceso* y *reparación* a nivel individual de todas las estrategias desvictimizantes previstas. En el siguiente gráfico se muestran los resultados obtenidos:

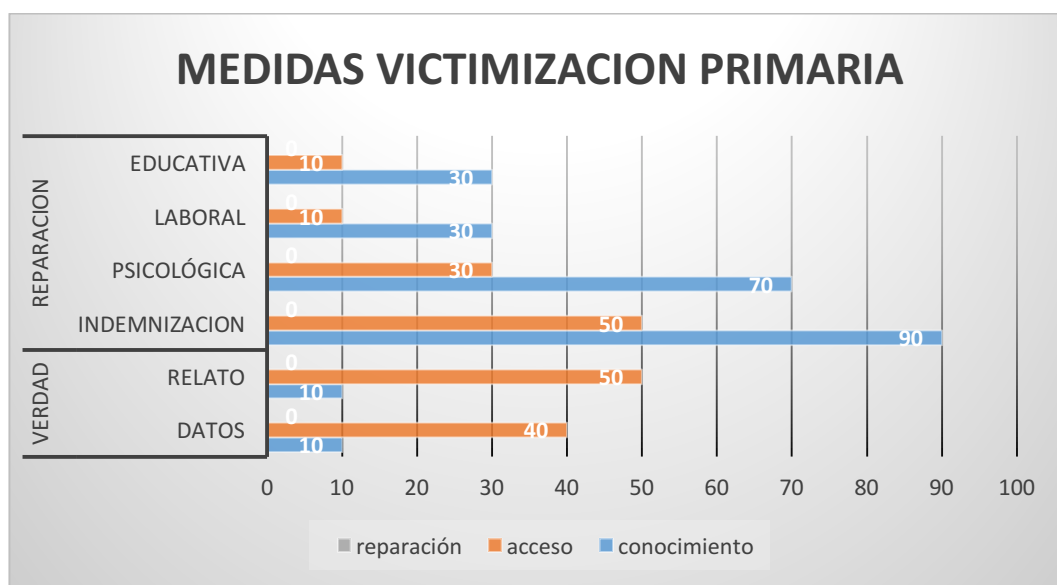


Gráfico 10: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento, acceso y reparación de las medidas frente a la victimización primaria.

De tal forma que, en segundo lugar, se puede observar que, los entrevistados están mejor informados sobre las medidas de indemnización y ayuda psicológica, seguidas de las ayudas educativas y derechos laborales que, sí que coincide con lo reflejado en el gráfico anterior. Sin embargo, no existe tanta diferencia entre el *acceso* las medidas del derecho a la reparación relacionadas con la compensación económica y la ayuda psicológica con los datos y la versión oficial de la Administración. Sin embargo, en cuanto el *acceso* al derecho a la reparación del primer gráfico es claramente inferior puesto que también se han valorado las ayudas educativas y derechos laborales a los que no han tenido prácticamente acceso las víctimas por los motivos previamente expuestos.

Finalmente, en ningún momento alguno de los participantes manifiesta que las medidas relacionadas con la victimización primaria han sido reparadoras. Como mucho, tanto las víctimas directas e indirectas que han accedido a la ayuda psicológica dicen que les ha ayudado, pero no alcanza la categoría de reparadora.

En definitiva, las medidas que más *conocen* las víctimas son las relativas a la indemnización y la ayuda psicológica. En cambio, han tenido un mayor *acceso* a la compensación económica y al relato oficial de los hechos. No obstante, ninguna ha sido reparadora. Por lo que, se puede concluir que la medida más conocida y demandada dentro de este conjunto es la indemnización por los daños personales, si bien, la han considerado como una mera ayuda económica sin efectos reparadores.

5.4.3. Derecho a la justicia

La victimización secundaria comprende los costes personales resultantes de la conexión entre el binomio víctima y sistema jurídico penal, esto es, su relación con la administración de justicia y la institución policial. Estos efectos nocivos derivan directamente de las declaraciones en sede policial y judicial, de la exploración de médico-forense, del contacto que puede mantener la víctima con su ofensor durante la celebración del juicio oral, incluso, del tratamiento mediático ofrecido por los medios informativos al respecto⁶²⁹.

Una de las críticas bastante generalizada la constituye la falta de información suficiente del estado en el que se encuentran las diligencias policiales y judiciales que les afectan. Además, conforme está construido el proceso penal español, quizá de los aspectos que causan más dolor a la víctima es, sin duda, revivir la reconstrucción de los hechos traumáticos que ocasionan, en la mayoría de casos, que la propia víctima se sienta cuestionada por los agentes sociales y que no se le escuche durante a lo largo del mismo, circunstancia que achacan a la falta de humanidad del sistema legal⁶³⁰.

⁶²⁹ Esta etapa es clave para los procesos de desvictimización, recuperación y resiliencia que debe desarrollar la víctima a fin de que se refuerce sus potencialidades, teniendo en cuenta su entorno y su contexto, que le permitirán reducir el impacto de las consecuencias del delito y de la victimización secundaria, favoreciendo a la vez su recuperación en la medida en que pueda afrontar una vida lo más normal posible dentro de sus propias circunstancias; en VARONA MARTINEZ, G. Guía general de buenas prácticas en el trato..., cit., pp. 33-34.

⁶³⁰ VARONA MARTINEZ, G. Guía general de buenas prácticas en el trato..., cit., p. 32.

Este desencanto generalizado, opina LAMARCA, es fruto de la desinformación de las víctimas acerca de ciertos aspectos del proceso penal que les puede causar desconcierto en el momento en el que conocen de primera mano su funcionamiento, tales como los trámites a seguir para realizar una denuncia, cuál es el proceso de investigación de un delito o las consecuencias que tendrá el autor del hecho delictivo una vez se le haya detenido. Ofrecer información sobre los mismos beneficiaría a la víctima en términos de tranquilidad y allanaría su afrontamiento a los cauces del proceso penal a los que tendrá que hacer frente⁶³¹.

Sin embargo, nuestra concepción de victimización secundaria es, incluso, más amplia que la explicada en líneas anteriores en cuanto no sólo se circunscribe al contacto con el sistema penal sino en general a toda la Administración. De acuerdo con esta perspectiva, el derecho a la justicia trata de implementar una serie de medidas para facilitar el acceso del afectado al sistema judicial y, paralelamente, el derecho al reconocimiento busca otorgar a las víctimas el reconocimiento institucional que merecen puesto que su victimización obedece a una clara significación política.

En concreto, el derecho a la justicia se traduce en *"asegurar que todas las víctimas tengan acceso al sistema judicial, así como apoyarlas a través del proceso de justicia, y que el sistema de justicia esté diseñado para minimizar los obstáculos que las víctimas pueden enfrentar al buscar justicia"*, esto es, este derecho comporta un conjunto de medidas para combatir la victimización secundaria, los modos de tratamiento con respeto y conocimiento a la víctima, la información que debe recibir acerca de sus derechos, obligaciones y la evolución del caso en el que esté involucrado y la formación de los profesionales que las asistan en todos los niveles. Este contenido esencial del derecho a la justicia lleva implícitos en la ley 29/2011, de 22 de septiembre, los derechos y garantías concernientes a la asistencia jurídica gratuita –regulada en el art. 48-, la garantía de la mínima lesividad en la participación en el proceso –art. 49- y las disposiciones de información especializada –art. 50- y de la Oficina de Asistencia

⁶³¹ LAMARCA, C. Criminología..., cit., p. 227.

y Atención a las Víctimas del Terrorismo –art. 51-. En este contexto en el que se destaca, ante todo, el acceso al sistema judicial que lleva implícitas tanto la garantía de asistencia jurídica gratuita como la garantía de mínima lesividad durante su participación en el proceso penal, y, la información mediante la Oficina de Asistencia y Atención, se ha decidido preguntarles acerca de los tres aspectos previos que coinciden con el acceso al sistema judicial, el ofrecimiento de acciones y la Oficina de Asistencia y Atención a las Víctimas del Terrorismo. A diferencia de la pregunta que se hizo en las medidas frente a la victimización primaria referida a la información, aquí se pregunta sobre la Oficina de Asistencia, es decir, sobre esta estructura administrativa y, en su caso, sobre el trato e información que han recibido. De hecho, las dos primeras dimensiones responden al camino que deben seguir para acceder al sistema judicial y reducir los obstáculos que se pueden encontrar al solicitar justicia, mientras que, la Oficina de Asistencia y Atención es clave en la información sobre el estado de las diligencias policiales y judiciales que les afectan.

En primer lugar, en cuanto al ofrecimiento de acciones y el acceso al sistema judicial que lleva aparejada las garantías de la asistencia jurídica gratuita y la garantía de mínima lesividad en la participación en el proceso se van a examinar de forma conjunta puesto que ofrecen los mismos resultados –aunque nos referiremos a ambos con la expresión acceso a la justicia-. Así, los resultados obtenidos acerca del *conocimiento* específico del acceso a la justicia son los siguientes⁶³²:

⁶³² En este sentido el art. 48 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección a las Víctimas del Terrorismo, establece que “1. Las víctimas del terrorismo a que se refiere el artículo 4.1 y 2, tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita en todos los procesos judiciales y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la situación que provoca la citada condición, con independencia de sus recursos económicos, en los términos establecidos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. En estos supuestos, una misma dirección letrada asumirá la defensa de la víctima. Este derecho asistirá también a las personas a que se refiere el artículo 4 en caso de fallecimiento de la víctima. 2. En todo caso, se garantizará la asistencia jurídica gratuita de forma inmediata a todas las víctimas del terrorismo que lo soliciten. El derecho de justicia gratuita se perderá si con posterioridad no se les reconoce la condición de víctima o si se dicta sentencia absolutoria firme o archivo firme, sin la obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento”. Mientras que, el art. 49 dispone lo siguiente: “*Los Tribunales velarán por que toda declaración o intervención de alguna de las personas previstas en el artículo 4 de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2, se realice de forma que les suponga las mínimas incomodidades y perjuicios. En particular, se procurará por todos los medios previstos en las leyes que estas personas en sus actuaciones procesales no tengan*

	conocimiento	no conocimiento
conocimiento oficial	70%	
conocimiento tardío		
TOTAL	70%	30%

Tabla 13: elaborada a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento del acceso a la justicia.

Tal y como puede comprobarse en la tabla anterior, cerca del 70% de las víctimas sí que *conocen* la existencia de esta medida en la normativa reguladora de las víctimas del terrorismo que les permite acceder al sistema judicial con las garantías de la asistencia jurídica gratuita y la mínima lesividad. En cambio, el 30% de los sujetos que *no la conocen* coinciden precisamente con víctimas indirectas. Este último dato, en un primer momento podría no llamarnos la atención si pensamos que quien la conoce es la víctima directa, si bien, el 10% de ellas es una víctima indirecta por parte de un fallecido –el 20% restante son víctimas indirectas por herido-, de manera que, ya se puede intuir la falta de información que ha recibido esta víctima indirecta en el caso de que se constatare a continuación que realmente no haya accedido al sistema judicial y, para ello, debemos analizar la conveniencia.

Por su parte, los datos obtenidos tras analizar la *conveniencia* de esta medida son los siguientes:

relación directa visual o sonora con los imputados o acusados por la comisión de acciones terroristas. En todo caso los Jueces y Tribunales velarán y protegerán la dignidad y la seguridad personal de las víctimas en la tramitación del proceso, evitando la utilización de signos e inscripciones que puedan ofenderlas o denigrarlas”.

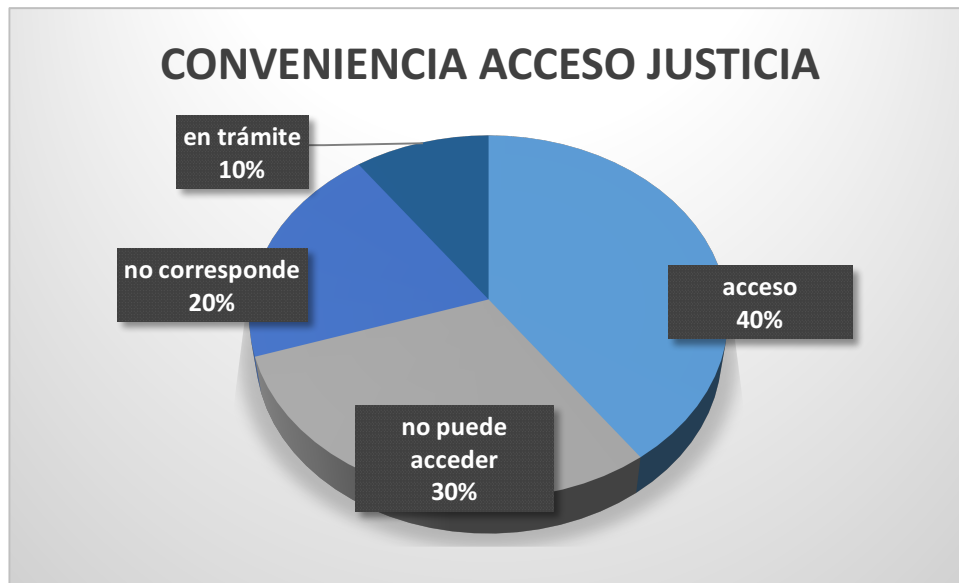


Gráfico 11: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre la conveniencia del acceso al sistema de justicia.

Con este gráfico podemos cerciorar que la mitad de los participantes sí que han *accedido* al sistema de justicia –tanto los sujetos que ya lo han hecho como quienes aún están en trámite- frente al 30 % que *no ha podido acceder* a esta medida. Precisamente dentro de este porcentaje se encuentra la víctima indirecta familiar de un fallecido de la que apuntábamos que ni siquiera conocía esta medida y, en efecto, esta es una de las razones por las que no tiene ningún tipo de información sobre la acción terrorista de la que su familiar resultó fallecido. Junto con esta participante, el 20% restante afirman que no han podido acceder por que no les avisaron ni tuvieron conocimiento de ninguna acción judicial sobre los atentados terroristas en los que se vieron inmersos.

Finalmente, todas las víctimas están de acuerdo en que esta medida tiene la naturaleza de *no reparadora*, tanto las que realmente han logrado acceder como aquellos que no lo han hecho puesto que estos últimos mantienen que tampoco les hubiera reparado.

Llegados a este punto, incluso, podemos ver la relación que mantienen el relato oficial integrado en el derecho a la verdad –medidas frente a la

victimización primaria- junto con el acceso a la justicia y, de esta manera, se refleja de acuerdo a los gráficos utilizados previamente:

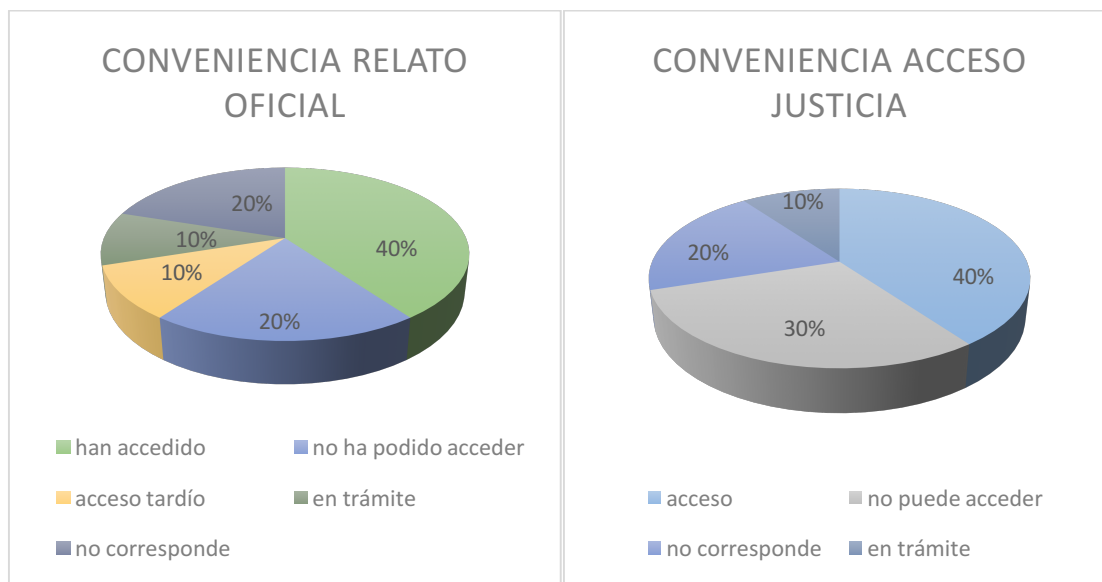


Gráfico 12: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio relacionado con la conveniencia del relato oficial y la conveniencia del acceso a la justicia.

Como se puede observar, las categorías de *no corresponde* –que representa el 20%- , *en trámite* –con un 10%- y *acceso* – con el 40% del total de los participantes- son iguales en ambas medidas previstas en la ley y, además, son coincidentes en la identidad de los entrevistados. La diferencia solamente la podemos encontrar en que cuando nos hemos referido a la conveniencia en el acceso a la justicia hemos constatado que el 30% no ha podido acceder al sistema judicial y, por su parte, este mismo porcentaje en el caso de la conveniencia del relato oficial se ha dividido entre el 10% por acceso tardío y el 20% por no haber podido acceder. Esta pequeña diferencia se debe a que precisamente ese 10% accedió de modo tardío a la sentencia –relato oficial- sin que llegara a acceder al sistema judicial pues tal y como manifiesta “*lo de quienes cometieron el atentado me enteré por gente de la Comandancia al tiempo. Acceso muy tardío y por terceras personas*”. Por lo tanto, son prácticamente los mismos

resultados pese al pequeño matiz entre ambas que está completamente justificado.

En cuanto a la regulación legal de la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo en la Audiencia Nacional se ha procedido de igual modo que en los supuestos anteriores con el propósito de analizar el conocimiento, conveniencia y reparación que implica su previsión. Por ello, primero, se les ha preguntado a todos los participantes –se entiende que la totalidad, tanto las víctimas directas como las indirectas, pueden acudir a esta entidad- si conocían su existencia y los resultados han sido los que se plasman a continuación:

	conocimiento	no conocimiento
conocimiento oficial	20%	
conocimiento tardío	40%	
TOTAL	60%	40%

Tabla 14: elaborada a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento de la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo.

El 40% de los entrevistados que han comentado que han *conocido tardíamente* la Oficina de Información y Atención a las Víctimas han señalado que supieron de su existencia hace aproximadamente un año cuando coincidieron con personal de esta Oficina en Jornadas dedicadas a las víctimas del terrorismo. Si bien, pese a que dentro de este porcentaje del 40% se podría precisar que la mitad –el 20% de los entrevistados- son víctimas indirectas por parte de un familiar herido y, por lo tanto, se les podría incluir en la categoría *no corresponde* en el momento de abordar la conveniencia se ha decidido incluirlas en *no quiere acceder* porque realmente han explicado que el propio personal de la Oficina se ofreció a ayudarles si precisaban información. En este contexto, el acceso de las víctimas a la citada Oficina ha sido en siguiente:

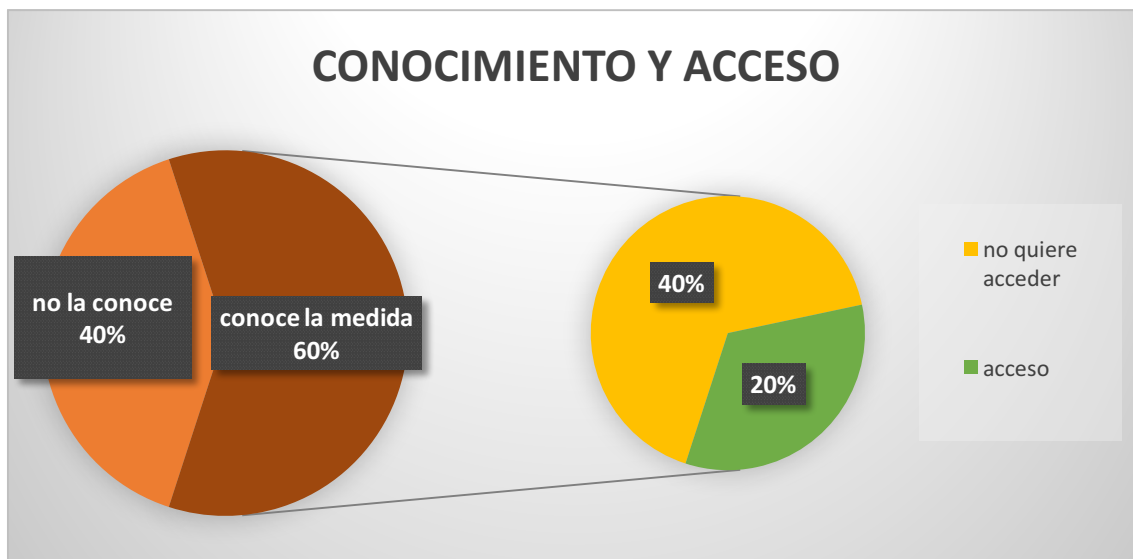


Gráfico 13: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento y acceso a la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo.

Tal y como se ha representado en el gráfico precedente, del total de los participantes que conoce la existencia de la Oficina de Información y Asistencia y las funciones que tiene encomendadas, tan sólo uno 20% ha considerado conveniente acudir con el objetivo de solicitar la información que precisan, si bien, ninguno la considera reparadora y, por este motivo, debe reconducirse la consideración de *no reparadora*. La opinión que tienen al respecto los participantes que han ido han sido dispares puesto que hay quienes opinan que le han facilitado la información que buscaban frente a otros que mantienen que no les han facilitado aquello que pretendían, en la medida en que, han opinado que *"ayudarte no te ayudan, dan algo de información"* o *"informarme de todos los aspectos no lo han hecho"*.

Al igual que en la medida relacionada con el acceso a la justicia, la Oficina de Información y Asistencia puede estar vinculada con la medida frente a la victimización primaria referida a los datos que constan en la Administración puesto que el canal lógico y legalmente previsto a tal efecto, esto es, para conseguir la información sobre las circunstancias del atentado es la Oficina de

Información y Asistencia. Es por esto que se presenta a continuación el gráfico que contempla los resultados relacionados con ambos extremos:

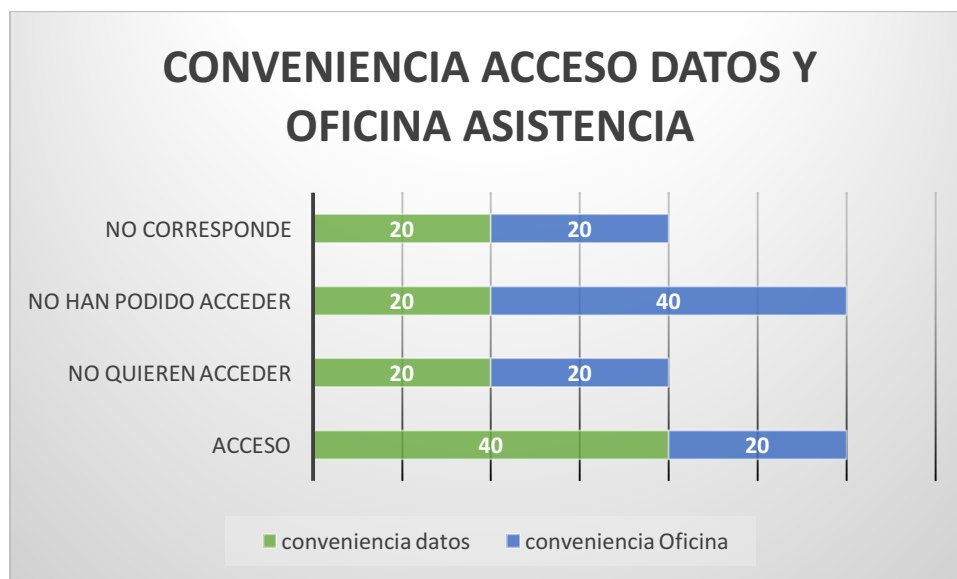


Gráfico 14: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre la conveniencia conjunta del acceso a los datos y a la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo.

Conviene precisar que todos los participantes han dado similares respuestas en ambas medidas, aunque se ha incluido a las víctimas indirectas por parte de familiar herido en la categoría *no corresponde* para una mejor visualización de las medidas, salvo el 20% que varían entre el acceso a los datos que consten en la Administración y que, al mismo tiempo, no han podido acceder a la Oficina de Información y Asistencia ante la falta de conocimiento de la misma. Precisamente estos participantes son los que han tenido acceso a los datos por terceros y han podido, en consecuencia, consultar la información y las diligencias policiales sobre su causa sin recurrir a la vía prevista legalmente a través de la Oficina de Información y Asistencia.

Recapitulando las medidas relacionadas con el derecho a la justicia que tratan de paliar la victimización podemos realizar una síntesis que se plasma en el gráfico siguiente:

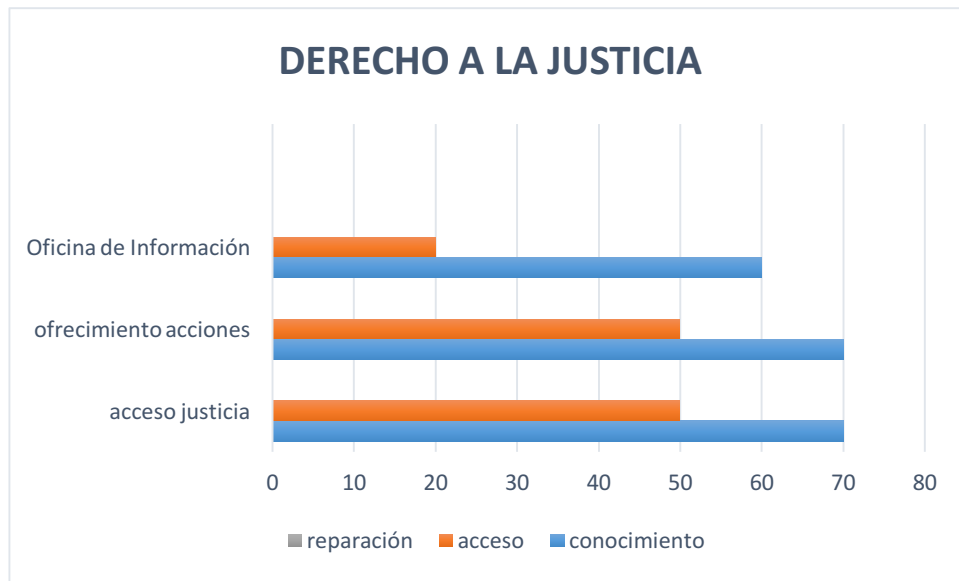


Gráfico 15: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento, acceso y reparación de las medidas incluidas en el derecho a la justicia.

Tras analizar el gráfico podemos concluir que el ofrecimiento de las acciones y el acceso a la justicia arrojan los mismos resultados en cuanto al conocimiento, conveniencia y reparación, mientras que, la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo es menos conocida que las anteriores y ha tenido un índice menor de solicitud por parte de los interesados. Si bien, ninguna de las anteriores ha merecido la consideración de reparadora por parte de las víctimas directas e indirectas.

En definitiva, conforme a los datos aportados por los participantes y teniendo una visión global sobre ellos podemos concluir que, por una parte, el propósito que persiguen las víctimas es reclamar la justicia debida para estos casos pues, en realidad, no están interesados en tomar decisiones frente al agresor ni tan siquiera en demandar más justicia que la que les pueda corresponder. De hecho, el 80% de los participantes debían haber sido informados de la posibilidad de acceder al sistema de justicia –no se incluye el 20% restante sobre la base de que son víctimas indirectas por parte de un familiar herido y se considera que es este último el que debe acceder-, no

obstante, el conocimiento exacto de esta posibilidad ha alcanzado al 70% pues, el 10% que representa a la figura de la víctima indirecta de un familiar fallecido ni tan siquiera sabía de su existencia. Además, de este 70% que sí la conocía hay un porcentaje cercano al 20% que no tuvieron ocasión de acceder debido a que no se les hizo ofrecimiento de acciones. En este contexto, el 30% resultante que no han podido acceder puede ser significativo a la hora de considerar la desinformación de las víctimas. Por otra parte, esta desinformación también puede hacerse extensible al abordar la medida relacionada con la Oficina de Información y Asistencia, en la medida en que, si observamos el gráfico, tienen conocimiento de su existencia el 60%, si bien, en este porcentaje están incluidos los entrevistados pertenecientes a la categoría de víctima indirecta por parte de un familiar herido y, por lo tanto, como en el caso anterior, podemos entender que le corresponde a este último acudir. Así, sólo el 40% conoce a la Oficina que es prácticamente la mitad de los que la deberían conocer en función de su categoría victimal –víctima directa y víctima indirecta por parte de fallecido-. Y, solamente dentro de este grupo, el 20% ha decidido acudir a ella. En efecto, sobre estas medidas hay una falta de información a los afectados por el fenómeno terrorista.

5.4.4. Derecho al reconocimiento

El derecho al reconocimiento de las víctimas del terrorismo ha tomado dos direcciones convergentes y complementarias, por una parte, la vertiente individual dedicada exclusivamente a la persona a quien se le ha concedido la categoría de víctima del terrorismo y, en algunos casos, también incluye a las personas afectadas, ilesos y a los amenazados –sujetos que según la ley y reglamentos estatales merecen una especial atención-. Y, de un modo general, la perspectiva colectiva de este derecho está compuesto por un conjunto de medidas que pretenden ofrecer un reconocimiento especial a todo el colectivo afectado por el terrorismo. Entre las medidas destacan, a nivel individual, la concesión de las tres categorías de condecoraciones y la posibilidad de baremar o de convertirse en un criterio evaluable ser víctima del terrorismo a efectos de

su profesión, destino o lugar de residencia. Mientras que, en el nivel dedicado a todo el colectivo de afectados se ha determinado un día de celebración de recuerdo y homenaje a ellas y, finalmente, se ha establecido expresamente el derecho a la asociación de las víctimas. Desde una perspectiva criminológica, una correcta implementación de las medidas previstas y, en algunos casos, con alguna aplicación correctiva que fuera necesaria se convertiría en una herramienta frente a la aparición y el mantenimiento de la victimización secundaria.

Teniendo en cuenta las disposiciones legales se va a proceder a examinar el *conocimiento*, la *conveniencia* y la *efectividad* de las medidas relacionadas con las condecoraciones, el baremo de la condición de víctimas del terrorismo, el día del recuerdo a las víctimas del terrorismo y el asociacionismo puesto que todas están directamente vinculadas con el reconocimiento institucional hacia ellas y, de esta manera, se convierten en estrategias para hacer frente a la victimización secundaria.

La primera de las medidas pertenecientes al ámbito individual consiste en la concesión de las condecoraciones. La totalidad de la muestra tiene *conocimiento* oficial de que les puede corresponder por su condición de víctimas, si bien, a la hora de la conveniencia podemos realizar las precisiones que se señalan en el gráfico siguiente⁶³³:

⁶³³ Según el art. 52 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo: “1. La Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo configura la acción honorífica específica del Estado con el fin de honrar a las víctimas del terrorismo. 2. Esta acción honorífica se otorga con el grado de Gran Cruz, a título póstumo, a los fallecidos en actos terroristas; con el grado de Encomienda, a los heridos y secuestrados en actos terroristas; y con el grado de Insignia, a los que tengan la condición de amenazados, a los ilesos en atentado terrorista, así como al cónyuge del fallecido o persona ligada con él por análoga relación de afectividad, los padres y los hijos, los abuelos, los hermanos y los nietos de los fallecidos, así como a los familiares de los heridos que hayan sufrido lesiones incapacitantes en sus distintos grados hasta el segundo grado de consanguinidad”.

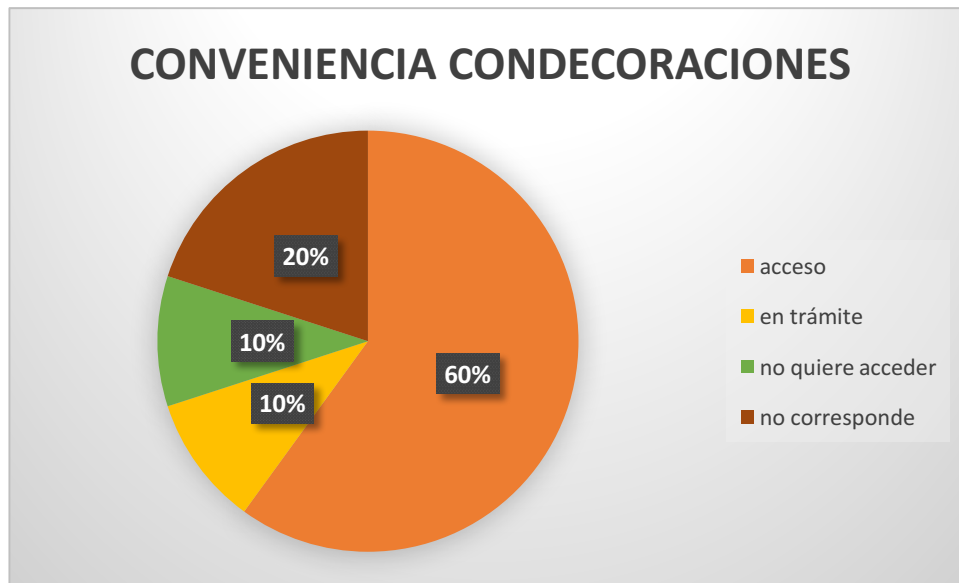


Gráfico 16: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre la conveniencia de las condecoraciones.

Como ya se ha adelantado, la representación previa de la *conveniencia* de las condecoraciones merece algunas puntualizaciones. En primer lugar, al 20% *no les corresponde* debido a que son víctimas indirectas por familiar herido cuyos daños no se han considerado suficientes para acreditar el estado de incapacidad y, por esta razón, no les corresponde ninguna condecoración de acuerdo a la redacción legal vigente. En el caso del 10% que *no quiere acceder*, atendiendo al supuesto específico, en parte sí que ha accedido pues ha recibido las tres Grandes Cruces de sus familiares, sin embargo, no ha solicitado la concesión de la Insignia –se trata de una víctima indirecta por parte de familiares fallecidos- que le correspondería a título personal. Por lo tanto, podría incluirse tanto en la categoría de acceso como en la que no ha querido acceder. Se ha optado por esta última puesto que ha sido su decisión no optar por la que le corresponde a nivel individual.

Pese a que todos los participantes que han podido solicitar la condecoración correspondiente en virtud de su categoría victimal lo han realizado, igualmente están de acuerdo a la hora de considerar que su concesión

no les produce ninguna reparación y, por lo tanto, se debe incluir dentro de la categoría *no reparadora*.

En cuanto al baremo de la condición de víctimas del terrorismo que puede realizarse para evaluar la concesión de condecoraciones y recompensas en función de la profesión, ocupación o lugar de residencia de los afectados, ningún participante sabía que se podía tener en cuenta esta atribución legal –*no conocimiento*⁶³⁴. Sin embargo, se puede constatar que, a día de hoy, el 20% de los sujetos de este estudio han sido condecorados adicionalmente en virtud de su profesión:

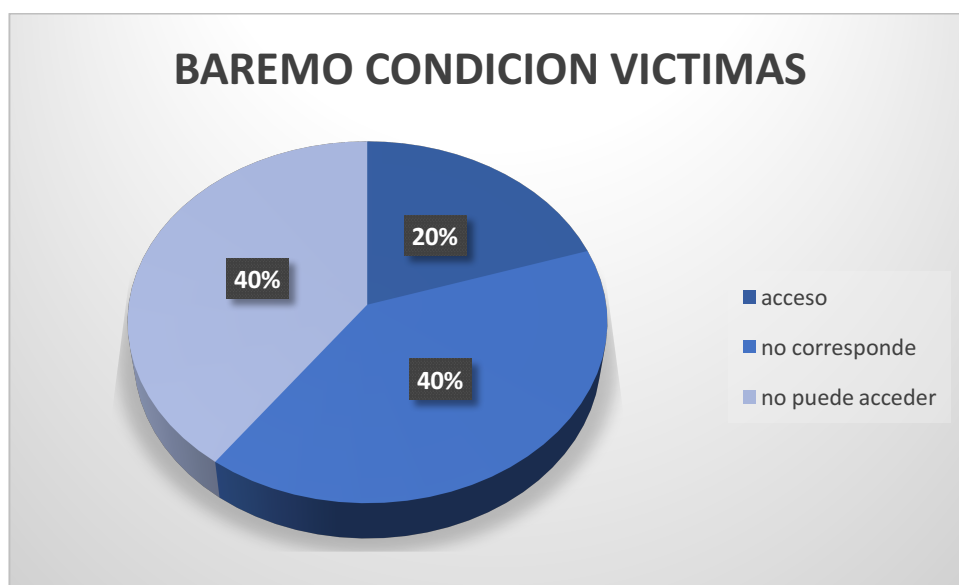


Gráfico 17: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre la conveniencia del baremo de la condición de víctimas del terrorismo.

En función de la representación del gráfico anterior se pueden realizar varias consideraciones. En primer lugar, al 40% que hemos incluido en la

⁶³⁴ En este sentido el art. 55 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección a las Víctimas del Terrorismo, dispone que “con independencia de lo anterior, la condición de víctima del terrorismo será especialmente evaluable para la concesión de las condecoraciones y recompensas que pudieran corresponderles conforme a su profesión, ocupación o lugar de residencia”.

categoría *no corresponde* coinciden con las víctimas indirectas objeto de esta muestra puesto que si observamos el tenor literal de esta disposición legal tan sólo se dirige a las personas que cumplan la condición de “víctimas del terrorismo” por ello quedan fuera tanto los familiares que ostenten la condición de “víctima del terrorismo a efectos honoríficos” como los familiares que no tengan concedida tal distinción. En segundo lugar, solamente el 20% de las víctimas directas han respondido que sí les han concedido una condecoración por su desempeño laboral motivado por la acción terrorista que sufrieron, si bien, entre ellos, un participante matiza que “*al fallecido le concedieron la Gran Cruz, al sargento la roja* –se refiere a la Cruz con distintivo rojo- *y a los guardias la blanca* –refiriéndose a la Cruz con distintivo blanco-”, con esto, pone de manifiesto que, entre los heridos del mismo atentado les concedieron condecoraciones diferentes en grado⁶³⁵. Al igual que ocurre con la aplicación de las medidas precedentes, en el momento en que nos hemos interesado por si tienen un carácter reparador estas condecoraciones, los participantes que han tenido acceso a ellas no las han catalogado con tal condición, sino que han afirmado su naturaleza *no reparadora*.

Sin embargo, tampoco se puede acreditar que la concesión de las condecoraciones se deba estrictamente a la disposición de la ley de víctimas del terrorismo ya que estas previsiones específicas en el Cuerpo de la Guardia Civil

⁶³⁵ Dentro de la Orden INT/2008/2012, de 21 de septiembre, por la que se regula la Orden del Mérito de la Guardia Civil, el art. 5 establece que “*La Gran Cruz será concedida a oficiales generales, personal civil, unidades, entidades y patronazgos, para lo que se tendrá en cuenta el rango institucional, administrativo, académico o profesional de la persona, unidad o entidad recompensada, en atención a los sobresalientes méritos y circunstancias que concurran en ellos relacionados con el Cuerpo de la Guardia Civil o la seguridad pública*”. Mientras que, el art. 8 dispone que “*Para la concesión de la Cruz con distintivo rojo será necesario que concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) En el transcurso de un servicio de manifiesta importancia que comprenda un ineludible riesgo de perder la vida, ejecutar para su cumplimiento acciones claramente demostrativas de extraordinario valor personal, iniciativa y serenidad ante el peligro. b) En acto de servicio o con ocasión de él, resultar muerto o con lesiones que provoquen la inutilidad permanente para el servicio sin menoscabo del honor, al afrontar un peligro manifiesto contra la propia vida*”. Finalmente, el art. 9 se refiere a que “*Para la concesión de la Cruz con distintivo blanco se deberá haber llevado a cabo alguna de las siguientes acciones: a) Ejecutar, dirigir o colaborar directamente en el éxito de un servicio en el que por su extraordinaria dificultad e importancia se hayan evidenciado relevantes cualidades profesionales o cívicas. b) Sobresalir con perseverancia y notoriedad en el cumplimiento de los deberes de su empleo o cargo, de forma que constituya una conducta ejemplar digna que se resalte como mérito extraordinario. c) Realizar estudios profesionales o científicos, u otros hechos o trabajos sobresalientes, que supongan notable prestigio para el Cuerpo, o utilidad para el servicio oficialmente reconocido*”.

se tenían en cuenta desde la promulgación de la Ley 19/1976, de 29 de mayo, sobre la creación del Cuerpo de la Guardia Civil cuyo objetivo era y es a día de hoy recompensar las acciones o conductas de extraordinario relieve durante el cumplimiento de sus labores. Por lo tanto, teniendo presente este hecho no podemos afirmar que esta medida tenga una virtualidad práctica al menos con los participantes de esta muestra.

A diferencia de las dos medidas anteriores que pertenecían a una dimensión individual, la tercera medida relacionada con el reconocimiento institucional se refiere a todas las víctimas del terrorismo en términos colectivos. Se dispone expresamente en el texto legal al Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo, por ello, les hemos preguntado tanto a las víctimas directas como a las víctimas indirectas si conocen que existe un día para recordar al colectivo victimal al que pertenecen, si han acudido a alguno de los actos que se celebran ese día y, en su caso, si la consideran reparadora –esto es el *conocimiento*, *conveniencia* y su naturaleza *reparadora*⁶³⁶. De este modo, los entrevistados han señalado sobre el *conocimiento* y *acceso* lo siguiente:

⁶³⁶ En efecto, el art. 60 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección a las Víctimas del Terrorismo, determina que “*se declara el día 27 de junio de cada año, como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo. El día 11 de marzo de cada año se conmemorará el día europeo de las víctimas del terrorismo. Las instituciones públicas, en esas fechas, impulsarán actos de reconocimiento a las víctimas del terrorismo con el objeto de mantener su memoria y reivindicar su mensaje ético*”.

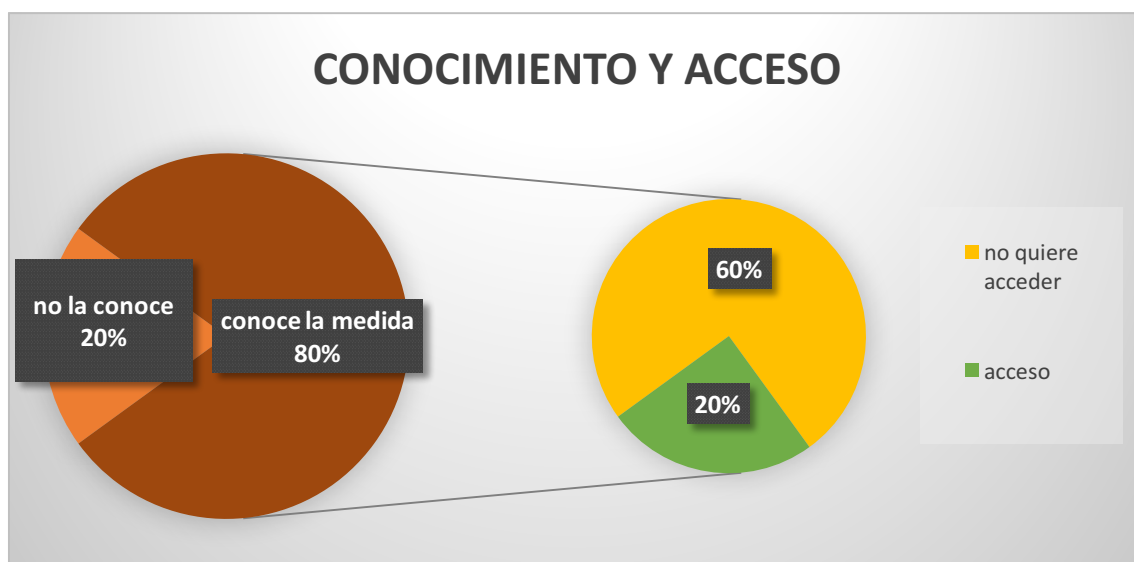


Gráfico 18: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento y acceso al Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo.

De este gráfico se desprende que, alrededor del 80% de los entrevistados *conocen* que existe un Día para rememorar al colectivo victimal del terrorismo, si bien, sólo el 20% ha reconocido haber asistido –incluidos dentro de la categoría *acceder*- a las celebraciones que se realizan durante ese día. Pese a que solamente el 10% señala que sí es *reparadora*, pues explica que *"sinceramente sí que me veo reconfortado, aunque, no lo viva. Ese día leo periódicos y revistas y sí me reconforta"*, el resto de víctimas han señalado que *no es reparadora*, aunque, al mismo tiempo, han destacado la importancia de este día. Así algunos de ellos han destacado que *"ya que hay días para casi cualquier cosa, creo que es de justicia que exista uno para las víctimas del terrorismo"*, *"Me parece bien porque debemos acordarnos de la memoria de las víctimas y no olvidarnos"*, *"bien, la memoria es buena. Cuando se hacen de corazón para que las víctimas se sientan amparadas pues está bien"*. Se trata de la primera medida que algún participante empieza a considerar *reparadora* y que el resto de entrevistados han señalado su conveniencia de acuerdo al apoyo que merece este colectivo. Ciertamente, una parte considerable admite no acudir a este tipo de eventos institucionales debido a que su origen es político y no responde a un sentimiento

o reconocimiento puramente victimal –esto lo podremos volver a retomar en el momento en que abordemos la celebración de actos en las medidas frente a la victimización terciaria- ya que cuestión diferente son los actos celebrados por y para las víctimas.

Finalmente, dentro de las medidas de reconocimiento a nivel social se incluye el asociacionismo. En este sentido, se prevé la posibilidad de constituir asociaciones de víctimas para la representación y defensa de sus intereses según establece el Capítulo segundo del Título séptimo de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, dedicada al Fomento del movimiento asociativo y fundacional⁶³⁷.

Todas las víctimas ya sean directas o indirectas han admitido *conocer* la posibilidad de formar parte de una asociación de víctimas y, por su parte, los datos obtenidos sobre su acceso y reparación se contemplan en el siguiente gráfico:

⁶³⁷ Dentro de este capítulo se destaca, por una parte, el reconocimiento del papel y relevancia del movimiento asociativo y, por otra parte, la actividad subvencional. Así, el art. 64 dispone que "1. Las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo contribuyen a fomentar la unión entre las víctimas, la defensa de sus intereses y la mejora de su condición y promueven la concienciación social contra el terrorismo y la preservación de la memoria. Por este motivo, su actuación goza del reconocimiento social que permite a las Administraciones Públicas fomentar su creación y su mantenimiento. 2. Las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo son reconocidas por la presente Ley como representantes de las mismas". Mientras que, a continuación, el art. 65 contempla: "La Administración General del Estado deberá, en los términos y condiciones que se determinen en las normas de desarrollo, conceder subvenciones a las asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo. En el establecimiento de este régimen subvencional se priorizará a aquellas entidades que cuenten con mayor número de víctimas a cuyo fin se establecerá un procedimiento para que, con el consentimiento de los interesados, esta condición pueda hacerse pública al órgano competente para conceder las subvenciones, así como la labor asistencial a favor de las víctimas del terrorismo que se realice por parte de las organizaciones"

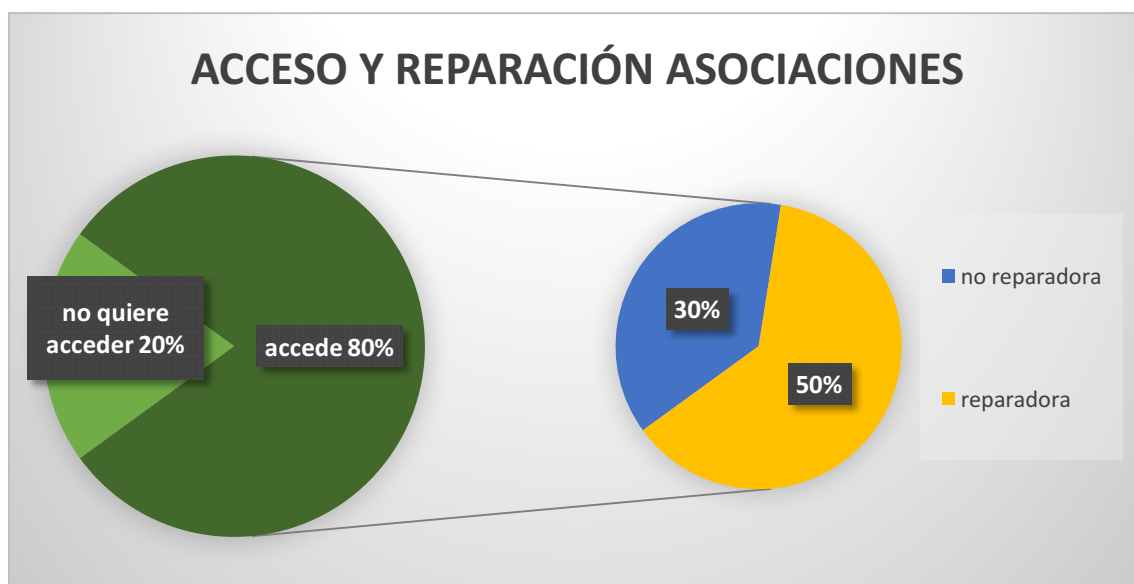


Gráfico 19: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el acceso y reparación de las asociaciones de víctimas del terrorismo.

Frente a todas las medidas previamente explicadas, ya pertenezcan al ámbito de la victimización primaria o secundaria, el acceso a las asociaciones de víctimas ha sido superior alcanzando el 80% de la muestra, no obstante, es cierto que, el 10% que no forma parte colabora económicamente con ellas. En sintonía con la medida del Día del recuerdo dedicado a las víctimas del terrorismo e, incluso, de un modo más acentuado, los entrevistados destacan la naturaleza *reparadora* de la pertenencia a una asociación de víctimas que se dedica a representarlos y defender sus intereses. Gran parte de los que han decidido voluntariamente formar parte de asociaciones le otorga un carácter reparador, si bien, quienes no la elevan a esa categoría destacan su carácter beneficioso, en la medida en que, han comentado " *me ha ayudado sobre todo la información que la que he podido disponer a través de ella*" o " *siempre es beneficioso pertenecer a una asociación con gente que le han pasado experiencias similares*". Frente a ellos quienes la consideran reparadora explican que " *me ha ayudado a recuperarme un poco tanto ayudar a las demás víctimas como hablar con otras víctimas, te desahogas, te sientes con tranquilidad*" o " *reparar el hecho no, pero a sobrellevarlo mejor sí, es decir, canalizar mejor el sentimiento de rabia e*

impotencia por las consecuencias que se han manifestado en la víctima directa como son el comportamiento que a veces no entiendes, pues, es difícil convivir con ellos por sus cambios emocionales y las secuelas que tienen a raíz del atentado. Entonces, conocer gente tanto víctimas con los mismos comportamientos como familiares que viven lo mismo, me hace sobrellevarlo mejor y que no te sientas tan aislado ya que hay gente que pasa por lo mismo". De hecho, los participantes ponen el énfasis en la recepción de la información y en la comprensión que se dedican los pares de iguales. Sobre todo, este último aspecto es el más sobresaliente y por ello la consideran reparadora.

En definitiva, teniendo en cuenta el *conocimiento*, *acceso* y naturaleza *reparadora* de todas las medidas de carácter desvictimizante previstas a lo largo del texto legal frente a la victimización secundaria, podemos sintetizar que:

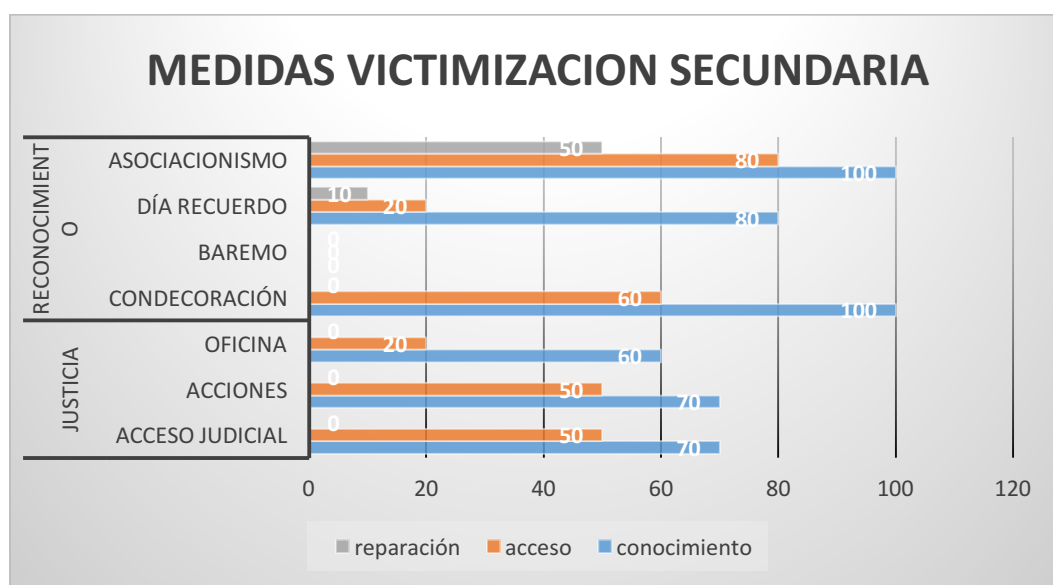


Gráfico 20: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento, acceso y reparación de las medidas frente a la victimización secundaria.

Como se puede comprobar las medidas más *conocidas* pertenecen al asociacionismo y las condecoraciones, seguidas del Día del recuerdo a las

Víctimas del Terrorismo. En cuanto al *acceso*, las más demandas y aceptadas han sido las relacionadas con el asociacionismo, las condecoraciones y, el acceso al sistema judicial y el ofrecimiento de acciones. En cambio, frente a las medidas relacionadas con la victimización primaria que no destacaron precisamente por su naturaleza reparadora, aquí los entrevistados han señalado que pertenecer a una asociación es una medida *reparadora*, seguida del Día del recuerdo y homenaje. En este contexto, las medidas consideradas reparadoras están directamente relacionadas con el apoyo pues, la primera, brinda el apoyo de pares de iguales, mientras que, la segunda, además del apoyo de pares de iguales puede aportar la percepción de cierto apoyo social.

5.4.5. Derecho a la memoria

La victimización terciaria se refiere a la situación de desamparo e incompreensión generada en la víctima por la reacción de su entorno social, tras haber superado las victimizaciones precedentes, esto es, la primaria y la secundaria⁶³⁸. Se tiende a asimilar al momento preciso en que tras la celebración del juicio el condenado vuelve a su vida cotidiana una vez ha alcanzado su libertad. Esta situación genera un estado de indefensión en la víctima al contemplar como su agresor retoma su vida arropado y vitoreado por sus simpatizantes mientras que sobre ella planea un sentimiento de aislamiento y marginación social. No resulta difícil, teniendo presente este contexto, que la víctima perciba la agresión que recibió como justificada⁶³⁹.

En orden a esta idea, es precisa la ayuda a las víctimas a través de la reintegración social con la finalidad de que se sientan capaces de vencer la sensación de aislamiento y alejamiento del resto de los integrantes de la sociedad. En el recorrido cuyo destino último es la nueva incorporación a la realidad social deben intervenir los miembros de la familia del afectado –en la

⁶³⁸ PANIAGUA SOLÓRZANO, W. La victimidad. Una aproximación desde el proceso de resarcimiento..., cit., pp. 157-161.

⁶³⁹ GARCIA-PABLOS DE MOLINA, A. Criminología. Una introducción..., cit., p. 184; ECHEBURUA ODRIÓZOLA, E. Y GUERRICAECHEVARRIA, C. Especial consideración de..., cit., p. 199.

mayoría de los casos, son la principal fuente de apoyo, no obstante, existen casos en que pueden culpabilizar al afectado de haberse convertido en víctima-, su entorno laboral –del mismo modo que cualquier persona, la víctima pasa la mayor parte de su día a día en el lugar de trabajo y, aquí, puede reprimir o aumentar su experiencia traumática, en la medida en que, el trabajo considerado normal puede tornarse para él desproporcionado a consecuencia del atentado terrorista-, amistades y los grupos de apoyo formados por los pares de iguales. En última instancia, la difusión de la educación pública en materia victimal fundamentada en la toma de conciencia sobre el alcance de la victimización, los problemas y necesidades que pueden experimentar podrían sumarse a las fuerzas que tratan de reintegrarla favorablemente en las redes sociales⁶⁴⁰.

Otro de los factores que tiene especial incidencia en esta etapa es la labor que desempeñan los medios de comunicación. En relación con su actividad, se ha señalado, primero, que sólo se acuerdan de la víctima en el momento en que es noticia. Segundo, el empleo del lenguaje no es siempre el más adecuado cuando en multitud de ocasiones en las propias noticias diferencian entre las víctimas inocentes y las víctimas no inocentes, correspondiendo el primer calificativo a aquellas que han sufrido un ataque indiscriminado frente a las integrantes del segundo grupo quienes han sido seleccionadas de antemano como fin de las acciones terroristas⁶⁴¹. La cobertura de los casos de víctimas si

⁶⁴⁰ Por ejemplo, “En Estados Unidos, el Congreso asigna una semana al año, generalmente a fin de Abril, como la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas. Durante esa semana, se presentan premios nacionales a organismos destacados de servicios a la víctima en todo el país. La Semana también da una oportunidad a las comunidades locales de rendir tributo a las víctimas del delito. El Departamento de Justicia de Estados Unidos patrocina el desarrollo de conciencia pública mediante una Guía de Recursos a ser usada por los programas de asistencia a las víctimas al planificar las actividades de la Semana Nacional de Derechos de las Víctimas. En esta guía han sido presentadas cientos de ideas para aumentar la conciencia pública sobre temas relacionados a las víctimas. Incluyen patrocinar vigiliass a luz de velas, maratones, carreras de rally, muros de conmemoración, y plantación de árboles; conducir foros; la publicación de editoriales y la difusión mediática de anuncios de servicios públicos; la exhibición de afiches y botones y distintivos; y la distribución de folletos y otras informaciones en tribunales, bibliotecas escolares y establecimientos de venta local”; en Manual de Justicia sobre el Uso y Aplicación de la Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctimas de Delito y Abuso de Poder.

⁶⁴¹ Conviene resaltar en este punto que en el fenómeno terrorista no tiene cabida la distinción entre víctimas inocentes o accidentales y aquellas consideradas intencionales o no inocentes, esta clasificación resulta bastante simplista y carente de fundamento. Es cierto que el primer grupo se asocia a la ausencia de intencionalidad en la conducta de quien la produce de tal forma que la víctima adquiere este rol debido a circunstancias fortuitas que la han situado en el lugar y momento exacto en el que se produce el daño. Mientras que, la víctima intencional es el objetivo de la acción a pesar de que no siempre son coincidentes en la misma persona la víctima y el destinatario. Esta diferenciación tiene especial incidencia cuando se

se abordan desde una visión sensible puede influir favorablemente en su recuperación, si bien, cuando se ofrece información de una forma más insensible puede contribuir a agravar el sufrimiento emocional y psicológico del afectado. Además, es posible que surja un conflicto entre la libertad de prensa e información con los derechos de las víctimas a un trato digno y a su intimidad⁶⁴². En este contexto, los derechos a la memoria y a la dignidad contribuyen a reintegrar y reconocer socialmente a las víctimas.

En concreto, el derecho a la memoria significa el reconocimiento de los hechos ocurridos a nivel social, se trata de un presupuesto esencial para hacer posible la convivencia, la paz y la libertad. La memoria incluye un aspecto objetivo consistente en la narración de las injusticias que han padecido las víctimas en las actuaciones terroristas. Junto a él, el componente subjetivo hace referencia a las personas que lo hayan padecido ya sean fallecidos, los heridos, secuestrados, extorsionados, amenazados y sus familiares. Además del conocimiento sobre los hechos incorpora, finalmente, la alusión al componente político, pues el objetivo de las acciones era eliminar las libertades básicas del Estado democrático de

habla de “los objetivos naturales de la acción terrorista”, incluyendo bajo este término a los cuerpos y fuerzas de seguridad y los militares, frente a los civiles como sujetos “accidentales” que la acción no estaba personalizada hacia ellos. Dentro del concepto de víctima intencional también se ha tratado de hacer alguna distinción respecto a las víctimas de “daños colaterales” sobre todo en atentados indiscriminados, debido a que en principio no eran los destinatarios, sino que se debe a una razón accidental. Sin embargo, toda acción terrorista tiene una clara voluntad de producir daño siendo irrelevante la alusión a la intencionalidad; en ECHEBURUA ODRIOZOLA, E. Y GUERRICAECHEVARRIA, C. Especial consideración de..., cit., pp. 194-195; GARCIA-PABLOS DE MOLINA, A. Criminología. Una introducción..., cit., p. 184.

⁶⁴² La Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, especifica en su art. 21 relativo al derecho a la protección de la intimidad lo siguiente: “1. Los Estados miembros velarán por que, durante el proceso penal, las autoridades competentes puedan tomar las medidas adecuadas para proteger la intimidad, incluidas las características personales de la víctima tenidas en cuenta en la evaluación individual contemplada en el artículo 22, así como las imágenes de las víctimas y de sus familiares. Además, los Estados miembros garantizarán que las autoridades competentes puedan tomar todas las medidas legales para impedir la difusión de cualquier información que pudiera llevar a la identificación de las víctimas menores de edad. 2. Respetando la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo, los Estados miembros instarán a dichos medios a aplicar medidas de autorregulación con el fin de proteger la intimidad, la integridad personal y los datos personales de las víctimas”. Mientras que el art. 34 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito referente a la sensibilización indica que “Los poderes públicos fomentarán campañas de sensibilización social en favor de las víctimas, así como la autorregulación de los medios de comunicación social de titularidad pública y privada en orden a preservar la intimidad, la dignidad y los demás derechos de las víctimas. Estos derechos deberán ser respetados por los medios de comunicación social”; en VARONA MARTINEZ, G., DE LA CUESTA ARZAMENDI, J. L., MAYORDOMO RODRIGO, V. y PEREZ MACHIO, A. I. Victimología: un acercamiento a través de sus conceptos fundamentales..., cit., pp. 29-30.

derecho y el derecho de la ciudadanía a la convivencia integradora. La memoria y su significación política contribuyen a la deslegitimación del terrorismo en sus facetas ética, social y política. El enfoque temporal de las múltiples medidas abarca el pasado –el relato de los hechos, su recuerdo y homenaje-, el presente –restañar las heridas- además de que se debe mirar hacia el futuro –evitar nuevas manifestaciones mediante la educación en valores y la concienciación de las repercusiones negativas de los hechos desencadenantes-. De acuerdo con las dimensiones que se pretenden alcanzar implicará a la esfera privada e individual de las personas, esto es, su reflexión privada, si bien, también la dimensión social pues mediante su divulgación se empezará a recorrer el camino hacia una cultura de participación donde se pueda adoptar una postura crítica sobre los hechos ocurridos y la conveniencia de desterrar la violencia.

De esta manera, las medidas que se pueden incluir dentro de este derecho son la creación del Centro Nacional para la Memoria y, a la vez, el relato de la propia víctima, si bien, tan sólo la primera está contemplada dentro de las disposiciones legales. Sin embargo, la segunda medida se ha considerado conveniente introducirla en el presente estudio debido a que el relato es la base para la memoria y el recuerdo de las víctimas además de que el propio concepto de memoria está en íntima conexión con él. Junto con ellas, también se prevé legalmente el impulso o la celebración de actos, símbolos o monumentos debido a que las tres medidas buscan el reconocimiento social.

Primero, el Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo tiene por finalidad construir y preservar la memoria de las víctimas del terrorismo, por ello, se les ha preguntado a los participantes acerca de conocimiento que tienen sobre esta previsión⁶⁴³.

⁶⁴³ Según el art. 57 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, establece que *“El Gobierno constituirá un Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, que tendrá como objetivo preservar y difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del terrorismo, construir la memoria colectiva de las víctimas y concienciar al conjunto de la población para la defensa de la libertad y de los derechos humanos y contra el terrorismo. El Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo tendrá su sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco”*

La mitad de los participantes *conoce* su creación y sobre este aspecto comentan que es necesario y que posiblemente acudan a visitarlo. Entre los comentarios que han realizado encontramos *"puede ser que acudiera a visitarlo para saber más sobre el terrorismo"*, *"creo que es conveniente que exista algo así para que se conozca por la sociedad"* e, *"iré por curiosidad"*.

Segundo, en la misma línea que el Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo, también se prevé que los poderes públicos impulsen la construcción de monumentos o símbolos dedicados a las víctimas⁶⁴⁴. En consecuencia, se les ha preguntado a los participantes si conocen que esta medida está prevista legalmente en la normativa de protección y asistencia a los afectados por el fenómeno terrorista, después les hemos consultado si han acudido a alguno de ellos –acceder- y, si en su caso, consideran que este tipo de homenajes ofrecen beneficios de naturaleza reparadora.

Según han revelado los entrevistados en cuanto a la primera dimensión –*conocimiento*–, tanto las víctimas directas como las víctimas indirectas *conocen* la celebración de estos actos o la construcción de monumentos dedicados a las víctimas y, en este sentido, vinculan esta medida con las asociaciones de víctimas puesto que, por una parte, son ellas las que promueven en mayor medida estos actos y, por otra parte, informan a las víctimas de su realización. Por lo que se refiere a si han decidido acudir –acceso- y, si al mismo tiempo, este tipo de eventos les repara o les beneficia de alguna forma en su desvictimización hemos obtenido los datos siguientes:

⁶⁴⁴ Art. 56 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección a las Víctimas del Terrorismo, establece que: *"Los poderes públicos impulsarán medidas activas para asegurar, dentro del máximo respeto y dignificación de las víctimas, y mediante actos, símbolos, monumentos o elementos análogos, el recuerdo y el reconocimiento de las víctimas del terrorismo"*.

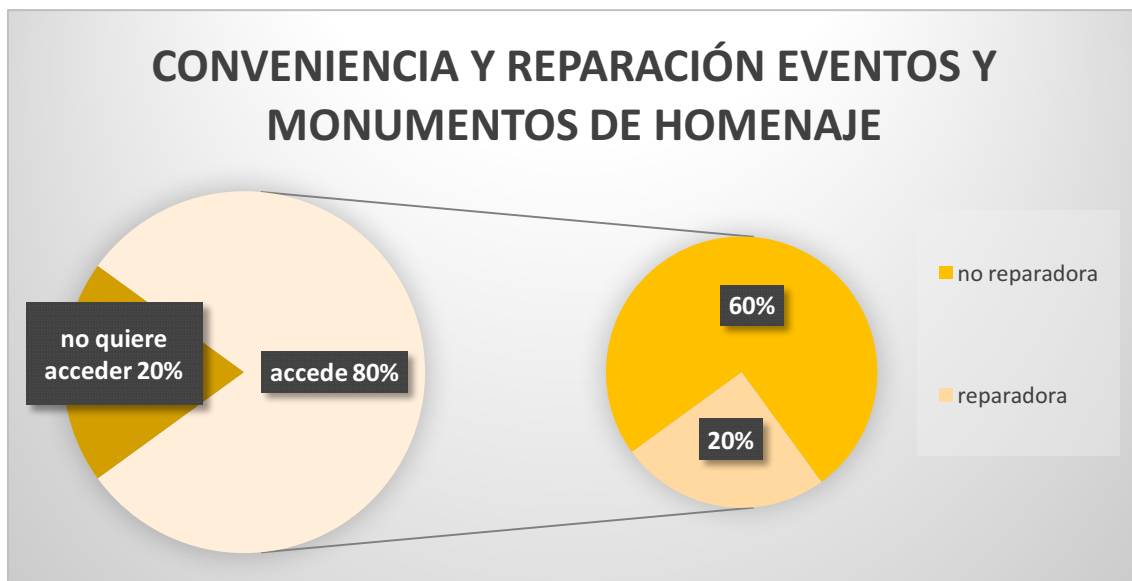


Gráfico 21: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre la conveniencia y reparación de actos y monumentos de homenaje a las víctimas del terrorismo.

Como se puede comprobar el 80% ha admitido asistir –acceso- a la celebración de eventos victimales y a visitar monumentos o símbolos en conmemoración de las víctimas del terrorismo de los cuales el 20% ha afirmado que acudir a esta clase de eventos tiene un carácter *reparador*. Si bien, las víctimas restantes que no la llegan a considerar reparadora –el 60%-, en cambio, destacan que les ayuda y reconforta este tipo de medidas puesto que se sienten apoyados tanto por las víctimas que acuden como el resto de la ciudadanía que les acompaña. En este punto se puede comparar esta medida con el Día de homenaje a las víctimas debido a que pueden guardar cierta semejanza pues ambas pretenden reivindicar su reconocimiento. De esta forma podemos observar que:

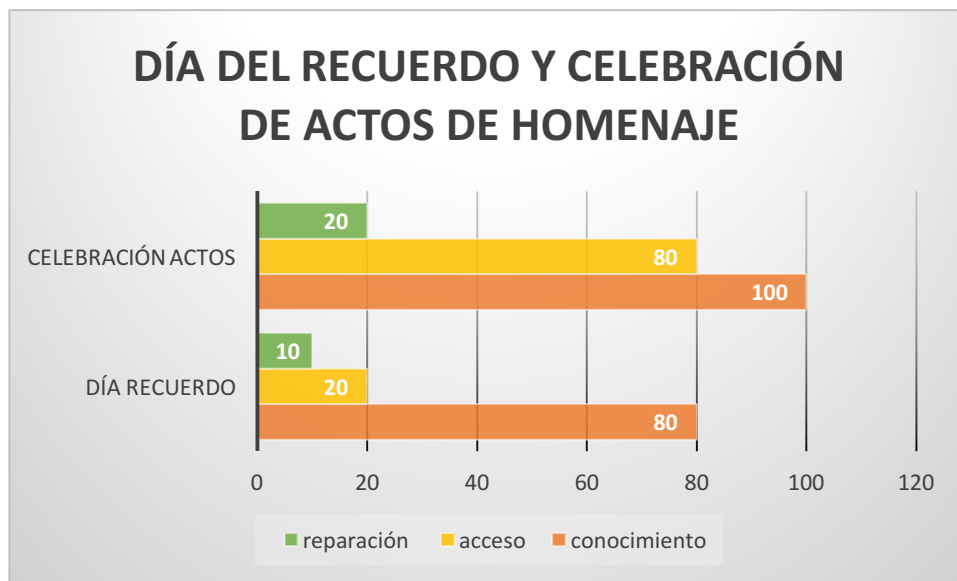


Gráfico 22: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre conocimiento, acceso y reparación del Día de recuerdo a las víctimas y la celebración de actos de homenaje.

Aparte de la diferencia que existe entre el conocimiento de ambas, la disparidad que se observa sobre el acceso y la voluntad de acudir de las víctimas en función de que sea una u otra parece tener un fundamento asociado con la política pues, tal y como han manifestado, parte de los entrevistados que suelen acudir a los eventos victimales o la visita de monumentos o símbolos –no el Día de recuerdo oficial- *“Sí a título particular desde luego. Lo que pasa es que cuando organizan algo es un acto institucional y ve de lejos la portada que quieren –se refiere a los políticos- y yo prefiero mantenerme al margen. Voy, participo, hablo con las víctimas y ya está”. O, “ir allí si hay partidos políticos...no. Pero sí participo en el caso de víctimas cuando van víctimas sin altos cargos. Con viudas, con hijos...pero no con políticos”.*

Por último, también se les ha preguntado si saben que de vez en cuando se les solicita, llama o pide colaboración desde diferentes instituciones con el propósito de que cuenten su experiencia tal y como puede ser en las universidades. Asimismo, si han accedido a acudir a relatar su experiencia victimal y, finalmente, qué les ha parecido esta experiencia, esto es, si ha sido reparadora o no de acuerdo a su sensación como a la percepción de apoyo que

han recibido tras su apertura al público en general. Los datos obtenidos sobre el *conocimiento* de esta medida son los siguientes:

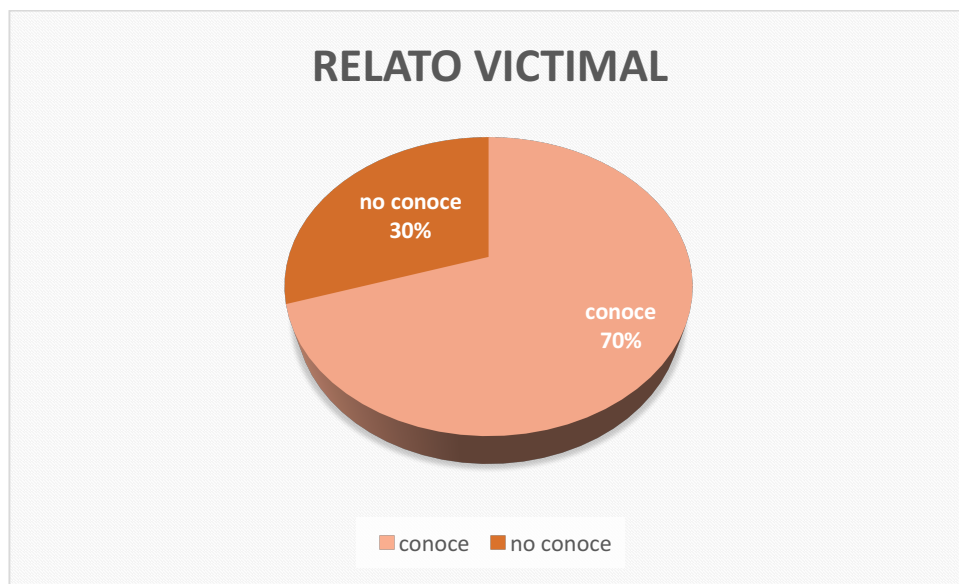


Gráfico 23: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento del relato victimal.

Como se puede observar bastantes víctimas tanto directas como indirectas sabían que esta práctica es habitual, en torno, al 70% ha afirmado conocer esta medida que en general proviene de las universidades que trata de transmitir la experiencia victimal en las diferentes jornadas sobre víctimas que suelen celebrar. No obstante, el paso siguiente consiste en averiguar si realmente han accedido o, por su parte, han tenido algún reparo en acudir a estos eventos. Así, los datos obtenidos se representan a continuación:

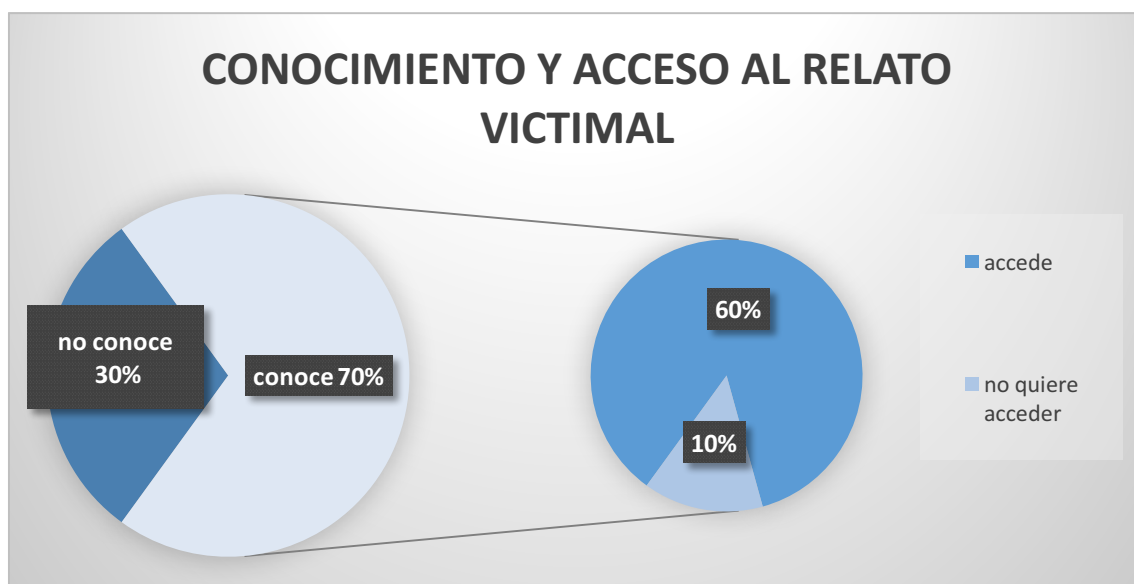


Gráfico 24: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento y acceso al relato victimal.

A simple vista se puede observar que, prácticamente la totalidad de aquellos que conocían esta práctica –alrededor del 60%- han acudido a contar su experiencia, es decir, *han accedido*. Por lo siguiente, es lógico preguntarles si esta vivencia les ha reparado o no consideran que ostente tal naturaleza. Sobre esta cuestión, se puede afirmar que, todos –el mismo 60% que han acudido- la han descrito como *reparadora*. Entre los comentarios más destacados de las víctimas directas se enumeran los siguientes: *"supone una satisfacción y una obligación el poder rendir mediante mi testimonio homenaje a otros que no han tenido la misma suerte que yo", "me vino muy bien exteriorizarlo, contarlo y poder vivir con ello. Ahora noto que cuando se lo cuentas a alguien que en realidad está interesado en escucharlo es gratificante y lo recomiendo" y "sí lo he contado. Me he sentido aliviado, me siento resarcido, incluso, te llegas a emocionar cuando sabes que estás vivo por un cúmulo de circunstancias. Te desahogas y ves cómo la gente es receptiva. Es como que te liberas y te ayudan desde fuera por el mero hecho de escucharte"*. En el mismo sentido, las víctimas indirectas han explicado *"es satisfactorio", "sí me sentí muy bien al contar lo que llevo dentro. Fui a una universidad porque pensé que era el momento para contar mis vivencias. Fuimos muy bien recibidos, mostraron un gran interés. Fui muy*

satisfactorio" y, "me viene bien contar la verdad, quién era mi padre, cómo lo mataron. Psicológicamente, contarle cómo pasó y cómo me siento es un alivio y siento tranquilidad. Con la gente con la que hablo es gente receptiva. No sé si es una catarsis pero que te libera sí. Siempre que me llame alguien y veo que bien –se refiere a la recepción- pues lo cuento. Procuro aportar mi granito de arena. Es que fue así".

En conjunto, las medidas comprendidas en el derecho a la memoria comportan los siguientes resultados de acuerdo al conocimiento, acceso y naturaleza reparadora:

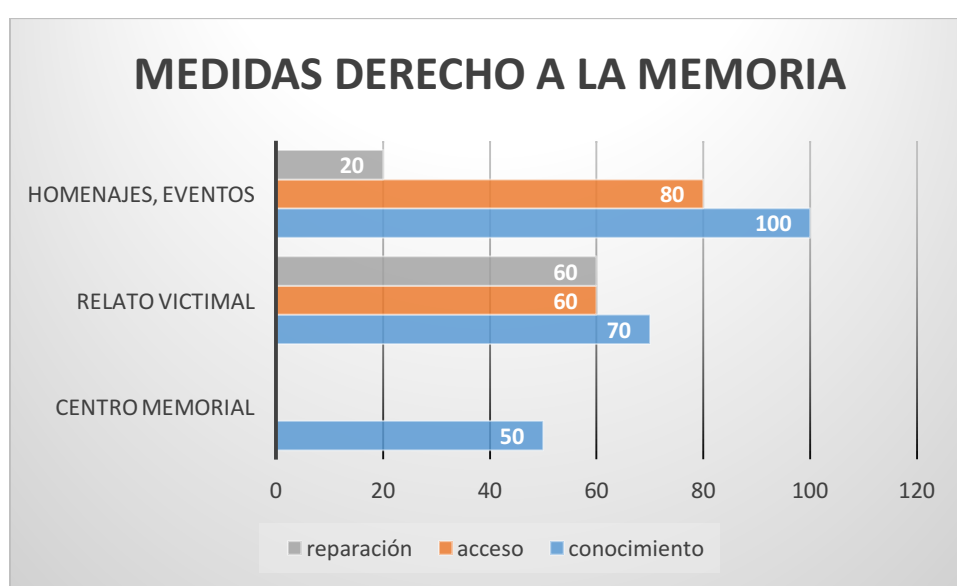


Gráfico 25: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento, acceso y reparación de las medidas integradas en el derecho a la memoria.

Por todo esto, la medida incluida en el derecho a la memoria de la que mayor conocimiento tienen las víctimas objeto de este estudio es la celebración de actos u homenajes o el establecimiento de monumentos o símbolos para rememorar a las víctimas del fenómeno terrorista seguidas de la posibilidad que se les ofrece de contar su relato victimal y del Centro Memorial. Igualmente, suelen acudir más víctimas a la celebración de homenajes que a contar su experiencia, si bien, la mayoría han precisado que en un futuro acudirán al Centro

Memorial a fin de visitar su exposición permanente. En cambio, la totalidad de los participantes que han tenido la posibilidad de acudir a instituciones oficiales –casi todos a la universidad- y así han aceptado-el 60%-, la han señalado como reparadora. A gran distancia, el 20% también ha considerado los actos de homenaje como reparadores.

5.4.6. Derecho a la dignidad

El concepto relativo a la dignidad humana tiene una dimensión amplia pues va más allá de la simple afección de los derechos fundamentales. La mera equiparación entre la vulneración de los derechos fundamentales y el quebranto de la dignidad humana no tiene sentido en este contexto, en la medida en que, estos derechos individuales constitucionalmente recogidos se intentan resarcir mediante las previsiones que conforman el derecho a la reparación. Por ello, teniendo en cuenta el hecho de que la ley 29/2011, de 22 de septiembre, nombra referentes cívicos a las víctimas del terrorismo en base al ataque a la dignidad que han recibido, esta afirmación implica necesariamente la presencia de algunas circunstancias especiales que las haga acreedoras de esta específica condición. El fenómeno terrorista se caracteriza por utilizar a las víctimas como simples instrumentos para imponer su proyecto totalitario vulnerando en su cometido las bases del Estado de Derecho. Esta intencionalidad política que subyace a sus acciones es la que consigue deshumanizar a las víctimas tanto al nivel físico de su individualidad como al nivel de su personalidad en el camino hacia su pretensión de negación del Estado de Derecho. A este sentimiento de cosificación que suele emerger en este colectivo hay que sumarle un segundo factor significativo para la instauración del sentimiento de deshumanización que sienten los afectados por el terrorismo que es el desinterés o la falta de entendimiento social que han despertado tradicionalmente.

La dignidad de las víctimas se ve fundamentalmente afectada y mermada en la medida en que, con mejor suerte, son ignorados o, en el peor de los casos, son plenamente conscientes de que sus propios victimarios gozan de impunidad política y moral puesto que pueden contar libremente su experiencia en su mal

llamada “lucha armada”, mientras que, las víctimas pasan a ser consideradas culpables⁶⁴⁵. En un contexto donde ha dominado la indiferencia o el desinterés hacia el fenómeno terrorista y, en particular, hacia las víctimas en el periodo en que sus actuaciones tuvieron su mayor índice de concentración ha influido en que las sensaciones que experimentan de impacto emocional, padecimiento psíquico, ansiedad o angustia –que son las que justifican la enunciación del derecho a la dignidad- sean muy complicados de reparar, incluso más que las lesiones físicas y psíquicas, debido a que, no simplemente han sido sus medios para llevar a cabo sus intenciones políticas sino que además se han visibilizado más apoyos hacia sus victimario que a ellos en un clima social de indiferencia.

Asimismo, la educación en valores en el ámbito educativo permitirá preservar la dignidad de las víctimas. Las administraciones correspondientes deben apoyar los proyectos y planes sobre los valores de libertad, democracia y paz, entre los que sería preferible incluir testimonios directos para fomentar el respeto de los derechos humanos en general y específicamente los principios democráticos de convivencia y libertad.

Por esta razón se ha decidido preguntar a las víctimas sobre cuatro dimensiones que son su consideración de referentes cívicos, el tratamiento y protección que se les da a las víctimas por los medios de comunicación, las medidas frente al ensalzamiento del terrorismo y la educación en valores debido a que en su conjunto tratan de dignificar a los afectados por el terrorismo y, en general, brindarles el apoyo social necesario a fin hacer frente a la aparición y mantenimiento de la victimización terciaria.

Primero, sobre la consideración de referente cívico⁶⁴⁶ que el legislador ha otorgado a las víctimas del terrorismo, las preguntas se han dirigido a averiguar

⁶⁴⁵ MALDONADO MONTOYA, J. P. Tutela institucional y apoyo..., cit., p. 187.

⁶⁴⁶ Según el Preámbulo de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo *“Las víctimas del terrorismo constituyen asimismo una referencia ética para nuestro sistema democrático. Simbolizan la defensa de la libertad y del Estado de Derecho frente a la amenaza terrorista. Los poderes públicos garantizarán que las víctimas sean tratadas con respeto a sus derechos y para asegurar la tutela efectiva de su dignidad. Por ello esta Ley, a través de su sistema de ayudas, prestaciones y condecoraciones, quiere rendir un especial reconocimiento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas de España por la eficacia siempre demostrada en la lucha contra la amenaza terrorista y porque, lamentablemente, son las que han aportado el mayor número de*

cuál es su *conocimiento y efectividad*. En primer lugar, hemos constatado que ninguna de las víctimas directas conoce –*no conocimiento*– la existencia de que se les considera un referente cívico en la salvaguarda del sistema democrático o el referente de la libertad y del Estado de Derecho. Esta pregunta no se les ha realizado a las víctimas indirectas, en la medida en que, se dirige, en exclusividad, a las víctimas del terrorismo y, por tanto, no se les ha incluido. En cuanto a su posible naturaleza reparadora, ninguna de las víctimas directas la ha categorizado con tal calificativo y, por ello, se le considera *no reparadora*. Si bien, todos han dado su opinión y ahí han mantenido sentimientos dispares, pues, mientras, por una parte, determinadas víctimas han comentado que *"es un orgullo"* o *"es un reconocimiento"*, otras, al contrario, han mostrado su rechazo con comentarios tales como *"eso no sirve para nada. te lo ponen tan bonito y luego no te ayudan"* o *"no me parece justo, dentro del colectivo de víctimas hay gente para todo. Yo utilizaría como referente a aquellos que destaquen con sus actuaciones y no a todas las personas"*.

Tras examinar la primera premisa referida a la condición de referente cívico de las víctimas del terrorismo, nos hemos interesado por la protección y tratamiento que se les debe proporcionar a las víctimas del terrorismo en los medios de comunicación sobre la base de que se debe proteger la su intimidad, se considerará ilícito cualquier imagen de las víctimas de naturaleza despreciativa o sensacionalista y, al mismo tiempo, se fomentarla la protección y salvaguarda de sus imágenes⁶⁴⁷.

víctimas mortales y de heridos tanto en los ataques terroristas cometidos en territorio nacional como en los perpetrados por el terrorismo internacional. Este homenaje no sería genuino ni completo si, al mismo tiempo, no se reconoce el papel que han desempeñado las familias de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, del Ejército, de la Ertzaintza, «Mossos d'Esquadra», o de las policías locales, víctimas todos de atentados terroristas. El esfuerzo, la resistencia, el coraje y la dignidad demostrada en estos difíciles años son, sin duda alguna, un ejemplo de civismo y de compromiso con la democracia, la Constitución y sus valores".

⁶⁴⁷ Dentro del Capítulo séptimo del Título cuarto de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección a las Víctimas del Terrorismo, el art. 42 dispone "En las actuaciones y procedimientos relacionados con el terrorismo, se protegerá la intimidad de las víctimas; en especial sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia". Sigue el art. 43: "De acuerdo con lo establecido en la legislación específica en la materia, se considerará ilícita la publicidad que utilice la imagen de las víctimas con carácter despreciativo, vejatorio o sensacionalista o con ánimo lucrativo". Mientras que el art. 44: "Las instituciones a las que corresponda velar para que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptarán las medidas que procedan

De todas ellas, el 60% *no conocía* que esta medida estuviera incluida dentro de la normativa reguladora de las víctimas del terrorismo –frente al 40% que sí la *conocían*-. Sin embargo, ninguna víctima ni directa ni indirecta considera a esta medida reparadora. Las opiniones que han dado al respecto, se diferencian entre aquellos que las estiman correctas en términos generales como *"en líneas generales es correcta"* o *"es correcto siempre y cuando se atengan a lo que la víctima solicita o reclamen"* –se refiere si quienes que le saquen–, quienes muestren su disconformidad con algunos medios y así lo han expresado varias víctimas con las palabras siguientes *"solamente me parece correcto en algunos medios"* o *"depende de quien la haga"* y, por su parte, aquéllos que muestran discrepancia y, en este sentido, algunos entrevistados han opinado que *"se merecen más reconocimiento"* o *"no es del todo correcto"*.

Igualmente, se les ha pedido que respondan si conocen la medida relativa a la prohibición exhibir públicamente monumentos o símbolos relacionados con el fenómeno terrorista y, si en su caso, la consideran reparadora⁶⁴⁸. En concreto,

para asegurar un tratamiento de las víctimas del terrorismo conforme con los principios y valores constitucionales, sin perjuicio de las posibles actuaciones que puedan adoptar otras entidades". Por su parte, el art. 45: "Las personas reseñadas en el artículo 4 de esta Ley estarán legitimadas para ejercitar ante los Tribunales las acciones de cesación y rectificación de publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de las víctimas del terrorismo, en los términos que se señalen en la legislación específica". Según el art. 46: "1. Los medios de comunicación fomentarán la protección y salvaguarda de la imagen de las víctimas del terrorismo, evitando cualquier utilización inadecuada y desproporcionada de ella. 2. La difusión de informaciones relativas a las víctimas del terrorismo tendrá en cuenta el respeto a los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mismas y de sus familias. En particular, se tendrá especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones". Finalmente, el art. 47: "1. A fin de dar cumplimiento a lo indicado en el artículo anterior, las Administraciones Públicas promoverán acuerdos de autorregulación dotados de mecanismos de control preventivo y de resolución extrajudicial de controversias eficaces que contribuyan al cumplimiento de la legislación publicitaria. 2. Para conseguir la mejor realización de los fines indicados en este artículo y en los precedentes, las Administraciones Públicas competentes podrán promover campañas de sensibilización y formación continuada de los profesionales de la información".

⁶⁴⁸ En este sentido, el art. 61 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección a las Víctimas del Terrorismo, establece que "1. El Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas, estableciendo la prohibición de exhibir públicamente monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas. 2. Las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta prohibición. Todo ello sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas y sus familiares puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al honor y dignidad. 3. Asimismo prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas. 4. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas velarán por el cumplimiento de la obligación

la mitad de los participantes conocía que esta medida estaba contemplada a lo largo de las disposiciones dedicadas a las víctimas del terrorismo. Si bien, salvo el 30% que no conoce demasiado de la problemática, sólo el 10% considera que es correcta frente 60% que la considera incorrecta. A este respecto han explicado que *"deberían ser más severas"*, *"no, hay casos en los que se les vitorea"*, *"a la hora de la verdad no es como lo pintan"* o *"no, ha sido fatal hasta el año 2009 no se empezó a tocar eso en el País Vasco. Ahí empezaron a borrar todos los símbolos que enaltecían a ETA"*. Como se puede deducir, los entrevistados la han categorizado como *no reparadora*.

Finalmente, se les preguntó acerca de la educación en valores que guarda relación, en cierta medida, tanto con el derecho a la verdad como con el relato victimal incluido en el derecho a la memoria y sobre esta medida se pueden realizar tres precisiones⁶⁴⁹. Primero, salvo el 10% que manifestó sí *conocer* la medida en la medida en que había ido a una charla y lo habían comentado, el resto de víctimas –el 90%- *no la conocían*. Segundo, al solicitarles su opinión acerca de si les repararía acudir a los centros educativos de las contestaciones ofrecidas se pueden realizar varias consideraciones. Sólo hay un porcentaje mínimo que no acudiría a las charlas en torno al 10%. Con igual porcentaje, se lo plantearía dependiendo del momento, esto es, no se cierra la puerta a esta nueva experiencia. Al contrario, el resto acudirían a los centros educativos y así lo han manifestado. Entre las respuestas que han dado los participantes se pueden destacar las siguientes: *"es una buena idea. Acudiría a contar mi experiencia"*, *"acudiría. Pero las víctimas deben ir acompañadas por personal cualificado"*, *"es una buena opción para que se conozca qué ocurrió. Sin embargo, no puede ir todo el mundo se trata de adolescentes"* o *"me parece bien. Lo importante es que las nuevas generaciones vean lo que se ha sufrido aquí, que*

establecida en los apartados anteriores, por parte de las Corporaciones Locales, a los efectos de su reclamación de oficio ante los Tribunales de justicia que sean competentes".

⁶⁴⁹ Tal y como establece el art. 59 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección a las Víctimas del Terrorismo: "Las Administraciones educativas al objeto de garantizar el respeto de los derechos humanos y la defensa de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, impulsarán planes y proyectos de educación para la libertad, la democracia y la paz, en los que se procurará la presencia del testimonio directo de las víctimas del terrorismo".

se sepa la verdad documentalmente. Lo importante es dar un testimonio, que los jóvenes sepan qué ha ocurrido en España sobre todo en el País Vasco, cómo mataban, por qué lo hacían ya que no hay justificación, que no aleguen la dictadura".

Así se puede desprender que, pese a que no la catalogan como reparadora por el mero hecho de que no han acudido aún, sí que son favorables a esta medida. Una de las razones puede ser que está en íntima conexión con el derecho a la verdad y el derecho a la memoria en el que se ha incluido el relato victimal, sobre el que se debe recordar que, parte de la muestra la había considerado reparadora.

A la hora de analizar el conocimiento y reparación de las medidas asociadas al derecho a la dignidad –el acceso, en estos casos no se puede contemplar puesto que no pueden acceder a ellas, salvo la educación en valores que podrán hacerlo en un futuro- podemos comprobar que:

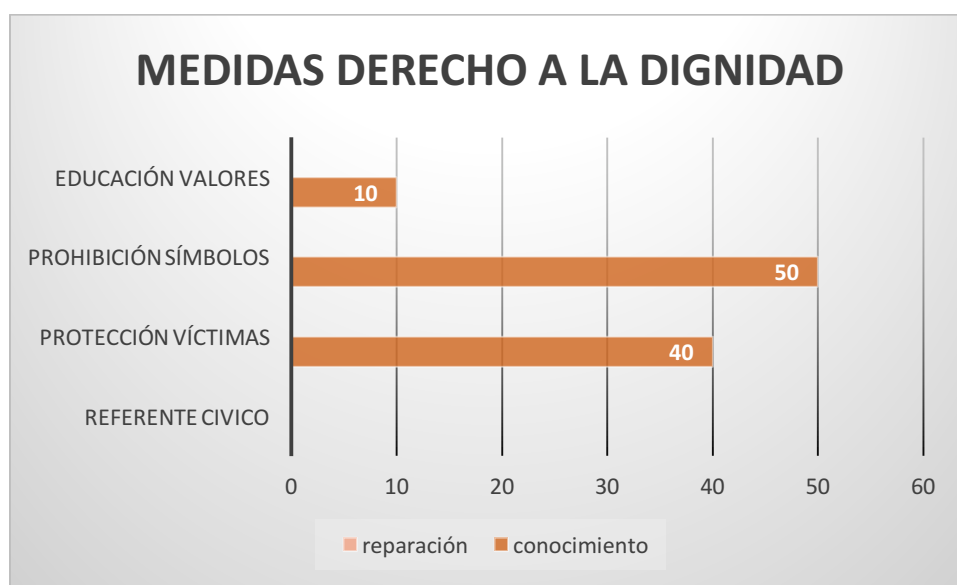


Gráfico 26: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento y reparación de las medidas del derecho a la dignidad.

Pese a que las víctimas conocen en mayor proporción la medida relativa a la prohibición de símbolos que enaltezcan al fenómeno terrorista, seguida de la medida de protección de la intimidad de las víctimas y en menor medida de la educación de valores y de referente cívico, la opinión que tienen sobre su eficacia no corresponde con su conocimiento y este hecho se plasma en el gráfico siguiente:

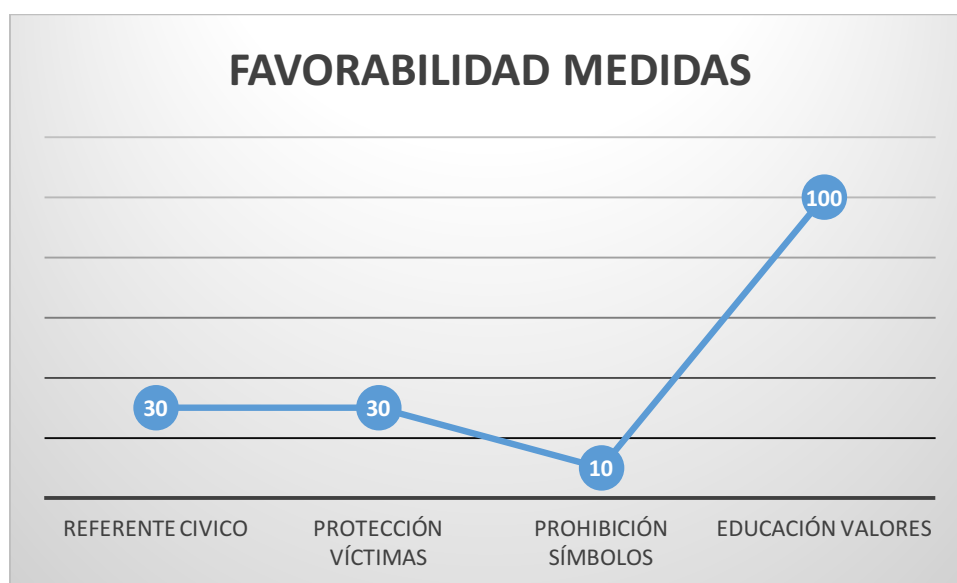


Gráfico 27: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre la favorabilidad de las víctimas a las medidas del derecho a la dignidad.

Precisamente las medidas menos conocidas, sobre todo la relativa a la educación en valores, arrojan índices de mayor aceptabilidad por parte de las víctimas. En cambio, la medida más conocida como es la prohibición de elementos terroristas no se considera que está bien aplicada ni siquiera en la actualidad. Por su parte, la medida sobre la protección de la intimidad de las víctimas tiene resultados parecidos tanto en el conocimiento como en su correcta implementación.

Por último, de acuerdo a los resultados sobre el conocimiento, acceso y reparación de todas las medidas integradas tanto en el derecho a la memoria como en el derecho a la dignidad se puede observar lo siguiente:

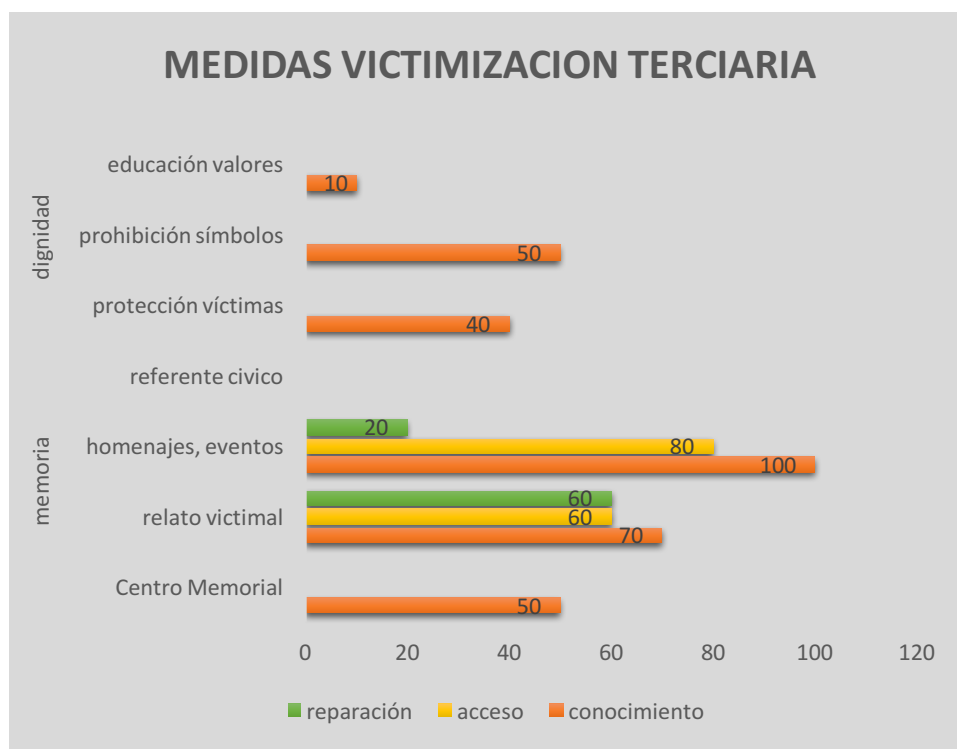


Gráfico 28: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento, acceso y reparación de las medidas frente a la victimización terciaria.

De este modo, podemos apreciar que las medidas frente a la victimización terciaria más conocidas son la celebración de homenajes, seguida del relato victimal y tras éstas el Centro Memoria y la prohibición de elementos terroristas en la vía pública. Por su parte, las únicas medidas a las que han podido acceder han sido a la celebración y homenajes y al relato victimal, a la vez que, les han otorgado un carácter reparador puesto que el resto de medidas no son directamente accesibles para las víctimas. Sin embargo, conviene incidir en que la educación en valores pues ser igualmente reparado cuando tengan ocasión las víctimas de acceder a ella por dos motivos, por una parte, se han mostrado todas

favorables a su implantación al mismo tiempo que la mayoría acudiría a los centros educativos y, por otra parte, está directamente relacionada con el relato victimal y, por lo tanto, puede entenderse que tendrá posiblemente un carácter reparador para las víctimas.

5.4.7. Derecho a la reparación en sentido amplio

Tras el estudio victimal realizado tanto a las víctimas directas como a las víctimas indirectas objeto de nuestra investigación, hemos podido comprobar que, las primeras han sido victimizadas en función de la profesión que ejercen, esto es, por pertenecer a la Guardia Civil y, al mismo tiempo, por representar este Cuerpo al estado español. De este modo, se hace patente la significación política que han adquirido este tipo de víctimas al ser utilizadas como medios por los terroristas a fin de conseguir sus propósitos políticos. Incluso, la vocación que profesan hacia su ocupación no ha variado una vez se convirtieron en víctimas, si bien, existe un sentimiento generalizado cercano al 70% de la muestra que indica una falta de apoyo del ámbito social y especialmente de su entorno laboral durante su recuperación ya sea por la falta de información mediática de los primeros ya sea por el temido efecto contagio de sus compañeros, de este modo, lo cierto es que la falta de apoyo se ha convertido en la mayor vulnerabilidad presente en estas víctimas del terrorismo.

En este sentido, se ha corroborado que no existe demasiada variación de opiniones entre las víctimas directas y las víctimas indirectas, sino que, apuntan en la misma dirección prácticamente, al igual que, no se han observado distinciones en virtud de la variable relacionada con el lugar de comisión. También cabe señalar que, no se han apreciado diferencias significativas entre las diversas etapas en las que fueron objeto de ataque salvo la última de ellas que sí recibió una mayor atención institucional y social. Sin embargo, sí que hemos detectado una posible diferenciación entre aquellos a favor de haber recibido un trato correcto del resto de participantes que lo han considerado incorrecto en virtud de su sentimiento victimal, esto es, dentro del 30% que ha percibido un trato adecuado un 20% no se perciben a sí mismos como víctimas

del terrorismo, sino que asocian haber sufrido daños a su desempeño laboral habitual. De tal forma que, quienes lo han asumido como algo previsible y conforme a su profesión –“algo que podía pasar”- no han echado en falta un mayor apoyo. En cambio, las víctimas que entienden que existe una separación entre las funciones que desempeñan y ser seleccionadas como posibles objetivos debido a su desvinculación con la política y los intereses terroristas se han sentido peor tratadas por los ámbitos social y laboral.

En cierta medida, las vulnerabilidades presentes en los afectados deberían verse paliadas tras la aplicación de las medidas legales en cuanto a la dimensión amplia del derecho a la reparación, fundamentado en el principio de solidaridad⁶⁵⁰, consiste en la aplicación del sistema de asistencia integral de manera continua de acuerdo con los criterios de proporcionalidad, flexibilidad y adaptabilidad. Los poderes públicos mediante la adopción de medidas pertenecientes a las esferas de la restitución, indemnización, rehabilitación, atención y satisfacción moral dependiendo del daño causado, perseguirán la efectividad de la reparación integral. No sólo se requieren medidas económicas, sino que se entienden necesarias aquellas que puedan facilitar la convivencia pacífica, la reconstrucción y la transformación social. La reparación, aquí considerada, significa estrictamente el reconocimiento de los padecimientos injustos de las víctimas, de manera que, la interacción de ambos principios conduce a una situación de encuentro entre las víctimas y la sociedad. Los resultados del establecimiento de este contacto se reflejarán en diferentes direcciones: la solidaridad manifestada por la ciudadanía facilitará la dignificación de la vida de las víctimas, a la vez que, las vías incorporadas para mantener el reconocimiento y la asistencia a las mismas, les servirá de instrumento de conciliación con una parte de su pasado. Como se puede observar, la respuesta

⁶⁵⁰ En la medida en que la sociedad vasca y sus instituciones han ido avanzando en la concienciación sobre la situación de las víctimas caracterizada en multitud de ocasiones por la desafección de gran parte de la comunidad de la que son miembros, han ido apareciendo muestras de reconocimiento y solidaridad hacia ellas. La Dirección de Atención a las víctimas del terrorismo, con la intención de afianzar el reconocimiento y la solidaridad, ha promovido las actividades consistentes en el reconocimiento y la memoria –actos de reconocimiento y homenaje y el contacto individualizado con familias de víctimas, entre otros-, el apoyo a la elaboración de la Ley de Solidaridad con las víctimas del terrorismo y, la introducción de los testimonios directos del fenómeno terrorista en los programas de educación; en Plan de Paz y Convivencia. Primera evaluación anual, Gobierno Vasco, pp. 19-22.

recomendada se aborda no sólo desde la instancia judicial sino también incorpora a los sistemas informales –comunidad y familia- a fin de garantizar la reparación integral de la víctima. Por lo cual, los valores de verdad, justicia, reconocimiento, memoria y dignidad junto con la reparación estricta contribuyen a afianzar el proceso de reparación integral de los individuos afectados por acciones terroristas. Este tipo de reparación representa la finalidad última de las normativas tanto estatal como autonómicas referidas a la protección y reconocimiento conferidos a las víctimas a quienes se les reconoce expresamente haber padecido en primera persona diferentes clases de violaciones de los derechos humanos⁶⁵¹.

Así, del éxito de la aplicación de las medidas integradas en los derechos a la verdad, reparación, justicia, reconocimiento, memoria y dignidad depende la plena reparación integral y, consecuente, reintegración social de la víctima, esto es, la recuperación de los afectados por el fenómeno terrorista. Precisamente, el análisis de conocimiento, conveniencia y reparación de las medidas nos permite averiguar cuál es la efectividad del conjunto de medidas desvictimizantes previstas a lo largo del texto legal y, en su caso, como se puede mejorar. Por esta razón se ha considerado conveniente preguntar a los participantes, primero, qué medida les ha faltado durante su recuperación ya esté prevista la medida actualmente, no lo esté o precise una mejor implementación práctica y, segundo, qué medida les ha ayudado más a lo largo de su proceso de desvictimización.

Prácticamente la totalidad de los entrevistados han apuntado en la misma dirección, en la medida en que, señalan que han necesitado en primer lugar, una mayor información sobre las medidas a las que podían acceder, en segundo lugar, más apoyo y seguimiento durante su camino hacia la plena recuperación y, vinculada con ambas una verdadera implicación institucional y, finalmente, reconocimiento.

En primer lugar, los datos que hemos obtenido sobre el conocimiento y el acceso de las medidas previstas en el texto legal –frente a la victimización

⁶⁵¹ CABRERA SUAREZ, L. A. El derecho a la memoria..., cit., p. 185.

primaria, secundaria y terciaria- en el epígrafe precedente, están relacionados con las dimensiones apuntadas por los participantes sobre la información, apoyo, seguimiento e implicación institucional. De esta forma en cuanto al conocimiento de las medidas podemos observar lo siguiente:

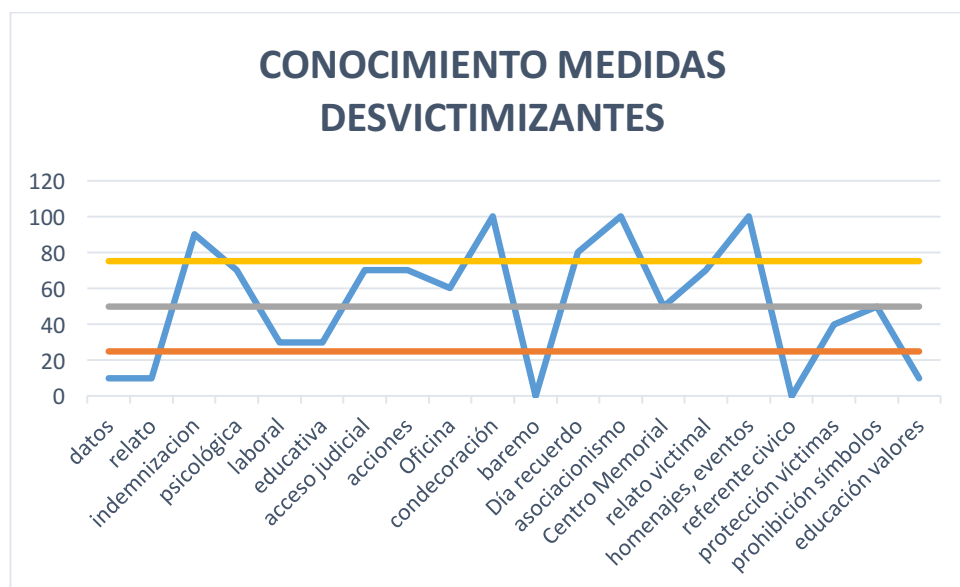


Gráfico 29: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el conocimiento de las medidas desvictimizantes.

Como se puede observar del examen conjunto sobre el conocimiento de las medidas, existe disparidad entre las mismas lo que implica una falta de información de su existencia. En concreto, tan sólo han adquirido un nivel alto de conocimiento –del 76 al 100%- la indemnización económica por los daños causados, las condecoraciones, la celebración del Día del recuerdo y homenaje a este colectivo victimal, el asociacionismo y los eventos y monumentos a favor de las víctimas. Mientras que, la ayuda psicológica, el acceso judicial y la Oficina de Información y Asistencia han alcanzado un conocimiento moderado –desde el 51 al 75%-. Por su parte, dentro del conocimiento medio –del 26 al 50%- encontramos los derechos laborales, ayudas educativas, el Centro Memorial, la protección de las víctimas en los medios y la prohibición de los elementos

terroristas. Finalmente, el acceso a los datos que consten en la Administración, a la versión oficial, el baremo de la condición de las víctimas del terrorismo, la constitución de la víctima del terrorismo en referente cívico y la educación en valores están dentro de un conocimiento bajo –del 0 al 25%-. En realidad, la demanda victimal de una mayor información está vinculada directamente con el apoyo, seguimiento, implicación institucional y reconocimiento puesto que, si se consiguiera un nivel alto de conocimiento de todas las medidas previstas en el texto legal por parte de los afectados en función de su categoría victimal –las tres cuartas partes de las medidas presentan un conocimiento bajo, medio y moderado entre los entrevistados-, éstos percibirían un mayor apoyo, reconocimiento e implicación institucional.

En segundo lugar, vinculada con la idea anterior y de acuerdo con los datos que nos han proporcionado los participantes acerca del acceso que han tenido a las medidas, podemos observar lo siguiente:

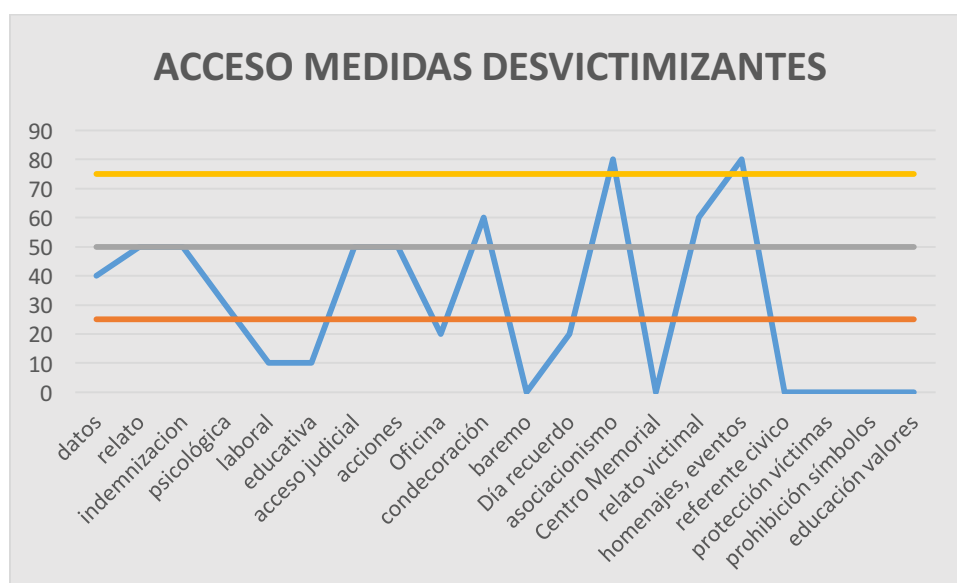


Gráfico 30: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre el acceso a las medidas desvictimizantes.

Al igual que en los casos examinados sobre el conocimiento, solamente han alcanzado el nivel de acceso alto o moderado un total de ocho medidas, esto

es, la celebración de homenajes, el asociacionismo, el relato victimal, las condecoraciones, el acceso judicial, las indemnizaciones por daños corporales y la versión oficial de los hechos. Con la obtención de tales datos, podemos observar que, el conocimiento y el acceso a las medidas no ha sido especialmente significativo posiblemente por la falta de información al respecto y, esto refuerza las demandas victimales que giran en torno a la información, apoyo, seguimiento, reconocimiento e implicación institucional.

En cambio, los entrevistados han destacado que las medidas que más les han beneficiado durante su recuperación están relacionadas con la experiencia de contar su historia victimal, poder conocer a más víctimas como ellos en las asociaciones de víctimas y, en general, la memoria de las víctimas y no olvidar qué consecuencias ha provocado el fenómeno terrorista. Por ello, estas aportaciones se pueden comparar con el carácter reparador de las medidas que han manifestado previamente y, esto queda reflejado en el gráfico siguiente:



Gráfico 31: elaborado a partir de los datos proporcionados por los participantes de este estudio sobre la naturaleza reparadora de las medidas desvictimizantes.

De este modo, se puede advertir que las medidas que han considerado reparadoras son los homenajes que se les realizan, el asociacionismo y el relato victimal por lo que coinciden con las medidas que más les han ayudado en su recuperación. En realidad, estas medidas responden a los objetivos del derecho a la memoria y al reconocimiento que tratan de asegurar el reconocimiento social y el reconocimiento frente a las instituciones. Al mismo tiempo, hemos indicado con anterioridad que la vulnerabilidad presente en estas víctimas ha sido la falta de apoyo del entorno laboral y social y, por lo tanto, la mayoría de los participantes encuentran en las medidas cuya aplicación comporta el reconocimiento de pares de iguales o el reconocimiento social en general una verdadera reparación.

5.5. Recomendaciones

Tras comprobar cuáles son los inconvenientes que han experimentado tanto las víctimas directas como las víctimas indirectas durante su proceso de desvictimización y, a la vez, las sugerencias que han realizado sobre las estrategias de carácter reparador –tomando como referencia su experiencia victimal-, estamos en disposición de proponer una serie de mejoras tanto en el texto legal como en la manera de llevarlas a la práctica. En este contexto, vamos a partir de dos premisas fundamentales que son la información y el reconocimiento y que nos van a guiar a la hora de ofrecer las diversas recomendaciones.

Uno de los problemas que ha sido constante tanto a lo largo de las tres victimizaciones primaria, secundaria y terciaria y como se ha podido comprobar en la reparación amplia es la información de las previsiones legales acerca de las ayudas, prestaciones y derechos que les asisten por tener la condición de víctimas o afectados por el fenómeno terrorista. Es cierto que, en las propias disposiciones legales dedicadas a las actuaciones inmediatas tras un atentado terrorista para la protección de las víctimas se contempla ofrecer información sobre las ayudas, indemnizaciones y prestaciones que le puedan corresponder al afectado en función de sus circunstancias. Este aspecto está regulado en el art. 11 de la Ley

29/2011, de 22 de septiembre, que dispone lo siguiente: "1. Las Administraciones Públicas competentes establecerán, de forma coordinada, en sus respectivos ámbitos y competencias, los mecanismos de información que permitan conocer los procedimientos para obtener las ayudas, indemnizaciones y prestaciones que correspondan. 2. Dicha información será personalizada y adaptada a las características y a las situaciones que padecen las personas afectadas por un atentado terrorista, y estará orientada al reconocimiento del régimen previsto en esta Ley y al conjunto de prestaciones que se contienen en el Sistema Nacional de Salud. 3. Se articularán los medios necesarios para que las víctimas del terrorismo que, por sus circunstancias personales y sociales, puedan tener una mayor dificultad para acceder íntegramente a la información, tengan asegurado el ejercicio efectivo de este derecho. A tal efecto, se garantizará que las personas a las que la presente Ley es de aplicación, y que se encuentren en una situación de discapacidad, o desconocimiento del idioma, puedan obtener, de forma inteligible, información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes para cubrir sus necesidades".

Al fin y al cabo, en el caso de los participantes de nuestro estudio tan sólo el 10% que pertenece a las últimas acciones terroristas ha recibido esta información. En cambio, el resto, a pesar de que algunos sujetos fueron víctimas tras la promulgación de esta ley, no se les ha facilitado esta información. La ausencia de esta información es el principal inconveniente al que se enfrentan las víctimas que padecieron los ataques terroristas en periodos anteriores debido a que no son conscientes en la mayoría de las ocasiones de las ayudas, derechos y prestaciones que les asisten. Tal y como ellos mismos han expresado a lo largo de las entrevistas mantenidas, en muchos casos, han accedido a las medidas porque se han enterado por terceras personas o mediante las propias asociaciones de víctimas. No obstante, si el canal de información se produce mediante estas dos vías puede ser que la información que les llegue esté sesgada, incompleta o no se adecúe a sus circunstancias específicas.

Una de las propuestas para mejorar este aspecto, sería la introducción de la información no sólo para aquellos que puedan verse afectados por el fenómeno

terrorista a partir de ahora, sino que, también debe contemplarse, en la medida de lo posible y teniendo presentes los recursos actuales, para aquellos sujetos que fueron víctimas en el pasado, es decir, se trata de adaptar la legislación mediante la introducción de esta puntualización con el propósito de ajustarlas a las necesidades vigentes y reales de todas las víctimas y no sólo de las que puedan aparecer en un futuro. Así podría resultar conveniente la introducción de un apartado cuarto al art. 11 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, que disponga lo siguiente: "Se procurará, en la medida de lo posible y de acuerdo a los recursos técnicos y personales disponibles, la información sobre la obtención de las ayudas, indemnizaciones y prestaciones que correspondan a los afectados por actuaciones terroristas con anterioridad a la aprobación de las disposiciones reguladoras de las víctimas del terrorismo. Dicha información será personalizada y adaptada a las características y a las situaciones que han padecido o padecen las personas afectadas por un atentado terrorista".

Si bien, con el objetivo de que esta medida tenga una verdadera virtualidad práctica sería necesario que la acompañara la elaboración del registro oficial de víctimas del terrorismo en el que se incluyeran no sólo los fallecidos, sino también, sus familiares que pueden acogerse a ciertas medidas, los heridos de naturaleza física o psíquica, sus familiares, amenazados, coaccionados, secuestrados e ilesos puesto que, todos ellos, tienen medidas a las que pueden acceder. Sin este registro es prácticamente imposible que la propia Administración pueda contactar con las propias víctimas a fin de facilitarles la información sobre las medidas a las que pueden acceder en función de su categoría victimal puesto que, al contrario, como se está haciendo actualmente, existe un gran desconocimiento de las disposiciones legales previstas para las víctimas del terrorismo.

De esta forma, tal y como se ha comentado con anterioridad, las tres cuartas partes de las medidas previstas en la ley son prácticamente desconocidas por los sujetos participantes en este estudio. De hecho, si comparamos el conocimiento de las medidas legales con el acceso a las mismas, se puede observar que el baremo de la condición de las víctimas del terrorismo quizá sea

la medida más desapercibida. Si bien, una adecuada información reforzaría la percepción positiva de los afectados en cuanto al apoyo, seguimiento, reconocimiento e implicación institucional.

Junto con la mejora de la información también es necesario que en las diversas normativas reguladoras de ayuda, asistencia y protección de las víctimas del terrorismo, con independencia de su naturaleza estatal o autonómica, contemple la introducción de la figura del criminólogo ya sea tanto en la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional como en las diversas asociaciones, fundaciones y entidades que, sin ánimo de lucro, se dediquen a la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo e, incluso, en cualquier otra estructura que, sin estar contemplada en las disposiciones legales específicas relacionadas con este colectivo, puedan estar en contacto directo con ellas y éste podría ser el caso de las Oficinas de Atención a la víctima de cualquier delito. Sin embargo, para cumplir con esta consideración no basta con la simple incorporación de este profesional a las estructuras precedentes, sino que, realmente, es necesario que en su lugar de trabajo ejerza las funciones encomendadas a su profesión, esto es, las funciones relacionadas con el estudio de la víctima, los procesos de victimización y desvictimización. Por ello, al contrario, esta recomendación no se cumpliría, aunque, se constate que los trabajadores de dichas sedes tienen conocimientos en esta materia sin que realicen las misiones que, como criminólogos, tienen encomendadas. De una manera más sucinta se pueden señalar tres aspectos en los que debe trabajar:

1. Formación al afectado sobre los estados de victimización primaria, secundaria y terciaria que posiblemente experimente y el proceso de desvictimización que deben atravesar con éxito para conseguir una reparación integral. Todo esto más allá de la mera explicación de los derechos que les asisten
2. El criminólogo, asimismo, puede detectar cuál es la medida o conjunto de estrategias que precisa el afectado para su recuperación y para ello debe realizar un estudio de las características personales y sociales que

presenta la víctima y la victimización que ha padecido –vinculada con el punto anterior-.

3. Formación a la víctima indirecta ya sea en el caso de fallecimiento de la víctima directa o en los supuestos en que ésta haya sobrevivido. El entorno debe comprender la situación que va a experimentar la víctima y, de esta manera, poder ayudarle en su camino hacia su nueva vida y, al mismo tiempo, es conveniente que se prevenga su posible victimización indirecta –que a día de hoy no ha recibido toda la atención que merece- mediante esta estrategia. Tal y como se ha comentado con anterioridad, las víctimas indirectas por parte de herido que han participado en el presente estudio, han reconocido que no han recibido casi apoyo y, al mismo tiempo, también han padecido las consecuencias de la victimización de un modo constante por la convivencia continua con la víctima y, en consecuencia, han tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias de la víctima directa. Incluso, esa formación también podría prevenir las separaciones que algunas de las víctimas han padecido siempre y cuando se haya motivado por el hecho de no adaptarse a las nuevas circunstancias.

De acuerdo con estas dimensiones, se podría estructurar en diferentes niveles la actuación del profesional en Criminología dependiendo de las necesidades y de lo que requiera la víctima, esto es, por una parte, la información genérica y, por otra parte, la específica.

Una de las misiones que puede asumir el criminólogo dada su formación académica consiste en formar a la propia víctima desde el primer instante en que ambos toman contacto hasta que finalice su recuperación. Durante el tránsito hacia su desvictimización en cuyo proceso cada afectado debe encontrar la forma que más se ajuste a sus características personales, sociales y a la victimización padecida, de restaurarse y construir su nueva rutina, el profesional en esta materia puede y debe convertirse en su acompañante a la hora de explorar y valorar las alternativas que tiene por delante a fin de completar con éxito las

etapas que precise para su reparación integral y, su consecuente, reintegración en la vida social.

En realidad, formar a la víctima directa superviviente significa explicar al afectado las fases por las que es habitual que vaya a pasar como son la victimización primaria, secundaria y terciaria. Especialmente los relacionados con qué le pasará en el momento acuda al Tribunal, especificar qué se puede encontrar, cómo puede afrontar mejor las posibles respuestas de los tribunales médicos, cómo sobrellevar las secuelas y en qué medida pueden influir en su día a día.

No obstante, además de ofrecer una formación a los afectados en primera persona por el fenómeno terrorista, también se debería realizar un especial hincapié en la formación de la víctima indirecta que está en contacto permanente con la víctima directa que favorecerá la recuperación de ambos, esto es, la victimización y la victimización indirecta respectivamente. Dentro de esta última por ejemplo es conveniente dar pautas acerca de cómo sobrellevar el día a día, qué hacer y cómo tratar las reacciones y los comportamientos habituales en las víctimas tras la producción del evento traumático con el objetivo de que puedan llegar a comprender el significado de su reacción y/o comportamiento. Actualmente, no se incluye la posibilidad de incluir al entorno o a la denominada víctima indirecta en la recuperación de la víctima directa, de tal forma que, no están formados sobre los pasos y qué se van a encontrar en su día a día de convivencia con la víctima. Posiblemente esta previsión sea uno de los pilares fundamentales para la víctima directa en cuanto ya se ha adelantado que han sido el apoyo principal de la víctima directa y, de este modo, realizar un seguimiento a la víctima indirecta favorecería, por una parte, la prevención de la victimización indirecta que no está demasiado estudiada a día de hoy y, por otra parte, favorecer la completa recuperación de la víctima

En definitiva, la reparación integral prevista en las disposiciones legales implica, asimismo, un enfoque integral e interdisciplinar que le corresponde al criminólogo. Es cierto que, en la ley se han previsto las figuras de los psicólogos y los asistentes sociales, sin embargo, estos profesionales no atienden al proceso

de victimización que abarca los tres estadios de victimización primaria, secundaria y terciaria y, en consecuencia, pueden pasar por alto las implicaciones de las dos últimas en el afectado.

Por otra parte, dada la importancia que parte de las víctimas participantes –directas e indirectas- le han otorgado a contar su relato victimal por diferentes medios ya sea frente a universitarios o mediante la elaboración de sus propias memorias plasmadas en libros en su tránsito hacia la recuperación, sería conveniente en aras a la futura implantación de charlas ofrecidas por este colectivo en los diferentes niveles educativos que se tratara de generalizar entre las diversas víctimas. Esta experiencia asociada con el reconocimiento social encuentra especial acomodo en la reparación amplia en cuanto consiste en aplicar el sistema de asistencia integral de manera continua de acuerdo con los criterios de proporcionalidad, flexibilidad y adaptabilidad, esto es, la recuperación puede prolongarse a lo largo del tiempo en función de las circunstancias de la víctima. Como se ha dicho, el reconocimiento juega un papel importante en la reparación de las víctimas del presente estudio teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos examinados no han recibido apoyo de los ámbitos social y laboral.

Con las futuras generaciones son precisamente con las que se debe trabajar sobre todo las nociones de los derechos humanos y dentro de esta cultura los valores relativos a la libertad, democracia y paz y, correlativamente, las consecuencias que las actuaciones han generado no sólo para la sociedad en general, sino también, para personas en particular. Sin embargo, no se debe recurrir de modo sistemático al mismo grupo de voluntarios para que recorran todos los centros que lo soliciten, sino que, que se ha de tratar de ampliar a otras víctimas, aunque estas no estén dentro de las asociaciones, fundaciones y entidades que se dediquen a su representación y defensa de sus intereses. Del mismo modo, no sólo se debería invitar a las víctimas directas –heridos- y, en su caso, a la víctima indirecta –familiar del fallecido- pues, además de ellas, existen otras clases de afectados que pueden ofrecer su visión desde la experiencia terroristas que han padecido en primera persona o de una manera indirecta, tal

puede ser el caso de los amenazados, secuestrados, ilesos e, incluso, los familiares de todas las categorías pues, también éstos, puede ofrecer un relato afín desde otra perspectiva igualmente válido.

Si bien, la invitación de los afectados por el fenómeno terrorista debería quedar supeditada al cumplimiento de dos premisas previas. Por una parte, con carácter previo a que los estudiantes acudan a escuchar la historia victimal en la que narrará en primera persona qué le ocurrió, cómo era su vida y cómo ha cambiado, es imprescindible que reciban una pequeña formación tanto en educación de valores como en un primer acercamiento a las nociones básicas del fenómeno terrorista relacionadas con el derecho a la verdad, en la medida en que, podrá facilitarles el contexto del que después la víctima hablará y, al mismo tiempo que favorece la comprensión, no les causa un primer impacto dada la gravedad de la situación que posiblemente hayan vivido las víctimas.

Conectado con esta idea, la segunda premisa es que las víctimas participantes deben adecuar su discurso al tipo de colectivo al que va dirigido, esto es, no es lo mismo que los estudiantes sean de bachillerato que pertenezcan a la Educación Secundaria Obligatoria. Por ello, sería recomendable que, primero, la víctima trabajara con un criminólogo y que el mismo guiara el relato dentro de las instalaciones de los centros de enseñanza.

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES FINALES

De acuerdo con el objetivo de la presente investigación se pueden extraer las siguientes conclusiones finales en las que se sintetizan las ideas fundamentales sostenidas a lo largo del estudio.

I. Resulta imprescindible para el progreso de la Criminología centrarse prioritariamente en la intervención de la víctima pese a los escasos avances manifestados en su desarrollo teórico. La labor del criminólogo en esta materia puede convertirse en esencial en la medida en que su proximidad y visión integral acerca del fenómeno de las victimizaciones presentes en la misma pueden contribuir a su reparación y consecuente desvictimización. En definitiva, la orientación práctica de la tarea de estos profesionales en el ámbito de las víctimas aun cuando no exista un cuerpo de conocimiento sólido que pueda guiar su labor, puede contribuir a la progresión y mejora en los programas de ayuda, asistencia y reparación destinados a las víctimas.

II. El colectivo de víctimas del terrorismo cumple con los requisitos contenidos en las diversas definiciones sobre la figura victimal propuestas en los ámbitos internacional, europeo y nacional dado que son personas que han padecido un daño con carácter físico, mental o material ocasionado por la comisión de un delito, sin perjuicio de que esta categoría se pueda ampliar, incluso, a los familiares de aquéllas en determinados supuestos tasados. Ahora bien, no sólo presentan elementos comunes victimales, sino que, además, disponen de una serie de características específicas adicionales originadas en el componente político asociado a las acciones terroristas. En general, la violencia, fuerza o amenaza empleadas de manera habitual en estos ataques utiliza el miedo que produce en los conciudadanos con la finalidad de alcanzar su meta política, esto es, influir en la política de un estado, grupo de estados u organizaciones internacionales. No obstante, el significado político subyacente

agrava la vulnerabilidad de los afectados pues, a pesar de que se trata de un ataque dirigido contra el estado y el sistema democrático, la actuación directa recae en las propias víctimas. Las necesidades especiales que éstas presentan y su significación justifican tanto el establecimiento de una definición propia de víctimas del terrorismo en la que se incluyan sus caracteres diferenciadores respecto a los afectados por otros delitos como el establecimiento de un sistema de protección, asistencia y ayuda específicamente dirigido a atender y restaurar el estado de vulnerabilidad que experimentan.

La vulnerabilidad presente en este conjunto de víctimas, las cuales han sido utilizadas por los terroristas como meros instrumentos mediante técnicas basadas en la deshumanización, se halla íntimamente vinculada con la comisión de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos a las que han sido sometidas puesto que no es preciso centrarse tanto en el carácter público o privado de quienes han cometido la acción sino en el resultado producido. En los documentos procedentes de las Naciones Unidas se incide en que las acciones terroristas persiguen, por una parte, la destrucción a nivel individual de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales inherentes a cualquier persona y, por otra parte, a nivel estatal, buscan desestabilizar el sistema democrático, la integridad territorial y la seguridad del Estado, o, dicho de otro modo, su intención es básicamente desequilibrar al gobierno legítimamente constituido. Por ello, las víctimas del terrorismo son las únicas a las que se les reconoce expresamente en un texto legal la condición de víctimas de violaciones de derechos humanos.

III. Esta afirmación está conectada, por lo tanto, con el nacimiento de una serie de obligaciones jurídicas vinculantes al Estado cuya función consiste en ofrecer un sistema de compensación a los afectados por este fenómeno, a la vez que, asume el compromiso de garantizar y reforzar el estatus normativo de la víctima, integrado por un conjunto de derechos estrechamente ligados con los valores proclamados en las sociedades democráticas entre los que destacan, de un modo especial, los relacionados con su reconocimiento y apoyo integral.

En virtud del homenaje, reconocimiento, respeto y solidaridad hacia todos los afectados por el fenómeno terrorista, se promulgaron no sólo la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y el Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del precedente texto legal, sino que también, las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana y del País Vasco decidieron aprobar sus propias leyes que contienen las medidas y ayudas cuya aplicación tiene un carácter subsidiario y complementario respecto a las elaboradas por los organismos estatales por el mismo concepto tal y como precisan en sus respectivos articulados. Sin embargo, es cierto que, en el ámbito autonómico es recomendable tener como referente la Ley 4/2008, de 19 de junio, de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo del País Vasco, pues, en la medida en que, el impacto terrorista ha sido mayor en su territorio, enuncia con una mayor claridad y precisión los valores que protegen a las víctimas.

IV. La materia victimal es uno de los principales intereses de la ciencia criminológica en cuanto coincide con uno de sus objetos de investigación. El estudio de la víctima y los procesos de victimización por los que atraviesa son la base para realizar tanto los planes de prevención a fin de evitar futuras victimizaciones como los de desvictimización cuyo propósito sea la reparación integral del afectado. Teniendo en cuenta que, en esta temática confluyen tanto el ámbito jurídico como el criminológico, es indispensable alcanzar un nivel de interdisciplinariedad que permita mejorar la legislación actual dedicada a las víctimas de acuerdo a la situación en la que se encuentran y, de ello, se ocupa la Criminología. Así, en el contexto de la desvictimización y reparación, conviene, por un lado, delimitar el colectivo de estudio y, por otro lado, analizar las medidas de reparación legalmente previstas para los afectados.

Por una parte, conceden, la designación especial de víctima del terrorismo exclusivamente a las personas que puedan acreditar la producción de unos resultados tasados, esto es, fallecimiento o heridas de carácter físico o psíquico. Mientras que, por su parte, los demás individuos que pudieran resultar afectados

por este fenómeno son incluidos en otras categorías, ya sea, de titulares o beneficiarios de ayudas o prestaciones, o bien, dentro del grupo que, según el texto legal, requiere una especial atención. Pese a que con mayor o menor acierto se prevén medidas destinadas al reconocimiento y reparación de los afectados en función de la entidad de los daños que puedan presentar con independencia de la denominación que reciban, ya sea víctima, titular, afectado o sujeto a quien le corresponde una especial atención, todas ellas presentan los requisitos necesarios para incluirse dentro de las categorías de víctima directa o víctima indirecta y, por lo tanto, son objeto de interés de la ciencia criminológica.

A efectos criminológicos cada uno de ellos atraviesa un tipo de proceso de victimización y, de aquí, deriva la necesidad de incorporar todas las categorías dentro de las llamadas víctimas directas o indirectas. Lógicamente cada tipo de acción terrorista puede afectar una esfera personal del individuo sin que se pueda considerar que haya primacía de unos ámbitos de la persona frente a otros pues el proceso de victimización y desvictimización de unas y otras es diferente atendiendo a las peculiaridades de cada tipo en función del ámbito vulnerado.

V. Por otra parte, la ley vasca estipula su contenido programático en función de sus destinatarios donde podemos encontrar, en primer lugar, los derechos a la justicia, dignidad, reconocimiento y reparación correspondientes a las víctimas. En segundo lugar, los derechos a la verdad y la memoria que se han otorgado tanto a las víctimas como a los miembros de la sociedad. Y, en tercer lugar, los derechos concedidos a toda la ciudadanía vasca relativos a la paz, libertad y convivencia.

No obstante, esta clasificación jurídica puede interpretarse desde la perspectiva criminológica de acuerdo a su objetivo último de ofrecer una reparación integral a la víctima. De tal forma que, los podemos sintetizar conforme a la etapa de victimización a la que se dirigen. En la primera dimensión relacionada con la victimización primaria, los derechos a la verdad y a la reparación contribuyen a averiguar qué ha pasado, cuáles han sido sus consecuencias y qué tipo de reparación les corresponde. En cambio, los derechos relacionados con el reconocimiento y la justicia son clave frente a la aparición y

mantenimiento de la victimización secundaria que surge a raíz del contacto de la víctima con el aparato burocrático puesto que el reconocimiento de las instituciones puede favorecer la superación de este estadio. Finalmente, la victimización terciaria se puede hacer frente con las medidas integradas en los derechos a la dignidad y a la memoria que persiguen el reconocimiento social de los afectados.

VI. Actualmente y en el escenario del fenómeno terrorista en que nos encontramos, el derecho a la verdad proporciona conocimiento sobre qué tipo de vulneraciones de derechos humanos han cometido los terroristas a través de sus actuaciones, quiénes han llevado a cabo estas acciones, cuáles han sido sus motivaciones, las circunstancias contextuales y, para finalizar, quiénes han sido las víctimas y las consecuencias que han padecido. En términos criminológicos, el conocimiento del relato real y las causas de victimización contribuye a la separación entre víctimas y terroristas a fin de facilitar el apoyo a las primeras y la deslegitimación de los segundos, esto es, constatar que su argumento de lucha política en la que se muestran como víctimas no tiene sustento puesto que su decisión firme ha consistido en atentar contra los derechos básicos de las personas que nada tenían que ver con su proyecto totalitario.

Directamente relacionado con la constatación de los hechos y las consecuencias que han padecido los afectados se encuentra, en segunda instancia, el derecho a la reparación cuyo objetivo es brindarles la posibilidad de acceder a un régimen de asistencia, protección y ayuda a fin de reducir sobre todo los primeros efectos derivados de la acción terrorista.

El derecho a la justicia implica, en primer lugar, el acceso al sistema judicial, en segundo lugar, la información acerca de sus derechos, obligaciones y la evolución del caso y, por último, la garantía de la mínima lesividad durante su participación en el proceso penal. Este conjunto de medidas contribuye a aminorar los efectos negativos derivados de la experimentación del sentimiento de desamparo de la víctima en el momento en que entra en contacto con la Administración.

Por su parte, el derecho al reconocimiento de las víctimas del terrorismo ha tomado dos direcciones convergentes y complementarias que buscan proporcionar apoyo institucional a este colectivo. Por una parte, la vertiente individual dedicada exclusivamente a la persona a quien se le ha concedido la categoría de víctima del terrorismo y, en algunos casos, también incluye a las personas afectadas, ilesos y a los amenazados. Y, de un modo general, la perspectiva colectiva de este derecho está compuesto por un conjunto de medidas que pretenden ofrecer un reconocimiento especial hacia todos los afectados. Entre las medidas destacan, a nivel individual, la concesión de las condecoraciones y la posibilidad de baremar la condición de víctima del terrorismo a efectos de su profesión, destino o lugar de residencia. Mientras que, en el nivel dedicado a todo el colectivo se ha determinado tanto el día de celebración de recuerdo y homenaje a ellas como se ha establecido expresamente el derecho a la asociación de las víctimas.

Mientras que, el concepto relativo a la dignidad humana tiene una dimensión amplia pues va más allá de la simple afección de los derechos fundamentales. El fenómeno terrorista se caracteriza por utilizar a las víctimas como simples instrumentos para imponer su proyecto totalitario vulnerando en su cometido las bases del Estado de Derecho. Esta intencionalidad política que subyace a sus acciones es la que consigue deshumanizar a las víctimas tanto al nivel físico de su individualidad como al nivel de su personalidad en el camino hacia su pretensión de negación del Estado de Derecho. A este sentimiento de cosificación que suele emerger en este colectivo hay que sumarle un segundo factor significativo para la instauración del sentimiento de deshumanización que sienten los afectados por el terrorismo que es el desinterés o la falta de entendimiento social que han despertado tradicionalmente y, en consecuencia, ambas son las razones que sustentan su nombramiento de referente cívico.

Finalmente, la memoria y su significación política contribuyen a la deslegitimación del terrorismo en sus facetas ética, social y política. El enfoque temporal de las múltiples medidas abarca el pasado –el relato de los hechos, su recuerdo y homenaje–, el presente –restañar las heridas– además de que se debe

mirar hacia el futuro –evitar nuevas manifestaciones mediante la educación en valores y la concienciación de las repercusiones negativas de los hechos desencadenantes-. De acuerdo con las dimensiones que se pretenden alcanzar implicará a la esfera privada e individual de las personas, esto es, su reflexión privada, si bien, también la dimensión social pues mediante su divulgación se empezará a recorrer el camino hacia una cultura de participación donde se pueda adoptar una postura crítica sobre los hechos ocurridos, la libertad y la convivencia pacífica.

VII. Las investigaciones de naturaleza criminológica relacionadas con la situación y la problemática de las víctimas del terrorismo pueden tener un efecto positivo en la mejora de la previsión, redacción e implementación de las políticas de protección y asistencia elaboradas para los afectados, sobre la base de que, el criminólogo tiene entre sus tareas conocer los hechos, problemas o fenómenos sociales subyacentes a esta categoría victimal con el fin de ofrecerles una solución o mejora de su estado tras la victimización padecida. De hecho, la interpretación criminológica de las disposiciones legales nos permite considerar que estas medidas pueden tener una naturaleza desvictimizante en cuanto su objetivo primordial consiste en disminuir o, dicho de una forma más específica, contrarrestar los efectos negativos que pueden desarrollar en su día a día las víctimas que hayan resultado dañadas tras la consumación delictiva y sus familiares.

A pesar del indudable esfuerzo realizado por el legislador a la hora de prever las medidas adecuadas e idóneas en virtud de las características específicas que presentan y el contexto en el que han adquirido esta condición, resulta oportuno llevar a cabo un estudio piloto sobre el *conocimiento*, la *conveniencia* y la *efectividad* del conjunto de medidas contempladas desde la visión de las propias víctimas. Concretamente, nuestra muestra consta de un total de diez participantes (N=10) que han accedido voluntariamente a entrevistarse para cumplir con los objetivos establecidos en el presente estudio piloto, de los cuales seis son víctimas directas y cuatro son familiares de víctimas directas y,

por lo tanto, entendemos que éstos últimos pertenecen a la categoría de víctima indirecta.

Tras realizar el estudio victimal se puede concluir que la principal vulnerabilidad que presentan los participantes es la falta de apoyo que han tenido desde los ámbitos de la sociedad en general y, sobre todo, de su entorno laboral. Estos últimos pueden resultar significativos, de manera especial el laboral, puesto que se les ha victimizado por representar la institución a la que pertenecen o al estado español, esto es, han sido seleccionados como víctimas por su significado político y este aspecto puede tener repercusiones en los estadios de victimización primaria, secundaria y terciaria.

Del examen conjunto sobre el conocimiento de las medidas, existe disparidad entre las mismas lo que implica una falta de información de su existencia. En concreto, tan sólo han adquirido un nivel alto de conocimiento –del 76 al 100%- la indemnización económica por los daños causados, las condecoraciones, la celebración del Día del recuerdo y homenaje a este colectivo victimal, el asociacionismo y los eventos y monumentos a favor de las víctimas. Mientras que, la ayuda psicológica, el acceso judicial y la Oficina de Información y Asistencia han alcanzado un conocimiento moderado –desde el 51 al 75%-. Por su parte, dentro del conocimiento medio –del 26 al 50%-encontramos los derechos laborales, ayudas educativas, el Centro Memorial, la protección de las víctimas en los medios y la prohibición de los elementos terroristas. Finalmente, el acceso a los datos que consten en la Administración, a la versión oficial, el baremo de la condición de las víctimas del terrorismo, la constitución de la víctima del terrorismo en referente cívico y la educación en valores están dentro de un conocimiento bajo –del 0 al 25%-.

Al igual que en los casos examinados sobre el conocimiento, solamente han alcanzado el nivel de acceso alto o moderado un total de ocho medidas, esto es, la celebración de homenajes, el asociacionismo, el relato victimal, las condecoraciones, el acceso judicial, las indemnizaciones por daños corporales y la versión oficial de los hechos. Con la obtención de tales datos, podemos observar que, el conocimiento y el acceso a las medidas no ha sido especialmente

significativo posiblemente por la falta de información al respecto y, esto refuerza las demandas victimales que giran en torno a la información, apoyo, seguimiento, reconocimiento e implicación institucional.

En cambio, los entrevistados han destacado que las medidas que más les han beneficiado durante su recuperación están relacionadas con la experiencia de contar su historia victimal, poder conocer a más víctimas como ellos en las asociaciones de víctimas y, en general, la memoria de las víctimas y, por último, no olvidar qué consecuencias ha provocado el fenómeno terrorista. De este modo, se puede advertir que estas medidas consideradas reparadoras coinciden con el reconocimiento y la memoria.

VIII. Tras comprobar cuáles son los inconvenientes con los que se han encontrado los participantes a lo largo de su recuperación, una de las propuestas para mejorar la legislación vigente, sería la introducción de la información no sólo para aquellos que puedan verse afectados por el fenómeno terrorista a partir de ahora, sino que, también debe contemplarse para aquellos sujetos que fueron víctimas en el pasado, esto es, comunicarles directamente a qué tipo de medidas pueden acceder si así lo desean.

Junto con la mejora de la información también es necesario que en las diversas normativas reguladoras de ayuda, asistencia y protección de las víctimas del terrorismo, con independencia de su naturaleza estatal o autonómica, contemple la introducción de la figura del criminólogo ya sea tanto en la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional como en las diversas asociaciones, fundaciones y entidades que, sin ánimo de lucro, se dediquen a la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo e, incluso, en cualquier otra estructura que, sin estar contemplada en las disposiciones legales específicas relacionadas con este colectivo, puedan estar en contacto directo con ellas. En este sentido, se podrán encargar de los siguientes aspectos: 1. Formación al afectado sobre los estados de victimización primaria, secundaria y terciaria que posiblemente experimente y el proceso de desvictimización que deben atravesar con éxito para conseguir una reparación integral, de tal manera que, no se limite a la mera explicación de los derechos

que les asisten 2. Detectar cuál es la medida o conjunto de estrategias que precisa el afectado para su recuperación y para ello debe realizar un estudio de las características personales y sociales que presenta la víctima y la victimización que ha padecido 3. Formación a la víctima indirecta ya sea en el caso de fallecimiento de la víctima directa o en los supuestos en que ésta haya sobrevivido. Ante todo, el entorno debe comprender la situación que va a experimentar la víctima y, de esta manera, poder ayudarle en su camino hacia su nueva vida y, al mismo tiempo, es conveniente que se prevenga su posible victimización indirecta.

En tercer lugar, dada la importancia que parte de las víctimas participantes le han otorgado a contar su relato victimal, sería conveniente en aras a la futura implantación de charlas ofrecidas por este colectivo en los diferentes niveles educativos que se tratara de generalizar entre las diversas víctimas. Esta experiencia asociada con el reconocimiento social encuentra especial acomodo en la reparación amplia en cuanto consiste en aplicar el sistema de asistencia integral de manera continua de acuerdo con los criterios de proporcionalidad, flexibilidad y adaptabilidad, esto es, la recuperación puede prolongarse a lo largo del tiempo en función de las circunstancias de la víctima.

BIBLIOGRAFÍA

AGUDO FERNANDEZ, E., JAEN VALLEJO, M. Y PERRINO PEREZ, A. L. La víctima en la justicia penal (El Estatuto jurídico de la víctima del delito), Dykinson, Madrid, 2016.

ALLER, G. El derecho penal y la víctima, B de F, Montevideo, 2015.

ARIAS ALPIZAR, L. M. *"Interdisciplinariedad y triangulación en ciencias sociales"*, Diálogos Revista Electrónica de Historia, 2009.

BACA BALDOMERO, E. *"Los procesos de desvictimización y sus condicionantes y obstáculos"*, en BACA BALDOMERO, E., ECHEBURUA ODRIÓZOLA, E. Y TAMARIT SUMALLA, J. M. (coords.) Manual Victimología, Tirant lo Blanch, 2006.

BARBERET, R. *"La prevención de la victimación"*, en BACA BALDOMERO, E., ECHEBURUA ODRIÓZOLA, E., Y TAMARIT SUMALLA, J. L. (coords.). Manual de Victimología, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.

BERISTAIN IPIÑA, A. *"La Victimología creadora de nuevos derechos humanos"*, en BERISTAIN IPIÑA, A. Y DE LA CUESTA ARZAMENDI, J. L. (dirs.). Victimología: VIII Cursos de Verano en San Sebastián, 1990.

BERISTAIN IPIÑA, A. Criminología, Victimología y cárceles, Tomo II, 1996.

BERISTAIN, A. Y NEUMAN, E. Criminología y dignidad humana (diálogos), Depalma, Buenos Aires, 1989.

BERGALLI, R., BUSTOS RAMÍREZ, J. Y MIRALLES, T. El pensamiento criminológico I. Un análisis crítico, Temis, 1983.

BERGALLI, R., BUSTOS RAMÍREZ, J. Y MIRALLES, T. El pensamiento criminológico II. Un análisis crítico, Temis, 1983.

BERNAL DEL CASTILLO, J. *"Prevención y seguridad ciudadana. La recepción en España de las teorías criminológicas de la prevención situacional"*, Revista de Derecho Penal y Criminología, núm. 9, 2013.

BODERO, E. R. *"Orígenes y fundamentos principales de la Victimología"*, Iuris Dictio. Revista de Derecho, núm. 3, 2001.

BORJA JIMENEZ, E. Curso de Política Criminal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.

BUNGE, M. La ciencia. Su método y filosofía, Laetoli, 2013.

CABRERA SUÁREZ, L. A. *"El derecho a la memoria y su protección jurídica: avance de investigación"*, Pensamiento jurídico núm. 36, enero-abril 2013.

CALVEIRO, P. *"Testimonio y memoria en el relato histórico"*, Acta Poética 27(2), otoño 2006.

CARUANA VAÑO, A. Y TERCERO GIMENEZ, M. P. (coords.) Cultivando emociones. Educación emocional de 3 a 8 años, Generalitat Valenciana. Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, Valencia, 2011.

CASADO ANDRES, B. *"El concepto del daño moral bajo el prisma de la jurisprudencia"*, Revista internacional de Doctrina y Jurisprudencia, volumen 9, 2015.

COMPANY ALCAÑIZ, M. *"El estigma de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad víctimas del terrorismo en su victimización"*, Revista electrónica de Ciencias Criminológicas, núm. 1, 2016.

COMPANY ALCAÑIZ, M. *"Un enfoque criminológico del derecho a la memoria de las víctimas del terrorismo"*, en SILVA JUNIOR, D., MARTINEZ-ZAPORTA ARECHAGA, E. Y MOURA DE ARAUJO, D. (dirs.). Human rights and universal legal, Autografía, Barcelona, 2017.

CORONA AGUIRRE, L. A. *"La participación ciudadana como parte integrante de la seguridad pública en México"*, 2005.

CUAREZMA TERAM, S. J. "*La Victimología*", en PICADO, S., CANÇADO TRINDADE, A. A. Y CUELLAR, R. (comp.). Estudios Básicos de Derechos Humanos V, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 1996.

DE HOYOS SANCHO, M. "*Víctimas del delito y acción penal*", en DE HOYOS SANCHO, M. (dir.). La Víctima del Delito y las Últimas Reformas Procesales Penales, Aranzadi S. A., Pamplona, 2017.

DE LA CALLE, L. Y SANCHEZ-CUENCA, I. "*La selección de víctimas en ETA*", Revista Española de Ciencia Política, núm. 10, abril 2004.

DEFENSOR DEL PUEBLO. Estudios sobre los derechos de las víctimas de ETA. Su situación actual, Madrid, 2016.

DIAZ COLORADO, F. "*Una mirada desde las víctimas: el surgimiento de la Victimología. ensayo*", Umbral Científico, núm. 9, 2006.

DIAZ PALOS, F. "*Don Eugenio Cuello Calón y la moderna penología*", Anuario de derecho penal y ciencias penales, Tomo 16, 1963.

DOMINGUEZ IRIBARREN, F. "*El efecto sobre los terroristas del apoyo a las víctimas del terrorismo*", en CATALA I BAS, A. H. (dir.). El reconocimiento de las víctimas del terrorismo a través de la legislación y la jurisprudencia, Colección Cátedra Abierta núm. 9, 2013.

DOMINGUEZ, F. "*El año de la creación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo*", en Balance del terrorismo en España 2015, Cuadernos del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, núm. 1, Vitoria, 2016.

ECHEBURUA ODRIUZOLA, E. Y GUERRICAECHEVARRIA, C. "*Especial consideración de algunos ámbitos de victimación*", en BACA BALDOMERO, E., ECHEBURUA ODRIUZOLA, E. Y TAMARIT SUMALLA, J. M. (coords.). Manual Victimología, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.

ELBERT, C. A. Manual básico de Criminología, Eudeba, Universidad de Buenos Aires, 2012.

FATTAH, E. A. "*Victimología: pasado, presente y futuro*", Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núm. 16, 2014.

FELSON, M. Y CLARKE, R. V. "*La ocasión hace al ladrón. Teoría práctica para la prevención del delito*", Serie Claves del Gobierno Local 6, Fundación Democracia y Gobierno Local, 2008.

FERNANDEZ COLLADOS, M. B. "*Medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía*", en SEMPERE NAVARRO, A. V. (dir.). Reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo: estudio de la normativa básica estatal y autonómica, Eolas, 2014.

FERNANDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, C. Y JIMENEZ GARCIA, F. Terrorismo y Derechos Humanos. Una aproximación desde el Derecho Internacional, Dykinson, 2005.

FONTES DE GRACIA, S., GARCIA-GALLEGO, C., QUINTANILLA COBIAN, L., RODRIGUEZ FERNANDEZ, R., RUBIO DE LEMUS, P. Y SARRIA SANCHEZ, E. Fundamentos de investigación en Psicología, Universidad Nacional de Educación a Distancia.

GALAIN PALERMO, P. La reparación del daño a la víctima del delito, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

GARCIA ALVAREZ, P. La víctima en el Derecho penal español, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.

GARCIA MENGUAL, F. "*La incorporación de la protección de las víctimas del terrorismo al ordenamiento jurídico: especial referencia a la legislación autonómica*", en CATALA I BAS, A. H. (coord.). El reconocimiento de las víctimas del terrorismo a través de la legislación y la jurisprudencia, Colección Cátedra Abierta núm. 9, 2013.

GARCIA-PABLOS DE MOLINA, A. Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos, Tirant lo Blanch, 2007.

GARCIA-PABLOS DE MOLINA, A. Tratado de Criminología, Tirant lo Blanch, 1999.

GAROFALO, R. La Criminología. Estudio sobre la naturaleza del crimen y teoría de la penalidad, ed. Daniel Jorro, Madrid, 1912.

GARRIDO, V., STANGELAND, P. Y REDONDO, S. Principios de Criminología, Tirant lo Blanch, 1999.

GAVIRIA STEWART, E., CUADRADO GUIRADO, I. Y LOPEZ SAEZ, M. Introducción a la Psicología Social, Sanz y Torres.

GIMENEZ-SALINAS I COLOMER, E. (coord.). Libro Blanco sobre el Título de Grado en Criminología.

GINER ALEGRÍA, C. A. "*Aproximación psicológica de la Victimología*", Revista Derecho y Criminología, núm. 1, 2011.

GOFFMAN, E. Estigma. La identidad deteriorada, Amorrortu, 1º ed. 10º reimpresión, Buenos Aires, 2006.

GOMEZ ISA, F. "*Verdad, justicia y reparación para las víctimas por violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos*", en GOMEZ ISA, I., ETXEBARRIA MAULEON, X., ETXEBARRIA ZARRABEITIA, X., PEREZ MACIAS, I. Y ECHEBURUA, E. Justicia, verdad y reparación de los derechos de las víctimas a las tareas de la sociedad, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2014.

GONZALEZ DE RIVERA Y REVUELTA, J. L. "*Empatía y ecpatía*", Psiquis, núm. 25(6), 2004.

GOPPINGER, H. Criminología, Reus S. A., 1973.

GUTIERREZ HINOJOSA, T. D. "*La explicación científica en Criminología*", Revista Derecho Penal y Criminología, enero-junio 2012.

GUTIERREZ PEREZ, M. "*Protección de las víctimas en los procesos judiciales, reconocimientos y condecoraciones*", en SEMPERE NAVARRO, A. V. (dir.). Reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo: estudio de la normativa básica estatal y autonómica, Eolas, 2014.

HASSEMER, W. Y MUÑOZ CONDE, F. Introducción a la Criminología y al Derecho Penal, Tirant lo Blanch, 1989.

HASSEMER, W. Y MUÑOZ CONDE, F. Introducción a la Criminología, Tirant lo Blanch, 2001.

HERRERA MORENO, M. *Victimación. Aspectos generales*”, en BACA BALDOMERO, E., ECHEBURUA ODRIOZOLA, E., Y TAMARIT SUMALLA, J. L. (coords.). Manual de Victimología, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.

HERRERA MORENO, M. *“Historia de la victimología”*, en BACA BALDOMERO, E., ECHEBURUA ODRIOZOLA, E. Y TAMARIT SUMALLA, J. M. (coords.). Manual de Victimología, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.

HERRERO ALONSO, C. Y GARRIDO MARTÍN, E. *“Victimología: el impacto del delito, la víctima y el sistema legal. Una aproximación psicosocial”*, Cuadernos de Derecho Judicial (ejemplar dedicado a: La criminología aplicada), núm. 7, 1998.

HERRERO HERRERO, C. Criminología (Parte General y Especial). Dykinson, Madrid, 2007.

HIKAL, W. *“La ciencia criminológica”*, abril-junio 2001.

HIKAL, W. Metodología y técnicas de investigación criminológica. Reglas básicas en la redacción de textos, ed. Porrúa, 2011.

IBAÑEZ PEINADO, J. Métodos, técnicas e instrumentos de la investigación criminológica, Dykinson, 2013

INGENIEROS, J. Criminología, ed. Daniel Jorro, 1913.

JODRA ARRIBAS, F. Derecho Penal. Parte General, División de Formación y Perfeccionamiento, 1991.

KAHALE CARRILLO, D. T. Y SEMPERE NAVARRO, A. V. *“Titulares de los derechos y prestaciones”*, en SEMPERE NAVARRO, A. V. (dir.). Reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo: estudio de la normativa básica estatal y autonómica, Eolas, 2014.

KAISER, G. "*Criminología hoy*", Cuadernos de política criminal, núm. 34, 1988.

LAMARCA PEREZ, C. "*Criminología*", Eunomia. Revista en Cultura de la Legalidad, 2014.

LANDROVE, G. Victimología, Tirant lo Blanch, 1990.

LARRAURI, E. "*¿Qué es la criminología?*", Indret 3/2013.

LOPEZ REY DE ARROJO, M. Criminología. Teoría, delincuencia juvenil, prevención, detección y tratamiento, Biblioteca Jurídica Aguilar, 1981.

LOPEZ REY DE ARROJO, M. "*Algunas observaciones críticas sobre violencia y justicia*", Anuario de Derecho penal y Ciencias penales, Tomo 29, 1976.

MALDONADO MONTOYA, J. P. "*Tutela institucional y apoyo a las víctimas del terrorismo*", en SEMPERE NAVARRO, A. (dir.). Reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. Estudio de la normativa básica estatal y autonómica, Eolas Ediciones, 2014.

MARCHIORI, H. Criminología. Teorías y pensamientos, ed. Porrúa, S.A., 2004.

MARQUEZ CARDENAS, A, "*La Victimología como estudio. Redescubrimiento de la víctima para el proceso penal*", Revista Prolegómenos Derechos y Valores, 2011.

MARTIN RIOS, M. P. Víctima y justicia penal, Atelier, 2012.

MATTHEWS, R. Criminología realista, ediciones Didot, 2015.

MEDINA ARIZA, J. J. "*El control social del delito a través de la prevención situacional*", en Revista de Derecho y Criminología, núm. 2, Madrid, 1998.

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, Memoria 2008.

MORILLAS FERNANDEZ, D. L., PATRÓ HERNÁNDEZ, R. M. Y AGUILAR CARCELES, M. M. Victimología: un estudio sobre la víctima y los procesos de victimización, Dykinson, 2011.

MOTA, A. *"La protección de las víctimas del terrorismo en Naciones Unidas y el reconocimiento de sus derechos. Hacia un estatuto internacional de las víctimas del terrorismo"*, Real Instituto Elcano, 2012.

MUÑOZ ESCANDELL, I. Los derechos de las víctimas del terrorismo en el ámbito internacional, Dykinson, Madrid, 2013.

NUÑEZ PAZ, M. A. Y ALONSO PEREZ, F. Nociones de Criminología, Colex, 2002.

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Derechos humanos, terrorismo y lucha contra el terrorismo, Folleto informativo núm. 32, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2016.

OLMEDO CARRILLO, P. Y MONTES BERGES, B. *"Evolución conceptual de la empatía"*, Iniciación a la Investigación, núm. 4, 2009.

ORTS BERENGUER, E. Y GONZALEZ CUSSAC, J. L. Compendio de Derecho Penal. Parte General, 5ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.

PANIAGUA SOLÓRZANO, W. *"La victimidad. Una aproximación desde el proceso de resarcimiento en la región de Ixhil del noroccidente de Guatemala"*, Athenea digital. Revista de pensamiento e investigación social, núm. 18, 2010.

PECHARROMAN LOBO, Y. *"Victimología"*, en COLLADO MEDINA, J. (coord.). Elementos básicos de investigación criminal, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 2007.

PEÑUELA VELASQUEZ, L. A. *"La transdisciplinariedad. Más allá de los conceptos, la dialéctica"*, Andamios. Revista de Investigación Social, vol. 1, núm. 2, 2005.

PEREZ ALVAREZ, F. Y DIAZ CORTES, L. M. Introducción a la Criminología, Ratio Legis, 2013.

PEREZ RIVAS, N. *"Los derechos en la Unión Europea. Análisis de la Directiva 2012/29/UE"*, Boletín CeDe Usc, Vol. II, febrero 2014.

PETERS, T. "*Criminología y Victimología*", en BERISTAIN, A. Y DE LA CUESTA, J. L. (comps.). *Victimología*, Universidad del País Vasco, 1990.

PINATEL, J. "*Criminología y Derecho Penal*", Anuario de Derecho penal y Ciencias penales, 1959.

RAMOS REQUEJO, R. "*La Sociología como ciencia interdisciplinaria*", Revista interuniversitaria de formación del profesorado, 1987.

RENGEL MORALES, D. "*La construcción social del otro. Estigma, prejuicio e identidad en drogodependientes y enfermos de sida*", Gazeta de Antropología, núm. 21, 2005.

RIO RUIZ, M. A. "*Proceso de socialización: conceptos, funciones, tipos y agentes*".

RODRIGUEZ CAMPOS, C. "*Aspectos históricos y reflexiones sobre la Victimología y el derecho de victimal en México*", Fundación de Victimología en España "in dubio pro víctima".

RODRIGUEZ MANZANERA, L. *Criminología*, ed. Porrúa, S. A., México, 1981.

RODRIGUEZ MANZANERA, L. *Criminología clínica*, ed. Porrúa, S. A, México, 2015.

ROLDAN BARBERO, H. *Introducción a la investigación criminológica*, Estudios de derecho penal y Criminología, 2009.

ROSEMBERG, J. Y KOVACIC, V. *Educación, Memoria y Derechos Humanos. Orientaciones pedagógicas y recomendaciones para su enseñanza*, Proyecto Multinacional "Memoria y Derechos Humanos en el Mercosur. Biblioteca y Materiales Didácticos", marzo 2010.

SABUCEDO, J. M., RODRIGUEZ CASAL, M. Y FERNANDEZ FERNANDEZ, C. "*Construcción del discurso legitimador del terrorismo*", *Psicothema*, vol. 14, septiembre 2002.

SANCHEZ GONZALEZ, S. *"Los derechos fundamentales en la Constitución española de 1978"*, en SANCHEZ GONZALEZ, S. (coord.). Dogmática y práctica de los derechos fundamentales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.

SANCHEZ-DUARTE, J. M. y SAMPEDRO BLANCO, V. F. *"Visibilidad mediática y terrorismo: El caso de las víctimas de ETA"*, Textual y Visual Media 4, 2011.

SANZ APARICIO, M. T., MENENDEZ BALAÑA, F. J., RIVERO EXPOSITO, M. P. Y CONDE PASTOR, M. Psicología de la Motivación. Teoría y Práctica, Sanz y Torres, 2013.

SERRANO GOMEZ, A. Historia de la Criminología en España, Dykinson, 2007.

SERRANO MAILLO, A. Introducción a la Criminología, Dykinson, 2009.

SERRANO SUAREZ, O. H. Nota preliminar circunscrita al concepto, función y rol de la criminología y la estadística en el ejercicio de la investigación académica, Misión Jurídica Revista de Derecho y Ciencias Sociales, 2014.

SERVICIO DE PARTICIPACION EDUCATIVA, ATENCION AL PROFESORADO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DEL GOBIERNO DE NAVARA. Convivencia en paz y terrorismo. Un tema de hoy, Departamento de educación del Gobierno de Navarra, 2014.

TAMARIT SUMALLA, J. M. *"La Victimología: cuestiones conceptuales y metodológicas"*, en BCA BALDOMERO, E., ECHEBURUA ODRIUZOLA, E. Y TAMARIT SUMALLA, J. M. (coords.). Manual de Victimología, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.

TAMARIT SUMALLA, J. *"Paradojas y patologías en la construcción social, política y jurídica de la victimidad"*, InDret, núm. 1/2013.

TELLEZ AGUILERA, A. Criminología, Edisofer, 2009.

VARONA, G., LAMARCA, I., LÓPEZ DE FORONDA, F., PAGOLA, A. Y OCA, N. Atención institucional a las víctimas del terrorismo en Euskadi, Ararteko, Informe Extraordinario al Parlamento Vasco, 2009.

VARONA MARTINEZ, G. Asistencia a las Víctimas de Experiencias Traumáticas, Universidad del País Vasco.

VARONA MARTINEZ, G. "*Conferencia 15º Simposio Internacional de Victimología (Perth, Australia, 5-9 de julio de 2015)*", Revista de Victimología, núm. 2/2015.

VARONA MARTINEZ, G. Guía general de buenas prácticas en el trato con víctimas del terrorismo que evite la victimización secundaria, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, Vitoria-Gasteiz, 2015.

VARONA MARTINEZ, G. El derecho a la memoria de las víctimas del terrorismo, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria, 2015.

VARONA MARTINEZ, G., DE LA CUESTA ARZAMENDI, J. L., MAYORDOMO RODRIGO, V. Y PEREZ MACHIO, A. I. Victimología: un acercamiento a través de sus conceptos fundamentales como herramientas de comprensión e intervención, 2015.

VILLACAMPA ESTARTE, C. "*La asistencia a las víctimas del delito: debate sobre los modelos de intervención*", en TAMARIT SUMALLA, J. (coord.). Víctimas olvidadas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

VILLAREAL SOTELO, K. Principios de Victimología, Universidad Autónoma de Tamaulipas: Oxford University Press, México, 2011.

YUBERO JIMENEZ, S. "*Socialización y aprendizaje social*", en PAEZ ROVIRA, D., FERNANDEZ SEDANO, I., UBILLOS LANDA, S. Y ZUBIETA, E. (coords.). Psicología social, cultura y educación, 2005.

ZAFFARONI, E. R. Criminología una aproximación desde el margen, ed. Temis, S. A., Bogotá, 1988.